PRESENTACIÓN

Las resoluciones judiciales constituyen antecedentes muy importantes que facilitan la interpretación y aplicación del Derecho. Aquí presentamos una colección de las decisiones judiciales más trascendentes emitidas por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, debidamente seleccionadas en un período que comprende de 1998 a 2004. Se agrupan por materia, abarcando la procesal, penal, civil y familiar.

Es una herramienta útil que permite la difusión, análisis y estudio de los criterios orientadores que son el fundamento de la decisión de los fallos judiciales. La continuidad y permanencia de los juzgadores en el desempeño de su función, es una garantía judicial que otorga la posibilidad institucional de contar con estos antecedentes de casos. Este tema interesa a los propios juzgadores y a la comunidad de abogados en general por la información valiosa que aporta el contenido de las resoluciones judiciales. Si bien, no podemos hablar de una jurisprudencia local en términos de fuente formal del Derecho, por lo menos estamos convencidos facilitará el trabajo de quienes participamos en la tarea jurisdiccional e incluso es información útil para todo ciudadano.

Esta obra se preparó bajo los auspicios del programa de Edición de Textos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, bajo la dirección y supervisión del Consejero Lic. Catarino García Herrera.

Invierno 2008-2009.

LIC. GUSTAVO ADOLFO GUERRERO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL.

ÍNDICE

CIVIL

1. Acción de cobro de pesos. Es procedente aunque no se justifique exactamente el monto reclamado en la demanda. 81

2. Acción de cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, su procedencia. Obligaciones conjuntivas. 81

3. Acción de otorgamiento de escritura. Resulta improcedente al no verificarse por ambos contratantes la condición suspensiva contraída.....82

4. Acción interdictal. Cuando se trata de co-poseedores (actor y demandado) es un presupuesto procesal acreditar la exclusividad de la posesión para intentar la. 83

5. Acción reivindicatoria. Alcance del concepto calidad a que hace alusión la jurisprudencia 32, visible en las páginas 56 y 57 de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 83

6. Acción reivindicatoria. Es improcedente si la posesión del demandado deriva de un préstamo de inmueble aun cuando los demandantes no hayan utilizado la palabra sacramental de “comodato”. 84

7. Acción reivindicatoria. Posesión del demandado e identidad del inmueble acreditado con pruebas no idóneas. 85

8. Acto consentido, la resolución en conjunto del incidente de nulidad de actuaciones con la sentencia definitiva.....86

9. Agravios inatendibles. Si los motivos de inconformidad propuestos por el apelante se dirigen a combatir el embargo trabado en juicio, si previamente no se agoto la vía incidental correspondiente. 86

10. Agravios inatendibles en la apelación contra la sentencia de primer grado. Lo son cuando se hacen valer impugnaciones que ya fueron materia de estudio en diversa apelación intermedia y que fueron declarados inoperantes 87

11. Agravios insuficientes en materia mercantil. 87

12. Apelación en materia mercantil, es procedente el desechamiento dictado con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, por no haberse expresado los agravios al interponer el recurso. 88

13. Apelación pendiente, recurso de, impide resolver al juez de primer grado en definitiva. 89

14. Apoderado, excepción de falta de personalidad improcedente. Nombre abreviado. 89

15. Apreciaciones de peritos en dictámenes. Resultan insuficientes para acreditar la alteración por adición en los títulos de crédito. 90

16. Arrendamiento. Acción de rescisión por impago de rentas en el contrato de. Es improcedente si la parte demandada acredita mediante excepción o vía

reconvención, el incumplimiento del arrendador con su obligación de hacer la entrega material del inmueble arrendado. 90

17. Arrendamiento. Cuando en una relación contractual de arrendamiento una de las partes actúa en forma ilícita aun y cuando no se haya estipulado expresamente, es causa de rescisión del contrato de. 91

18. Arrendamiento. Diferencias entre la entrega real o material del inmueble arrendado, con la entrega jurídica y virtual plasmada en el contrato de. 92

19. Arrendamiento, obligación mancomunada del fiador con el arrendatario, en cuanto a la obligación principal. 92

20. Arrendamiento. La entrega del bien arrendado, no es un elemento esencial para la existencia del contrato, sino una obligación del arrendador. 93

21. Arrendamiento, la renta constituye precio cierto aun y cuando sea susceptible de determinarse con arreglo a las bases que se pactaron en el contrato. 94

22. Auto que abre el juicio ejecutivo mercantil a la etapa de pruebas. Resulta innecesaria la reposición del procedimiento ante la falta de notificación personal del mismo cuando el demandado no contestó la demanda instaurada en su contra. 94

23. Caducidad de la instancia en juicio mercantil. Opera de pleno derecho, aun cuando falte el emplazamiento a uno de los demandados. 95

24. Caducidad de la instancia. Para que opere no se requiere que deba ser declara de manera expresa por la autoridad. 96

25. Caducidad de la instancia. Se actualiza aun cuando existan notificaciones personales pendientes de practicar, anteriores al auto respecto al cual fue iniciado el cómputo previsto por el artículo 1076 del Código de Comercio. 96

26. Caducidad en materia mercantil. Empieza a correr el término para decretarla. A partir de que surte efectos la última notificación. (Código de Comercio reformado el 24 de mayo de 1996). 97

27. Caducidad. El hecho de que se haya resuelto la sentencia del juicio principal, no impide que en un toca en artículo propuesto contra la negativa a declararla, se pronuncie la sala sobre esa figura extintiva. 97

28. Caducidad. Materias mercantil y civil, diferencias. Término para que opere la. 98

29. Caducidad. No procede cuando el juicio mercantil se paraliza de modo absoluto por inactividad sólo atribuible a la autoridad judicial y no a las partes. 99

30. Cambios de titular del juzgado. Su omisión de notificar personalmente a las partes no amerita la reposición del procedimiento. 100

31. Certificado de gravamen, ningún perjuicio le causa al ejecutado en un juicio ejecutivo mercantil, el que éste no obre actualizado hasta el momento mismo en que se lleva a cabo el remate. (Procedimiento tramitado con anterioridad a las reformas del 13 de junio de 2003). 100

32. Cesión de derechos litigiosos. Surte plenos efectos respecto al deudor desde que se le notifica en juicio. 101

33. Cesión de derechos otorgada por una unión de crédito. Licitud de la. 101

34. Competencia. En juicio ejecutivo civil sobre cobro de pesos, la acción principal la determina, y no la garantía real que se encuentre pactada dentro del documento base de la acción. 102

35. Compraventa. Cuando el vendedor transmite una parte del bien y se obliga a tramitar y obtener la sub-división del mismo, no puede alegar que es un hecho de imposible realización. (Interpretación del artículo 1724 del Código Civil del Estado). 103

36. Compraventa mercantil. Término para conservar la acción redhibitoria por vicios ocultos de la cosa. 103

37. Compraventa. Se debe analizar la buena o mala fe de las partes en la segunda compraventa celebrada por el mismo vendedor, cuando el primer comprador ejercita la acción de cumplimiento de contrato de. 104

38. Confesión ficta. Puede ser apta para justificar la excepción de pago superveniente, no obstante que el demandado no tenga en su poder el documento base de la acción. 105

39. Confesión judicial. Al formular posiciones, tiene ese carácter y goza de eficacia probatoria plena, siempre y cuando se adminicule a diversos elementos de prueba dentro del juicio. 105

40. Consentimiento tácito. 106

41. Contratos de apertura de crédito simple. No le son aplicables las tesis y jurisprudencia relacionadas con los contratos de crédito en cuenta corriente, tratándose de “abonos” efectuados, y que no aparezcan en el estado de cuenta, cuando éstos no forman parte de la reclamación. 106

42. Contrato de arrendamiento y convenio modificatorio, interpretación conjunta de los. Inacreditamiento de sustitución en el obligado solidario. 107

43. Contrato de compraventa, nulidad absoluta del. Cuando el bien inmueble objeto del mismo se encontraba dentro del régimen ejidal al momento de su celebración. 108

44. Contrato de obra a precio alzado. La falta de algunos pagos parciales por parte del dueño de la obra, no origina la paralización de la, si no se pactó expresamente en el contrato. 109

45. Contrato de prestación de servicios profesionales. La circunstancia de que únicamente obre por escrito la oferta respectiva del cliente, implica su existencia cuando el profesor realizó el trabajo encomendado. 110

46. Costas. Confirmándose en la alzada la improcedencia del juicio, es inaplicable la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, si el actor no fue quien recurrió en apelación. 110

47. Costas judiciales en juicio ejecutivo mercantil. Existiendo pluralidad de demandados y no procediendo el juicio contra uno de ellos, deberá individualizarse la condena en. 111

48. Dación en pago, aun y cuando se encuentre inscrita, es nula cuando el inmueble que se da, ya fue vendido por el deudor con anterioridad a aquel acto jurídico, aunque dicha venta no esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad, siempre y cuando el acreedor haya tenido conocimiento de esa venta por causas extraregistrales (excepción a la regla prevista en el artículo 2895 del Código Civil del Estado de Nuevo León). 112

49. Daños y perjuicios derivados de la revocación de la sentencia de declaración de quiebra. No procede la acción de, cuando se deja insubsistente la sentencia que declaró la quiebra y se ordena reponer el procedimiento. 113

50. Demanda. Debe interpretarse en su totalidad, relacionándola con el contenido íntegro de los hechos expuestos en la misma, así como con los documentos base de la acción. 113

51. Demanda. Señalar la fecha en que se incurrió en incumplimiento de los pagos parciales convenidos es un elemento esencial de la. 114

52. Demanda intentada en la vía ejecutiva mercantil en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Admisión de la. 115

53. Demanda reconvencional. Es improcedente si la vía intentada es distinta a la del juicio original. 115

54. Derecho del tanto actualización del previsto en el artículo 970 del Código Civil del Estado, en caso de venta judicial. 116

55. Despacho. Para practicar emplazamientos en municipios donde un juez no tenga su residencia pero sí su jurisdicción conforme a la Ley Orgánica del Poder

Judicial en el Estado, no es requisito ineludible girar. 116

56. Edificaciones, pago de. Determinación de buena fe en su realización, aplicación del artículo 897 del Código Civil del Estado. 117

57. Ejecución de convenios en materia de alimentos, compete al juez de lo familiar conocer del procedimiento relativo, aun y cuando la incidencia planteada verse sobre la entrega de bienes inmuebles. 118

58. Ejecución de sentencia, prescripción de la acción de. 118

59. Embargo. El apercibimiento al demandado para que señale bienes y de que de negarse a hacerlo ese derecho lo tendrá el actor, es indispensable para que el señalamiento efectuado por éste resulte válido. 120

60. Embargo. En bienes salidos del patrimonio del deudor. Es ilegal el. ...120

61. Embargo. Es ilegal cuando se traba en bienes inmuebles que han salido del patrimonio del deudor no obstante que no se haya registrado oportunamente la escritura pública en que funde su acción el tercerista. 121

62. Endoso posterior al vencimiento del título. Surte efectos de cesión ordinaria sin que sea necesario que se notifique al deudor. 121

63. Endosos. La continuidad que debe observarse en los, no es absoluta sino que aplica tan solo en tratándose de los endosos en propiedad y por tanto debe reconocerse la legitimación activa del endosatario en procuración que recibe su endoso del propietario del título de crédito, aun existiendo endosos intermedios siempre que no afecten la propiedad del documento. 122

64. Entrega material del bien dado en arrendamiento. Es improcedente aun cuando habiendo prosperado el juicio de nulidad de arrendamiento, de autos se desprende que no fue el actor quien otorgó la posesión al arrendatario. 123

65. Es requisito necesario que se demuestre en forma indudable ante la autoridad la cesión de derechos. 123

66. Estado de cuenta bancario. No se requiere la identificación plena de la totalidad de los deudores en el. 124

67. Estado de cuenta certificado por el contador de una organización auxiliar de crédito. No es requisito que firme la totalidad de las hojas que lo integran. 124

68. Estado de cuenta. Si no se realizaron abonos a capital, no se puede exigir que se contengan en aquél. 125

69. Excepción de cosa juzgada. No opera en un juicio de tercería excluyente de dominio derivado de ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras, si no se justificaron plenamente sus elementos que la integran. 125

70. Extinción de la acción penal en términos de lo que dispone el artículo 111 del Código Penal vigente en el Estado, sólo debe considerarse el delito principal; para efecto de. 126

71. Firma indubitable. Prueba pericial. Es facultad exclusiva del juzgador (no del perito) determinar cuál es la que se considera como. 127

72. Impedimento, no se surte la causal prevista en el artículo 1132 fracción XI del Código de Comercio, si la sala responsable dejó insubsistente la sentencia

definitiva y ordenó la reposición del procedimiento para el desahogo de una probanza. 127

73. Impuesto al valor agregado. Procede su estudio y resolución por el órgano jurisdiccional cuando tal concepto es pactado en el contrato fundatorio de la acción. 128

74. Impugnación contra auto que decide si se concede o no la revocación. 129

75. Impulso procesal. Materia de prueba. 130

76. Incidente mercantil autónomo sobre convocatoria de asamblea, acreditamiento del carácter de socios de los promoventes. 130

77. Incidente mercantil autónomo sobre convocatoria de asamblea, procedencia del. Cuando se promueve por socios titulares de más de una acción, según el contrato social. 131

78. Incidente sobre impugnación de documentos. La omisión de su análisis y resolución en la sentencia definitiva, da lugar a la reposición del procedimiento cuando se alega vía agravio. 131

79. Informe de la Tesorería General del Estado de Nuevo León, es insuficiente para decretar el levantamiento de embargo de vehículos, cuando quien lo pide carece de legitimación para ello y resulta ilegal decretarlo sin la previa audiencia del ejecutante. 132

80. Intereses ordinarios y moratorios reclamados en juicio ejecutivo mercantil. Si provienen de un crédito bancario y se demandan en forma líquida, al no

establecerse correctamente en el certificado contable su cuantificación, debe el juez absolver al demandado de dichas prestaciones, no. 133

81. Intereses, reclamo accesorio de. Pueden cuantificarse en ejecución de sentencia al contar con elementos propios distintos del reclamo principal.....133

82. Interpelación judicial. No es necesario acreditar la legitimación contractual de quien pretende notificarse. 134

83. Juez. Carece de legitimación pasiva para ser demandado en el juicio ordinario civil donde se reclama la nulidad del juicio concluido en el que intervino como órgano del Estado. 134

84. Juicio ejecutivo civil, procedencia del. 135

85. Juicio ordinario mercantil, acción de cumplimiento de contrato de mutuo con interés en que se suscriben pagarés. Estudio de la. 136

86. La omisión del tribunal responsable de estudiar las infracciones procesales sometidas a su jurisdicción. 136

87. Legitimación. En una cesión de derechos que se celebra sin limitación alguna sobre un bien inmueble gravado con hipoteca a favor del cedente, para demandar los derechos hipotecarios que aparecen inscritos a favor del cedente, este carece de. 137

88. Ley del mercado de valores. Interpretación del artículo 25. 137

89. Litisconsorcio pasivo necesario. Cuando en un solo escrito inicial a un cónyuge se

le demanda el otorgamiento de escrituras y al otro la prescripción adquisitiva de un mismo bien inmueble, no se surte la figura del. 138

90. Litisconsorcio pasivo necesario, existencia del. 139

91. Litisconsorcio pasivo necesario. No se actualiza cuando el copropietario acude a juicio a reclamar para sí, en ejercicio de la acción reivindicatoria, la declaración de dominio sobre una fracción de un predio indiviso, siendo lo correcto decretar la falta de legitimación activa. 139

92. Medios preparatorios de juicio ejecutivo mercantil promovido en términos de la fracción VII del artículo 1391 del Código de Comercio. Necesidad de anexar a la demanda principal las copias certificadas de los. 140

93. Nombramiento de interventor judicial, es improcedente el. 141

94. No es posible considerar el incumplimiento del demandado en base a mensualidades que no están apropiadamente desglosadas por el contador del banco acreedor. 142

95. No existe medio directo para conocer la condición relativa a la competencia del juez que debe de conocer de las controversias suscitadas en un contrato verbal de arrendamiento. 142

96. Notificación por conducto de actuario adscrito al juzgado natural. Es legal la realizada fuera del lugar del juicio, siempre y cuando se encuentre dentro de la jurisdicción que la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, le otorga al juez. 142

97. Nulidad de compraventa de inmueble por falta de formalidad. El juez no puede estudiarla si en el juicio civil sobre cumplimiento de contrato no se planteó vía acción o excepción. 143

98. Obligación solidaria. Existe cuando en el contrato de arrendamiento financiero se estipula dicha obligación y se suscribe con esa calidad un anexo que forma parte integrante del contrato. 144

99. Órgano visual, pérdida total del. 145

100. Otorgamiento de escritura. Improcedencia del juicio cuando la compraventa recae en una casa cuya adquisición por parte del vendedor fue por medio de un crédito otorgado por el infonavit. 145

101. Pagaré. Cumplimiento del requisito de “fecha y lugar de suscripción” previsto en la fracción V del artículo 170 de la Ley relativa. 145

102. Pagaré. Fecha de suscripción como puede tenerse por satisfecho este requisito. 146

103. Pagaré. No resulta a la vista el vencimiento del que se adjunta al juicio por ser el primero de una serie de ellos. 147

104. Pagarés a la vista. No prescribe la acción cambiaria si no se exige su cobro judicial dentro del término de seis meses establecido en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 147

105. Pago. La liquidación efectuada por una aseguradora por error a persona diversa del beneficiario, no puede considerarse como. 148

106. Pensión rentaria. La que aparece en un contrato de arrendamiento es factible desvirtuarla a través de diversos elementos convictivos. 148

107. Personalidad. La facultad de subsanarla en términos del artículo 1126 del Código de Comercio, no autoriza al incidentista a promoverlo nuevamente, cuando pretenda objetar una documental exhibida por la contraparte al desahogar la vista respectiva. 149

108. Prescripción adquisitiva. Es apta para producirla el contrato privado de compraventa, y es optativo para el actor promover la usucapión, o exigir el otorgamiento de la escritura.....150

109. Prescripción adquisitiva es improcedente cuando se pretende usucapir un inmueble sujeto al régimen de patrimonio familiar.....150

110. Prescripción adquisitiva. Para que pueda prosperar no basta con revelar la causa generadora de la posesión, dado que ésta debe probarse idónea y jurídicamente. 151

111. Prescripción adquisitiva. Para que se entienda satisfecho el requisito de la existencia de la "posesión en concepto de dueño" exigido por el Código Civil del Estado, es necesario demostrar la existencia de un título del que se derive la posesión. 151

112. Prescripción de acciones contra casas de bolsa o agentes de las mismas. El artículo 1403 fracción IV del Código de Comercio es aplicable aun y cuando dichas instituciones hayan sido creadas con posterioridad a la vigencia de esa norma sustantiva. 152

113. Prescripción negativa. Tratándose de obligaciones mancomunadas, el reconocimiento del derecho de la persona contra quien se prescribe solamente perjudica al obligado que la realiza. 152

114. Prescripción. El juzgador no puede oficiosamente decretar la prescripción de la acción cambiaria. 153

115. Primas de seguros. Cuando la institución de crédito acreditante no demuestra haber celebrado el contrato de seguro es improcedente el cobro de las. 153

116. Principio de congruencia de la sentencia. Se cumple cuando se condena al pago de los intereses legales reclamados y no al tipo convencionalmente pactado en el título. 154

117. Prueba testimonial. Si la misma trasciende en el resultado del fallo dictado, la falta de citación a los testigos por parte del juez se traduce en una violación procesal que produce la reposición del procedimiento. (Legislación Reformada del Estado de Nuevo León).....155

118. Pruebas. Cuando su falta de desahogo debe estimarse consentida. 156

119. Reconocimiento de adeudo, constituye una forma innominada de declaración unilateral de la voluntad, permitida por la ley. 157

120. Renta, el monto de la, estipulado en el contrato de arrendamiento, corresponde acreditarla al arrendatario cuando afirma encontrarse al corriente en el pago de la misma, aunque paralelamente a ello se excepcione en el sentido de que la renta reclamada no es el resultado de las operaciones correspondientes. 158

121. Rescisión de contrato de compraventa, obligaciones más onerosas en caso de. Interpretación del artículo 2205 del Código Civil de Nuevo León. 158

122. Sentencia pronunciada en juicio ordinario mercantil. Procede dejar a salvo los derechos del actor cuando éste no acreditó alguno de los elementos de la acción intentada.....159

123. Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Si están legitimadas para ejercitar la acción ejecutiva prevista en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. 160

124. Suplencia de la queja de menores o incapacitados. La autoridad jurisdiccional está obligada a la.....160

125. Suspensión de pagos. El arrendamiento de inmuebles no es una actividad comercial para los efectos de la, tratándose de personas físicas. 161

126. Suspensión de pagos. La calidad de comerciante debe acreditarse fehacientemente, pues no es la intención la que hace que se adquiera esa calidad sino el hecho o la actividad propia que se profesa.....161

127. Tercería excluyente de dominio promovida por uno de los cónyuges. Su improcedencia al no comprenderse el bien inmueble dentro de la sociedad conyugal. (Aplicación al caso de la jurisprudencia del rubro: “irretroactividad de las leyes, su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”). 162

128. Tercería excluyente de dominio. No es un crédito y por ende no es aplicable la regla general del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la

Federación del 24 de mayo de 1996. 163

129. Términos comunes. 163

130. Términos judiciales. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León no sólo establece términos comunes. 164

131. Titulo de propiedad. No es necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad para la validez del acto jurídico celebrado. 164

132. Título ejecutivo mercantil. Cuando no exista transmisión de derechos a favor de una empresa de factoraje financiero, resulta innecesario el requisito de previa notificación al deudor prevista en el artículo 48 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para que constituya. 165

133. Acción real reivindicatoria. Cuando se alega improcedencia de la vía alegando la existencia de una relación inquilinaria, corresponde al demandado acreditar tal excepción. 165

134. Un oficio no constituye propiamente una actuación procesal, pues se refiere solamente a una consecuencia de una determinación del propio juzgador. 166

135. Arrendamiento. Condenación de rentas, intereses y servicios públicos, considerando la inicial desocupación del bien arrendado, a través de la consignación de las llaves al juzgado, y la posterior conducta desplegada por el arrendatario al retirarlas. 168

136. Acción de nulidad de juicio concluido por proceso fraudulento. Es improcedente cuando la causa que se invoca es una irregularidad que pudo haber sido

impugnada dentro del juicio cuya nulidad se pide. 168

137. Nulidad de testamento público abierto. Alcance del término amanuense a que se hace alusión en la fracción I del artículo 1399 del Código Civil de la entidad. 169

138. Diligencias de consignación. Para que el mencionado trámite haga las veces de pago con motivo de un contrato de compraventa, debe de existir declaratoria al respecto por parte de la autoridad judicial. 170

139. No se causa agravio, si el a-quo en su sentencia no describió cada una de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada, si de aquella se advierte que éstas fueron analizadas en su totalidad. 172

140. Acción reivindicatoria. La ineficacia del título de propiedad de la parte actora debe intentarse en vía de acción y no de excepción. 172

141. Acción reivindicatoria. Si se plantea en juicio autónomo la prescripción debe entenderse identificado el predio aunque se niegue tal circunstancia. 173

142. Convenio de Cesión de Derechos Hereditarios. Al exhibirse como documento basal en un juicio ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras no requiere ser formalizado en escritura pública. 173

143. Tercero para efectos registrales. 174

144. De una interpretación hermenéutica del concepto de cartera vencida y cartera vigente, se sigue que la cesión de un crédito no queda comprendida en ese término. 175

145. Acción de retracto ejercitada en vía de reconvención, fundada en que no se le notificó en una contienda laboral la audiencia de remate que conllevó a la posterior adjudicación del inmueble materia de litigio, y que dio como resultado que no pudiera ejercer el derecho del tanto en términos del artículo 970 del Código Civil de la localidad. Tal circunstancia no constituye un hecho negativo, sino que lleva implícita una afirmación que debe ser probada por la reconveniente. 175

146. Rescisión de contrato de compraventa. No puede justificarse el pago mediante la expedición de cheques a favor de un tercero, pero sí produce su improcedencia ante el reclamo judicial para el cobro de dichos títulos de crédito.....176

147. Donación entre consortes. Revocación. Para su procedencia es indispensable que los contratantes se hallen unidos en matrimonio a la fecha en que se solicita. 177

148. Acción hipotecaria. Prescripción de la. 177

149. Derecho del tanto. No opera en favor del deudor en una cesión de derechos de crédito en litigio celebrada por el acreedor y un tercero. 178

150. Apelación, el término para su interposición no es un término común. 178

151. Donación. El apoderado general con facultades de dominio, requiere cláusula especial que lo autorice para dar en. 179

152. Condominio. El administrador está facultado para acudir a juicio en defensa de los condóminos y del. 179

153. Vía ordinaria mercantil procedente aun y cuando en el convenio de reconocimiento de adeudo las partes acuerdan que el cumplimiento del mismo se ejercite en la vía ejecutiva mercantil. 180

154. Pruebas no desahogadas en materia mercantil. Es inoperante el agravio mediante el cual se duele de la falta de desahogo cuando no se impugnó mediante el recurso de apelación el auto que puso el juicio en estado de sentencia. 180

155. Contrato de compraventa. El pago debe ser liso y llano y no sujeto a la condición suspensiva propuesta por el comprador. 181

156. Testigo singular en juicio mercantil. Valor probatorio del. 182

157. De la interpretación del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se colige que la tasa de interés aplicable a la obligación exigible, correspondiente al mes inmediato anterior en que se generó la obligación, se considerará para cada uno de los meses posteriores o fracción del mes que haya transcurrido cuando se realiza el pago. 183

158. La jurisprudencia de rubro: “Caducidad de la instancia. El escrito mediante el cual se autoriza para recibir notificaciones interrumpe el término para que opere (interrupción de la jurisprudencia número 4A./J. 20/94 publicada en la página 25 de la Gaceta 79 del Semanario Judicial de la Federación).” No cobra aplicación al ámbito del procedimiento mercantil. 183

159. El pagaré que se suscribe por el deudor para documentar el adeudo en un convenio de reconocimiento de adeudo, no es prueba plena del pago, si no se demuestra fehacientemente el pago. 184

160. Prescripción adquisitiva, estudio del justo título subjetivamente válido. El promovente no está obligado a demostrar que la persona que le vendió y de quien recibió el inmueble, era el legítimo propietario. 185

161. Vía especial hipotecaria. Es improcedente su ejercicio por no estar prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, aun y cuando el juez de esta entidad sea territorialmente competente para conocer del juicio. 186

162. Cesión de derechos. En su notificación al deudor debe observarse la formalidad prevista en el artículo 2037 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, de aplicación supletoria a la materia mercantil, a fin de verificar la legitimación del "cesionario". Caso en que la demandada opone y acredita la excepción de pago con base en pagos aceptados y recibidos por la "cedente". 186

163. Convenio. Para su sanción es necesario el consentimiento de ambas partes sobre la forma y términos que lo regirán.....187

164. Prueba pericial. Debe ser expreso el consentimiento de las partes para que un solo perito dictamine para las dos. 188

165. Auto que tiene por contestada la demanda en sentido negativo. La omisión de dictarlo respecto un codemandado no les produce lesión a los diversos demandados. 188

166. Juicio ejecutivo mercantil. La falta de legitimación "ad causam" constituye una excepción impropia, y por ende al no comprenderse en las excepciones propias a las que alude el artículo 1327 del Código de Comercio, debe admitirse vía incidental y resolverse hasta la definitiva.....189

167. Incidente criminal. El instaurado en un juicio de naturaleza mercantil debe admitirse y ordenar se dé vista al Agente del Ministerio Público correspondiente, y no desestimarse dejando a salvo los derechos del promovente. 190

168. Costas. El juicio en que se reclamen prestaciones en numerario debe considerarse de cuantía indeterminada en caso de que su improcedencia derive de la falta de personalidad del demandante, debiendo cuantificarse su importe conforme a la normatividad respectiva. 190

169. Embargo de bienes muebles. Es ilegal que el juez indague oficiosamente que sean propiedad del demandado, antes de prevenirlo sobre su entrega voluntaria. 191

170. Prescripción adquisitiva. Acción ejercitada con base en un contrato privado de compraventa, el mismo requiere ser de fecha cierta, pues de lo contrario no puede ser considerado como justo título. 192

171. Principio de indistinción legal. Surte aplicación en el ofrecimiento de pruebas dentro de los juicios ejecutivos mercantiles. 193

172. Término para dar contestación a la demanda en juicios mercantiles. Debe computarse a partir del día siguiente al en que surte efectos el emplazamiento. 193

173. Caducidad de la instancia en materia mercantil. Cuando se ordena notificación personal en la última resolución judicial, es necesario su cumplimiento para que pueda computarse el término respectivo para su sanción. 194

174. La intención del legislador no fue utilizar los términos “última resolución” o “actuación judicial” como sinónimos para decretar la “caducidad”, sino que las

diferencia mediante el empleo de la conjunción disyuntiva “o” que implica una alternativa. 195

175. Agravios inoperantes. Son aquellos en los que se alega la existencia de violaciones al procedimiento pero que las causas en que las sustentan no trascienden al resultado del fallo. 196

176. Ejecución de la garantía prendaria, es improcedente si se deduce en la vía ordinaria mercantil. 197

177. Nulidad de escritura pública que contiene una cesión de derechos litigiosos, no es materia de estudio en un incidente.....197

178. Nulidad de juicio concluido, no puede hacerse valer bajo el argumento de que no se tuvo conocimiento del acto tildado de ilegal.....198

179. Tercero llamado a juicio. Procedencia y efectos jurídicos. 198

180. Seguros, contrato de. El pago de la prima es un elemento de la acción de cumplimiento. 199

181. Parte. Sentido formal y material. 199

182. Declaración de parte. No existe como tal en materia mercantil. 200

183. Garantía hipotecaria. Los bienes sujetos a la, no pueden ser entregados al acreedor o al depositario que esté designe aun y cuando se hubiere pactado expresamente, pues ello atenta contra la naturaleza jurídica de dicha institución. 201

184. Acción cambiaria directa, desistimiento de la demanda en contra del obligado principal, no impide que se continúe el juicio en contra de los avalistas. 201

185. Demanda desestimada. Para los efectos de l a interrupción de la prescripción en términos del artículo 1041 del Código de Comercio, que debe entenderse por. 202

186. Prescripción acción cambiaria. Es a partir de la fecha de vencimiento y no a partir de la fecha de suscripción del documento. 202

187. Pagaré, diferencia de lo escrito con palabras frente a lo consignado con cifras. Caso en el que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 203

188. Legitimación activa en la causa. Debe dejarse a salvo los derechos de la parte actora y no absolver a la demandada, si en un juicio ordinario mercantil se acredita la falta de. 203

189. Depositario judicial nombrado en juicio mercantil. El numeral 1392 del Código de Comercio, al establecer que los bienes embargados quedarán bajo la estricta responsabilidad del acreedor en depósito de persona nombrada por éste, no dispensa de caucionar su manejo al. 204

190. Medios preparatorios de juicio. Acorde a la fracción I del artículo 154 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, la declaración bajo protesta acerca del hecho relativo a la celebración de un contrato verbal de compraventa, no se encuentra en los hechos previstos limitativamente para promover los. 205

191. Cesión de derechos. Pueden ser objeto de cesión tanto los derechos reales como los personales o de crédito. 206

192. Cesión. Notificación ante dos testigos (artículo 390 del Código de Comercio). 208

193. Prescripción negativa. La caducidad de la instancia, deja sin efectos la interrupción de la. 209

194. Prescripción negativa. No se interrumpe por demanda, cuando se declara la caducidad de la instancia. 210

195. Prescripción negativa. Forma de computar su término, cuando opera la caducidad de la instancia.....210

196. Secreto bancario. En respeto al mismo, es factible que quien desea hacer uso de su derecho de señalar bienes para embargo, obtenga la información financiera de su adversario a través de la autoridad judicial.....211

197. Documento privado ofrecido en copia simple, consistente en póliza de fianza. Su expedición es susceptible de demostrarse con otros medios de prueba permitidos por la Legislación Mercantil. 211

FAMILIAR

1. Albacea. La obligación de formular así como presentar los inventarios y avalúos dentro de los términos judiciales señalados, no son objeto de suspensión, aun ante la falta de designación de perito valuador.....212

2. Alimentos para hijos mayores de edad. Carga de la prueba. 213

3. Alimentos, la pensión fijada por tal concepto no sólo obedece a la necesidad, sino que debe atenderse a la capacidad para que su monto cumpla idóneamente con el objetivo de los. 213

4. Alimentos. Capacidad económica del deudor, también la integran los bienes gravados. 214

5. Alimentos. Cuando el acreedor cuenta con ingresos y bienes propios, le corresponde la carga de la prueba de necesitar los. 214

6. Alimentos. La defensa del deudor alimentista, en el sentido de que se encuentra cubriendo la obligación que le corresponde por concepto de. Es improcedente. 215

7. Alimentos. Para fijar el monto de la pensión deben ponderarse las circunstancias particulares de cada caso. 215

8. Alimentos. Para valorar en su integridad la capacidad económica del deudor alimentista, es necesario justipreciar las actuaciones del expediente, que puedan dar lugar a presumir una serie de actos simulados, tendientes a poner a éste en una situación económica desventajosa. 216

9. Alimentos. Presunción legal de necesitarlos, no puede ser desvirtuada por el estudio que se haga de las pruebas, cuando ello no fue materia de la litis contestatio. 217

10. Alimentos. Procede decretarlos, aunque de las constancias del juicio relativo no se

haya demostrado en forma precisa los ingresos que percibe el deudor alimentario. 217

11. Alimentos. Provenientes de un convenio, no procede su cancelación, si se contrarían los términos en que fueron pactados. 218

12. Alimentos. Variación del título en virtud del cual puede exigirlos el cónyuge inocente en un divorcio necesario. 218

13. Aun cuando se declare improcedente la pérdida de la patria potestad, debe estudiarse la custodia en virtud de tratarse de menores concebidos en una relación de unión libre, cuyos padres viven separados.....219

14. Caducidad de la causal prevista por la fracción XIII del artículo 267 del Código Civil. Forma de computarse. 219

15. Capacidad económica, en tratándose de juicios de alimentos. Ganancias liquidas. Carga de la prueba. 220

16. Capitulaciones matrimoniales. Pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante el.....220

17. Controversia sobre convivencia y posesión interina de menores. Constitucionalidad del juicio sobre. 221

18. Controversias sobre convivencia y posesión interina de menores. Intervención legal del Ministerio Público. 222

19. Controversias sobre convivencia y posesión interina de menores. No es violatorio

de garantías que el tribunal ad-quem supla la deficiencia de la queja a favor de los menores. En las. 223

20. Controversias sobre convivencia y posesión interina de menores. Oficiosidad en las aportación de pruebas dentro de las. 223

21. Costas. No procede su condena a favor del Ministerio Público en los juicios en que intervenga como actor o demandado. (Legislación del Estado de Nuevo León). 224

22. Custodia. La presunción de que la progenitora de un menor de siete años es la más adecuada para ejercerla, es insuficiente para variar el ejercicio de este derecho. 225

23. Declaraciones fiscales. Valor probatorio, para acreditar las ganancias líquidas de quien las formula en juicios de alimentos. 226

24. Divorcio, en caso de adulterio, se admite prueba presuncional. 226

25. Divorcio. Estudio del elemento subjetivo de la causal, contemplada por el artículo 267 fracción XIII del Código Civil. 227

26. Divorcio. Fecha en que, para promoverlo, debe empezarse a computar el término de caducidad, cuando la causal invocada se hace descansar en el artículo 268 del Código Civil. 227

27. Divorcio. Injurias graves como causal de. 228

28. Divorcio necesario, causal de adulterio. Para su comprobación carecen de valor las grabaciones obtenidas sin la autorización judicial correspondiente. 228

29. Divorcio necesario. Negativa de los cónyuges de darse alimentos. El actor tiene que comprobar que previamente a su ejercicio, agotó todos los medios de prueba para obtener el pago de alimentos. 229

30. Divorcio necesario, se configura la causal relativa a injurias graves consignada en el artículo 267 fracción XI del Código Civil del Estado, si el actor del juicio demuestra que su contraparte faltó al principio de fidelidad que le debe a su consorte. 230

31. Divorcio. Negativa de los cónyuges de darse alimentos. Su procedencia si el inmueble embargado es el domicilio conyugal. 231

32. Divorcio, no debe obligársele a la actora a justificar la fecha en que hubiera tenido conocimiento de los hechos que originan la causal invocada, para efecto de computar la caducidad de los mismos. 231

33. Divorcio separación del hogar conyugal. Existencia de la causal aun y cuando el consorte separado cumpla con el deber alimentario. 232

34. Divorcio. Separación del hogar conyugal. No es menester que los testigos presencien el momento del abandono. 232

35. Divorcio. Valor de las presunciones en el juicio de. 233

36. Dolo en inventario. Elementos de convicción para acreditar fehaciente el. 233

37. El juez de primer grado procede con apego a derecho al estimar justificada la causal de divorcio establecida en la fracción XI del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, aun y cuando el actor haya narrado el hecho reclamado como adulterio. 235

38. Falta de capitulaciones matrimoniales, es insuficiente para juzgar no se encuentre prevista la administración de la sociedad conyugal.....236

39. Fotografías. Valor probatorio de las. En un juicio de divorcio necesario cuando se encuentran adminiculadas con pruebas fehacientes. 236

40. Hechos negativos en la causal de divorcio por negativa de dar alimentos. No debe obligarse a la accionante, a la comprobación de. 237

41. Interés superior a la niñez. Sentido y aplicabilidad del. 237

42. Interpretación del artículo 326 del Código de Procedimientos Civiles, respecto de la facultad conferida al juzgador para ampliar los interrogatorios de preguntas y repreguntas. 238

43. Interrogatorio. No procede desechar preguntas formuladas en el, aun y cuando tengan similitud con otras contenidas en diverso interrogatorio a aplicarse a otros testigos, si se refieren a diversos hechos de la demanda. 238

44. Legitimación activa ad-processum. Extinción de patrimonio de familia, puede ser demandado aun por un tercero, ajeno a su constitución. 239

45. Menores de edad. Suplencia de la queja en favor de los. 241

46. Obligación alimenticia, compromiso permanente del deudor de allegarse los medios para cumplir, al estar en pleno uso de facultades físicas, mentales e intelectuales. 241

47. Pensión alimenticia, cuando constituye una cantidad irrisoria, procede su aumento aun con la ausencia de hechos y pruebas atinentes a su insuficiencia.....242

48. Pérdida de la patria potestad en los casos que procede la acción de divorcio. 242

49. Pérdida de la patria potestad. No procede decretarla a consecuencia de haberse declarado la disolución del vínculo matrimonial.....243

50. Pérdida de la patria potestad. Requisitos para la procedencia de. 243

51. Perturbación del estado de padre o madre. No es obstáculo para resolver cuál de los padres debe ejercer la guarda y custodia de un menor, el hecho de que no se haya acreditado la. 244

52. Procedimiento especial de adopción, aun cuando se encuentre dentro de las disposiciones relativas a la jurisdicción voluntaria, no le son aplicables todas las reglas previstas para las mismas, en especial la contenida en el artículo 907 del Código de Procedimientos Civiles 244

53. Pruebas en segunda instancia. No ha lugar abrir dilación probatoria por su falta de desahogo, cuando ello constituya únicamente la litis en la apelación. 245

54. Prueba testimonial. Valoración de la, cuando no se precisan con exactitud las circunstancias de lugar y tiempo.....246

55. Resulta innecesario fijar un porcentaje a cargo de la madre, no obstante que tenga capacidad económica, si se acredita que tiene incorporado en su domicilio al acreedor alimentista. 246

56. Sociedad conyugal. Cesación de los efectos ante la inexistencia de comunidad de esfuerzos por parte de uno de los cónyuges.....247

57. Suplencia de la queja deficiente. Procede cuando se advierte que la resolución combatida en apelación repercute en los derechos de menores. 248

58. Testamento ológrafo. No es suficiente que el testador por sí mismo escriba de propia mano las disposiciones de su última voluntad para ser formal. 248

59. Testamento público abierto. No es motivo para declarar su nulidad el hecho de que el notario realice la autorización definitiva de la escritura en fecha posterior. 249

60. Testigos. Su citación corresponde a la autoridad jurisdiccional a través de los servidores a quienes la ley les impone esa obligación y no a los oferentes, por disposición de los artículos 79 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. 250

61. Tutor actuar del. No termina al emitirse la sentencia que autorice la enajenación o gravamen de algún bien perteneciente a un menor.....251

62. Alimentos. Indebido desechamiento de la demanda por falta de demostración de la capacidad económica del demandado. 251

63. Alimentos. Pensión alimenticia provisional y definitiva, bases para la fijación de

ambos porcentajes. 252

64. Alimentos. Es legal estimar el capital de inversión del deudor alimentista, a efecto de determinar su capacidad económica. 253

65. Alimentos, acción de. Comprobación del segundo requisito para decretar su procedencia. 253

66. Alimentos. Circunstancias que deben atenderse para estimar la capacidad económica, a fin de fijar la pensión respectiva. 253

67. Alimentos, para fijar su monto se debe atender al nivel de vida ostentado. 254

68. Alimentos, cuando se debe fijar su pago en especie. 254

69. Alimentos. La cónyuge encinta tiene legitimación ad causam para exigirlos a su esposo en representación del producto que está por nacer, satisfaciendo éste sus alimentos con la pensión decretada a favor de su madre. 255

70. Alimentos. Para considerar el rango promedio de los gastos erogados en determinado sector, se atiende al costo de los servicios domésticos y no a la clase social de las personas. 256

71. Alimentos. Demanda en representación de los hijos, cuando éstos habitan en compañía del deudor alimentista, es correcto desecharla. 256

72. Alimentos, necesidad de los. Es innecesario acreditarla desde la presentación

de la demanda, cuando se alega insuficiencia en los ingresos de quien los solicita. 257

73. Declaración de estado de interdicción. En caso de solicitar la declaración de estado de interdicción de determinada persona, la autoridad se encuentra facultada para practicar cualquier medio de prueba antes de designarle tutor provisional. 257

74. Diligencias para mejor proveer. Facultad de desahogarlas en asuntos de divorcio necesario, por ser el matrimonio de orden público. 258

75. Diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor. No es requisito sine qua non para admitir a trámite la solicitud, allegar junto a ésta, los tres certificados médicos que marca la ley. 259

76. Divorcio necesario injurias. Es necesaria la especificación de circunstancias de tiempo, lugar y modo en que acaecieron aun y cuando se hayan expresado a terceras personas y no directamente al cónyuge ofendido. 260

77. Divorcio necesario. El Tribunal de Apelación debe suplir la deficiencia de los agravios esbozados por el inconforme al ser el matrimonio de interés público. 261

78. Divorcio, la separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada como causal de, necesidad de especificar si subsistió la casa matrimonial durante los seis meses de la supuesta separación, o bien, si existe una justificación para que el actor también se separara del mismo. 261

79. Divorcio. Celebración de convenio por los contendientes ante el Ministerio Público, a fin de que el demandado se abstenga de molestar a la actora, no constituye un perdón tácito de la acción civil de divorcio. 262

80. Divorcio, injurias graves. Calificación de su gravedad, el hecho de encontrarse separados los cónyuges no les autoriza faltarse el respeto. 264

81. Donaciones antenupciales, procede su devolución en caso de declararse inexistente el matrimonio por el cual se otorgaron en un principio. 265

82. Emplazamiento por edictos. Para su perfeccionamiento se requiere que el interesado refiera las fechas de su inserción en el Periódico Oficial al ser un hecho notorio. 265

83. Matrimonio, es inexistente el celebrado sin la presencia del Oficial del Registro Civil, por constituir ello una solemnidad para su conformación. 266

84. Notificaciones personales. Surten sus efectos el mismo día. 267

85. Patria potestad, no procede decretar su pérdida, por el solo incumplimiento en el deber alimentario. 268

86. Patria potestad, además de decretar su pérdida, puede igualmente restringirse e incluso suspenderse su ejercicio, atendiendo al interés superior del menor. 269

87. Patria potestad, pérdida de la. La acción de divorcio soportada en la separación del hogar conyugal por más de seis meses, no engendra como consecuencia directa la. 270

88. Patrimonio de familia, extinción del. El procedimiento de jurisdicción voluntaria no es la vía idónea para su declaración. 270

89. Pruebas. La falta de su ofrecimiento de forma expresa no es un requisito para su aportación cuando se advierte que fueron acompañadas a la demanda inicial. 271

90. Testamento privado. Para que tenga validez y surta efectos legales requiere que se cumplan las exigencias del Código Civil.....271

91. Separación provisional de cónyuges. Es falso que exista voluntad de uno de los cónyuges de separarse del otro, cuando accede al mandato judicial de salir del domicilio conyugal a virtud de una separación provisional solicitada, y por ello no hubo necesidad de constituirse en el hogar conyugal para decretarla. 272

92. Sociedad conyugal. Es incorrecto considerar que los bienes de la sociedad conyugal pertenecen precisamente a esa sociedad y no a los del cónyuge supérstite. 272

93. Sociedad conyugal. Su naturaleza jurídica. 273

94. Sociedad conyugal. Casos en que son aplicables las disposiciones relativas a la sociedad general o a la copropiedad. 274

95. Sociedad conyugal. Bien perteneciente a la. Improcedencia de la acción de división de cosa común.....275

96. Sociedad conyugal. La indivisión de los bienes afectados por la misma solamente

surte efectos entre los consortes y no frente a los terceros acreedores de uno de los cónyuges. 276

97. Sucesiones testamentarias, exclusión de inmuebles del inventario de bienes de las. Es procedente cuando se funda en documentos públicos a pesar de su falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 277

98. Acción de alimentos. La falta de necesitarlos, cuando quien los demanda es mayor de edad y no se encuentra cursando un grado de estudios adecuado a su edad, no contradice el derecho a percibirlos, por lo que su estudio no vulnera el artículo 730 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 278

99. Acto prejudicial sobre separación cautelar de personas y depósito de menores. No es requisito para su admisión que el presunto agresor y agredido deban vivir en el mismo domicilio. 279

100. Agravios en la apelación. Cuando ya han sido expresados en el escrito de interposición correspondiente, no es necesario expresarlos ni ratificarlos ante la ad quem. (Código de Procedimientos Civiles anterior a las reformas del 21 de julio de 1997). 280

101. Albacea especial, designación de. 281

102. Alimentos. Ante el incumplimiento de esta obligación resulta atinente suspender al deudor el derecho de convivencia que tiene para con sus hijos. 282

103. Alimentos. Capacidad económica del deudor. Integración 282

104. Alimentos deben llamarse a juicio a quien se condene a pagar pensión. 283

105. Alimentos. Derechos adquiridos por los menores mediante convenio de divorcio voluntario celebrado entre sus progenitores, deben subsistir frente al derecho que pudiere tener el nuevo cónyuge del deudor alimentista, en atención al interés superior del menor. 283

106. Apelación. Para que los autos sean apelables, debe satisfacerse plenamente los requisitos que prevé el artículo 430 del Código Procesal Civil en vigor anterior a la reforma publicada el día 21 de julio de 1997.....284

107. Alimentos. Suplencia de la deficiencia de la queja. 284

108. Alimentos. Tratándose de menores de edad o incapaces, la suplencia de la queja deficiente procede en todo caso, sin obstar que quien apela sea el deudor alimentario. 285

109. Aplicación de la ley en el tiempo. 286

110. Competencia. Se surte a favor del juez de lo familiar, no obstante a que se haya decretado la disolución del vínculo matrimonial, cuando se reclamen frutos derivados de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, y ésta no se encuentre aún liquidada. 286

111. Controversias sobre convivencias de menor se debe tomar en cuenta días festivos y vacaciones.....287

112. Convivencia entre padre e hijo. Necesidad del menor de interactuar no sólo con su progenitor, sino con la familia extensa paterna. 287

113. Demanda de alimentos, presentada por uno de los cónyuges. Es correcto

desecharla, cuando de los hechos expuestos, el demandante no se sitúe en algún supuesto del artículo 164 del Código Civil.....288

114. Divorcio es incorrecto absolver en costas a la parte reo, cuando la accionante justificó sólo una de las causales intentadas. 289

115. Juicio ordinario civil sobre divorcio necesario. La audiencia efectuada conforme a lo dispuesto por e l artículo 283 del Código Civil, puede ser valorada como prueba para resolver la acción en lo principal, y no sólo lo atinente a las cuestiones derivadas de la patria potestad. 289

116. Matrimonio, nulidad del. No se requiere llamar a juicio al Oficial del Registro Civil por vicios atribuibles al acto jurídico que le dio origen. 290

117. Menores. Apelación, procede la suplencia de la queja deficiente a su favor, aun y cuando no es el promovente del recurso. 291

118. Necesidad de recabar oficiosamente los medios probatorios encaminados a conocer y decidir jurídica y objetivamente lo más benéfico para la familia. 291

119. Notificaciones personales. Surten sus efectos el mismo día. 292

120. Normatividad aplicable a la acción de inoficiosidad de testamento, es la vigente a la muerte del autor de la sucesión. 293

121. Nulidad de matrimonio. Innecesario integrar el litisconsorcio pasivo. 294

122. Obligación del juez de desahogar las pruebas necesarias para determinar si hubo o no, violencia familiar. 294

123. Pensión alimenticia a favor de menor. Improcedencia de la cancelación de la decretada en el juicio sumario respectivo, no obstante a que exista convenio sobre el particular, celebrado entre los progenitores. 295

124. Sucesión legítima. La autoridad juzgadora carece de facultades para pronunciarse respecto a los actos contenidos en las certificaciones del registro civil allegadas para acreditar el entroncamiento dentro de la.....295

125. Violencia familiar, por su naturaleza, es innecesario expresar en la demanda, circunstancias de lugar, tiempo y modo. 296

126. Acción de desconocimiento de la paternidad. La prueba pericial en genética no es la idónea para acreditarla tratándose de los hijos de matrimonio. 298

127. Acción de variación de custodia. Para la procedencia de la misma, no obsta la existencia de un acuerdo de voluntades celebrado con antelación al inicio del juicio. 299

128. Alimentos. Debe admitirse la acción autónoma para exigir su pago, independientemente de la existencia previa de un convenio debidamente sancionado dentro de un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, en donde se pactaron los mismos. 300

129. Alimentos. No es motivo de reducción, el hecho de que el deudor contraiga matrimonio, si el acreedor alimentario es menor de edad. 301

130. Alimentos. Los cónyuges pierden el derecho a recibirlos, al haberse declarado por sentencia ejecutoriada, la nulidad de su matrimonio.....302

131. Alimentos. En el caso de no justificarse todos los elementos que lo integran, no es indispensable su comprobación, pues son de conocimiento común su monto aproximado. 303

132. Convivencia de menores, aun cuando se encuentre al corriente en el pago de los alimentos, queda supeditada a que no represente riesgo para ellos. 303

133. Cláusula testamentaria especial. No deja de tener efectos por la existencia de un testamento realizado con posterioridad a la constitución del patrimonio familiar que la contiene, en la que se disponen de los bienes que lo constituyen. 304

134. Divorcio necesario. Ante indicios de violencia familiar y existencia de menores, queda obligado el juzgador a intervenir de oficio, ordenando desahogar la pericial en psicología a fin de resolver lo más benéfico a favor de aquéllos. 305

135. En interés superior de los menores, es correcto absolver al albacea del pago de gastos y costas en caso de que no le resulta favorable una sentencia, cuando la masa hereditaria es exclusivamente a favor de ellos. 306

136. Juicio sucesorio de intestado, es correcto declarar derecho a percibir alimentos de ascendiente cuando concurre con descendientes al procedimiento, sin que implique que se fije pensión en ese momento o que proceda la acción. 306

137. Patrimonio familiar. El simple transcurso del plazo de quince años al que se refiere la fracción V del artículo 739 del Código Civil del Estado de Nuevo León, es insuficiente para decretar la cancelación del. 307

138. Reducción de pensión alimenticia, al resultar procedente, la disminución que debe

sufrir la pensión alimenticia debe atender al principio de proporcionalidad y no a una operación aritmética. 308

139. Controversias de paternidad. Al estar en litigio el derecho de identidad del menor, éstas deben resolverse conforme al interés superior de la infancia, recabando la prueba en genética molecular del ácido desoxirribonucléico (ADN), o cualesquier otro elemento de convicción que permita esclarecer el punto cuestionado.....309

140. Divorcio. La sentencia pronunciada en la causal XIX del artículo 267 del Código Civil, constituye una sentencia condenatoria y no declarativa. 310

141. Divorcio. Causal XIX del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, cuando se encuentra justificada la separación de los cónyuges debe decretarse su improcedencia. 310

142. En los casos de divorcio donde se invoca la causal XIX del artículo 267 del Código Civil, es procedente condenar en costas en los términos de los artículos 91 y 92 del Código Procesal Civil. 311

143. Injuria grave. El ocultamiento de la donación del domicilio conyugal sin comunicar tal situación a la esposa, es constitutivo de. Cuando ésta se entera del acto jurídico referido al ser requerida de la desocupación del citado inmueble.....312

144. No es impedimento para desempeñar el cargo de albacea dentro de una sucesión, el haber sido removido en diverso juicio sucesorio donde se desempeñaba igual encomienda. 313

145. Notificación por edictos. El informe sobre la persona que debe ser notificada,

siendo extranjera, debe rendirlo el Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación del lugar donde esté ubicado el último domicilio del que se tenga conocimiento.....313

146. Patria potestad. Procede la pérdida de su ejercicio y no la suspensión, cuando se justificó en un mismo procedimiento, alguno de los supuestos para decretar una u otra determinación judicial. 315

147. Registro Civil, cancelación de actas del. Si el actor sostiene que el acta de defunción por cancelar es la suya, requiere probar su identidad con el titular de la misma. 315

148. Sucesión hereditaria, opera a favor de sus herederos legítimos o testamentarios, a la muerte del autor de la herencia, aún cuando no haya sido denunciada. 315

149. Alimentos. Si el deudor alimentista no cuenta con ingresos fijos, ello no exime la obligación de entregar el sustento a quien tiene derecho de exigírselo. 316

150. Divorcio. La separación a que se refiere la causal prevista en el artículo 267 fracción XIX del Código Civil, no entraña necesariamente la comprobación de la existencia del domicilio conyugal. 316

151. Divorcio. Separación de los cónyuges por más de dos años. Prueba testimonial, no es indispensable que los atestes conozcan personalmente a los cónyuges. 317

152. Divorcio, separación por más de dos años, como causal de. Procede aunque se cumpla con el pago de los alimentos debidos. 318

153. Divorcio. La separación voluntaria o el acuerdo mutuo, no debe catalogarse como causa justificada de la causal XIX del artículo 267 del Código Sustantivo Civil. 319

154. Divorcio. No constituye impedimento para la procedencia de la acción con base a la fracción XIX del numeral 267 del Código Civil, la circunstancia de no existir petición sobre la reintegración al domicilio conyugal. 320

155. Divorcio. Separación de los cónyuges por más de dos años. Como causal de. No es requisito indispensable la fecha exacta de separación. 321

156. Costas. Procede su condena en el juicio de divorcio, con independencia de que este último se hubiere fundado en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 321

157. Cumplimiento de la obligación alimentaria, insuficiente por sí solo, para justificar el cumplimiento de los fines del matrimonio, para la improcedencia de la causal de divorcio, relativa a la separación de los cónyuges por más de dos años, contenida en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 322

158. Incumplimiento de los fines del matrimonio, como elemento para la operancia de la causal de divorcio, contemplada en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 323

159. Reincorporación al domicilio conyugal. Dejada sin efectos la separación provisional de cónyuges, su falta de materialización, no es justificante de la separación de los cónyuges para la actualización de la causal de divorcio,

contemplada en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil Estadual.....324

PENAL

1. Abandono de familia. Acreditación del delito de. 325

2. Abandono de familia. Cuando no se configura éste.....325

3. Abandono de familia. Dolo específico en el delito de.....326

4. Abandono de familia, la obligación de suministrar a los pasivos los recursos para atender sus necesidades de subsistencia, no desaparece cuando éstos se trasladan al domicilio de un familiar.....326

5. Abuso de autoridad y allanamiento de morada. Caso en el que este último queda subsumido en el primero.....326

6. Abuso de confianza, art. 384 del Código Penal. Presupuesto indispensable. 327

7. Abuso de confianza conforme al artículo 381 del Código Penal en vigor. No se configura si el comprador tiene el carácter de arrendatario.....327

8. Abuso de confianza, disposición de bienes embargados por parte del depositario configura el delito de. 328

9. Abuso de confianza equiparado. La estructura típica del delito requiere además de quien hace el requerimiento tenga derecho sobre la cosa y que esté legitimado a tal efecto, pues sólo siendo la negativa o la omisión de devolver convierte la retención de la cosa en ilegítima.....328

10. Allanamiento de morada. No se configura el delito si el sujeto se introduce a un domicilio para evitar ser detenido.....329

11. Amenazas, configuración del delito de.....330

12. Ampliación de la declaración preparatoria. Caso en que no procede. 330

13. Ampliación del término constitucional para resolver la situación jurídica del inculpado. Caso en que no procede. 331

14. Arma prohibida. Un portallavero no configura el delito de. 332

15. Artículo 200 del Código Penal, sus efectos. 332

16. Ataques peligrosos. Caso en el que no puede coexistir con el delito de disparo de arma de fuego.....332

17. Ausencia de dolo. En el delito de robo. 333

18. Ausencia de violencia, furtividad o engaño en la ocupación de un inmueble propiedad del activo. Despojo de inmueble no se acredita.....333

19. Auto de formal prisión el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, tiene aplicación preferente al artículo 19 constitucional por otorgar mayores prerrogativas al inculpado en el dictado del. 334

20. Auto de formal prisión. Si de las constancias procesales aparece demostrada la modalidad de pandilla, debe declararse acreditada en el. 335

21. Auto que declara desierta una prueba no es apelable. 336

22. Calificativas, no se deben tomar en cuenta al momento de dictar la medida de seguridad a un inimputable. 336

23. Careos constitucionales, Ministerio Público no está facultado para solicitarlos. 337

24. Certificación realizada por el Ministerio Público. Su validez. 338

25. Cicatriz (lesiones), no se acredita si no se da fe correctamente de su notabilidad por parte de la autoridad judicial. 338

26. Cicatriz perpetua y notable, para la imposición de la sanción por ese concepto, es irrelevante que la inspección judicial utilice el término visible y no notable, si las características de la misma permiten establecer su notoriedad. 339

27. Cohecho indeterminado. Inexistencia de punibilidad. 339

28. Cohecho. Carácter bilateral. 340

29. Concepto de tenencia, para efectos del artículo 381 del Código Penal del Estado de Nuevo León. 340

30. Conceptos de fianza, sanción pecuniaria y monto estimado de la reparación del daño. Deben ser cubiertos como requisitos para la concesión del beneficio de la libertad provisional bajo caución. 341

31. Conclusiones acusatorias, deficiencias de, el juez debe enviarlas al Procurador

General de Justicia, en términos del artículo 348 del Código Procesal Penal. 341

32. Concurso de delitos. No es necesario que la petición del Ministerio Público esté motivada pero sí fundada para la procedencia del. 342

33. Concurso ideal, aplicación de las reglas del. 343

34. Concurso real de delitos, aplicación de las reglas del, tratándose de calificativas. 344

35. Confesión. Caso en que la detención del reo en forma alguna valida su declaración inicial. 344

36. Copias al carbón de actuaciones carecen de valor probatorio para la reposición de procedimiento. 345

37. Corrupción de menores. Definición de la palabra cantina como elemento integrante del delito de. 346

38. Corrupción de menores. La marihuana no es considerada como sustancia tóxica.....346

39. Corrupción de menores. No se configura en virtud de la edad de ofendida. 347

40. Culpa y peligrosidad, diferencias. 347

41. Daño en propiedad ajena a título de culpa. Daños exigibles en la vía civil, si se tenía el uso del vehículo a virtud de un contrato de arrendamiento. 348

42. Daño en propiedad ajena por incendio, cometido en forma imprudencial. 349

43. Daño en propiedad ajena simple y no por incendio. 350

44. Daño moral en el delito de lesiones, condena ilegal al pago de la reparación del daño en el. 350

45. Daño propiedad ajena por culpa, tarjeta de circulación, legitimación para querellarse. 351

46. Daño propiedad ajena, bien jurídico tutelado. 351

47. Debe eliminarse a favor del reo, la aplicación del agravante de parentesco a que se contrae el artículo 269 del Código Penal vigente en la época de la comisión de los hechos delictuosos, aplicado conforme al artículo 4º transitorio del Código Penal vigente en el Estado. 352

48. Decomiso arma de fuego cuando compete al juez federal y no al juez del fuero común. 352

49. Delito contra servidor público no constituye un agravante sino un delito autónomo. 353

50. Desobediencia de particulares. Elementos del delito de.....354

51. Desobediencia y resistencia de particulares. Inexistencia del delito de. 354

52. Desobediencia y resistencia de particulares. Requisito de procedibilidad

contenido en el artículo 125-II, del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad. 354

53. Despojo de cosas inmuebles, caso en que se persigue de oficio y no a petición de parte. 355

54. Despojo de cosas inmuebles. El mismo sujeto activo de delito que se apodere de un inmueble, no puede cometer indistintamente cualquiera de las infracciones previstas en las dos primeras fracciones del numeral 397 del Código represivo de la materia. 356

55. Despojo de cosas inmuebles. Los requisitos para la integración de este delito también son aplicables en el caso de que la conducta se verifique sobre un derecho real. 357

56. Despojo de inmueble entre cónyuges. Cuando no se actualiza. 358

57. Despojo de inmueble sobre bien propio. Si el Ministerio Público ejercita la acción por la fracción I del artículo 397. No se configura el delito de. 358

58. Despojo de inmueble, documentales públicas que no acreditan la posesión ni propiedad del inmueble invadido. 359

59. Despojo. Cambio de chapas en el inmueble dado en arrendamiento constituye violencia. 359

60. Dicho aislado, al desestimarse lo declarado por el acusado, en virtud de que el Ministerio no se ajustó a los lineamientos establecidos por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos ni a las disposiciones que se contrae en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.....360

61. Dictamen de ebriedad. Valoración del. En el delito de aportación prohibida de armas. 360

62. Dictamen pericial en grafoscopía. Valor de éste. 361

63. Dictamen pericial favorable al acusado. No es suficiente para la procedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. 361

64. Difamación, caso en que no se aplica sanción en el delito de. 362

65. Disparo de arma de fuego y daño en propiedad ajena. Causa de justificación.....362

66. Ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, no se justifica si no se justificó que con motivo de la separación de sus actividades el reo perjudicó el servicio público. 363

67. El artículo 173 del Código Penal sólo establece cuáles objetos pueden ser considerados armas. Lo prohibido es su portación en las condiciones que señala el artículo 174 del mismo ordenamiento legal. 364

68. El bien jurídico que tutela el delito de atentados al pudor, en tratándose de menor de edad (impúber) es la seguridad sexual. 364

69. El delito de violación a las leyes de inhumación y exhumación, debe ser efectuado por una persona extraña a quien cometió el homicidio. 365

70. El elemento de engaño en el delito de fraude. No se configura, si el cheque es otorgado en garantía. 365

71. El incidente no especificado no es la vía correcta para establecer el concepto del pago de la reparación del daño, para que pueda el ofendido exigir su pago. 366

72. El peligro corrido y la edad del acusado no deben considerarse como agravantes. 367

73. Equiparable a la violación. Excluyente de responsabilidad en su cometido. 368

74. Equiparable a la violación, procedencia de la causa de inculpabilidad prevista por la fracción VI del artículo 30 del Código Penal vigente. 368

75. Equiparable a la violación y equiparable a la violación en grado de tentativa, su demostración en el proceso, no implica reclasificación de una misma conducta. 369

76. Equiparable al robo se configura con la posesión de un solo vehículo. 370

77. Establecer la sanción. No es requisito indispensable ni de fondo ni de forma en el auto de formal prisión, como lo es precisar la figura delictiva básica o en su caso la especifica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado. 370

78. Estado civil, delito contra el. 371

79. Estado de ebriedad. No significa que no tuviera plena conciencia de la superioridad. 371

80. Falsificación de documentos, responsabilidad del acusado en el delito de. 371

81. Falta de legitimación de la representación social para apelar en cuanto a la reparación de daño. 372

82. Falta del elemento dolo en la conducta de los acusados. 372

83. Fraude cometido en agravio de varias personas, no procede la aplicación de las reglas del concurso, por tratarse de un solo delito. 373

84. Fraude de fraccionadores, previsto por el artículo 387 fracción I del Código de Penal vigente en el Estado, sujeto pasivo del delito de. 373

85. Fraude específico, artículo 386-V. Engaño, no se establece como elemento del. 374

86. Fraude específico artículo 386-VI del Código represivo de la materia, el ofendido no es siempre el segundo comprador. 375

87. Fraude especifico previsto por el artículo 391 y fraude genérico contemplado por el diverso numeral 385 del Código Penal vigente para esta entidad federativa. Diferencias. 376

88. Fraude genérico y no específico. 377

89. Fraude inexistencia del delito de. Cuando las partes no impugnan los términos del contrato. 378

90. Fraude inexistente. Cuando se trata de incumplimientos de contrato. 378

91. Fraude por arrendamiento de inmueble ajeno no acreditado por ser el activo hijo de la ofendida y haberse acreditado la prestación del inmueble al activo.....379

92. Fraude por enajenación de cosa ajena. Inexistencia del delito cuando el propietario de lo vendido no es el pasivo u ofendido del delito, sino el comprador. 380

93. Fraude por gravar cosa con conocimiento de que no puede disponer de ella. Inexistencia del delito cuando el pasivo sabía de la existencia del gravamen que tenía la propiedad que adquirió. 381

94. Fraude por simulación, delito de. 381

95. Fraude previsto en la fracción I del artículo 387 del Código Penal en vigor, el núcleo del delito de. 381

96. Homicidio calificado y no simple, cuando el activo se encuentra en estado de ebriedad voluntaria. 382

97. Importancia de la prueba circunstancial, cuando no existe imputación directa contra el inculpado. 382

98. Incidente de libertad por desvanecimiento de datos, improcedencia del. 383

99. Incidente de libertad por desvanecimiento de datos, sus efectos. 383

100. Individualización de la pena. El estado de ebriedad y la hora en que se llevaron a cabo los hechos no debe considerarse como agravantes. 384

101. Individualización de la pena, no debe considerarse como agravantes los

antecedentes penales del acusado cuando se acredita el carácter de. 384

102. Inducción y auxilio al suicidio configurado. Se da cuando fue directo y suficiente. 384

103. Inejercicio de la acción penal o sobreseimiento en los delitos culposos de homicidio y lesiones. Debe observarse los supuestos del artículo 72 tercer párrafo del Código Penal y no el 111 de dicho ordenamiento legal, por aplicación del principio de especialidad. 385

104. Inexistencia de la modalidad de pandilla en inimputables, además es inexacto su estudio en el auto de formal prisión.....386

105. La insubsistencia de un auto de formal prisión decretada mediante amparo, jurídicamente impide resolver la apelación interpuesta contra el incidente que niega la libertad por desvanecimiento de datos. 387

106. La naturaleza penal del delito de daño en propiedad ajena por culpa, queda excluida cuando el uso del bien procede de un contrato de arrendamiento y precisamente ese bien fue el dañado. 387

107. Legítima defensa. Presunción de la. Los hechos que de acuerdo a la ley le sirven de base deben quedar probados plenamente. 387

108. Legitimación para formular querella por el delito de daño en propiedad ajena. 389

109. Lesiones y delito cometido contra servidores públicos falta de querella. 389

110. Lesiones, amputación o pérdida de un dedo, no produce la pérdida de un miembro, conforme al art. 303 fr. III del Código Penal en el Estado. 390

111. Libertad provisional bajo caución. No es obstáculo para su concesión el que el acusado no haga manifestación alguna respecto de la naturaleza de la caución que solicita. 390

112. Medidas de seguridad. Las reglas del concurso real de delitos no son aplicables en la imposición de las. 392

113. Medida de seguridad. Peculiaridad: tuito-curativa, por tener finalidad terapéutica fundamentalmente. 392

114. Modalidad de pandilla, el Ministerio Público solicita que se le aplique la sanción que al respecto corresponde al acusado, en virtud de que el juez natural lo omitió. 393

115. Modalidad de pandilla, no se aplica su sanción cuando existe responsabilidad correspectiva. 393

116. No es suficiente que exista agregado a los autos informe de antecedentes penales, si del mismo no se desprende que se haya dictado sentencia ejecutoriada en contra del acusado, para efecto de conceder el beneficio de la condena condicional. 394

117. No es un indicio de su responsabilidad, la circunstancia de que el acusado se adhiera al derecho de no declarar. 394

118. No opera la excusa absolutoria que justifique el apoderamiento con exención de penalidad, si no se acreditan los casos extremos y de probada necesidad a que se contrae el artículo 375 del Código punitivo en vigor. 395

119. No se acredita la modalidad de pandilla cuando los sujetos activos son policías. 396

120. No se acredita legalmente la existencia de delito de equiparable al robo que prevé la fracción tercera del artículo 365 del Código punitivo en vigor. 396

121. No se configura delito de robo si activo como ejecutivo de una compañía de seguros pacta la contratación de pólizas de seguros con una persona moral y recibe la prima por parte de ésta, sin ingresar dicho numerario a la compañía para la cual labora. 397

122. No se configura el delito de abuso de autoridad, cuando se está en facultades para ejercerla. 398

123. No se satisface el requisito de procedibilidad de querella por la parte ofendida, requerido por el artículo 72 de Código Penal vigente en el Estado.....398

124. Ofendido en materia penal. No procede la suplencia de la queja prevista en el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales a favor de aquél cuando comparezca como apelante. 399

125. Orden de comparecencia. Procede decretarla aun y cuando el Ministerio Público haya solicitado orden de aprehensión contra el inculpado por el delito de daño en propiedad ajena culposo, dado que en el período transcurrido entre el auto de

consignación y el dictado de la resolución correspondiente, acaecieron reformas al artículo 209 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. 400

126. Orden de comparecencia y orden de presentación. Actos jurídicamente distintos. 401

127. Pandilla aplicación de la. Caso en que las personas que cometen un ilícito en común son familiares. 402

128. Para la configuración del delito de daño en propiedad ajena, debe surtirse el requisito de procedibilidad de la querella, por el ofendido. 402

129. Para la configuración del delito de falsificación de documentos, es menester que obre en autos el documento que se dice falsificado. 403

130. Para la procedencia de la condena al pago de la indemnización por daño moral a que se refiere el artículo 1813 del Código Civil de Nuevo León, deben aportarse las pruebas que acrediten fehacientemente una afectación en alguno de los derechos de personalidad de la víctima. 404

131. Participación directa y no preterintención. 405

132. Peligrosidad. La naturaleza del delito no se puede considerar como circunstancia agravante de la. 406

133. Pena, consecuencia de lesiones, caso en que no procede la aplicación de la sanción prevista en la fracción III artículo 303 del Código Penal. 406

134. Perdón otorgado por un menor. Procedencia del. 407

135. Pericial en grafoscopía. Valor probatorio de los dictámenes cuando se basan en copias fotostáticas. 407

136. Portación prohibida de armas, delito que no se acredita antes de las reformas del 28 de julio del año 2004. 408

137. Prescripción de la acción penal. Procedencia de la. 408

138. Prescripción de la acción penal. Término no se suspende aunque se continúe proceso por personas distintas al inculpado, conforme a los artículos 132 y 134 del Código Penal. 409

139. Prescripción. Regla genérica y excepción. 410

140. Prevalencia del dictamen relativo al examen médico previo para la clasificación de las lesiones, en el auto de formal prisión. 410

141. Prisión preventiva. Su no contradicción con la garantía de audiencia deriva de los fines que persigue y no de su carácter cautelar. 411

142. Probable responsabilidad. Valor de la prueba circunstancial. 412

143. Prueba pericial. Si no contiene el fundamento de sus conclusiones, el juzgador puede negarse a adoptarla como prueba. 413

144. Prueba superveniente, concepto de. 414

145. Prueba testimonial, indebido apercibimiento en la. 415

146. Prueba testimonial. Su análisis y valoración en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. 415

147. Querella presentada en representación de persona física o moral. Se requiere poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial para formularlas. 416

148. Rapto. Retención, como toma de posesión de la mujer, forma de manifestarse. 417

149. Reglas del concurso. Basta que el Ministerio Público precise la causa de pedir, para que tengan aplicación. 418

150. Reincidencia. Requisitos para que exista la.....418

151. Reincidencia. Su acreditación puede realizarse con las copias autorizadas de sentencias condenatorias anteriores, así como de los autos que las declaran ejecutoriadas, o por otros elementos de prueba, que valorados en su conjunto la acrediten de manera indubitable. 419

152. Reparación del daño, aun cuando no se haya erogado la cantidad señalada. Procede la. 421

153. Reparación del daño. Condena debida aunque pasivo sea derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. 421

154. Reparación del daño. Condena en base a un presupuesto. 422

155. Reparación del daño. Corresponde al juzgador fijarla. Por lo que puede analizar pruebas no citadas por la representación social (Legislación del Estado de Veracruz). 424

156. Reparación de daño. Límite para el acreditamiento de personalidad para su reclamación. 424

157. Reparación de daños y perjuicios es procedente, por ello debe analizarse las pruebas que acrediten dicho concepto. 425

158. Reparación del daño en el delito de equiparable al robo. 426

159. Reparación del daño. Es procedente por gastos futuros. 426

160. Reparación del daño exigible a tercera persona, incidente de (Legislación del Estado de Michoacán). 427

161. Reparación del daño, la sola manifestación de la parte afectada de que se le repare el daño no constituye agravio. 427

162. Reparación del daño por incapacidad, monto. Sólo hasta el 100% de incapacidad a pesar de que la suma de ésta sea del 110%. 428

163. Reparación del daño, su absolución es procedente cuando la pasivo del delito se da por satisfecha de dicho concepto en otros términos. 428

164. Reparación del daño, tratándose de gastos funerarios. 428

165. Reparación del daño y perjuicio, concepto, clasificación y condena, de la. 429

166. Reposición de procedimiento por no haber abierto el procedimiento especial, cuando el juez, dictó sentencia condenatoria en procedimiento ordinario, no obstante la existencia de datos de inimputabilidad. 430

167. Requisito para sobreseimiento en violencia familiar. Tratándose de menores de edad. 430

168. Responsabilidad civil objetiva. La única salvedad para que la demandada deje de responder del daño causado es que éste se produzca por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 431

169. Responsabilidad correspectiva. Procedencia de la. 432

170. Responsabilidad en la comisión del delito de fraude como copartícipe. El no quedar plenamente demostrado el monto del beneficio indebido obtenido o aun que haya logrado alguno el acusado, no implica que no se demuestre su. 433

171. Responsabilidad objetiva. En los casos de colisión de vehículos en marcha, es necesario determinar quién es el causante de los daños. 433

172. Retractación de la declaración inicial del pasivo, apoyada por otras pruebas. 434

173. Riña. Cuando se acreditan las vías de hecho. 435

174. Robo con violencia en grado de tentativa determinado y sancionado con la fracción I del artículo 367 del Código Penal, cuando no existe valuación del objeto mueble, por causas imputables al Ministerio Público. 435

175. Robo con violencia física. Sólo se configura la calificativa cuando se ejerce sobre las personas y no sobre las cosas. 436

176. Robo con violencia. Improcedente aplicar la agravante que señala la fracción I del artículo 374 del Código Penal en vigor. 436

177. Robo de cuantía determinada y no indeterminada aunque se trate de dólares. 437

178. Robo de vehículo, no se actualiza la calificativa de vía pública. 437

179. Robo tentado. Calificativa. 438

180. Robo y daño en propiedad ajena que recae en el objeto materia del apoderamiento. 438

181. Robo. Pena conforme al artículo 367 fracción I del Código Penal si no se valorizó el producto del robo por causas imputables al Ministerio Público. 439

182. Se acredita la existencia material de los delitos de lesiones y robo, mas no así el delito de robo con violencia. 439

183. Se acredita la participación directa y no la responsabilidad correspectiva.....441

184. Seguridad sexual. Bien jurídico que tutela el delito de atentados al pudor, en tratándose de menor de edad (impúber). 441

185. Sobreseimiento por perdón del ofendido. Procedencia del. 442

186. Sobreseimiento. Excepción de las reglas establecidas por el artículo 72 del Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León, para decretarlo. 442

187. Tentativa de homicidio, no se da si el activo no pone de manifiesto su intención.....443

188. Tentativa de robo. No configurada por espontáneo y voluntario desistimiento del activo. 444

189. Testigo, si al principio a nadie inculpan y posteriormente señalan a determinada persona aduciendo diversos motivos que justifiquen el inicial silencio, deben justificar aquéllos. 444

190. Testigos, parientes de acusado. Valor probatorio. 445

191. Testigos poca capacidad de retención y evocación. 446

192. Testimonial de la delegada del Ministerio Público, resulta inadmisible. 447

193. Testimonio de la víctima, caso en que merece valor aunque no se precisen las circunstancias de tiempo y lugar. 447

194. Traición, no se integra la calificativa de, sólo por el parentesco. 447

195. Violación. Comprobación de la violencia moral en el delito de. 448

196. Violación. Elemento cópula se demuestra aun cuando la penetración sexual sea o no total. 450

197. Violación, no se acredita su existencia si no se justifican todos sus elementos. 450

198. Violación y equiparable a la violación, no se acreditan, al existir consentimiento por parte de la pasivo. 452

199. Violencia familiar. Artículo 287 bis. No se actualiza la existencia del concubinato cuando uno de ellos se encuentra unido en matrimonio. 452

200. Violencia familiar, el sobreseimiento opera cuando el perdón de la menor de 14 años es ratificado por quien ejerce la patria potestad. 453

201. Violencia familiar. gravedad y reiteración sólo las exige el artículo 287 bis del Código Penal, respecto a la conducta de omisión.....454

202. Violencia familiar inexistente cuando no se justifica el concubinato. 454

203. Violencia familiar. La nueva ley no deja de considerarla como delito, sólo adicionó el tipo, incorporando como delictiva la conducta de “omisión” y calificando ésta como “grave reiterada”. 454

204. Violencia familiar no configurado. Dictamen mental, no eficaz para acreditar daño psicológico. 456

205. Delito de violencia familiar. La sanción a imponer tiende a proteger el núcleo familiar. 457

206. Calificativas. Artículo 316 fracción I del Código Penal. No se actualiza la premeditación. 458

207. Homicidio en grado de tentativa. No se configura si existe desistimiento espontáneo del proceso ejecutivo para no verificarse el resultado. 458

208. Falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad. No se configura si el sujeto activo no ha sido interrogado, sino que se conduce de motu propio en forma mendaz. 459

209. Individualización de la sanción. Debe ser motivo de estudio en el momento del dictado de la sentencia definitiva, no al dictarse el auto de formal prisión. 460

210. No se demuestra el delito de falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles y marcas previsto por el artículo 243 fracción I del Código Penal vigente en el Estado. 461

211. Comprobación del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena. Caso en el que no debe atribuirse la afectación o deterioro de una finca dada en arrendamiento, a un incumplimiento de contrato. 461

212. Audiencia de vista, la debe presidir el juez y éste debe dar por terminado el período de juicio y citar para sentencia. 462

213. La materialización del delito de amenazas no es instantánea. 463

214. La carga de la prueba corresponde al órgano acusador. 464

215. Falta de denuncia o querella como requisito de procedibilidad. 464

216. Despojo de inmueble, derecho real. 465

217. Reincidencia. Aplicación de la sanción más favorable cuando el Ministerio Público no indique cuál de las sanciones contenidas en el artículo 80 del Código Penal es la que debe aplicar. 466

218. Pena. Su aplicación procede aun cuando no lo exprese con precisión el Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias. 467

219. Penas, imposición de las. Procede su aplicación aun cuando no lo exprese con precisión el Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias. 468

220. Pandilla. Modalidad no acreditada al no probarse que los activos se reunieran habitual (frecuente), ocasional (eventual), o transitoriamente (momentáneamente) para cometer algún delito. 468

221. Delito culposo. Calidad específica en el activo. Para la aplicación de la pena que contempla el artículo 66 primer párrafo del Código Penal, se requiere que en el momento de ocurrir los hechos, se preste el servicio público de pasajeros o escolar. 469

222. Careos procesales, caso en que su desahogo no cumple a cabalidad con lo preceptuado por el numeral 308 del Código Penal del Estado. 470

223. Antecedentes penales del acusado. No agravante de culpabilidad. 472

224. Pruebas ofrecidas fuera del término probatorio. El juzgador no está obligado a admitirlas, salvo los casos de excepción establecidos en la ley, pero puede ordenar su práctica como diligencias para mejor proveer, si así lo considera necesario. 473

225. Violencia familiar. El perdón otorgado a favor del acusado o la conciliación entre éste y la víctima agredida, no extingue la acción penal y sobresee la causa, sino hasta después de doce meses de haberse suspendido el procedimiento. 474

226. El abogado defensor no puede tener el carácter de testigo. El coacusado no puede ser obligado a declarar. 476

227. Violación en grado de tentativa, no se acreditan los actos de ejecución idóneos, encaminados directamente a la consumación del delito, ni las causas ajenas a la voluntad de quien representó el hecho.....476

228. Juez aplica retroactivamente la ley en perjuicio del reo, si por el delito de daño en propiedad ajena culposo, fija las garantías en base al referido artículo 209 bis del Código Procesal Penal en vigor en la entidad, cuando los hechos ocurrieron antes de la adición de dicho artículo al Código de Procedimientos Penales por decreto 118, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 96, el día 28-veintiocho de julio del año 2004.....477

229. No se configura delito de violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones cuando es el propio homicida quien oculta el cadáver de la víctima. 478

230. Robo agravado, no se acredita la responsabilidad del acusado. 480

231. Fraude. Responsabilidad en el delito de. 481

232. Violencia física, sí está debidamente solicitada cuando se incluye en el cuerpo de las conclusiones acusatorias. 481

233. Prescripción. Para su cómputo se toma como base el término medio aritmético de la sanción abstracta fijada por el legislador al delito de que se trata, conforme al artículo 139 del Código Penal vigente en el Estado y no la específica señalada por el juzgador al delincuente. 482

234. Perdón otorgado por un menor de edad. Carece de validez legal, cuando no ha sido ratificado por la persona legitimada para ello, por lo tanto, no reúne los requisitos del artículo 111 del Código Penal vigente en el Estado, para decretar el sobreseimiento. 482

235. Suspensión del procedimiento. Es eficaz el perdón otorgado por la madre de menores, para decretarla, por ser ésta la persona quien legalmente los representa. 483

236. Garantía de seguridad jurídica a que se contrae el artículo 23 de la Constitución Política Federal. Caso en que se infringe en perjuicio del acusado la. 485

237. Artículo 14 del Código Penal del Estado. En la imposición de la sanciones por los delitos de equiparable a la violación y violación en perjuicio de una misma pasivo, debe hacerse una correcta interpretación del.....487

238. Legítima defensa. Inevitabilidad de la agresión. 489

239. Uso de documentos falsos, existencia del delito de.....489

240. La falta de notificación al acusado del cierre del período de instrucción, es causa de reposición del procedimiento. 490

241. Delito de falsedad en declaraciones, no se acredita cuando. 490

242. Desobediencia de particulares, no es impedimento para el juzgador considerar la falta del requisito de procedibilidad al momento de resolver en definitiva.....491

243. Fraude, inexistencia del, si no se prueba el elemento engaño en la época en que se celebró el contrato (Legislación del Estado de Guerrero). 491

244. Allanamiento de morada, resulta procedente el sobreseimiento de la causa por perdón del ofendido. 492

245. Delito de amenazas. Las manifestaciones proferidas por el activo sin posibilidad de ejecución no constituye el. (Legislación del Estado de Chiapas). Amenazas, inexistencia del delito de. 493

246. Para que se acredite el delito de abandono de familia previsto por el artículo 282 del Código Penal del Estado, se requiere que se justifique la calidad de condenado del sujeto activo. 494

247. Reposición del procedimiento. Procede cuando por el estado de salud del acusado, no se le puede hacer saber nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, o esté imposibilitado para rendir su declaración preparatoria, y no obstante ello, el juez natural decreta auto de formal prisión en su contra y continúa el procedimiento hasta dictar sentencia. 495

248. Confesión. La realizada ante Agentes de la Policía Ministerial carece de todo valor probatorio. 496

249. Robo. La prueba documental privada con la cual se pretende justificar la preexistencia, propiedad y falta posterior del objeto del ilícito, no corroborada con otros elementos de convicción, resulta insuficiente para ello.....496

250. Robo. Cuando el valor del producto del ilícito no fue estimado dentro del sumario, procede aplicar la pena contenida en la fracción I del artículo 367 y no el diverso 369 del Código Penal del Estado de Nuevo León.....497

251. Administración fraudulenta. Concepto, causas generadoras y medios de prueba, de la “delegación parcial de facultades”, como elemento del delito de. 498

252. Prescripción de la acción penal. El término para computarla se interrumpe con la consignación aun sin detenido, volviendo a correr a partir de que se libra la respectiva orden de aprehensión, para interrumpirse con la captura del inculpado. 499

253. Prescripción de la acción penal. Si el delito de homicidio simple, se reclasifica en segunda instancia a homicidio en riña, el cómputo del término para la prescripción deberá hacerse tomando en cuenta la pena que corresponde al delito determinado por el ad quem. 499

254. Abandono de familia. La condena por reparación del daño, debe incluir el pago de las cantidades adeudadas por alimentos, que se hubieren vencido antes del dictado del auto de formal prisión y que hubieren sido precisadas en éste, pero no las que hubieren vencido durante el proceso o con posterioridad al dictado de la sentencia.....500

255. Auto de consignación del órgano investigador. Su trascendencia al momento del pronunciamiento del auto de formal prisión.....500

256. Sobreseimiento de la causa. Caso en que opera el contenido en el penúltimo párrafo del artículo 287 bis 1 del Código Penal del Estado.....502

257. Fraude maquinado, no se acredita el delito de. 505

258. Corrupción de menores, no se acredita la responsabilidad del acusado por omisión, en términos del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado. 506

259. Violencia moral. Existencia de la calificativa. 507

260. Incidente no especificado de nulidad de actuaciones del Ministerio Público. El auto que lo desecha debe impugnarse a través del recurso de revocación. 507

261. Equiparable a la violación, no se acredita si no se justifica la ausencia de voluntad o la existencia de la violencia física o moral. 508

262. Reparación del daño, es inatendible lo manifestado por la parte ofendida, por no constituir agravio. 508

263. No existe fraude si no se prueba el elemento engaño en la época en que se celebró el contrato. Además es ilegal la sentencia condenatoria que se dicte en una causa penal si la acción persecutoria que le dio origen se encontraba prescrita. 509

264. Robo en casa habitada. Es irrelevante que la sanción establecida en el delito básico sea menor que la determinada para las calificativas. 510

265. Atipicidad, por ausencia del dolo como elemento subjetivo. 511

266. La omisión del a quo de admitir la inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos, viola en perjuicio del acusado la garantía de defensa establecida en el artículo 20 de la Constitución Federal. 512

267. Pruebas ofrecidas por la defensa. La autoridad judicial está obligada a admitirlas mientras no se declare cerrado el periodo de instrucción, siempre y cuando sean pertinentes, conducentes y no estén prohibidas por la ley.…….....512

268. Ofendida, delitos sexuales. El juez no está obligado a darle valor preponderante a su dicho cuando es inverosímil, impreciso y contradictorio. 513

269. Reparación del daño. Se debe imponer la condena, aunque no se tengan datos precisos del valor o del monto, pues éstos pueden fijarse en ejecución de la sentencia condenatoria, ya que el quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal, es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño. 514

270. Calificativa de “perfidia” contemplada en el artículo referido en la fracción V del artículo 316 del Código Penal del Estado en vigor. No se da cuando se advierte que entre los cónyuges ya no existe la confianza y existe pérdida de fe. 515

271. Ampliación de la declaración preparatoria ofrecida como prueba. Procede reponer el procedimiento en apelación conforme al artículo 219 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 515

272. Reposición del procedimiento. Procede por omitir informar al acusado sobre el derecho de optar por el trámite del procedimiento ordinario, consignado por el artículo 330 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León. 517

273. Prueba superveniente, momento para su ofrecimiento. 517

274. Inimputables. La medida de tratamiento en internación debe individualizarse y fijar su duración dentro del mínimo y el máximo que prevé la ley aplicable, determinando el tiempo del tratamiento con la mayor precisión posible. 518

275. Sistema especial de justicia para adolescentes. Eficacia probatoria de lo declarado por los policías investigadores. 518

276. Sistema especial de justicia para adolescentes. Pruebas ofertadas por el Ministerio Público como por la defensa no se transgrede el principio de contradicción.....519

277. Violencia familiar, opera el sobreseimiento de la causa. 520

278. Equiparable a la violación. Causa de inculpabilidad, cuando no se encuentra acreditado que el sujeto activo tenía conocimiento del padecimiento mental de la afectada. 520

279. Inimputable. La medida de seguridad impuesta por el juez debe ser individualizada y establecer con precisión su duración. 521

280. Homicidio. Calificativa improcedente la contenida en la fracción IV del artículo 316 del Código Penal en vigor.....522

281. Cooperación, justifica la probable responsabilidad que señala la fracción III del artículo 39 del C.P. 522

282. Despojo de inmueble no se acredita, y la vía penal no es la correspondiente, cuando ambas partes realizan actos posesorios sobre lo inmuebles de la litis. 523

283. Prueba circunstancial. 524

284. Delincuencia organizada, inexistencia del delito de. Cuando la finalidad del ilícito es abstracta o indeterminada. 524

285. Corrupción de menores. Concepto de deterioro de hábitos sexuales o morales, para integrar el tipo de. 525

286. Prueba pericial psicológica. Su desahogo no afecta ni lesiona derechos constitucionales de la menor pasivo en equiparable a la violación. 525

287. Equiparable a la violencia familiar. No se configura si se acredita que el inculpado se encuentra unido en matrimonio con persona distinta a la denunciante, aun con la aceptación del inculpado, de haber sostenido una relación sentimental con la pasivo. 526

CIVIL

1.- ACCION DE COBRO DE PESOS. ES PROCEDENTE AUNQUE NO SE JUSTIFIQUE EXACTAMENTE EL MONTO RECLAMADO EN LA DEMANDA. Si el actor de un juicio ordinario civil que acreditó ser propietario proindiviso de un inmueble, junto con los demandados, siendo su parte alícuota una tercera parte del mismo, reclamó el pago de lo que aseguró constituía la tercera parte de las cantidades obtenidas por los demandados por el otorgamiento de varios contratos de arrendamiento sobre diversas porciones del inmueble que les pertenece en mancomún, como consecuencia de los frutos y utilidades a que tiene derecho en proporción a su parte alícuota; es indudable que, si dentro de su demanda expresó una cantidad líquida y determinada, y en el sumario la parte reo no reconoció los montos que señaló el actor sobre las rentas obtenidas, sino que señaló unos diversos, así como distintos períodos de vigencia de los contratos y fechas de incrementos de la renta; no puede decirse que resulte improcedente en términos de ley la acción de pago ejercitada, puesto que ante la aceptación de la parte demandada sobre el haber recibido menores cantidades por la renta de las porciones del inmueble, es a tales cantidades justificadas con la confesión de la parte reo (que en el caso se robustecieron con otros elementos de prueba) a que se debe ajustar el monto de la condena respectiva, pues en esa medida es en que prospera la pretensión del actor, caso en el cual es posible realizar la condena en cantidad líquida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en Definitiva Número 595/97, relativo al juicio ordinario civil número 4000/95, promovido por F.A.P.V., por sus propios derechos, en contra de M.L.P.M., VIUDA DE P.A.P.P., M.S.P.P. y A.P.P.- Sentencia emitida el 14 de octubre de 1998.- Magistrado Genaro Muñoz Muñoz.

2.- ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, SU PROCEDENCIA. OBLIGACIONES CONJUNTIVAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1855 del Código Civil de Nuevo León, el que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. A este tipo de obligaciones también se les ha denominado “complejas” en razón a que dentro del vínculo jurídico que crean no se comprende una sola prestación o hecho a realizar por el obligado, sino que se comprenden varias prestaciones o hechos a realizar conjuntamente; el deudor u obligado sólo se liberará de tal obligación (cumplimiento) dando todas las cosas o prestando todos los hechos a que se obligó. Conforme a lo anterior se tiene que, si en juicio, el prestador del servicio profesional demandó de la persona que lo contrató el cumplimiento del acuerdo de voluntades respectivo, con el consecuente pago de las sumas pactadas como retribución del servicio otorgado; es indudable que debe acreditarse por el promovente la realización de su parte sobre los hechos que constituyeron el servicio para el que se le contrató; luego entonces, si en el caso concreto no solamente se obligó el profesionista a llevar un juicio sucesorio hasta su conclusión (protocolización), sino que también se asentó que el

profesionista resolvería “conforme a derecho los problemas de invasiones”, en ciertos bienes inmuebles, sin “obligación legal en este punto”, extremando su dedicación y cuidado; resulta indudable que el prestador del servicio se obligó a cumplir con los dos distintos hechos indicados, esto es, la tramitación del sucesorio hasta su conclusión y las gestiones a fin de tratar de resolver los problemas de invasiones en los bienes inmuebles, conformando ambos hechos o prestaciones tina obligación de las denominadas “conjuntivas”. Así las cosas, la procedencia de la acción de cumplimiento intentada sólo se obtendría de justificarse por el actor, no solamente que llevó el juicio sucesorio hasta la conclusión, sino que también realizó gestiones con el fin de “tratar de resolver conforme a derecho” los problemas de invasiones en los inmuebles señalados, extremando su dedicación y cuidado; esto último que, al no acreditarse en el sumario su realización, hace improsperable la acción de cumplimiento de contrato. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 502/96, relativo al Juicio Ordinario Civil número 2326/95, promovido por L.G.V. por sus propios derechos, en contra de M.N.S.G. VDA. DE G.- Sentencia emitida el día 26 de Octubre de 1998- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

3. ACCION DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. RESULTA IMPROCEDENTE AL NO VERIFICARSE POR AMBOS CONTRATANTES LA CONDICION SUSPENSIVA CONTRAIDA. Si la parte compradora ejercitó contra los vendedores la acción de otorgamiento de escritura, y en el documento respectivo se pactó que la operación de compraventa de inmueble se celebraba considerando una determinada cantidad por metro cuadrado, estableciéndose respecto al objeto de la operación que “posteriormente se llevará a efecto un levantamiento topográfico del mismo para así poder determinar el monto total de los metros cuadrados de las porciones de terreno antes citadas y fijar el total de valor de la operación, liquidándose el saldo del mismo a treinta, sesenta y noventa días posteriores a la fecha de entrega de los documentos relacionados al levantamiento”; resulta inconcuso que, para que prosperara la acción, debió justificar fehacientemente la parte compradora que el levantamiento topográfico convenido, efectivamente se elaboró de común acuerdo entre los otorgantes, con posterioridad al acto, pues en tal forma convivieron los contratantes en cumplir con dicho extremo, mismo que en el caso constituyó una condición suspensiva, sin que haya beneficiado a la actora el levantamiento topográfico que se allegó al sumario, al haberse realizado en forma unilateral por la actora y no en conjunto con los demandados vendedores, además de que ni tan siquiera fue ratificado en juicio por su suscriptor, resultando entonces una documental carente de eficacia probatoria; de ahí que, en consecuencia, ante el no acreditamiento del cumplimiento que debía darse a la condición suspensiva indicada, tampoco era factible en términos de ley determinar el total de la superficie objeto de la operación y su respectivo valor total, lo que se traduce en un impedimento para determinar si la obligación de pagar el precio a cargo del actor-comprador estaba finiquitada, aspecto que resulta esencial, en el caso concreto, para la procedencia de la acción de otorgamiento de escritura. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de

Apelación en Definitiva Número 1148/96, relativo al juicio ordinario civil número 2568/95, promovido por R.G.G., como apoderado general para pleitos y cobranzas de C.E. DE LA G., en contra de J.A.C.G.G. Y V.G. DE G.- Sentencia emitida el 15 de Julio de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

4.- ACCIÓN INTERDICTAL. CUANDO SE TRATA DE CO-POSEEDORES (ACTOR Y DEMANDADO) ES UN PRESUPUESTO PROCESAL ACREDITAR LA EXCLUSIVIDAD DE LA POSESIÓN PARA INTENTAR LA. Cuando el actor en su demanda manifiesta que su derecho de posesión (en el caso, una servidumbre de paso) la detenta conjuntamente con otros colindantes en coparticipación entre los que se encuentra el demandado, sin manifestar el actor que él ha tenido la posesión de hecho y con exclusión de sus demás copartícipes de la cosa que en común poseen, (en el caso, manifestando el actor que el demandado también es copartícipe del derecho posesorio al ser colindante), con ello se evidencia que dicho actor no reclama un derecho de posesión que le sea exclusivo, razón por la que incumple en comprobar el presupuesto procesal de exclusividad del derecho posesorio que reclama en juicio a su copartícipe y así, la acción interdictal es improcedente, en términos del artículo 702 (parte final) del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA Toca de apelación 135/99, Juicio de Interdicto, promovido por O.C.F., vs. D.S.A. Sentencia emitida el 28 de Junio del 2000. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

5. ACCIÓN REIVINDICATORIA. ALCANCE DEL CONCEPTO CALIDAD A QUE HACE ALUSIÓN LA JURISPRUDENCIA 32, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 56 y 57 DE LA SEGUNDA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1988. El texto de la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación se precisaron líneas arriba, enuncia posibles soluciones a las hipótesis que puedan suscitarse en un juicio reivindicatorio, cuando ambos contendientes ostenten un título de propiedad que los repute como propietarios del bien inmueble en disputa. En el caso concreto, tanto el accionante como el demandado dentro de la controversia real en cita, anexaron en la instancia primaria, documentos suficientes para considerarlos como dominantes de la cosa raíz en disputa, proviniendo tales instrumentos de diversas personas. Al efecto, el criterio jurisprudencial que se identifica con antelación establece substancialmente, el que al analizar una acción de la naturaleza ya precisada, si los títulos de propiedad provienen de distintas personas, prevalecerá, la posesión cuando los títulos sean de igual “calidad”, sin referirse en el cuerpo de la sinopsis aludida, ni en precepto legal alguno del marco legal que circunda tal tema, qué se entiende por calidad en un título de propiedad, alcance que es necesario interpretar para la debida dilucidación del conflicto de intereses en cuestión. En ese orden de ideas, se considera que la calidad en un instrumento justificativo de dominio, incide en un aspecto que merece un análisis bipolar, esto al abarcar tal concepto tanto un ámbito formal como otro material, radicando el primero de

ellos, en la fuerza legal que asista al documento o medio de prueba con el que se demuestra el acto jurídico que confiere la propiedad de la cosa en disputa, en tanto que el aspecto material lo conforma, el conjunto de peculiaridades que envuelven la substancia del título, así como los antecedentes de los cuales el mismo emana; concepto el anterior, que es conveniente circunscribir a esa doble connotación, a fin de dotar a la confrontación de títulos (que incide en uno de los objetivos fundamentales de la acción reivindicatoria), de una amplia esfera que nos permita determinar a ciencia cierta en conflictos como el suscitado, cual de los títulos debe predominar; por lo que sí en el supuesto de mérito, prevalece el instrumento justificativo de dominio anexado por la parte actora, al estimarse afecto de una preponderante calidad en el aspecto formal, como material, ello al acompañarse en escritura pública e incidir en una compraventa que se verificó con observancia de los requisitos de existencia y validez previstos para tal régimen contractual en nuestro marco legal, en contravención con el título de dominio de la parte reo, que incidió en una documental de carácter privado, por lo que desmerece en cuanto a su eficacia con respecto de aquella, amén de que el contrato de compraventa que en su cuerpo se vislumbra, relata como antecede de tal operación civil, la adquisición de bien raíz en cuestión mediante la tramitación de unas Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad- Perpetuam, trámite voluntario que se finiquitará en el año de 1988 -mil novecientos ochenta y ocho-, esto no obstante que la cosa objeto de disputa se encontrare matriculada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio desde el año de 1910 -mil novecientos diez-, circunstancia que en términos del artículo 2915 del Código Civil en vigor, importa una irregularidad en el trámite voluntario en comento que sirvió como antecedente del acto jurídico que confirió el supuesto dominio del inmueble a la parte demandada, ya que no es viable la adquisición de un predio a través de una información como la aludida, cuando éste ya se encuentra inscrito en el registro público enunciado, contrariedad que es suficiente para afectar también en su calidad material o substancial, al titulo exhibido en autos por la parte reo; por lo que es de concluirse que en la especie, la tesis de jurisprudencia antes explayada, no cobra directa aplicación en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo para regular el conflicto acontecido, al no evidenciarse en el sumario, la presencia de dos títulos de propiedad, de igual calidad y que provengan de diversas personas, única premisa que se propone en el criterio obligatorio relatado, como dilucidadora de un conflicto de títulos, cuando éstos emanen de diversos otorgantes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA .Toca de apelación en definitiva número 252/99, relativo al juicio ordinario civil, promovido por M.E.Q. y E.E.E. contra J.A.L.M. y J.L.P. Sentencia emitida el 25 de Febrero del 2000. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

6. ACCIÓN REIVINDICATORIA.- ES IMPROCEDENTE SI LA POSESIÓN DEL DEMANDADO DERIVA DE UN PRÉSTAMO DE INMUEBLE AUN CUANDO 1LOS DEMANDANTES NO HAYAN UTILIZADO LA PALABRA SACRAMENTAL DE "COMODATO". Si del contenido de la demanda inicial se pone de manifiesto que las actoras reconocieron que el origen de la posesión por parte de los

demandados, es porque precisamente una de las demandantes les prestó el inmueble reclamado; préstamo de inmueble que se traduce en un comodato aun cuando no hayan utilizado en dicho libelo la palabra sacramental de "comodato" para denominar al acto jurídico con motivo del cual los reos iniciaron a poseer el predio exigido en el juicio natural, pues para la demostración de ese acto jurídico, sí es suficiente que en la demanda principal se haya aducido que la referida coactora prestó, esto es, concedió el uso gratuito del inmueble litigioso a los enjuiciados con el compromiso de éstos de devolverla individualmente, confesión que se encuentra adminiculada con el reconocimiento que la actora hizo en las diligencias de notificación judicial a cargo de los demandados, donde reconoció que la posesión del inmueble por parte de los enjuiciados que pretende, es por el préstamo aludido y además que la existencia del contrato de comodato entre los contendientes, se corrobora también con la manifestación de los reos en su escrito de contestación al reclamo realizado en su contra, en la que, al indicar que si las actoras señalaron en su demanda inicial que la coaccionante BERNARDA CASTILLO MEXICANO, prestó el bien controvertido, en particular a RAMIRO TOVAR CASTILLO; entonces la acción sería diversa, de lo que se sigue que dicha defensa, relacionada que es con lo reconocido por las accionantes en el escrito inicial en cuanto a que la posesión de los reos inició con motivo del préstamo del inmueble en conflicto, con ello implícitamente las partes del juicio aceptaron la veracidad de un contrato de comodato, y por ende la acción reivindicatoria intentada es improcedente para dirimir los conflictos derivados de tal relación contractual, puesto que estos solo pueden resolverse mediante la acción personal correspondiente y no a través de la acción real reivindicatoria. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA .TERCERA SALA. Toca en definitiva número 484/2003, Expediente Judicial número 573/2002 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por B. C. M. y Otra en contra de R. T. C. y Otra. Sentencia emitida el 24 de Octubre de 2003. Amparo Directo número 64/2004/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

7. ACCIÓN REIVINDICATORIA. POSESIÓN DEL DEMANDADO E INDENTIDAD DEL INMUEBLE ACREDITADO CON PRUEBAS NO INDÓNEAS. Si bien es cierto las pruebas idóneas para acreditar la posesión del demandado lo es la Prueba Testimonial y para acreditar la identidad del inmueble objeto de reivindicación lo es la Prueba Pericial, también es cierto que no desahogadas, no por ése solo hecho debe ser improcedente la acción reivindicatoria, ya que dichos extremos, como segundo y tercer elemento de la acción planteada: la posesión por el demandado de la cosa perseguida e identidad del bien que pretende reivindicar, pueden ser acreditados de manera plena por el A-QUO con otros medio de convicción no idóneos valorados en su conjunto, como lo es la prueba de confesión judicial del demandado y documentales públicas fundatorios de la acción, cuando con ellas crean en el ánimo del juzgador que el demandado esta en posesión del predio que defiende y no existe ningún elemento de prueba que lo contradiga, máxime cuando el demandado ejercita en contra del actor en la vía reconvencional acción sobre prescripción adquisitiva sobre el inmueble objeto de litigio, considerando de ese

modo que el actor cumple con su gravamen procesal de probar lo que afirma, previsto en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León y así, acreditados plenamente los elementos de la acción reivindicatoria que son: a) La propiedad de la cosa que reclama; b) La posesión por el demandado de la cosa perseguida y c) La identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción, precisando situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley, resulta procedente la acción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación 591/2001, Juicio Reivindicatorio, promovido por S.C.V. y Otra vs. I.M.C. y Otra. Sentencia emitida el 18 de Diciembre del 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

8. ACTO CONSENTIDO, LA RESOLUCION EN CONJUNTO DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES CON LA SENTENCIA DEFINITIVA. Si la inconformidad se hizo consistir en que la resolución de primer grado violó en perjuicio del apelante los artículos 57, 71, del 561 al 567 y 739 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por cuanto a que el A-quo declaró sin materia un incidente de nulidad de actuaciones promovido por éste, ocasionando que con ello se le negara su derecho de audiencia y se quedara sin oportunidad de intervenir en el desahogo de pruebas, ya que debió haber resuelto dicha cuestión accesoria, en concepto del inconforme, por cuerda separada en el curso del procedimiento y no al dictar sentencia. En este sentido, es el caso señalar que si mediante diverso proveído la autoridad de primer grado dictó un auto dentro del expediente que la Sala conoce en grado de apelación, en el que se ordenó resolver el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el accionante, juntamente con la sentencia definitiva del procedimiento, se considera como acto consentido para todo efecto legal la resolución en conjunto del incidente de nulidad de actuaciones en la sentencia definitiva, al no haberse impugnado oportunamente el auto que así lo ordenó. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 398/2001, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por J. A. O. V. en contra de J. A. L. Sentencia emitida el día 24 de Octubre de 2002. Amparo Directo No. 365/2002-3-ll. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

9. AGRAVIOS INATENDIBLES. SI LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD PROPUESTOS POR EL APELANTE SE DIRIGEN A COMBATIR EL EMBARGO TRABADO EN JUICIO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL CORRESPONDIENTE. Los conceptos de agravio propuestos en la apelación, que se dirigen a combatir el embargo trabado en juicio, sin combatir directamente la resolución recurrida en la segunda instancia resultan inatendibles, si previo a ello no se agotó la vía incidental para atacar la diligencia de embargo o el embargo en si mismo, y por tanto no pueden ser estudiados por el tribunal de alzada, puesto que si para tal supuesto existe un medio idóneo de impugnación el mismo debe agotarse antes de

acudir al superior en apelación, a efecto de que sea el juez de primer grado quien pueda resolver lo pertinente, en respeto del principio de congruencia y del derecho de contradicción para la contraparte del alzista, lo anterior en atención a lo dispuesto por 449 del Código de Procedimientos Civiles en vigor aplicado supletoriamente a la legislación mercantil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 539/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 806/95. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2002. Amparo Directo número 126/2002. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones

10. AGRAVIOS INATENDIBLES EN LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. LO SON CUANDO SE HACEN VALER IMPUGNACIONES QUE YA FUERON MATERIA DE ESTUDIO EN DIVERSA APELACIÓN INTERMEDIA Y QUE FUERON DECLARADOS INOPERANTES. Si en un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia definitiva, se hacen valer agravios en los que se controvierte la vía en que fue admitida la acción, pero esas mismas argumentaciones fueron estudiadas y declaradas inoperantes en diversa apelación hecha valer en contra del auto de exeqüendo; tales inconformidades no deben ser materia de estudio en la apelación en definitiva, y por lo tanto, el tribunal ad quem debe declararlos inatendibles, no pudiendo ser reexaminados de nueva cuenta, porque en respeto al principio de firmeza procesal y a la autoridad de la cosa juzgada, los tribunales no pueden volver a encargarse de analizar cuestiones decididas previamente en el procedimiento, desconociendo sus consecuencias, revocándolas o modificándolas, pues ello equivaldría a impregnar de inseguridad los juicios sometidos a su jurisdicción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 335/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente número 1415/99, promovido por R.G.D,L,G., en su carácter de Apoderado Jurídico General para Pleitos y Cobranzas y Delegado Fiduciario de B.M.N.S.A.I.B.M.G.F.B., en contra de C.I.G.M. y M.T.G.G.D.G. Sentencia emitida el 22 de Abril de 2004.-Magistrado: José Patricio González Martínez.

11. AGRAVIOS INSUFICIENTES EN MATERIA MERCANTIL. Aunque es cierto que dentro del Código de Comercio no existe disposición alguna que establezca la forma o requisitos que deben contener los agravios, no debe desatenderse que por regla general la materia de la apelación queda circunscrita a analizar el fallo impugnado a la luz de los motivos de inconformidad planteados, debiendo entonces consistir éstos en la expresión de argumentos que directa y frontalmente, mediante un razonamiento lógico-jurídico concreto, combatan las consideraciones y fundamentos que en su sentencia asentó el a quo, pues de lo contrario, es decir, de aducirse a título de agravios afirmaciones dogmáticas o subjetivas, solamente se obtendrán elementos para la confirmación del fallo recurrido al no ponerse de relieve ilegalidad dentro del fallo impugnado, dado que tampoco existe disposición alguna contenida en el citado Código Mercantil que faculte al Tribunal de alzada a abordar cuestiones que no le hayan sido propuestas. Por tanto, si

en un juicio ejecutivo mercantil la parte actora que recurrió la sentencia de primer grado, por no haber obtenido en esa instancia, se concretó a aducir básicamente en la alzada, a título de agravios, que la sentencia no se dictó conforme a derecho y que la acción que eligió era la correcta para el cobro del cheque exhibido como documento base de la acción, es indudable que tales argumentos no constituyen un razonamiento lógico-jurídico tendiente a combatir las diversas consideraciones y fundamentos que utilizó totalmente el juez primario al declarar la improcedencia del juicio y que se desprenden evidentemente del fallo recurrido, quedando solamente a la Sala del conocimiento declarar la confirmación de la sentencia de primera instancia ante la insuficiencia de los agravios en tales términos formulados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 831/99, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 694/96, promovido por E.G.U.F. como Endosatario en Procuración de B.I., S.A., I. DE B.M., G.F.B. en contra de B.CH.G. y J.A.G.R. Sentencia emitida el 31 de Octubre de 2000. Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

12. APELACION EN MATERIA MERCANTIL, ES PROCEDENTE EL DESECHAMIENTO DICTADO CON FUNDAMENTO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA MATERIA MERCANTIL, POR NO HABERSE EXPRESADO LOS AGRAVIOS AL INTERPONER EL RECURSO. Es procedente declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en segunda instancia, aún y cuando el documento de crédito base de la acción haya sido suscrito con anterioridad a las reformas del Código de Comercio ocurridas el día 24 de Mayo de 1996, siempre que el procedimiento mercantil haya iniciado con posterioridad a las reformas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de fecha 21 de julio de 1997, esto cuando al interponer la apelación no se expresen los agravios respectivos; toda vez que no obstante que es verdad que al caso en cuestión aún le es aplicable el imperativo contenido en el artículo 1342 del Código de Comercio anterior a las referidas reformas, no debe pasar inadvertido que dicho dispositivo legal y demás relativos del citado ordenamiento mercantil son deficientes al omitir ante quien debe interponerse la apelación y ante quien debe realizarse la expresión de agravios, motivo por el cual ineludiblemente le es aplicable supleto-riamente el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles reformado, mismo que establece: El recurso de apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada, apresando los agravios que considere le causa la resolución recurrida...” Lo anterior máxime que los transitorios que rigen al Código de Procedimientos Civiles vigente establecen claramente que las reformas sufridas por dicho ordenamiento no serían aplicables retroactivamente en perjuicio de persona alguna, lo cual a contrario sensu y por exclusión significa que son aplicables legalmente aplicables a juicios iniciados con posterioridad a las mismas. Lo anterior así además atento a lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio aplicable. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca en apelación en definitiva número 169/99, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 382/99 promovido por A.V.T. en su carácter

de apoderado general para pleitos y cobranzas de B.C., S.A. I.B.M., G.E.B. en contra de J.S.R. y S.E.Q.E de S.- Resolución emitida el 1º. de diciembre de 1999.- Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas. Nota: Criterio que se encuentra pendiente de resolver en definitiva por las autoridades federales, siendo hasta el momento reiterado por la Octava Sala en las apelaciones que se encuentran en los supuestos que en la misma tesis se precisan y que han sido materia de diversos Juicios de amparo, de los cuales en cinco de ellos la autoridad federal ha compartido el criterio sustentado por la Sala, en tanto que en dos de ellos ha concedido a los quejosos el amparo y protección de la justicia federal.

13. APELACIÓN PENDIENTE, RECURSO DE, IMPIDE RESOLVER AL JUEZ DE PRIMER GRADO EN DEFINITIVA. Al advertirse que en el caso concreto existe una apelación que fue admitida contra el Auto de Formal Prisión decretado en contra de la acusada, aunado a que la sentencia definitiva se emitió, sin que se hubiere resuelto tal apelación, tal actitud emprendida por el Juzgador de Primer Grado, queda comprendida entre las violaciones procesales que afectan la defensa de la acusada, según el artículo 397 del Código Punitivo en vigor, en su fracción VIII el cual señala que: "En los juicio del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del sentenciado y se procederá la reposición de procedimiento en los casos siguientes: ... VIII.- Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la Ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo Artículo;..."; ello es así, pues con esa determinación el Juez de Primer Grado desechó el recurso de apelación hecho valer por el Defensor Oficial de la acusada, en contra del Auto de Formal Prisión, al resolver en definitiva sin haberse resuelto el multimencionado recurso; luego entonces, lo anterior deja sin defensa a la acusada, pues se considera como una violación procesal análoga a la prevista en aquella fracción, cuando el Juez de Primer Grado, dicta sentencia definitiva estando pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto en el procedimiento de Primera Instancia en contra del Auto de Formal Prisión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en artículo número 504/2003, relativo al proceso número 36/2001, instruido en contra de J.R.A. por los delitos de Aborto y Violación a las Leyes Sobre Inhumaciones y Exhumaciones. Sentencia emitida el 28 de Noviembre de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

14. APODERADO, EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD IMPROCEDENTE. NOMBRE ABREVIADO. Resulta improcedente la excepción que sobre falta de personalidad en la actora se opuso en juicio, respecto a la apoderada general para pleitos y cobranzas que en representación de una institución de crédito inició el procedimiento, toda vez que la abreviatura utilizada en el segundo nombre de tal persona y que se advierte del instrumento notarial, no constituye un obstáculo para la representación ostentada en juicio, puesto que no existe disposición legal que exija la utilización del

nombre completo, como fórmula sacramental, ni que prohíba utilizar solamente las iniciales de los nombres de pila, tanto más cuanto que la parte demandada no justificó en el sumario que en realidad, quien promovía el juicio se tratara de distinta persona. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 1237/97, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 485/92, promovido inicialmente por M.L.R.V., en representación de B.I., S.A. y continuado por A. DEL C.G.T., en el mismo carácter, en contra de A.M.CH.- Sentencia emitida el 11 de agosto de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

15. APRECIACIONES DE PERITOS EN DICTÁMENES. RESULTAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA ALTERACIÓN POR ADICIÓN EN LOS TÍTULOS DE CRÉDITO. Cuando de los dictámenes periciales rendidos en autos no se advierta que los peritos que en ellos intervinieron hayan llegado a la conclusión de que los documentos base de la acción se hubiesen suscrito en blanco, y tampoco se observe de tales dictámenes algún indicio en cuanto a que estos documentos hayan sido llenados sin el consentimiento de la parte demandada; por tal motivo las apreciaciones apuntadas por los peritos, resultan insuficientes para poder establecer plenamente o con meridiana exactitud que efectivamente los títulos de crédito base de la acción, hubiesen sido alterados, aún y cuando de los referidos dictámenes se desprenda que los peritos fueron coincidentes en cuanto a que los títulos de crédito base de la acción fueron llenados con distintas tintas, en momentos diferentes, toda vez que ello no es materia suficiente para sostener que haya quedado acreditada la alteración por adición, ya que ese tipo de llenado ninguna disposición legal lo prohíbe y sí por el contrario lo autoriza en el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TERCERA SALA. Toca en definitiva número 341/2003, Expediente número 397/2002 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por J. L. R. M. Vs. P. S. C. Sentencia emitida el 19 de Agosto de 2003. Amparo Directo No. 400/2003. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

16. ARRENDAMIENTO. ACCIÓN DE RESCISIÓN POR IMPAGO DE RENTAS EN EL CONTRATO DE. ES IMPROCEDENTE SI LA PARTE DEMANDADA ACREDITA MEDIANTE EXCEPCIÓN O VÍA RECONVENCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DEL ARRENDADOR CON SU OBLIGACIÓN DE HACER LA ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE ARRENDADO. Del concepto que del arrendamiento da el artículo 2292 del Código Civil para el Estado de Nuevo León se desprende que dicho contrato, entre otras características, es traslativo de uso, en virtud de que su objetivo principal es transferir el uso o goce de una cosa, siendo dicha concesión temporal, pero fundamentalmente es bilateral porque en el mismo hay derechos y obligaciones recíprocos: por parte del arrendador, la principal obligación es conceder el uso y goce temporal de una cosa, como de hacer la entrega de la cosa arrendada, tal y como se prevé por la fracción I del artículo 2306 del citado ordenamiento, y por parte del

arrendatario, pagar un precio cierto y determinado. Por tanto, aún y cuando del clausulado del contrato aparezca concertado que mediante dicho acuerdo, la arrendadora concedía y entregaba en arrendamiento el uso y goce del inmueble objeto del mismo, y que la arrendataria en el acto lo recibía de entera conformidad, resulta improcedente la acción de rescisión del contrato de arrendamiento por el impago de las rentas convenidas entablada por la parte actora arrendadora, si como en la especie, la parte arrendataria, apoyando sus defensas tanto vía excepción como reconvención (en el que demanda de igual forma la rescisión pero por incumplimiento de la arrendadora), acredita mediante la totalidad del material probatorio desahogado dentro del juicio, inclusive por presunciones e indicios surgidos de los elementos de prueba aportados, el incumplimiento de la arrendadora con su obligación de hacerle entrega física y material de la finca arrendada, pues con todo ello se infiere que al no haberse conferido el uso o goce del inmueble que se convino, la arrendataria no estaba por tanto obligada a cumplir con la reciprocidad pactada, esto es, de realizar el correspondiente pago de las pensiones rentarias. Lo que significa que si bien resulta improcedente la acción de rescisión por impago de rentas, dado a que, como se dijo, la obligación correlativa del arrendamiento, es decir, el pago de la renta, no surge sino hasta el día en que la cosa haya sido entregada, como lo dispone el artículo 2320, pese a ello, según se acreditó por la parte arrendataria los elementos de su reconvención y excepción, resulta procedente rescindir el referido contrato, pero ello en razón al incumplimiento del arrendador con su obligación de entregar el bien dado en arrendamiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 137/2002, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por Z. D. G. en contra de J. A. M. V. y R. C. Vda. d. G. Sentencia emitida el 31 de Julio de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

17. ARRENDAMIENTO. CUANDO EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO UNA DE LAS PARTES ACTÚA EN FORMA ILÍCITA AUN Y CUANDO NO SE HAYA ESTIPULADO EXPRESAMENTE, ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE. La invasión de una porción de terreno fuera de los límites de la zona perfectamente delimitada del bien objeto del contrato de arrendamiento si constituye una violación contractual que es motivo suficiente para exigir la rescisión del arrendamiento que hayan celebrado las partes, independientemente de que no hubiesen convenido expresamente tal evento como causal rescisorio y de que tal conducta no encuadre en las hipótesis que para la rescisión del arrendamiento contiene el artículo 2383 del Código Civil vigente en el Estado, porque de cualquier manera, tal proceder, imputado a la arrendataria, resulta ilícito y contrario al principio de buena fe que rige para todo contrato civil, en aplicación a las reglas que para las obligaciones en general contempla dicha legislación sustantiva, particularmente en los artículos 1727 y 1693, donde el primero conceptúa como hecho ilícito, no sólo aquél que es contrario a las leyes de orden público, sino también el que contraviene las buenas costumbres; mientras que el segundo determina, que desde el perfeccionamiento de los contratos, éstos obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las

consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación 274/2000, expediente número 2121/1998, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por L. G. V. vs. C. T. S. A. de C. V. Sentencia emitida el 7 Diciembre de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

18. ARRENDAMIENTO. DIFERENCIAS ENTRE LA ENTREGA REAL O MATERIAL DEL INMUEBLE ARRENDADO, CON LA ENTREGA JURÍDICA Y VIRTUAL PLASMADA EN EL CONTRATO DE. Conforme al artículo 2292 Código Civil para el Estado de Nuevo León, es obligación del arrendador transmitir tanto el uso o goce temporal de una cosa, como de hacer la entrega de la cosa arrendada, tal y como lo prevé el citado artículo 2306 fracción I de la codificación sustantiva civil en consulta. Así pues, con referencia a lo preceptuado respecto a los medios de entrega, el legislador concretamente en el artículo 2178 del Código Civil en el Estado, que se aplica al caso por analogía, distingue tres clases: la entrega real, jurídica o virtual. Con base en lo anterior, y dada la esencia del contrato de arrendamiento, resulta tangible que no solo es necesario la entrega virtual y jurídica, sino que resulta imprescindible, la entrega real o material, en atención a que la entrega será siempre insuficiente si la misma no implica que la cosa haya sido puesta a disposición del arrendatario para que éste pueda usarla y disfrutarla según la naturaleza y los fines del contrato. Por consiguiente, no puede decirse que con el solo hecho de que las partes plasmaron en uno de los clausulados del contrato de arrendamiento celebrado, que por medio de dicho acuerdo, la arrendadora concedía y entregaba en arrendamiento a la parte arrendataria el uso y goce del inmueble, quien previa su inspección, lo recibía a su entera conformidad, pueda estimarse que dicha arrendadora haya cumplido con su obligación de hacer entrega del inmueble arrendado, toda vez que la citada entrega virtual y jurídica plasmada en el contrato, no tiene el valor suficiente para demostrar la entrega real y material que aparentemente aparece haber sido realizada; pues aún y cuando es verdad que conforme al artículo 1748 del Código Civil “si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”, en el caso, dadas las particularidades alegadas, no debe perderse de vista que ante el incumplimiento imputado por el arrendatario, con respeto a la referida obligación de entrega material del bien a cargo de la parte arrendadora, ello debe encontrarse debidamente corroborado mediante elementos de prueba idóneos para así considerarlo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 137/2002, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por Z. D. G en contra de J. A. M. V. y R. C. Vda. D. G. Sentencia emitida el 31 de Julio de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

19. ARRENDAMIENTO, OBLIGACIÓN MANCOMUNADA DEL FIADOR CON EL ARRENDATARIO, EN CUANTO A LA OBLIGACON PRINCIPAL. Al efecto, si dentro del contrato de arrendamiento en que se constituye fiador solidario del

arrendatario, en los términos del artículo 2686 del Código civil, garantizando todas las obligaciones que aquél contrae por virtud de dicho contrato, entre tanto no se devuelva la finca arrendada a satisfacción del arrendador, bien sea que se haya pactado tiempo definido o indefinido para su vigencia, si el mencionado fiador renuncia a los beneficios de orden y excusión, señalados en los artículos 2706 y 2707 del Código Civil, así como en lo que le favorezcan, para su respectivos casos, las disposiciones de los artículos 2734, 2737, 2738, 2739, 2740 y 2741 del mismo ordenamiento legal; debe considerarse que el fiador consiente expresamente en continuar con su obligación, no obstante que el contrato llegue a su vencimiento y existan aumentos de renta a la fijada en el contrato por haberse así pactado en el mismo, hasta en tato reciba el arrendador la finca arrendada a su entera satisfacción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 421/97 deducida del Juicio Especial Sobre Cuestiones de Arrendamiento número 911/95 promovido por J.L.M. en contra de A.H.R. y E.J.H.G.- Sentencia emitida el 27 de Abril de 1998.- Magistrado Jaime Ricardo Espinosa Carreón.

20. ARRENDAMIENTO. LA ENTREGA DEL BIEN ARRENDADO, NO ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, SINO UNA OBLIGACIÓN DEL ARRENDADOR. Es desacertado el razonamiento de la autoridad de primer grado, en el sentido de que el contrato de arrendamiento base de la acción es inexistente, bajo el argumento de que dicho acuerdo carece de uno de los requisitos esenciales que para su existencia, debe contener, como según la A quo lo es, la entrega de la finca arrendada; ello es así, toda vez que según se dispone en el artículo 1691 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, los elementos que se requieren para la existencia de un contrato, se delimitan al consentimiento y objeto que pueda ser materia del mismo; de donde se sigue que en base a un contrato de arrendamiento, el primero de ellos se actualiza con el acuerdo de los contratantes de obligarse a conceder el uso o goce de una cosa, y la otra parte, al aceptar pagar por ese uso o goce un precio cierto (artículo 2292); mientras que el segundo elemento consistente en el objeto, se encuentra constituido por el inmueble cuyo uso se concede mediante dicho acuerdo, así como la renta o precio del arrendamiento, según lo dispuesto por los artículos 1721 y 2293 de la codificación sustantiva civil en comento. Así pues, no puede decirse que el acto de entregar al arrendatario el bien inmueble arrendado suponga la existencia del contrato, ya que contra lo interpretado por el juez primario, ésta condición se encuentra claramente contemplada como una obligación que el arrendador debe realizar conforme a lo pactado en el acuerdo de voluntades celebrado, dentro del Título Sexto denominado Del Arrendamiento, en el Capítulo II De los derechos y obligaciones del arrendador, fracción I del artículo 2306 del Código Civil en referencia; y tan es así que no puede ser estimado como un elemento esencial del mismo, que de conformidad con el artículo 2320 de la codificación en consulta “el arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario”, lo que indudablemente presupone que el arrendamiento existe, aún cuando la entrega física del bien no se haya efectuado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en

definitiva número 137/2002, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por Z. D. G. en contra de J. A .M. V. y R. C. Vda. d. G. Sentencia emitida el 31 de Julio de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

21. ARRENDAMIENTO, LA RENTA CONSTITUYE PRECIO CIERTO AUN Y CUANDO SEA SUSCEPTIBLE DE DETERMINARSE CON ARREGLO A LAS BASES QUE SE PACTARON EN EL CONTRATO. Conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tomo P-Z, Editorial Porrúa, páginas dos mil cuatrocientos cuarenta y tres a la dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, debe entenderse por precio: "la cantidad que se pide por una cosa; prestación consistente en numerario, valores o títulos que un contratante da o promete, por conmutación de una cosa, derecho o servicio. En el pago de algunos servicios y en la compraventa de bienes, la contraprestación se denomina precio por antonomasia; en el préstamo de dinero, interés o rédito, y en el arrendamiento de cosas, renta o alquiler", el precio debe reunir las siguientes características: a) ser verdadero, es decir, serio, real efectivo, no irrisorio simulado o ficticio; b) debe ser cierto, lo cual significa que las partes lo determinen expresamente en una suma de dinero o por referencia a otra cantidad; c) ha de consistir en dinero aunque se admite que la contraprestación del comprador se pague parte en dinero y parte con el valor de otra cosa y d) el precio ha de ser justo, proporcionado , equivalente al valor de la cosa que se adquiere. Por lo que, en este orden de ideas, si de acuerdo con las cláusulas del contrato arrendaticio que une a los contendientes se desprende que en el contrato se estipuló como precio de la renta una cantidad fija que se pagaría por adelantado en forma semestral, a la cual se le incrementaría el impuesto al valor agregado así como la inflación resultante a los seis meses según lo determinado por el Banco de México, si bien no hay una cantidad expresamente fijada, el precio pactado es cierto, porque es susceptible de determinarse con arreglo a las bases que al efecto se convinieron por los contratantes, ante lo cual ninguna complicación presenta el que se haya determinado que el resultado de las operaciones que se realicen al amparo de las cláusulas del acuerdo de voluntades sustento de la acción ejercitada para obtener el monto de la renta adeudada, se deje para ejecución de sentencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 129/2004 deducido del expediente judicial número 593/2003, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento promovido por X.P.G. en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de L.I., S.A. DE C.V. en contra de L.M.G.G. y R.M.R. DE G. Sentencia emitida el 21 de junio del 2004. Confirmada en Amparo Directo número 387/2004/3 en fecha 8 de Noviembre del 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

22. AUTO QUE ABRE EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL A LA ETAPA DE PRUEBAS. RESULTA INNECESARIA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL

MISMO CUANDO EL DEMANDADO NO CONTESTO LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA. Si en un Juicio Ejecutivo Mercantil el reo no dio contestación a la demanda entablada en su contra y por consecuencia no ofreció medio de prueba alguno, puesto que conforme al Código de Comercio afectó a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de Mayo de mil novecientos noventa y seis, el demandado debe ejercer su derecho de ofrecimiento de instrumentos de convicción precisamente al momento de formular su escrito de oposición; por su parte el Juez de origen al dictar el auto que decretó la apertura a pruebas no ordenó notificación personal del mismo, esa omisión de ninguna manera puede considerarse como causa de reposición del procedimiento, porque no constituye una violación que hubiere dejado sin defensa al reo apelante ni tampoco trascendió al resultado del fallo, en virtud de que al demandado recurrente correspondía ofrecer las pruebas de su intención en su escrito de contestación, lo cual no hizo puesto que no emitió tal contestación; consecuentemente a nada práctico conduciría ordenar dicha reposición del procedimiento para el efecto de notificar personalmente al demandado el auto de inicio de la etapa de instrucción, dado que no se aportaron medios de prueba por el inconforme. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 394/2003, Expediente Judicial número 771/2002 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por J. G. A. L en contra de J. L. M. D. Sentencia emitida el 28 de Julio de 2003. Amparo Directo número 369/2003/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

23. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIO MERCANTIL. OPERA DE PLENO DERECHO, AUN CUANDO FALTE EL EMPLAZAMIENTO A UNO DE LOS DEMANDADOS. No es exacto considerar que conforme a lo establecido por el artículo 1075 del Código de Comercio reformado, el cual dispone que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones, resulte inoperante decretar la caducidad de la instancia ante la falta de emplazamiento de uno de los demandados, toda vez que dicho dispositivo en forma evidente establece la regla general para el cómputo de los términos judiciales, en tanto, para la caducidad de la instancia, existe una regla especial contenida en el artículo 1076 de la legislación mercantil aplicable, al expresamente determinar que dicha figura jurídica opera y puede decretarse cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo (en donde evidentemente aún no se emplaza a los demandados, ni se ha integrado la relación procesal) y hasta la citación para oír sentencia; Por consiguiente, si del citado numeral 1076 se puede inferir que la caducidad de la instancia se produce por la conjunción de tiempo e inactividad en el proceso, independientemente del estado en que se encuentre, trae como resultado estimar que en el caso, al encontrarse justificadas fehacientemente las dos hipótesis que establece el propio precepto legal, y al atender que la existencia de actuaciones posteriores respecto a las cuales se infiera la intención de las partes para proseguir con la tramitación del juicio, no convalidan la caducidad que en el presente caso operó de pleno derecho, la misma resulta

por tanto procedente, con independencia de que se haya realizado o no el emplazamiento a uno de los demandados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 934/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido inicialmente por J. H. I. G., en su carácter de Endosatario en Procuración de la Institución de Crédito denominada C., S.A., I. DE B. M., A. G. F. y continuado por J. L. L. A. en su carácter de Apoderado Jurídico General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de Crédito denominada C. M., S. A., G. F. C., en contra de G. P. V. y F. P. V. Sentencia emitida el 28 de Febrero de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

24. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. PARA QUE OPERE NO SE REQUIERE QUE DEBA SER DECLARA DE MANERA EXPRESA POR LA AUTORIDAD. De un análisis del artículo 3° del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se advierte que la caducidad de la instancia se produce dentro de un proceso judicial, ipso iure, locución latina que significa “por el mismo derecho”, merced al cual, los efectos de un hecho jurídico se producen automáticamente por virtud de una norma de derecho, sin necesidad de que exista previa declaración de la autoridad, razón por la cual, la caducidad de la instancia no requiere ser declarada previamente para que quede extinguido el proceso, sino que basta con que se genere la inactividad procesal de las partes por más de ciento veinte días, sin que medie un impedimento procesal, y que dentro de ese lapso no se haya presentado alguna promoción que tienda a impulsar el procedimiento, para que opere dicha figura jurídica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 494/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil, expediente número 1077/2001, promovido por H.N.S.G., en contra de A.D.F.R. Sentencia emitida el 27-veintisiete de abril de 2004-dos mil cuatro. Magistrado: Jose Patricio González Martínez

25. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EXISTAN NOTIFICACIONES PERSONALES PENDIENTES DE PRACTICAR, ANTERIORES AL AUTO RESPECTO AL CUAL FUE INICIADO EL COMPUTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Observando el contenido del artículo 1076 del Código de Comercio reformado, se advierte que el mismo no admite otra interpretación sino la literal, al establecer que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando “a)... hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada”; Por tanto, al ser éste de carácter imperativo, es evidente que la última resolución judicial dictada en el procedimiento, el cual dio la pauta para evidenciar el desinterés de la parte actora de impulsar el procedimiento, surtió plenamente sus efectos mediante su notificación por el Boletín Judicial; Por tanto, la existencia en el sumario de autos pendientes de notificar de manera personal anteriores al mencionado proveído, no es impedimento para que dicha figura jurídica sea decretada, pues como puede verse del mencionado dispositivo, el mismo

terminantemente precisa a partir de qué momento empieza a computarse el término para la caducidad de la instancia aludida, sin que de ésta se desprenda diverso requerimiento para su advenimiento, o bien alguna otra indicación que conlleve a suponer que antes del cómputo del término que se indica al efecto, deba verificarse el cumplimiento de determinada carga procesal impuesta con anterioridad dentro del procedimiento; Por consiguiente, si en el presente caso, no obstante la carga procesal que tienen las partes de activar e impulsar el procedimiento para poder llevarlo hasta su terminación, fueron omisas en comparecer al juicio durante mas de ciento veinte días consecutivos para tal efecto, hace por demás evidente la inactividad acaecida dentro del juicio, y como resultado a tal desinterés, deviene admisible la caducidad de la instancia en cuestión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 934/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido inicialmente por J. H. I. G., en su carácter de Endosatario en Procuración de la Institución de Crédito denominada C., S.A., I. DE B.M., A.G.F., continuado por J. L. L. A. en su carácter de Apoderado Jurídico General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de Crédito denominada C. M., S. A., G. F. C., en contra de G. P. V. y F. P. V. Sentencia emitida el 28 de Febrero de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

26. CADUCIDAD EN MATERIA MERCANTIL. EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO PARA DECRETARLA. A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA ULTIMA NOTIFICACIÓN. (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO EL 24 DE MAYO DE l996). La caducidad en materia mercantil a diferencia de la civil, de conformidad con el artículo 1076 incisos a) y b) del Código de Comercio reformado el 24 de Mayo de 1996, se decretará cuando hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, además de que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite. Esto quiere decir, que si el último auto dictado dentro de un juicio mercantil ordena notificar personalmente a las partes; verbigracia, por cambio del Titular del Juzgado, y ésta no se ha practicado, dicha notificación personal no ha surtido efectos en términos del numeral 1075 del citado ordenamiento mercantil, por lo tanto, no ha empezado a correr el término para que se esté en posibilidad de decretar la caducidad de la instancia. Mención especial se hace al hecho de que la figura de la caducidad no se contemplaba en el Código de Comercio vigente antes de las reformas del 24 de Mayo de 1996. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca en apelación en artículo número 93/99, derivado del juicio ejecutivo mercantil numero 2067/98, promovido por J.H.F.M., en su carácter de endosatario en procuración de F.Y.D. DE M., S.A. DE C.V., en contra de E.P., S.A. DE C.V. Sentencia emitida el 24 de noviembre de 1999.- Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

27. CADUCIDAD. EL HECHO DE QUE SE HAYA RESUELTO LA SENTENCIA DEL JUICIO PRINCIPAL, NO IMPIDE QUE EN UN TOCA EN ARTÍCULO

PROPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A DECLARARLA, SE PRONUNCIE LA SALA SOBRE ESA FIGURA EXTINTIVA. El hecho de que haya sido puesto el juicio principal para sentencia, y dictada la definitiva mucho antes de que fuera resuelto el toca en artículo relativo a la proclamación de la caducidad formulada por la demandada, de ninguna manera extingue la posibilidad de que el tribunal de alzada pueda declarar la caducidad de la instancia, ni tampoco hace que quede sin materia el referido recurso de apelación en artículo; pues, la jurisdicción del Magistrado fue para que se pronunciara sobre un aspecto de orden público: la caducidad de la instancia, cuestión que la demandada hizo valer oportunamente, por lo que la validez de todo lo actuado quedaba ligado a la suerte de la eventual resolución de dicha apelación en artículo; sin que sea obstáculo que la demandada no hubiese impugnado el auto que ordenó el dictado de la sentencia, ni haya formulado agravios sobre la caducidad ni sobre la falta de resolución del toca en artículo, pues esas cuestiones no pueden traducirse en su consentimiento, porque el derecho a que dicha caducidad fuera decretada en su beneficio, ya había sido hecha valer desde antes del surgimiento de tales actos en el mundo jurídico; es decir, la expectativa de que dicha declaración fuera hecha en su favor, ya existía antes de esos acontecimientos, cuya validez estaba supeditada a la resolución que recayera a la solicitud de la caducidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 494/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil, expediente número 1077/2001, promovido por H.N.S.G., en contra de A.D.F.R. Sentencia emitida el 27-veintisiete de abril de 2004-dos mil cuatro. Magistrado: José Patricio González Martínez.

28. CADUCIDAD. MATERIAS MERCANTIL Y CIVIL, DIFERENCIAS. TÉRMINO PARA QUE OPERE LA. El Código de Comercio reformado y actualmente en vigor ya reglamenta en forma completa y sin deficiencias la figura de la CADUCIDAD de la Instancia, específicamente en su artículo 1076, que establece: “En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo…”- El Código de Procedimientos Civiles vigente, regula la figura de la CADUCIDAD en su artículo Tercero, en los términos siguientes: “…En los juicios contenciosos la instancia caducará cualquiera que sea el estado en que se encuentra, cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio, en la primera instancia durante un lapso de ciento veinte días; en la segunda instancia de sesenta días, y en los incidentes y recursos de revocación treinta días. Los términos comprenderán tanto días hábiles como inhábiles y empezarán a contar a partir del día siguiente al de la última resolución o actuación

judicial…” -Analizando ambas Legislaciones, encontramos que las principales diferencias, consisten, básicamente, en las siguientes: En materia MERCANTIL, en el cómputo del término de la caducidad se cuentan únicamente días hábiles.- En materia CIVIL, se cuentan días hábiles como inhábiles. En materia MERCANTIL, el término para el cómputo de la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada.- En materia CIVIL, empieza a contar a partir del día siguiente de la última resolución o actuación judicial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 393/2001, Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por J.R.M. vs. G.C.G. Sentencia emitida el 9 de Agosto de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

29. CADUCIDAD. NO PROCEDE CUANDO EL JUICIO MERCANTIL SE PARALIZA DE MODO ABSOLUTO POR INACTIVIDAD SÓLO ATRIBUIBLE A LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO A LAS PARTES. De la interpretación teleológica del artículo 1076 del Código de Comercio, se obtiene que la caducidad no deberá decretarse cuando la inactividad procesal sea atribuible, no a las partes litigantes, sino exclusivamente a la autoridad judicial porque ésta haya dejado de realizar las actuaciones judiciales que ella misma ordenó, y cuya omisión provoca que la secuela del proceso se detenga hasta en tanto tales actuaciones judiciales se verifiquen; verbigracia, cuando la autoridad judicial no realiza las notificaciones personales que ella misma hubiere ordenado, siempre y cuando el efecto de esta omisión sea la paralización absoluta del curso del juicio. La inactividad procesal no puede considerarse atribuible a las partes, cuando éstas no puedan presentar promociones con un fundamento jurídico efectivo para “dar impulso al procedimiento”. Sería contrario a toda lógica jurídica sancionar a las partes por omitir realizar una conducta que no está jurídicamente a su cargo, y tampoco puede exigirse a las partes presentar promociones reiterando o recordando al juzgador que practique una notificación pendiente, pues tales peticiones auque son muestras de interés de la parte que las hace, no están previstas en la ley como obligación o carga procesal para las partes, e inclusive reciben como respuesta del órgano jurisdiccional un “estése a lo ordenado....”. Habiendo ordenado el juez, la práctica de una notificación, corresponde, no a las partes, sino al propio juez y su secretario y actuario respectivos, hacer cumplir y cumplir tal mandamiento, e inclusive la ley prevé sanciones para ellos en caso de no realizar debida y oportunamente la notificación ordenada. La institución jurídica de la caducidad impide que el impulso procesal que corresponde a las partes litigantes, se traduzca en un poder ilimitado que les faculte paralizar el proceso durante mucho tiempo y para reactivarlo cuando mejor les parezca, con todos los inconvenientes de incertidumbre jurídica y costos judiciales que esto implicaría. Pero también la caducidad de la instancia, debe interpretarse en el sentido de evitar que la facultad de los órganos jurisdiccionales para practicar las notificaciones que son condición para que los autos y resoluciones que ellos mismos emiten surtan sus efectos y permitan continuar con la secuela del proceso, se traduzca en un poder indebido que les permita paralizar el curso del proceso durante un tiempo suficiente para provocar la caducidad de éste, en agravio del

derecho fundamental de las partes a que se les administre justicia por los tribunales. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 19/2004, relativo al expediente judicial 713/1999 formado con motivo del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por T. G. A. en su carácter de endosatario en procuración de A. de D., S.A. de C.V. en contra de D. CH. V. y J. M. E. G. Sentencia emitida el 18 de abril del 2005. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

30. CAMBIOS DE TITULAR DEL JUZGADO. SU OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES NO AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Si bien es cierto que el artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la materia mercantil, dispone que deben practicarse en forma personal, entre otros, los acuerdos en que se declare el cambio de titular que opera en un juzgado, también lo es que la razón de lo contenido en tal precepto legal consiste en que se permita al interesado plantear, en su caso, el impedimento en contra del funcionario que deba resolver la controversia, esto con el fin de que se respete en toda su extensión el principio del contradictorio y por consiguiente que se conceda a las partes la oportunidad de hacer valer sus defensas en el juicio, máxime que para que en su caso pudiera ordenarse la reposición del procedimiento es necesario efectuar un análisis que conlleve a establecer si la violación que se denuncia trascendió o no al resultado de la sentencia definitiva, y de acuerdo con lo anterior, si en el caso en comento el artículo 1134 del Código de Comercio, establece que: “Toda recusación se impondrá ante el juez o tribunal que conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas a la autoridad competente para resolver sobre la recusación...”, y amén de que la demandada en sus agravios no señala algún motivo que pudiera ser constitutivo de alguna causa de impedimento de quien debe resolver, resulta inconcuso que la omisión de notificar personalmente el cambio de titular que operó en el juzgado instructor, no amerita la reposición del procedimiento, porque no constituye una violación que hubiere dejado a la parte apelante sin defensa ni tampoco trascendió al resultado del fallo, por lo tanto, no existe algún elemento o información que de manera fundada permita establecer que a la parte recurrente se le hubiera impedido plantear alguna defensa en el juicio de origen, derivado de la falta de notificación de los proveídos en que se acordó los cambios de titular del juzgado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 33/2004.- Expediente Judicial 738/2002.- J.E.M. promovido por J.M.Ch.G. en contra de J.S.G. y Otra. Sentencia emitida el 25 de Febrero del 2004.- Amparo Directo número 193/2004/3.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones

31. CERTIFICADO DE GRAVAMEN, NINGUN PERJUICIO LE CAUSA AL EJECUTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EL QUE ESTE NO OBRE ACTUALIZADO HASTA EL MOMENTO MISMO EN QUE SE LLEVA A

CABO EL REMATE. (PROCEDIMIENTO TRAMITADO CON ANTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL 13 DE JUNIO DE 2003). En efecto, ningún perjuicio le causa a los apelantes el hecho de que no se haya recabado por la autoridad primaria otro certificado de gravámenes, dado a que obra en autos el certificado de gravámenes del inmueble embargado de los últimos diez años, como lo exige el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, y si bien es cierto como lo expresa el apelante que entre la fecha de expedición del certificado de gravamen que obra en autos, el cual se expidió el 16-dieciséis de octubre del 2000-dos mil, y la fecha de la Audiencia de Remate, la cual se celebró el día 11-once de Octubre del 2001-dos mil uno, transcurrió casi un año de diferencia, esto de ninguna forma afecta a los apelantes, dado a que en todo caso sería el acreedor omitido a quien se le privaría de los derechos que le concede la ley para asistir a la almoneda e impugnarla. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA.- Toca en Artículo 34/2002.- Expediente Judicial 319/1998.- J.E.M., promovido por O.M.G. en contra de H.R.L.T. y Otra. Sentencia emitida el 15 de Marzo de 2002.- Amparo Indirecto 537/2002.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

32. CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. SURTE PLENOS EFECTOS RESPECTO AL DEUDOR DESDE QUE SE LE NOTIFICA EN JUICIO. Si la cesión de derechos de un crédito mercantil que se encuentra en litigio se formalizó en escrito privado firmado por el cedente, cesionario y dos testigos, cumpliendo con los requisitos legales previstos en el artículo 2033 del Código Civil Federal, además de presentarse y ratificarse ante el Juez de los autos, quien la sanciona como válida, teniendo al cesionario como titular de los derechos y nuevo actor del juicio, debe concluirse que dicha cesión surte plenos efectos respecto al deudor desde que se le notifica en el juicio el auto que la acuerda, pues con independencia que el origen del los derechos que se ceden sea un crédito mercantil y que dicha notificación no se haya realizado al deudor en la forma prevista en el artículo 390 del Código de Comercio vigente en el país, es decir, ante la presencia de dos testigos, no debe perderse de vista que la cesión, es sobre derechos que se encuentran bajo la jurisdicción y autoridad del juez de los autos y fuera de la esfera jurídica de los particulares, por lo que la notificación judicial al deudor del auto que la sanciona resulta suficiente para que la misma surta validamente sus efectos frente a éste. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 197/2004, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por J. B. C. G. en contra de R. A. V. e I. V. O. A. Sentencia emitida el 04 de Junio de 2004. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

33. CESION DE DERECHOS OTORGADA POR UNA UNION DE CREDITO. LICITUD DE LA. El artículo 45 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que (como ley especial a observar en primer término) regula las

actividades de las uniones de crédito, establece de manera expresa las operaciones que se prohíben realizar a dichas personas morales; mientras que el artículo 40 de la misma legislación refiere, por otra parte, las actividades que expresamente el legislador autorizó a realizar a dichas uniones de crédito. Del texto del precepto legal mencionado en primer término, no se desprende que se encuentre prohibida la celebración de un contrato de cesión de derechos otorgado entre una organización auxiliar de crédito, del tipo de las uniones de crédito (como cedente), a favor de un distinto ente moral, como lo era Nacional financiera, Sociedad Nacional de Crédito (como cesionaria), toda vez que ante la omisión que sobre el particular efectuó el legislador en el sentido de considerar, en términos textuales, expresamente prohibido el mencionado acuerdo de voluntades; es indudable que, siendo aplicable de manera supletoria a la indicada ley el Código de Comercio (según lo refiere el propio artículo 10 de la ley especial indicada) se actualizó el supuesto contenido en el artículo 389 de este último ordenamiento, que establece que:- "Los créditos mercantiles que no sean al portador ni endosables se transferirán por medio de cesión", a virtud de que se trataban de créditos (operaciones mercantiles) el objeto de los derechos cedidos. En tales condiciones, resulta improcedente el argumento formulado dentro de la defensa desplegada en juicio por parte de los demandados, en el sentido de que resulta ilícito el contrato de cesión de derechos por no encontrarse expresamente permitido, como actividad, en el artículo 40 de la Ley indicada en primer término, toda vez que la concertación del mencionado acuerdo de voluntades tuvo su sustentación, a la luz del derecho, en la legislación aplicable de manera supletoria que sí lo regula de manera expresa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en Definitiva Número 869/97, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil Número 1041/95 promovido por F.H.G.C. en su carácter de Apoderado Jurídico General para Pleitos y Cobranzas de la persona moral U.CI.M.M.E., S.A. DE C.V., y continuado por J.M.G.G., como Apoderado de la persona moral N.F., S.N.C., en contra de R.E.V., C.M.P. DE E. Y de la persona moral denominada E.R.; S.A. DE C.V.- Sentencia emitida el 10 de Junio de 1998.- Magistrado Genaro Muñoz Muñoz.

34. COMPETENCIA. EN JUICIO EJECUTIVO CIVIL SOBRE COBRO DE PESOS, LA ACCIÓN PRINCIPAL LA DETERMINA, Y NO LA GARANTÍA REAL QUE SE ENCUENTRE PACTADA DENTRO DEL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. Al ejercitarse la acción personal de cobro de pesos de manera principal en un Juicio Ejecutivo Civil, derivada de un Contrato Privado de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria, y siendo además que la demandada tiene su domicilio en esta ciudad, como se advierte del mismo documento, es por lo que en términos de la fracción IV del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se surte a favor del natural la competencia para conocer del asunto y no del juez con competencia en el lugar donde se halla el inmueble sobre el cual se pactó la garantía hipotecaria que respalda el pago del crédito, toda vez que el objeto principal que se persigue por el actor al acudir ante el juez de origen es el cobro del adeudo, debido a la falta de pago por parte del deudor, y por ello, no obstante que en el documento base de la

acción se haya otorgado garantía real sobre el inmueble referido, el derecho personal del actor subsiste como tal, y dependerá de la procedencia de la acción principal el que se haga efectivo a su vez el derecho de exigir la ejecución de la garantía. Es por eso que, para determinar la competencia, deberá atenderse en principio al ejercicio de la acción personal de cobro del adeudo, y no de lo derivado de la ejecución de la hipoteca, por ser ésta una consecuencia de aquélla, máxime que conforme al artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, el accionante estaba obligado a intentar ambas acciones en la misma demanda, pues en caso contrario, correría el riesgo de que una de ellas se extinguiera. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva 120/98. Relativo al Juicio Ejecutivo Civil número 944/97, promovido por J.M.S. en contra de A.V.H. Sentencia emitida el 30 de Agosto de 2000. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

35. COMPRAVENTA. CUANDO EL VENDEDOR TRANSMITE UNA PARTE DEL BIEN Y SE OBLIGA A TRAMITAR Y OTENER LA SUB-DIVISIÓN DEL MISMO, NO PUEDE ALEGAR QUE ES UN HECHO DE IMPOSIBLE REALIZACIÓN. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1724 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO). Esta autoridad no comparte el criterio adoptado por la resolutora de primer grado, en cuanto a que, la disolución de la copropiedad es de imposible realización por falta de interés jurídico; y si bien, el artículo 1724 del Código Civil establece que el hecho positivo del contrato debe ser posible, ello debe interpretarse en el sentido de que el hecho materia del contrato pueda ser realizado, ya por el obligado, ya por otra persona. De tal suerte que la imposibilidad debe ser “absoluta”, esto es, que el hecho no pueda ser prestado por el obligado ni por cualquier otra persona, y que esa imposibilidad sea física o jurídica de acuerdo con el diverso numeral 1725 del citado ordenamiento sustantivo. Por tanto, los vendedores sí estaban en posibilidad de gestionar la sub-división del inmueble que enajenaron a sus compradores; sin que la circunstancia de que los enajenantes ya no fueran propietarios del inmueble que vendieron convierta en imposible la obligación asumida en tramitar la subdivisión, pues bien pudieron solicitar a los compradores un poder o mandato para ejecutar el acto al que se obligaron. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 286/2000 relativo al J.O.C. promovido por J.L.P.R. y M.Z.V.M. en contra de V.A.G. y M.P.S.G. Sentencia emitida el 30 de Junio de 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

36. COMPRAVENTA MERCANTIL. TÉRMINO PARA CONSERVAR LA ACCIÓN REDHIBITORIA POR VICIOS OCULTOS DE LA COSA. Tratándose de compraventas mercantiles el término para conservar la acción redhibitoria por vicios ocultos de la cosa, es de 30 días naturales contados a partir de que se recibió el bien enajenado, y no el término de seis meses que preceptúa el numeral 2149 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, lo

anterior es así, en razón de que en el Código de Comercio vigente, existe disposición expresa que preceptúa la forma en que debe computarse el término para conservar ésta acción; lo cual se desprende del contenido del numeral 383 del Código de Comercio; por lo que, al existir disposición expresa en tal ordenamiento, por así establecerlo el numeral 1054 del mencionado Código, no es factible aplicar las disposiciones que establece el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, concluyéndose, por lo tanto, que en materia mercantil el término para conservar la acción redhibitoria por vicios ocultos de la cosa, es de 30 días naturales contados a partir de que se recibió el bien objeto de la compraventa, en términos de lo dispuesto por el ya citado numeral 383 del Código de Comercio en vigor". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 169/2004. Juicio Ordinario Mercantil número 832/02. H.A.G.G., VS. I.P.S.S.A. y I.P.B. Sentencia: 21-veintiuno de Mayo del año 2004-dos mil cuatro. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

37. COMPRAVENTA. SE DEBE ANALIZAR LA BUENA O MALA FE DE LAS PARTES EN LA SEGUNDA COMPRAVENTA CELEBRADA POR EL MISMO VENDEDOR, CUANDO EL PRIMER COMPRADOR EJERCITA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE. Cuando se ejercita la acción de cumplimiento de contrato de compraventa y ésta queda plenamente demostrada por parte del accionante dentro del sumario original, y en el caso ante la existencia y exhibición por un codemandado de una segunda compraventa formal debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, concertada por el mismo vendedor demandado a favor del tercero co-demandado, respecto a los mismos inmuebles, se convierte indispensable que el Juez A quo, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 2158 y 2160 del Código Civil vigente en el Estado, analice lo referente a la prioridad en el registro; sin embargo, el Juzgador Instructor, no puede ni debe pasar por alto uno de los principios fundamentales en la celebración de los contratos, como lo es, entre otros, el de la buena fe, para el efecto de determinar con estricto apego a derecho qué operación prevalece sobre la otra. En efecto, lo anterior se deduce de una sana interpretación del contenido del numeral 2164 de la Legislación Sustantiva en cita, puesto que debe tomarse en cuenta a su vez en forma esencial la buena o la mala fe con la cual se concertó la segunda compraventa, no obstante la prioridad en el registro, toda vez que el estudio que se realice sobre ese aspecto (buena o mala fe), deberá regirse por los lineamientos establecidos en los diversos artículos 2898 y 2899 del Código Civil vigente en el Estado, sobre los adquirientes de buena fe. Y en el caso determinado que debe prevalecer la venta primera en fecha ante la mala fe de las partes en la celebración de la segunda y estando esta última inscrita, debe ordenarse la cancelación de su registro, para que sea factible cumplir con la orden judicial de escriturar e inscribir la primera compraventa. Lo anterior es así, a fin de ser congruentes con el Principio Registral contenido en nuestra Legislación, referente a que no pueden existir dos inscripciones registrales respecto a un mismo inmueble a favor de dos personas distintas, de conformidad con el artículo 2901 del

Código Civil vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 449/2000, Juicio Ordinario Civil, promovido por E.S.S. vs. R.M.R. y Otros. Sentencia emitida el 14 de Enero de 2002. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

38. CONFESIÓN FICTA. PUEDE SER APTA PARA JUSTIFICAR LA EXCEPCIÓN DE PAGO SUPERVENIENTE, NO OBSTANTE QUE EL DEMANDADO NO TENGA EN SU PODER EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. De conformidad con el artículo 1289 del Código de Comercio, la confesión ficta o tácita tiene valor probatorio cuando no se encuentre desvirtuada con algún otro medio de convicción. En consecuencia, si la parte demandada opuso con posterioridad a la formulación de su contestación la excepción de pago (con carácter de superveniente) y, para acreditarla ofreció la confesional a cargo del actor, sin que éste haya acudido a su desahogo, resulta inconcuso que el valor de dicha confesión tácita no se merma por el hecho de que al plantear esa excepción, no se hubiera acompañado documento que justifique el pago alegado o en su caso, el título de crédito debatido, puesto que al constituir éste el título base de la acción ejercida, esa cosa valor obra en poder de la autoridad jurisdiccional desde la presentación de la demanda, lo que descalifica en la especie la premisa contemplada en la segunda oración del numeral 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 232/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 3451/1995, promovido por H. H. D. como endosatario en procuración de J. G. G. en contra de O. A. F. Sentencia emitida en fecha 22 de enero de 2004. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

39. CONFESIÓN JUDICIAL. AL FORMULAR POSICIONES, TIENE ESE CARÁCTER Y GOZA DE EFICACIA PROBATORIA PLENA, SIEMPRE Y CUANDO SE ADMINICULE A DIVERSOS ELEMENTOS DE PRUEBA DENTRO DEL JUICIO. Para la resolución de un juicio interdictal en que la parte promovente asegura en su escrito inicial, que el demandado entró a poseer el inmueble objeto del juicio a través de la introducción al mismo de diversos materiales y grúas, desde el año de 1999-mil novecientos noventa y nueve; y al momento de formular las posiciones a su contraparte se contradice a ese respecto, pues afirma en ellas que tales hechos acontecieron en 1995-mil novecientos noventa y cinco, es de establecerse que con independencia del resultado arrojado por el desahogo de la prueba confesional por posiciones ofrecida a cargo del demandado, pues en términos de lo previsto en los artículos 270 y 366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la confesión judicial sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, no en lo que le aprovecha; tales posiciones constituyen una afirmación hecha por el articulante dentro del procedimiento que constituye una confesión judicial en términos de lo previsto en los artículos 260 y 261 del citado ordenamiento procesal, afirmación vertida por la parte actora que es clara y precisa en relación a los

hechos que originan la presente controversia, y que además se robustece con diversos elementos de prueba analizados y valorados por este Tribunal, entre los que destaca, la documental pública que se hizo consistir en la copia certificada de la denuncia presentada el día 3-tres de Noviembre de 1995-mil novecientos noventa y cinco, por la propia promovente del presente juicio, y que sirvió para iniciar la Averiguación Previa correspondiente, así como las diversas promociones contenidas dentro del citado documento público, que merecen el carácter de confesión extrajudicial en términos de los previsto por el artículo 262 del Código de Procedimiento Civiles en vigor, y que constituye otro indicio, que sin lugar a dudas denota a esta Autoridad Ad-quem respecto al conocimiento que tenía la promovente en relación a que el demandado ostentaba la posesión del inmueble en litigio desde el año de 1995-mil novecientos noventa y cinco, lo que trajo como consecuencia, la improcedencia de la acción de interdicto para recuperar la posesión, al no acreditarse plenamente los elementos que la integran. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 178/2004, relativo al Juicio de Interdicto, promovido por D. M. M. V. D. S. por sus propios derechos en contra de R. D. I. G. Sentencia emitida el 31 de Mayo de 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

40. CONSENTIMIENTO TACITO. Cuando el quejoso alega en los agravios esgrimidos en contra de la sentencia definitiva que se reponga el procedimiento para que se desahogue una probanza desechada, ya que con ello se violan las formalidades esenciales del procedimiento, al romperse la igualdad de las partes en cuanto al derecho que tienen de defenderse, debe establecerse que de conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, el proveído de que se trata es apelable, ya que en la especie es recurrible la sentencia definitiva y si esto es así, con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, lo que acontece en la especie, ya que no se interpuso el citado medio de impugnación, en contra del desechamiento de la probanza de referencia, por lo que se consintió tácitamente precluyendo el derecho para atacarse de conformidad con lo establecido en el numeral 1078 del Código de Comercio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 95/2002, Expediente Judicial número 744/2000 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido inicialmente por J. G.S. y continuado por J.L.V.A. en contra de C.A.C. Amparo Directo número 687/2002/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

41. CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. NO LE SON APLICABLES LAS TESIS Y JURISPRUDENCIA RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, TRATÁNDOSE DE "ABONOS" EFECTUADOS, Y QUE NO APAREZCAN EN EL ESTADO DE CUENTA, CUANDO ESTOS NO FORMAN PARTE DE LA RECLAMACIÓN. Si en un juicio ejecutivo mercantil se reclaman determinadas cantidades de dinero por

concepto de capital e intereses, y los demandados al contestar acompañan recibos donde constan algunos abonos que hicieron al crédito, pero esos abonos no aparecen como tales en el estado de cuenta del contador porque las cantidades reclamadas por el banco son posteriores a esos recibos, no debe declararse improcedente el juicio, tomando como referencia las Jurisprudencias y Tesis relacionadas con juicios mercantiles cuyo título base consistía en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, en los que por definición, se pone a disposición del acreditado una suma de dinero determinada, de la cual puede disponer en parcialidades con el derecho de hacer reembolsos que hacen recuperar al crédito su cuantía primitiva, mientras el contrato no concluya, para, posteriormente disponer del saldo a su favor. En tanto que en el contrato de apertura de crédito simple, la suma de dinero puesta a disposición del acreditado se extingue en un solo acto; es decir, al disponer del crédito, éste queda consumado y no puede hacerse disposiciones futuras, y por esa razón, no deben aplicarse al contrato de apertura de crédito simple los criterios Jurisprudenciales que versan sobre el crédito en cuenta corriente (también conocido como revolvente), porque son contratos de distinta naturaleza jurídica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 252/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 887/98, promovido por J. L. R. L. en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de B. N. M., S.A. en contra de A. R. M. H. Sentencia emitida el 27 de Agosto de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

42. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CONVENIO MODIFICATORIO, INTERPRETACIÓN CONJUNTA DE LOS. INACREDITAMIENTO DE SUSTITUCIÓN EN EL OBLIGADO SOLIDARIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1751 del Código Civil de la entidad, las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, mientras que, por su parte, el diverso artículo 1748 del mismo ordenamiento establece que si los términos de un contrato son claros y no deja duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerán éstas sobre aquéllas. Ahora bien, si en un caso se demandó la rescisión de un contrato de arrendamiento en base a un documento en que consta el inicial acuerdo de voluntades celebrado entre dos personas morales como parte arrendadora y arrendataria, y además se asentó, tanto en el apartado inicial del instrumento, que el obligado solidario de la arrendataria lo sería una diversa persona moral representada en el acto por una persona física, como igualmente se asentó así en el apartado de declaraciones del contrato (donde se aludió a la representación aludida), así como en la parte final del documento, donde se estableció bajo el rubro “Obligado Solidario” la denominación de la persona moral indicada, señalándose inmediatamente abajo el nombre de la citada persona física, donde se hizo además alusión a una “franquicia”, apareciendo la rúbrica respectiva; debe decirse que, aunque al lado de lo anterior, también se advierta que en una de las cláusulas del documento aparezca únicamente el nombre de la persona física como “obligado solidario”,

e interpretando en su totalidad el contenido del citado instrumento, se concluye en que la persona moral señalada en último término fue la que se quiso tener y constituir como obligada solidaria de la parte arrendataria, y no la persona física mencionada en una de las cláusulas del documento, respecto de la cual se argumentó en juicio que era solamente un "franquiciatario" de dicha persona moral, puesto que la contrariedad existente entre lo asentado en dicha cláusula y el resto del contrato no impide que se advierta la intención de los contratantes revelada en el caso, con lo expresado tanto en la parte inicial del contrato, como en su apartado de "declaraciones" y la forma en que se estampó la firma; sin que obste a lo anterior que en el instrumento en que consta el convenio modificatorio del contrato de arrendamiento inicialmente celebrado, se haya hecho aparecer, en su parte final, que la persona física ya indicada firmaba como "obligado solidario", toda vez que ello no implica que se hubiere realizado una sustitución del ente moral que se había constituido como obligado solidario sino que, al no poder desligarse la interpretación del convenio modificatorio (según su naturaleza) del propio contrato de origen que se ha mencionado, puesto que no se actualizó una novación, la interpretación de los mismos debe realizarse en forma conjunta e integral, por lo que debe concluirse en que si lo que se quería al momento de la modificación del contrato no solamente era establecer diverso monto en las pensiones rentarias, sino también el de sustituir a la persona que se constituyó originalmente como obligada solidaria, así se hubiera asentado en forma clara y determinante, lo que no sucedido en el caso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 344/98, relativo al juicio especial de arrendamiento número 2928/96, promovido por C.J.C.A., en representación de T. DE D.M., S.A. DE C.V., en contra de V.G.R., S.A. DE C.V. y V.C., S.A. DE C.V.- Sentencia emitida el 25 de agosto de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

43. CONTRATO DE COMPRAVENTA, NULIDAD ABSOLUTA DEL. CUANDO EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL MISMO SE ENCONTRABA DENTRO DEL RÉGIMEN EJIDAL AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. Si en principio las partes convinieron celebrar un contrato privado de compraventa, estableciendo como objeto de la operación un lote de terreno rústico, el cual, en la fecha de su avenencia, conformaba una tierra ejidal, pues además fue puesto del conocimiento del comprador mediante el correspondiente certificado de derechos agrarios expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria, es evidente que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2119 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, tal estipulación es completamente nula, pues tomando en consideración que la nulidad consiste en la existencia imperfecta de los actos jurídicos por padecer de algún vicio en su formación, en el presente caso, uno de los elementos de validez de todo acto jurídico, el cual estriba en la ilicitud en el objeto, indudablemente se encuentra viciado, al ir en contra de la ley, supuesto que al efecto establece el artículo 1727 de la codificación sustantiva civil aplicable, pues a la fecha del acuerdo de voluntades celebrado, la parte vendedora se encontraba impedida en enajenar una parcela de la cual solamente detentaba una titularidad de derechos ejidales, mas no de sujeción o dominio; En efecto, si bien se advierte que a raíz de las reformas al artículo 27

Constitucional en su fracción VII, en relación con los artículos 79 a 86 de la Ley Agraria en vigor, las parcelas ejidales dejaron de ser inembargables e inalienables, pues autorizan una transformación en el régimen de propiedad previo acuerdo de la asamblea ejidal, al permitir que se cambie de ejidal a dominio pleno de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29, 81, 82, y 83 párrafo primero de la referida legislación, en el asunto que se ocupa, es notorio que al momento de celebración del contrato base de la acción, aún no era acordada la decisión de que la unidad parcelaria de mérito dejara de pertenecer al régimen ejidal para incorporarse al derecho común, por lo que evidentemente, la parte vendedora tan solo poseía el derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de su parcela; en tales condiciones, es de estimarse que aún y cuando del contenido del contrato se desprende la manifestación relativa a que a la fecha de su celebración se encontraba en trámite el título de propiedad correspondiente y que a casi dos años de su celebración, el predio dejó de ser ejidal en virtud de que la parte vendedora adquirió el dominio pleno del mismo, al serle extendido el titulo que la ampara como propietaria de la parcela, tal circunstancia resulta intrascendente al caso, pues al ser la nulidad acaecida al acto jurídico en cuestión, conforme al artículo 2120 del citado ordenamiento, indudablemente absoluta, hace considerar que independientemente de que en la actualidad la vendedora accionante detente mediante título de dominio la propiedad del aludido inmueble, en ninguna forma convalida el hecho de que a la fecha de la enajenación, tal inmueble se encontraba dentro del régimen ejidal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 1190/2000, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por O.P.H., por sus propios derechos, en contra de R.L.G. Sentencia emitida el 20 de Junio de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

44. CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO. LA FALTA DE ALGUNOS PAGOS PARCIALES POR PARTE DEL DUEÑO DE LA OBRA, NO ORIGINA LA PARALIZACIÓN DE LA, SI NO SE PACTÓ EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO. Si en un contrato de obra a precio alzado, el contratista se obligó a llevar a cabo una obra, dirigiendo la misma de acuerdo al proyecto, presupuesto, especificaciones y programa de obra y calendario de pagos, obligándose el propietario a pagar al contratista un precio unitario alzado, consistente en un anticipo y pagos quincenales contra estimación de avance de obra, pero las partes no pactaron en el contrato que la falta de pagos quincenales impedirían el avance de la obra, resulta obvio que el contratista debió haber entregado la obra dentro del plazo fijado en el contrato, aún ante la falta de los pagos quincenales, pues dada la naturaleza jurídica de este tipo de contratos, el empresario que dirige la obra pone los materiales para la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2616 del Código Civil Federal; por lo tanto, no puede escudar el contratista la inconclusión de la obra, en la falta de los pagos quincenales, pues, amén de que eso no se pactó en el contrato, éste acuerdo de voluntades contiene obligaciones simultáneas, merced al cual, solamente la persona que ha cumplido su parte puede exigir de la otra lo que no haya cumplido, atento a lo que dispone el artículo 1949 de la legislación antes citada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en

definitiva número 88/1999, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, expediente número 2294/95, promovido por R. A. V, V, en contra de I. V. S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 28 de Junio de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

45. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNICAMENTE OBRE POR ESCRITO LA OFERTA RESPECTIVA DEL CLIENTE, IMPLICA SU EXISTENCIA CUANDO EL PROFESOR REALIZÓ EL TRABAJO ENCOMENDADO. El hecho de que el demandante hubiese exhibido un documento privado en cuyo tenor el demandado se comprometió a pagarle una suma por concepto de honorarios en caso de obtener éxito en determinado negocio, el cual solo se encuentra suscrito por este último, acredita la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales si el actor demuestra además que ejecutó la labor encargada, pues dicha manifestación unilateral por parte del cliente constituye una policitación u oferta de contrato en términos del artículo 1702 del Código Civil del Estado, formándose éste desde el momento en que el destinatario (profesor) acepta la misma, expresa o tácitamente, puesto que el consentimiento puede externarse de cualquiera de dichas maneras conforme lo estatuye el diverso numeral 1700 de la invocada codificación; comprendiéndose dentro de la segunda forma, la ejecución material en que se traduce el patrocinio dentro de los juicios respectivos. Máxime que, siendo dicho acuerdo volitivo meramente consensual, no requiere de formalidad alguna para su validez. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA.- Toca de apelación en definitiva número 195/04, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por R.E.T.O. en contra de A.G.V. Sentencia emitida el 11-once de junio de 2004. Magistrado: José Patricio González Martínez.

46. COSTAS. CONFIRMÁNDOSE EN LA ALZADA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, ES INAPLICABLE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SI EL ACTOR NO FUE QUIEN RECURRIÓ EN APELACIÓN. El artículo 1084 del Código de Comercio dispone que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe, estableciéndose en la fracción IV de dicho precepto, que siempre será condenado al pago de costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, comprendiendo en ese caso tal condenación, las costas de ambas instancias. Ahora bien, si en un juicio ejecutivo mercantil el promovente no obtuvo resolución favorable ante el juez primario, omitiendo el actor recurrir en apelación tal improcedencia, más no así la parte reo quien, no obstante no habérsele condenado al pago, interpuso apelación contra dicho fallo, según estimó, a efecto de fortalecer la motivación y fundamentación de la resolución; resulta ajustado a derecho que la Sala del conocimiento, confirmando la sentencia de primer grado ante la improcedencia de los agravios, no condene al actor al pago de los gastos y costas generados con la tramitación de la segunda instancia al no

surtirse el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 1084 ya citado, dado que la recta interpretación de tal fracción sólo conduce a estimar que la condena de costas ahí prevista se actualizará cuando la parte que no obtuvo fue la que recurrió en apelación y que, no obstante ello, no adquirió en la alzada sentencia favorable a sus intereses, es decir, se surtiría el supuesto legal previsto en la norma citada, en la fracción mencionada, cuando de haberse recurrido por la actora el fallo definitivo, ante la improcedencia del juicio que promovió, la confirmación que de dicho fallo se emita por la Sala haga considerar que frente a la propia actora se han obtenido dos sentencias conformes de toda conformidad. Por consiguiente, no surtiéndose de esa manera el supuesto legal referido, solo quedará a la autoridad de segunda instancia, a efecto de establecer si es factible imponer condena en costas en la alzada, atender a la temeridad o mala fe que hubieren demostrado las partes en la tramitación de segundo grado, según a ello remite el primer párrafo del artículo 1084 del Código de Comercio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 485/99, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 493/96, promovido por L. C. E. G. como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de B.S., S.A., en contra de J.A.A.G. y M.A.R.L. DE A. Sentencia emitida el 11 de Enero de 2000. Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

47. COSTAS JUDICIALES EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EXISTIENDO PLURALIDAD DE DEMANDADOS Y NO PROCEDIENDO EL JUICIO CONTRA UNO DE ELLOS, DEBERÁ INDIVIDUALIZAIRSE LA CONDENA EN. Del contenido armonizado de los artículos 1082 y 1084 del Código de Comercio se deduce que en materia de costas judiciales, son dos los sistemas que deben seguirse para la imposición de su condena: a) El de la sucumbencia o vencimiento, y b) El del libre discernimiento de la malicia o temeridad. Conforme al primero de dichos sistemas, siempre será condenado al pago de costas el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable, y de acuerdo con el segundo, tal condena se decretará cuando sólo se obtenga parte de lo reclamado y han prosperado en parte las defensas y excepciones opuestas, debiendo imponerse a cargo del litigante que, según criterio del juzgador, haya obrado con malicia o temeridad al sostener sus pretensiones. Ahora, si en un caso existe pluralidad de demandados y el accionante obtuvo sentencia favorable contra la mayoría de ellos, quienes fueron condenados a pagar la suerte principal y demás prestaciones, mientras que uno de los demandados fue absuelto de todas las prestaciones que se le exigieron al haber acreditado los hechos constitutivos de sus excepciones, que en la especie lo fue la no suscripción del documento base de la acción; en tal caso, la condena que en costas se haga debe individualizarse para cada codemandado, teniéndose entonces que el actor, al no obtener sentencia favorable en relación al codemandado absuelto, debe equiparársele al que ha resultado condenado y, por ende, estará el accionante obligado a reintegrar las costas a dicho reo, aun cuando exista sentencia condenatoria respecto a los restantes demandados, pues no hay que olvidar que la única finalidad de las costas en el juicio es la de resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones que haya hecho por razón del proceso, motivo

por el cual éstas deberán quedar a cargo de la parte actora por haber presentado una demanda improcedente que ocasionó gastos injustificados a cargo del codemandado mencionado, por el desarrollo del juicio hasta culminar la primera instancia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 255/97. relativo al juicio ejecutivo mercantil número 3997/95, promovido por M.G.R. DE R., en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de U. DE C. DEL N., S.A. DE C.V., en contra de C.R.T. y Otros.- Sentencia emitida el 17 de septiembre de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

48. DACIÓN EN PAGO, AUN Y CUANDO SE ENCUENTRE INSCRITA, ES NULA CUANDO EL INMUEBLE QUE SE DA, YA FUE VENDIDO POR EL DEUDOR CON ANTERIORIDAD A AQUEL ACTO JURÍDICO, AUNQUE DICHA VENTA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, SIEMPRE Y CUANDO EL ACREEDOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ESA VENTA POR CAUSAS EXTRAREGISTRALES (EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2895 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si la institución de Crédito demandada tuvo pleno conocimiento de que el actor del juicio había adquirido el inmueble objeto de la dación, actuó de mala fe el banco al admitir como pago un inmueble que ya no le pertenecía a los acreditados con motivo de diversos actos traslativos de dominio que se hicieron respecto al inmueble sujeto a garantía hipotecaria; y si bien es cierto que esos contratos de compraventa no se inscribieron en el registro público y la dación en pago sí quedó debidamente inscrita, no hay que perder de vista que de acuerdo con el artículo 2898 del Código Civil de la entidad, dicha inscripción registral no convalida el acto nulo que en él se contiene, razón por la que esa dación en pago no le es oponible al actor que adquirió de buena fe el inmueble que se dio en pago por el propietario original, sin que en el caso cobre aplicación la excepción contenida en el primer párrafo del diverso numeral 2899 de la citada ley sustantiva, pues la institución de crédito se condujo con mala fe al recibir en pago un bien por parte de quien ya no era su legítimo propietario, aún a sabiendas de que un tercero (adquirente) había gestionado ante la propia institución bancaria la restauración y pago del crédito garantizado con el bien raíz objeto de la dación, sin que pueda alegar el banco en su favor la falta de registro del contrato de compraventa exhibido por el actor, pues por causas extraregistrales tenía pleno conocimiento de que el inmueble que recibiría en pago ya había salido del patrimonio del deudor, y en este caso, es convalidable esa falta de registro, pues la finalidad de la oficina registral es de que el público tenga conocimiento de los actos traslativos de dominio que efectúan los particulares; pero esa finalidad queda colmada si como en la especie, el banco demandado se había percatado de que existía un nuevo adquirente del inmueble que aceptó en dación. Consecuentemente, y si de acuerdo con lo establecido por los artículos 8° y 1981 de la legislación sustantiva, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, y de que no es válido el pago hecho con cosa ajena, es obvio que no puede surtir efectos dicha dación en perjuicio del promovente. TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 669/2001, relativo al Juicio Ordinario Civil, expediente número 962/99, promovido por A. R. Z. en contra de L. G. F. C., R. M. E. M. D. F., B. S. A., y A. H. H. Sentencia emitida el 9 de Abril de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

49. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA DE DECLARACIÓN DE QUIEBRA. NO PROCEDE LA ACCION DE, CUANDO SE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA QUIEBRA Y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. El artículo 25 de la abrogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que estuvo vigente hasta el doce de mayo de dos mil, establecía lo siguiente: "Si se obtuviere la revocación de la sentencia de declaración de quiebra, se podrá ejercitar contra los que la solicitaron o contra el juez que la declaró de oficio, una acción para el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, si hubieren procedido con malicia, injusticia notoria o negligencia grave". Ahora bien, una interpretación lógico-jurídica de dicho precepto, permite advertir que la revocación de una sentencia de declaración de quiebra debe ser absoluta y definitiva; es decir, que haya resuelto el fondo de la controversia de una manera concluyente, decretando la revocación de ese status concursal por ausencia de alguno de los elementos de procedencia; pero cuando se deja insubsistente dicha sentencia y se ordena reponer el procedimiento por cuestiones meramente procesales, en esa conjetura, no se actualiza la hipótesis del artículo 25 de la legislación concursal en cita, y en estas circunstancias, no procede la acción de daños y perjuicios que refiere la norma jurídica en comento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 572/2001, relativo al Juicio Ordinario Civil número 1251/98, promovido por J.R.C.E. en contra de E.I.S.A., D.C.S., V.M.V., M.D.L.A.C.G., M.A.D.V., I.M.V., A.H.M.M., A.M.L.V., A.J.G.L., M.M.L.B., C.T.G.G., B.E.L.B., A.L.V.G., E.G.D.G., A.M.V.D.A., J.G.M.G., E.N.V., Y L.G.V.D.G. Sentencia emitida el 28 de Febrero de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

50. DEMANDA. DEBE INTERPRETARSE EN SU TOTALIDAD, RELACIONÁNDOLA CON EL CONTENIDO ÍNTEGRO DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA MISMA, ASÍ COMO CON LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION. Cuando una persona moral, en un juicio ejecutivo mercantil promovido en base a títulos de crédito, comparece por conducto de su endosatario en procuración a demandar al obligado cambiario el importe de los documentos, y por un error de redacción se asienta en la demanda que quien comparece lo hace en su carácter de endosatario en procuración de (en vez de mencionar a la persona moral refiere a la persona física que firmó el endoso), es jurídicamente inaceptable que por esa sola circunstancia la Juez de primera instancia decrete la improcedencia del juicio, determinando falta de legitimación en la causa, por parte de quien supuestamente endosó el documento. Lo anterior porque

aún y cuando es evidente el error ya citado, refiere el actor formal en su demanda, que justifica su comparecencia a juicio con el endoso que aparece al reverso de los documentos base, mismos que al tenerlos a la vista se advierte que la persona física que los endosó, lo hizo en su carácter de administrador único de la empresa beneficiaria, y no en lo personal; lo cual se corrobora porque en el punto número dos de los hechos de la demanda se asentó: "Ahora bien C. Juez los títulos que dan origen a la presente acción se firmaron en garantía por concepto de una operación comercial entre mi representada (citan el nombre de la persona moral) y la ahora demandada...." Lo que revela aún mas que quien ejercita la acción es la sociedad mercantil beneficiaria de los títulos; sin que del sumario se advierta que ese error le hubiere causado confusión alguna a la demandada al momento de contestar y que la hubiera colocado en estado de indefensión, pues una de las excepciones que vertió se hizo consistir en que el adeudo provenía de la compra de una maquinaria, cuya documentación existe y se encuentra en poder de la persona moral accionante. Por tanto, resulta indebido que la Juez de anterior grado hubiese declinado entrar al estudio del fondo de la acción, pues un error de redacción no debe servir de pauta a la autoridad judicial para dejar de resolver el fondo de una controversia, cuando de la propia demanda y documentos fundatorios de la acción se infieren datos suficientes que enmienden el error, tal y como sucede en la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SÉPTIMA SALA Toca de apelación en definitiva número 115/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 469/2002, promovido por M.A.R.D., en su carácter de endosatario en procuración de la empresa F.V. S.A. de C.V. en contra de C.I.D.H. Sentencia emitida el 15 de Mayo de 2003. Magistrado: José Patricio González Martínez.

51. DEMANDA. SEÑALAR LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS PARCIALES CONVENIDOS ES UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA. Tratándose de la acción ejercitada con base en el vencimiento anticipado de un contrato de crédito, es preciso que el actor especifique en la demanda la fecha a partir de la cual se incurrió en mora por el demandado por incumplimiento de los pagos parciales convenidos, porque ésta es un requisito de procedencia de la acción. En la especie y caso concreto, dicho requisito se tiene por cumplido, si el actor cita con claridad en su demanda que el demandado incumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de crédito base de la acción, consistentes en efectuar pagos mensuales, y para acreditar dicho incumplimiento, se remite a la certificación contable, de la cual se desprende con toda claridad la fecha a partir de la cual el demandado incurrió en el incumplimiento de sus pagos; puesto que la certificación contable, junto con el contrato de crédito son los documentos base de la acción que se ejerce, y repetimos si el actor en su demanda, nos remite a dichos documentos base de su acción, es obvio que el contenido de los mismos forman parte integrante de la demanda, por lo cual no atenderlos sería violentar en perjuicio de la actora lo dispuesto por los artículos 405, 612 y 614 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación

número 458/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 281/2000, promovido por A.C.G. vs. F.P.A. y Otra. Sentencia emitida el 31 Octubre de 2002. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

52. DEMANDA INTENTADA EN LA VIA EJECUTIVA MERCANTIL EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ADMISIÓN DE LA. Al admitir a trámite una demanda propuesta en la vía ejecutiva mercantil el juzgador está obligado a realizar un análisis previo de los documentos en que se apoya la misma, a fin de determinar si los mismos corresponden a los que traen aparejada ejecución de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1341 del Código de Comercio; empero al abordar dicho estudio debe avocarse únicamente a corroborar que el título en que se funda la acción cumpla con los requisitos genéricos que establece el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito relativos a la existencia de un contrato de crédito y un certificado contable que contenga un desglose de los movimientos que originen el saldo, así como los datos necesarios para establecer la vinculación entre dichos documentos, sin abarcar cuestiones que atañen al fondo de la acción intentada puesto que éstas serán objeto de análisis al dictarse la sentencia definitiva, de lo contrario estaría prejuzgando antes de suscitarse la controversia, negando la impartición de justicia al accionante a quien se le desestimarían de plano las pretensiones sin antes ser oído y vencido en juicio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA.- Toca en Artículo 132/1998.- Expediente Judicial número 1767/1997 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por J.J.C.T. en contra de J.J.C.V. y OTROS.- Sentencia emitida el 31 de Enero del 2005.- Amparo Indirecto número 280/2005/IV. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

53. DEMANDA RECONVENCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI LA VÍA INTENTADA ES DISTINTA A LA DEL JUICIO ORIGINAL. Es improcedente la demanda reconvencional que se plantea en la vía ejecutiva civil, si la demanda origen del juicio se encuentra ventilándose en la vía ordinaria civil, ya que no es posible incorporar una demanda reconvencional promovida en una vía distinta a la del juicio original, pues de hacerlo se trastocaría la regla aplicable prevista en el artículo 570, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, mismo que al efecto dispone: “No procede la acumulación: ...III.- Cuando estuvieren sujetos a diverso procedimiento, si no se trata de juicios universales. Lo anterior considerando que la demanda reconvencional tiene el mismo efecto que el de la acumulación de autos, cuya finalidad consiste en que en una misma sentencia se diriman las controversias suscitadas entre las partes.” TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo 395/2004. Juicio Ordinario Civil número 515/2004. E.A.M.T. Vs. J.M.M.S. Sentencia: 29 de Octubre del 2004. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

54. DERECHO DEL TANTO ACTUALIZACIÓN DEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 970 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO, EN CASO DE VENTA JUDICIAL. De tomarse en cuenta que ni en la Legislación Mercantil ni en la Ley adjetiva existe norma legal que en forma imperativa establezca la notificación personal a los copropietarios del bien a rematar, como requisito previo al anuncio del remate, debe concluirse que el derecho del tanto protegido por el numeral 970 del Código Civil vigente en el Estado, y que indudablemente existe a favor de los copropietarios en tratándose de ventas judiciales, sólo se actualiza a favor de los copropietarios, lógica y jurídicamente cuando existe convenida de forma fehaciente una operación de venta entre copartícipe y un tercero extraño a la relación de copropiedad, en la inteligencia de que respecto al copartícipe se substituye la autoridad natural, atento al carácter forzoso judicial del remate. Luego entonces, resulta inconcuso que el acto judicial referente al anuncio o divulgación de que un inmueble se va a rematar, no impide el ejercicio del derecho del tanto que le corresponde a los copropietarios, ya que en ese momento de la ejecución, aún no se incorpora a la relación procesal un tercero extraño a los copropietarios, y por tanto no puede considerarse que existe venta convenida. Por tal motivo, el deber de notificar a los copropietarios el acto del remate, a fin de que si así lo estiman conveniente ejerciten el derecho del tanto, surte vigencia una vez que exista una venta convenida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en artículo 298/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por R.S.A. en contra de J.M.R. y Otra. Sentencia emitida el 7 de Junio de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

55. DESPACHO. PARA PRACTICAR EMPLAZAMIENTOS EN MUNICIPIOS DONDE UN JUEZ NO TENGA SU RESIDENCIA PERO SÍ SU JURISDICCIÓN CONFORME A LA LEY ÓRGANICA DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO, NO ES REQUISITO INELUDIBLE GIRAR. Las formalidades que la ley señala para la práctica del emplazamiento tienen como finalidad el hacer saber a la parte demandada la existencia de un juicio instaurado en su contra y colocarlo, por virtud de ello, en posibilidad de defenderse legalmente, formalidades que en los términos del numeral 69 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, radican en que el actuario se cerciore de que el interesado habita en el lugar respectivo, de que se le deje cita de espera en caso de no localizarlo, así como de que se asiente en autos razón pormenorizada de la diligencia. Ahora bien, a diferencia de tales formalidades que tienen por objeto asegurar el derecho de audiencia a la parte demandada, la remisión de un despacho tratándose de diligencias que deban practicarse dentro de la jurisdicción territorial del juez, que en el caso lo constituyó la diligencia de emplazamiento, pero en población o municipio distinto del de su residencia, sólo constituye un medio para salvaguardar la dificultad que con motivo de la distancia podría representar para el juzgado respectivo realizar por si mismo la actuación. Es decir, el libramiento del despacho se funda en razones de simple conveniencia que no involucran cuestión alguna de competencia, pues lo que se persigue es únicamente facilitar materialmente las órdenes del tribunal, y por lo mismo, no es ni puede ser forzoso que un

juez solicite a otro la ejecución de un emplazamiento, pudiendo optar por practicarla directamente sin que por ello se afecte su validez, ya que el despacho no tiene que ver en forma directa con el propósito de esa diligencia, pues el hecho de que no se remita no provoca indefensión alguna a los demandados, si el juez actúa dentro de la circunscripción territorial que le asigna la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado. De lo anterior se concluye que no es requisito ineludible girar despacho para la práctica de un emplazamiento a otra autoridad inferior dentro de la jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia, pues si bien en términos del artículo 1071 del Código de Comercio, anterior a su última reforma, cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se le hará la notificación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquella residiera, ello podría traducirse en la remisión del despacho por el sólo hecho de encontrarse el domicilio del demandado Litera del lugar del juicio; se determina que la correcta interpretación de este precepto, en correlación con la norma procesal invocada en un inicio, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la conveniencia en que se apoya el libramiento de un despacho, lleva a estimar que no es obligatoria esa expedición, sino que es optativa para el juez, al no estar de por medio su competencia territorial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva 461/96, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 153/95, promovido por J.T.M. contra E.B.A. Sentencia emitida el 28 de Enero de 2000.- Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Toca de apelación en definitiva número 115/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 469/2002, promovido por M.A.R.D., en su carácter de endosatario en procuración de la empresa F.V. S.A. de C.V. en contra de C.I.D.H. Sentencia emitida el 15 de Mayo de 2003. Magistrado: José Patricio González Martínez.

56. EDIFICACIONES, PAGO DE. DETERMINACIÓN DE BUENA FE EN SU REALIZACIÓN, APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 897 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO. Si en un caso se demandó y resultó procedente la acción sobre declaración judicial de que operó la reversión a favor de la persona moral actora, de una porción de un inmueble que había otorgado a un diverso ente jurídico para el efecto de que se construya una edificación para un fin específico, según justificación que en el juicio se realizó sobre el supuesto convenido para que se actualizara la reversión, consistente en que de variarse la finalidad convenida operaría ésta en forma automática; resulta indudable que, al haberse tenido conocimiento por parte de la persona moral actora que otorgó el inmueble para los fines indicados, de que se establecería sobre el mismo un almacén, es decir, de que se realizarían edificaciones sobre tal inmueble, entonces, la demandada edificadora efectuó las construcciones de buena fe; por tanto, al ser consecuencia de la acción principal la entrega material de dicho inmueble, debe entenderse que la entrega de lo edificado, deberá realizarse previo pago de la indemnización correspondiente, al existir una imposibilidad material de restituir a la demandada lo edificado, por ser inseparable del suelo, según aplicación que al caso se surte del artículo 897 del Código Civil de Nuevo León que establece, entre otras cosas, que el dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de buena fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la

indemnización prescrita en el artículo 894. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 1166/96, relativo al juicio ordinario civil número 294/94, promovido por O.J.A.G., como Síndico Segundo del R. Ayuntamiento de Monterrey, Administración 1992-1994, en contra de la persona moral I. DEL P.C., S.A. E C.V.- Sentencia emitida el 9 de septiembre de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

57. EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, COMPETE AL JUEZ DE LO FAMILIAR CONOCER DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN Y CUANDO LA INCIDENCIA PLANTEADA VERSE SOBRE LA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES. Al efecto, si bien es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 34 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, compete a los jueces de lo civil y no de lo familiar, conocer de las controversias relacionadas con derechos reales sobre inmuebles y más aún que de acuerdo con lo prescrito por nuestra legislación procesal civil, la competencia por materia no es susceptible de ser prorrogada, no menos cierto lo es también que en el presente caso nos encontramos ante la promoción de la ejecución forzosa de un convenio de cesión de derechos celebrado dentro del procedimiento relativo a un divorcio por mutuo consentimiento, motivo por el cual no puede desconocerse que el convenio mencionado deriva de una cuestión de índole familiar y que de su ejecución, en los términos del artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, compete conocer al juez que sancionó su aprobación es decir, al Juez de lo Familiar, máxime aún que en el mismo se contiene el pacto relativo a la forma de sufragar el pago de alimentos de los hijos nacidos del matrimonio de los promoventes, lo cual constituye una cuestión de naturaleza familiar y de cuyas controversias relacionadas deben conocer los Jueces de lo Familiar, acorde a lo establecido por la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nuevo León, que al efecto reza: “Los jueces de lo Familiar conocerán: . . . II.- De los juicios relativos al matrimonio, su régimen económico, su ilicitud o nulidad, su disolución necesaria o por mutuo consentimiento; la modificación, rectificación y cancelación de actas del Registro Civil; los que afecten al parentesco, a los alimentos...” TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en artículo número 002/99, relativo al divorcio por mutuo consentimiento número 212/82, promovido por J.G.S.S. y G.D.B.M. Sentencia emitida el día 7 de Octubre de 1999. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

58. EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE. Tomando como punto de partida que, a diferencia de los procesos declarativos, en los procesos ejecutivos –que en nuestro derecho se traducen en la etapa de ejecución de sentencia- ya que no se procura el conocimiento y la resolución sobre una discusión pretendida, sino la realización coactiva, de una pretensión insatisfecha, se tiene que si el demandado no da cumplimiento voluntario a la obligación que ha surgido en virtud de la

sentencia de condena, el acreedor puede requerir nuevamente la intervención del Estado para que procure la plena satisfacción de su derecho, pero ello solo puede hacerlo a partir del vencimiento del término judicial decretado en la sentencia condenatoria para el cumplimiento voluntario de la obligación si es que existe y desde luego, una vez llegados los autos ante el juez de primera instancia que dictó la sentencia (provenientes del tribunal de apelación), porque de no existir término para el cumplimiento voluntario de la condena, el plazo de la prescripción se computaría a partir del momento en que surta efectos la notificación de la llegada de los autos ante el juez primigenio, o bien, de la sentencia dictada, respecto de la parte que tiene acción para exigir la ejecución de la misma. En esa virtud, si quien debe dar cumplimiento a la sentencia no se encuentra notificado de la misma, o bien de la llegada de los autos ante el juez de primera instancia (provenientes de la alzada), no es posible establecer una fecha de inicio para el cómputo del término de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia condenatoria, pues no es dable soslayar al perdidoso la oportunidad de cumplir voluntariamente aquello a que fue condenado, en atención a que de la interpretación del artículo 1078 del citado Código Mercantil, que en esencia contiene la figura jurídica de la preclusión al prevenir: "Una vez concluidos los términos fijados a las partes, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente.", se infiere que para que se pierda la oportunidad dada para la realización de un acto, en este caso, para cumplir de manera voluntaria con la sentencia condenatoria y evitarse así los perjuicios que acarrea la ejecución forzosa, es preciso que quien resultó vencido haga caso omiso de la condena a su cargo, dentro del plazo establecido para que cumpliera con ello, pues doctrinalmente la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente de tres situaciones a saber: 1a.- Por no haberse observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; 2a.- Por haber incumplido una actividad incompatible con el ejercicio de la otra; y 3a.- Por haberse ejercitado ya, una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). De tal suerte que al ni siquiera empezar a correr el término de que tanto se ha hablado como oportunidad al condenado para evitarse perjuicios con la ejecución forzosa, no es factible que pueda presumirse la aparición de la preclusión, y en consecuencia la aparición de la siguiente fase del proceso de cumplimiento de sentencia, que precisamente resulta ser la ejecución forzosa a instancia del acreedor, porque esta solo es susceptible de promoverse una vez que no se ha obtenido el cumplimiento voluntario que tantas veces ha sido comentado. Además, en términos del artículo 1040 del Código de Comercio, en la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzaran a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio; de ahí que el término prescriptivo para la ejecución de la sentencia no puede empezar a correr, en atención a las consideraciones apuntadas con antelación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo número 1252/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 65/83, inicialmente promovido por R.G.P., en su carácter de Endosatario en Procuración de B.N D.M. S.A. y continuado por R. S. F., en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la misma persona moral, en contra de C. G. V. Magistrado: José Patricio González Martínez.

59. EMBARGO. EL APERCIBIMIENTO AL DEMANDADO PARA QUE SEÑALE BIENES Y DE QUE DE NEGARSE A HACERLO ESE DERECHO LO TENDRÁ EL ACTOR, ES INDISPENSABLE PARA QUE EL SEÑALAMIENTO EFECTUADO POR ÉSTE RESULTE VÁLIDO. El artículo 1394 del Código de Comercio, establece que la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, ese derecho pasará al actor; por lo cual, si se omite dicha prevención, no debe aplicarse la consecuencia, es decir, de no apercibir al demandado en los términos apuntados, el señalamiento de bienes realizado por el demandante resulta ilegal, ya que a su contraparte no se le informó previamente de la "sanción" que se le aplicaría en caso de negarse a señalar bienes que garantizaran los conceptos que le fueron demandados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en artículo número 712/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 522/2003, promovido por F. G. O. como endosatario en procuración de L. A. S. en contra de J. J. C. D. S. y J. A. M. D. Sentencia emitida el 25 de febrero de 2004. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

60. EMBARGO. EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ES ILEGAL EL. En términos del artículo 498 del Código de Procedimientos Civiles, es ilegal el embargo recaído sobre bienes que no forman parte del patrimonio del deudor. Si en un procedimiento de tercería excluyente de dominio como es el caso, se acredita que el bien inmueble embargado había sido objeto de donación a favor del tercerista en fecha anterior a la diligencia de embargo, se concluye que tal embargo es ilegal al contravenir el citado artículo. En efecto, el contenido del artículo 2234 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León establece que la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber su aceptación al donador y tenemos que tales requisitos se cumplieron en el contrato de donación acompañado por el tercerista como base de su acción, pues del mismo se desprende que el donatario hizo saber al donante la aceptación de la donación hecha a su favor el mismo día que fue firmada la escritura respectiva ante la fe del Notario, lo que da certeza a la fecha de celebración del acto, siendo a partir de entonces que el tercerista es el nuevo titular del derecho real de propiedad sobre el inmueble; esto independientemente de que el notario haya autorizado en definitiva la operación hasta en tanto se reunieron todos los documentos de tipo administrativo para expedir el testimonio y de que dicha autorización fue posterior al embargo, pues tal actuación corresponde a un requisito meramente formal que corre a cargo del Notario para sancionar la escritura, pero que de ninguna manera impide que el acto surta plenamente los efectos jurídicos que son propios a su naturaleza desde la fecha de su celebración, conforme a los artículos 1691 y 1693 del Código Civil para el Estado de Nuevo León; de ahí que si no (se demuestra) que ha sido declarada judicialmente la falsedad de la celebración del acto o la firma de la escritura, dicha prueba, desde su perfeccionamiento hace prueba plena en cuanto a su contenido. En base a las anteriores consideraciones, se concluye que la Tercería

Excluyente de Dominio intentada, teniendo el actor (tercerista) un derecho real en relación al bien embargado en el juicio principal, dicha tercería es procedente en los términos antes expuestos al resultar ilegal el embargo registrado derivado de una acción personal sobre un bien inmueble que ya había salido del patrimonio del deudor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 562/2001, Expediente número 1036/2000, Tercería Excluyente de Dominio, promovido por G.E.V.A. contra B.R.M.S.A. y Otros. Sentencia emitida el 14 Diciembre de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

61. EMBARGO. ES ILEGAL CUANDO SE TRABA EN BIENES INMUEBLES QUE HAN SALIDO DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE NO SE HAYA REGISTRADO OPORTUNAMENTE LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE FUNDE SU ACCIÓN EL TERCERISTA. El numeral 2895 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece que los documentos que conforme a esa ley deben registrarse y no se registren, solo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. Ahora bien, terceros para efectos registrales son aquellos titulares de derechos reales que están también inscritos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, quienes ostentan derechos de la misma calidad; de tal manera que no puede ser considerado tercero para los efectos del registro un acreedor quirografario que ha inscrito su embargo en el Registro Público de la Propiedad, porque éste solo tiene inscritos derechos personales sobre el bien de que se trata. En tal virtud si en la Tercería Excluyente de Dominio se demuestra fehacientemente que el bien gravado en el Juicio Ejecutivo Mercantil a la fecha del embargo ya no pertenecía al deudor, el embargo trabado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de dominio es ilegal, no obstante que este último no se encuentre debidamente registrado, de cuya omisión no puede prevalerse el acreedor quirografario. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 45/2000, Expediente Judicial número 2403/93 relativo a la Tercería Excluyente de Dominio, promovido por R. Q. L. en contra de T. Y. C., S.A. DE C.V. y Otros. Sentencia emitida el 20 de Marzo de 2002. Amparo Directo número 133/2002. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

62. ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL TÍTULO. SURTE EFECTOS DE CESIÓN ORDINARIA SIN QUE SEA NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE AL DEUDOR. El artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria; sin embargo, no es esencial que sea notificada al deudor la citada cesión, por no tratarse de una cesión regulada por la legislación civil, ya que se trata de figuras diferentes, pues la cesión ordinaria de que se trata, opera ipso jure, de acuerdo con el preinvocado numeral 37, o sea, que los efectos del hecho jurídico se producen automáticamente a virtud de una norma de derecho y sin que exista previa manifestación de voluntad; amén de que

la única consecuencia que produce la transmisión del título por medio de la cesión ordinaria, es la de subrogar al adquirente en todos los derechos que el título le confiere, y sujetarlo a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta, en términos del ordinal 27 de la mencionada ley de títulos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 642/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 617/95, promovido por R.C.F., en su carácter de Endosatario de R.R.L.I.M. y continuado por E.M.G.G, en contra de S.D.C.K., y B.R.N.D.C. Sentencia emitida el 25 de Julio de 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

63. ENDOSOS. LA CONTINUIDAD QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS, NO ES ABSOLUTA SINO QUE APLICA TAN SOLO EN TRATÁNDOSE DE LOS ENDOSOS EN PROPIEDAD Y POR TANTO DEBE RECONOCERSE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN QUE RECIBE SU ENDOSO DEL PROPIETARIO DEL TÍTULO DE CRÉDITO, AUN EXISTIENDO ENDOSOS INTERMEDIOS SIEMPRE QUE NO AFECTEN LA PROPIEDAD DEL DOCUMENTO. De una armónica interpretación que se realiza de los diversos numerales 33, 34, 35, 36, 39 y 41 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se arriba a la conclusión de que la continuidad que conforme al artículo 39 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito debe observarse en los endosos, no es absoluta sino que es exigible tan solo en relación a los endosos en propiedad, pues bien puede darse el caso en el que entre uno y otro endoso de esta clase, aparezcan endosos dados en procuración y/o en garantía, y en tales circunstancias no debe perderse de vista que conforme a los artículos 35 y 36 de la citada Ley Federal, quienes reciben tales endosos únicamente tienen la facultad, en tratándose de transmisiones del título, de endosarlo en procuración, de allí que les resulte legalmente imposible continuar con el orden de los endosos cuando el título deba transmitirse en propiedad, e incluso válidamente puede suceder y por ende debe aceptarse, que tampoco entre los endosos de las citadas clasificaciones, de procuración y garantía, se observe la continuidad que refiere el precitado artículo 39, ya que pudiese ser que posterior al endoso en procuración aparezca uno en garantía, el cual indiscutiblemente debe otorgarse por quien tiene la propiedad del documento y no por el procurador, ya que como se ha dicho, este último no tiene facultades para darlo en garantía de alguna de sus obligaciones, sino que igualmente solo puede transmitirlo en procuración; y por otro lado, cuando anterior a un endoso de esta última categoría existe uno en garantía, si bien puede ser que atendiendo a las facultades del garante este puede suscribir el endoso a favor del futuro procurador, también puede ser que el propietario del documento haya cumplido con la obligación que tenía ante el garante y que por tanto el documento haya vuelto a su poder, y que ante tal situación sea el propietario quien realice el precisado endoso en procuración, ello aún cuando no exista un endoso en retorno, o aunque no se haya testado el endoso respectivo, pues si bien el artículo 41 de la Ley que se consulta en la parte conducente establece: "....El propietario de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero

nunca los anteriores a ella.", esto constituye no imperativo sino más bien, una facultad potestativa. Sucesivamente, es erróneo el criterio adoptado por la autoridad de primer grado, sustentado en el sentido de que el endosatario en procuración que recibió su endoso por parte de quien tenía la propiedad del título de crédito, carece de legitimación activa al no haberse otorgado ese endoso por el anterior endosatario, pues supone que al haber procedido así se rompió con la continuidad que en términos del artículo 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito debe observarse en los endosos, la desestimación que se realiza atiende a que ha quedado aclarado que la continuidad de referencia no es absoluta y solo aplica en tratándose de los endosos en propiedad, por lo que debe reconocerse la legitimación activa de que goza aquel endosatario en procuración para demandar el pago del precisado documento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 887/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 2584/96, promovido por O. J. R. V. en su carácter de Endosatario en Procuración de N. F. S. N. C. en contra de A. R. C. Sentencia emitida el 30 de Marzo de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

64. ENTREGA MATERIAL DEL BIEN DADO EN ARRENDAMIENTO. ES IMPROCEDENTE AUN CUANDO HABIENDO PROSPERADO EL JUICIO DE NULIDAD DE ARRENDAMIENTO, DE AUTOS SE DESPRENDE QUE NO FUE EL ACTOR QUIEN OTORGÓ LA POSESIÓN AL ARRENDATARIO. El numeral 2133 del Código Civil para el Estado de Nuevo León preceptúa que "la anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado"; ahora bien, si en un contrato de arrendamiento en el que solo participa un copropietario y fue éste quien otorgó la posesión material al arrendatario, se solicita por el otro copropietario no contratante como consecuencia de la nulidad del contrato de arrendamiento la entrega material y jurídica del bien dado en arrendamiento, dicha prestación accesoria deviene improcedente, en virtud de que quien entregó la posesión material del inmueble al inquilino fue la copropietaria del promovente del juicio y no este último. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 215/2002, expediente judicial número 1160/1999, relativo al J.E.A. promovido por D.M.O.R. en contra de M.O.R. y Otro. Sentencia emitida el 28 de Junio de 2002. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

65. ES REQUISITO NECESARIO QUE SE DEMUESTRE EN FORMA INDUDABLE ANTE LA AUTORIDAD LA CESION DE DERECHOS. Es necesario que se demuestre en forma indudable ante la autoridad la cesión de derechos que refiere el inconforme en su demanda, puesto que por mandato legal contenido en la fracción III del artículo 614 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, al escrito de demanda se deben acompañar precisamente los documentos en que se fundamente su acción y todos los que se quieran utilizar como prueba, siendo que el contrato de cesión de derechos constituye precisamente uno de los documentos base de la acción, pues es

precisamente con la celebración del contrato de cesión, con el cual en su caso, nace el derecho de la representada a comparecer a juicio a reclamar el supuesto incumplimiento de este; documento el cual necesariamente debe ser exhibido en el juicio respectivo para acreditar la referida cesión en forma indudable para que la autoridad esté en aptitud de verificar la forma, términos y condiciones en que fue celebrada, sin que deba considerarse que esta pueda acreditarse mediante presunciones, sino que debe justificarse como ya se dijo en forma expresa e indudable, pues en caso de que su contraparte atacara el valor probatorio o legalidad de dicha cesión y no se exhibiese, siendo solo del conocimiento privado de las partes, la Autoridad estaría impedida para analizar dicha controversia, pues no tendría a la vista dicha cesión para decidir en derecho lo atinente, de ahí la necesidad ineludible de exhibir dicho documento en juicio, para los efectos legales correspondientes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TERCERA SALA. Toca en definitiva número 398/2001, Expediente Judicial número 292/2000 relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por J.A.O.V. en contra de J.A.L. Amparo Directo número 365/2002. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

66. ESTADO DE CUENTA BANCARIO. NO SE REQUIERE LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LA TOTALIDAD DE LOS DEUDORES EN EL. Al establecer el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los requisitos que deben contener los contratos o pólizas en los que se hagan constar los créditos, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado, para que sean títulos ejecutivos; y al no referir prevención especial alguna respecto al señalamiento de la totalidad de los deudores en dicha certificación, resulta por ende procedente la vía ejercitada, puesto que el hecho de que en la certificación contable acompañada no se señalen la totalidad de los deudores no causa agravio alguno, ya que lo único que se requiere son los datos que lo identifiquen plenamente con el contrato de crédito, lo que en el caso acontece, dado que en la certificación aparece que el crédito deriva de una Apertura de Crédito Simple con garantía prendaria, inscrita en Reynosa, Tamaulipas, bajo el número 123, volumen II, libro 2, Auxiliar de Sociedades, Poderes y Contratos diversos, a foja 32, sección Comercio, el día 12 de Febrero de 1993, y en el contrato base de la acción, en su última hoja, se desprenden los mismos datos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TERCERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 957/97 deducida del Juicio Ejecutivo Mercantil número 922/96 promovido por G.F.M.N., en su carácter de Apoderado de la Institución de Crédito B.I.S.A., I.B.M., G.F.B. en contra de P.G.C., S.A. DE C.V. y otras.- Sentencia emitida el 22 de septiembre de 1998.- Magistrado: Jaime Ricardo Espinosa Carreón.

67. ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR DE UNA ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO. NO ES REQUISITO QUE FIRME LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE LO INTEGRAN. Resulta inoperante el

agravio vinculado al valor probatorio, que el juez de primer grado le otorgó al estado de cuenta certificado por el contador de la Organización Auxiliar del Crédito, por el hecho de que la primera hoja no se haya firmado, pues no es requisito que el contador rubrique todas y cada una de las fojas que integran la certificación contable, ya que los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito excluyen ese requisito, y por lo tanto, es intrascendente esa situación, en atención al principio generalmente reconocido de que, donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir; máxime si como sucede en la especie, de que en el apartado donde el contador certifica el saldo, aparecen su nombre y firma. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 440/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 1745/94, promovido por J.V.B., en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de A.P., S.A. DE C.V. en contra de I.G.D.B. y E.B.G. Sentencia emitida el 28 de Junio de 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

68. ESTADO DE CUENTA. SI NO SE REALIZARON ABONOS A CAPITAL, NO SE PUEDE EXIGIR QUE SE CONTENGAN EN AQUEL. Si los demandados en su contestación reconocieron haber realizado pago o abono alguno al capital, no es dable exigir a la organización auxiliar de crédito acreedora que certifique abonos o pagos no acontecidos, dado que dichos pagos no se mencionaron y menos se justificó su existencia, pues de lo contrario, equivaldría obligar a la acreedora a justificar una negación, lo cual no es permisible en términos del artículo 1195 del Código de Comercio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en Definitiva Número 122/97, relativa al Juicio Ejecutivo Mercantil Número 2600/94, promovido por N.A.L., en contra de L.M., S.A. DE C.V.; E.A.M. Y E.H.S.- Sentencia emitida el 18 de septiembre de 1988.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

69. EXCEPCION DE COSA JUZGADA. NO OPERA EN UN JUICIO DE TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO DERIVADO DE ORDINARIO CIVIL SOBRE OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS, SI NO SE JUSTIFICARON PLENAMENTE SUS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. En términos de lo previsto en el artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es acertada la improcedencia decretada por el A-quo de la excepción de cosa juzgada opuesta dentro de un juicio de Tercería Excluyente de Dominio, derivado de un procedimiento Ordinario Civil sobre Otorgamiento de Escrituras, no obstante, que en este último se justificó que la entonces esposa del tercer opositor dio en pago a sus padres, un bien inmueble respecto del cual figura en el título respectivo como única propietaria, ordenándose escriturar el cien por ciento del inmueble a favor de éstos en cumplimiento a ejecutoria de amparo pronunciada por la Autoridad Federal, de lo que se tiene, que en base al citado dispositivo legal aplicado al juicio de Tercería que nos ocupa, para que opere la excepción de cosa juzgada es necesario que entre el juicio resuelto y que se examina exista identidad en las cosas, las causas y las personas de los litigantes, y al no suceder lo anterior, pues no

figuraron las mismas partes en ambas contiendas; ni la misma cosa u objeto, pues aunque se trata del mismo bien, en el primer procedimiento se reclamó la totalidad del mismo y en el segundo, solamente el cincuenta por ciento; Tampoco se actualizó la identidad en la causa de pedir, pues en el procedimiento ordinario civil se reclamó el otorgamiento de escritura derivado de un contrato verbal de dación en pago, lo que constituye el ejercicio de una acción personal, y en el presente juicio se demandó el ejercicio de una acción real sobre los derechos de propiedad que le corresponden al tercerista respecto del cincuenta por ciento del inmueble en litigio. Lo que aunado, a que se justificó plenamente por el tercer opositor a través de las actas de registro civil exhibidas a juicio, que gozan de eficacia probatoria en términos de lo previsto en el artículo 47 del Código Civil del Estado, que su matrimonio, aún y cuando a la fecha de interposición del juicio ya se encontraba disuelto, se sujetó al régimen patrimonial de sociedad conyugal, por ende, los bienes adquiridos durante su vigencia formaban parte de esa sociedad, correspondiendo a ambos consortes por partes iguales el cincuenta por ciento, independientemente de que se adquiriera por uno solo de ellos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 23/03, relativo a la tercería excluyente de dominio promovida por J.L.S.C. por sus propios derechos en contra de A.H.G.F., S.G. y Z.F. de G..- Sentencia emitida el día 27 de Enero del 2004. Confirmada en Amparo Directo número 89/2004 en fecha 12 de Noviembre del 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

70. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO, SOLO DEBE CONSIDERARSE EL DELITO PRINCIPAL; PARA EFECTO DE. El Juez de Primer grado estuvo en lo correcto en extinguir la acción penal por el delito de ROBO CON VIOLENCIA, en los términos que se precisan en el fallo recurrido, pues fue acertado en sólo considerar el delito principal por el cual se procesaba al inculpado, sin considerar para ello la calificativa de violencia prevista en el numeral 371 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, misma la cual es la que resulta ser considerada como grave en términos de lo que dispone el numeral 16 bis del Código Penal vigente en el Estado, atento a ello y mediante una correcta interpretación gramatical de la última parte del numeral 111 del Código Penal vigente en el Estado del cual en su integridad señala que: “Igualmente procederán los efectos del perdón en aquellos delitos que persiguiéndose de oficio, no sean de los considerados como graves, su sanción no exceda de tres años como pena máxima y se logre la conciliación entre el reo y el ofendido.” Es por lo que se desprende que para los efectos de extinguir la acción penal en términos del perdón del ofendido solamente se atenderá únicamente a la sanción aplicable al delito, mas no a las sanciones aplicables a la calificativa o modalidad del delito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en artículo numero 557/2003, relativo al proceso número 46/2001, instruido en contra de M.A.M.G. por el delito de Robo con Violencia. Sentencia emitida el 28 de Noviembre de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

71. FIRMA INDUBITABLE. PRUEBA PERICIAL. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUZGADOR (NO DEL PERITO) DETERMINAR CUÁL ES LA QUE SE CONSIDERA COMO. El artículo 1247 del Código de Comercio Vigente en el País, señala lo siguiente: ---------- Se considerarán indubitables para el cotejo:----------I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa; -------III. Los documentos cuya letra o firma haya sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuye la dudosa; ---------- IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique, y ----------Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del Secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar.----------De acuerdo con las bases anteriores, es el Juez el único facultado para determinar cual será la firma considerada como indubitable y que servirá de base para el cotejo de firmas, en tratándose del desahogo de la prueba pericial, a fin de tener la plena certeza de que la misma corresponde a la del puño y letra de aquél al que se le atribuye. Por lo tanto, el dictamen que emitan los peritos designados en autos, debe ceñirse específicamente a lo solicitado y autorizado por el Juez, sin extralimitarse en el ejercicio de su encargo, ya que de lo contrario aquél dictamen que sea emitido teniendo como base firmas contenidas en documentos que no fueron los autorizados por el propio Juez, carece de valor probatorio. Por lo que en el caso concreto, al haberse tomado en cuenta por el perito designado por la parte demandada, la firma estampada en un documento no autorizado por el Juez, su dictamen no cuenta con pleno valor probatorio y por ende resulta fundado su agravio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 631/2003, derivado del expediente número 239/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, instruido en contra de D. A. V. DE LA G. Vs E. T. S., S. A. DE C. V. y Otros. Sentencia emitida el 28 de Noviembre de 2003. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

72. IMPEDIMENTO, NO SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1132 FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SI LA SALA RESPONSABLE DEJÓ INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE UNA PROBANZA. De una recta interpretación a lo dispuesto por el artículo 1132 fracción XI del Código de Comercio vigente en el País, puede deducirse que no se infringe dicho dispositivo legal cuando el C. Juez Instructor emite una nueva resolución definitiva, si la dictada con anterioridad fue declarada sin efectos a virtud de haber prosperado una apelación intermedia ante el Tribunal de Alzada, para efectos de que se desahogara una prueba de inspección judicial, y además porque teniendo que reponer el procedimiento a raíz de la resolución de merito, el A quo está obligado a pronunciar nueva sentencia definitiva a la luz del resultado que arroje la prueba de inspección judicial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en artículo número 576/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por M.O.Z.M. en su carácter

de Endosatario en Procuración de C.L.S. S.A. de C.V. vs. F.C.B. e I. M. CB, S.A. de C.V. Sentencia emitida el 06 Diciembre de 2002. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

73. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PROCEDE SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CUANDO TAL CONCEPTO ES PACTADO EN EL CONTRATO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN. Si bien el Impuesto al Valor Agregado se encuentra reglamentado por la Ley de la misma denominación y su aplicación sin duda alguna corresponde a una autoridad administrativa; empero, cuando se demanda dicho concepto por haberse pactado como obligación en un contrato civil que sirve de base de la acción que se ejercita, conforme al artículo 111 del Código Procesal Civil del Estado, no corresponde a la autoridad fiscal resolver sobre el incumplimiento de esa obligación civil, sino a la autoridad judicial por ser la encargada de resolver las controversias entre particulares derivadas de un contrato civil, como en el caso, donde se reclama la rescisión del contrato de subarrendamiento de quince de Agosto de dos mil uno, y en virtud de que como consta de la foja ocho del referido contrato, en la especie, el subarrendatario se obligó a cubrir dicho concepto a la actora, al establecerse en lo que aquí interesa lo siguiente: ".TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA:- .... EL SUBARRENDATARIO debe pagar a EL SUBARRENDADOR la RENTA por el número total de años aquí convenidos, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) o cualquier otro impuesto que en ese momento corresponda de acuerdo a las Leyes Fiscales vigentes, independientemente que EL LOCAL COMERCIAL sea o no ocupado por el SUBARRENDATARIO. EL SUBARRENDATARIO renuncia expresamente a los derechos de prórroga, de preferencia y del tanto previstos en los artículos 2323, 2341, 2379, 2381 y 2382 del Código Civil. CUARTA: A.- EL SUBARRENDATARIO pagará al SUBARRENDADOR en el domicilio de este último, o mediante transferencia electrónica bancaria que sea depositada en la cuenta número 047-22326-1 de la institución de crédito BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., la renta desde y a partir de la fecha de inicio del subarrendamiento más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) o cualquier otro impuesto que se genere por tal concepto de acuerdo a las Leyes Fiscales del país, por adelantado, el primero de cada mes de calendario....". Por tanto, tomando en consideración que conforme a los dispositivos 1693 y 1729 del Código Civil del Estado, en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, perfeccionándose lo acordado por el mero consentimiento de las partes; y, que los contratantes se obligan desde su perfeccionamiento, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que según su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley; además de que el pago de dicho concepto se pactó de manera expresa y por separado en el contrato de subarrendamiento base de la acción, trasladando la subarrendadora (actora) a la subarrendataria, ahora demandada, el pago del mismo, como se advierte de las cláusulas trascritas y tomando en cuenta además que están obligadas al pago del impuesto comentado, las personas físicas y morales que otorguen el uso o goce temporal de bienes (arrendador) y que trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado, a las personas que los usen o gocen

temporalmente (arrendatario), conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entonces es inconcuso que las consideraciones que esbozó el juzgador de primer grado para condenar a la demandada, al cumplimiento de la obligación contraída consistente en el pago del Impuesto al Valor Agregado son correctas, ya que en tal sentido el demandado se obligó en el contrato de referencia, en el entendido de que el Órgano Jurisdiccional únicamente resolvió sobre la controversia entre particulares ante el dirimida, conforme a los derechos y obligaciones que se pactaron en el acuerdo de voluntades aludido, más en ningún momento realizó funciones de autoridad fiscal como erróneamente lo expuso la parte reo, de ahí que sean infundadas las manifestaciones que al respecto adujo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 313/2004. Expediente Judicial 970/2003.- J.E.A. promovido por A.F.S. en contra de H. Del R., S.A. de C.V. Sentencia emitida el 27 de Agosto del 2004.- Amparo Directo número 476/2004. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

74. IMPUGNACIÓN CONTRA AUTO QUE DECIDE SI SE CONCEDE O NO LA REVOCACIÓN. El artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establece: “Contra el auto que se decida si se concede o no la revocación no se admitirá recurso alguno”, lo que indiscutiblemente nos conduce a considerar que en la especie, contra la resolución que resuelve un recurso de revocación, no es admisible el recurso de apelación; sin embargo, existen casos de excepción en los que la regla general de impugnación contra los acuerdos que resuelven la revocación no debe regir para todos la resoluciones, ya que con independencia de lo previsto en el precepto legal en consulta, debe tomarse en cuenta además la situación jurídica que se está resolviendo, pues existen casos en los que las determinaciones que se están dilucidando dentro de la resolución del recurso de revocación, son apelables por disposición expresa de la ley, como acontece en el caso que se revisa, en el cual el recurso de revocación planteado por H.E.I., obedece a que la petición hecha valer por la parte demandada, fue desestimada a virtud que, según proveído de fecha 07-siete de Enero del 2003-dos mil tres, el señor H.E.I., no era parte dentro del juicio, lo cual fue incorrecto, ya que el Tribunal de primer grado, por error, no advirtió que el referido H.E.I., sí tenía acreditada debidamente su personalidad jurídica dentro del juicio en que se actúa, por tanto, al resolver la revocación planteada, y declarar procedente el mismo, en atención a la mencionada circunstancia, dentro de la resolución en comento se proveyó la petición del señor H.E.I., motivo del recurso hecho valer, resolviéndose en la misma lo relativo a la caducidad de instancia propuesta por el mencionado señor H.E.I., y conforme a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley Procesal en consulta, contra el auto que decreta o niega la caducidad de instancia, cabe el recurso de apelación, luego entonces, en un caso como el que se presenta, no es aplicable lo establecido en el artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aún y cuando se trate de un auto que decide una revocación, dado que para que se actualice el supuesto del precepto invocado lo correcto y apegado a derecho es, que se decrete solamente si procede o no la revocación, y por separado, en su caso, se resuelva lo conducente en derecho respecto del auto a revocar, pues de otra manera, es decir, si se

resuelven dentro de tal resolución diversas cuestiones que, por disposición expresa de la ley son recurribles, se conculcarían las garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en la nuestra Carta Magna, pues se insiste, contra el auto que se decide si se concede o no la revocación, no se admite recurso alguno. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 17/2003, relativo al juicio ordinario civil promovido por M.G.B.O. en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de J.A.G.C. y G.S.G. en contra de B.N.M. S.A., F.V.M.,S.A. DE C.V. J.A.F.V., M.M.G.S. DE F., M.F.G., J.M.G. y R.P.P.C.- Sentencia emitida el día 21 de abril del 2004.- Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

75. IMPULSO PROCESAL. MATERIA DE PRUEBA. El impulso procesal representa una carga para los interesados, es decir, a las partes en juicio les incumbe vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones; de ahí que si bien es cierto el demandado aportó como de su intención la prueba confesional por posiciones a cargo de su contraparte, en relación a la cual la Autoridad de Primer Grado fijó fecha y hora para su materialización, no siendo desahogada en virtud de que no le fue notificada al absolvente, también lo es que en tales condiciones el oferente al no haber fenecido el término probatorio tuvo la oportunidad de solicitar de nueva cuenta fecha y hora para la realización de la prueba en comento; y al no haberlo hecho así mostró con ello un marcado desinterés en el desahogo del citado medio de convicción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 95/2002, Expediente Judicial número 744/2000 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido inicialmente por J. G.S. y continuado por J.L.V.A. en contra de C.A.C. Amparo Directo número 687/2002/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

76. INCIDENTE MERCANTIL AUTÓNOMO SOBRE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA, ACREDITAMIENTO DEL CARÁCTER DE SOCIOS DE LOS PROMOVENTES. Por regla general, para obtener la procedencia de la convocatoria de asamblea que se solicita ante la autoridad judicial, en vía incidental mercantil, deberán los promoventes, como socios de la sociedad mercantil respectiva, justificar tal carácter con la exhibición de los títulos de las acciones. Sin embargo, cuando en el ocurso de demanda se señala que desde la constitución de la sociedad no fueron expedidos los títulos representativos de las acciones, provisionales o definitivos, y ésta circunstancia no fue controvertida o negada por el administrador único demandado en tal procedimiento; debe estimarse acreditado el carácter de socio de los promoventes cuando, al lado de lo anterior, se tiene que exhibieron la constancia certificada relativa al contrato social en que aparecen los nombres de los solicitantes de la convocatoria, así como su intervención como socios en dicha constitución, y el número de acciones que a cada uno corresponden. Luego entonces, al tenerse por aceptada la no expedición de los títulos, pues el demandado no controvirtió dicha circunstancia y además, existiendo prueba de que los promoventes

aparecen como socios en el contrato social, no es dable exigir la exhibición de los títulos representativos de las acciones como requisito de procedibilidad de la acción intentada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 422/99, relativo al Incidente Mercantil Autónomo Sobre Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, contenido en el expediente número 711/97, promovido por S.C.L., E.P.H. VDA. DE L. y R.E.L.P., por sus propios derechos y como socios fundadores de la sociedad mercantil denominada I.,S.A., en contra de S.C.S., como administrador único de la citada negociación.- Sentencia emitida el día 21 de Julio de 1999.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

77. INCIDENTE MERCANTIL AUTONOMO SOBRE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA, PROCEDENCIA DEL. CUANDO SE PROMUEVE POR SOCIOS TITULARES DE MÁS DE UNA ACCIÓN, SEGÚN EL CONTRATO SOCIAL. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la petición a que alude el diverso artículo 184 de la misma ley, sobre convocar a asamblea y que se plantea ante la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, podrá hacerla el titular de una sola acción cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos. Luego, si en un caso se demandó en vía incidental mercantil, ante la autoridad judicial, el que se convocara a asamblea, más tal petición no la formuló el titular de una sola acción, sino varios socios que cuentan en conjunto con un número mayor de acciones; resulta indudable que procede legalmente la convocatoria reclamada, toda vez que en el contrato social respectivo se pactó que la solicitud de convocatoria la podría realizar el tenedor de una o más acciones en los casos previstos por el artículo 185 de la ley en comento, y en el caso específico quedó de manifiesto que los promoventes se ubicaron en el supuesto previsto por la fracción I del citado artículo 185, pues manifestaron que no se había celebrado ninguna asamblea desde la constitución de la sociedad, que a la fecha de presentación de la demanda, contaba con más de dos años de existencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 422/99, relativo al Incidente Mercantil Autónomo Sobre Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, contenido en el expediente número 711 /97, promovido por S.C.L., E.P.H. VDA. DE L. y R.E.L.P., por sus propios derechos y como socios fundadores de la sociedad mercantil denominada I., S.A., en contra de S.C.S., como administrador único de la citada negociación.- Sentencia emitida el día 21 de Julio de 1999.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

78. INCIDENTE SOBRE IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS. LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ALEGA VIA AGRAVIO. Resulta correcto ordenar la reposición del procedimiento, cuando el actor en

vía de agravio reclama como violación procesal el hecho de haberse dictado sentencia en el juicio sin estar resuelta la impugnación hecha por él, respecto de un documento de su contraria, admitida en vía de incidente misma que se había ordenado resolver al momento de emitirse el fallo principal, puesto que en tratándose de la legalidad del procedimiento la Autoridad de Alzada que conoce en vía de apelación la impugnación de la sentencia definitiva, a fin de sustituir a la autoridad en el estudio de los autos y determinar si la resolución impugnada debe confirmarse, modificarse o revocarse, invariablemente debe abordar el estudio de las violaciones procesales alegadas por las partes, por tratarse de una cuestión de orden público, por lo tanto al alegarse por el accionante la omisión de substanciación de un incidente que versa sobre la valoración de una prueba, resulta correcto el que se decrete la reposición del procedimiento, independientemente de que la materia de la incidencia planteada lo constituya un documento exhibido por su contraria pues el Juez fue omiso en resolver sobre la objeción del apelante. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 623/2001, Expediente Judicial número 191/98 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por M. C. M. en contra de C. F. S.A. y Otros. Sentencia emitida el 8 de Mayo de 2002. Amparo Indirecto número 1427/2002/IV/A. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

79. INFORME DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ES INSUFICIENTE PARA DECRETAR EL LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE VEHICULOS, CUANDO QUIEN LO PIDE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA ELLO Y RESULTA ILEGAL DECRETARLO SIN LA PREVIA AUDIENCIA DEL EJECUTANTE. Para decretar el levantamiento del embargo, no basta la simple solicitud del demandado y el informe rendido por la Tesorería General del Estado en el sentido de que el vehículo objeto del mismo aparece registrado en dicha dependencia a favor de una persona distinta al demandado, toda vez que aunado a que quien posee interés jurídico y legitimación para solicitar el levantamiento del embargo es el presunto tercero ejecutado, debe considerarse que de concederse valor probatorio pleno al informe de la autoridad administrativa aludida, se estaría obstaculizando la valedera posibilidad de que el demandado haya celebrado un acto traslativo de dominio del citado bien con dicho tercero, sin cumplir con la formalidad de realizar el correspondiente cambio de propietario ante la mencionada dependencia. Por lo tanto, además de acreditarse la legitimación para promover el levantamiento de un embargo, debe demostrarse plenamente que dicho bien no corresponde al ejecutado, sin olvidar nunca el derecho del actor para ser oído previamente en juicio, por ser este último supuesto una prerrogativa que concede nuestra Carta Magna. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 244/00, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por I.A.G. en contra de la M.D.M.S.A. DE C.V. Sentencia emitida en fecha 17 de Marzo del 2000. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

80. INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS RECLAMADOS EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI PROVIENEN DE UN CRÉDITO BANCARIO Y SE DEMANDAN EN FORMA LÍQUIDA, AL NO ESTABLECERSE CORRECTAMENTE EN EL CERTIFICADO CONTABLE SU CUANTIFICACIÓN, DEBE EL JUEZ ABSOLVER AL DEMANDADO DE DICHAS PRESTACIONES, NO ORDENAR SU CÁLCULO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El estado de cuenta certificado que ordena el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que no reúne los requisitos que la jurisprudencia impone, con base a dicho precepto en lo correspondiente a prestaciones accesorias, como lo son intereses ordinarios y moratorios reclamados en forma líquida, limita la capacidad de defensa del demandado al desconocer el origen de tales cantidades. Por lo anterior, en ese supuesto, el Juez debe absolver a la parte demandada de esas prestaciones, pues al no reclamarse en forma genérica, se ejercita una acción específica de pago de intereses con señalamiento del monto de lo reclamado incorporando dicho señalamiento a la materia de las prestaciones deducidas, cuyos elementos, por tratarse de un Juicio Ejecutivo, los debe demostrar la parte actora desde un principio en los términos del artículo 1194 del Código de Comercio, y no con posterioridad, ya que esto implicaría conceder al actor un doble período de pruebas y sobre todo la oportunidad de subsanar los defectos del título en la etapa de ejecución de sentencia, con violación de los principios que rigen la procedencia de la acción ejecutiva; lo que no sucede cuando la demanda de pago de intereses, siendo accesoria, es también genérica, cuando no se especifica el monto de lo reclamado, caso en el cual dichos montos no forman parte de la litis, y por tanto, no arroja sobre el actor la carga de probarlo de antemano, mediante la exhibición del título correspondiente, pues en el caso de una reclamación genérica, puede válidamente resolverse la determinación de la cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando, desde luego, haya quedado demostrado el derecho de exigir tales intereses. Similar criterio fue adoptado por el H. Primer Tribunal Colegiado en materias penal y civil del Cuarto Distrito Federal, dentro del amparo directo número 517/99. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva 219/97, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 24/96, promovido por J.E.T.G., en contra de P.G. De M., S.A. DE C.V., y otros. Sentencia emitida el 21 de Agosto de 2000. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

81. INTERESES, RECLAMO ACCESORIO DE. PUEDEN CUANTIFICARSE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA AL CONTAR CON ELEMENTOS PROPIOS DISTINTOS DEL RECLAMO PRINCIPAL. Al exhibirse en juicio el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar de crédito acreedora, donde aparece adecuarse la totalidad del capital y diversas cantidades por concepto de intereses, se cumple con lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, haciendo fe y surtiendo sus efectos el estado de cuenta, con el que se demuestra el adeudo de capital reclamado a los demandados respecto del cual no es necesario el establecimiento de movimiento alguno en la cuenta, al no

haberse realizado algún pago, otorgándose a la parte demandada, en tales condiciones, la oportunidad de oponerse al saldo que como suerte principal se cobra; sin que obste lo anterior y se vea perjudicada la integración del título ejecutivo, el que los intereses no se hubieren especificado en el estado de cuenta con un debido desglose según lo acordado en el contrato base de la acción (determinación de tazas variables), dado que por contar dicho reclamo accesorio del principal (capital) con elementos propios para su determinación, los mismos pueden cuantificarse en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo, de conformidad con el artículo 1348 del Código de Comercio, no viéndose perjudicada en las condiciones la procedencia de la vía ejecutiva mercantil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en Definitiva Número 122/97, relativa al Juicio Ejecutivo Mercantil Número 2600/94, promovido por N.A.L., en contra de L.M., S.A. DE C.V.; E.A.M. Y E.H.S.- Sentencia emitida el 18 de septiembre de 1988.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

82. INTERPELACIÓN JUDICIAL. NO ES NECESARIO ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN CONTRACTUAL DE QUIEN PRETENDE NOTIFICARSE. Las diligencias que se promueven en jurisdicción voluntaria excluyen toda idea de controversia entre partes determinadas y de esta suerte, en estricta razón, como en el caso aconteció, no rigen para las mismas lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en cuanto a adjuntar el título legal respectivo, puesto que dicho precepto legal se encuentra plasmado con respecto a las acciones y las excepciones, esto es, para la jurisdicción contenciosa, y en la jurisdicción voluntaria no existe tal circunstancia así considerada. Sin embargo, en ciertos casos de la jurisdicción voluntaria, el juez que la conoce se ve obligado a exigir la motivación y comprobación de la legitimidad cuando debe emitir una resolución respecto a nombramiento de tutores o curadores y discernimiento de estos cargos, enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos, la adopción, informaciones ad perpetuam, apeo y deslinde, etc.; más no ocurre ello así, tratándose de una interpelación que sólo constituye una notificación, pues tal diligencia no puede causar perjuicio irreparable a las personas que se trata de notificar, en razón a que la autoridad no resuelve ni ordena cuestión alguna relativa a las partes substanciales del procedimiento, al no existir juicio alguno. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en artículo 491/99, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Interpelación Judicial contenidas en el expediente judicial número 1222/99, promovidas por J.A.C.G. respecto de A.G.F., SA. DE CV, y otros.- Sentencia emitida el 20 de marzo de 2000.- Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

83. JUEZ. CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA SER DEMANDADO EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL DONDE SE RECLAMA LA NULIDAD DEL JUICIO CONCLUIDO EN EL QUE INTERVINO COMO ÓRGANO DEL ESTADO. No es jurídicamente válida la determinación tomada por el A-quo en el auto

recurrido, al desechar la demanda ordinaria civil sobre nulidad de juicio concluido, aduciendo para ello que era menester llamar a juicio al juez que intervino y decidió el negocio cuya nulidad se pretende, en virtud de existir litisconsorcio pasivo necesario; pues le asiste razón al agraviado al estimar que en dicho procedimiento el juez sólo actuó como órgano directriz regulador del procedimiento y no como parte interesada. En efecto, en todo litigio no puede haber más ni menos de dos partes, porque los intereses son únicamente dos, el del actor y el del demandado, siendo precisamente la actora la que inicia el proceso para exigir del demandado determinada prestación y la demandada que tiene una posición de cierto modo pasiva, porque recibe el impacto de la acción ejercitada en contra suya, y es el juez precisamente el sujeto que ocupa el vértice superior del triángulo procesal (Juez-Actor-Demandado), y a quien le corresponde la justa composición del litigio por ser éste un tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccionalmente el litigio entre las partes en términos del artículo 95 de la Constitución Política del Estado; y sólo si se demuestra que dicho acto jurisdiccional proviene de un evento simulado o fraudulento, es el mismo Estado, a través de la autoridad judicial, quien lo deje sin eficacia jurídica, y de resultarle la responsabilidad al juez, sería sancionado conforme a la ley especial aplicable al caso, que lo es la de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 38/2000, relativo al juicio ordinario civil número 1334/99 promovido por P.F.T.S., SA. de C.V. en contra de A.A.G.R. y otros. Sentencia emitida el día 31 de enero del 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

84. JUICIO EJECUTIVO CIVIL, PROCEDENCIA DEL. Se cumple con lo dispuesto en el artículo 646, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuando se demanda en vía ejecutiva civil con base al primer testimonio de una escritura pública donde se hizo constar la "ampliación de convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria en primer lugar y grado", otorgado respecto de una anterior operación celebrada, en la cual se reconoció un diverso adeudo; sin que obste a lo anterior la referencia que frente a la acción realizó la parte reo, en el sentido de que para poder declararla procedente, se debía dirimir primeramente sobre el acto causal de los documentos acompañados a la demanda, respecto a si las partes demostraron haber cumplido con dicho acto consistente en la venta de unos bienes; toda vez que, por un lado, el documento base de la acción no lo es dicho acto jurídico que originó el reconocimiento del adeudo y su "posterior ampliación" y, además, la obligación por parte de los demandados en favor del actor se encuentra plenamente reconocida en los documentos de referencia de forma lisa y llana, no siendo por tanto un derecho dudoso, evidenciándose igualmente que, en el caso, ante los términos en que aparece el reconocimiento finalmente otorgado, las obligaciones que le pudieran haber correspondido al comprador con motivo de la venta, quedaron cumplidas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 1396/97, relativo al juicio ejecutivo civil número 1578/91, promovido por E.G.R., por sus propios derechos, en contra de J.G.P.G. y

G.P.L. DE P. Sentencia emitida el 25 de Agosto de 1998. Magistrado: GENARO MUÑOZ MUÑOZ.

85. JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS EN QUE SE SUSCRIBEN PAGARÉS. ESTUDIO DE LA. Si del ocurso de demanda que originó el juicio ordinario mercantil se desprende que los conceptos reclamados se sustentan en la celebración de un contrato de mutuo con interés en que se suscribieron dos diversos títulos de crédito de los denominados "pagarés", para efectos de documentar las cantidades, los intereses pactados y las fechas de vencimiento, es inconcuso que siendo el mutuo un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad en el plazo y términos convenidos; de un correcto análisis de la acción en tales términos planteada, es que debe atenderse, para su procedencia, a la justificación de tal acuerdo de voluntades, la entrega de la cantidad reclamada y el no pago de la misma en la fecha convenida; sin que sea correcto pretender dirimir el análisis de la litis atendiendo a las acciones que conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pudieron ejercitarse con base a la literalidad de los pagarés acompañados, toda vez que de los hechos del ocurso de demanda no se advierte que éstas se hubieran deducido, pues conforme a la prestación formulada y a la causa de pedir, se deducía en el caso la del cumplimiento del mencionado contrato de mutuo con interés. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 186/97, relativo al juicio ordinario mercantil número 3497/95, promovido por J.M.S., en representación de M.M.B., en contra de A.B.F. Sentencia emitida el 28 de Septiembre de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

86. LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL RESPONSABLE DE ESTUDIAR LAS INFRACCIONES PROCESALES SOMETIDAS A SU JURISDICCIÓN. No es factible ocuparse del estudio de los puntos de inconformidad relacionados con las violaciones procesales consistentes en la falta de conclusión de la prueba pericial y el desechamiento de la inspección ocular, al haber sido materia de otro recurso de apelación, ya que si bien, en principio, el tribunal de alzada debe ocuparse del estudio de los agravios referidos a infracciones cometidas durante el procedimiento, esto no sucede así cuando fueron decididas por la propia autoridad jurisdiccional o por otra de igual jerarquía en un diverso recurso de apelación, pues el artículo 408, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, dispone que causan ejecutoria las resoluciones pronunciadas en segunda instancia; en consecuencia, si en la alzada se analizaran nuevamente las cuestiones previamente abordadas con motivo de un medio de impugnación, se ignoraría la seguridad jurídica que es uno de los principios básicos sobre los que descansa el orden constitucional, puesto que en el procedimiento civil se busca sujetar a los tribunales a determinas formas y requisitos en su actuación, de tal suerte que

es inaceptable que el juzgador pueda volver a encargarse de cuestiones decididas en el procedimiento, o bien que desconozca sus consecuencias, las revoque modifique, pues ello equivaldría a impregnar de inseguridad los juicios sometidos a su jurisdicción en perjuicio, en lo particular de las parte contendientes, y en lo general de todo el sistema legal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 44/01, Expediente Judicial número 35/98 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por J. G. Y G. en contra de R. O'. G. Y M. R. S. J. V. S. Amparo Directo número 364/02. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

87. LEGITIMACIÓN. EN UNA CESIÓN DE DERECHOS QUE SE CELEBRA SIN LIMITACIÓN ALGUNA SOBRE UN BIEN INMUEBLE GRAVADO CON HIPOTECA A FAVOR DEL CEDENTE, PARA DEMANDAR LOS DERECHOS HIPOTECARIOS QUE APARECEN INSCRITOS A FAVOR DEL CEDENTE, ESTE CARECE DE. Si dentro de un convenio de cesión de derechos una de las partes convino la cesión a la otra de un bien inmueble con los gravámenes que reportaba a esa fecha, recibiéndolo la cesionaria en tales condiciones, tal estipulación debe interpretarse en el sentido de que la parte cedente no solo cedió a la cesionaria, la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble aludido, sino también el derecho sobre la hipoteca constituida con motivo de diverso crédito hipotecario concedido, pues no resulta lógico ni jurídico concluir que se haya transmitido únicamente la propiedad del inmueble objeto de la garantía reservándose el derecho sobre la hipoteca aludida, cuando a través de dicha cesión de derechos el cedente obtuvo el beneficio de la extinción de su adeudo con la cesionaria, y más aún que dentro de la cesión de derechos referida el cedente no se reservó derecho alguno sobre el mismo, además de que de la simple literalidad del convenio no se infiere que la cesión se haya efectuado con inclusión o salvedad de que prevalecería la hipoteca a favor de la parte cedente. Por lo tanto, es de concluirse que por virtud de la cesión, la parte cedente carece de legitimación para defender los derechos hipotecarios que se encuentran inscritos a su favor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 129/00, Tercería Excluyente de Preferencia, Expediente número 274/99, promovido por G. M. M. G. en contra de A. D. F. C. y otro. Sentencia emitida el 10 de Septiembre de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

88. LEY DEL MERCADO DE VALORES. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 25. El artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores en lo conducente establece: "Las casas de bolsa no podrán dar noticia de las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo las que le solicite el cliente de cada una de éstas o sus representantes legales o quien tenga poder para intervenir en ellas. Esta prohibición no es aplicable a las noticias que proporcionen a la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el cliente sea parte o acusado, a las autoridades competentes, por conducto de la Comisión Nacional de Valores...". Ahora bien, resulta infundado lo aducido por el recurrente en

cuanto a que el A-quo no debió haber admitido a trámite la prueba de inspección judicial a verificarse en las oficinas de la casa de bolsa demandada, en virtud de que se violenta el contenido del referido numeral, que protege el secreto bursátil y prohíbe a las casas de bolsa dar noticia y exhibir cualquier tipo de documentación referente a las operaciones que realicen, siendo menester que se solicite a través de la Comisión Nacional de Valores. Se estima infundada tal aseveración, ya que en una sana interpretación que se haga al referido precepto legal, tenemos que si bien es cierto las casas de bolsa no pueden dar noticia de las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo los casos previstos en el propio numeral, también es cierto que existe disposición expresa en el mismo artículo que establece que tal prohibición no es aplicable a las noticias que proporcionen a la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el cliente sea parte o acusado, como acontece en la especie, así es, dicho numeral en la parte que nos interesa lo podemos dividir en tres partes; la primera de carácter prohibitivo, al disponer que: “Las casas de bolsa no podrán dar noticia de las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo las que le solicite el cliente de cada una de éstas o sus representantes legales o quien tenga poder para intervenir en ellas”; la segunda contiene la excepción a esa prohibición, al enunciar: “Esta prohibición no es aplicable a las noticias que proporcionen a la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el cliente sea parte o acusado”; la tercer parte impone una condición objetiva para cualquier otra autoridad distinta a la judicial, al decir: “...a las autoridades competentes, por conducto de la Comisión Nacional de Valores . En ese orden de ideas, tenemos que la autoridad judicial no requiere de permiso alguno para solicitar a las casas de bolsa noticia de sus operaciones, con el requisito solamente de que se funde en resolución dictada en juicio en el que el cliente sea parte o acusado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo 180/2000, relativo al juicio ordinario mercantil número 107/98 promovido por L.A.U. y Otros en contra de J.L.R. y otros.- Sentencia emitida el día 29 de febrero del 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

89. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EN UN SOLO ESCRITO INICIAL A UN CÓNYUGE SE LE DEMANDA EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS Y AL OTRO LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE UN MISMO BIEN INMUEBLE, NO SE SURTE LA FIGURA DEL. Cuando en un mismo escrito de demanda se entablan dos acciones distintas, en contra de cada uno de los demandados, es decir, la acción de otorgamiento de escritura únicamente en contra de uno de los cónyuges y la acción de prescripción adquisitiva únicamente en contra del otro, ambas acciones respecto de un mismo bien inmueble, no se surte la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, ya que no obstante que es verdad que ambas acciones afectan comúnmente los intereses de los cónyuges demandados en juicio, no menos cierto lo es también que en el caso no se dejó de llamar a juicio a ninguno de ellos, pues a pesar de que son dos acciones distintas por las que se está demandando a cada uno de ellos, ambos comparecieron dentro del procedimiento, dando

contestación en forma conjunta a las demandas instauradas en su contra, aceptando la compraventa señalada, pero sólo respecto al 50% cincuenta por ciento que le corresponde a uno de los cónyuges de la propiedad materia del presente juicio; con lo anterior se tiene que si bien es verdad que las dos acciones planteadas por los ahora apelantes fueron entabladas individualmente en contra de cada uno de los demandados, no menos cierto lo es también que en el caso ambos demandados fueron llamados a juicio, corriéndoseles traslado del único escrito inicial de demanda presentada e incluso, ambos demandados comparecieron mediante un solo escrito, dando contestación a la demanda aludida, sin hacer distinción respecto a la acción de otorgamiento de escritura y a la acción de prescripción adquisitiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 384/01, Expediente número 699/99 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por R. R. T. y otra en contra de F. H. R. y otra. Sentencia emitida el 09 de Octubre de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

90. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, EXISTENCIA DEL. Cuando una persona que tiene el carácter de Fideicomisaria dentro de un Contrato de Fideicomiso, demanda al comprador de un inmueble la nulidad de un contrato de compraventa celebrado entre la Institución Fiduciaria en su carácter de vendedora y el comprador demandado, en ejecución total del Fideicomiso constituido respecto del bien inmueble objeto directo de la compraventa, se convierte en un requisito ineludible el llamar a juicio a la Institución Fiduciaria vendedora, ya que en el supuesto que se afectara el contrato de compraventa convenido, como consecuencia de la sentencia definitiva que se emitiera por la Autoridad, se estaría afectando directamente la esfera jurídica y patrimonial de tal Institución Fiduciaria vendedora, en virtud de que la acción ejercitada tendría como consecuencia constituir un nuevo estado de derecho, que sólo podría existir legalmente cuando se encuentren convocados en el procedimiento todos los interesados vinculados en la relación jurídica que generó el contrato mismo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva 541/2000, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por A.S.G., contra de M.E.V.A., y otros.- Sentencia emitida en fecha 23 de agosto de 2000. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

91. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL COPROPIETARIO ACUDE A JUICIO A RECLAMAR PARA SÍ, EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA DECLARACIÓN DE DOMINIO SOBRE UNA FRACCIÓN DE UN PREDIO INDIVISO, SIENDO LO CORRECTO DECRETAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Es inexacto que el tribunal de apelación deba decretar el litisconsorcio pasivo necesario y mandar llamar a juicio al copropietario del bien inmueble objeto de la acción reivindicatoria, cuando el otro copartícipe comparezca a juicio a reclamar para sí la declaración judicial en el sentido de que tiene el dominio sobre una fracción de ese predio en calidad de dueño, pues en tal caso, ante la inasistencia del condueño y la omisión por parte del a quo en considerar dicha

circunstancia al momento de emitir el fallo recurrido, en examen del agravio vertido en apelación este debe declararse fundado por cuanto a la falta de comparecencia del copropietario para, en plenitud de jurisdicción, declarar la falta de legitimación activa del accionante, dado que en la especie se está en presencia de un derecho que no pertenece a quien lo ejercita, es decir, que no se ejecuta por su titular legítimo pues éste resulta ser la comunidad, suscitando así referida la carencia de legitimación, más no el aducido litisconsorcio pasivo necesario, pues en ese caso no está en duda que el derecho se ejercita por su titular y contra los obligados legítimos, estribando su defecto en la existencia de otros sujetos que al igual que los contendientes tienen que intervenir en juicio dada su estrecha vinculación con las especiales circunstancias que originan el procedimiento, lo cual no acontece en el caso concreto y sí en cambio, surge la falta de legitimación activa, ya que si bien el condueño puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en tratándose de la acción reivindicatoria solamente puede ejercitarla para obtener la declaración de dominio sobre el inmueble en copropiedad en favor de toda la comunidad y no para sí. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 146/01, relativo al Juicio Ordinario Civil número 591/00, promovido por G.D.L.G.P. en contra de R.E.S. Sentencia emitida el 23 de mayo de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

92. MEDIOS PREPARATORIOS DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 1391 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NECESIDAD DE ANEXAR A LA DEMANDA PRINCIPAL LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS. Si el actor de un Juicio Ejecutivo Mercantil, previo a este, tramitó Medios Preparatorios de Juicio en términos del artículo 1162 de nuestro Código de Comercio, -precepto que dicho sea de paso, a diferencia del 1165 del código en consulta también puede aplicarse cuando no existe documento que reconocer- respecto de su ahora demandada, no cabe duda que al promover el juicio principal debió, partiendo del supuesto de que en los mismos se contenga la aceptación del adeudo como su origen, acompañar copias certificadas de aquellos, toda vez que conforme a la indicada fracción VII del artículo 1391 de nuestro Código de Comercio, es requisito para la procedencia de la vía ejecutiva, el que la demanda se funde entre otros, en facturas firmadas y además, reconocidas judicialmente por el deudor, resultando de ello que es gracias a los medios preparatorios que contienen el reconocimiento, que la factura respectiva logra alcanzar la calidad de título ejecutivo, conformado por ambos, pues el aceptar que la factura por sí sola puede tornarse en documento con aparejada ejecución sería aceptar que ninguna razón de ser tendría entonces la tramitación de los medios preparatorios de que se habla, como viceversa, de estimarse que las copias certificadas de los medios preparatorios por sí solas son suficientes para fundamentar la vía ejecutiva, cuando en los mismos, se aclara, ha operado el reconocimiento en sí de un documento, no podría entonces aplicarse nunca la fracción VII del artículo 1391 invocado. No siendo óbice para todo lo anterior el hecho de que el juicio principal se deduzca del expediente relativo a los medios preparatorios, ni que a la

misma autoridad le haya tocado conocer de ambos procedimientos, ni que hayan intervenido en ellos las mismas personas, pues la autoridad del conocimiento a diferencia de la parte reo, sí podría en un momento dado sin mayor problema consultar el procedimiento preparatorio respectivo, por constituir ello un hecho notorio del que tiene conocimiento por razón de su encargo, mientras que la parte demandada a efecto de preparar bien su defensa, se vería en la necesidad de acudir al local del juzgado a proveerse de las constancias relativas a los medios preparatorios para analizar cada uno de los aspectos contenidos en los mismos, para así, encontrarse en posibilidad de controvertir entre otras cosas, la procedencia de la vía, vulnerándose de esa manera su derecho de defensa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 613/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por C.M., S.A. DE C.V. en contra de A.B.S.B.D.C., S.A. DE C.V. Sentencia emitida el 28 de junio de 2004. Magistrado: José Patricio González Martínez.

93. NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR JUDICIAL, ES IMPROCEDENTE EL. Si en un Juicio Ordinario Mercantil se reclama como acción principal la nulidad de una asamblea general de accionistas (en la cual se acordó la revocación del consejo de administración en funciones y se realizó el nombramiento de un nuevo consejo de administración) dentro del cual se ordenó la suspensión de la ejecución de asamblea impugnada conforme lo disponen los artículos 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en estas condiciones, es evidente que el nuevo consejo de administración designado, no podía entrar en funciones, atendiendo precisamente a la suspensión de la ejecución de dicha asamblea (decretada por el juez), sin embargo, ello no significa que el juez de la causa se encuentre facultado para designar un interventor que represente a la sociedad mercantil, pues el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone lo siguiente: “Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos”; es decir, conforme a lo dispuesto por dicho numeral, el nuevo consejo de administración designado en la asamblea general de accionistas objetada de nula, no podía entrar en funciones, ello en virtud de la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, por lo cual, es indudablemente que quien debe continuar en la administración de la sociedad mercantil accionante, es el consejo de administración en funciones hasta antes de la celebración de la asamblea impugnada, lo anterior de acuerdo a una correcta interpretación al contenido de los artículos 142 y 154 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en artículo número 527/2002. Juicio Ordinario Mercantil número 514/2002. J. R. Q. M. Vs. A.P. G. M. S.A. de C.V. y A.P. G. R. I. Sentencia: 04 de diciembre del 2003. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

94. NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL INCUMPLIMIENTO DEL DEMANDADO EN BASE A MENSUALIDADES QUE NO ESTAN APROPIADAMENTE DESGLOSADAS POR EL CONTADOR DEL BANCO ACREEDOR. Si el propósito de exhibir dentro de un Juicio Ordinario Mercantil una certificación contable es que el demandado tenga conocimiento de su estado de adeudo con base a las apreciaciones que realiza el contador y que arrojan como resultado lo que se reclama en la demanda, se concluye que no es posible considerar el incumplimiento del demandado en base a mensualidades que no están apropiadamente desglosadas por el Contador del Banco acreedor y que por si solas no vienen a constituir el total de las reclamaciones formuladas por el actor ni mucho menos arrojar el monto económico que exige el promovente, lo anterior no obstante de que se esté en presencia de un Juicio Ordinario Mercantil, pues es factible exhibir en este tipo de juicios un estado de cuenta certificado, cuando se quiera demostrar el saldo restante, esto a fin de demostrar los desgloses correspondientes a través de los cuales se pueda arribar a las sumas reclamadas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 330/2003.- Expediente Judicial 798/2002 relativo al J.O.M, promovido por BBVA B., S.A., I. B. M. G. F. BBVA en contra de M.A.R.A y Otra. Sentencia emitida en fecha 14 de Septiembre del 2004.- Amparo Directo 192/2004.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

95. NO EXISTE MEDIO DIRECTO PARA CONOCER LA CONDICIÓN RELATIVA A LA COMPETENCIA DEL JUEZ QUE DEBE DE CONOCER DE LAS CONTROVESIAS SUSCITADAS EN UN CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO. Al haberse celebrado el contrato de arrendamiento en forma verbal, no existe por lo tanto un medio directo para conocer sobre las condiciones convenidas por las partes en el referido contrato, específicamente la relativa a la competencia del juez que en su caso debe de conocer de las controversias que se pudiesen suscitar respecto de dicho acto jurídico, y ante el cual se deba exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato; por lo que al encontrarse el domicilio del inmueble objeto del arrendamiento en otra Ciudad diferente a la en que se plantea el juicio en atención a lo previsto en el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado fracción III en el que se señala que es juez competente el de la ubicación de la cosa se considera que quien es competente para conocer del presente juicio lo es el Juez de aquella Ciudad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 131/2002.- Expediente 768/2000. J.E.A. promovido por L.G.V.G. en contra de D.L.V.H..- Sentencia emitida el día 27 de junio del 2001.- Amparo Directo No. 97/2002.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

96. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTO DE ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NATURAL. ES LEGAL LA REALIZADA FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN QUE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL EN EL

ESTADO, LE OTORGA AL JUEZ. En esos condiciones, es claro que en los juicios mercantiles no tiene porque librarse "despacho" encomendando la diligencia a otra autoridad, ya que en el caso particular el demandado tiene su domicilio en un municipio que se encuentra dentro de la jurisdicción del juez de origen, atento a lo dispuesto en el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, y si bien es cierto, el artículo 1071 del Código de Comercio, establece que: "cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación y citación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquella residiere...", una correcta interpretación de la expresión "fuera del lugar del juicio" contenida en dicho numeral, debe entenderse como fuera de la jurisdicción territorial del juez que conoce del asunto y ordena la notificación. Siendo que además, nuestro más alto Tribunal mediante jurisprudencia por contradicción de tesis a sustentado el anterior criterio, citando también que la notificación realizada por medio de actuario adscrito ofrece mayor certeza a las partes y es acorde a los principios de economía procesal, de concentración y de inmediatez. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en artículo número 206/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por H.G.A.L. en su carácter de endosatario en procuración de S.A. de C.V. en contra de R.A.P. Sentencia emitida el 8 de Julio de 2002. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

97. NULIDAD DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE POR FALTA DE FORMALIDAD. EL JUEZ NO PUEDE ESTUDIARLA SI EN EL JUICIO CIVIL SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO SE PLANTEÓ VÍA ACCIÓN O EXCEPCIÓN. Si en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de compraventa privado de bien inmueble, donde además se reconvino por la demandada la nulidad de tal contrato, determinó en su sentencia el juzgador que se justificó la existencia de la compraventa al haberse convenido sobre la cosa y el precio, sin que la actora justificara el cumplimiento de su obligación, siendo así improcedente la acción intentada, en tanto que se estimó igualmente la no justificación de los hechos en que se sustentó la nulidad planteada en la reconvención, es inconcuso que resulta improcedente el agravio que en la apelación plantea la demandada en el sentido de que debió advertirse por el juzgador que el contrato privado de compraventa de inmueble base de la acción resultaba nulo al no haberse otorgado la formalidad requerida, esto es, que no se otorgó en escritura pública, pues en base a tal circunstancia no se sustentó la acción reconvencional deducida en autos. En efecto, la autoridad natural no podía abordar oficiosamente en su resolución el estudio de la falta de forma del documento base de la acción, si ello no le fue pedido por la parte demandada en su acción reconvencional o a título de excepción, puesto que la reconvención planteada en el juicio se sustentó en hechos de índole diversa, además de que, siendo el procedimiento civil preponderantemente dispositivo, en la materia del caso, la autoridad judicial no puede otorgar más de lo que las partes le solicitaron, ya que frente a la facultad y libertad de los gobernados para que soliciten lo que se quiere, está el impedimento de los tribunales para realizar peticiones por el litigante, pues de no

procederse en tal forma, se transgredería en la sentencia el principio de congruencia que debe existir en la resolución que pone fin al negocio, con relación a las acciones deducidas y las excepciones opuestas, así como con respecto a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. Determinándose entonces que si bien la falta de otorgamiento de escritura pública de una operación de compraventa de inmueble cuyo valor excede a la cantidad que señala el Código Civil del Estado, implica una nulidad relativa, no menos cierto es que la nulidad en esos términos prevista en la ley debe de solicitarse se declare judicialmente por la parte que corresponda, pues el diverso artículo 2123 del Código Civil de la entidad establece que la acción y la excepción por falta de forma compete a todos los interesados, no encontrándonos en los casos en que el legislador ha establecido un tipo de nulidad que, por su trascendencia en el aspecto social de la comunidad y trasgresión del orden público (como en el caso del juego prohibido) deba de considerarse determinada operación por parte del órgano jurisdiccional como nula de pleno derecho. De aceptarse una posición contraria a lo expuesto, se obtendría un caos en la sociedad al quedar nugatorios los derechos de las personas que lleguen a otorgar contratos privados de compraventa de inmuebles, pues se concluiría que cualquier particular que cumpla con lo convenido en un contrato de tal naturaleza no podría acudir a la autoridad judicial a reclamar de la otra parte el cumplimiento del acuerdo de voluntades, sobre todo en el caso de la parte compradora quien nunca podría obtener que se le otorgara el contrato en escritura pública porque al presentarle la demanda a la autoridad judicial competente, ésta declararía de manera oficiosa que no le asiste acción porque el documento en que se sustentaría la pretensión carece de la formalidad que impone la ley; todo lo cual, se insiste, no se ajusta a lo establecido en la ley. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 171/98, relativo al juicio ordinario civil número 812/96, promovido por B.G.V.G., por sus propios derechos, en contra de M. del S.G. Viuda de G.- Sentencia emitida el 25 de Marzo de 1999.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

98. OBLIGACIÓN SOLIDARIA. EXISTE CUANDO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE ESTIPULA DICHA OBLIGACIÓN Y SE SUSCRIBE CON ESA CALIDAD UN ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO. Si bien es cierto al celebrarse el contrato de arrendamiento financiero base de la acción, no se señaló el nombre ni firma del fiador, ni en el proemio, ni en la cláusula vigésima tercera, relativa a la obligación solidaria, ni al rubro que al margen del contrato dice fiador (a) (es) (as); también lo es que la actora acompañó los anexos que forman parte integrante de ese contrato, suscritos por los demandados conforme a lo pactado en dicho acuerdo de voluntades, en los que se describen los bienes objeto de arrendamiento, el monto de las rentas y el plazo, documentales a las cuales por no haber sido impugnadas legalmente se les otorgó por el a quo eficacia probatoria plena de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1296 del Código de Comercio, y que a juicio de la suscrita ad quem al encontrarse suscritas por el señor J. L. C. como arrendatario y la señora F. E. R. A. como fiadora solidaria, acreditan el

consentimiento expreso de la codemandada para obligarse solidariamente conforme a lo convenido en la cláusula vigésima tercera del mencionado acuerdo de voluntades, perfeccionándose la obligación solidaria a que se sometió acorde a los artículos 1796, 1797, y 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia Federal, con todo lo cual se justifica debidamente la legitimación pasiva de la referida codemandada, por lo que resulta evidente que las obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento fundatorio de la demanda se hacen extensivas a la parte reo F. E. R. A., con la calidad indicada y se demuestra la vía ejecutiva en contra de ésta. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 244/2001, relativo al J. E. M. promovido por G.F.M.M. en contra de J.L.C. y Otra. Sentencia emitida el 31 de octubre de 2001, Confirmado en amparo directo 179/2002/3-III relacionado al amparo directo 178/2002/3-III, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

99. ÓRGANO VISUAL, PÉRDIDA TOTAL DEL. La pérdida total de un solo ojo, como acontece en el caso concreto, no puede ser considerada como una simple perturbación de una función o de un órgano, puesto que uno de los ojos por si mismo constituye un órgano. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en artículo número 236/2003, relativo al proceso número 103/2001, instruido en contra de L.E.C.A. por el delito de Lesiones. Sentencia emitida el 28 de Noviembre de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

100. OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CUANDO LA COMPRAVENTA RECAE EN UNA CASA CUYA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR FUE POR MEDIO DE UN CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT. Cuando en un juicio se demanda el otorgamiento de escrituras, de una casa habitación que adquirió el vendedor a través de un crédito otorgado por el Infonavit cuyo plazo aún no vence, es improcedente la demanda ejercitada, ya que el artículo 49 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda contiene prohibición expresa para el trabajador de enajenar el bien inmueble adquirido por virtud de ese crédito; por lo tanto, el contrato de compraventa acompañado como base de la acción no surte efectos por contravenir lo dispuesto en el artículo en mención, cuya observancia general es de orden público y de carácter obligatorio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 233/99, relativo al juicio Ordinario Civil número 138/99, promovido por RG.L. y M.I.R.C. en contra de P.L.F. Sentencia emitida el 20 de Marzo de 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

101. PAGARÉ. CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE "FECHA Y LUGAR DE SUSCRIPCIÓN" PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 170 DE

LA LEY RELATIVA. Entre los requisitos que debe contener el título de crédito denominado pagaré, se tiene que la fracción V del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor, establece el relativo a "la fecha y el lugar en que se suscriba el documento". La recta interpretación de tal disposición nos conduce a estimar que lo que exige la ley es que se contengan en el texto del documento ambos extremos, es decir, tanto la fecha en que se suscribe el título, como el lugar en que ello mismo se realiza, sin que la conjunción "y" contenida en dicha fracción implique el que tales datos deban encontrarse necesariamente unidos o juntos en el cuerpo del documento, para su legal eficacia. Por tanto, si en un caso el documento pagaré que se presenta en juicio contiene en la parte superior izquierda de su texto una fecha específica, luego de lo cual se asentó la obligación incondicional de pagar una suma determinada de dinero en una fecha y lugar, para finalmente aludirse en la parte inferior derecha del texto a la ciudad de "Monterrey, N.L.", es evidente que en ésa forma se cumple con los extremos contenidos en la fracción V del artículo 170 antes mencionado, toda vez que la propia lectura del documento revela que la fecha establecida en la parte superior izquierda de su texto sólo pudo corresponder a la fecha de suscripción y la ciudad mencionada en la parte inferior derecha del título al lugar en que se realizó la misma." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 430/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 996/2000, promovido por M.L.G.S., como Endosatario en Procuración de M.L.M. en contra de O.V.G.C.- Sentencia emitida el 4 de Diciembre de 2001. Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

102. PAGARE. FECHA DE SUSCRIPCIÓN COMO PUEDE TENERSE POR SATISFECHO ESTE REQUISITO. Cuando en un título de crédito denominado pagaré se establece lo siguiente: "FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06 02 95", debe concluirse que el mencionado documento mercantil fue suscrito el día 6-seis de Febrero de 1995-mil novecientos noventa y cinco, sin que por ello sea dable entender que por el solo hecho de hacer constar en esa forma la fecha señalada, ésta deba considerarse como una simple enumeración como lo expone la demandada, pues si bien es cierto que la sola mención de números insertados en un título de crédito puede dar lugar a diversas interpretaciones, no menos verdad resulta que ello no acontece cuando como en el caso, dicha enumeración aparece en un recuadro bajo el rubro de "FECHA DE SUSCRIPCIÓN", pues esa circunstancia revela la intención de las partes de satisfacer el requisito contenido en la fracción V del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a través de la relación de números que enseguida de tal referencia se asentó en el título de crédito, además, la función que en el documento crediticio juegan esos números impide que éstos sean interpretados de manera diversa al objeto por el cual se insertaron en el título que no puede ser otro que indicar la fecha en que se suscribió el documento fundatorio de la acción, y es esto último lo que sí puede ser materia de diversas interpretaciones, ya que se puede sostener que la fecha de suscripción fue el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, como lo señala la actora en la demanda, o bien el día dos de junio del mismo año; sin embargo, es un uso mercantil en este país, el

que los primeros dígitos se refieran al día, los segundos al mes y los últimos al año. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 411/1998, relativo al Expediente Judicial número 1208/95, promovido por J. E. T. G. en contra de V. S.A. de C.V. y O. P. B. C. Sentencia emitida el 21 de Octubre de 2002. Amparo Directo número 222/2003. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

103. PAGARÉ. NO RESULTA A LA VISTA EL VENCIMIENTO DEL QUE SE ADJUNTA AL JUICIO POR SER EL PRIMERO DE UNA SERIE DE ELLOS. Si la demanda de un juicio ejecutivo mercantil se sustentó en un sólo pagaré suscrito en fecha determinada, contando igualmente con día fijo de vencimiento, estableciéndose en su contenido que el mismo resultaba ser el primero de una serie de ocho pagarés con vencimientos sucesivos, en el entendido de que de no cubrirse los dos primeros de esa serie, los demás se vencerían anticipadamente; es indudable que el pagaré en tales términos adjuntado al procedimiento no resulta pagadero a la vista al contar con día fijo para su vencimiento, pues de haberse actualizado el incumplimiento en el pago de los primeros dos títulos que integran la serie de pagarés, solamente se considerarán como con vencimiento a la vista del tercero de los documentos y hasta el último de ellos, por aplicación del último párrafo del artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues los primeros dos títulos emitidos de dicha serie se regirían en su vencimiento, en su caso, por la fracción IV del propio numeral, por haberse establecido en ellos un día fijo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 19/99, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 326/98 promovido por J.M. de la G.M. Garza contra M.H., S.A. DE C.V. Sentencia emitida el 19 de mayo de 1999.- Magistrado: Jaime Ricardo Espinosa Carreón.

104. PAGARÉS A LA VISTA. NO PRESCRIBE LA ACCIÓN CAMBIARIA SI NO SE EXIGE SU COBRO JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO DE SEIS MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. El artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (aplicable al pagaré) establece que la letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha, en tanto que el numeral 165 de la misma ley dispone que la acción cambiaria prescribe en tres años contados a partir del día del vencimiento de la letra o, en su defecto, desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128 de la misma ley. Por lo tanto, si en juicio ejecutivo mercantil se ejercitó la acción cambiaria directa con sustento en pagarés con vencimientos a la vista y se cumplió el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de expedición de los títulos, será a partir de aquél que empezará a correr el término de tres años para la prescripción que podría perjudicar la acción cambiaria directa, supuesto que en el caso no aconteció al haberse planteado la demanda dentro de dicho término, permaneciendo entonces expedita la acción que pretenda el cobro judicial, pues el término

de seis meses para la presentación de los documentos al deudor es para el efecto de que éste verifique el pago, como mera potestad de exigirle su cobro en dicho término, facultad misma establecida en el artículo 128 de la ley citada que no implica el que, de no presentarse los documentos al deudor en los seis meses indicados, se estime luego en el juicio prescrita la acción cambiaria deducida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA .Toca de apelación en definitiva número 1377/97, relativo al juicio ordinario mercantil número 3414/95, promovido por J.H.C.C., por sus propios derechos, en contra de C.R.H.C. y A.S.V.C.- Sentencia emitida el 30 de Abril de 1999.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

105. PAGO. LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA POR UNA ASEGURADORA POR ERROR A PERSONA DIVERSA DEL BENEFICIARIO, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO. De conformidad con el artículo 2062 del Código Civil federal, el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido, y acorde con los diversos numerales 2073 y 2074 de la misma codificación, el pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo, y el que se hubiere hecho a un tercero solo extinguirá la obligación si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, además de aquellos casos en que la ley lo determina expresamente. En esa tesitura, si al amparo de una reclamación derivada de un siniestro cubierto por un contrato de seguro, la compañía aseguradora expide el cheque por la cantidad determinada a título de indemnización, errando en una letra del apellido de la beneficiaria, lo que provoca que éste sea cobrado por diversa persona a la indicada, es evidente que no puede estimarse satisfecha su obligación de pago, pues no se hizo al acreedor o a su representante legítimo, ni al ser realizado a un tercero se convino o consintió por aquél, encontrándose además ajeno a todo supuesto legal; por lo que en esas condiciones, debe condenarse a la empresa de seguros a pagar la suma asegurada a quien verdaderamente resulta su acreedor. Máxime si, como ocurre, dicha aseguradora no entregó el referido título de crédito al asegurado o al beneficiario, sino al contratante del seguro que no poseía ninguna de esas calidades. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 644/01, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por H. G. T. en contra de S. M. A. S. A DE C. V. Sentencia emitida el 25 de Junio de 2003. Magistrado: José Patricio González Martínez.

106. PENSIÓN RENTARIA. LA QUE APARECE EN UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES FACTIBLE DESVIRTUARLA A TRAVÉS DE DIVERSOS ELEMENTOS CONVICTIVOS. El conjunto de recibos de rentas expedidos por el arrendador por una cantidad menor a la que aparece en el contrato de arrendamiento base de la acción y presentados en juicio por el inquilino, los cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los diversos numerales 297 y 373 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello al no haber sido objetados por el arrendador demandante, en relación con las constancias relativas a las Diligencias de Consignación de Rentas promovidas por el arrendatario demandado a favor del arrendador, mediante las cuales de ninguna parte se pone de manifiesto la inconformidad del arrendador beneficiario respecto del monto depositado a su favor por el concepto señalado, sino que antes al contrario, se limita a autorizar a diversos profesionistas en Derecho para recibir en su nombre los respectivos certificados de depósito, en adición a la confesión vertida por este último, a través de la cual reconoció haber recibido a su entera satisfacción las cantidades consignadas por concepto de rentas de diversos meses y que por cierto cada una de ellas ascendían al mismo monto apuntado en los recibos de pago previamente mencionados, hace que se llegue a la conclusión de que la cantidad que aparece en el contrato de arrendamiento por concepto de rentas, puede ser desvirtuada a través de elementos de prueba diversos al contrato mismo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 394/2001, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por C. Z. D. en contra de G. G. G. y J. S. V. Sentencia emitida el 28 de Septiembre de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

107. PERSONALIDAD. LA FACULTAD DE SUBSANARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1126 DEL CODIGO DE COMERCIO, NO AUTORIZA AL INCIDENTISTA A PROMOVERLO NUEVAMENTE, CUANDO PRETENDA OBJETAR UNA DOCUMENTAL EXHIBIDA POR LA CONTRAPARTE AL DESAHOGAR LA VISTA RESPECTIVA. Si bien es cierto, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral de referencia, cuando se declara fundada la excepción de falta de personalidad del actor, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para ese efecto, tal disposición no faculta a la parte incidentista para promover de nueva cuenta incidencia sobre tal aspecto, cuando su única finalidad estriba en objetar el instrumento allegado de propia autoridad, por el contrario, al momento de desahogar la vista ordenada con motivo de la aludida excepción, ello en razón de que dicho presupuesto procesal goza de la unicidad que lógicamente conlleva el ser referido a una sola parte actora formal, así se justifique con varios documentos y de admitirse tal incidente, se llegaría al extremo de que se promovieran tantos como instrumentales exhibiera el demandante para justificar su personalidad, pugnando abiertamente contra el principio de celeridad procesal, aunado al inherente riesgo de contradicción o antinomia en el sentido de las resoluciones que sobre los mismos se emitan. En esa virtud, la impugnación al documento adjunto al desahogo de vista deberá realizarse dentro del propio incidente original, máxime cuando la autoridad primaria determinó correr traslado de dicha promoción al incidentista. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 213/01, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por J. L. N. V. en contra de M. M., S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 22 de Agosto de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

108. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. ES APTA PARA PRODUCIRLA EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, Y ES OPTATIVO PARA EL ACTOR PROMOVER LA USUCAPION, O EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA. En un juicio de prescripción adquisitiva en donde la causa generadora de la posesión se hace consistir en un contrato privado de compraventa, y donde además se acreditan todos los elementos necesarios para prescribir, debe decretarse la procedencia de la acción conforme a lo dispuesto por los artículos 1148 y 1153 del código civil de la entidad; siendo indebido pretender someter al promovente para que demande el otorgamiento de escritura, puesto que tales acciones no son contradictorias ni subsidiarias, y por ende pueden subsistir ambas. En ese sentido y tratándose de acciones alternativas, es optativo para el promovente ejercitar la que más le convenga, pero esa elección únicamente le compete a el, y por lo tanto no puede ser compelido por el juez para intentar una u otra; por lo tanto, resulta indebido que la Juez de primer grado haya impuesto a los promoventes la obligación de ejercitar la acción de otorgamiento de escrituras; máxime que ello no fue materia de excepción por parte de los demandados y por ende, no formó parte de la litis natural, pues de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. De tal suerte que al resolver la A quo de la forma en que lo hizo, introduciendo cuestiones ajenas a la litis planteada y omitiendo entrar al estudio del fondo de la controversia, resulta incongruente la sentencia de primer grado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 140/99, relativo al juicio ordinario civil número 1404/98, promovido por J.G.M.C. y N.G.D.M., en contra de R.R.G.V.D.V.- Sentencia emitida el 29-veintinueve de febrero del 2000- Magistrado: José Patricio González Martínez.

109. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PRETENDE USUCAPIR UN INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE PATRIMONIO FAMILIAR. La acción de prescripción adquisitiva es improcedente cuando el inmueble que se pretende usucapir se encuentra sujeto al régimen de patrimonio familiar establecido en los artículos 723 y 724 del Código Civil del Estado, ya que los bienes sujetos al mismo son inalienables y no están sujetos a embargos ni gravámenes, lo que los hace que se encuentren fuera del comercio y por lo tanto resultan imprescriptibles en los términos del artículo 1134 del Código sustantivo citado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 110/02, relativo al Juicio Ordinario Civil número 364/01, promovido por B. J. V. y G. R. R. por sus propios derechos en contra de A. P. V. y D. M. R. Sentencia emitida el 31 de Julio de 2002. Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

110. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE PUEDA PROSPERAR NO BASTA CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DADO QUE ÉSTA DEBE PROBARSE IDÓNEA Y JURÍDICAMENTE. De una interpretación objetiva y sistemática de los artículos 826 y 1148 del Código Civil del Estado, se sigue que la posesión necesaria para la usucapión debe ejercerse en concepto de dueño, pacífica, continua y pública. De ahí que tales dispositivos establezcan, en cuanto condición previa o uno de los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva, que el bien a usucapir se posea con el carácter de propietario, circunstancia o situación que se adquiere y disfruta si se actualizare el concepto de dueño de la cosa; de consiguiente, cuando se intente la usucapión es menester que el actor posea el inmueble en concepto de propietario, y así, no basta con revelar la causa generadora de la posesión para tener por acreditado ese requisito, sino que ha de comprobarse ese elemental aspecto, o sea, el acto jurídico o hecho que otorgue tal aptitud de ser dueño, porque únicamente ello permite diferenciar una posesión originaria de otra derivada o precaria. De ahí que si no queda perfeccionado idónea y jurídicamente con medio de convicción alguno tal acto o el hecho relativo, no puede tenerse por justificada fehacientemente esa causa generadora de la posesión, ni por justificada fáctica y jurídicamente la usucapión intentada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 188/2004, relativo al Expediente Judicial número 285/2003 formado con motivo del Juicio Ordinario Civil, promovido por H. M. P. por sus propios derechos en contra de R. M. P. y A. A. C. M. Sentencia emitida el 8 de Junio de 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

111. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA SATISFECHO EL REQUISITO DE LA EXISTENCIA DE LA "POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO" EXIGIDO POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO, ES NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TÍTULO DEL QUE SE DERIVE LA POSESIÓN. De acuerdo con lo establecido por los artículos 826, 1148, fracción I, y 1149 del Código Civil, para usucapir un bien INMUEBLE, es necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto de dueño o de propietario. Este requisito exige no sólo la exteriorización del dominio sobre el inmueble mediante la ejecución de actos que revelen su comportamiento como dueño mandando sobre él y disfrutando del mismo con exclusión de los demás, sino que también exige se acredite el origen de la posesión pues al ser el concepto de propietario o de dueño un elemento constitutivo de la acción, el actor debe probar, con fundamento en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que inició la posesión con motivo de un título apto para trasladarle el dominio, que puede constituir un hecho lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que fundadamente se crea que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es precaria o derivada. Por tanto, no basta para usucapir, la sola posesión del inmueble y el comportamiento de dueño del mismo en un momento determinado, pues ello no excluye la posibilidad que inicialmente esa posesión hubiere sido derivada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número

188/2004, relativo al Expediente Judicial número 285/2003 formado con motivo del Juicio Ordinario Civil, promovido por H. M. P. por sus propios derechos en contra de R. M. P. y A. A. C. M. Sentencia emitida el 8 de Junio de 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

112. PRESCIPCIÓN DE ACCIONES CONTRA CASAS DE BOLSA O AGENTES DE LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 1403 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE COMERCIO ES APLICABLE AUN Y CUANDO DICHAS INSTITUCIONES HAYAN SIDO CREADAS CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE ESA NORMA SUSTANTIVA. Al demandarse la responsabilidad civil subjetiva bajo la modalidad de la subsidiaridad, derivada de una operación celebrada por una Casa de Bolsa con la clientela inversionista, ello con motivo de un contrato de intermediación bursátil, dicha acción posee correspondencia con la prevista en la fracción IV del numeral 1043 del Código de Comercio, toda vez que en tal apartado se hacer referencia a las acciones que tengan por objeto exigir la responsabilidad de los agentes de bolsa o corredores de comercio por los actos en que intervengan en razón de su oficio. En esa tesitura, la responsabilidad que se les reclama a los demandados, proviene del ejercicio de un contrato bursátil que interesa del todo su oficio o rango de actuar, atendiendo a una lectura integral de la Ley del Mercado de Valores. Ante ese panorama, es dable el apuntar que la mencionada fracción IV del artículo 1043 mencionado, sólo hace alusión a los agentes de bolsa o corredores de comercio, referencia que se interpreta como extensiva a las Casas de Bolsa y a sus derivadas, dado que el dispositivo legal que se analiza se estableció en el Código de Comercio desde su origen, el cual entró en vigor a partir del primero de enero de mil ochocientos noventa, fecha en que aún no existían en nuestra legislación las figuras atingentes a las Casas de Bolsas y sus subsidiarias o derivadas, las cuales emergen de la Ley del Mercado de Valores publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2-dos de enero de 1975-mil novecientos setenta y cinco. De ahí que se considere que tal hipótesis de prescripción debe hacerse extensiva a las anotadas Casas de Bolsa y sus subsidiarias, al efectuar éstas actividades que guardan profunda identidad a las contenidas en el precepto en cita. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 260/1997, relativo al Juicio Ordinario Mercantil número 366/1995, promovido por R. G. A. en contra de A. C. B., S.A. DE C.V. y otros. Sentencia emitida en fecha 16-dieciséis de octubre de 2002-dos mil tres. Magistrado: Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. NOTA: Al ser confirmado el fallo de segundo grado del que derivó dicha sinopsis, el Tribunal Colegiado del conocimiento, sosteniendo el criterio adoptado por esta Alzada, denunció la existencia de una contradicción de tesis sobre ese tópico, misma que aún se encuentra pendiente de ser resuelta.

113. PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES MANCOMUNADAS, EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LA

PERSONA CONTRA QUIEN SE PRESCRIBE SOLAMENTE PERJUDICA AL OBLIGADO QUE LA REALIZA. Si en inicio ejecutivo civil se reclama el pago de determinada suma de dinero respecto de un adeudo con una antigüedad mayor del tiempo señalado por la ley para su prescripción liberatoria, habiendo constancia de que uno de los dos coobligados efectuó un pago parcial y reconoció además el derecho de pago de su acreedor, ello basta para considerar interrumpida la prescripción en términos del artículo 1165 fracción III del Código Civil estatal, inutilizando todo el tiempo corrido antes de ella conforme a lo prevenido por el diverso 1172 del mismo ordenamiento jurídico, e iniciando a partir de entonces de nueva cuenta el plazo para la prescripción; sin embargo, cuando del texto del convenio de reconocimiento de adeudo en escritura pública base de la acción no se observa que la obligación de pago ahí consignada se haya asumido en forma solidaria, ni es un caso en que la ley imponga dicha modalidad, debe convenirse que se está en presencia de una obligación sujeta a simple mancomunidad de deudores, acorde a lo preceptuado por el numeral 1878 de la legislación de referencia, de suerte que la causal de interrupción de que se habló únicamente produjo esos efectos en relación al coobligado que efectúo el reconocimiento, quedando subsistente su obligación de pago en la medida que la distribución a prorrata del adeudo reconocido en el consenso fundatorio corresponda por partes iguales, es decir, la mitad de la cantidad debida, más no en lo que hace al otro coobligado, respecto de quien si se consumó la prescripción negativa aducida liberándolo de la obligación, ya que de conformidad con el artículo 1170 del Código Civil, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de todos, supuesto en que según se vio, no incide el justiciable. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 178/01, relativo al Juicio Ejecutivo Civil número 664/00, promovido por J.I.P.R. en contra de E.L.C. y O.D.G. Sentencia emitida el 23 de mayo de 2001. Magistrado: José Patricio González Martínez.

114. PRESCRIPCIÓN. EL JUZGADOR NO PUEDE OFICIOSAMENTE DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. Es incorrecto decretar de oficio la prescripción de la acción cambiara derivada de un título de crédito, ya que de conformidad con el artículo 8 fracción X de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, dicha excepción puede oponerla el interesado y no existe precepto legal alguno que autorice a considerar oficiosamente su estudio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 561/01, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 810/01, promovido por S. S. B. como Endosatario en Procuración de M. y A. I., S. A. de C. V. en contra de L. E. J. M. Sentencia emitida el 14 de Marzo de 2002. Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

115. PRIMAS DE SEGUROS. CUANDO LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREDITANTE NO DEMUESTRA HABER CELEBRADO EL CONTRATO DE SEGURO ES IMPROCEDENTE EL COBRO DE LAS. Cuando dentro del

contrato de apertura de crédito base del juicio ejecutivo mercantil, la institución de crédito acreditante se obligó a contratar por cuenta del acreditado un seguro en garantía de pago del crédito otorgado y por su parte el acreditado se obligó a cubrir las primas de seguro respectivas, no obstante que conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, los contratos o pólizas en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por dicha institución, forman título ejecutivo, para reclamar el pago de las primas de seguros no basta que del contenido literal del estado de cuenta acompañado se advierta el desglose y saldo de las mismas, ni tampoco que de las probanzas aportadas se aprecie la realización de pagos por dicho concepto por el acreditado, ya que habiéndose estipulado que la institución de crédito acreditante se obligaba a contratar un seguro por el monto del crédito dispuesto y accesorios, para la procedencia de dicha prestación (pago de primas de seguros) era requisito indispensable haber demostrado la contratación del referido seguro, pues en tratándose de obligaciones recíprocas, a nadie puede obligarse al cumplimiento de una obligación, si no se demuestra el cumplimiento de la obligación contraída por su reclamante, acorde a lo dispuesto por el artículo 1949 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, aplicado supletoriamente a la Materia Mercantil. Lo anterior máxime si se toma en consideración que para el reclamo de las primas de seguros no es suficiente el contrato de crédito y el estado de cuenta certificado por el Contador facultado por la Institución de Crédito en vigor, ya que con el simple contrato de apertura de crédito, no se demuestra el cumplimiento de la obligación de la acreditada relativa a la de contratación de un seguro. Por lo tanto, en el supuesto antes indicado resulta improcedente el cobro de las primas de seguros. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 503/01, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por A.C.G. vs. R.L.D.S. Sentencia emitida el 31 de Enero de 2002. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

116. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. SE CUMPLE CUANDO SE CONDENA AL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES RECLAMADOS Y NO AL TIPO CONVENCIONALMENTE PACTADO EN EL TÍTULO. Estableciendo el artículo 1327 del Código de Comercio que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y en la contestación, y considerando, además, que la forma en que se intenta una acción se encuentra indisolublemente ligada a los términos en que se plantean las peticiones a la autoridad; se concluye en que es acertado el proceder del juez natural cuando, al fallar en definitiva y declarar procedente el Juicio Ejecutivo Mercantil, condena al demandado al pago de los intereses moratorios al tipo legal, según lo reclamado en el escrito inicial de demanda; tornándose así improsperable el agravio que en la alzada expone el actor recurrente, en el sentido de que se debió condenar al reo al pago de intereses moratorios conforme al interés mensual pactado en el título de crédito base de la acción, toda vez que de haber procedido de esta última forma la autoridad natural,

hubiera incurrido en una inobservancia al principio de congruencia que en el dictado de toda resolución judicial debe acatarse, dado que el pago de intereses reclamado se formuló al tipo legal y no al interés mensual contenido en el instrumento; y si bien no es dable soslayar la libertad de cada gobernado para que solicite lo que desea, no debe olvidarse que, frente a tal facultad, se encuentra su limitante, consistente en el impedimento del tribunal para realizar peticiones por el litigante, omitidas por éste en su demanda. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 27/99, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 292/97, promovido por R.R.S., en su carácter de endosatario en procuración de J.A.G.M., en contra de G.I.B., S.A. DE C.V. y otra.- Sentencia emitida el día 29 de Julio de 1999.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

117. PRUEBA TESTIMONIAL. SI LA MISMA TRASCIENDE EN EL RESULTADO DEL FALLO DICTADO, LA FALTA DE CITACIÓN A LOS TESTIGOS POR PARTE DEL JUEZ SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE PRODUCE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (LEGISLACIÓN REFORMADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El primer párrafo del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, establece las formalidades en que debe de llevarse a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por las partes, y que, entre otras, son que al examinar el juez el interrogatorio correspondiente y al admitir a trámite tal probanza, mandará dar copia de las preguntas a la contraparte, citando a lo testigos respectivos a más tardar el día anterior al en que deba desahogarse dicho elemento de convicción, y que la referida citación se realizará con el apercibimiento para el testigo de que en caso de que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a declarar, se decretará en su contra el arresto hasta por treinta y seis horas o multa hasta por treinta cuotas. Como es de verse, la citada disposición impone la obligación al juez del conocimiento, sin necesidad del impulso del oferente de la prueba, a ordenar al Actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio señalado como de los testigos, y los cite legalmente para el efecto de que comparezcan al local del juzgado en la fecha y hora indicada para que rindan su testimonio, apercibiéndolos de que en caso de no asistir sin justa causa se harán acreedores al arresto hasta por treinta y seis horas o de una multa hasta por treinta cuotas. Por lo tanto, si en el presente caso el juez admitió a trámite la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, pero omitió citar y prevenir a los testigos designados para tal efecto en la forma y términos que refiere el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ello se traduce en una clara violación al procedimiento, en virtud de que dejó en un total estado de indefensión al demandado impidiéndole la oportunidad de justificar sus excepciones, quien manifestó su intención de desahogar tal probanza desde el momento en que la anunció en su contestación y que acompañó el interrogatorio respectivo, así como al designar los nombres y domicilios de sus testigos, por lo que no existía razón para estimar que el citado elemento de convicción no se había desahogado por hechos imputables a su oferente como según lo señaló el juez de primer grado en la sentencia recurrida, ni para

declarar desierta dicha probanza, y con tal conducta el aquo conculcó en perjuicio del oferente de la prueba en comento la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, pues dicha probanza si tiene posibilidades de influir en el resultado del fallo dictado dentro del presente caso en que se actúa, ya que la misma fue ofrecida por el demandado con el fin de justificar la modificación del lugar de pago de la renta convenida dentro del contrato de arrendamiento materia de la presente controversia. Lo anterior se confirma con el criterio que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Novena Época. Instancia: Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. Tesis P/J. 47/95. Página 133.". Por lo que a fin de no violar en perjuicio del demandado la garantía de audiencia debe ordenarse al juez de primera instancia que deje sin efectos la sentencia impugnada y reponga el procedimiento en cuestión, para el único efecto de que se desahogue la prueba testimonial respectiva de acuerdo a las formalidades señaladas en el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que una vez desahogada la misma dicte una nueva sentencia conforme a derecho. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 410/2000, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento número 1553/97, promovido por R.Z.C. en contra de R.V.G.- Sentencia emitida el 18 de Julio de 2000. Magistrado: José Patricio González Martínez.

118. PRUEBAS. CUANDO SU FALTA DE DESAHOGO DEBE ESTIMARSE CONSENTIDA. El artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, señala que las diligencias que pedidas en tiempo no se hayan practicado por causas independientes del interesado o por caso fortuito, fuerza mayor o dolo de su contraparte, será recibidas en segunda instancia. A su vez el diverso numeral 449 del ordenamiento legal en cita, refiere que en los casos de apelación de sentencia definitiva, las partes, en su escrito de agravios podrán ofrecer únicamente las pruebas a que se refiere el citado artículo 233. De lo anterior se derivan dos cuestiones: la primera que aun cuando en el procedimiento natural, el a quo haya omitido desahogar una prueba legalmente propuesta por el ahora apelante, si éste no la ofrece al promover su recurso, dicha violación

procesal debe estimarse consentida, al incumplir con lo ordenado en los referidos preceptos y, la segunda, que no pueden admitirse en segunda instancia pruebas novedosas o diversas a aquéllas que habiendo sido propuestas en el juicio de origen no se hubiesen desahogado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 112/2003, relativo al Juicio Ordinario Civil número 761/1999, promovido por A. B. G. G. en su carácter de interventora de la sucesión a bienes de F. V. T. en contra de F. V. U y otros.

119. RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, CONSTITUYE UNA FORMA INNOMINADA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD, PERMITIDA POR LA LEY. En el capítulo Segundo del Título Primero denominado "Fuentes de las Obligaciones", de la Primera Parte titulada "De las Obligaciones en General" del Libro Cuarto del Código Civil de Nuevo León, encontramos las diversas formas nominadas de la declaración unilateral de la voluntad que como fuentes de las obligaciones contempla la legislación indicada, tales como la oferta hecha al público, la estipulación a favor de tercero, así como el otorgamiento de documentos civiles pagaderos a la orden o al portador; mientras que el artículo 1756 del mismo ordenamiento, localizado en el apartado denominado "Disposiciones Finales" del Capítulo Primero del Título antes señalado, dispone textualmente que: "Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se oponga al a naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos". De la interpretación armónica de las disposiciones legales aludidas se desprende que los tipos de declaración unilateral de la voluntad se encuentran previstos en la ley de manera enunciativa, más no restrictiva, puesto que al lado de las expresamente establecidas en la ley (formas nominadas), encontramos las formas innominadas de declaración unilateral de la voluntad. En efecto, conforme al principio de la autonomía de la voluntad, es indudable que el referir el citado artículo 1756 antes transcrito, que les disposiciones establecidas para los contratos se aplicarán a los convenios y a "otros actos jurídicos", el sentido del legislador no fue otro que el de prever la realización de una serie de actos jurídicos y contratos que la misma ley define específicamente, aceptando desde luego la posibilidad de efectuar "otros actos" como lo es una declaración multilateral de la voluntad, sin que el precepto en comento establezca como únicos tipos los que se enumeran en el propio ordenamiento, puesto que el legislador no pudo prever todas y cada una de las diversas relaciones que pudieran suscitarse entre los particulares, ello debido al progreso y desenvolvimiento mismo de las relaciones que surgen entre los integrantes de la sociedad a fin de ver satisfechos sus intereses. Por tanto, es inexacto el que se considere que por no comprenderse expresamente el "reconocimiento de adeudo" base de la acción de un juicio ejecutivo civil, dentro de las formas nominadas o típicas de declaración unilateral de la voluntad, carezca de dicho acto de eficacia legal, ya que el legislador dio pauta en el artículo 1756 citado, a la posibilidad de la existencia de "otros actos jurídicos" mediante los cuales sea factible adquirir o reconocer cierto tipo de obligaciones, a través de una manifestación unilateral de la voluntad del deudor, como aconteció en la especie; de ahí

que con independencia del origen de dicho reconocimiento y de que en el documento en que conste el mismo se le denomine como "contrato", dicho reconocimiento constituye una forma innominada o atípica de declaración unilateral de la voluntad que como fuente de las obligaciones no resulta prohibida por la legislación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en Definitiva Número 800/97, relativo al Juicio Ejecutivo Civil Número 93/94, promovido por C.M.M. en contra de J.A.L.C. Y A.E.G.G. DE L.- Sentencia emitida con fecha 12 de Junio de 1988.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

120. RENTA, EL MONTO DE LA, ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDE ACREDITARLA AL ARRENDATARIO CUANDO AFIRMA ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA MISMA, AUNQUE PARALELAMENTE A ELLO SE EXCEPCIONE EN EL SENTIDO DE QUE LA RENTA RECLAMADA NO ES EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES. Es obligación del arrendador como actor de un juicio en el que se reclama la rescisión del contrato por incumplimiento en el pago de las rentas, demostrar la existencia del referido contrato, así como la concertación de la pensión rentística y su monto, sin embargo, cuando el demandado como arrendatario afirma en su contestación de demanda que se encuentra al corriente en el pago de la pensión rentaria, revierte en su contra el gravamen probatorio a cargo del actor, pues en la especie, el incumplimiento de la obligación constituye un hecho negativo del que no le resulta fatiga probatoria alguna al actor en razón de su naturaleza, aún y cuando paralelamente a dicha afirmación, se haya excepcionado respecto a que, en la especie, no se justificó que el monto de la renta que se reclama haya sido resultado de las operaciones contempladas conforme a las cláusulas del contrato, pues dicho contrato arrendaticio proporciona las bases para determinar el monto a que asciende la renta en el momento en que se reclama la satisfacción del pago de la misma. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 129/2004 deducido del expediente judicial número 593/2003, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento promovido por X.P.G. en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de L.I., S.A. DE C.V. en contra de L.M.G.G. y R.M.R. DE G. Sentencia emitida el 21 de junio del 2004. Confirmada en Amparo Directo número 387/2004/3 en fecha 8 de Noviembre del 2004. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

121. RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, OBLIGACIONES MÁS ONEROSAS EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2205 DEL CÓDIGO CIVIL DE NUEVO LEÓN. En los primeros dos párrafos del citado precepto legal, se establece que, si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho, así como que el vendedor que hubiere entregado la cosa podrá exigir del comprador, por su uso, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido

la cosa; imponiéndose por su parte al comprador que haya pagado parte del precio, que éste tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó; estableciéndose luego en el párrafo final de tal disposición legal que: "Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas, serán nulas". Ahora bien, si en un caso se reclamó por el vendedor al comprador la rescisión de un contrato de compraventa de inmueble por incumplimiento en el pago de los abonos, exigiéndose también en la demanda el pago pactado en la cláusula sexta del contrato para el caso de rescisión, consistente en que cubriría el comprador las cantidades relativas a las cargas fiscales, impuestos prediales y gravámenes que pudiese afectar al inmueble objeto del contrato, desde la celebración de éste último; es inconcuso que, de una debida interpretación de la parte final del precepto legal indicado, se obtiene que el término "más onerosas" empleado por el legislador, se refiere no a que se encuentre prohibido a los contratantes el pactar prestaciones distintas a las previstas en el citado artículo, para el caso de rescisión, sino que debe entenderse tal término en el sentido de que las prestaciones que se pacten, en sus montos, no deben ser superiores a las que establece la misma disposición legal (pago de alquiler e indemnización, en el caso del comprador); de ahí que la excepción de nulidad opuesta en el caso concreto se estime injustificada, puesto que no existe en el sumario elemento convictivo de la parte reo tendiente a justificar que, efectivamente, el pago de impuestos, contribuciones prediales o alguna otra carga fiscal que debía pagar la compradora para el caso de rescisión, resultaban en sí de mayor cuantía a las obligaciones que impone expresamente el citado artículo 2205 del Código Civil de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 926/95. Relativo al juicio ordinario civil número 546/94, promovido por F.G.H., como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de J. de la S., S.A., en contra de la menor M.E.O.N. Sentencia emitida el 22 de Mayo de 1998. Magistrado: GENARO MUÑOZ MUÑOZ. Toca de apelación en definitiva número 89/2001, relativo al proceso número 356/2000, instruido en contra de V.H.G.G., por el delito de Equiparable al Robo. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

122. SENTENCIA PRONUNCIADA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PROCEDE DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR CUANDO ESTE NO ACREDITÓ ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCION INTENTADA. Si en el juicio de génesis el promovente no justificó el segundo de los elementos de la acción intentada consistente en que se adeuden ciertamente las cantidades reclamadas, dado que no allegó junto con su demanda un certificado contable, es correcto que al dictar la sentencia de primera instancia el juzgador natural dejara a salvo los derechos del promovente para que los hiciera valer en la forma correspondiente, puesto que en el fallo emitido no existió pronunciamiento con relación al fondo de la pretensión o al mérito sustancial del proceso, pues no se decidió la cuestión controvertida, determinándose si el actor tenía o no derecho a que le fuera satisfecha su pretensión, como tampoco se hizo pronunciamiento acerca de si la parte demandada estaba o no obligada a cumplirla.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA.- Toca en Definitiva 472/2003.- Expediente Judicial número 426/1998.- J.O.M. promovido por E.M.T. en contra de E.F.E. y Otra.- Sentencia emitida el 30 de Enero del 2004.- Amparo Directo número 135/2004.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

123. SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.- SI ESTÁN LEGITIMADAS PARA EJERCITAR LA ACCIÓN EJECUTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. La acción ejecutiva propuesta por una Sociedad de Objeto Limitado sobre la base de un Contrato de Apertura de Crédito y la certificación contable exigida por el numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, resulta procedente, en virtud de que tales sociedades se encuentran plenamente legitimadas para hace valer el derecho previsto en la disposición en cita, puesto que debe tomarse en cuenta que las Sociedades de Objeto Limitado se encuentran sujetas para su funcionamiento a las mismas disposiciones que le son aplicables a las instituciones de crédito, como expresamente lo prevé la Décima Bis, regla a que deben sujetarse las sociedades de tal naturaleza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en fecha 14 catorce de Octubre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, para adicionar las reglas a que deben sujetarse tales sociedades publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 catorce de Junio de 1993 mil novecientos noventa y tres. Lo anterior, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 103 Fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de Apelación número 580/2001, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. Promovido por A. DE C., S.A. DE C.V., S.O.L. en contra de C.E.G.C. Sentencia emitida el 07 de Diciembre de 2001. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

124. SUPLENCIA DE LA QUEJA DE MENORES O INCAPACITADOS. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTA OBLIGADA A LA. En los términos del tercer párrafo del artículo 441 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, así como en apoyo del fundamento anterior rige el principio de legalidad procesal de observancia obligatoria que se contiene en los artículos 107 fracción II constitucional en relación con los artículos 76 bis, fracción V, 78 y 79 de la Ley de Amparo, se funda la obligación jurisdiccional de jueces en primer grado y Magistrados en segundo grado, para que de oficio suplan toda deficiencia en los derechos que dichos menores o incapaces pueden verse afectados, esto es así, en razón de que la sociedad y el estado tienen interés en que los derechos de los menores o incapaces sean protegidos para disminuir la natural desventaja en que los menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte, ya que si bien son sujetos de carácter privado, sus derechos privados son de interés público debido al interés que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio que sean parte, de tal suerte, que en estos casos, el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer,

como suplencia de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad que conozca del juicio en que estos derechos se controviertan, de aquí se concluye que es una obligación de toda autoridad jurisdiccional, el suplir la deficiencia de la queja cuando se trata de menores o incapacitados, por tal motivo en el caso concreto el C. Juez de primer gado al omitir en la sentencia haber suplido la deficiencia de la queja de los menores, o bien, cuando menos citar que de las constancias del sumario no se observa o no hay deficiencia que suplir en relación a dicho menor, acto de autoridad que resulta violatorio de los derechos esenciales de defensa de los menores y la sentencia y la sentencia por lo tanto debe revocarse. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación número 493/2003, Expediente número 444/2002 relativo al Juicio Ordinario Civil (reivindicatorio), promovido por G.T.G., por sí y en representación de los menores contra L.L.G. y Otro. Sentencia emitida el 26 de Septiembre de 2003. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

125. SUSPENSIÓN DE PAGOS. EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES NO ES UNA ACTIVIDAD COMERCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS. El carácter de arrendador de inmuebles no debe ser considerado como una actividad comercial, puesto que la renta de bienes raíces son actos vinculados a la legislación civil; y si bien es cierto que la fracción I del artículo 75 de la legislación mercantil considera actos de comercio a los alquileres verificados con el propósito de especulación comercial, solamente se refiere a los alquileres de bienes muebles, excluyendo notablemente a la renta de bienes inmuebles; y aun y cuando la fracción II de dicho ordinal, si bien trata de los inmuebles, el acto de comercio solo será considerado como tal siempre y cuando se trate de compras y ventas de los mismos, lo que en el presente caso no sucede, pues la suspensa se ostenta como arrendadora de inmuebles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 393/2000, relativo a la solicitud de Suspensión de Pagos número 2437/95, promovido por M. T. E. S. D. CH. Sentencia emitida el 31 de Enero de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

126. SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA CALIDAD DE COMERCIANTE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE, PUES NO ES LA INTENCIÓN LA QUE HACE QUE SE ADQUIERA ESA CALIDAD SINO EL HECHO O LA ACTIVIDAD PROPIA QUE SE PROFESA. El ejercicio real y efectivo de actos de comercio es un elemento absolutamente necesario que debe acreditarse en el procedimiento de suspensión de pagos, la calidad de comerciante presupone esencialmente el ejercicio habitual de tales actos, lo que conlleva a determinar que los referidos actos han de realizarse necesariamente a título de profesión, y que por lo mismo, un acto aislado de interposición entre productores y consumidores, aunque se inspire en un propósito de lucro, no puede llamarse acto mercantil. Por tanto, las constancias consistentes en declaraciones de contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público solamente acreditan el cumplimiento en el pago de los impuestos respectivos, pero no justifica de manera alguna que se ejerza el comercio; pues no basta llamarse comerciante, declararse como tal en el membrete de la correspondencia, en circulares, documentos públicos o privados, pues no es la sola intención la que hace que se adquiera la calidad de comerciante, sino que deben llevarse a cabo determinados actos que revelen el propósito de especulación comercial a través de actos consecuentes y habituales, lo cual implica una organización permanente para su realización, razón por la cual los numerales 33, 34 y 35 del Código de Comercio imponen el deber de llevar determinados libros de contabilidad, los cuales son la prueba idónea para acreditar el carácter de comerciante. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 393/2000, relativo a la solicitud de Suspensión de Pagos número 2437/95, promovido por M.T.E.S.D.CH. Sentencia emitida el 31 de Enero de 2002. Magistrado: José Patricio González Martínez.

127. TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO PROMOVIDA POR UNO DE LOS CONYUGES. SU IMPROCEDENCIA AL NO COMPRENDERSE EL BIEN INMUEBLE DENTRO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. (APLICACIÓN AL CASO DE LA JURISPRUDENCIA DEL RUBRO: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES, SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA"). Si en el caso concreto la tercerista ejercitó su acción a efecto de que se excluyeran del embargo trabado en el juicio instaurado contra su esposo los derechos que aseguró le asistían en un cincuenta por ciento sobre el bien inmueble respectivo, según estimó se encontraba dicho bien comprendido dentro del régimen de sociedad conyugal constituido; debe declararse la improcedencia de dicha tercería dado que, en el caso, la donación del inmueble efectuada a favor del demandado en el juicio principal y cónyuge de la tercerista, se realizó cuando ya cobraba vigencia el nuevo texto del artículo 178 del Código Civil del Estado, que establece expresamente, entre otras cosas, que en ningún caso los bienes adquiridos por donación formarán parte de la sociedad conyugal; sin que frente a ello obste el texto anterior del citado artículo, donde no se establecía la exclusión expresa mencionada, dado que si bien el matrimonio respectivo se efectuó estando vigente el mencionado dispositivo antes de la reforma indicada realizada en 1982; debe decirse que en aquel entonces la posibilidad de adquirir por donación constituía solamente una expectativa de derecho que, en el caso no llegó a materializarse durante la vigencia del texto anterior del citado artículo 178; de ahí que al haber adquirido el esposo de la tercerista el inmueble respectivo según donación realizada en su favor cuando ya cobraba vigencia el actual texto del precepto mencionado, es bajo esta nueva disposición que debe estimarse que no ingresó a la sociedad conyugal el inmueble donado, no surgiendo en tales condiciones aplicación retroactiva de la ley, puesto que dicha aplicación no se efectúa respecto a un supuesto anterior a su vigencia, sino a uno posterior, como lo fue la donación de un inmueble que, conforme el texto que existía antes de la reforma, solo constituyó una expectativa de derecho que no se concretó precisamente con anterioridad a dicha reforma. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

PRIMERA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 866/98, relativo a la tercería excluyente de dominio deducida del expediente número 1621/97, promovida por N.M.P.M., por sus propios derechos, en contra de M.G.M. Y J.A.L.- Sentencia emitida el 15 de Diciembre de 1998.- Magistrado: Genaro Muñoz Muñoz.

128. TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN CRÉDITO Y POR ENDE NO ES APLICABLE LA REGLA GENERAL DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 24 DE MAYO DE 1996. Al juicio de Tercería Excluyente de Dominio no resultan aplicables las causas de exclusión que señala el artículo Primero Transitorio del Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Mayo de 1996 toda vez de que la citada Tercería no constituye un crédito sino que tiene como fundamento un derecho de propiedad. Luego entonces, si la tercería excluyente de dominio se promovió con posterioridad a las Reformas antes señaladas, es por lo que debe tramitarse conforme a éstas últimas, aún cuando derive de un Juicio Ejecutivo Mercantil que se encuentra ventilado con anterioridad a tales reformas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en artículo número 189/001, relativo a la T. E. D. promovida por S. T.M. A. en contra de B. J. B. S. y Otra. Sentencia emitida el 8 de octubre de 2001. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

129. TÉRMINOS COMUNES. En los casos en que el término es común a los contendientes, como sucede con el periodo probatorio que corre a partir de que se notifica al último de ellos, , es evidente que en este supuesto las partes deben tener la certeza de la fecha en que inició la dilación y para ello es necesario que en el expediente obre constancia de las notificaciones que les fueron efectuadas a cada una de ellas, máxime si se trata de la última, habida cuenta que a partir de ese momento comenzará a correr el término para ofrecer y desahogar pruebas. Es indudable que el desconocimiento de la fecha en que fue notificada la última de las partes, genera incertidumbre jurídica a su contraria, por tal motivo, se estima que cuando uno de los contendientes se dé por notificado de un término común a través de un escrito, para no dejar en estado de indefensión al otro, debe tomarse como base para el cómputo, no la fecha en que se presentó el ocurso, sino aquella en la que causó estado en proveído mediante el que se le tuvo por notificado, con el propósito de que todas las partes estén enteradas de esa circunstancia, pues lo ordinario en que la notificación sea hecha por la propia autoridad y no a través de la presentación de un escrito, de manera que cuando acaezca esto último, siempre que se trate de un término común, éste debe computarse a partir del día siguiente en que surta efectos el auto en el que se tenga por notificado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 44/01, Expediente Judicial número 35/98 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. Promovido por J. G. Y G. en contra de R. O'. G. Y M. R. S. J. V. S. Amparo Directo número 364/02. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

130. TÉRMINOS JUDICIALES. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO SOLO ESTABLECE TÉRMINOS COMUNES. El artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles señala que todos los términos judiciales señalados en dicho Código son improrrogables, salvo disposición del mismo, y siempre serán comunes a las partes; sin embargo ello no significa que prohíba los términos individuales, como podría interpretarse literalmente. Lo anterior es así porque analizando diversos preceptos legales contenidos en el ordenamiento legal en consulta se advierte que el numeral 56 señala que "Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente al en que quedare legalmente hecha la notificación"; por su parte el artículo 57 preceptúa que "Cuando fueren varias las partes y el término fuere común a todas ellas, éste contará desde el día siguiente al de la última notificación"; asimismo el numeral 426 determina que el recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva deberá interponerse dentro de los nueve días hábiles siguientes a la notificación de la misma, sin que disponga que dicho término contará a partir de la última notificación a las partes; por lo que debe entenderse que el plazo corre individualmente para cada uno de los que intervienen en el procedimiento, a partir del día siguiente al que fueron notificados, lo que resulta lógico pues de afectarse el interés de solo una de las partes, no se justifica que el término respectivo deba empezar a contar cuando todas queden notificadas; consecuentemente debe interpretarse que los términos son comunes sólo cuando así lo especifique la ley procesal civil estatal, como lo es, el previsto por el artículo 241 de la citada codificación que regula los términos de prueba; así como el que previene el numeral 398 que establece el plazo para formular alegatos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en artículo número 157/2002. Expediente Judicial número 618/2000 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por B. G. V. G. en contra de M. S. G. V. G. Sentencia emitida el 20 de Mayo de 2002. Amparo número 2140/2002. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

131. TÍTULO DE PROPIEDAD. NO ES NECESARIA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO CELEBRADO. El hecho de que la escritura relativa al mencionado contrato de donación haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad con posterioridad a la fecha de celebración del acto jurídico no afecta la validez del mismo, pues tal inscripción no es un elemento esencial que deba acreditarse a fin de que proceda la acción reivindicatoria, toda vez que dicha acción tiene por objeto que a los actores se les restituya en la posesión así como que se les entreguen los frutos y accesorios de un bien del cual ellos tienen el derecho de propiedad y que indebidamente detentan los demandados, en consecuencia no es necesario acreditar que el título de la propiedad base de la acción se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues dicha inscripción no constituye un elemento para que opere la acción, sino que la misma sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos y por lo tanto no es una formalidad en cuanto a la validez del acto, sino que sólo tiene por finalidad dar publicidad al mismo; por esta razón, aún cuando el título de propiedad no se inscriba, no por ello deja de ser válido el acto jurídico

celebrado. Por todo lo anterior, resulta que para que proceda la acción reivindicatoria basta con probar que los actores tienen la propiedad del inmueble y que la posesión del mismo se encuentra en poder del demandado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva número 443/2002, Expediente Judicial número 80/2001 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por C. A. V. P. y otra en contra de J. V. R. y otra. Sentencia emitida el 31 de Octubre de 2002. Amparo Directo número 69/2003. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

132. TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO NO EXISTA TRANSMISIÓN DE DERECHOS A FAVOR DE UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, RESULTA INNECESARIO EL REQUISITO DE PREVIA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, PARA QUE CONSTITUYA. En la celebración de un contrato de crédito con una Organización Auxiliar de Crédito, en donde no exista transmisión de los derechos a favor de una empresa de factoraje financiero, resulta innecesaria la notificación previa que establece el artículo 48 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ya que para integrar el título ejecutivo mercantil solo se requiere de la existencia del contrato o documento en que conste el crédito y de la certificación del estado de cuenta, lo cual encuentra explicación en que el artículo 47 del citado ordenamiento mercantil dispone que los actos jurídicos que celebran las organizaciones auxiliares de crédito, acompañados del estado de cuenta certificado por el contador de la organización relativa, hará fe, salvo prueba en contrario en el juicio respectivo, para la fijación del saldo resultante del deudor; de tal suerte, que en aquellos casos en que no exista esa transmisión de derechos a favor de una empresa de factoraje financiero, es evidente que carece de objeto la notificación al deudor, máxime si en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento financiero, quedaron perfectamente definidos tanto el acreedor como el deudor, así como la obligación en forma clara, fehaciente, exigible y líquida, lo que sin lugar a dudas constituye un título ejecutivo mercantil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva No. 64/2005. Expediente judicial número 1090/2003. J.E.M. promovido por A.A., S.A. DE C.V., O.A. DEL C., A.G.F. Vs. T.M. DE A., S.A. DE C.V. Sentencia emitida el día 14 de Marzo del 2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones. Amparo Directo No. 176/2005.

133. ACCIÓN REAL REIVINDICATORIA. CUANDO SE ALEGA IMPROCEDENCIA DE LA VIA ALEGANDO LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN INQUILINARIA, CORRESPONDE AL DEMANDADO ACREDITAR TAL EXCEPCION. Si bien es verdad que de las fotocopias certificadas exhibidas del diverso expediente judicial número 973/2003, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de terminación de contrato de arrendamiento promovidas por el ahora actor en contra también del demandado, se desprende que obra la manifestación de los

promoventes del juicio en el sentido de que existía concertado entre ambas partes un contrato de arrendamiento, lo que entrañaba una confesión extrajudicial en términos de lo dispuesto por el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, por haberse hecho ante una autoridad distinta del juez de los autos del juicio reivindicatorio, que sin embargo, tal medio de convicción no producía efecto probatorio alguno por no perjudicar a los promoventes de dichas diligencias, al resultar inverosímil dicho señalamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 365de la citada codificación procesal civil, en razón de que de las propias diligencias de jurisdicción voluntaria se infería que la parte reo, desconoció la mencionada relación inquilinaria alegando que ostentaba el inmueble materia de la litis en concepto de propietario. Corroborándose lo anterior con lo aseverado por la parte demandada en su escrito de oposición a dichas diligencias, en el que además de hacer referencia a la confesión citada anteriormente, también dijo que no reconocía haber celebrado pacto inquilinario sobre el inmueble en litigio, por lo que si el demandado del proceso natural desconocía la celebración del multicitado contrato de arrendamiento, no era posible que al mismo tiempo alegara su existencia para argumentar la improcedencia de la vía, con la promoción del juicio reivindicatorio; pues esto a su vez se traducía en una confesión ficta que le perjudicaba y cuyo valor probatorio era pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 260, 261, 360 y 362 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ya que de tales declaraciones se puso de manifiesto que el demandado indicó expresamente que tiene el carácter de propietario del inmueble en conflicto, por lo que al apoyar su excepción de improcedencia de la vía en ésta aspecto, es correcto que a éste corresponda en términos de lo dispuesto por el numeral 223 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, acreditar tal defensa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 307/2004. Expediente Judicial 725/2003.- J.O.C promovido por M.T.B. y Otra en contra de A. Z. L. Sentencia emitida el 22 de Octubre del 2004.- Amparo Directo número 29/2005/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

134. UN OFICIO NO CONSTITUYE PROPIAMENTE UNA ACTUACIÓN PROCESAL, PUES SE REFIERE SOLAMENTE A UNA CONSECUENCIA DE UNA DETERMINACIÓN DEL PROPIO JUZGADOR. Pues bien del contexto al cual pertenece la figura jurídica de la caducidad, clara y armónicamente se interpreta que la primera condición para que se actualice la figura jurídica de la caducidad, es la consistente en que hayan transcurrido 120-ciento veinte días hábiles a partir de que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada en el procedimiento; de suerte que si para la realización del cómputo de dicho plazo tomamos en cuenta la resolución de fecha 10-diez de diciembre de 2003-dos mil tres, que es la última en el procedimiento a la que le antecedió una promoción de las que impulsan el juicio, por cuanto que mediante dicha resolución s*e tiene a la demandada contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, y además, se admite la cuestión de incompetencia por declinatoria,* así pues, tendríamos que en términos del artículo 1075 del Código de Comercio en vigor, esta resolución surtió efectos el día 11-once del mismo mes y año; luego, el plazo de 120-

ciento veinte días para que opere la figura de la caducidad empieza a contar a partir del día 12-doce de diciembre de 2003-dos mil tres, y de esta fecha al 24-veinticuatro de junio de 2004-dos mil cuatro, en que la ahora recurrente solicita la caducidad de la instancia, transcurrieron exactamente 121-ciento veintiún días hábiles de inactividad procesal, pues si bien en dicho periodo se dictaron diversas resoluciones judiciales, a ninguna de ellas antecedió promoción alguna de las partes tendiente a impulsar el procedimiento, que es la única actuación judicial que puede mantener vivo el proceso, sin que opere la caducidad, en términos del inciso b) del artículo 1076 del Código de Comercio en vigor que dispone que "opera la caducidad de la instancia siempre "b) Que no hubiere promoción de 'cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo...", conforme al cual las únicas actuaciones tendientes a interrumpir la figura jurídica de la caducidad son las que provengan de las partes litigantes impulsando el procedimiento a la siguiente etapa del juicio, naturaleza de la que es claro que adolece el oficio suscrito por el juez natural en donde ordena remitir a la Presidencia del Tribunal el testimonio del incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la demandada mediante su escrito de contestación, y que fuera recibido por la Presidencia en fecha 30-treinta de enero de 2004-dos mil cuatro, por cuanto que una actuación judicial emitida de oficio por el juez natural, esto es sin acuse de promoción de parte, no puede equipararse a la promoción de las partes que mantiene vivo el proceso, y de ahí lo erróneo de la determinación impugnada de estimar que al mediar esa actuación judicial entre el periodo del 10-diez de diciembre de 2003-dos mil tres al día 24-veinticuatro de junio de 2004-dos mil cuatro, del procedimiento, se interrumpió el plazo para la operancia de la caducidad, y por ende lo fundado del agravio en cuestión; máxime que la cuestión de incompetencia admitida a trámite no constituye ninguna causa de fuera mayor, ni la resolución del mencionado incidente de incompetencia es una cuestión previa o conexa necesaria, para que en términos de la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio en vigor deba suspenderse el plazo para que opere la figura jurídica de la caducidad, tan es así que de acuerdo a las reglas para resolver las cuestiones de competencia entre tribunales de un mismo Estado, la fracción III del artículo 1114 del Código de Comercio en vigor, dispone que las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedimiento principal, y tan es así que conforme a ese dispositivo el mismo juez natural en el auto de admisión del escrito de contestación y de admisión de la cuestión de incompetencia por declinatoria, enfatiza la obligación de las partes de impulsar el procedimiento no obstante la admisión de esa cuestión, al establecer " ... *debiendo continuarse el presente procedimiento por sus demás etapas procesales"*, reiterándose con todo ello la procedencia del agravio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Magistrada Maria Inés Pedraza Montelongo De Quiñones. Toca de apelación en artículo número 432/2004, relativo a J. O. M. promovido por J.M.M. vs G.N.P. Sentencia emitida el 28 de octubre del 2004. Confirmada por ejecutoria del 10 de marzo de 2005 pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito en el Amparo Directo 28/2005/III.

135. ARRENDAMIENTO. CONDENACIÓN DE RENTAS, INTERESES Y SERVICIOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO LA INICIAL DESOCUPACIÓN DEL BIEN ARRENDADO, A TRAVÉS DE LA CONSIGNACIÓN DE LAS LLAVES AL JUZGADO, Y LA POSTERIOR CONDUCTA DESPLEGADA POR EL ARRENDATARIO AL RETIRARLAS. Si bien resulta jurídico aceptar que con la consignación que de las llaves hizo el inquilino a través de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria correspondientes, ha de entenderse que lo que hizo fue entregarle material y jurídicamente al actor el local arrendado, y con ello que desde ese momento cesara su obligación de continuar pagando rentas y conceptos accesorios demandados, por virtud de haberse satisfecho la reclamación del dueño y una de las consecuencias jurídicas derivadas de la acción de terminación demandada, que es la entrega del inmueble que se demanda; Sin embargo, también es lógico y jurídico reconocer que esa precisa liberación de pagar tales conceptos con posterioridad a la relatada manifestación de voluntad de desocupar el inmueble objeto de la contienda, en la especie se vio truncada, desde el momento en que dicha arrendataria, junto con los documentos allegados a las diligencias mencionadas, retiró en forma voluntaria las llaves que había depositado ante al juez de primera instancia, pues lo que en opinión de esta Alzada esa conducta desplegada revela, es que al volver a tener en su poder la posesión física y jurídica del bien, hizo que quedara a un lado su original intención de dar por concluido el contrato de arrendamiento, ante la posibilidad de volver a usar y gozar del mismo. Por ende, como la autoridad de origen desacierta cuando, resaltando la inicial intención de desocupación, frente al asegurado desinterés del promovente en recibir en forma legal la finca en cuestión, deja a dicha demandada tangiblemente absuelta del pago de las pensiones rentarias que fueron generadas durante ese preciso tiempo en que la arrendadora recurrente careció nuevamente de la posesión física y jurídica del alquilado inmueble, hace que lo conducente sea que además de condenarse a las rentas, intereses y servicios públicos surgidos desde el incumplimiento demandado hasta la fecha en que realizó la consignación de llaves al juzgado, también se le condene al pago de tales conceptos generados desde que retomó la posesión que se ha mencionado, hasta la contundente entrega material y jurídica de éste; en el entendido de que tan sólo devendría improcedente efectuar la indicada condena, durante el lapso de tiempo en que realmente se encontraron consignadas en el juzgado las llaves del local arrendado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 442/2004, relativo al Juicio Especial de Arrendamiento, promovido por H.M.D.L.P.O., en su carácter de Apoderado General Para Pleitos y Cobranzas de I.R.S.A., S.A. de C.V. en contra de E.A.G.M. y J.C.L. Sentencia emitida el 28 de Febrero del 2005. Magistrado: José Patricio González Martínez.

136. ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO POR PROCESO FRAUDULENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA CAUSA QUE SE INVOCA ES UNA IRREGULARIDAD QUE PUDO HABER SIDO IMPUGNADA DENTRO DEL JUICIO CUYA NULIDAD SE PIDE. La acción de nulidad de juicio concluido, que es para impugnar un juicio dolosamente falseado, simulado o viciado, por los

litigantes o el juzgador o personas en colusión con ellos, en una forma tal que los afectados por la sentencia dictada, no hayan tenido verdaderamente la oportunidad procesal de acceder al proceso para oponerse a la pretensión del actor y defender sus derechos; tiene como fundamento sustantivo básico en el Estado de Nuevo León, el siguiente: Por una parte el artículo 8° del Código Civil del Estado que dispone que "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario", y por otra parte, el artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el sentido de que "la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso alguno ni prueba de ninguna clase salvo en los casos expresamente determinados por la ley". Principios normativos estos, cuya interpretación sistemática y armónica nos lleva a considerar, entre otros aspectos, que así como la fuerza de la cosa juzgada, no es oponible a terceros de buena fe, igual debe estimarse que la cosa juzgada tampoco es oponible a quien aparezca formalmente como parte en el juicio, pero en realidad no lo fue, ya que su participación en el juicio no fue auténtica debido a actos fraudulentos o simulados de su contraparte, del juez o de personas en colusión con ellos. A *contrario sensu* (sentido contrario), debe estimarse que la acción de nulidad de juicio concluido, es improcedente cuando quien la promueve sí fue parte auténtica en el juicio cuya nulidad pide, y tuvo dentro de éste las oportunidades procesales para impugnar la irregularidad que ahora hace valer como causa de la acción de nulidad de juicio concluido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 564/2004, relativo al expediente judicial 174/2004 formado con motivo del JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por D. R. R. por sus propios derechos en contra de Sucesión Intestada Acumulada a bienes de los señores R. S. M. y C. C. V. Sentencia emitida el 4 de enero del 2005. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz

137. NULIDAD DE TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. ALCANCE DEL TÉRMINO AMANUENSE A QUE SE HACE ALUSIÓN EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1399 DEL CÓDIGO CIVIL DE LA ENTIDAD. La fracción I del artículo 1399 del Código Civil del Estado de Nuevo León, contempla la prohibición relativa a que dentro de un testamento no pueden fungir como testigos los amanuenses del Notario, por lo que cobra vital importancia la connotación que se le debe dar al vocablo "amanuense" y así interpretar la norma en comento. Al efecto, la legislación correspondiente no prevé reglas específicas para realizar la interpretación de la ley, de ahí que el juzgador al momento de interpretar normas jurídicas, en acatamiento a la disposición contemplada en el artículo 18 del Código Civil en alusión, debe observar por analogía para realizar esa tarea, las reglas propias a la interpretación de los contratos, en cuyo artículo 1748 de ese mismo ordenamiento se asienta la directriz fundamental de que si en los términos de un contrato (en este caso disposición legal) son claros y no dejan lugar a dudas, se estará a su sentido literal, acotándose además que si existieran palabras que parecieren contrarias a la intención observada en el establecimiento de la particularidad a interpretar, prevalecerá dicha intención sobre el sentido literal de la expresión. Es por lo anterior que para interpretar el sentido de una norma legal, resulta

necesario analizarla en su integridad, sin que tal estudio deba de ser puramente gramatical, pues la significación de las palabras que el legislador utiliza no se agota en su sentido lingüístico; para percatarse de ello basta con pensar en la equivocidad de muchos términos que se manejan, así como en la posibilidad de atribuir diversos significados a un mismo vocablo. Una vez asentadas las breves ideas sobre la interpretación de la ley, se considera oportuno a fin delimitar la significación del vocablo "amanuense", el cual juega un papel toral dentro de la interpretación que nos atañe, el acudir al diccionario *Laurousse Ilustrado*, editado por Ediciones Larousse, en su decimoséptima edición relativa al año de 1992, en cuya página 58 se aprecia que por amanuense debe entenderse: "Persona que escribe el dictado. Escribiente. (Sinón. Empleado)." Es por ello que en la hipótesis en estudio, la prohibición que se contempla en el artículo 1399 fracción I del Código Civil del Estado, sí se considera extensible a una persona que labore como empleado del fedatario en cuestión, en específico, como chofer del mismo, ya que el resaltado concepto amanuense, en observancia de la definición trascrita, es sinónimo de empleado, significación que a criterio de esta autoridad se le confiere dentro del numeral en estudio, al pretenderse en su texto limitar el que dentro de un testamento participe como testigo el amanuense del Notario, situación que en aras de la lógica se traduce el que por amanuense en esa premisa debe de entenderse todo empleado de dicho fedatario, en virtud de que lo que se pretende a través de esa alusión es imposibilitar el que den fe de un testamento otorgado ante un Notario, personas que no posean independencia respecto de la voluntad de quien lo protocoliza, garantizándose así que los testigos realmente perciban el acto en cuestión sin parcialidad u orientación alguna. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 225/2004, relativo al Juicio Ordinario Civil número 1714/2003, promovido por J. R. V. G., en contra de A. A. G. I. Sentencia emitida en fecha 30 de junio de 2004. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

138. DILIGENCIAS DE CONSIGNACIÓN. PARA QUE EL MENCIONADO TRÁMITE HAGA LAS VECES DE PAGO CON MOTIVO DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, DEBE DE EXISTIR DECLARATORIA AL RESPECTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Uno de los elementos indispensables para la acreditación de la acción de otorgamiento de escritura o pro forma, incide en que la parte que impetra dicha formalización haya cumplido con las obligaciones inherentes a su actuar, ello dado la bilateralidad que caracteriza al contrato de compraventa, misma que se revela del artículo 2187 del Código Civil del Estado, siendo una obligación atinente a la persona del comprador el pago del precio concertado con motivo del contrato traslativo de dominio correspondiente. En esa tesitura, se tiene que en la compraventa en comento se acordó que el pago del precio indicado se efectuaría en dos exhibiciones, cada una por el 50% cincuenta por ciento del numerario previsto, de las cuales la primera fue cubierta a la firma del contrato informal cuyo perfeccionamiento se impetra, en tanto que la segunda no se especificó fecha para que fuera resarcida. Ante tal panorama, el comprador con el objetivo de justificar en el

sumario el cumplimiento de la segunda parcialidad contemplada en el pacto en discusión, acompañó a la pieza de autos copia certificada de diverso trámite atingente a un acto prejudicial sobre consignación que promoviera a favor de la parte vendedora dentro del pacto de génesis, precisándose en la solicitud de ese trámite prejudicial, el que la cantidad mencionada se consignaba dado la negativa de recibirla por parte de las personas a quienes se le ofertaba dicho pago (vendedores), quienes cabe indicar, se negaron de nueva cuenta a recibirlo dentro de ese trámite judicial, oponiéndose por las razones que dentro de las copias certificadas en cuestión se advierten. Así las cosas, se tiene que artículo 1996 del *Código Civil vigente en el Estado,* es claro al indicar que "aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos"; precisión de la cual deriva la regla de que para que una consignación pueda hacer las veces de pago, es necesario el que la misma sea sancionada y aprobada por la autoridad del caso a través de una resolución fundada y motivada, en donde se analicen tanto las razones de la persona que consigne, como los argumentos de quien se oponga a recibir el pago, supuesto que no se actualizó en la especie, dado que ni dentro de las diligencias de consignación que precedieron al juicio en cuya etapa de impugnación se actúa, ni dentro del trámite contencioso en cuestión, se actualizó pronunciamiento por parte de la autoridad judicial en la que se estableciera que la consignación efectuada era apta para tener por realizado el pago y liberar de la obligación al comprador, ahora demandante y, por consiguiente, no se estudiaron las particularidades que privaron en esa oferta de pago y en su repulsa, de ahí que al no actualizarse el pronunciamiento a que se refiere el artículo 1996 en referencia, no sea dable tener por cumplida esa obligación, lo que acarrea la intrascendencia de la acción pro forma intentada, dado la falta de comprobación de los pilares sobre los que se sustenta. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que dentro del juicio de origen, el accionante solicitó en su escrito de demanda, el que se aprobara el pago del precio total de la cosa vendida a través de las diligencias de consignación que precedieron a ese asunto; prestación que si bien posee por efecto pretendido la liberación de la obligación comentada, fue omitida en su estudio por el a quo al instante de dictar el fallo que nos atañe, ya que de la multiplicidad de considerandos que conformaron tal sentencia, no se aprecia que la autoridad de primer grado se haya adentrado al examen de si la consignación verificada era apta para tener por pagado el precio de la compraventa apuntada, tomándose en cuenta la naturaleza de la consignación y las razones que mediaron en la oposición a la misma, de ahí que se estime que no exista pronunciamiento al respecto por el juzgador de marras; a mayor razón de que dentro de los puntos resolutivos de la sentencia que se revisa, quien la dictó no se ocupó de hacer declaratoria relativa al apuntado pago de precio a través de la apuntada consignación, lo que robustece la inatención de ese punto dentro de la resolución en comento. Sin que a su vez se considere dable el que se aborde ese extremo por esta alzada, en virtud de que no existe agravio que solicite el que esa prestación sea atendida por esta autoridad de segundo grado, situación que en apego al principio de agravio directo que priva en la especie en términos de los artículos 423, 426 y 449 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, imposibilita el estudio de ese tópico omitido en el fallo natural,

dado que para que ello fuese posible, era menester que el accionante hubiese instado recurso de apelación o en su caso, se hubiese adherido al propuesto por su contraparte a fin de reclamar la omisión comentada, lo que no aconteció en la hipótesis de mérito, por lo que al permanecer incólume la enunciada omisión, se reitera el parecer de que no existe en el asunto en cuestión, ni en las diligencias de consignación que le precedieron, declaración con causa, fundada y motivada, relativa a que la consignación realizada surtiese los efectos de pago, lo que acarrea la inoperancia de la acción personal ahí discutida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 294/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil número 865/2002, promovido por A. A. M. A., en contra de N. G. J. y otra. Sentencia emitida en fecha 30 treinta de junio de 2005 dos mil cinco. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

139. NO SE CAUSA AGRAVIO, SI EL A-QUO EN SU SENTENCIA NO DESCRIBIÓ CADA UNA DE LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS OPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA, SI DE AQUELLA SE ADVIERTE QUE ÉSTAS FUERON ANALIZADAS EN SU TOTALIDAD. Aún y cuando del contenido de la sentencia definitiva no se advierta expresamente que el A-quo al momento de analizar el escrito de contestación haya hecho mención a cada una de las excepciones y defensas legales opuestas por la demandada, si del texto de la sentencia impugnada se desprende que, luego del análisis que hizo la autoridad de las oposiciones a la ejecución vertidas por la demandada procedió al examen de dichas inconformidades y que estas correspondían a las señaladas en el escrito de contestación a los hechos de la demanda, se tiene entonces que de ninguna manera fueron desatendidas por la autoridad de primer grado las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 360/2004, Expediente Judicial 50/2003, relativo al J.E.M., promovido por B.M.D.N., S.A. en contra de V.I.R.V. Y OTRA emitido en fecha 10 de mayo del 2005, A.D 305/2005/3 María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

140. ACCIÓN REIVINDICATORIA. LA INEFICACIA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA PARTE ACTORA DEBE INTENTARSE EN VÍA DE ACCIÓN Y NO DE EXCEPCION. Aún aceptando que los juzgadores deben decidir todos los puntos debatidos atento a lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con independencia de la denominación que le asignen las partes, lo cierto es que en la especie, dadas las pretensiones del inconforme, debe estimarse que la ineficacia del título de propiedad de la parte actora debía impugnarse en vía de acción y no de excepción. Lo anterior se estima así, partiendo de la base de que la naturaleza jurídica de la excepción es impedir el curso de la acción o destruirla; luego, atendiendo al contenido y alcance de los tópicos debatidos por la parte reo (en el que se alega que el predio adquirido por la parte actora es diverso al descrito en

la escritura pública), es inconcuso que tales pretensiones no se limitan a incidir en la acción deducida, sino que tienden a crear un estado jurídico distinto, es decir, la ineficacia del contrato de compraventa en los términos en que está concebido en la escritura pública, por esa razón, adverso a lo pretendido por el inconforme, esa cuestión no puede analizarse vía excepción, porque no tiende únicamente a excluir o extinguir la acción deducida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 239/2004.- Expediente Judicial 42/2003.- J.O.C. promovido por A.S.C. en contra de J.S.G.P. Sentencia emitida el 10 de Diciembre del 2004.- Amparo Directo número 217/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

141. ACCIÓN REIVINDICATORIA. SI SE PLANTEA EN JUICIO AUTÓNOMO LA PRESCRIPCIÓN DEBE ENTENDERSE IDENTIFICADO EL PREDIO AUNQUE SE NIEGUE TAL CIRCUNSTANCIA. Resulta irrelevante que el demandado haya suscitado controversia en cuanto a la identidad del bien inmueble, pues la reconvención formulada se ha considerado prueba suficiente de la identidad. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal, que las tesis emitidas por el Alto Tribunal se refieran a la prescripción adquisitiva opuesta en vía de reconvención, en el mismo juicio; sin embargo, ello en nada excluye la posibilidad de aplicar extensivamente ese criterio al caso, en que la prescripción se promovió en un juicio autónomo y previo a la demanda de reivindicación, puesto tanto en aquéllos casos como en éste, priva la misma razón, es decir, la aceptación de identidad que lleva implícita la promoción del juicio prescriptivo; luego, es inconcuso que con independencia de la vía en la cual se promueva la usucapión, no puede desconocerse la aceptación de identidad que conlleva. Acorde con lo anterior, es dable concluir que adverso a lo pretendido por el recurrente, lo resuelto por el A quo, está ajustado a derecho, sin que tenga relevancia el argumento del demandado en el sentido de que en el juicio natural no se excepcionó o reconvino con la prescripción adquisitiva del inmueble disputado (como lo refieren los criterios del Máximo Tribunal), pues la pretensión contenida en un juicio autónomo, produce los mismos efectos y entonces, cobra aplicación la máxima del derecho que reza: “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.” TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 239/2004.- Expediente Judicial 42/2003.- J.O.C. promovido por A.S.C. en contra de J.S.G.P. Sentencia emitida el 10 de Diciembre del 2004.- Amparo Directo número 217/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

142. **CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS. AL EXHIBIRSE COMO DOCUMENTO BASAL EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS NO REQUIERE SER FORMALIZADO EN ESCRITURA PÚBLICA.** Si en un juicio ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras, donde la parte actora exhibió para demostrar su acción copias certificadas de un juicio sucesorio de intestado, dentro de las cuales obra un convenio de cesión de derechos hereditarios celebrado entre los herederos (como cedentes) y la actora del juicio (como

cesionaria), y los demandados alegaron como excepción, que el convenio de cesión de derechos debió formalizarse en escritura pública ante notario, por su parte el juzgador natural declaró improcedente tal excepción, esa determinación es correcta, toda vez que no debe considerarse que el citado convenio de cesión de derechos hereditarios celebrado constituye una compraventa de un bien inmueble en el que deba exigirse su formalización en escritura pública ante notario, como lo pretendía la parte demandada, ya que lo que se transmitió a través del convenio fueron los derechos hereditarios de los cedentes, y no precisamente la propiedad del bien que integra la masa, esto es, debe atenderse a la cesión de derechos hereditarios desde la perspectiva de la transmisión de los derechos de los cedentes sobre la masa, pero no del bien en específico, pues dicha circunstancia se apega a lo dispuesto en el artículo 1186 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, el cual prevé: "Artículo 1186. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión". Ya que según se patentiza, la disposición –transmisión- que pueden realizar los herederos atañe al derecho sobre la masa; pero no a los bienes en particular que la integran, atento a que la adquisición habida es a título universal y no particular, de acuerdo con el numeral 1181 de la citada ley sustantiva civil de la entidad. Máxime que en el caso concreto, de las probanzas acompañadas por la actora, se observa la sentencia dictada en el procedimiento sucesorio de intestado, en la cual se reconoció como herederos a los cedentes y se aprobó el contrato de cesión de derechos hereditarios. Entonces, si por disposición expresa de la ley la cesión de derechos que exhibió la parte promovente, sólo implicó la transmisión de los derechos que pudieran corresponder a los herederos sobre la masa, pero de ninguna manera debe entenderse como una compraventa de inmueble, pues aún cuando deba surtir efectos sobre un bien de tal naturaleza, por haber sido, en el caso, el único bien de la sucesión, la legislación civil de la Entidad, excluye la posibilidad de transmitir a título particular los bienes que integran la masa, es acertado lo que resolvió el juez de génesis en el sentido de que no era dable exigir a la parte actora la formalización ante notario del convenio de cesión de derechos hereditarios. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 294/2004.- Expediente Judicial número 867/2003 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por M.S.C. en contra de G.P.R. y OTRO.- Sentencia emitida el 17 de Diciembre del 2004.- Amparo Directo número 130/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

143. TERCERO PARA EFECTOS REGISTRALES. De acuerdo con diversos criterios sustentados por el Mas Alto Tribunal del País, la noción de tercero para efectos registrales, se refiere a aquellas personas que tienen un derecho real o acto jurídico inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que invoca su derecho de contenido registral frente a otra situación que puede o no estar registrada, mas no a la simple idea de un individuo ajeno o extraño a un acto o contrato. Por lo tanto, no es válido que los demandados en un juicio ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras se duelan de la falta de registro del documento allegado por la parte actora para demostrar su acción puesto que son personas ajenas a ese acto jurídico. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA.

Toca en Definitiva 294/2004.- Expediente Judicial número 867/2003 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por M.S.C. en contra de G.P.R. y OTRO.- Sentencia emitida el 17 de Diciembre del 2004.- Amparo Directo número 130/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

144. DE UNA INTERPRETACIÓN HERMENEUTICA DEL CONCEPTO DE CARTERA VENCIDA Y CARTERA VIGENTE, SE SIGUE QUE LA CESIÓN DE UN CRÉDITO NO QUEDA COMPRENDIDA EN ESE TÉRMINO. Con el fin de establecer que debe entenderse por cartera, se procede a realizar una interpretación hermenéutica de dicho concepto, para a partir de ahí señalar si la cesión de un crédito queda o no comprendido en ese término. Al efecto, debe precisarse que por cartera de crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su página de internet, www.cnbv.gob.mx nos define lo siguiente: Cartera Litigiosa: Activo derivado de operaciones de crédito integrado por deudores que han sido notificados de una demanda en su contra por incumplimiento de contrato. Cartera Vencida: Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento. Cartera Vigente: Constituida por créditos otorgados a clientes que cumplen con el pago oportuno de los mismos. Así pues, si la definición en la práctica bancaria de cartera litigiosa, de cartera vencida y de cartera vigente, alude al conjunto del activo de las operaciones de crédito que posee una institución de crédito, el conjunto de cuentas en las que se registran los diversos tipos de préstamos y créditos de una institución de crédito; es claro, que la simple cesión o cesión ordinaria operada a través del escrito presentado dentro del expediente natural en el cual la institución de crédito actora cede al ahora demandado los derechos cambiarios del único título de crédito base de la acción ahí ejercitada, constituye una sola operación de crédito identificada en la práctica bancaria como tipo de crédito litigioso, que de manera alguna puede considerarse como una cesión de cartera, porque esta implica todas las operaciones de crédito activas de una institución de crédito, y por ello no puede comprenderse en la prohibición de cesión de cartera a que se refiere el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, y de ahí, lo fundado de los agravios que en forma conjunta se examinaron, al ponerse en evidencia la falta de aplicación del invocado dispositivo en que la parte actora sustentó la causa de nulidad reclamada, consistente en la falta de autorización del Banco de México para que la Institución de Crédito B. S. S.A., realizara cesión de crédito litigioso en favor de H. L.M. en términos del artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 756/1995. Expediente judicial 541/1996 relativo al J.O.M. promovido por G.F.M. vs B. S. S.A. y otros. Sentencia emitida el 16 de diciembre de 2003. Amparo Directo 139/2004/3. Magistrada: Maria Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

145. ACCIÓN DE RETRACTO EJERCITADA EN VÍA DE RECONVENCIÓN, FUNDADA EN QUE NO SE LE NOTIFICÓ EN UNA CONTIENDA LABORAL LA

AUDIENCIA DE REMATE QUE CONLLEVÓ A LA POSTERIOR ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE MATERIA DE LITIGIO, Y QUE DIO COMO RESULTADO QUE NO PUDIERA EJERCER EL DERECHO DEL TANTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 970 DEL CÓDIGO CIVIL DE LA LOCALIDAD. TAL CIRCUNTANCIA NO CONSTITUYE UN HECHO NEGATIVO, SINO QUE LLEVA IMPLÍCITA UNA AFIRMACIÓN QUE DEBE SER PROBADA POR LA RECONVENIENTE. Si la reconveniente señaló que no se le había notificado en la contienda laboral la audiencia de remate, que conllevó a la posterior adjudicación del inmueble materia de litigio en el juicio natural, lo que dio como resultado que no pudiera ejercer el derecho del tanto en términos del artículo 970 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, es inconcuso que tal circunstancia no constituye un hecho negativo, como inexactamente lo dice, pues no debe perderse de vista que con esa forma de decir las cosas, implícitamente estaba afirmando que el procedimiento de ejecución resultaba ilegal por estar viciada la venta judicial, motivo por el cual, acorde a lo ordenado en el ordinal 224 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en la entidad, tenía la obligación de demostrar la falta de notificación de que se trata, pues su negación (que no era indefinida) envolvía la afirmación de un hecho, que lo es precisamente el incumplimiento por parte de la Junta Laboral de hacerla sabedora de la verificación de la audiencia de que se trata; ya que si bien se admite la imposibilidad de probar el hecho negativo, ello lo es solamente en el caso de que éste sea de tal manera general que implique la necesidad de demostrar una infinidad de hechos y de circunstancias conexas con tal hecho que por su solo número vuelven imposible la prueba; pero haciendo la salvedad de que el que niega solamente está obligado a probar, cuando la negativa lleve implícita la afirmación de un hecho concreto y definido, y no si la afirmación implícita resultare un concepto general o abstracto. Por lo que el hecho implícito en la afirmación de la reconveniente, debe ser probado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de Apelación en definitiva número 205/2004, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre división de cosa común, promovido por S. L. R. O. por sus propios derechos, en contra de M. L. L. O. DE M. Sentencia emitida el 26 de Agosto del 2004. Magistrado: José Patricio González Martínez.

146. RESCISION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO PUEDE JUSTIFICARSE EL PAGO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES A FAVOR DE UN TERCERO, PERO SI PRODUCE SU IMPROCEDENCIA ANTE EL RECLAMO JUDICIAL PARA EL COBRO DE DICHOS TITULOS DE CREDITO. Si el vendedor reclama la rescisión del contrato de compraventa fundado en el impago del saldo de la cantidad pactada como precio de la operación, y los compradores acreditan que para cubrir dicho adeudo emitieron dos cheques que por indicaciones de aquel fueron librados a favor de un tercero, esa circunstancia no permite estimar cubierto el importe adeudado, pues en términos del artículo 7 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tales documentos se presumen recibido “salvo buen cobro”. Sin embargo, en caso de que el beneficiario de dichos títulos crediticios hubiese instaurado en

contra de los adquirentes la acción orientada a obtener su pago judicialmente, lo que incluso motivó el embargo del bien inmueble materia del acuerdo de voluntades objeto de la compraventa, resulta indudable la improcedencia de la acción rescisoria promovida, ante la posibilidad de un doble cobro que la disposición contenida en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito pretende evitar; y si bien éstos no se encontraban en poder del accionante por haberse expedido a favor de un tercero y además por haberse acompañado a la demanda mercantil con anterioridad a la acción sobre rescisión, el hecho de no mencionarse por el demandante siquiera su existencia revela su mala fe, ya que tal circunstancia impedía a la autoridad jurisdiccional pronunciarse sobre el riesgo dicho cobro por duplicado. En esas condiciones, como en el particular no obra constancia del resultado del recurso de apelación instado por los vendedores en contra de la sentencia definitiva que en diverso juicio los condenó a pagar al tercero beneficiario el importe de los referidos cheques, debe declararse la improcedencia de la acción sobre rescisión de contrato de compraventa y dejar a salvo los derechos del accionante, sólo para el caso de que no se llegase a hacer efectivo el cobro judicial de los títulos de crédito emitidos para cubrir el saldo de dicha operación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 489/04, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por S.C.G. en contra de F.J.V.M. y M.I.V.M. Sentencia emitida el 15 quince de marzo de 2005. Magistrado: José Patricio González Martínez.

147. DONACIÓN ENTRE CONSORTES. REVOCACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA ES INDISPENSABLE QUE LOS CONTRATANTES SE HALLEN UNIDOS EN MATRIMONIO A LA FECHA EN QUE SE SOLICITA. De una recta interpretación del artículo 233 del código Civil vigente en el Estado, se colige que, para que una donación otorgada entre consortes pueda ser revocada libremente y en todo momento por el donante, se torna indispensable que los contratantes se hallen unidos en matrimonio a la fecha en que se solicita la citada revocación. En esa virtud, se tiene que si el actor pretende revocar la donación que otorgó a favor de una persona de la cual a la fecha ya no es consorte, es innegable que debió ejercitar su acción con fundamento en las disposiciones aplicables a la donación en general, las cuales se hallan establecidas en los artículos 2253 al 2277 de la referida legislación sustantiva, y no en las relativas a las donaciones entre consortes, ya que se insiste, su aplicación se encuentra sujeta a la existencia del vínculo matrimonial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 93/2005, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por A.L.E.V. en contra de V. M. M. R., emitida el día 25-veinticinco de Abril del dos mil cinco. Magistrado: José Patricio González Martínez.

148. ACCIÓN HIPOTECARIA. PRESCRIPCIÓN DE LA. Siendo la prescripción negativa una institución que obedece a razones de interés público, cuya finalidad estriba en hacer cesar el estado de incertidumbre que generaría una duración indefinida en el tiempo para el ejercicio de los derechos, es inconcuso que el pacto conforme al cual la hipoteca

otorgada para garantizar el cumplimiento de una obligación subsistirá íntegramente mientras exista un saldo pendiente por pagar, implica una renuncia que no se encuentra permitida por los artículos 6 y 1141 del Código Civil Federal, y por lo tanto, la acción hipotecaria puede prescribir –de reunirse los supuestos legales- con independencia de que la obligación garantizada no se hubiese satisfecho totalmente, ya que si bien la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos, no puede rebasar las limitantes que la propia legislación estatuye. Máxime que la redacción de tal dimisión no constituye una renuncia en términos claros y precisos, como lo exige el diverso artículo 7 del citado ordenamiento civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 209/04, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por I.S.M. S.A. de C.V. en contra de B.M.N. S.A. y otros. Sentencia emitida el 22-veintidós de octubre de 2004. Magistrado: José Patricio González Martínez.

149. DERECHO DEL TANTO. NO OPERA EN FAVOR DEL DEUDOR EN UNA CESIÓN DE DERECHOS DE CREDITO EN LITIGIO CELEBRADA POR EL ACREEDOR Y UN TERCERO. En términos del artículo 970 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, y su correlativo 973 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal, que define el derecho del tanto como "el derecho que existe a favor de los copropietarios de cosa indivisa para adquirir de manera preferencial la propiedad de la parte alícuota de otro copropietario", resulta incorrecto suponer que el acreditado-demandado tenga derecho a intervenir y se le conceda el derecho del tanto en la adquisición del crédito en litigio, cuando obviamente el deudor-demandado no tiene ni puede tener el carácter copropietario de los derechos de crédito en litigio que se cede por el acreedor a favor de un tercero, pues al deudor solo le compete la obligación de pagar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación 168/2004, Juicio Ordinario Mercantil número 1039/1999. A.C.G. vs. G.M.P.H. Sentencia: 20 Mayo del 2004. Confirmada en Amparo Directo número 323/2004, mediante sentencia de fecha 23 Septiembre del 2004. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

150. APELACIÓN, EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN NO ES UN TÉRMINO COMÚN.- El artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, anterior a las reformas del decreto número 226, del día 14-catorce de enero del 2005-dos mil cinco, dispone lo siguiente *"Todos los términos judiciales señalados en éste Código son improrrogables, salvo disposición de este Código y siempre serán comunes a las partes.";* sin embargo dicho dispositivo legal no debe interpretarse en el sentido literal de que todos los términos judiciales son comunes, es decir, que empiezan a computarse a partir de que la última de las partes se encuentra notificada, ya que es de explorado derecho que en todo procedimiento además de los términos comunes, existen los términos individuales que corren a las partes en lo particular al competerles en lo individual el ejercicio de un derecho, como sería el término para contestar la

demanda, para interponer un recurso, para desahogar una vista, etc., términos que incluso se encuentran regulados en el citado Ordenamiento Procesal, por lo tanto el término para promover el recurso de apelación al concernir sólo a la parte que se crea afectado con la ilegalidad de una resolución, es un término individual. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. DENEGADA APELACIÓN Toca de apelación 244/05. Juicio Ordinario Civil, expediente 218/2004 promovido por FIDEL EUGENIO VILLARREAL PÉREZ MALDONADO, en contra de JOSE ALFREDO GONZÁLEZ MORALES. Resolución 23 de Mayo del 2005. Magistrado: JOSÉ GUADALUPE TREVIÑO SALINAS. DENEGADA APELACIÓN Toca de apelación 471/05. Juicio Ordinario Civil, expediente 818/2001. Promovido por ROMAN MORENO CABALLERO y VIRGILIO MORENO MONTEMAYOR, en contra de DESARROLLO LOMA LARGA S.A. DE C.V. y otros Resolución del 29 de Agosto del 2005. Magistrado: JOSE GUADALUPE TREVIÑO SALINAS. DENEGADA APELACIÓN. Toca de apelación 580/05. Juicio Ordinario Civil, expediente 150/2004. Promovido por DIMITRI N. HADJOPULOS COINDREAU, en contra de NICOLAS DIMITRI HADJOPULOS CANAVATI. Resolución 15 de Noviembre del 2005. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

151. DONACIÓN. EL APODERADO GENERAL CON FACULTADES DE DOMINIO, REQUIERE CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO AUTORICE PARA DAR EN. No obstante que un poder sea general con facultades de dominio, se requiere que contenga cláusula especial que autorice al apoderado a dar en donación bienes de su poderdante, habida cuenta de que si bien es cierto que el poder para actos de dominio se entiende conferido confianza y en auxilio del poderdante para realizar toda clase de gestiones en su representación, no debe perderse de vista que el mismo es invariablemente para defender y salvaguardar los bienes, en términos del artículo 2448 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de tal manera que si el Apoderado trasmite por donación "gratuita" bienes de su poderdante sin estar facultado explícitamente para hacerlo, dichos actos resultan en perjuicio del mandante, pues la donación se realizó sobrepasando los límites del mandato conferido al no estar facultado para hacerlo, por lo tanto, el contrato de donación es nulo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 396/2004, Juicio Ordinario Civil número 863/2003. O.P.G.Q. vs. K.E.G.Q y otros. Sentencia: 07 de Abril del 2005. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

152. CONDOMINIO. EL ADMINISTRADOR ESTA FACULTADO PARA ACUDIR A JUICIO EN DEFENSA DE LOS CONDÓMINOS Y DEL. La Ley del Régimen de Propiedad en Condominio, no establece que el condominio, por sí mismo considerado, sea una persona moral con capacidad para ser titular de derechos o sujeto de obligaciones, ni que su constitución permita equipararlo a una sociedad, pues un condominio solo es un inmueble sujeto a un régimen especial de propiedad, conforme a lo

estipulado en el artículo 2° de la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Nuevo León, sin embargo, de una correcta interpretación de la citada Ley, se debe entender que la Asamblea de Condóminos es una persona jurídica que requiere de una representación legal, en términos del artículo 26 del mencionado ordenamiento legal; en esas condiciones, es válido que el administrador del condominio acuda a juicio en representación del condominio y de los condóminos, ello en términos de los artículos 22 y 26 de la citada ley, por lo tanto, no resultan aplicables en la especie los numerales 22 bis, 22 bis III y 23 del Código Civil del Estado de Nuevo León." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 120/2005. Juicio Ordinario Civil número 715/2003. C.A. Vs. V.A.M.M. y otros. Sentencia: 22 de abril del 2005. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

153. VÍA ORDINARIA MERCANTIL PROCEDENTE AUN Y CUANDO EN EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO LAS PARTES ACUERDAN QUE EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO SE EJERCITE EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. Resulta correcto que el acreedor en un convenio de reconocimiento de adeudo ejercite la vía ordinaria mercantil en contra de su deudor, aún y cuando en una de las cláusulas del convenio base de la acción las partes estipularon que en términos de los artículos 1051 y 1052 del Código de Comercio el cumplimiento del mismo debería de ejercitarse en la vía ejecutiva mercantil, lo anterior es así puesto que la aludida manifestación únicamente establece una preferencia acerca del procedimiento mercantil, de cuyo contenido no se desprende la existencia de una renuncia expresa a la vía mercantil ordinaria, sin que pueda estimarse además que dicha aseveración encierra la actualización del procedimiento convencional que establecen los numerales 1051 y 1052 del ordenamiento mercantil en consulta, como lo alega la parte demandada, pues para ello no bastaba con que se acordara la posibilidad de exigir el cumplimiento del convenio en la vía ejecutiva mercantil, sino que además se requería que en el mismo se contuvieran las prevenciones relativas al desahogo de la demanda, su contestación, pruebas y alegatos, así como las demás a que se alude en el dispositivo 1053 del código mercantil invocado, en otros términos, que se estableciera todo un procedimiento en el que se respetaran las formalidades esenciales previstas en la ley, acorde con lo dispuesto en los preceptos antes mencionados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 30/2004.- Expediente Judicial 10/2003.- Juicio Ordinario Mercantil promovido por J.A.G.M. en contra de P.M.Q.D.,S.A. DE C.V. y OTROS.- Sentencia emitida el 30 de Noviembre de 2004.- Amparo Directo número 340/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

154. PRUEBAS NO DESAHOGADAS EN MATERIA MERCANTIL. ES INOPERANTE EL AGRAVIO MEDIANTE EL CUAL SE DUELE DE LA FALTA DE DESAHOGO CUANDO NO SE IMPUGNO MEDIANTE EL RECURSO DE APELACION EL AUTO QUE PUSO EL JUICIO EN ESTADO DE SENTENCIA. Si

el demandado de un juicio ejecutivo mercantil se duele de la falta de desahogo de las pruebas que ofreció para demostrar su excepciones; sin embargo no impugnó mediante el recurso de apelación que prevé el numeral 1341 del Código de Comercio, el acuerdo que puso el asunto en estado de sentencia, su agravio resulta inoperante, lo anterior es así porque dicho auto es el que técnicamente impide que se desahoguen las pruebas que no se llegaron a desahogar, puesto que es el acto procesal de orden público por medio del cual el órgano jurisdiccional informa a las partes que terminó la intervención de ellas en la etapa del procedimiento, y solo tendrán que esperar a que el juzgador resuelva el problema jurídico; por lo que la omisión del demandado de impugnar el proveído que cita para sentencia trae consigo el consentimiento de esa citación y por perdido el derecho de que se subsanen las deficiencias cometidas en el desahogo de pruebas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Tribunal Superior de Justicia.- Tercera Sala.- Toca en Definitiva 522/2005.- Expediente Judicial 245/2005.- Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por R.C.P. en contra de F.B.L.- Sentencia emitida el 08 de Noviembre de 2005.- Amparo Directo número 118/2006/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

155. CONTRATO DE COMPRAVENTA. EL PAGO DEBE SER LISO Y LLANO Y NO SUJETO A LA CONDICION SUSPENSIVA PROPUESTA POR EL COMPRADOR. Resultan improcedentes las inconformidades que vierte el alzista en los motivos de agravio, en cuanto que el pago total de la venta, se efectuó a virtud de las Diligencias de Consignación acompañadas en copia certificada al procedimiento y que con ellas demuestra haber cumplido con su obligación de pago. Tal cuestión es improcedente, porque como atinadamente lo decidió el juzgador de primera instancia, en el caso específico si bien existe copia certificada de las Diligencias de Consignación, respecto de los pagos acordados en el contrato de compra venta base de la acción; documental pública que merece eficacia probatoria plena atento a lo dispuesto por el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, no menos cierto lo es, que según se deduce de dichas constancias, el ahora alzista consignó las sumas correspondientes, condicionando la entrega de las mismas a la reducción del precio de la venta, por existir diversas afectaciones, y en tal orden de ideas, es acertada la decisión del Juez al determinar que la consignación debe ser lisa y llana, es decir, no puede encontrarse sujeta a condición alguna, porque de ser así, en especial caso la vendedora no se encuentra en posibilidad de obtener las sumas aludidas, pues conforme lo dispone el numeral 1956 del Código Civil en el Estado, "Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido"; y en esa virtud no se puede hablar de la existencia de un pago, porque la vendedora realmente no tiene a su disposición la cantidad debida, dado que se encuentra sujeta a la condición impuesta por la apelante y por tanto, no es de surtir efectos la consignación efectuada en esos términos, porque si bien conforme el artículo 1991 de la codificación adjetiva de la materia, el ofrecimiento seguido de la consignación hace las veces de pago, no menos cierto lo es, que según lo regula también el propio dispositivo, ello será así siempre que dichas diligencias reúnan los requisitos de ley

y al encontrarse condicionado, y como consecuencia, la vendedora no encontrarse en posibilidad de recibir la cantidad debida, pues está sujeta a una condición, es evidente que ello va en contra del precepto 1956 invocado, porque la acreedora no está en posibilidad para recibir la cantidad debida ante la condición impuesta por la deudora, y para lo anterior no es óbice lo que disponen los artículos 1694 y 1733 del Código Civil en vigor, los cuales a la letra dicen: "1694.- La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 1733.- El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente"**;** pues la decisión del A-quo en ningún momento tiende a dejar la validez y el cumplimiento del contrato al arbitrio de la vendedora, ya que aún y cuando en efecto haya obligaciones recíprocas, se insiste, la consignación efectuada en los términos que se deducen de las copias certificadas referidas, no son de surtir efectos, dada la condición puesta por su promovente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 4/2001.- Expediente Judicial 1152/1998.- J.O.C. promovido por J.A.M.C. y Otra en contra de I. C. de la S. S.A. de C.V. Sentencia emitida el 19 de Octubre de 2004.- Amparo Directo número 511/2004. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

156. TESTIGO SINGULAR EN JUICIO MERCANTIL. VALOR PROBATORIO DEL. De la interpretación de los artículos 1302 y 1306 del Código de Comercio, mismos que establecen respectivamente que “el valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes concurran las siguientes condiciones” y “ los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe en la verdad conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los principios consignados en los artículos 1283 a 1286, preciarán en justicia el valor de las presunciones humanas”, se advierte que el valor probatorio que le corresponde al dicho de un sólo testigo, corresponde apreciarlo en justicia al Juez natural, siendo pertinente para ello, el tomar en cuenta todos los elementos de convicción que existan en autos, incluyendo la declaración del testigo singular, la cual en unión de las demás pruebas puede tener valor para reforzar las consecuencias lógicas obtenidas de los datos probados; por consecuencia, al haber adminiculado la juez de origen el dicho del testigo singular con el resultado de la prueba documental, según se aprecia del contenido del cuarto considerando de la impugnada, dicho proceder es correcto, pues al asociar esos medios probatorios lo que hizo fue otorgarle credibilidad al dicho de un testigo singular, atendiendo a la libre apreciación que le otorga los numerales antes citados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 488/2005.- Expediente Judicial 45/2004.- T.E.D. promovida por M.M.D. en contra de O.E.R. y Otra.- Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005.- Amparo Directo 72/2006/3.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

157. DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE COLIGE QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE A LA OBLIGACIÓN EXIGIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES INMEDIATO ANTERIOR EN QUE SE GENERÓ LA OBLIGACIÓN, SE CONSIDERARÁ PARA CADA UNO DE LOS MESES POSTERIORES O FRACCIÓN DEL MES QUE HAYA TRANSCURRIDO CUANDO SE REALIZA EL PAGO. Con relación a la póliza de fianza número 4289-0336-005869, la planilla de cuantificación de intereses moratorios resulta incorrectamente determinada, en tanto que el cálculo de los intereses moratorios se realiza aplicando una tasa diferente por cada mes, lo cual resulta ajeno a la disposición expresa contenida en el numeral 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con vigencia a partir de las reformas publicadas el 3-tres de enero de 1997-mil novecientos noventa y siete, que dispone: "Las Instituciones de fianzas deberán pagar un interés sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión, el cual se calculará aplicando al monto de la propia obligación el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo anual de captación a plazo de los pasivos denominados en Unidades de Inversión, de las Instituciones de Banca múltiple del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación para el mes inmediato anterior a aquel en que se realice el cálculo, dividido entre doce.", es decir, señala tal numeral que los intereses se calcularán aplicando la tasa de interés aplicable a la obligación exigible correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en que se realice el cálculo, dividido entre doce; por lo que en ese orden debió cuantificarse el intereses moratorio generado por todo el periodo comprendido desde la fecha de incumplimiento de la obligación a la fecha de pago de la suerte principal, a la tasa que prevaleció en la fecha en que se realizó el cálculo del interés, misma tasa que debió aplicarse en todos y cada uno de los meses posteriores, conforme a lo previsto en el numeral invocado, lo que en el caso no aconteció porque para ello el incidentista señala tasas que prevalecieron durante todo el periodo en que se computan los intereses, siendo así incorrecto el cálculo que realiza, respecto de esa póliza. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TERCERA SALA. Toca en Artículo 5/2005.- Expediente Judicial 642/2000.- J.O.M. promovido por I. M. S.F. S.A. de C.V. en contra de A. I. S.A. de C.V. Sentencia emitida el 15 de Marzo de 2005. Amparo Indirecto número 930/2005-VI.- Magistrada: Maria Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

158. LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NÚMERO 4A./J. 20/94 PUBLICADA EN LA PÁGINA 25 DE LA GACETA 79 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)." NO COBRA APLICACIÓN AL ÁMBITO DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de rubro "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NÚMERO 4A./J. 20/94 PUBLICADA

EN LA PÁGINA 25 DE LA GACETA 79 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN).” por la que se concluye que el escrito por el cual se autoriza a personas para el efecto de oír y recibir notificaciones mantiene viva la instancia; dicha tesis no cobra aplicación al ámbito del procedimiento mercantil, en virtud de que el mismo se apoya en la disposición contenida en el artículo 74 fracción V de la Ley de Amparo en vigor, norma que solamente señala que la falta de promoción del recurrente provocará la caducidad de la instancia, lo cual interpretado a contrario sensu, lleva a establecer que cualquier tipo de promoción que se presente puede interrumpirla, pues el precepto legal no prevé mayor exigencia en cuanto a la naturaleza de la promoción, es decir, si impulsa o no el procedimiento. Por lo tanto, el criterio así sustentado solamente tiene aplicación al ámbito del juicio constitucional por resolver un punto jurídico diverso, pues mientras en la Ley de Amparo se vislumbra la interrupción con la presentación de cualquier promoción, en el Código de Comercio aplicable, en su artículo 1076, se contempla que la única actuación que podrá interrumpir el plazo para que opere la caducidad, lo será aquélla tendiente a impulsar el curso del juicio, solicitando la continuación para la conclusión de mismo, que como se dijo anteriormente, implica hacer las gestiones necesarias para finalizar la etapa procesal en que se encuentra inmerso el procedimiento hasta llegar a su resolución mediante el fallo definitivo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Artículo número 7/2006.- Expediente Judicial 552/2004.- J.E.M. promovido por L. M. V. en contra de G. A. C. S.A. de C.V. Sentencia emitida el 17 de febrero de 2006.- Amparo Directo número 181/2006.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

159. EL PAGARE QUE SE SUSCRIBE POR EL DEUDOR PARA DOCUMENTAR EL ADEUDO EN UN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, NO ES PRUEBA PLENA DEL PAGO, SI NO SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE EL PAGO. De la interpretación armónica del contenido de la cláusula tercera del convenio de reconocimiento de adeudo base de la acción, se desprende que el título que ahí se menciona, es de tipo comprobante del adeudo a favor del acreedor, esto es, una simple documentación de que el deudor recibió el importe que ahí se reconoce, y que por ende, el pagaré que efectivamente se suscribiera sería causal de esa obligación civil. Asimismo, también se desprende de la cláusula tercera que lo referido en el sentido de que el mencionado pagaré serviría de comprobante de pago a la deudora, única y exclusivamente se aplicaría en el caso de que la deudora “... haya liquidado el importe del mismo y se encuentre en su poder.”, esto es, que el importe del pagaré mencionado se hubiere efectivamente liquidado por la parte deudora; para efectos del pago efectivo del adeudo. Así pues, correspondía a la demandada acreditar no solamente que aquél pagaré se suscribió previamente a la firma del convenio base de la acción, y que fue el que le entregó a la hoy actora en garantía complementaria del reconocimiento de adeudo ya otorgado en escritura pública; sino también, demostrar que ese mismo documento se lo devolvió el acreedor al momento de realizar el pago del adeudo, porque esencialmente, se requiere la demostración plena del pago por otro cualquier medio idóneo; gravamen con el que

incumplió la demandada porque tal y como se vio al examinarse la apelación adhesiva interpuesta por la actora, obran en autos medios de convicción idóneos que vienen a desvirtuar el pago sostenido por la demandada, consistentes estos en la confesión que se desprende de la diligencia actuarial de ejecución misma que fue valorada con eficacia probatoria plena del reconocimiento del adeudo, y que no existe en autos presunción legal o humana ni otro medio de convicción que acredite que el documento que acompaña la demandada se vincula a la escritura pública que contiene el convenio de reconocimiento de adeudo base de la acción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 399/1995.- Expediente Judicial 950/2004.- J.E.C. promovido por J.T.Z. en contra de J. M. G.- Sentencia emitida el 31 de octubre de 2005.- Amparo Directo número 54/2006/3.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

160. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, ESTUDIO DEL JUSTO TÍTULO SUBJETIVAMENTE VÁLIDO. EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A DEMOSTRAR QUE LA PERSONA QUE LE VENDIÓ Y DE QUIEN RECIBIÓ EL INMUEBLE, ERA EL LEGÍTIMO PROPIETARIO. La compraventa es un contrato por medio del cual uno de los contratantes llamado vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Sin embargo, tratándose del título subjetivamente válido, basta la creencia fundada que operó la transmisión del dominio, independientemente del antecedente remoto de la propiedad, es decir, sólo se requiere el contar con un justo título que legitime la detentación que se tiene del inmueble, acorde al artículo 806 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que establece que es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, y que también se tiene como tal, al que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Por tanto, si el actor acreditó su justo título con base en una compraventa que produce la transmisión y adquisición del dominio, que fue real y no simulada; resulta innecesario el demostrar que la persona que le vendió y de quien recibió el inmueble era el legítimo propietario, ya que si por efecto del acto traslativo de la compraventa el poseedor recibió el inmueble de quien creía era el propietario, aún cuando no lo fuera, puede adquirir mediante prescripción, porque el acto jurídico defectuoso no es la fuente de la adquisición de la propiedad, sino la prescripción que emana de la ley; puesto que no se debe tomar en cuenta el vicio o defecto que precisamente a través de la prescripción se subsanará, pues lo contrario implicaría exigir que el título sea perfectamente válido, haciendo innecesaria la prescripción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 56/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre prescripción adquisitiva, promovido por M. del R. J. R. por sus propios derechos, en contra de A. A. M. A., I. U. las P, S.A. y, R. P. de la P. y del C. del E. Sentencia emitida el 16 de Diciembre del 2005. Magistrados: José Guadalupe Treviño Salinas (presidente), José Patricio González Martínez (ponente) y Genaro Muñoz Muñoz.

161. VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO POR NO ESTAR PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AÚN Y CUANDO EL JUEZ DE ESTA ENTIDAD SEA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO. El solo hecho de que el juez haya aceptado el conocimiento de un asunto en razón de ser el órgano jurisdiccional competente para ello, no implica que se encuentre conminado a dar trámite a una demanda incoada en una vía no prevista por la legislación procesal local. Por ende, si en un juicio especial hipotecario, el juzgador civil del Distrito Federal ante quien originalmente se instauró, se declaró incompetente en razón del territorio, remitiéndose los autos al juez civil del Estado de Nuevo León, éste luego de aceptar la competencia, si es el caso, en la misma resolución debe desestimar la demanda planteada en la citada vía, en virtud de no hallarse contemplada en el Código Procesal Civil de la Entidad, pues de conformidad con el artículo 1 del citado cuerpo normativo, las acciones civiles se harán valer ante los tribunales conforme a las reglas establecidas en la propia codificación, ello en concomitancia con sus diversos numerales 18 y 55, que enuncian en lo conducente que para la tramitación o resolución de los asuntos ante los Tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto en la multicitada legislación, y que queda prohibido dictar otros trámites que los que para caso se determinen en ella. Lo anterior so pena de infringir el contenido de la fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él, de tal suerte que en atención a dicho principio de territorialidad, deviene aplicable la ley adjetiva de la entidad federativa en donde se encuentre el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento de que se trate. De modo que si el referido Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León no prevé la sustanciación del procedimiento especial hipotecario, el juez debe proceder a su desechamiento, no obstante encontrarse investido de competencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo número 274/2005, relativo al Juicio Especial Hipotecario número 841/2004, promovido por J. A. A. M. en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de M. R. S.A. de C. V. en contra de B. N. de C. E. S. N. de C. I. de B. M.

162. CESION DE DERECHOS. EN SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DEBE OBSERVARSE LA FORMALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2037 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL, A FIN DE VERIFICAR LA LEGITIMACIÓN DEL "CESIONARIO". CASO EN QUE LA DEMANDADA OPONE Y ACREDITA LA EXCEPCIÓN DE PAGO CON BASE EN PAGOS ACEPTADOS Y RECIBIDOS POR LA "CEDENTE". Si la notificación al deudor de la cesión del crédito es un requisito imprescindible que legitima al cesionario para hacer valer sus derechos derivados de la cesión en contra del deudor, resulta que es necesario exhibir al deudor el documento justificativo de la cesión, ya sea a través de su lectura, o

transcripción o corriéndole traslado, ello en el acto de la notificación de la cesión, lo cual es factible en virtud de que el deudor tiene derecho a que se le demuestre fehacientemente la existencia de la cesión y los demás aspectos de la operación a fin de que el deudor tenga la seguridad de que en su oportunidad el pago lo hará al legítimo titular del derecho. Luego entonces, al no constar así en la notificación extrajudicial practicada ante dos testigos, es por lo que se le resta eficacia probatoria para efectos de tener acreditada la notificación de la cesión de derechos, pues ante lo defectuoso de la misma es indudable que se inobservaron las normas esenciales del procedimiento, lo que trajo consigo la imposibilidad de que los deudores pagaran a la "cesionaria", ya que al oponer la excepción de pago éstos acreditaron estar al corriente en sus obligaciones de pago, los cuales fueron aceptados y recibidos por el "cedente". Por lo que lo procedente es declarar la improcedencia del juicio promovido por la "cesionaria", en virtud de que mientras la notificación no se efectúe en forma legal, el deudor se libera de la obligación pagando al acreedor primitivo; lo cual tiene su origen en la naturaleza propia de la cesión por la intervención de persona ajena a la obligación primordial, y para evitar las simulaciones y doble cobro, en garantía del deudor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 109/2005, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por A. C. G., en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de C. C. R. de C., S. de R.L. de C.V., en contra de J. L. M. C. y M. C. R. C. de M. Sentencia emitida el 26 de Octubre del 2005. Magistrado: José Patricio González Martínez.

163. CONVENIO. PARA SU SANCIÓN ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE AMBAS PARTES SOBRE LA FORMA Y TÉRMINOS QUE LO REGIRÁN. Las partes contendientes celebraron un convenio que fue ratificado en el juzgado de origen en la misma fecha en que aparece realizado y en relación a dicho acto jurídico el juez de primer grado antes de sancionar tal planteamiento consideró necesario prevenir a sus signantes para que expresaran la forma y términos que lo regirían para el caso de incumplimiento de sus estipulaciones, prevención con la cual sólo cumplió el accionante, por ende, al no encontrarse satisfecha la exigencia que el juez estimó necesaria para dar sanción al convenio en los términos en que fue exhibido por las partes, se hace evidente la falta de consentimiento de una de ellas, lo que a la postre evidencia que tal acto jurídico no encuadra dentro del concepto de convenio, debido a la ausencia de conformidad de uno de los concertantes. Más aún que el apercibimiento hecho por la autoridad judicial, no fue en el sentido de que en caso de que alguno de los signantes del convenio no compareciera a cumplir con la prevención, éste se sancionaría en la forma y términos en que lo solicitara el que sí compareciera, motivo por el cual en base a las condiciones antes señaladas se concluye que no se actualiza la hipótesis a que hace referencia el numeral 613 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la materia mercantil que a la letra dice: " Las promociones en que ambas partes estuvieren de acuerdo serán proveídas de plano y de conformidad, salvo los casos en que sean contrarias a las leyes prohibitivas o de interés público.", pues tal precepto legal es categórico al establecer

que sólo deben ser proveídas de conformidad y de plano las promociones en que las partes están de acuerdo, lo cual no se surte en la especie en atención a las consideraciones antes precisadas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en artículo 333/2004.- Expediente Judicial 232/2001.- J.E.M. promovido por R. A. M. en contra de C. R. A. y Otra. Sentencia emitida el 16 de Noviembre del 2004.- Amparo Indirecto número 518/2006-II. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

164. PRUEBA PERICIAL. DEBE SER EXPRESO EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES PARA QUE UN SOLO PERITO DICTAMINE PARA LAS DOS. El artículo 1700, del Código Civil estatal, dispone: "1700.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, a través de cualquier otro medio tecnológico o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse Expresamente." Por su parte, en lo que interesa, el artículo 310, del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, dice: "310.- Cada parte dentro del tercer día nombrará un perito a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El texto dé este último numeral no deja lugar a dudas: el consentimiento de las partes en un juicio para que un solo perito dictamine para las dos, debe ser expreso, pues la frase, "a no ser que se pusieren de acuerdo", en su naturaleza implica la realización de un consenso donde, previo a que se sancione el nombramiento del perito único, ambas deben aceptar o ponerse "de acuerdo" en designarlo y en que pasarán por ese solo dictamen, manifestando desde entonces recíprocamente su voluntad en ello, y asumiendo, a su vez, al momento las consecuencias inherentes. Sin que pueda quedar abierta la posibilidad de que el consenso llegue a operar en forma tácita y bajo las circunstancias y razones que proponen los actores, basados en la conducta procesal que observó el demandado después de que fue admitida la prueba, pues del texto de la ley se infiere que el "acuerdo" respectivo, debe llevarse a cabo, desde la propuesta del perito, no después. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 20/2005.- Expediente Judicial 503/2004.- J.O.C. promovido por R.D.P. y Otra en contra de E.P.Ch.V. Sentencia emitida el 16 de Diciembre del 2005.- Amparo Directo número 139/2006. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

165. AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO. LA OMISIÓN DE DICTARLO RESPECTO UN CODEMANDADO NO LES PRODUCE LESIÓN A LOS DIVERSOS DEMANDADOS. El hecho de que en un juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria donde un codemandado es el Registrador Público de la Propiedad, el juez de primera instancia haya omitido dictar el acuerdo respectivo en el que se tiene al mencionado Registrador Público de la Propiedad por contestando la demanda en sentido negativo, no les produce ninguna lesión a sus codemandados, ya que el efecto de la sanción a la que en todo caso, se hace acreedora la

dependencia de mérito, ante su conducta de no dar respuesta a la demanda, sería el de tenerla por contestando la demanda en sentido negativo, en términos del artículo 631 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León; sanción esta que por sí sola, es imposible jurídicamente hablando que afecte a los demandados, por cuanto que con tal proceder, en manera alguna se altera o afecta los hechos planteados en su contestación, y en cambio a la parte que se abstuvo de responder la demanda, con motivo de su actitud, pierde el derecho de controvertir los hechos expuestos por la parte actora en su demanda y, por ende, el derecho de oponer las defensas y excepciones que le concede la ley en términos del artículo 630 de la Ley Adjetiva Civil del Estado; de ahí que la afectación en todo caso se le causaría únicamente al codemandado que omitió producir su contestación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 238/2005.- Expediente Judicial número 163/2004 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por J.M.T.G. en contra de J.V.R.S. y Otra. Sentencia emitida el 08 de septiembre de 2005.- Amparo Directo número 453/2005. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

166. JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN "AD CAUSAM" CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN IMPROPIA, y POR ENDE AL NO COMPRENDERSE EN LAS EXCEPCIONES PROPIAS A LAS QUE ALUDE EL ARTÍCULO 1327 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE ADMITIRSE VÍA INCIDENTAL Y RESOLVERSE HASTA LA DEFINITIVA. Si las bases de un Incidente se refieren a excepciones impropias, porque descansan en supuestos jurídicos que destruyen en sí mismos el derecho de acción de la parte actora; como en el caso, en que se ataca vía incidental la legitimación activa ad-causam de la actora. En ese evento, el juez debe admitir a tramite ese incidente y no desecharlo en términos del numeral 1327 del Código de Comercio aplicable, en tanto que la regla contenida en ese dispositivo, se refiere a las excepciones propiamente dichas, esto es, las que descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la acción, pero no a las llamadas excepciones impropias. En efecto, en las excepciones impropias, el juez se ve obligado a analizar la relación jurídica substancial que vincula al actor y demandado, y no puede prejuzgar sobre situaciones de fondo, en tanto que al hacerlo estaría prejuzgando precisamente sobre esa relación jurídica substancial que vincula al actor y demandado, cuando es de explorado derecho que ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional en la sentencia definitiva, porque al hacerlo estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, en tanto que, mientras no pronuncie la sentencia definitiva conserva expedita su jurisdicción para resolver lo que en derecho proceda respecto de la legitimación ad causam. Y además, porque de desecharse de plano el incidente de falta de legitimación ad causam, se dejaría no tan sólo al incidentista sino también a su contraparte sin oportunidad de desahogar vista, y de ofrecer pruebas para justificar sus extremos en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional. Más aún cuando el Incidente tiene íntima relación con el juicio principal y por ende, así las cosas, la conclusión anterior, viene a

posibilitar la viabilidad de la tramitación secundaria promovida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en artículo número 119/2006. Expediente judicial número 183/2005 relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por M.M.M. vs O.A.V.V. Sentencia emitida el 16 de abril de 2006. Magistrada: Maria Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

167. INCIDENTE CRIMINAL. EL INSTAURADO EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL DEBE ADMITIRSE Y ORDENAR SE DÉ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, Y NO DESESTIMARSE DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE. Conforme a lo establecido por el artículo 1358 del Código de Comercio, es indiscutible que la tramitación de incidencias criminales en controversias de índole civil debe someterse a las pautas previstas para ello por el Código de Procedimientos Penales respectivo. Ahora bien, cuando el ordenamiento punitivo aplicable sea el vigente en el Estado de Nuevo León, la ausencia en éste de dispositivos que regulen específicamente la tramitación de un incidente penal dentro de una contienda civil, así como la imposibilidad de que el mismo pueda tramitarse conforme a las reglas que contempla el Código de Comercio para la substanciación de los incidentes en general, dada su naturaleza represiva, la cual impide al juzgador agotar la citada incidencia criminal por destinarse la misma a denotar la existencia de un delito, no obstan para que dicha cuestión accesoria sea admitida, puesto que no existe en la legislación mercantil aludida norma alguna que prohíba acogerla, siempre y cuando se halle relacionada con la controversia principal. Bajo ese panorama, las expresadas vicisitudes deben compaginarse para que pese a la omisión del señalado Código Procesal Penal vigente en el Estado en regularlo expresamente, pueda darse trámite al incidente penal y no sea desestimado, lo que conlleva a establecer que en tal caso, el juzgador debe admitirlo, ordenando se dé vista del mismo al C. Agente del Ministerio Público que corresponda, a fin de que éste proceda con arreglo a sus atribuciones, en ejercicio de la facultad investigadora que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo 41/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por H.R.R., en contra de J. A.C.A. e I.G.A. Sentencia emitida el 30 treinta de Junio del año 2006 dos mil seis. Magistrado: José Patricio González Martínez.

168. COSTAS. EL JUICIO EN QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES EN NUMERARIO DEBE CONSIDERARSE DE CUANTÍA INDETERMINADA EN CASO DE QUE SU IMPROCEDENCIA DERIVE DE LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDANTE, DEBIENDO CUANTIFICARSE SU IMPORTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA. Si por resolución del órgano jurisdiccional se determina la improcedencia del juicio fundado en que la parte actora formal carecía de la personalidad con que se ostentó en el

procedimiento, dejándose a salvo los derechos del demandante material para que los haga valer como legalmente corresponda, es inconcuso que en ese supuesto no se examinó el fondo del negocio, pues el infortunio de la reclamación instada obedeció en exclusiva a la falta de un presupuesto procesal, de suerte tal que no existe realmente pronunciamiento jurídico acerca de la condena o absolución de las prestaciones reclamadas en la demanda, siendo entonces un asunto falto de contenido económico, razón por la cual la cuantificación de las costas derivadas del mismo debe efectuarse en términos del artículo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, relativo a los juicios de cuantía indeterminada, y no conforme al diverso numeral 6 de la misma legislación, aplicable a aquellos cuya cuantía sea determinada o pueda determinarse. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 522/04, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por B.N.M. S.A. en contra de G.A.I. S.A. DE C.V. y otros. Sentencia emitida el 22 veintidós de abril de 2005 dos mil cinco. Magistrado: José Patricio González Martínez.

169. EMBARGO DE BIENES MUEBLES. ES ILEGAL QUE EL JUEZ INDAGUE OFICIOSAMENTE QUE SEAN PROPIEDAD DEL DEMANDADO, ANTES DE PREVENIRLO SOBRE SU ENTREGA VOLUNTARIA. Partiendo de la premisa jurídica de que los procedimientos mercantiles deben regirse por el principio dispositivo, lo que implica que es sobre las partes en quienes pesa el gravamen de impulsar la práctica de las diligencias que lo conforman, y sólo en supuestos excepcionales el juez puede llevar a cabo actuaciones sin mediar petición expresa de alguno de los contendientes, es inconcuso que si el acreedor solicita a la autoridad que prevenga al demandado sobre la entrega material al depositario de los bienes muebles (vehículos) sujetos a embargo, es indebido que ésta reserve acordar dicha petición y ordene oficiosamente recabar la información atinente a conocer a favor de quién se encuentran inscritos dichos bienes en la Tesorería del Estado, al no existir precepto jurídico alguno que faculte al juzgador para proceder por si mismo de tal manera, infringiendo así además el diverso principio de legalidad que debe imperar en el procedimiento. Aunado a lo expuesto, de admitirse dicha gestión oficiosa so pretexto de salvaguardar las garantías individuales de terceros, equivaldría a quebrantar el equilibrio procesal entre los contendientes, en este caso, dentro del procedimiento de embargo, pues ello implicaría la dilación del mismo en beneficio del demandado con el consecuente perjuicio del actor, quien no obstante encontrarse legitimado para asegurar el pago del adeudo reclamado mediante el inmediato embargo y secuestro de bienes, tendría que esperar el resultado que la información solicitada arroje, con los concomitantes riesgos que ese retardo acarrea, verbigracia, el ocultamiento, dilapidación o enajenación de los bienes embargados. Máxime que en el supuesto de que resultare que no es el ejecutado, sino un tercero el propietario de dichos bienes, es atribuible al demandante y no al juez la responsabilidad de la actuación, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1392 del Código de Comercio, los bienes embargados deberán ser puestos en depósito bajo la responsabilidad del acreedor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA. Toca de apelación en artículo

número 406/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil número 626/2006, promovido por V. J. T. O. en su carácter de endosatario en procuración de R. H. L. M. en contra de R. R. R. Sentencia emitida el 29 de noviembre de 2006. Magistrado: José Patricio González Martínez.

170. PRESCRIPCION ADQUISITIVA. ACCION EJERCITADA CON BASE EN UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, EL MISMO REQUIERE SER DE FECHA CIERTA, PUES DE LO CONTRARIO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO JUSTO TÍTULO. La figura jurídica denominada prescripción adquisitiva contenida en los artículos 790, 791, 826, 1148 y 1149 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, requiere de una posesión que sea en concepto de propietario y con justo título, de manera pacífica, continua y pública. Luego entonces, si en el caso el actor promovió juicio de prescripción adquisitiva con sustento en un contrato privado de compraventa que celebró con persona ajena a la litis, resulta que dicho documento no puede ser considerado como justo título, por ser imperfecto, si no cuenta con fecha cierta; lo anterior en virtud de que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados que contienen un contrato de compraventa en el que se consignan actos traslativos de dominio, para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, tal y como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se dan éstos supuestos se estime que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros, al tenor de lo dispuesto por los artículos 2216, 2894 fracción I y 2895 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, ya que de lo contrario sólo podrá generar efectos jurídicos entre las partes contratantes, empero no puede producir consecuencias de derecho alguno contra terceros. De modo que tal requisito de la fecha cierta tratándose de la usucapión, garantiza cualquier argucia legal que pudiera hacerse valer aprovechándose de la falta de publicidad exigida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 102/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre prescripción adquisitiva, promovido por C. G. G. y M. L. G. en contra de Y. G. C. DE G. en su carácter de propietaria del usufructo vitalicio y los menores J. M., Y. y A. de apellidos G. G. en su carácter de propietarios de la nuda propiedad, debidamente representados por la primera; acumulado al Juicio Ordinario Civil sobre acción reivindicatoria promovido por Y. G. C. DE G. por sus propios derechos y en representación de sus menores hijos J., Y. y A. de apellidos G. G. en contra de C. G. G. y M. L. G. Sentencia emitida el 24 de Febrero del 2006. Magistrados: José Guadalupe Treviño Salinas (presidente), José Patricio González Martínez (ponente) y Genaro Muñoz Muñoz.

171. PRINCIPIO DE INDISTINCIÓN LEGAL. SURTE APLICACIÓN EN EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. De acuerdo con el texto del artículo 1401 del Código de Comercio, las pruebas que ofrezcan las partes en los juicios ejecutivos mercantiles únicamente necesitan encontrarse relacionadas con los hechos o puntos materia del debate. De tal suerte que, siguiendo el conocido principio jurídico de indistinción legal, no es posible que en el ofrecimiento de medios de convicción en los juicios ejecutivos se introduzcan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de aquel ordenamiento legal, en el tenor de que las probanzas deberán ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar con ellas, así como las razones por las que el oferente considera que probarán sus afirmaciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca de apelación en artículo 36/2006, formado con motivo del juicio ejecutivo mercantil promovido por D.R.V.M. en su carácter de endosatario en procuración de I.V.P. S.A de C.V., en contra de A.PyC. S.A. de C.V. Sentencia pronunciada el 31 de enero 2006. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

172. TÉRMINO PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN JUICIOS MERCANTILES. DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO. El emplazamiento constituye la especie, dentro del género de las notificaciones, puesto que el mismo tiene como finalidad hacer del conocimiento de una persona, la existencia de un juicio en su contra, así como la oportunidad que tiene para ocurrir al tribunal en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas, alegar y que se le dicte sentencia conforme a derecho, con la salvedad de que tal diligencia, atendiendo a su gran trascendencia, puesto que conlleva el aseguramiento de la garantía de audiencia, implica mayores formalidades. Así, cuando el artículo 1075 del Código de Comercio señala, en su segundo párrafo, que las notificaciones personales surten efectos el día siguiente a aquel en que se hayan practicado, comprende al emplazamiento, pues aún y cuando su primer párrafo señala que todos los términos comenzarán a computarse a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos el emplazamiento o notificación, empleando la conjunción disyuntiva “o”, la cual enlaza palabras u oraciones para expresar posibilidades alternativas, distintas o contradictorias (Gramática. Lengua Española. Reglas y Ejercicios, primera edición, octava reimpresión, México, 2003), no debe interpretarse de modo tal que el vocablo “notificaciones” excluya al emplazamiento o viceversa, sino que, por el contrario, ha de apreciarse desde el punto de vista de que el legislador quiso darle al emplazamiento una relevancia y mención particular entre el género de las notificaciones, dada su vital trascendencia e importancia, sin que ello implique desconocer la naturaleza intrínseca del llamamiento a juicio. Por lo tanto, si bien, a primera vista, pudiera parecer que existe un desacuerdo entre lo establecido por el artículo 1075 y los diversos 1114, 1117 y 1399 del Código de Comercio, al establecer estos últimos, básicamente, que el término para la contestación se computa a partir del día siguiente al en que se realiza el emplazamiento, una correcta intelección de

dichos dispositivos traen como resultado que los mismos vengan a complementarse para establecer un sistema armónico, que es el que debe privar en la ley y su recta interpretación. En efecto, no debe perderse de vista que para que una notificación se tenga por legalmente hecha, deben satisfacerse los dos momentos de la misma, o sea, en primer lugar que se dé a conocer el acto o resolución conforme a las reglas procesales respectivas al interesado, y en segundo lugar, que ésta surta efectos. Puesto que el surtir efectos una notificación forma parte de ésta en su perfeccionamiento, así que mientras una notificación no haya surtido efectos en los términos de la ley respectiva, no se pueden legalmente computar los términos que la ley conceda a las partes. Consecuentemente, aún y cuando resulta cierto que los dispositivos legales 1114, 1117 y 1399 del Código de Comercio parecieran tener una excepción a la regla general contenida en el artículo 1075 del mismo ordenamiento, ello no es así, ya que al hacer mención que los términos correspondientes comenzarán a computarse a partir del día siguiente al emplazamiento, ello debe entenderse que es a partir de que dicho emplazamiento ha quedado perfeccionado, es decir, cuando ha surtido efectos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca en artículo número 310/2006.- Expediente judicial número 242/2006.- Juicio Ordinario Mercantil promovido por R.G.D., en contra de A.N.A., C.S., S.A. de C.V.- Sentencia emitida el 31 de julio de 2005. Magistrado: Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

173. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO SE ORDENA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN JUDICIAL, ES NECESARIO SU CUMPLIMIENTO PARA QUE PUEDA COMPUTARSE EL TÉRMINO RESPECTIVO PARA SU SANCIÓN. Conforme al artículo 1076 inciso a) del *Código de Comercio,* el término de 120 ciento veinte días contemplados para la caducidad de la instancia, empieza a computarse a partir de que haya surtido sus efectos la notificación de la última resolución dictada dentro del procedimiento. Ahora bien, para determinar cuándo surten efectos las notificaciones, resulta necesario remitirse a la regla general contenida en el numeral 1075 de la legislación en consulta, el cual señala que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales. Acorde a tales preceptos legales, se concluye que es una condición legal, para poder computar el término de la caducidad, que surta efectos la notificación de la última resolución judicial dictada. De tal suerte que, cuando en ésta se ordenó notificación personal a las partes, es necesario que se lleve a cabo su cumplimiento a fin de que surta sus efectos jurídicos y, por ende, a partir del día siguiente pueda computarse el término previsto para la caducidad de la instancia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PRIMERA SALA. Toca 575/2005, formado con motivo del juicio ordinario mercantil promovido por M.A.V.A. y otros, en contra de L. I., S. A. de C.V. y otros. Sentencia pronunciada el día 28 veintiocho de noviembre de 2005. Magistrado: Adolfo Guerrero Gutiérrez.

174. LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR NO FUE UTILIZAR LOS TÉRMINOS "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" O "ACTUACIÓN JUDICIAL" COMO SINÓNIMOS PARA DECRETAR LA "CADUCIDAD", SINO QUE LAS DIFERENCIA MEDIANTE EL EMPLEO DE LA CONJUNCIÓN DISYUNTIVA "O" QUE IMPLICA UNA ALTERNATIVA. Acorde con lo establecido en el ordinal 3°, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, en la parte que interesa dispone: "... En los Juicios Contenciosos la instancia caducará cualquiera que sea el estado en que se encuentre, cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio, en única o en la primera instancia durante un lapso de ciento veinte días, en la segunda instancia de sesenta días. Los términos comprenderán tanto días hábiles como inhábiles y empezarán a contar a partir del día siguiente al de la última resolución o actuación judicial", resulta incuestionable que para que opere la caducidad de la instancia, se deben satisfacer tres requisitos a saber: 1). No exista un impedimento procesal que la suspenda; 2). Que las partes se abstengan de promover el curso del juicio, en única o en la primera instancia durante un lapso de ciento veinte días; 3). Los términos empezarán a contar a partir del día siguiente al de la última resolución o actuación judicial. Como se ve, de la intelección del numeral a que se refieren las hipótesis anotadas, se desprende que la intención del legislador, no fue la de utilizar los términos "última resolución" o "actuación judicial" como sinónimos, para decretar la caducidad de la instancia, sino que las diferencia mediante el empleo de la conjunción disyuntiva "o", que implica una alternativa, pues no debe perderse de vista que el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, define a las resoluciones judiciales como simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; decisiones sobre materia, que se llamarán autos y sentencias definitivas o interlocutorias; en tanto, que si bien, en dicho cuerpo de normas, no lo hace respecto de las "actuaciones judiciales"; sin embargo, acordes con el concepto de la antigua Sala Auxiliar del Máximo Tribunal del País, al establecer la tesis misma que se publica en la página 8 del Tomo 91-96 Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. CONCEPTO", de que lo constituye todo cuanto obra en el expediente que integra el proceso o juicio, es clara la intención del legislador en diferenciar dichos conceptos, pues de no entenderlo así se iría contra su espíritu, que dejaría al arbitrio tanto de las partes como del juzgador aplicarlos como sinónimos no obstante sus diferencias; de ahí que se concluya que el inicio del cómputo para decretarla deba ser a partir de la última resolución o actuación judicial que exista en el proceso o juicio, en términos de lo establecido en la última parte del segundo párrafo del artículo 3°, del Código Adjetivo Civil en el Estado. Establecido lo anterior, debe precisarse que no toda promoción o actuación tiende a impulsar el procedimiento, ya que una correcta interpretación del artículo 3° del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, permite establecer que sólo aquéllas promociones encaminadas a continuar el procedimiento para su conclusión, son las que deben considerarse como interruptoras de la caducidad. Así las cosas, por encontrarse acreditado en autos, que en el juicio natural fueron practicadas dos actuaciones por el actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, los días

cinco de enero y siete de marzo de dos mil cinco, mediante las cuales dicho funcionario notificó al aquí apelante de la llegada de los autos que se encontraban en la apelación tanto de la sentencia definitiva como de diversa apelación y partiendo de la premisa de que la práctica de dicha notificación constituye una actuación judicial de conformidad con lo preceptuado en los artículos 41 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta incorrecto el proceder del juzgado de origen mediante la resolución impugnada de declarar la caducidad de la instancia, sin tomar en cuenta para ello las actuaciones judiciales del cinco de enero y siete de marzo de dos mil cinco, en las que el fedatario de su adscripción notificó al demandado aquí recurrente de la llegada de los autos que se encontraban en apelación, pues el a quo para computar el término de la caducidad de la instancia debió partir de la fecha de esas actuaciones así como de la promoción mediante la cual, el actor, el quince de abril de dos mil cinco, insistió en el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado, ahora apelante. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en definitiva número 262/2006.- Juicio Ordinario Civil promovido por N.A.G. en contra de L.F.R.. Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2006. Amparo Indirecto 5/2007/-1. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

175. AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO PERO QUE LAS CAUSAS EN QUE LAS SUSTENTAN NO TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. En efecto, si la supuesta violación procesal consistente en la admisión de la prueba confesional, la cual originó la cadena de medios de impugnación referidos por el alzista, no trascendió al resultado del fallo, luego, sus motivos de inconformidad resultan inoperantes, toda vez que con base en los artículos 158, primer párrafo, y 161, fracción I, de la Ley de Amparo, la regla general tratándose de violaciones procesales consiste en que las mismas sólo son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, lo cual no sucedió en la especie, dado que las consideraciones que el juez de primera instancia emitió en cuanto a la prueba confesional de mérito, no son torales en cuanto a la decisión de decretar procedente la acción ejercitada, sino que fueron pronunciadas posteriormente a la decisión tomada en ese sentido, lo cual significa que fueron expresadas a mayor abundamiento y en abono de los razonamientos a través de los cuales estableció que los documentos base de la acción constituyen prueba preconstituida de ésta y que eran suficientes para demostrarla plenamente, por lo que en razón de ello, es evidente que el fallo impugnado seguiría sustentándose, en estos últimos argumentos del juez A quo, razonamientos los cuales incluso ni siquiera fueron controvertidos por el recurrente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 80/2006.- Expediente Judicial 148/2004.- J.E.M promovido por F.F.R.F en contra de J. O. M.- Sentencia emitida el 21 de Agosto del 2006.- Amparo Directo número 538/2006. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

176. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA PRENDARIA, ES IMPROCEDENTE SI SE DEDUCE EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. El numeral 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé un procedimiento especial para que la autoridad judicial, ante el vencimiento de una obligación proceda a la venta de la prenda otorgada en garantía; de esa suerte, si el actor pretende lograr la ejecución de una garantía prendaria debe deducir sus derechos a través del procedimiento que regula dicha ley especial, que tenga como finalidad hacer efectivos los beneficios derivados de la misma, en el que se sigan las formalidades correspondientes, y no en la vía ordinaria mercantil, pues esta última sólo tiene el efecto de declarar procedente la prestación principal, consistente en el pago de pesos; pero no respecto a la ejecución prendaria que tiene una reglamentación especial para ello. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 550/2005.- Expediente Judicial 70/2005.- Juicio Ordinario Mercantil promovido por S.B.C. en contra de D.Ll., S.A. DE C.V. y OTROS.- Sentencia emitida el 18 de julio de 2006.- Amparo Directo número 470/2006. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

177. NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE UNA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS, NO ES MATERIA DE ESTUDIO EN UN INCIDENTE. La nulidad de la escritura pública que contiene una cesión de derechos litigiosos, no puede ser materia de estudio de un incidente, toda vez que aún y cuando pudiera decirse que al hablar de nulidad, se está en el entendido de que se hace referencia al derecho subjetivo público, sea este ejercido mediante acción o excepción, ello obliga a poner de relieve que en el caso particular, al tratarse la referida incidencia de la nulidad de una escritura pública que contiene una cesión de derechos, se está frente a lo que la doctrina denomina acción declarativa; pues resulta evidente que la intención del incidentista en el caso concreto, es la obtención de una declaratoria por parte del Juzgador para que se considere nulo un determinado acto, es decir, tal intención lo es el que se decrete la nulidad absoluta de una cesión de derechos litigiosos contenida en escritura pública, lo que refleja que necesariamente tal pretensión se debe de hacer valer en vía de acción, pues solo a través de ella resulta factible la anulación de un acto jurídico como lo es aquel contenido en una escritura pública y esto es así porque necesariamente se requiere de una resolución en la que se realice una declaratoria de inexistencia jurídica del acto contenido en la citada documental, pues esa declaración de inexistencia o nulidad pretendida por los inconformes con respecto a los actos de que se trata, únicamente se originaría precisamente con la procedencia de la acción respectiva que al efecto se haga valer, ya que es la única forma en la que existiría plena concordancia con lo que dispone el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil que ordena que deben de decidirse todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, haciéndose el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, lo que no resulta factible de obtenerse cuando las impugnaciones planteadas para hacer valer la nulidad y pretender el privar de eficacia jurídica a una escritura pública que contiene una cesión de derechos, se hicieron valer, como acontece en la especie justiciable mediante

la vía incidental y no a través de la acción de nulidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Artículo 480/2005. Expediente Judicial número 924/2001.- Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por H. J. G. G. en contra de M. C. G. y Otra. Sentencia emitida el 10 de octubre de 2006. Amparo Indirecto 1062/2006/VIII. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

178. NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, NO PUEDE HACERSE VALER BAJO EL ARGUMENTO DE QUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO TILDADO DE ILEGAL. En efecto, siendo una persona parte procesal de un procedimiento, ello es claro, que por tan sólo esta circunstancia, dicha parte se encuentra dotada de derechos procesales para comparecer ante el órgano del conocimiento, y en el ejercicio de los mismos, impugnar a través de los medios legales correspondientes la ejecución de los actos que tilda de ilícitos, ello, atendiendo a las formalidades del procedimiento que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego entonces, no es válido que en un acto posterior, la parte que fue omisa en impugnar las actuaciones llevadas a cabo en el juicio aludido, pretenda llevar a cabo su nulidad, alegando su desconocimiento, ya que en relación a los principios de firmeza y preclusión tutelado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es a las partes en conflicto, a quien en todo caso, les incumbe que el desahogo y conclusión del procedimiento, se lleve a cabo en forma legal, so pena de perder el derecho de impugnar el acto tildado de ilícito, en atención a la falta de imprudencia, pericia, atención y cuidados en vigilar ese trámite procesal, no impugnado oportunamente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en Definitiva 179/2005.- Expediente Judicial 488/2003.- Juicio Ordinario Civil promovido por J.M.G.R. en contra de M.A.L. y Otra.- Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2006.- Amparo Directo número 103/2007.- Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

179. TERCERO LLAMADO A JUICIO. PROCEDENCIA Y EFECTOS JURÍDICOS. El Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su numeral 584, refiere que en un juicio seguido por dos o más personas pueden venir al pleito uno o más terceros siempre que tengan interés propio del actor o reo en la materia del juicio, de lo que se deduce que en un juicio puede intervenir toda aquella persona que aún sin haber sido señalada como parte, tenga un interés jurídico sobre la materia que se debate en el juicio, cuya intervención se estime necesaria por pararle perjuicio la sentencia que se dicte en el procedimiento en el cual no fue señalado como parte. De ese contexto, se considera necesario el llamamiento a juicio del Tercero, cuando de las constancias que integran el sumario se desprenda que a éste le asiste interés jurídico en la determinación que se llegue a adoptar al momento de analizar la acción, ya que de decidirse el derecho sin la legal intervención del citado Tercero, indudablemente la sentencia que se dicte le parará perjuicio. Siendo los efectos de dicha figura jurídica, el ordenar la reposición del procedimiento, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía

procesal, para que el juez llame a juicio al Tercero, a fin de que sea oído, concepto éste que implica se le considere como parte, pudiendo en consecuencia ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 92/2007, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por R. L. C., en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de U. M., S. A. DE C. V., en contra de A. P. D. y L. A. L. DE P. Sentencia emitida el 29 de junio del 2007. Magistrados: Genaro Muñoz Muñoz (presidente), José Patricio González Martínez (ponente), y José Guadalupe Treviño Salinas.

180. SEGUROS, CONTRATO DE. EL PAGO DE LA PRIMA ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. El pago de la prima constituye un elemento de la acción, pues si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta, el cual no puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento de aceptación, ni tampoco a la condición del pago de la prima, obligando desde entonces a las partes contratantes, según se dispone en el artículo 1796 del Código Civil Federal, aplicado en suplencia del de Comercio, en el caso concreto, no se debate la existencia del contrato, sino su cumplimiento. En ese contexto, al generar derechos y obligaciones recíprocos el contrato de seguro, es aplicable el numeral 1949 del Código Civil Federal, en suplencia del de Comercio, que prevé a la facultad de resolver las obligaciones como entendida implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe; por ende, si el asegurado reclama a la aseguradora el pago por concepto de gastos de daños ocasionados a los vehículos asegurados, debe primeramente acreditar haber cumplido con la obligación a su cargo, a saber, que pagó el importe de la prima, con la salvedad de las excepciones previstas en los artículos 40 en relación con el 35, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 508/2006, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por Á. L. A. DE L., en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de T. C., S.A. DE C.V., en contra de S. LA T., S.A., actualmente C. C. DE S., S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 7 de mayo del año 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

181. PARTE. SENTIDO FORMAL Y MATERIAL. Conforme a la doctrina expuesta, nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado en suplencia del de Comercio, en su numeral 9o. refiere que todo el que conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio, y los que no se encuentren en ese supuesto, podrán hacerlo por medio de sus representantes legítimos. De esa guisa, se deduce que en un juicio puede comparecer toda aquella persona que se encuentre en el

pleno ejercicio de sus derechos ya sea en nombre propio, o bien, que en nombre de ella comparezca otra persona a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional para la aplicación de la norma jurídica al caso concreto. De ese contexto, este Tribunal ad quem considera que parte en el juicio pueden ser actores o demandados en sentido material, es decir, a quien pare perjuicio la sentencia, o bien, en sentido formal tratándose de quien comparezca en nombre de otro a demandar, o de quien en representación de otro comparezca a defenderse de la acción ejercitada; distinciones que desde luego se efectúan con el fin de evitar confusiones entre las personas que comparecen en juicio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en Artículo número 583/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por M. C. P. y C. M. G. DE LA G., como subrogatarios de B. N. DE M., S. A., en contra de L. Y M., S. A. DE C. V. y C., S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 6 de marzo del año 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

182. DECLARACIÓN DE PARTE. NO EXISTE COMO TAL EN MATERIA MERCANTIL. Si bien el artículo 1205 del Código de Comercio reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 veinticuatro de mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, establece que serán admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos, comprendiéndose entre otros, las declaraciones de las partes, dicha regla debe entenderse acotada por las propias disposiciones del título relativo a las pruebas, esto atendiendo a que la intención del legislador al reformar el mencionado precepto fue la de dar mayor amplitud a los medios probatorios susceptibles de acogerse, dados los avances tecnológicos y científicos de la sociedad, mas no que se pudiese variar la esencia de aquellos que anteriormente ya establecía dicha codificación en forma taxativa y quedaron imbíbitos en la nueva normativa. Bajo tal contexto, resulta claro que al referir el legislador en el numeral de mérito que serán admisibles las declaraciones de las partes, en realidad se está aludiendo a la confesión prevista en los artículos 1211 a 1236 del Capítulo XIII, Título I, Libro Quinto, del compendio jurídico en cuestión, pues cuando la confesión se rinde en forma expresa, ésta consiste precisamente en una declaración hecha por uno de los contendientes del juicio, y en esa virtud es evidente que conforme a las disposiciones relativas a dicho elemento convictivo, las únicas declaraciones de las partes admisibles en el procedimiento mercantil son las que se efectúen a título de confesión en términos de los dispositivos mencionados, por lo cual no es factible la materialización de las mismas conforme a un interrogatorio libre y directo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo número 460/2006, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por M.M.R., en su carácter de endosatario en procuración de A.L.F., S.A. DE C.V., en contra de la persona moral denominada R. Y A. M., S.A. DE C.V. Sentencia emitida el 31 treinta y uno de mayo del 2007 dos mil siete. Magistrado: José Patricio González Martínez.

183. GARANTÍA HIPOTECARIA. LOS BIENES SUJETOS A LA, NO PUEDEN SER ENTREGADOS AL ACREEDOR O AL DEPOSITARIO QUE ESTE DESIGNE AÚN Y CUANDO SE HUBIERE PACTADO EXPRESAMENTE, PUES ELLO ATENTA CONTRA LA NATURALEZA JURÍDICA DE DICHA INSTITUCIÓN. De una correcta interpretación al artículo 2893 del Código Civil Federal, se infiere la prohibición de que los bienes hipotecados puedan ser entregados al beneficiario de dicha garantía o al depositario que éste designe, puesto que si bien es cierto que del dispositivo transcrito no se aprecia que tal desposesión al garante esté terminantemente vedada, tal conclusión deriva del adecuado entendimiento de la institución que define, ya que atendiendo a los antecedentes históricos de la misma, es posible concluir que el hecho de que los bienes objeto de hipoteca no sean entregados al acreedor, es una característica esencial de la hipoteca, esto considerando que en sus inicios dicha figura sí admitía tal transmisión, siendo en el derecho romano donde al perfeccionarse se le da el carácter de un derecho real constituido sobre bienes muebles o inmuebles, los cuales no se entregaban al acreedor, siendo esta última particularidad el paso fundamental que permitió que la hipoteca se convirtiera en el medio más eficaz, inteligente y auxiliar del crédito, a la vez del recurso económico más ventajoso para que un deudor pudiera seguir explotando el bien sujeto a dicho gravamen. De ahí que de estimarse que el artículo 2893 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, admite la posibilidad de que los objetos hipotecados puedan ser entregados al beneficiario de la garantía, se atentaría contra la propia naturaleza de este derecho real, al grado de equiparársele con la diversa garantía prendaria en donde sí es factible ese desprendimiento de bienes por parte del deudor, lo que tornaría en consecuencia fútil la regulación de esta figura jurídica en la legislación mexicana. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo número 526/2006, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por J.M.L.B. en su calidad de cesionario, en contra de E.E.Z.O. y J.J.O.P. Sentencia emitida el 23 veintitrés de mayo del 2007 dos mil siete. Magistrado: José Patricio González Martínez.

184. ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN CONTRA DEL OBLIGADO PRINCIPAL, NO IMPIDE QUE SE CONTINUE EL JUICIO EN CONTRA DE LOS AVALISTAS. En un Juicio Ejecutivo Mercantil en el que se ejercita la acción cambiaria directa en contra del obligado principal y avalistas, el desistimiento de la demanda en contra del obligado principal, no impide que se continúe el juicio en contra de los avalistas, toda vez que en términos de los artículos 150, 151, 152 y 153 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la acción cambiaria directa procede en contra del aceptante o sus avalistas y el tenedor del título puede ejercitarla contra todos los obligados a la vez o algunos de ellos. Así es, la persona que se desiste de la demanda solamente pierde todos los derechos y situaciones procesales favorables a ella que se han producido en la instancia, no así el derecho sustancial. Así las cosas, la abdicación de la instancia con respecto al deudor principal no es obstáculo para la

continuación del juicio en relación con los avalistas, puesto que el artículo 154 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite que se ejercite la acción cambiaria directa en su contra, incluso sin que sea demandado el obligado principal avalado. Sin que sea óbice a lo anterior que el artículo 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establezca que "La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que esté sujeta la acción contra el avalado" puesto que esta previsión legal solamente significa que los mismos requisitos que se exigen para hacer efectivo el cobro de un título de crédito en contra del obligado principal, serán aplicables cuando se exija a los avalistas, como podrían ser aspectos relativos al protesto, caducidad, prescripción, consecuentemente, el texto del referido numeral no puede ser interpretado en el sentido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y que por ello, el desistimiento de la demanda con respecto al obligado principal, también beneficia a los avalistas." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de apelación en definitiva número 29/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por A. G. C. en contra de I. P. S.A. DE C.V., J. I. B. L. y F. J. M. G. Sentencia emitida el día 26 veintiséis de enero del 2005 dos mil cinco. Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

185. DEMANDA DESESTIMADA. PARA LOS EFECTOS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. El que en un Juicio Ejecutivo Mercantil se hubiera dictado sentencia definitiva que resolvió la improcedencia del juicio, dejando a salvo los derechos del accionante para que los ejercite en la vía y forma legal que corresponda, no puede considerarse que es igual a desestimar la demanda, para así tener por dado el supuesto que dispone el artículo 1041 segundo párrafo del código de comercio, en el sentido de que la demanda desestimada no interrumpe el término de prescripción, ya que por demanda desestimada debe entenderse aquella que no fue admitida o fue desechada, no dando lugar al juicio y no aquella que como es el caso, fue admitida y dio lugar al juicio ejecutivo mercantil que posteriormente y mediante sentencia definitiva fuera declarado improcedente por no haberse basado en documentos idóneos para fundar la vía ejecutiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. OCTAVA SALA. Toca de Apelación en definitiva número 59/2006.- Expediente número 617/2004, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por R. P. F. T., en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de B. S. S. A., en contra de S. A. A. H. y Otro. Sentencia emitida el 23 de junio del 2006.- Magistrado: José Guadalupe Treviño Salinas.

186. PRESCRIPCIÓN ACCIÓN CAMBIARIA. ES A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y NO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO.- En la especie, el hecho alegado por la demandada, en el sentido de que en el apartado de la fecha de suscripción del título base de la acción, se hubiese estampado en el año dos mil, un cuatro al final, de manera alguna incide respecto a la eficacia del

documento basal consistente en un pagare, para que se hubiere intentado su cobro mediante la acción cambiaria correspondiente, esto en la medida en que, de la lectura del artículo 165 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, se advierte que la acción del juicio principal, prescribe en tres años a partir de la fecha de vencimiento de la letra, o en su defecto, en los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128 de la referida legislación y no así a partir de la fecha de suscripción del documento, para que en todo caso hubiere podido influir, en el procedimiento lo alegado por la demandada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca en definitiva 532/2006. Expediente Judicial 362/2006 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por S. A. P. M. en contra de A. Q. Ch. Sentencia emitida el 28 de Marzo de 2007. Amparo Directo número 277/2007/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

187. PAGARE, DIFERENCIA DE LO ESCRITO CON PALABRAS FRENTE A LO CONSIGNADO CON CIFRAS. CASO EN EL QUE NO RESULTA APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. Si en el juicio ejecutivo mercantil de origen de la literalidad del pagaré base de la acción se desprende que el importe escrito con número es $ 87,258.00, mientras que lo escrito con letra es “ochenta y siete doscientos cincuenta y ocho pesos 00 m.n.” no es válido determinar, dada la redacción de lo escrito, que en tal documento crediticio resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el sentido de que el título de crédito cuyo importe estuviera escrito a la vez en palabras y cifras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras, ya que en el caso particular lo asentado con letra no puede ser traducido válidamente en numerario; por ello, no se puede acudir al texto literal del numeral en mención, pues no se trata de una diferencia en el importe del título escrito con número frente a lo escrito en letra, si no en un error de escritura al momento de llenar el rubro de la cantidad escrita con letra, por lo que no es posible atribuir otro significado que no fuese el relativo a lo expresado con número. Tribunal Superior de Justicia. Tercera Sala Civil. Toca en Definitiva 9/2007. Expediente Judicial número 33/2006 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por J.E.M.L. en contra de J.L.Y.E. Sentencia emitida el 30 de Enero de 2007. Amparo Directo número 216/2007/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

188. LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. DEBE DEJARSE A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE ACTORA Y NO ABSOLVER A LA DEMANDADA, SI EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SE ACREDITA LA FALTA DE. Si en el presente caso se declaró por el juez la improcedencia del juicio a virtud de la carencia de legitimación de la parte actora para ejercitar su acción, resulta incorrecto que el a quo haya determinado absolver a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones que se le reclamaron por el actor. Lo anterior es así, pues al no existir legitimación en la causa en la parte actora, siendo que esta es un requisito necesario para la procedencia de la

acción, cuya ausencia impide que el juez se pronuncie válidamente sobre el fondo del asunto, así como de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada; entonces, no llegó a integrarse debidamente la relación jurídico-procesal entre las partes; por ende, resulta claro que el juez de origen se encontraba imposibilitado para condenar o absolver a la parte demandada de las prestaciones exigidas, luego, como lo dispone el artículo 1409 del Código de Comercio, se deben de dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciese valer en la vía y forma correspondientes. Sin que obste a lo anterior la circunstancia que los artículos 1325 y 1326, del Código de Comercio, solamente faculten al juzgador para condenar o absolver al demandado, y que la posibilidad de dejar a salvo los derechos únicamente se prevea en el citado numeral 1409, en relación a las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles, pues la regla contenida en este dispositivo debe operar por igualdad de razón en todos aquellos casos en los que, por algún motivo, no se realice el estudio de fondo, de la acción que se ejercita. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA CIVIL. Toca en Definitiva 46/2007. Expediente Judicial número 157/2004 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por RC, S de RL de CV en contra de MFST. Sentencia emitida el 26 de marzo de 2007. Amparo directo número 263/2007/3. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones.

189. DEPOSITARIO JUDICIAL NOMBRADO EN JUICIO MERCANTIL. EL NUMERAL 1392 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER QUE LOS BIENES EMBARGADOS QUEDARÁN BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR EN DEPÓSITO DE PERSONA NOMBRADA POR ÉSTE, NO DISPENSA DE CAUCIONAR SU MANEJO AL. El numeral 1392 del Código de Comercio, al establecer que los bienes embargados quedarán bajo la estricta responsabilidad del acreedor en depósito de persona nombrada por éste; no dispensa al depositario judicial nombrado de caucionar su manejo, quien y debido a que no tiene obligación de aceptar el cargo, cuando lo hace esa aceptación viene a integrar el contrato de depositaría judicial. Conforme a este contrato el depositario judicial mantiene la cosa secuestrada a disposición del juez que lo nombró, para que la misma sea rematada o entregada a quien venza en el juicio, pues a virtud de esa figura se protege o tutela el interés que indiscutiblemente tienen las partes contendientes en el mismo, de que no alteren las situaciones de hecho fincadas en el secuestro, con el objeto de que no se reduzcan o dilapiden las garantías que esos actos constituyen, para asegurar finalmente la ejecución del fallo judicial, de suerte que la tenencia de la cosa es conservada por el depositario a nombre de los litigantes, pero a disposición del órgano jurisdiccional, siendo por ende aquél, el directamente obligado a entregar lo que ha recibido por encomienda judicial. Por ello, considerar que del contenido del numeral 1392 del Código de Comercio, al establecer que los bienes embargados quedarán bajo la estricta responsabilidad del acreedor en depósito de persona nombrada por éste; únicamente impone responsabilidad sobre los bienes embargados al acreedor y no al depositario judicial, para no aplicar supletoriamente la legislación federal procesal que viene a reglamentar la obligación del depositario, implicaría no atender realmente al espíritu inmerso en la norma que se

comenta, la cual no dispensa al depositario judicial de caucionar su manejo. Tribunal Superior de Justicia. Tercera Sala. Toca de apelación en artículo número 13/2007. Expediente Judicial 1388/2006 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por J.A.D. vs E.G.C. Sentencia emitida el 14 de febrero de 2007. Amparo Indirecto número 454/2007. Magistrada: María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones. Secretario: Diana Laura Cañedo Balderas.

190. MEDIOS PREPARATORIOS DE JUICIO. ACORDE A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE NUEVO LEÓN, LA DECLARACIÓN BAJO PROTESTA ACERCA DEL HECHO RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO VERBAL DE COMPRAVENTA, NO SE ENCUENTRA EN LOS HECHOS PREVISTOS LIMITATIVAMENTE PARA PROMOVER LOS. El hoy apelante en su solicitud inicial para promover medios preparatorios de juicio, estableció como hechos constitutivos de su solicitud, los consistentes en la celebración de un contrato verbal de compraventa de inmueble, sobre los cuales la promovente pretende que un tercero comparezca a absolver posiciones, y declare bajo protesta de decir verdad, y sostiene el promovente que el supuesto que plantea para pedir los medios preparatorios lo contempla la fracción I del artículo 154 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Esta fracción tiene por objeto exclusivo que la persona contra quien se pretende entablar la demanda, declare bajo protesta de decir verdad, acerca de algún hecho relativo a su personalidad, o en relación a la calidad de su posesión o tenencia. Sobre lo primero, se le podrá preguntar si es tutor, albacea, síndico, apoderado judicial, ascendiente en el ejercicio de la patria potestad, gerente o cualquiera otra circunstancia que legitime pasivamente su personalidad. A ninguna de estas circunstancias se refiere la declaración que el promovente solicita, pues esta atañe a la declaración de consentimiento de un acuerdo de voluntades que se imputa celebrado entre la promovente y a quienes pretende demandar. Es decir, esta fracción no autoriza la recepción de confesión para que se declare un elemento esencial de los contratos. Respecto a lo segundo, se le puede interrogar si es poseedor a título de dueño, de arrendatario, o de simple tenedor de la cosa. Tampoco ninguno de estos aspectos se refiere en los hechos de la promoción inicial de la promovente, los cuales atañen a un supuesto no contemplado en los previstos limitativamente para promover Medios Preparatorios de Juicio de conformidad con el artículo 154 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 164 del mismo ordenamiento procesal, éste último el cual señala: “Fuera de los casos señalados en el artículo 154 no se podrá antes de la demanda articular posiciones, ni pedir declaraciones de testigos, ni otra alguna diligencia de prueba...”. El medio preparatorio como su nombre lo indica, son aquellas diligencias que la ley especifica y que el actor necesita llevar a cabo, antes de iniciar el juicio. Así pues, cualquier otra diligencia que no se halle contemplada en la ley, no puede ser admisible para promover medios preparatorios, en tanto que como se dijo, el precepto 154 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, debe ser interpretado

limitativamente, por ende, ningún otro género de preguntas serán admisibles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. TERCERA SALA. Toca de apelación en artículo número 241/2007. Expediente Judicial número 214/2007 relativo a los Medios Preparatorios de Jucio promovidos por T.M.T. Sentencia emitida el 12 de julio de 2007. Magistrada María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones. Secretario: Diana Laura Cañedo Balderas.

191. CESIÓN DE DERECHOS. PUEDEN SER OBJETO DE CESIÓN TANTO LOS DERECHOS REALES COMO LOS PERSONALES O DE CRÉDITO. Es menester citar opiniones doctrinarias, como elemento de análisis y apoyo, a fin de establecer una mejor noción del concepto de cesión de derechos, por lo que se transcriben las siguientes acotaciones. El Jurista francés Planiol, según la cita que al respecto formula el tratadista Rojina Villegas, en su compendio de derecho civil III, referente a la Teoría General de las Obligaciones, (México. Editorial Porrúa. 1998. Pág. 460), se destaca la conceptualización que de la cesión de derechos formula el citado jurista: “La transmisión de créditos es la convención por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor, a un tercero, quien llega a ser acreedor en lugar de aquél. El enajenante se llama cedente, el adquirente del crédito cesionario; el deudor contra quien existe el crédito objeto de la cesión, cedido”. Acerca de la cesión de derechos reales y de derechos personales, el tratadista Gutiérrez y González, en su obra denominada “Derecho de las Obligaciones” (México. Editorial Porrúa. 1990. Pág. 829), dice: “Ceder, gramaticalmente significa dar o transferir; así entendiendo el verbo ceder, cesión será el efecto o acción de ceder, de donde resulta que ella es una acción muy amplia que implica la dación o transferencia de una cosa... la cesión es el acto de transferencia de una cosa o de un derecho... habrá cesión siempre que una persona transmite a otra un derecho de cualquier índole, real, personal o de otro tipo.... Cesión de derecho real, entendiéndose por ésta el acto jurídico en virtud del cual el titular de un derecho real lo trasmite a otra persona la cual lo recibe con el mismo título que lo tenía quien se lo trasmite... Cesión de derecho personal es un acto jurídico del tipo contrato, en virtud del cual un acreedor, que se denomina cedente, trasmite los derechos que tiene respecto de su deudor, a un tercero, que se denomina cesionario”. Para el autor Martínez Alfaro, en su obra denominada “Teoría de las Obligaciones” (México. Editorial Porrúa. 1989. Pág. 291.), por cesión de derechos debemos entender: “Una forma de trasmitir obligaciones a titulo particular, entre vivos y por cambio de acreedor, mediante un contrato por el cual un acreedor llamado cedente trasmite, a un tercero a quien se llama cesionario, los derechos que tiene contra su deudor llamado cedido, sin que sea necesario el consentimiento del deudor cedido y comprendiendo la cesión los derechos accesorios y los intereses vencidos”. El autor Bejarano Sánchez, en su obra denominada “Obligaciones Civiles” (México. Editorial Harla. 1997. Pág. 388), estima que: “La cesión de derechos es un contrato a virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo transmite a otra persona (cesionario), gratuita u onerosamente, sin alterar la relación jurídica”. Nuestra Legislación Sustantiva Civil, acerca de la cesión de derechos, en su artículo 1923, nos dice: “Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor.”. El concepto que nos proporciona nuestra legislación sustantiva civil, se

refiere únicamente a los derechos personales, sin embargo, podemos deducir, de las anteriores ideas acerca de la cesión de derechos, que citan los diversos autores, que su fundamental naturaleza jurídica, estriba en que, éste es un contrato el cual surge por un acuerdo de voluntades, entre cedente y cesionario, cuyo objeto posible lo constituye la transmisión de los derechos del cedente hacia el cesionario, (sobre una cosa, si se trata de un derecho real, o sobre un crédito, si es un derecho personal), pudiendo este acto jurídico presentar matices singulares, en los cuales puede asumir la esencia de diversos contratos traslativos de dominio, como lo son, la compraventa, permuta o donación. Es así, pues en lo concerniente al objeto de la cesión de derechos, como elemento esencial, lo constituye la transmisión de derechos que hace el cedente al cesionario, y en cuanto al objeto indirecto, los forman él o los derechos en que de manera específica recae, presentando la nota específica de la variabilidad, ya que éste puede revestir la naturaleza jurídica de un contrato de compraventa, si a cambio, de los derechos cedidos, se paga un precio cierto y en dinero (artículo 2142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); la de una permuta, si a cambio de los derechos cedidos se recibe otra cosa (artículo 2221 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); el de una donación, si los derechos se trasmiten gratuitamente (artículo 2226 del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado). Lo anterior se corrobora, con lo dispuesto por el artículo 1925 del Código Civil vigente en el Estado, cuyo tenor literal es el siguiente: “En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo.”. De igual manera se confirma lo anterior, de que no solo los derechos personales pueden ser cedidos, ya que puede serlo cualquier especie, aún los reales, aunque suela ser mas usual, que se cedan los derechos personales, ya que para la transmisión de los derechos reales se recurre a contratos nominados mas acordes a su naturaleza, como los traslativos de dominio. Respecto de éste tópico, el autor Rojina Villegas, en su compendio de derecho civil III, referente a la Teoría General de las Obligaciones, (México. Editorial Porrúa. 1998. Pág. 466), expresa: “La cesión de derechos se refiere tanto a los personales como a los reales. Es decir, comprende toda clase de derechos patrimoniales. Aunque el Código Civil en el capitulo respectivo trata principalmente de la cesión de derechos personales, es evidente que sus reglas pueden aplicarse a la de derechos reales. El mismo Código se refiere a la cesión de la hipoteca o de la prenda como derechos reales, que siguen la suerte del derecho de crédito principal que garantizan”. El tratadista Bejarano Sánchez, (Ob. Cit. Página 389), considera: “Cualquiera especie de derechos puede ser cedida, aun los derechos reales, y ello lo admite implícitamente el legislador mexicano al autorizar las cesiones en globo, o las cesiones de derechos hereditarios que comprenden la transferencia de un cúmulo de facultades jurídicas que pueden ser de diversa naturaleza, así como la cesión de garantías accesorias al derecho de crédito, como la hipoteca y la prenda... salvo la propiedad corporeizada en la cosa, que se transfiere con los contratos típicos llamados traslativos de dominio, cualquier derecho puede ser enajenado por cesión de derechos, a menos de que se trate de un derecho incedible”. El autor Gutiérrez y González, (Ob. Cit. Página 846), estima: “Se ha considerado que los derechos reales de primer grado, no se trasmiten por medio de la cesión, sino que ésta se reserva en forma especial para los derechos que no recaen sobre

cosas corpóreas, como son los derechos de crédito; los derechos reales, se afirma, no se trasmiten por cesión, sino por compraventa, permuta o donación.... nada impide que se ceda el derecho real como se cede el de crédito... Mi personal criterio es en el sentido de que no hay impedimento doctrinario o legal para que la cesión se verifique también respecto del derecho real, aunque no sea usual...". Las anteriores ideas, se corroboran con lo dispuesto en los artículos 1926, 1940 y 1941 de la Codificación Sustantiva Civil Estatal. Estos dispositivos legales, admiten implícitamente que pueden ser cedidos los derechos reales, al autorizarse las cesiones en globo o las cesiones de derechos hereditarios que comprenden la transferencia de un cúmulo de facultades jurídicas que pueden ser de diversa naturaleza, así como la cesión de las garantías accesorias al derecho de crédito, como la hipoteca y la prenda. De esa guisa, si con motivo de la figura jurídica de la cesión de derechos se pueden ceder tanto los derechos reales como los personales o de crédito, en el caso concreto, el contrato de cesión de derechos de crédito, derechos litigiosos y derechos fideicomisarios, versó sobre la transmisión de derechos personales o de crédito, a virtud del cual la cedente, cedió a favor del cesionario, entre otros, los derechos de crédito que tenía contra la parte demandada aquí apelante, así como los derechos litigiosos (los cuales se derivan del litigio instaurado en el juicio de origen entre ambas partes, cedente y demandada apelante); por tanto, al tratarse de una cesión de derechos y no de un pago, no puede operar lo pretendido por la parte demandada hoy apelante. Además, el hecho de que en el contrato de cesión de derechos se haya pactado un precio por la cosa objeto de cesión, y que dado los matices de dicha figura jurídica, ésta puede adoptar la de una compraventa cuando se fijan sus elementos característicos como son la cosa y el precio, en el caso concreto no se trata de una compraventa, sino de una cesión de los derechos personales o de crédito, así como de los derechos de litigio, de los cuales goza el cedente como acreedor, frente al demandado como deudor, siendo los derechos y obligaciones del actor como acreedor objeto de cesión, cuya figura jurídica se encuentra contemplada y regulada en la Ley, la cual no obstante de adoptar matices de contratos nominados, no hace que se conviertan en tales, sino que en todo momento se está en la presencia de un acuerdo de voluntades entre dos partes (cedente y cesionario), para la celebración de un contrato de cesión de derechos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en Artículo número 39/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por D.S.K., como cesionario de S.C.P.L.R. DE A. Y P. S. DE R.L. DE C.V., en contra de M. G.C. Y S.S. DEL N., S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 20 de diciembre del año 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

192. CESIÓN. NOTIFICACIÓN ANTE DOS TESTIGOS (ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Si bien, la cesión de derechos es un contrato el cual surge por un acuerdo de voluntades, entre cedente y cesionario, cuyo objeto posible lo constituye la transmisión de los derechos del cedente hacia el cesionario, (sobre una cosa, si se trata de un derecho real, o sobre un crédito, si es un derecho personal), y en términos de lo dispuesto por el artículo 390 del Código de Comercio, se requiere la notificación de la cesión al deudor ante dos testigos, para que así le pueda surtir efectos, y por ende, pueda el

cesionario como nuevo acreedor ejercer sus derechos contra el deudor, tal notificación es indispensable cuando aún no ha iniciado el juicio, es decir, efectuarse antes de la presentación de la demanda respectiva, en atención a que la finalidad de la notificación es dejar al deudor en aptitud de pagar al cesionario y liberarse así del adeudo, y permitir al cesionario hacer válidos los derechos que le fueron transmitidos. En ese contexto, si la cesión se verifica una vez instaurado el juicio en contra del obligado, la notificación en estricto derecho que señala el dispositivo legal de referencia (aplicable antes de iniciar el juicio), puede efectuarse por medio del funcionario judicial que conforme a la ley le competa efectuarla dentro del proceso judicial, en atención a que la notificación que señala el citado artículo 390 del Código de Comercio, se instituyó como una obligación para la procedencia de la acción, por lo cual no constituye un requisito *ad probationem* la notificación de la cesión ante dos testigos cuando el juicio ya se encuentra iniciado en contra del obligado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SÉPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en Artículo número 39/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por D.S.K., como cesionario de S.C.P.L.R. DE A. Y P. S. DE R.L. DE C.V., en contra de M. G.C. Y S.S. DEL N., S. A. DE C. V. Sentencia emitida el 20 de diciembre del año 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

193. PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, DEJA SIN EFECTOS LA INTERRUPCIÓN DE LA. Es incorrecto determinar que el término de prescripción negativa permanece interrumpido o en suspenso, por el lapso que duró la substanciación del procedimiento: desde la presentación de la demanda hasta la resolución que decretó la caducidad de esa instancia, para luego estimar que, es a partir de esta última fecha cuando se inicia nuevamente el término prescriptivo, toda vez que, por disposición legal de orden público, la actualización de la caducidad trajo consigo que las actuaciones de tal juicio se tornaran nulas de pleno derecho, comprendiendo lo que generó la interrupción de que se trata, es decir, la demanda que fue entablada ya que, para los efectos y en los términos de la fracción II del artículo 1165 del Código Civil del Estado de Nuevo León dejaron de tener valor, pues así lo estableció el legislador en el diverso artículo 3 de la codificación adjetiva de la materia; Por consiguiente, en términos del segundo párrafo del primer dispositivo mencionado, ante la declaración de caducidad de un juicio, se considera que nunca existió una causa efectiva que interrumpiera el lapso de la prescripción, pues volvieron las cosas al estado que tenían antes de su presentación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 230/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Negativa, promovido por M.L.A.V. y R.N.M., la primera como apoderada para pleitos y cobranzas de E.N.M. y el segundo en su carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de C.M.H.vda.deN., en contra de F.A.M.; Sentencia pronunciada el día 20 de Abril del 2007. Magistrados: José Patricio González Martínez (presidente y ponente), José Guadalupe Treviño Salinas y Genaro Muñoz Muñoz.

194. PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NO SE INTERRUMPE POR DEMANDA, CUANDO SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. Si bien, cierto es que los efectos de la presentación de la demanda son interrumpir la prescripción, si no lo está por otros medios, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 623 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, empero, también se debe atender que esa disposición debe ser interpretada en armonía con los diversos artículos 1165 fracción II del Código Civil del Estado y 3° del ordenamiento adjetivo civil mencionado, conforme a los cuales, si el juicio instaurado con la demanda se declara caduco, se considera como no interrumpida la prescripción, ya positiva o negativa; lo que significa que, por disposición legal, de inicio, la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, pero, si el juicio se declara caduco, jurídicamente no puede producir ese efecto. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 230/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Negativa, promovido por M.L.A.V. y R.N.M., la primera como apoderada para pleitos y cobranzas de E.N.M. y el segundo en su carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de C.M.H.vda.de N., en contra de F.A.M.; Sentencia pronunciada el día 20 de Abril del 2007. Magistrados: José Patricio González Martínez (presidente y ponente), José Guadalupe Treviño Salinas y Genaro Muñoz Muñoz.

195. PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. FORMA DE COMPUTAR SU TÉRMINO, CUANDO OPERA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. En virtud de que los artículos 1165 fracción II del Código Civil y 3° del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, no reconocen ningún efecto a un juicio caduco, para el efecto de interrumpir el tiempo para que opere la prescripción negativa, se colige entonces que, no puede considerar inutilizado para su cómputo, el lapso comprendido desde la demanda hasta la fecha en que se dictó la resolución de caducidad; Por consiguiente, yerra el juez cuando establece que el nuevo término prescriptivo habrá de computarse a partir de la resolución que declaró la mencionada caducidad pues, lo expuesto, pone de manifiesto que el tiempo de la prescripción no puede empezar a correr nuevamente, en la medida que nunca se interrumpió realmente; de ahí que, si, por regla general, la prescripción negativa opera en un lapso de diez años contados desde que una obligación puede exigirse, es inconcuso que el tiempo que, en la especie, debe tomarse en cuenta para determinar su fecha de inicio, es a partir del vencimiento de la primera de las mensualidades que los deudores se obligaron a pagar en el convenio de reconocimiento de adeudo, de acuerdo a lo dispuesto por los diversos 1156, 1972, 1973 y 1947 del Código Civil del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 230/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Negativa, promovido por M.L.A.V. y R.N.M., la primera como apoderada para pleitos y cobranzas de E.N.M. y el segundo en su carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de C.M.H. vda. de N., en contra de F.A.M.; Sentencia pronunciada el día 20 de Abril del 2007. Magistrados: José Patricio González Martínez (presidente y ponente), José Guadalupe Treviño Salinas y Genaro Muñoz Muñoz.

196. SECRETO BANCARIO. EN RESPETO AL MISMO, ES FACTIBLE QUE QUIEN DESEA HACER USO DE SU DERECHO DE SEÑALAR BIENES PARA EMBARGO, OBTENGA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE SU ADVERSARIO ATRAVÉS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Ningún respaldo legal encuentra el que la autoridad jurisdiccional, bajo el argumento de que pesa sobre el actor interesado el proporcionar la información necesaria de los bienes que pretende embargar, se niegue a solicitar, mediante oficio, a las instituciones bancarias que le indique la parte demandante, información relativa a si existen o no cuentas a nombre de la enjuiciada y, en su caso, los datos de las mismas. Al contrario, tomando en consideración que el señalamiento de bienes para embargo, es un derecho que para ciertos casos se ha concedido por el legislador a favor del actor, es aceptable que, para obtener la apuntada información, solicite el auxilio del juez que conoce del caso pues, a la misma, de manera privilegiada sólo tiene acceso la autoridad judicial y en su caso la hacendaria, siempre que el titular de la cuenta bancaria se encuentre participando en el procedimiento dentro del cual se realiza la solicitud correspondiente, por ser aquella de la calificada como confidencial. Por tanto, en respeto a dicho secreto bancario establecido en el numeral 117 de nuestra Ley de Instituciones de Crédito, si se satisfacen las condiciones necesarias para solicitar la clase de información de que se habla, es inaceptable que se niegue su obtención al interesado por conducto del órgano jurisdiccional pues, además, con la negativa de la autoridad se le estaría dejando ver que para nada trasciende si son legales o no los medios de que se valga el actor para obtener los datos que necesita para materializar el embargo, propiciándose así, sin duda alguna, todo un laberinto de ilegalidades. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA CIVIL. Toca de apelación en artículo número 451/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por E.A.T., en su carácter de endosatario en procuración de A.N.A.C., en contra de M.A.T.M, P.C.G. y M.L.G.P. Sentencia pronunciada el día 14 de noviembre de 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

197. DOCUMENTO PRIVADO OFRECIDO EN COPIA SIMPLE, CONSISTENTE EN PÓLIZA DE FIANZA. SU EXPEDICIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PERMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 1242 del Código de Comercio en vigor aplicable con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 veinticuatro de Mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, los documentos privados deben exhibirse en el juicio en originales y en caso de que formen parte de un libro, expediente o legajo, existe la obligación de exhibirlos para que se realice el cotejo correspondiente que las partes señalen; no menos verdad es que tratándose de “compañías afianzadoras” debe desatenderse lo previsto por el numeral en cita, dado que las compañías afianzadoras no guardan el documento original de la póliza de fianza, debido a que el beneficiario es quien lo mantiene en su poder a virtud de ser el titular de los derechos de garantías que en las mismas se consigna, pues ello se vincula con el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que indica con claridad que

el beneficiario es quien conserva el original de la póliza de fianza, dada la expresa referencia de que si la pierde o extravía, puede pedir un duplicado a la institución afianzadora. De tal forma, que no se le puede exigir su exhibición en términos del artículo 1242 del Código de Comercio, y en todo caso, su expedición será susceptible de demostrarse con algún otro medio de prueba permitido por la legislación mercantil, tal como se acreditó en el presente caso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEPTIMA SALA CIVIL. Toca de Apelación en definitiva número 327/2006, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por F. M. S.A., en contra de R. I. M. S.A. de C.V. Sentencia emitida el 23 de Marzo de 2007. Magistrado: José Patricio González Martínez.

FAMILIAR

1. ALBACEA. LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR ASÍ COMO PRESENTAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS JUDICIALES SEÑALADOS, NO SON OBJETO DE SUSPENSIÓN, AÚN ANTE LA FALTA DE DESIGNACIÓN DE PERITO VALUADOR. De una sana y recta interpretación a lo dispuesto por los artículos 825, 827 y 838 del Código Procesal Civil para el Estado de Nuevo León, se desprende la obligación del albacea de formular así como presentar los inventarios y avalúos dentro de los términos judiciales señalados por el primero de dichos numerales, los cuales no son objeto de suspensión, aún ante la falta de designación de perito valuador, ello al ser estos plazos una cuestión relativa al procedimiento judicial, mismo que por ser de orden público, no es susceptible de interrupción, salvo disposición legal expresa que así lo autorice, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 56 y 60 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por lo cual resulta claro que la obligación de presentar los inventarios por el albacea no se encuentra supeditada a que se de cumplimiento a lo dispuesto por el precitado artículo 827 de ese mismo cuerpo normativo, contrario a lo pretendido por la apelante, máxime cuando conforme al diverso numeral 838 en consulta, se establece la sanción de remoción para el albacea que no hubiere promovido o incluido el inventario correspondiente, dentro del plazo señalado por la ley. Más aún es de resaltarse la improcedencia aludida, atendiendo a que conforme a lo dispuesto por el artículo 825 del Código de Procedimientos Civiles, para la designación del perito valuador por los herederos, el albacea debe primeramente dar aviso al juzgador de que inició la formación del inventario, para los efectos del artículo 827, de donde se coligue que para proceder a la designación de un perito valuador, el albacea debe rendir el informe a la autoridad judicial, lo cual no dice la recurrente haber cumplido, ni tampoco se alcanza a apreciar de las constancias de autos, por lo cual no existía obligación alguna para que se procediera a su nombramiento por el juzgador, pues la omisión de dicho aviso, hace presumir a esta autoridad el desinterés denotado por la albacea, para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a su función, específicamente la relativa a formular el catálogo de los bienes integrantes del acervo

hereditario correspondiente a la sucesión, acarreando la remoción de su cargo conforme a lo dispuesto por el artículo 838 de la legislación civil adjetiva, estimándose por ende correcta la decisión del natural. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 333/03, relativo al Juicio Sucesorio Intestado. Sentencia emitida el 12 de Diciembre de 2003. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

2. ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE EDAD. CARGA DE LA PRUEBA. Cuando en un Juicio Sumario de Alimentos, el peticionario es un hijo mayor de edad, a este compete acreditar, para la procedencia de la acción ejercitada, los elementos establecidos en el artículo 724 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, es decir: 1) El título por el cual se reclaman los alimentos y, 2) la capacidad económica del deudor; además debe justificar que se encuentra estudiando y, que el grado cursado es adecuado a su edad, siendo por consiguiente, presumible a su favor, la medida de su necesidad, pues al evidenciarse que el acreedor lleva a cabo una preparación académica, es obvio que aún no alcanza la aptitud indispensable para cubrir por sus propios medios, lo elemental para su subsistencia, ya que aún se encuentra en una etapa preliminar para comenzar a satisfacer sus necesidades personales, en consecuencia, la pruebas idóneas para justificar el grado de estudios cursados, pueden ser: boleta de calificaciones o kardex de la Institución Educativa donde lleva a cabo su preparación académica, constancia de estudios, boletas de pago donde se observe con precisión el nivel académico cursado. Siendo claro que, al haber demostrado el acreedor alimentario todo lo anterior, corresponde propiamente al deudor alimentista evidenciar que, el peticionario de alimentos cuenta con alguna fuente de ingresos que le permita cubrir sus requerimientos de vida, para con ello desligarse de su obligación alimenticia para con su descendiente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 31/2005 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 15 de marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Atenea Itendehuit Miranda Galindo.

3. ALIMENTOS, LA PENSIÓN FIJADA POR TAL CONCEPTO NO SÓLO OBEDECE A LA NECESIDAD, SINO QUE DEBE ATENDERSE A LA CAPACIDAD PARA QUE SU MONTO CUMPLA IDÓNEAMENTE CON EL OBJETIVO DE LOS. Si el potencial económico del demandado, acreditado en autos, se advierte holgado, el monto de la pensión alimenticia no debe constreñirse a cubrir estrictamente las necesidades primordiales de mera subsistencia de los menores acreedores, sino además, todos aquellos requerimientos que se adviertan esenciales para su debida formación, de forma integral y en todo ámbito. (Físico, mental, emocional, espiritual, cultural, social, etcétera). Conforme se estipula en el artículo 311 del Código Civil en vigor en la entidad, así como en el diverso 308 del mismo ordenamiento sustantivo, además de lo establecido en el dispositivo 11 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo consagrado como derecho individual en el artículo 3 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si además, la capacidad monetaria del deudor es suficiente para permitir ciertas comodidades a sus menores acreedores, es dable atender dicho poderío económico para llegar a un monto de la pensión alimenticia, que atienda y satisfaga idóneamente las particulares circunstancias de sus acreedores, en el nivel de vida ostentado, pues no sería justo para los beneficiarios alimentistas sujetarlos a pasar ciertas carencias, limitaciones y/o restricciones, innecesarias, al fijárseles una pensión alimenticia muy por debajo de la capacidad monetaria de su deudor, cuando su condición económica puede ser mucho menos sacrificada que la de quienes pertenecen a un estatus de vida de marginación, pobreza o nivel social económicamente bajo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 117/2005. Juicio Sumario De Alimentos. Sentencia emitida en fecha 17 de mayo del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Nancy Aurora Torres Luna.

4. ALIMENTOS. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR, TAMBIÉN LA INTEGRAN LOS BIENES GRAVADOS. El artículo 311 del Código Civil de nuestro Estado, establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. El primer aspecto, lo integran, entre otras cosas, el salario, emolumentos y demás percepciones que perciba el demandado, así como los bienes muebles o inmuebles que constituyen su patrimonio; estos últimos, forman parte de la capacidad económica del deudor, a pesar de que se encuentren gravados, pues si bien, en razón de ello, se encuentra afectada la disponibilidad inmediata de los mismos, lo cierto es que, en tanto no se encuentren fuera del patrimonio del deudor, deben tomarse en cuenta, claro está, especificando el gravamen que reporta cada uno de los bienes, ya que, de quedar liberados, el crédito alimentario pudieran tener el derecho preferencial sobre dichos bienes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 45/2003. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 30 de abril de 2003. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

5. ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR CUENTA CON INGRESOS Y BIENES PROPIOS, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA DE NECESITAR LOS. La circunstancia deque el deudor alimentista perciba un ingreso superior al recibido por la acreedora en su empleo, no es determinante para condenarlo al pago de alimentos, pues si éste demostró que además del ingreso, la reclamante es propietaria de bienes muebles e inmuebles, eso es indicativo de que no existe la necesidad de recibirlos; de manera que ante tales elementos de prueba, la acreedora está obligada a comprobar que ello es insuficiente para atender a sus necesidades alimenticias pues tanto la posibilidad del deudor, como la necesidad de recibir los alimentos, son requisitos que deben concurrir para determinar la proporcionalidad de la pensión alimenticia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 165/98, relativo al juicio sumario de alimentos número 5/98 promovido

por M. DE J. L.D., en contra de P.G.G.- Sentencia emitida el 26 de Enero de 1999.- Magistrado: José Patricio González Martínez.

6. ALIMENTOS. LA DEFENSA DEL DEUDOR ALIMENTISTA, EN EL SENTIDO DE QUE SE ENCUENTRA CUBRIENDO LA OBLIGACIÓN QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE. ES IMPROCEDENTE. Los razonamientos, vertidos por el deudor alimentista, con los cuales aduce estar cumpliendo su obligación alimenticia para con sus acreedoras, es inoperante, pues al ser esta obligación considerada como de tracto sucesivo, por tener como efecto salvaguardar necesidades generadas durante todo el tiempo mientras subsista el derecho, declarar la procedencia de la acción, fijando el importe de la pensión correspondiente, como lo realizó la autoridad de origen, es únicamente para establecer la proporcionalidad en el cumplimiento de tal obligación, dando certeza y seguridad a ambas partes del debido acatamiento que debe adoptarse sobre la misma, pues uno de los efectos del fallo en revisión, es establecer judicialmente la forma y los términos en como debe cubrirse la misma, cuyo cumplimiento no debe quedar al arbitrio del deudor alimentista, por lo que aún cuando pudiera estimarse que el demandado, acreditara estar al tanto de las obligaciones que le corresponden como padre de las acreedoras alimentistas, no importa juzgar improcedente la acción alimenticia deducida en el principal, atento a los artículos 308 y 311 del Código Civil, ya que con el juicio de alimentos, lo que se pretende, es dar certeza y seguridad jurídica tanto a las acreedoras como al deudor, en que el cumplimiento que se va a dar a la misma, sea continuo y periódico. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 409/2004. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

7. ALIMENTOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN DEBEN PONDERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil para nuestro Estado, los alimentos deben darse a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, de tal suerte que para fijar el monto de la pensión, no es factible dividir los ingresos del deudor alimentista entre él y sus acreedores mediante una simple operación aritmética, sino, en cada caso particular debe analizarse la capacidad económica de aquel, y ponderarse las necesidades particulares de los acreedores alimentistas, pues, si como sucede en el presente asunto, una de las acreedoras se encuentra en la etapa de adolescencia, y otra es una persona adulta en plena capacidad física y mental, indudablemente que la primera tiene mayores requerimientos que la segunda, ya que, además de requerir comida, vestido, habitación y asistencia médica, también necesita numerario para cubrir sus gastos de recreación y sobre todo, los de su educación secundaria o bien, los generados para obtener un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; lo anterior, con el objeto de atender adecuadamente la aludida regla de proporcionalidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 161/2005. Incidente sobre Reducción de Pensión Alimenticia. Sentencia emitida el 23 de Mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Licenciado Juan Francisco Castillo Lara.

8. ALIMENTOS. PARA VALORAR EN SU INTEGRIDAD LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTISTA, ES NECESARIO JUSTIPRECIAR LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE, QUE PUEDAN DAR LUGAR A PRESUMIR UNA SERIE DE ACTOS SIMULADOS, TENDIENTES A PONER A ÉSTE EN UNA SITUACIÓN ECONÓMICA DESVENTAJOSA. Al constatarse de autos, que la rescisión de la relación laboral que imperaba entre el deudor alimentista y la sociedad para la cual prestaba sus servicios, que viene a ser una empresa familiar, al desprenderse de la escritura constitutiva de la misma, un lazo de parentesco entre todos los accionistas; tuvo lugar, según lo informado por la Representante legal de ésta, después de dictado el proveído que ordenaba la retención de la pensión provisional y, con posterioridad al informe formulado por la Apoderada, respecto del motivo por el cual no se había procedido a hacer el descuento de la misma; tales circunstancias conducen a pensar, que malamente, por el sentir fraterno existente entre los accionistas y la Representante de dicha empresa con el deudor alimentista, se le situó a éste de manera tendenciosa en esa situación, muy probablemente con el fin de desligarle de la obligación legal de proporcionar alimentos, que le asiste para con su esposa e hijos; pues por el orden temporal, en que tuvieron lugar tales acontecimientos, se presume fueron prefabricados, en perjuicio del deber alimentario, que constituye una cuestión de orden público e interés social. De ahí que valorando tales indicios, se arribe a la conclusión, de que si el demandado, quien en un momento contaba con una capacidad económica suficiente, que le permitía tener a sus hijos en escuelas particulares y, por la ubicación de su domicilio conyugal, muy posiblemente en un nivel socioeconómico medio, a la fecha, aún se encuentra en posibilidades de mantener esa misma situación para sus hijos; pues aún, cuando no obre en autos, medio probatorio alguno, que indique fehacientemente, una relación laboral entre él y la empresa de la cual es accionista, en conjunto con sus padres y hermanos, no por ello, puede desconocerse la oportunidad ventajosa, de su capacidad económica, pues de considerarse así, podría darse el caso, que esta autoridad judicial, incurriera en una injusticia, derivada de engaños y actos simulados, debiendo por ende valorarse lo anterior, para juzgar que el deudor alimentista, además de su calidad de comerciante, así como de su actividad de prestador de servicios al realizar mantenimientos y su calidad de socio de dicha empresa mercantil, cuenta con capacidad económica que le puede derivar de una relación que sostenga para con dicha empresa, con fundamento en los artículos 355, 356, 372, 386, 387 y 952 del Código de Procedimientos Civiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 076/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 18 de marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Paulo Gabriel Garza González. Nota: Sobre el particular, es de hacerse notar, que se llamó la atención al demandado y a la Representante de la Sociedad de la que se trataba,

respecto de que su conducta en un momento dado, podía dar lugar a incurrir en un ilícito penal, lo cual se hizo en los siguientes términos: A fin de no pasar por alto lo anterior, esta autoridad, debe llamar la atención del demandado y de la representante de la Sociedad en cuestión, en el sentido, de que las personas que dolosamente se sitúen en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, pueden llegar a incurrir en una conducta delictiva, según lo señala el artículo 280 bis del Código Penal, por lo que es de exhortárseles, que en caso de ser ese el supuesto, se abstengan de continuar haciéndolo, a fin de que la justicia pueda llegar a quien la necesita, pues no existe justificación alguna para ayudar a cualquier persona de abstenerse en el cumplimiento de sus deberes de familia, al ser del todo reprobable que el propio padre de los menores acreedores alimentistas, pretenda situarse en una situación desventajosa en perjuicio de sus hijos.

9. ALIMENTOS. PRESUNCIÓN LEGAL DE NECESITARLOS, NO PUEDE SER DESVIRTUADA POR EL ESTUDIO QUE SE HAGA DE LAS PRUEBAS, CUANDO ELLO NO FUE MATERIA DE LA LITIS CONTESTATIO. El juez de origen, al decretar que se desvirtuaba en perjuicio de la ahora apelante, la presunción de necesitar alimentos, introdujo cuestiones ajenas a la litis, en demérito del principio de congruencia, previsto por los artículos 402 y 403 del Código Procesal Civil, toda vez que ante la contumacia del demandado, derivada de su omisión en contestar la demanda, llevo a tenerle por contestando la misma en sentido negativo, sin oponer excepciones ni defensas, en términos del artículo 631 del comentado ordenamiento legal; por lo que la sola confesión de la accionante, en el sentido de que se dedica a las ventas, sino fue materia de excepción o defensa, no debió tomarse en cuenta, para desvirtuar la presunción que le asiste de necesitar alimentos y, al haberlo hecho así, se rompió con el prealudido principio, por ello, el estudio que sobre tal aspecto realizó el juzgador de origen, devino incorrecto, con fundamento en los artículos 223, 226, 402 y 403 del ordenamiento legal en consulta. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 076/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 18 de marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

10. ALIMENTOS. PROCEDE DECRETARLOS, AUNQUE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO RELATIVO NO SE HAYA DEMOSTRADO EN FORMA PRECISA LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL DEUDOR ALIMENTARIO. Aun y cuando de las constancias procesales no se haya demostrado en forma precisa los ingresos que percibe el demandado por sus actividades comerciales, resulta insuficiente para desvirtuar la convicción creada en el A quo para considerar su capacidad económica, pues como lo señala el artículo 724 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, basta con que se justifique al menos aproximadamente, dicha capacidad, para que el Juez decrete alimentos a favor de quien tenga derecho de exigirlos, una vez acreditado el título en cuya virtud se piden. Máxime, si se justificó que el

demandado posee bienes propios, en este caso, un inmueble. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 317/2004. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 17 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

11. ALIMENTOS. PROVENIENTES DE UN CONVENIO, NO PROCEDE SU CANCELACIÓN, SI SE CONTRARÍAN LOS TÉRMINOS EN QUE FUERON PACTADOS. Si en el convenio celebrado con motivo de un divorcio voluntario, el padre se obligó a otorgar a favor de sus hijos el 45% de su sueldo, durante el tiempo necesario para que dichos menores terminen una carrera profesional o con un tope de seis años a partir de la fecha del convenio, en tanto no se surta alguna de dichas condiciones, no procede cancelar la pensión por haber alcanzado aquellos la mayoría de edad o por el hecho de que no estudien pues de no ser así, se pasaría por alto la voluntad pactada en el convenio, máxime que tratándose de contratos, la voluntad de las partes es ley suprema. De manera que lo único que puede operar es la modificación de la pensión alimenticia, ya sea para aumentarla, o bien para disminuirla, pero no así, su cancelación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 424/2004. Incidente sobre Reducción de Pensión Alimenticia. Sentencia emitida el 28 de enero del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

12. ALIMENTOS. VARIACIÓN DEL TÍTULO EN VIRTUD DEL CUAL PUEDE EXIGIRLOS EL CÓNYUGE INOCENTE EN UN DIVORCIO NECESARIO. Al declararse la procedencia del divorcio que demanda la actora, varió su causa de pedir alimentos, ya que si anteriormente se le concedió él derecho de recibirlos gracias a su calidad de cónyuge, ahora le corresponde por resultar inocente del divorcio concedido, aunque con la limitación que señala el artículo 288, únicamente mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. Al respecto, el jurista Rafael Rojina Villegas, en su obra Derecho Civil Mexicano, Derecho de Familia, afirma sobre los alimentos del cónyuge inocente: La razón de ser de los alimentos contra el cónyuge culpable es una es una sanción.... pues no es en función de la necesidad de los alimentos, sino por una pena que se impone al cónyuge culpable, por haber disuelto el matrimonio. Nadie puede sacar provecho de su propio dolo, de su propia culpa, y sería premiar al marido que además de ser el causante del divorcio, pudiera obtener una liberación de la obligación que fundamentalmente se le había impuesto en razón de sus posibilidades, de su solvencia económica, de su capacidad para el trabajo, para sostener a la mujer que fue inocente en la disolución del vínculo matrimonial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 326/2004. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 16 de noviembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

13. AUN CUANDO SE DECLARE IMPROCEDENTE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, DEBE ESTUDIARSE LA CUSTODIA EN VIRTUD DE TRATARSE DE MENORES CONCEBIDOS EN UNA RELACIÓN DE UNIÓN LIBRE, CUYOS PADRES VIVEN SEPARADOS. No es óbice, el hecho de que se declare improcedente la acción de pérdida de la patria potestad, para que se analicen las reclamaciones respecto de la custodia de los menores, en virtud de la situación en que se encuentran los niños, al ser hijos concebidos fuera de un matrimonio, cuyos progenitores no viven juntos y por ende escapan de la regulación que establece el artículo 283 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, el cual prescribe que: "...la sentencia de divorcio determinará los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad y custodia que conservará cada uno de los cónyuges respecto a la persona y bienes de sus hijos..."; toda vez que dicho precepto, regula los efectos de esa figura jurídica en los matrimonios disueltos, circunstancias que no ocurren en el caso que nos ocupa, donde cuyos padres sostuvieron una relación de unión libre y actualmente se encuentran separados, situación que está prevista por el artículo 380 del Código Sustantivo en aplicación, el cual dispone que en tales supuestos los padres convendrán cuál de los dos ejercerá su guarda y custodia y de no hacerlo, corresponderá al Juez, oyendo al Ministerio Público, resolver lo que creyere más conveniente al bienestar del menor; de ahí que al haberse declarado improcedente la acción de pérdida de la patria potestad de los menores, la autoridad resolutora tiene la obligación de proveer sobre la guarda y custodia aún y cuando no sea materia de la litis, mas aún que en el presente caso constituyó un reclamo dentro del juicio, de ahí que al no haberlo analizado el a quo, se originó inseguridad jurídica a los niños, dada la indeterminación de su paradero y en cuál de los padres debe recaer dicha obligación de cuidado, si ambos siguen ejerciendo la patria potestad y pueden exigirse fundadamente su guarda y custodia mutuamente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 195/03, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Pérdida de la Patria Potestad. Sentencia emitida el 28 de Agosto de 2003. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

14. CADUCIDAD DE LA CAUSAL PREVISTA POR LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL. FORMA DE COMPUTARSE. En cuanto, a lo expuesto por el natural, en el sentido de que el actor del juicio principal, debió esperarse a ejercitar su acción de divorcio, derivada de la causal de divorcio contemplada en el artículo 267 fracción XIII del Código Civil, hasta en tanto se pronunciara sentencia ejecutoria en el juicio penal, derivada de la acusación soporte de dicha causal, donde se declarara la inocencia del cónyuge acusado; tal consideración, carece de soporte legal, toda vez que tal exigencia, no se encuentra contemplada por norma alguna y, por el contrario, de una sana interpretación a la aludida hipótesis normativa, la demanda de divorcio, derivada de una acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, debe ejercitarse dentro de los 06-seis meses siguientes a cuando tenga noticia el cónyuge ofendido de la acusación, pues de lo contrario, habría de reputarse perdonada la misma, por operar la caducidad, conforme al numeral 278 del citado ordenamiento legal.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 137/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 12 de mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

15. CAPACIDAD ECONÓMICA, EN TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE ALIMENTOS. GANANCIAS LIQUIDAS. CARGA DE LA PRUEBA. Considerando que en términos del artículo 366 de la Legislación Civil Adjetiva, la confesión solo produce efectos en lo que perjudique a quien la hace, si el demandado, aceptó ser comerciante, sin atacar tal cuestión y, al absolver posiciones refirió dar mantenimientos, tales manifestaciones deben valorarse para soportar su capacidad económica y, en todo caso, para juzgar su dedicación a actividades comerciales, pues aun cuando las mismas, sean insuficientes para apreciar las ganancias liquidas producto de su desempeño, ello se debe a omisiones del propio demandado comerciante y prestador de los servicios, pues habiendo aceptado éste dedicarse al comercio y dar mantenimientos, debía él allegar las pruebas necesarias que permitieran, justipreciar las utilidades o perdidas que éstas le reportaran, con el fin de resolver la controversia, con mayor apego a la realidad de los hechos y si no lo hizo, su omisión, no puede perjudicar a sus acreedores alimentistas, pues es el propio comerciante, quien se encuentra más facultado para allegar la documentación necesaria que permita apreciar tal extremo y no los terceros ajenos a tal actividad, por lo que de haberse obligado a su contraparte a allegar las pruebas tendientes a demostrarlo, tal carga le resultaría muy difícil de demostrar sino es que incluso imposible, de ahí que como se dijo, valorando la confesión en perjuicio de quien la formuló, es correcto tener en cuenta la misma para acreditar la capacidad económica del deudor alimentista, como lo valoró el natural. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 076/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 18 de marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

16. CAPITULACIONES MATRIMONIALES. PUEDEN OTORGARSE ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO O DURANTE EL. En nuestra Legislación sustantiva civil vigente, contrario a lo aducido por la inconforme si es obligatorio para los consortes la constitución de las capitulaciones matrimoniales, puesto que el artículo 180 del Código Civil en vigor, establece claramente que las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran después; la anterior disposición comprende dos acepciones de interés que se deben de analizar para comprender el porque el legislador estableció que las capitulaciones matrimoniales deben celebrarse antes del matrimonio o durante él; la primer acepción (que las capitulaciones matrimoniales se celebren antes del matrimonio) es comprensible puesto que la misma se surte en los casos en que alguno de los contrayentes posean bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio, y que para que los mismos formen parte de la sociedad conyugal se deben

celebrar las capitulaciones matrimoniales, ya que debe constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida según lo preceptúan los artículos 178 y 185 del Código Civil en vigor; y en cuanto a la segunda acepción (que las capitulaciones matrimoniales se celebren durante el matrimonio) es pertinente hacer la aclaración, que en concepto de esta Sala debe entenderse que se da en los casos en que los bienes son adquiridos durante la vigencia del matrimonio, pues si estos se adquirieron durante el mismo, debieron haberse celebrado las mencionadas capitulaciones matrimoniales, puesto que éstas están destinadas a regular la atribución de los cónyuges en cuanto a la propiedad de los bienes, productos y frutos, así como su administración tal como lo señalan los artículos 179 y 189 del Código Civil en vigor, y la ausencia de las capitulaciones matrimoniales hace improcedente la acción intentada por la accionante en cuanto a que su consorte le deba rendir cuentas de los bienes de la sociedad conyugal, puesto que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad y por ende, su administración tal y como se colige de los numerales 172 y 194 del Código Civil en vigor; siendo errónea la alegación esgrimida por la apelante en cuanto a que si se esta considerando que la administración de los bienes recae en ambos cónyuges, su reclamación de exigirle la rendición de cuentas al demandado deba declararse procedente porque ambas partes serían los administradores de los bienes de la sociedad conyugal; a lo anterior cabe decir, que su alegación resulta improcedente, puesto que el planteamiento de su demanda se basó fundamentalmente en que de común acuerdo había pactado la actora con el demandado que este último fuera el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, y no en que ambos fueran los administradores de la sociedad conyugal y que por ello se le deba obligar al demandado a que rinda cuentas de la administración de los mismos, pues de tomarse en consideración dicha circunstancia se estaría variando el sentido de la litis, pues dentro del procedimiento civil, sólo pueden ser materia de prueba los hechos que son objeto del debate. Concluyéndose, por lo tanto confirmar la sentencia del Juez de Primera Instancia que declaró improcedente dicha acción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 71/01, Juicio Ordinario Civil, promovido por Mirna Cristina Carrión Uhart en contra de Mauro Javier Muñoz Pérez. Sentencia emitida el 27 de Agosto de 2001. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

17. CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. CONSTITUCIONALIDAD DEL JUICIO SOBRE. No es verdad que el procedimiento de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores contemplado en el Capítulo IV Bis, del Título Cuarto, Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, sea inconstitucional en virtud de que se viole el contenido de las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la circunstancia de que según la demandada no se le permite oponerse a la convivencia solicitada, ni ofrecer pruebas para justificar sus excepciones, y que sólo basta que el accionante acredite ser el titular del derecho que solicita para que

prospere su acción, pues contrariamente a lo aseverado por la demandada, dicho juicio especial sí reúne todas las formalidades esenciales del procedimiento, y no se le deja en un total estado de indefensión a la parte demandada, ya que entre otras son el de notificarle el inicio del procedimiento y sus consecuencias, darle la oportunidad al demandado de ofrecer las pruebas y el de formular los alegatos de su intención, a fin de justificar las defensas o excepciones que hizo valer para desvirtuar la acción incoada en su contra. Por otra parte, si bien es cierto que en el referido procedimiento, es suficiente para que prospere que se acredite por el accionante ser el titular del derecho que solicita, no menos es cierto que ello implique que la parte demandada no pueda oponerse a lo solicitado por el accionante, ya que tiene la oportunidad de acreditar que con la convivencia solicitada se pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, o sea, que dicha convivencia no es benéfica para sus hijos; además de que la circunstancia de que la parte actora no esté cumpliendo con la obligación de dar alimentos a sus hijos, la misma no es causa bastante para negar la convivencia solicitada, puesto que la demandada tiene expedito el derecho para demandar al actor el abandono de sus deberes mediante el ejercicio de una acción autónoma e independiente a la citada controversia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 117/98, relativo al Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de los Menores Número 1394/97 promovido por H.G.C.M. en contra de G.A.A.- Sentencia emitida el 17 de septiembre de 1998.- Magistrado: José Patricio González Martínez.

18. CONTROVERSIAS SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. INTERVENCIÓN LEGAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Tenemos que la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece como parte del derecho de participación que indudablemente deben tener los menores en los asuntos que les incumban, la posibilidad de expresar opinión por su parte en relación con su voluntad a convivir con sus familiares; lo que implica que se tome parecer a los infantes respecto de los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen, derecho que prevé expresamente el artículo 41 de la referida ley; a su vez, los artículos 48 y 49 del mismo cuerpo normativo determinan la creación de instituciones especializadas, con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto a los derechos de los menores, que les faculta para representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables. Entre las facultades establecidas en el artículo 49 de la referida ley destacan, las de vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos de niñas y niños; las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en los términos del artículo 133 constitucional y las previstas en la legislación aplicable; representar legalmente los intereses de niñas y niños ante las autoridades judiciales y denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito. Ahora bien, en nuestra entidad esa función de vigilancia y representación de los intereses de los menores se encuentra,

conferida al Ministerio Público, tal y como se desprende en el artículo 905 del Código Procesal Civil del Estado, que le permite tener intervención en todo lo concerniente a la familia, a los menores y a quienes sufren en alguna incapacidad; pues así se desprende del conjunto de normas que le otorgan intervención en relación con los actos del estado civil, matrimonio, divorcio, aseguramiento de alimentos, reconocimiento de hijos, en los casos de adopción, respecto del cumplimiento de la obligación de educación, sobre la administración de los bienes del menor, en todo lo relativo a la tutela y conservación de los bienes del pupilo, en los casos de ausencia, respecto de testamentos y herederos menores y la partición de herencia con intervención de menores. En suma, bajo las consideraciones apuntadas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo a dos principios básicos: el interés superior del niño, y el de que la participación o intervención del Ministerio Público es necesaria, por tratarse del órgano estatal con facultades para procurar la salvaguarda de ese supremo interés del menor, conforme lo disponen la Constitución General de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 207/2004. Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 3 de Marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

19. CONTROVERSIAS SOBRE CONVIVENCIA Y POSESION INTERINA DE MENORES. NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS QUE EL TRIBUNAL AD-QUEM SUPLA LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DE LOS MENORES. EN LAS. Por tratarse de una controversia de carácter familiar concerniente a la convivencia padre e hijo y dada la naturaleza especial del derecho de familia, tal cuestión es de orden público, por lo que deben de cuidarse los intereses del menor de edad, porque el Estado tiene especial interés en que cuente con lo indispensable para su sano desarrollo físico y moral, por ello es correcto que con fundamento en los artículos 4º de la Constitución General de la República, 3º de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 446 in fine del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se supla la deficiencia de la queja a favor de los menores, no del apelante, y así se decreten las medidas que se estimen pertinentes para cumplir con la función del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 050/98, relativo al Juicio sobre Convivencia y Posesión Interina de los Menores, Número 1182/97, promovido por H.F.C. en contra de N.E.E.M.- Sentencia emitida el 23 de noviembre de 1998.- Magistrado: José Patricio González Martínez.

20. CONTROVERSIAS SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. OFICIOSIDAD EN LA APORTACIÓN DE PRUEBAS DENTRO DE LAS. Tomando en cuenta la atribución que asiste no sólo a este Tribunal de Alzada, sino

a todos los órganos jurisdiccionales del país, en cuanto a velar por el interés superior de los menores y, por ende, en suplir las deficiencias de los procedimientos judiciales en que se ventilan cuestiones que trascienden a los derechos de menores, se estima que la falta de desahogo de la prueba pericial y la omisión de dar vista al Ministerio Público en el juicio de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores produjo una violación de fondo que derivó en un estado de indefensión respecto de los derechos e intereses de la menor, ya que no se atendió durante la secuela procesal a ese interés superior que se determina como preponderante en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada en Nueva York, Estados Unidos de América, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, y que entró en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, al ser ratificada por nuestra nación el veintiuno de septiembre de ese mismo año, pues no se recabaron las pruebas necesarias a ese fin; por lo que, esta autoridad de alzada, en base a las circunstancias antes señaladas, tiene a bien revocar la sentencia definitiva impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordenando reponer el procedimiento de origen a efecto de que el juzgador de primera instancia proceda a otorgar la intervención legal que le corresponde al C. Agente del Ministerio Público de su adscripción, y ordene recabar oficiosamente la prueba pericial en materia de psicología, y en general todas aquellas tendientes a observar el interés superior de la menor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 207/2004. Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 3 de Marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

21. COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA A FAVOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGA COMO ACTOR O DEMANDADO. **(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)**. Ahora bien, no obstante que la parte apelante no obtuvo resolución favorable a sus pretensiones, ya que sus agravios vertidos ante esta autoridad no fueron suficientes para revocar o modificar la sentencia impugnada, según ha quedado plasmado en el considerando que antecede, no ha lugar a condenarla a soportar el pago de los gastos y costas que haya generado la parte actora, con la tramitación de esta instancia; ello es así, a virtud de que en el presente asunto, tenemos que la parte accionante del mismo, lo fue el C. Licenciado, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, y tal persona es un funcionario público al servicio del Gobierno del Estado, situación que debe tomarse en cuenta dentro de un procedimiento judicial al momento de determinar sobre la procedencia o no de la condenación en costas, cuando tal funcionario actúa como accionante del mismo. En efecto, de una interpretación sistemática de los dispositivos antes señalados, así como de los diversos 50 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 23 fracciones XXII y XXXIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se advierte claramente que el Ministerio Público, como representante del

Estado y de la sociedad en general en cualesquier procedimiento judicial en que por su investidura tiene injerencia, ya sea como actor o demandado, no tiene derecho a exigir el cobro de las costas judiciales que se generen con motivo de la gestión del negocio en que intervenga, puesto que se trata de un funcionario que se encuentra obligado, en virtud de su encomienda asignada, a realizar cualesquier tipo de gestiones y a desempeñar todas las comisiones inherentes a sus facultades y atribuciones que le competen en forma legal, como lo es el ejercicio de ese tipo de enjuiciamientos, por las cuales percibe una remuneración correspondiente, a cargo del presupuesto fiscal del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 316/2004. Juicio Especial Sobre Perdida de la Patria Potestad. Sentencia emitida el 03 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega

22. CUSTODIA. LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PROGENITORA DE UN MENOR DE SIETE AÑOS ES LA MAS ADECUADA PARA EJERCERLA, ES INSUFICIENTE PARA VARIAR EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO. Si bien es cierto, los artículos 414 del Código Civil en vigor y 723 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establecen una presunción legal a favor de las progenitoras al indicar, que los hijos menores de 7-siete años siempre deben permanecer al lado de la madre -salvo las eventualidades descritas en los citados numerales- también es cierto que, en una contienda donde se reclama por parte de la madre, el ejercicio del derecho de custodia de un(a) infante menor de siete años, tal suposición por si sola es insuficiente para variar la custodia del menor, pues como en numerosas ocasiones se ha pronunciado esta Alzada, cuando entran en colisión los intereses de los progenitores, el interés que prevalece, por imperativo Constitucional y por tratarse de un interés de Orden Público, es el del menor y, por ello la Autoridad Jurisdiccional debe actuar de tal forma que, con su resolución queden debidamente garantizados y resguardados en su integridad, los derechos del menor; entonces, si en autos de un litigo de variación de custodia sólo consta la presunción antes aludida, se reitera, la misma es insuficiente para decretar la procedencia de la acción, ya que al estar en discusión el ejercicio del derecho de custodia, el cual es un medio insustituible para proteger, cultivar, física y espiritualmente y procurar la satisfacción de las necesidades de un menor, el Juzgador esta obligado a allegarse de suficientes medios de prueba tendientes a dilucidar si efectivamente, trasladar el derecho demandado a la madre reclamante, es lo más benéfico para el menor, siendo menester atender, la edad del párvulo y, el tiempo que ha permanecido bajo la guarda y custodia de su otro progenitor, lo que en definitiva, no debe pasarse por alto, pues para decidir el punto reclamado, deben tomarse las medidas necesarias para evitar causar un impacto en la estabilidad emocional del infante. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en Definitiva 64/2005. Juicio Especial de Controversias sobre Convivencia y Posesión Interina de Menor. Sentencia emitida en fecha 27 de mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

23. DECLARACIONES FISCALES. VALOR PROBATORIO, PARA ACREDITAR LAS GANANCIAS LÍQUIDAS DE QUIEN LAS FORMULA EN JUICIOS DE ALIMENTOS. De los informes rendidos, por la Administradora Local del Servicio de Administración Tributaria, únicamente se desprenden las declaraciones fiscales efectuadas por el representante legal de dicho negocio, cuyos efectos son meramente para fines tributarios de la empresa y cuya verificación se encuentra sujeta a las atribuciones de la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, pues al ser llenadas tales declaraciones por el propio contribuyente, sin que su veracidad obre acreditada en el sumario, es clara su insuficiencia, para acreditar el monto de los ingresos, utilidades o perdidas que hubiera generado; ya que para ello, la prueba más idónea, sería en todo caso los informes de los ejercicios sociales, referentes a la situación económica de la sociedad, presentados a la asamblea de accionistas o, en su caso la pericial contable que ayudara a su análisis, donde podrán valorarse las ganancias que reportara la participación social de cada accionista, en términos de los artículos 172 y 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 076/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 18 de marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

24. DIVORCIO, EN CASO DE ADULTERIO, SE ADMITE PRUEBA PRESUNCIONAL. Partiendo de lo anterior, quien ahora juzga, arriba a la conclusión de que se acreditó la causal de divorcio invocada por el actor, y la cual se encuentra contemplada en la fracción I del artículo 267 del Código Civil del Estado, la cual a la letra dice: I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges.” Lo anterior en atención a que la señora, reconoce que durante el matrimonio con el actor, solamente procreo un solo hijo, y que hace aproximadamente cuatro años al día 10-diez de junio del año 2004-dos mil cuatro, no tenía relaciones sexuales con el señor. Y concatenada la anterior confesión, con la certificación del registro civil del nacimiento de la menor, donde aparece únicamente como datos de filiación, como madre la demandada, documental la cual mereció valor probatorio pleno, y la cual aun cuando se trata de un documento público que no constituye prueba plena para demostrar directamente el adulterio, queda demostrado el hecho relativo al nacimiento de la mencionada hija natural aún cuando subsistía el vínculo matrimonial, por lo que queda constituida la presunción relativa a la existencia del adulterio reclamado por el actor, y lo cual se robustece la prueba confesional, de conformidad con lo establecido por el artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y de donde se evidencia que la señora, además del hijo que procreo durante el tiempo que estuvo al lado de su esposo, también dio a luz a la citada menor, (sin que se desprenda el nombre del padre) pues esto último se considera como indicio de la causal de adulterio alegada, la cual para tenerla por probada se requiere que sea adminiculada con otras pruebas, lo que en el caso que nos ocupa, se robustece con la confesión efectuada por la demandada al absolver posiciones y al contestar la demanda, donde acepta que no ha tenido relaciones sexuales con el actor, desde hace más de cuatro años y medio, y que solamente procreo con él a un solo hijo; por lo que es de una sana y

lógica conclusión que la señora cometió adulterio en perjuicio de su cónyuge. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 08/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

25. DIVORCIO. ESTUDIO DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CAUSAL, CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 267 FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO CIVIL. Para apreciar si la acusación se formuló por el cónyuge demandado con el animo de injuriar o calumniar al otro, debe ser analizada por el Juez Familiar que conozca del asunto, independientemente del resultado de la causa penal a que dicha acusación hubiera dado lugar, pues mientras en el procedimiento penal, se juzgara la existencia del delito así como la probable responsabilidad del inculpado, en el Juicio Civil sobre Divorcio Necesario, como del que deriva el presente recurso, se estudiara si la acusación fue presentada con el fin de calumniar y dañar a la persona de su cónyuge, siendo así claro que la materia de la litis a dirimir en ambos casos, es diferente entre sí, no existiendo necesidad de contar con sentencia ejecutoria en la causa penal de referencia, para deducir la acción en cuestión; sino basta demostrar la existencia de la acusación formulada por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, para proceder a valorar si la misma, es de índole calumniosa. Lo anterior independientemente de que el resultado de la causa penal, pueda ser invocado y valorado en el juicio civil, para el estudio a efectuarse sobre la acción deducida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 137/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 12 de mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

26. DIVORCIO. FECHA EN QUE, PARA PROMOVERLO, DEBE EMPEZARSE A COMPUTAR EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, CUANDO LA CAUSAL INVOCADA SE HACE DESCANSAR EN EL ARTÍCULO 268 DEL CÓDIGO CIVIL. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que nos ocupa, ésta Autoridad determina en primer lugar, que el término de los tres meses a que se refiere el artículo 268 del Código Civil del Estado, debe computarse a partir de que surtió efectos la notificación del auto en que causó ejecutoria la sentencia de primera instancia Partiendo de lo anterior, en plenitud de jurisdicción se procede a analizar la temporalidad con la que se interpuso la demanda. Advirtiéndose que el mencionado actor presentó su demanda ante la Oficialía de Partes de los Juzgado Familiares el día 28-veintiocho de Enero del año 2004-dos mil cuatro, apoyando la misma en la causal prevista en el artículo 268 del Código Civil del Estado, que a la letra dice: Artículo 268.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por causa que no haya justificado o se hubiere desistido de la demanda o de la acción sin la conformidad del demandado, éste tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la última sentencia o del autos que recayó el desistimiento. Durante estos tres meses, los

cónyuges no están obligados a vivir juntos." Exponiendo esencialmente como hechos de su acción, que su esposa promovió en su contra Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, integrándose el expediente judicial número 2330/2002, en el juzgado Segundo de lo Familiar, donde una vez agotadas la etapas procesales, se dictó sentencia definitiva el día 28-veintiocho de Abril del año 2003-dos mil tres, en la cual se resolvió que la actora no justificó sus hechos, por lo que se declaró la improcedencia de la acción intentada, absolviéndose al demandado de los conceptos reclamados: y resolución la cual en fecha 29-veintinueve de mayo del año 2003-dos mil tres, causó ejecutoria de conformidad con lo establecido por el artículo 408 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Acompañando copias certificadas del Juicio mencionado, y de las que efectivamente se advierten los hechos en que se basa el actor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 304/2004. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 16 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

27. DIVORCIO. INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. Al justificarse le hecho que la demandada salga del domicilio conyugal por las noches cuando su esposo se encuentra trabajando turno nocturno, y regresar en la madrugada acompañada por una persona del sexto masculino que no es su esposo, es indudable que dicha conducta es ofensiva y desleal, por ende constituye una injuria grave al provocar en el consorte humillación y vejación en su persona, lo que quebranta la armonía y respeto que debe existir entre los cónyuges y hace imposible su vida en común. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 176/97, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario Número 535/96, promovido por R.C.H. en contra de P.G.L.- Sentencia emitida el 28 de julio de 1998.- Magistrado: José Patricio González Martínez.

28. DIVORCIO NECESARIO, CAUSAL DE ADULTERIO. PARA SU COMPROBACIÓN CARECEN DE VALOR LAS GRABACIONES OBTENIDAS SIN LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE. En términos de lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, acto seguido, dicho numeral consigna que las comunicaciones privadas son inviolables; que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas; que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada; que para ello la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; que la autoridad judicial federal no

podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor; finalmente, que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes; que los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Por otra parte, el artículo 226 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, estatuye que el tribunal debe admitir las pruebas que presenten las partes siempre que estén permitidas por la ley y que se refieran a los puntos cuestionados, así mismo, señala que el auto en que se admita o desecha alguna prueba no es recurrible. Bajo ese contexto, tenemos que por un lado, la Constitución Federal consagra el derecho fundamental de inviolabilidad de las comunicaciones privadas y por consiguiente, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar sus prerrogativas, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada, conculcaría tal inviolabilidad, teniéndose por otro lado, que la legislación procesal civil de la entidad impone la necesidad, para admitir una probanza en juicio que se trate de aquellas que permita la ley. Es por ello, que se llega a la conclusión que las grabaciones que como probanza fueron ofrecidas en el juicio natural y a las cuales se ha hecho alusión en este apartado, constituyen elementos de prueba de los no permitidos por la ley, por cuanto que su obtención se traduce en una contravención a un mandato constitucional, por lo que en acatamiento a lo establecido en el citado numeral 226 del código procesal en comento, no se admite a trámite dentro del juicio de divorcio en estudio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 209/2001, Expediente Judicial número 1510/2000 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 29 de Julio de 2002, en Cumplimiento de Ejecutoria. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

29. DIVORCIO NECESARIO. NEGATIVA DE LOS CÓNYUGES DE DARSE ALIMENTOS. EL ACTOR TIENE QUE COMPROBAR QUE PREVIAMENTE A SU EJERCICIO, AGOTÓ TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA PARA OBTENER EL PAGO DE ALIMENTOS. En términos de lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al reo los de sus excepciones y tratándose de divorcio las causales que se hagan valer deben de acreditarse de manera fehaciente. Por consiguiente, las pruebas aportadas por la actora riñen abiertamente con la causal de divorcio establecida en el artículo 267, fracción XII del Código Civil del Estado, en virtud de que correspondía a la actora la carga procesal no solo de demostrar la negativa de su cónyuge a darle alimentos, sino que se agotó la formalidad contemplada en la codificación legal en cometo, es decir, demostrar la imposibilidad para hacer efectivos los derechos que a la actora le confieren los artículos 165 y 166 de ese mismo ordenamiento. Efectivamente, como requisito para la actualización de la causal de divorcio en análisis, se tiene que comprobar que previamente a su ejercicio, quién la invoca haya agotado todos los

medios de prueba para obtener el pago de alimentos, sin conseguirlo; lo que denota la gravedad del incumplimiento que ponga de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor o a sus hijos, y que haga imposible la vida en común; gravedad que no se justifica cuando en forma imprecisa se alega que el demandado no ha cumplido en su totalidad con la ministración de alimentos, máxime que de las preguntas formuladas a los testigos ofrecidos por la actora no se desprenden datos fehacientes de los que en su caso, pudiera advertirse la negativa del demandado a proporcionar alimentos para ella y su menor hijo. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que el demandado haya aceptado encontrarse desempleado, pues de tal circunstancia no se puede desprender que sea económicamente insolvente, sobre todo si tomamos en cuenta que no aparece dato alguno que revele que además de no percibir un salario no tenga otros bienes para poder decir que efectivamente no tiene solvencia económica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 76 /2000, expediente número 88/99, Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 20 de junio de 2002, dictada en cumplimiento de ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito en el Estado. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

30. DIVORCIO NECESARIO, SE CONFIGURA LA CAUSAL RELATIVA A INJURIAS GRAVES CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 267 FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO, SI EL ACTOR DEL JUICIO DEMUESTRA QUE SU CONTRAPARTE FALTÓ AL PRINCIPIO DE FIDELIDAD QUE LE DEBE A SU CONSORTE. Si de los autos del juicio principal se advierte claramente que la demandada faltó al principio de fidelidad esta Autoridad estima que el actor justificó los hechos constitutivos de su acción respecto de la diversa causal de divorcio contenida en la fracción XI del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado, pues la serie de actos, acciones y hechos cometidos por la demandada en perjuicio del actor son de tal gravedad que hacen imposible la vida común entre los consortes por la manera en que se han ejecutado, ya que los mismos han vejado, despreciado y humillado al actor a tal grado de que tanto sus familiares, así como sus amistades se han enterado de la infidelidad cometida por la demandada, dañando de esta manera la imagen de su cónyuge a quien debió respetar porque la fidelidad implica la observancia constante de una conducta altruista de fe, cariño, amor y respeto que un cónyuge debe al otro, lo cual es esencia de los deberes conyugales, siendo indudable que si su contraparte, faltó a su cónyuge incurriendo en infidelidad, su conducta ofensiva y desleal constituye una injuria grave en términos de lo dispuesto en la fracción XI del artículo 267 del Código Civil en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 44/2001, Expediente Judicial número 732/2000 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 13 de Diciembre de 2002, en Cumplimiento de Ejecutoria. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

31. DIVORCIO. NEGATIVA DE LOS CÓNYUGES DE DARSE ALIMENTOS. SU PROCEDENCIA SI EL INMUEBLE EMBARGADO ES EL DOMICILIO CONYUGAL. Toda vez que la finalidad que persigue la ley mediante el embargo de bienes propiedad del deudor moroso, es realizar la venta de los mismos y con su producto, hacer pago al acreedor, en el caso no resulta lógico, ya que el inmueble, cuyos derechos le fueron embargados al marido, es también propiedad de la esposa, por lo que se le estaría obligando a ésta, con su venta, a desprenderse de su propio patrimonio; por otra parte, también resulta ilógico, que enajene la casa en que habita con sus hijas, quedando con ello la familia en una situación desventajosa en cuanto a su necesidad de habitación; incluso, arrendar el bien embargado, en nada le beneficiaría a la accionante, pues implica que ésta y sus hijas, a su vez arrienden otro, de manera que los frutos que aquel genere, los aplicarían al pago del que habiten, quedando muy poco para destinarlo al resto de lo que comprenden los alimentos, es decir, a la comida, el vestido, la asistencia médica en casos de enfermedad, la educación secundaria de la menor, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, conforme al numeral 308 del Código Civil en vigor y el artículo 3° de la Carta Magna. De tal suerte, que aún y habiendo hecho efectivo el derecho preferente que tiene sobre el bien que le fuera embargo al marido, consistente en el 50% cincuenta por ciento del hogar conyugal, en nada le beneficia, pues siendo el que habitan tanto ella como sus hijas, no le proporciona producto alguno para satisfacer su derecho alimenticio. Consecuentemente, es dable declarar la procedencia del divorcio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 45/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 10 de marzo del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

32. DIVORCIO, NO DEBE OBLIGÁRSELE A LA ACTORA A JUSTIFICAR LA FECHA EN QUE HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSAL INVOCADA, PARA EFECTO DE COMPUTAR LA CADUCIDAD DE LOS MISMOS. Al estarse demandando la disolución del vinculo matrimonial, invocando para ello la causal de adulterio, consagrada por el artículo 267 fracción I del Código Civil, para la procedencia de la misma, debe acreditarse el matrimonio que une a los contendientes y, la relación adulterina imputada al demandado, no siendo exigible, acreditar la fecha cuando tuvo conocimiento de ésta la accionante, para efectos de la caducidad prevista por el artículo 269 del citado ordenamiento legal, pues tal situación en todo caso, debía demostrarla el demandado, para el caso de que alegara que su cónyuge tuvo conocimiento de los hechos adulterinos invocados, con antelación al plazo de los seis meses previstos en la última de dichas normas y se hubiera abstenido de ejercitar la acción correspondiente; por lo que es a la parte demandada, a quien correspondía la obligación de justificar tal extremo, para el caso de que su demandante, tuviera conocimiento previo al que ella misma menciona en su escrito de demanda, pues de lo contrario, se le obligaría a probar una falta de conocimiento del adulterio alegado, antes de la fecha invocada, lo que se traduce en un hecho negativo, lo

cual es prácticamente imposible de justificar, siendo así desacertado el criterio del Juez de instrucción al examinar como elemento de la acción el término de la caducidad, ya que para ello es suficiente que al presentar su demanda manifestara la promovente la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos y, en caso de que el demandado no lo estimara verídico, contradijera el mismo ofreciendo las pruebas pertinentes para su demostración, lo anterior en una sana distribución de la carga de la prueba, con fundamento en los artículos 223 y 224 de la Codificación Procesal Civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 066/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio necesario. Sentencia emitida el 28-veintiocho de febrero de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

33. DIVORCIO SEPARACIÓN HOGAR CONYUGAL. EXISTENCIA DE LA CAUSAL AUN Y CUANDO EL CONSORTE SEPARADO CUMPLA CON EL DEBER ALIMENTARIO. La causal establecida en la fracción VIII del artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, tiene por objeto sancionar la separación de uno de los consortes del hogar conyugal, pues con dicha disgregación se incumple con el deber de llevar una comunidad de vida, deber marital consignado en el artículo 147 del Código Sustantivo de la Materia para el Estado de Nuevo León, lo cual de ningún modo debe confundirse con el incumplimiento al deber alimentario, ya que, el hecho de que el demandado, cumpla o no con el gravamen alimenticio para con sus hijos, ello no contrarresta su deber a llevar una vida en común con su consorte, toda vez que, el estar separado de la casa conyugal, implica que el esposo apartado, deja de prestar al otro cónyuge y a los hijos, la protección y el auxilio a que esta obligado, en tanto que, el cumplimiento al deber alimentario, solo es una de las obligaciones que nacen a partir del matrimonio, más no la única generada por tal vínculo, resultando evidente que, al solo cumplirse con este deber, el resto de los deberes maritales que nacen a partir de la comunidad de vida que se forma por el matrimonio entre los consortes, son incumplidos, quebrantando así la esencia del matrimonio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 264/2004 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 11 de octubre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

34. DIVORCIO. SEPARACIÓN DEL HOGAR CONYUGAL. NO ES MENESTER QUE LOS TESTIGOS PRESENCIEN EL MOMENTO DEL ABANDONO. Siendo el abandono de uno de los cónyuges del domicilio conyugal, un acontecimiento de tracto sucesivo, no se hace necesario que los testigos refieran el momento exacto en que aquél realizó el abandono, pues basta su conocimiento permanente, derivado del trato constante con la cónyuge abandonada y la familia de ésta, para constatar que el marido no habita el domicilio conyugal, y a partir de su declaración, computar si ha transcurrido el término de seis meses que la ley exige para que se configure la causal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número

63/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 16 de marzo del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

35. DIVORCIO. VALOR DE LAS PRESUNCIONES EN EL JUICIO DE. Para que la valoración de las presunciones en el juicio de divorcio sea correcta, estas no deben de tomarse en cuenta de una manera aislada, sino que deben de analizarse conjuntamente con los demás elementos probatorios aportados al juicio por las partes contendientes, para que en uso de su facultad discrecional, el Juzgador aprecie las actuaciones y otorgue valor a las presunciones que resulten del enlace interior de las pruebas rendidas, a fin de que su resolución sea congruente con la verdad real esclarecida por esas mismas presunciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 147/96, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario Número 230/95, promovido por L.N.T.L. en contra de C.M.E.M..- Sentencia emitida el 19 de septiembre de 1997.- Magistrado: José Patricio González Martínez.

36. DOLO EN INVENTARIO. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ACREDITAR FEHACIENTE EL. Si de las confesiones realizadas por la parte demandada se desprende que fue hasta que murió su padre y antes de firmar la denuncia e inventario del juicio especial sucesorio de intestado cuando se reunieron los hermanos a petición de su madrastra quien los invitó a conocer el contenido de dos cartas suscritas por ella y su finado esposo, donde supuestamente plasmaron su última voluntad pero sin elevarlas al carácter de testamento ológrafo, y al adminicular dichas declaraciones con el contenido de las referidas documentales privadas, así como con la documental pública consistente en la copia certificada de las operaciones de inventario y avalúo que obra en el juicio sucesorio que se tramitó, se desprende que tanto el inventario como las referidas documentales coinciden en la forma en que supuestamente se pretendió por el de cujus la distribución de sus bienes en la carta privada mostrada por la madrastra, otorgando el 50%-cincuenta por ciento- de todo a favor de ella, se crea plena convicción en el Tribunal de Alzada, de que existió dolo en la actuación de la cónyuge supérstite al redactar las operaciones de inventado y avalúo que inducidos por ese dolo firmaron y aceptaron los accionantes, ya que al no haber sido elevadas dichas cartas a testamento ológrafo y haber sido elaboradas 8-ocho años- antes del fallecimiento, es notoriamente evidente que no existía razón alguna para que la viuda las mostrara a los hijos del finado, después de su fallecimiento y con anterioridad a la presentación de las operaciones de inventario y avalúo que ella misma reconoce elaboró, hechos que han quedado debidamente acreditados con la propia confesión vertida por la madrastra ahora demandada, máxime que dichos documentos no eran recientes y carecían de valor jurídico para efectos de tramitar la sucesión, y haberlos invitado a que los leyeran como dato histórico no tenía sentido alguno, si definitivamente al no haber testamento lo procedente era tramitar un juicio de intestado respecto del cual la repartición de los bienes sería decretada por la Autoridad que conociera del mismo, de lo que se colige la existencia del dolo, al surtirse

en el presente caso la existencia de los elementos que lo integran, esto es así, ya que tomando en cuenta que el dolo se sustancia fundamentalmente como acto de voluntad en la persona que lo causa, resulta claro que la demandada, al mostrar las cartas en comento, tenía la voluntad como expresamente lo ha confesado, de que los hijos conocieran como "dato histórico" la supuesta voluntad de su padre respecto de sus bienes para que estuvieran conformes con el inventario que ella misma formuló, mas sin embargo, la voluntad del sujeto activo como es en este caso la de la cónyuge supérstite, produce en el sujeto pasivo (los hijos) una afectación inmediata a su entendimiento e indirectamente a su voluntad, ya que del contenido de las referidas cartas se presume que los suscriptores de las mismas (el de cujus y su cónyuge) ya habían liquidado la sociedad conyugal que tenían, por lo que al mostrarse esos documentos privados a los accionantes, se les induce a caer en el error (vicio del entendimiento), de la existencia de dicha liquidación, lo que produce su decisión voluntaria (acto de voluntad) de aceptar y firmar el inventario que fue elaborado por la viuda de su padre, pues del contenido del mismo se observa que se encuentra realizado en iguales términos como lo señaló el fallecido en su carta de fecha 5-cinco de agosto- de 1988 -mil novecientos ochenta y ocho-. Asimismo, tenemos que el dolo supone en quien lo produce una voluntad o intención deliberada de engaño, por lo que tanto con las referidas confesiones como con los documentos privados de fecha 5-cinco de agosto de 1988-mil novecientos ochenta y ocho, se acredita claramente que la madrastra, al mostrar las multicitadas cartas lo realizó con la intención deliberada de que por medio del contenido de las mismas pudiera engañar a los promoventes en el sentido de que éstos aceptaran, que de todos los bienes de su padre le correspondían a ella el 50%-cincuenta por ciento-, dado que de esos documentos se deja ver claramente que ya habían los consortes realizado la liquidación de la sociedad conyugal, de ahí que se esté en presencia del dolo, pues el mismo contiene una actividad injusta, que ataca la libertad de la persona engañada y que se conecta por tanto con la mala fe, lo cual ocurre en el caso que nos ocupa, dado que es evidente que al mostrar los aludidos documentes a los accionantes se atacó su libertad de pensamiento, existiendo por ende un nexo de causalidad entre esa actividad maliciosa y la realización del acto jurídico (firma y aceptación del inventario) ya que sin el dolo, es decir, sin que se les hubiera mostrado los multireferidos documentos, no se habría dado el consentimiento de los actores para dicho acto jurídico, constituyendo indudablemente el contenido de las cartas en mención un elemento determinante para que los actores consintieran las operaciones de inventario y avalúo formuladas por la demandada, pues al descubrir los demandantes que no existe la liquidación de la sociedad conyugal, lógicamente acuden a ejercitar su acción de nulidad de dicho inventario, estando concientes que dentro del mismo indebidamente le concedieron el 50%-cincuenta por ciento- a la citada SAUCEDA BENAVIDES, de bienes propiedad de su padre que no forman parte de la sociedad conyugal de ese matrimonio y que por tal razón deben ser distribuidos al 100% entre todos los hijos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 82/02, Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad y Posterior Reforma de Inventario, promovido por F. G. G. G. y Otros vs. M. S. S. B. y Otros. Sentencia emitida el 17 de Junio de 2002. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

37. EL JUEZ DE PRIMER GRADO PROCEDE CON APEGO A DERECHO AL ESTIMAR JUSTIFICADA LA CAUSAL DE DIVORCIO ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AUN Y CUANDO EL ACTOR HAYA NARRADO EL HECHO RECLAMADO COMO ADULTERIO. Si bien es cierto, por los hechos narrados en el punto IV del escrito de demanda, el accionante imputaba a la demandada una conducta adulterina, de la lectura del mismo y, una vez analizado el material convictivo, se advierte: al aparecer retratada la parte reo con una persona del sexo masculino, distinto a su esposo, esto no pone de relieve un comportamiento adulterino, como lo afirmaba el actor, sino más bien injurioso para el esposo, pues el adulterio implica necesariamente una relación sexual llevada a cabo entre el consorte demandado con otra persona distinta a su cónyuge, mientras que la injuria, constituye cualquier expresión, acto o conducta, productor de vejación, ultraje u ofensa en contra de la mutua consideración, respeto y afecto que ambos connubios se deben proporcionar; por ello, aún y cuando el accionante clasificó erróneamente la causal de divorcio reclamada, el Juzgador en acatamiento a los proloquios latinos: “iura novit curia” (el juez conoce el derecho) y “Da mihi factum, dabo tibi ius” (dame el hecho y te daré el derecho) y, en virtud de la mecánica cómo sucedió el hecho demandado, estimó justificada la existencia de una causal de divorcio distinta a la reclamada, por lo anterior, el proceder en cuestión, se estima correcto, ello de conformidad con el artículo 6 del Código Adjetivo de la Materia. Consiguientemente, es infundado que, el Justiciante haya variado la litis sometida a su consideración, por el simple hecho de arribar a la conclusión de que el punto fáctico demandado constituye una causal de divorcio diferente a la aludida en la demanda, pues con esto no se alteró la situación jurídica de las partes, no se generó un hecho que antes no existía, ni mucho menos se creó un título distinto, ya que, se reitera, el Juzgador analizó el hecho reclamado, encuadrándolo en el derecho que al mismo correspondía, máxime cuando se encontraba precisada la prestación reclamada (el divorcio de forma necesaria) y la causa en que esta se fundaba (el que la demandada aparece retratada en actitud de pareja con otro hombre distinto a su esposo), acatando lo dispuesto por el precitado numeral 6 del Código Adjetivo de la Materia; además cabe precisar, el actuar del Juez de Autos, no puede considerarse arbitrario, ya que aplicó el derecho correspondiente al caso controvertido sujeto a su conocimiento, precisamente porque el punto fáctico demandado, coincidió con las pretensiones reclamadas, pues el demandante requirió de forma necesaria, la disolución del vínculo matrimonial por el acaecimiento de dos causales de divorcio: adulterio e injurias, entonces, si el Justiciante decretó la procedencia del juicio en cuestión, al estimar justificada la última de las causales invocadas, su proceder resulta apegado a derecho, al haber identificado la acción deducida, atendiendo los hechos expuestos y, la causa de pedir. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 17/2005 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 30 de mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

38. FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, ES INSUFICIENTE PARA JUZGAR NO SE ENCUENTRE PREVISTA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Considerando que para la existencia y subsistencia del régimen de sociedad conyugal, no es indispensable la celebración de capitulaciones matrimoniales, ni mucho menos que éstas consten en escritura pública, según se infiere de una sana intelección a los artículos 178, 179, 180, 183 y 184 del Código Civil estatal, conforme a los cuales para la existencia del régimen de sociedad conyugal, los esponsales pueden celebrar capitulaciones matrimoniales; si éstos al celebrar su matrimonio, lo concibieron bajo el régimen de sociedad conyugal, no existe razón alguna para considerar que la falta de tal convenio haga presumir, no deba imperar tal régimen para los consortes, en cuanto a los bienes del matrimonio, pues tal forma de actuar haría nugatorio el pacto original concertado entre ellos al celebrar su matrimonio, resultando desacertado lo expuesto por el juzgador, en el sentido de que al no haberse exhibido la escritura pública que contuviera las capitulaciones matrimoniales de las partes, no era dable establecer quien fungía como administrador de la sociedad, para en su caso, analizar si se surten los supuestos previstos por el artículo 188 del Código Civil y, analizar la terminación de la sociedad conyugal pretendida, atento a que el propio artículo 183 del mencionado ordenamiento, preceptúa en lo no establecido expresamente dentro de las capitulaciones matrimoniales o en el capítulo normativo respectivo, la sociedad conyugal se regirá por lo dispuesto para el contrato de sociedad, por lo cual, a efecto, de verificar quien debe desempeñarse como administrador de la sociedad matrimonial, resulta primordial valorar las previsiones legales de dicha figura jurídica; lo anterior en términos del artículo 1749 del Código Civil, acorde al cual, cualquiera que sea la generalidad en los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes a las que los interesados se hubieren propuesto contratar, por lo que si éstos pactaron que en su matrimonio regiría el régimen de sociedad conyugal, no debe hacerse nugatorio tal acuerdo de voluntades, sino en todo caso, los conflictos que se susciten, deben resolverse, atendiendo a las disposiciones legales aplicables, que para el caso de no encontrarse expresamente reguladas en el apartado de la sociedad conyugal, nos remite al contrato de sociedad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 009/2005. Juicio Ordinario Civil. Sentencia emitida el 09 de febrero de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Paulo Gabriel Garza González.

39. FOTOGRAFIAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. EN UN JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON PRUEBAS FEHACIENTES. Cuando son aportadas al Juicio de Divorcio, diversas impresiones fotográficas donde aparece el consorte demandado con una persona distinta a su cónyuge en una actitud de pareja, sin que tales medios probatorios sean desconocidos u objetados en su contenido por la parte demandada, el Juez procede con indubitable legalidad al adminicularlos con otras pruebas fehacientes, como pueden ser, verbigracia la confesional donde la parte demandada reconoce ser quien aparece en las

fotografías o bien, los testimonios aportados por el cónyuge reclamante, con los que se evidencia la conducta injuriante de la parte acusada, al ser vista en reiteradas ocasiones en un comportamiento de pareja con una persona distinta a su consorte. Siendo natural que, con las probanzas detalladas, se genere en el ánimo del Juzgador, la certeza sobre el acaecimiento de la causal XI del artículo 267 del Código Civil en vigor, pues al dejarse retratar una persona casada, en una actitud comprometedora (aparecer abrazados por la cintura, uniendo mejillas o aparecer en una pose en la que se perciba una relación que va más allá de una sana amistad), se evidencia una conducta no apta de una persona sujeta a un vínculo matrimonial, pues con ello se infringe la lealtad, cariño, respeto y consideración que los cónyuges se deben entre sí, resultando ofensivo y desleal dicho comportamiento que, en definitiva se considera como injuriante, pues tal actuar rompe con la armonía connubial, causando al esposo (a) un menosprecio ante la sociedad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 345/2004 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 15 de diciembre de 2004.

40. HECHOS NEGATIVOS EN LA CAUSAL DE DIVORCIO POR NEGATIVA DE DAR ALIMENTOS. NO DEBE OBLIGARSE A LA ACCIONANTE, A LA COMPROBACIÓN DE. Los hechos negativos que se derivan de la causal contenida en el artículo 267 fracción XII del Código Civil, como lo es la negativa de dar alimentos, así como la imposibilidad de hacer efectivos los derechos que conceden los numerales 165 y 166 del mismo ordenamiento sustantivo, no deben atribuirse como carga procesal de la accionante, sino que se traducen al gravamen procesal probatorio que asiste al demandado de justificar, en su defensa, que sí ha cumplido con el pago de alimentos, que sí tiene bienes o devenga un sueldo con motivo de un empleo, para que sobre ello se haga efectivo el reclamo alimenticio; o en su caso, que padece enfermedad física y/o mental, parcial o total, eventual o permanente, que le impide desempeñarse en actividad remunerativa con la cual cumplir con su deber alimentario hacia sus acreedores. Destacándose que efectivamente, obligar a la actora ahora apelante, a demostrar tanto la negativa de su cónyuge de proporcionarle alimentos, así como que no pudo hacer efectivos los derechos alimentarios sobre bienes o sueldo, sería exigirle la comprobación de hechos negativos, los que no son susceptibles de demostración. Igualmente, en el caso concreto, se resalta que por lógica, ante el hecho notorio de estar el demandado recluido en el Penal del Estado y carecer de bienes, sería imposible hacer efectivo lo establecido en los artículos 164, 165 y 166 del Código Civil en vigor en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 116/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 02 de junio del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

41. INTERÉS SUPERIOR A LA NIÑEZ. SENTIDO Y APLICABILIDAD DEL. De las garantías de orden personal y social a favor de los menores, prescritas en el artículo 4°

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo establecido en los artículos del 1° al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada en Nueva York, Estados Unidos de América, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, y que entró en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, al ser ratificada por nuestra nación el veintiuno de septiembre de ese mismo año; aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto "interés superior a la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas; ello supedita los derechos que los adultos pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 207/2004. Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 3 de Marzo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

42. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 326 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, RESPECTO DE LA FACULTAD CONFERIDA AL JUZGADOR PARA AMPLIAR LOS INTERROGATORIOS DE PREGUNTAS Y REPREGUNTAS. El artículo 326 del Código de Procedimientos Civiles, establece que el juez podrá ampliar los interrogatorios de preguntas y repreguntas de una manera discrecional, sin embargo, tal atribución, debe catalogarse como una facultad discrecional, por lo que hacer uso de la misma o dejar de hacerlo, no puede implicar se vulnere norma procedimental alguna, al quedar su aplicación de forma absoluta a la propia discrecionalidad del juzgador. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 408/2004. Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

43. INTERROGATORIO. NO PROCEDE DESECHAR PREGUNTAS FORMULADAS EN EL, AUN Y CUANDO TENGAN SIMILITUD CON OTRAS CONTENIDAS EN DIVERSO INTERROGATORIO A APLICARSE A OTROS TESTIGOS, SI SE REFIEREN A DIVERSOS HECHOS DE LA DEMANDA. Debe decirse que, la Juez de la causa desechó indebidamente algunas preguntas del pliego de las interrogantes planteadas por la parte apelante a formularse a cada uno de sus testigos, manifestando la autoridad que se desecharon en virtud de haber sido objeto de otro interrogatorio diverso, aplicado a distinto atestiguante, al que se verificaba al momento de desahogar la prueba testimonial, fundamentando su motivación en el artículo 348 del Código Procesal Civil en vigor; ello es así, ya que no obstante que aún y cuando hayan tenido cierta similitud los interrogatorios formulados por la oferente para cada uno de sus

testigos propuestos, y además de que se hubiera dado el supuesto de que haya sido objeto de desahogo en diversa testimonial, no es óbice para desechar algunas preguntas, toda vez que se observa de los hechos narrados en el cuerpo de la demanda planteada, que los testigos presentados son para acreditar diversas cuestiones fácticas de la misma. Entonces, se deduce que si bien es cierto, tienen cierta similitud los pliegos de preguntas aludidos, también lo es, que no es razón suficiente para desechar algunas preguntas por la determinación de ya haber sido formuladas a una diversa atestiguante, debido a que son hechos diferentes y además diversas causales a probar con los mismos, no teniendo aplicabilidad al caso que nos ocupa el dispositivo legal indicado por la resolutora como fundamento de su desechamiento. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, esta autoridad de alzada tiene a bien ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se señale nueva fecha con la finalidad de que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la accionante, únicamente en lo que respecta a las preguntas desechadas, haciéndose extensivo el derecho que le asiste a su contraparte de repreguntar hasta antes del examen de los testigos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 139/2004. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 30 de Noviembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

44. LEGITIMACIÓN ACTIVA AD-PROCESSUM. EXTINCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA, PUEDE SER DEMANDADO AÚN POR UN TERCERO, AJENO A SU CONSTITUCIÓN. Si bien, la institución del patrimonio de familia, tiene como fin salvaguardar los bienes de las familias, cuyos recursos no sobrepasen el monto económico establecido por el legislador, con el fin de evitar privarles de lo más indispensable para mantener una vida adecuada a sus circunstancias personales, ello no impide a quienes consideren, se este aprovechando de tan noble institución, acudir a la instancia judicial correspondiente, cuando sus intereses o derechos pudiesen resultar afectados por el indebido aprovechamiento de la misma; promoviendo el procedimiento judicial respectivo para obtener el cese del beneficio legal, previa audiencia de los interesados, donde el juzgador podrá valorar el pedimento planteado, conforme al artículo 1 del Código Procesal Civil, en relación con el 17 de Nuestra Carta Magna. Pues sabido que es, que la legitimación activa, se divide en dos clases a saber; para dar curso legal a la demanda, basta contar con la primera de su tipo. Así es, considerando que la legitimación, corresponde a la situación de un sujeto, en relación con determinado supuesto normativo que le faculta a actuar, es decir, constituye la autorización que la ley confiere a determinada persona para desarrollar determinada conducta, tal legitimación, dentro de un juicio, bien puede ser activa o pasiva, según se refiera al actor o al demandado respectivamente, correspondiéndonos el examen de la primera exclusivamente, por ser su falta, la que señaló el resolutor para emitir su decisión y, la cual, en todo caso, puede ser procesal o de fondo, llamándose a la primera ad-processum y la segunda ad-causam. Así, la legitimación activa en el proceso o ad processum, es entendida como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de

que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia y, es producida cuando el derecho cuestionado en juicio, es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo; mientras la legitimación en la causa o ad causam, implica contar con la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, como requisito para obtener sentencia favorable. Por lo cual la legitimación en el proceso, se obtiene, cuando la acción es ejercitada por quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará en juicio, bien porque se ostente como titular del mismo o porque cuente con la representación legal de dicho titular. Encontrando, en consecuencia, mientras la legitimación al proceso o ad processum, es un requisito para la procedencia del juicio, la legitimación en la causa o ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Por lo que, mientras la primera, puede y debe ser estudiada de oficio, en cualquier etapa del juicio, la segunda solo puede examinarse al fallarse en definitiva la acción dilucidada, por versar sobre una cuestión de fondo, referente a la titularidad del derecho en debate. Por consiguiente, si el A quo señaló una falta de legitimación activa en el demandante, para desestimar la demanda, derivada de que solo quien constituyó el patrimonio de familia, puede solicitar su cancelación, extinción o cese, tal argumento toral expresado por el Jurisdicente de Primer Grado, carece de soporte jurídico, al no haber precepto legal alguno, que sustente tal afirmación, por lo que al tener el demandante la aptitud para acudir a la instancia judicial, en ejercicio de sus derechos, cuenta con legitimación activa en el proceso, suficiente para dar curso a su demanda. Pues, al estar promoviendo el demandante ahora recurrente, Juicio Ordinario Civil, en contra del beneficiario directo de esa institución social, por sus propios derechos, bajo los presupuestos procesales que cita en el cuerpo de su demanda, le asiste a él, capacidad para fungir como parte en el procedimiento y, en todo caso, la titularidad del derecho que demanda, es una cuestión, cuyo estudio deberá efectuarse al fallarse el juicio en forma definitiva, pues no existe prohibición legal alguna, para que el apelante, como tercero ajeno al patrimonio de familia, pretenda su extinción o cancelación. Ello, no obstante, el contenido del artículo 728 del Código Civil, mismo que señala, el Patrimonio de Familia podrá establecerse, por el padre o la madre, en defecto de ambos, por el ascendiente que ejerza la patria potestad; por los cónyuges sobre sus bienes respectivos sin que, en tratándose de la mujer, necesite ésta autorización del marido, por el pariente de cualquier grado que suministre alimentos a sus ascendientes, descendientes o colaterales, siempre que vivan formando una familia, por el tutor, cuando administre bienes pertenecientes a menores; autorizados para la constitución del mismo, entre quienes no se encuentra, un tercero extraño; atendiendo a que en el particular, no esta en discusión la constitución, ampliación o modificación de tal institución, sino su extinción, de ahí que ante la falta de previsión legal, reguladora del procedimiento a seguir para ello, ni quienes puedan ser los únicos interesados para hacerla valer, esta autoridad, a fin de no impedir el acceso a la justicia, en respeto de la garantía de audiencia, considera menos gravoso estimar la inexistencia de impedimento alguno para dar trámite al reclamo formulado en la demanda principal, conforme a los artículos 22, 22 bis fracción I, 22 bis I, 23, 23 bis, 24, 30 y 30 bis del Código Civil, 1, 9, 402, 403, 612 y 614 del Código de Procedimientos Civiles, en correlación con las garantías individuales, contenidas en los artículos 14 y 17 de Nuestra Carta Magna. Lo anterior, sin prejuzgar, sobre la procedencia de la acción del

derecho que se pretende ventilar en el juicio, ni respecto de la aptitud para hacer valer las causales invocadas, al ser el estudio de tales cuestiones, materia de la sentencia definitiva que en su oportunidad se llegare a emitir en el principal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 094/2005. Juicio Ordinario Civil. Sentencia emitida el 11 de abril de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

45. MENORES DE EDAD. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LOS. La suplencia de la queja en favor de los menores de edad, encuentra sustento en el artículo 446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, el cual consigna claramente el deber a cargo de esta Autoridad, de suplir la deficiencia de los agravios, respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, previene la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores de edad. De esta manera, cuando se trata de un asunto en el que está en riesgo el interés de un menor de edad, debe aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promueven el recurso de apelación, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Luego, en casos como el presente, en que se discute la pérdida de la patria potestad sobre un menor de edad, la Autoridad de Alzada debe velar por su interés y bienestar sin importar que quien haya venido a promover la apelación, lo haya hecho con deficiencias en sus planteamientos, toda vez que aplicar las exigencias formales que en otra clase de asuntos y materias se tornan necesarias, implicaría pasar por alto la voluntad que el legislador plasmó en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo y, 446 del Código Adjetivo Civil de la Entidad, que busca proteger los derechos de los menores de edad y evitarle una serie de perjuicios además de los que ya experimenta la segregación de la vida familiar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 49/03, relativo al Juicio Especial sobre Pérdida de la Patria Potestad. Sentencia emitida el 20 de Mayo de 2004. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

46. OBLIGACIÓN ALIMENTICIA, COMPROMISO PERMANENTE DEL DEUDOR DE ALLEGARSE LOS MEDIOS PARA CUMPLIR, AL ESTAR EN PLENO USO DE FACULTADES FÍSICAS, MENTALES E INTELECTUALES. El obligado alimentario debe realizar un esfuerzo permanente, efectivo y consistente, de obtener ingresos para cumplir con el sagrado compromiso alimenticio que para con su cónyuge e hijos se tiene, y si cuenta con todas las capacidades físicas, mentales e intelectuales para desempeñar actividades remunerativas y si se tiene además, desenvolvimiento o experiencia en el desarrollo de actividades profesionales y/o comerciales que reditúan ingresos razonables y suficientes para proveer y mantener un

nivel de vida adecuado para la familia, no le existe entonces impedimento alguno que le desobligue, aligere o que le haga evadir, el cumplimiento del deber alimentario, lo que es más, éste le compromete al esfuerzo laboral diario y continuado, cuya finalidad sea precisamente el satisfacer lo necesario para sus acreedores alimentistas durante la permanencia del estado de necesidad y mientras subsista el derecho alimentista. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA.- Toca de Apelación en Definitiva 270/2002. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 11 de marzo del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

47. PENSIÓN ALIMENTICIA, CUANDO CONSTITUYE UNA CANTIDAD IRRISORIA, PROCEDE SU AUMENTO AUN CON LA AUSENCIA DE HECHOS Y PRUEBAS ATINENTES A SU INSUFICIENCIA. Tratándose de la acción atinente al aumento de pensión alimenticia y, sólo cuando ésta última constituya una cantidad irrisoria que no alcanza a cubrir las necesidades de los acreedores, el o los actores, no están obligados a mencionar en su escrito inicial, como tampoco a demostrar en juicio, la razón o motivo por la que es insuficiente la pensión, pues siendo un hecho notorio, que su monto constituye una suma mínima e insuficiente para satisfacer los requerimientos elementales, aunado a la acelerada y constante elevación del costo de la vida que también debe estimarse como un hecho notorio, la Autoridad Judicial está en posibilidades de invocar tales aspectos aunque las partes no lo hubieran alegado, y además se trata de una cuestión que no necesita ser comprobada por los contendientes; ello, en razón a que, nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional ha sostenido reiteradamente, que los hechos notorios no necesitan ser probados y que el Juez puede invocarlos aunque no hayan sido alegados por las partes; incluso, actualmente esto último se encuentra previsto en nuestra Legislación Procesal Civil, específicamente en su artículo 387 Bis, dadas las reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el día 14-catorce de Enero de 2005-dos mil cinco. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 189/2005. Incidente sobre Aumento de Pensión Alimenticia. Sentencia emitida el 30 de Mayo de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

48. PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS CASOS QUE PROCEDE LA ACCIÓN DE DIVORCIO. No debe perderse de vista, que la patria potestad no tiene origen en el matrimonio, sino en la relación paterno filial, por eso, el decretamiento de un divorcio no necesariamente implica como consecuencia de ello, la condena a cargo del cónyuge culpable a la pérdida de tal derecho, sino que debe demostrarse plenamente en autos, que éste pusiera en riesgo la salud, la integridad física o metal de sus menores hijos tal como lo señala la fracción III del artículo 444 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 251/99, relativo al Juicio Ordinario Civil número 79/99, promovido por J.L.M.G. en contra de G.V.L. Sentencia emitida el 22 de Febrero de 2000. Magistrada: María Teresa Herrera Tello de Hernández.

49. PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. NO PROCEDE DECRETARLA A CONSECUENCIA DE HABERSE DECLARADO LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. Aún y cuando el juez responsable decretó la disolución del vínculo matrimonial, por virtud de estimar que se configuraron las causales de divorcio invocadas por la recurrente, consistentes en el adulterio y la separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada, por parte del demandado, también es cierto que la compareciente, no acreditó de manera fehaciente que con dicho comportamiento realizado por el demandado, se haya puesto en peligro la salud, seguridad y moralidad de sus menores hijas, lo que de haberse demostrado traería como consecuencia que inevitablemente se le privara del ejercicio de la patria potestad respecto de las mismas, pues tal derecho ha de conservarse o retirarse en función de las relaciones especificas que medien entre el padre y sus hijas, y no en función de los conflictos que hayan surgido entre los cónyuges, ya que esto último no hace imposible que el padre desempeñe adecuada y suficientemente la potestad sobre sus descendientes, debiéndose aclarar que el sistema de pérdida de la patria potestad como pena al responsable de la disolución del matrimonio quedó suprimido y por lo tanto debe eliminarse la idea de valorar las circunstancias en función de determinar una culpabilidad para imponer una sanción, dado que es evidente que la Ley tiene una meta mas alta, que incluso no se reduce a evitar a los hijos el sufrimiento de un daño, sino a lograr lo que más les beneficie dentro del nuevo estado que se origina en los ordenes familiar, social y jurídico, por la separación de los esposos y la disolución del vínculo matrimonial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 07/03. Relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 25 de Abril de 2003. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

50. PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE. Para la procedencia de la causal de pérdida de la patria potestad contenida en la fracción III del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, se requiere comprobar los supuestos normativos que la integran, que son, a saber: 1) Las costumbres depravadas, malos tratos, explotación o abandono de los deberes de quien ejerce la patria potestad (cualesquiera de éstos); y, 2) Que cualquiera de las anteriores conductas, pudo comprometer la salud, la seguridad, la dignidad, la integridad o la moralidad de los menores cuya patria potestad se ejerce. Por tanto, en aquellos casos en que se reclama la pérdida de la patria potestad en base al aludido supuesto legal, corresponde al actor comprobar, no sólo que el demandado ha tenido costumbres depravadas, que ha maltratado y explotado a los menores cuya patria potestad ejerce, o bien, el abandono de los deberes que éste último tiene con motivo del ejercicio de esta institución, sino, además, tiene la obligación de comprobar que cualquiera de las anteriores conductas, pudo comprometer la salud, la seguridad, la dignidad, la integridad o la moralidad de los menores cuya patria potestad se ejerce. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 97/2003. Juicio Ordinario Civil

sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 04 de Junio de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

51. PERTURBACIÓN DEL ESTADO DE PADRE O MADRE. NO ES OBSTÁCULO PARA RESOLVER CUAL DE LOS PADRES DEBE EJERCER LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR, EL HECHO DE QUE NO SE HAYA ACREDITADO LA. En asuntos donde se encuentren directamente involucrados los derechos de menores y se advierta que uno de los padres ejerce la guarda y custodia material, sin que exista una resolución judicial que así lo declare, aun cuando el progenitor que pretenda se le adjudique tal derecho, no demuestre haber sido despojado o perturbado en su estado de padre o madre, la autoridad judicial está facultada para decir cual progenitor tendrá a su cargo al menor, a fin de definir la situación y bienestar del infante, pues al estar ambos en ejercicio de la Patria Potestad, pueden requerirse mutuamente la guarda y custodia de su hijo, lo que originaria una inestabilidad al menor, por estar continuamente desplazándolo de un lugar a otro, de ahí que atendiendo a la obligación que tiene el Estado en todo momento de resguardar los derechos e intereses de los menores en beneficio de su desarrollo físico y emocional, en suplencia de la queja se debe determinar quien ejercerá la guarda y custodia del menor, apreciando las circunstancias particulares del caso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 42/03, relativo al Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 29 de Abril de 2004. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

52. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ADOPCIÓN, AUN CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, NO LE SON APLICABLES TODAS LAS REGLAS PREVISTAS PARA LAS MISMAS, EN ESPECIAL LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 907 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Al versar el procedimiento sobre una adopción de un menor, debe atenderse siempre al interés superior de éste, atento al contenido del artículo 4º Constitucional, que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los numerales 3, 7, 9, 12, 18, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que a fin de no dejar en estado de incertidumbre las cuestiones relativas a su tutela, guarda, custodia y protección, debe resolverse la petición de adopción planteada, conforme en derecho resulte procedente y, no abstenerse de ello, ante la oposición de persona alguna, pues aún cuando el procedimiento respectivo, se encuentre contemplado dentro del Libro relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que en su artículo 907 establece, si ante la solicitud formulada en jurisdicción voluntaria se opusiere persona alguna con personalidad para ello, el asunto se hará contencioso, sujetándose a las reglas que deban seguirse para el juicio respectivo, tal

disposición genérica, no es aplicable a las peticiones de adopciones, como la que nos ocupa en el presente. En efecto de una sana intelección de los artículos 395, 396 del Código Civil, 935, 936, 937, 938 y 938 bis del Código de Procedimientos Civiles, el procedimiento de adopción, es un tramite especial, por lo que no todas las reglas relativas a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria le son aplicables a éste, asumiendo la regla de que la ley especial excluye a la general, por lo que si las disposiciones legales citadas, permiten que en el procedimiento de adopción se presente oposición, ya sea por el Tutor del menor o por el Ministerio Público, sin que ello importe la conclusión de su tramitación, sino en base a tal oposición y a las demás circunstancias del caso, el juez debe resolver lo conducente atendiendo al interés superior del menor, igual sentido debe darse cuando la oposición es planteada por la propia madre del menor que se pretende adoptar, atento a la máxima que estatuye "a igual razón debe aplicarse la misma disposición", pues de otra forma se dejaría a los infantes sujetos a adopción en un estado de incertidumbre. De ahí que si el artículo 396 del Código Civil, establece que para el procedimiento de adopción deberá estarse a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y, éste en el Capítulo IV, Libro Cuarto, Título Único, instaura el procedimiento a seguir para ello, no existe motivo alguno para decretar la conclusión de dicho procedimiento, a excusa de dejar a salvo los derechos de los interesados para que los hagan valer en la vía correspondiente, pues es precisamente esa vía la idónea para tramitar las solicitudes de adopción y, en todo caso las oposiciones que pudieran formularse, deben valorarse al emitir la resolución respectiva que decida su procedencia o improcedencia, resolviendo lo que en derecho resulte procedente, atendiendo siempre como se dijo al interés superior del menor; por lo cual, esta autoridad considera que el auto combatido en la instancia, al haber concluido dicho procedimiento de adopción, sin decidir lo tocante al fondo de la petición formulada, carece de soporte legal, debiendo revocarse el mismo y, en su lugar ordenarse al juzgador continuar el procedimiento respectivo por sus demás etapas hasta su total conclusión, resolviendo en su oportunidad lo conducente al mismo, de conformidad con el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 386/2004. Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Adopción Semi-Plena. Sentencia emitida el 15 de noviembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

53. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. NO HA LUGAR ABRIR DILACIÓN PROBATORIA POR SU FALTA DE DESAHOGO, CUANDO ELLO CONSTITUYA ÚNICAMENTE LA LITIS EN LA APELACIÓN. Si bien los artículos 233 y 449, establecen la posibilidad de que las partes en segunda instancia puedan pedir el desahogo de pruebas que no se hubiesen podido llevar a cabo ante el inferior, por causas no imputables a ellos, pero siempre y cuando esas pruebas hayan sido presentadas dentro del término legal, y en el caso concreto, la parte apelante se fundó en los artículos antes transcritos para solicitar al Tribunal de Alzada, el desahogó de la prueba pericial de referencia, lo que en principio pudiera estimarse correcto, por reunirse

los supuestos que exigen los citados numerales; sin embargo, tales preceptos no cobran aplicación cuando esa falta de desahogo de pruebas, constituyen la litis principal de la segunda instancia, como sucede en el caso, ya que del escrito de expresión de agravios en contra de la sentencia de primer grado, se aprecia que única y exclusivamente controvierte la falta de desahogo de la prueba pericial médica denominada pericial genética molecular sobre ADN, que ofreció ante el a quo, de modo que la litis en la apelación la conforma una cuestión procesal que indefectiblemente debe analizarse al resolverse el presente recurso de apelación interpuesto por la inconforme, porque de lo contrario se estaría resolviendo de facto y sin atender los agravios, el punto litigioso, con la consecuencia inherente de que la apelación quedaría inocua, pues ya no habría materia sobre la cual debería pronunciarse. Por tanto, la cuestión planteada debe ser materia de estudio al dictarse la sentencia en la apelación, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 423 del citado Código Adjetivo, de llegar a prosperar, traería como consecuencia que se revocara la sentencia combatida y se ordenara la reposición del procedimiento, a fin de que se recibiera la prueba, cuya práctica quedó inconclusa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 71/03, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Reconocimiento de Paternidad. Sentencia emitida el 17 de Marzo de 2003. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

54. PRUEBA TESTIMONIAL. VALORACIÓN DE LA, CUANDO NO SE PRECISAN CON EXACTITUD LAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR Y TIEMPO. El hecho de que los testigos presentados por la actora no hayan precisado con exactitud las circunstancias de lugar y tiempo en que acontecieron los golpes que fueron proferidos por la demandada a sus menores hijos, debe decirse que ello es intrascendente para considerar que sus dichos carezcan de valor probatorio, puesto que de los hechos que dan origen a la demanda se desprende que fueron reiterativos y constantes en un lapso considerable de tiempo, lo cual es indiscutible que a dicha prueba la asista valor probatorio pleno para demostrar la causal invocada, ya que no fue en una sola ocasión en la que la demandada maltrató física y mentalmente a sus hijos, sino que dicho maltrato se llevó a cabo por varios años como lo afirman las declaraciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 173/97, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario número 822/96, promovido por M.H.C. en contra de M.S.S. Sentencia emitida el 22 de junio de 1998. Magistrado: José Patricio González Martínez.

55. RESULTA INNECESARIO FIJAR UN PORCENTAJE A CARGO DE LA MADRE, NO OBSTANTE QUE TENGA CAPACIDAD ECONOMICA, SI SE ACREDITA QUE TIENE INCORPORADO EN SU DOMICILIO AL ACREEDOR ALIMENTISTA. Si bien es cierto que en el caso justiciable, tanto el demandado como la actora cuentan con ingresos económicos con los cuales pueden satisfacer las necesidades económicas de su menor hija, aspectos los anteriores que quedaron debidamente

demostrados en autos con los elementos de convicción que cada parte aportó respectivamente, esta Autoridad estima que efectivamente, el juez de marras fue omiso al respecto, empero, dicha omisión no afecta los intereses del quejoso, dado que tomando en consideración la facultad que le otorgan los artículos 164, 303 y 312 del Código Civil en vigor, en el sentido de repartir el importe de los alimentos que debe proporcionar cada uno de los padres, con respecto a su menor hija, al tener ambos, posibilidades económicas para sufragar las necesidades alimenticias de dicha menor, no tenía la autoridad responsable que establecer forzosamente un porcentaje a cargo de la actora, por concepto de pensión alimenticia para dicha infante, pues si bien es cierto, que ella cuenta con capacidad económica y puede contribuir para la satisfacción alimenticia de su hija, también es cierto, que acorde a lo establecido en el artículo 309 del Código Civil en vigor, surge la presunción humana a favor de la accionante de que al tener a su hija incorporada a su domicilio en virtud de la edad de la misma, se encuentra cumpliendo en forma total con su obligación de otorgarle alimentos, puesto que tiene el cuidado de la menor y de no recibir de parte del demandado cantidad alguna por tal concepto, se le ocasionan mayores gastos a la actora en virtud de que ella es quien está cubriendo en su totalidad los gastos alimenticios de la menor al tenerla a su cargo; razón por la cual se estima innecesario que esta Autoridad imponga a la actora la entrega de un porcentaje como pensión alimenticia a su hija, y por ende resulta inoperante el agravio vertido en ese sentido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 130/02, relativo al Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 12 de Julio de 2002. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

56. SOCIEDAD CONYUGAL. CESACIÓN DE LOS EFECTOS ANTE LA INEXISTENCIA DE COMUNIDAD DE ESFUERZOS POR PARTE DE UNO DE LOS CÓNYUGES. En términos de lo dispuesto en los artículos 183, 2581, 2582, 2589 y 2590 del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, no es verdad que los efectos de la sociedad conyugal cesen sólo en la hipótesis de abandono injustificado del hogar conyugal, porque al establecer las mismas disposiciones que a falta de capitulaciones matrimoniales aquélla se regirá conforme a las disposiciones generales del contrato de sociedad, se está claramente indicando tanto el fundamento como los propósitos de la sociedad conyugal y con ello las causas que permiten estimar cesados sus efectos; pues siendo la finalidad de la sociedad conyugal la satisfacción de los intereses comunes y su fundamento la colaboración del marido y la mujer, se explica que cesen sus efectos por el motivo concreto que la ley se ha ocupado de regular, pues de lo contrario parecería que aun cuando los cónyuges no hicieren vida en común por el abandono injustificado de uno de ellos, sin embargo, subsistía la sociedad, siendo que faltaría lo que constituye su esencia; mas precisamente en atención a esa razón en que la ley se inspira, debe estimarse que también, lógicamente, y ya sea respecto de uno de los dos esposos, según el caso, no surte efectos la sociedad cuando no obstante subsistir el lazo matrimonial, la vida en común cesa por otra causa imputable a uno o a ambos, haciendo imposible la comunidad de la vida y de trabajos, deja de existir la principal consideración en que se ha fundado la

ley para establecer la sociedad conyugal, y entonces no se justifica ni puede ya hablarse de participación en los provechos de una sociedad que en la realidad ha dejado de serlo, al no haber ninguna aportación de los socios, ya económica o contribuyendo a los fines propios del matrimonio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 141/98, relativo al Juicio Ordinario Civil número 0295/96, promovido por L.G.F. en contra de E.C.Q.- Sentencia emitida el 3 de Agosto de 2000.- Magistrada: María Teresa Herrera Tello.

57. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE ADVIERTE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN APELACIÓN REPERCUTE EN LOS DERECHOS DE MENORES. En un procedimiento donde se reclama la convivencia con los menores hijos, es evidente que, cualquier decisión a dictar en dicho proceso, definitivamente incide en el desarrollo de los párvulos afectos a la causa, consecuentemente, el interés de ellos, obtiene el carácter de primordial y, debe convertirse en la norma rectora de toda determinación judicial concerniente a su persona.- Así, con fundamento en lo establecido en la parte in fine del artículo 446 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, cuando se observa alguna situación que afecte o impida el debido desarrollo de los menores cuya convivencia se reclama, el Tribunal de Alzada esta obligado a suplir la deficiencia de la queja planteada, resultando factible que, aún y cuando en un juicio de convivencia se haya autorizado la misma, con el único fin de que los menores tengan una adecuada integración con el progenitor o ascendiente que reclame la convivencia, así como con la familia de este, es dable la variación del régimen de convivencia fijado en la Primera Instancia, atendiendo a la edad, así como el tiempo que tienen sin convivir con el accionante, ya sea incrementando los días y horas para llevar a cabo la convivencia, o bien, para adecuarla de tal modo que, la convivencia autorizada se acerque lo más posible a la convivencia que se llevaría a cabo, en caso de tener un contacto cotidiano, así como también para que represente un mayor beneficio para el debido desarrollo integral y armónico del menor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación número 301/2004. Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2004. Toca de Apelación número 349/2004 Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia emitida el 17 de diciembre de 2004. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega.

58. TESTAMENTO OLÓGRAFO. NO ES SUFICIENTE QUE EL TESTADOR POR SÍ MISMO ESCRIBA DE PROPIA MANO LAS DISPOSICIONES DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD PARA SER FORMAL. Si bien es cierto que el testamento es un acto jurídico unilateral, revocable y libre, por medio del cual cumpliendo con los requisitos esenciales, una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su fallecimiento, también lo es que, no es suficiente que el testador por sí mismo escriba

de propia mano las disposiciones de última voluntad, para que el documento que contiene esas disposiciones, aún cuando se autografíen en su totalidad, sea un testamento ológrafo, sino que el testamento en general y el ológrafo en particular es un acto eminentemente formal o de estricto derecho, en cuanto que a su otorgamiento tiene varias partes, y cada una de ellas constituye una solemnidad sin cuya existencia no puede ser válido el testamento, por lo anterior, se llega a la convicción de que las recurrentes adoptan un criterio equivocado de interpretación al expresar que el Código Civil del Estado de Nuevo León menciona algunos requisitos de carácter secundario que conciernen al funcionario del Registro Público, que deben ser llenados por éste más no por quien emite el testamento, pues como ya quedó precisado antelativamente, el depósito del testamento hecho en el Registro Público forma parte integrante y final de las formalidades que el testador debe observar, y que si no se acatan en su totalidad, la Autoridad Judicial esta legalmente impedida para emitir la declaratoria de ser formal un testamento ológrafo. Consecuentemente al haberse presentado ante el Registro Público la copia del testamento en lugar del original, se entiende claramente que no se cumplió con dicha formalidad, pues al haberse realizado de esa manera se debe tener por no presentado dicho documento en el referido organismo, decretándose en tal virtud, improcedente la solicitud realizada para que se declarara ser formal el testamento ológrafo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 166/01 diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ser formal el testamento ológrafo, promovidas por Irma Alicia Alanís Barbosa. Sentencia emitida el 21 de Enero de 2002. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

59. TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. NO ES MOTIVO PARA DECLARAR SU NULIDAD EL HECHO DE QUE EL NOTARIO REALICE LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE LA ESCRITURA EN FECHA POSTERIOR. Si bien es cierto, que el testamento público abierto debe otorgarse con ciertas solemnidades, bajo la pena de nulidad, también es cierto, que el hecho de que el Notario Público asiente en la escritura la autorización definitiva en fecha posterior a la del día en que el testador otorgó su testamento, no es motivo para declarar su nulidad, bajo el argumento de que no se realizó con la continuidad debida, es decir, que no se realizó en un solo acto, pues al haberse plasmado las firmas tanto del Fedatario como de la testadora y sus testigos, así como el sello que autentifica el acto jurídico llevado acabo en su oficina en ese mismo momento, dicho testamento comenzó a surtir sus efectos desde ese día, siendo totalmente independiente, que en fecha posterior el Notario Público haya realizado la autorización definitiva de la escritura, ya que esto último únicamente lo puede realizar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley del Notariado, una vez que se le compruebe que están pagados los impuestos que se causen y se le justifique además, que está cumplimentado cualquier otro requisito o condición que conforme a las leyes, sea necesario para la autorización de la misma, lo cual obviamente puede ocurrir posterior al otorgamiento del testamento por el testador. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 202/01, Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad

de Testamento Público, promovido por J. E. y M. T. G. R. vs I. B. y Otros. Sentencia emitida el 8 de Noviembre de 2001. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

60. TESTIGOS. SU CITACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A TRAVES DE LOS SERVIDORES A QUIENES LA LEY LES IMPONE ESA OBLIGACIÓN Y NO A LOS OFERENTES, POR DISPOSICIÓN DE LOS ARTÍCULO 79 Y 330 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. Es irregular la actuación de la autoridad jurisdiccional, al declarar desierta la prueba testimonial, inobservando los artículos 79, 227, 330 y 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, pues de la aplicación armónica de los preceptos citados, se infiere que el juez que conoce del juicio, al admitir la prueba testimonial debe ordenar que se cite a los testigos a más tardar el día anterior al en que daba practicarse la diligencia, bajo el apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas o multa hasta por treinta cuotas que se aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada, citando a los testigos por cédula en sobre cerrado y sellado que contenga la determinación del juez o magistrado que mande la diligencia, por conducto de la policía o de los actuarios del órgano jurisdiccional; que si los atestes no comparecen sin causa justificada o los que habiendo comparecido se nieguen a declarar, deben ser apremiados por el tribunal. Igualmente se deduce de los numerales anteriormente invocados, que el juzgador sólo está facultado para declarar desierta la prueba testimonial, en los siguientes casos: a) Cuando ejecutados los medios de apremio consistentes en arresto hasta por treinta y seis horas o multa hasta por treinta cuotas, no se logra la presentación de los testigos. b) Cuando el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o se comprueba que se solicitó su citatoria con el propósito de retardar el procedimiento. En este orden de ideas, es inconcuso que la determinación del juez natural de declarar desierta la prueba testimonial es incorrecta, cuando de la revisión de los autos del expediente, no se advierte que se haya entregado a los testigos la cédula citatoria a que se refieren los artículos 79 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, no obstante que así lo haya ordenado el resolutor de origen en determinado proveído; consecuentemente, la incomparecencia de los atestes no es imputable a la oferente de la prueba, sino al propio órgano jurisdiccional por no advertir la falta de expedición y entrega de los citatorios, a fin de que los testigos, asistieran al desahogo de dicha probanza, máxime que la parte que ofrece dicho medio de convicción, no es miembro integrante de la jurisdicente, ni auxiliar para el cumplimiento de sus funciones, facultades y obligaciones de la propia autoridad, sino que la autoridad judicial, admitida la prueba tiene la obligación de citar a los testigos, por conducto del actuario o de la policía, agotando los medios de apremio previstos en la ley en caso de ser necesario, por lo que al no haberlo realizado así, el resolutor de origen infringió las disposiciones procesales precitadas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación número 49/03, relativo al Juicio Especial sobre Pérdida de la Patria Potestad. Sentencia emitida el 20 de Mayo de 2004. Toca de apelación número 149/04, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario.

Sentencia emitida el 19 de Mayo de 2004. Toca de apelación número 26/2004, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 24 de Mayo de 2004. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

61. TUTOR ACTUAR DEL. NO TERMINA AL EMITIRSE LA SENTENCIA QUE AUTORICE LA ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE ALGÚN BIEN PERTENECIENTE A UN MENOR. Es concluyente que para cualquier controversia relacionada con el inmueble que se autorizó gravar, la representación de los menores recae en el tutor especial designado, pues a pesar de que su designación haya emanado de ese procedimiento, está encargado de todo lo relacionado con el inmueble que se autorizó gravar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 114/99, relativo al Juicio Ordinario Civil número 239/96, promovido por J.S.V. en contra de L.H.V.S., A.C.G. así como de las personas morales denominadas U.C.I.N.L., S.A. DE C.V. y B., S.A. - Sentencia emitida el 5 de Abril de 2000.- Magistrada: María Teresa Herrera Tello.

62. ALIMENTOS. INDEBIDO DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEMANDADO. De conformidad con nuestra Legislación Adjetiva Civil en vigor, los elementos a justificar para decretar la procedencia de la acción alimentaria se encuentran descritos en el numeral 724 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y son: I.- Que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se piden; II.- Que se justifique al menos aproximadamente, la capacidad económica del que deba darlos y, III.- Quien exige alimentos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos, por ende no requiere prueba. El título por el cual se piden los alimentos (primer elemento de la acción), son los descritos en el artículo 725 del Código Adjetivo de la Materia: testamento, documentos comprobantes del parentesco o de matrimonio, convenio o ejecutoria en que conste la obligación de dar alimentos; en el caso justiciable tenemos que, el acta del Registro Civil atinente al nacimiento del menor peticionar de alimentos, a cuya inscripción comparecieron ambos progenitores, pone en evidencia el vínculo paterno filial existente entre el menor acreedor y su padre, demostrándose también, la obligación correspondiente a este último respecto de dar alimentos a su descendiente, conforme a lo establecido por el artículo 303 del Código Civil en vigor. Por su parte, el numeral 726 del Código de Procedimientos Civiles en vigor indica: “Presentada la demanda con los documentos a que se refiere el artículo anterior (725), se correrá traslado al deudor alimentista por un término de tres días para que produzca su contestación”, lo cual da lugar a interpretar que, el único elemento a evidenciar al presentar la demanda alimentaria, es precisamente aquel con el que se justifica el título donde se advierte el origen de la obligación alimentaria, en tanto que la capacidad económica del deudor alimentista, constituye propiamente un elemento de la acción, que como tal, debe probarse durante la tramitación del juicio y no es indispensable su justificación previa, para admitir la demanda presentada al Juez Primario,

máxime cuando el derecho a percibir alimentos, por su naturaleza, satisface un interés social y de orden público de extrema urgencia, que tiende a permitir a quienes carecen de medios de subsistencia, los alcancen rápidamente por parte del obligado; si bien es cierto, el conocimiento de la capacidad económica del deudor alimentista es importante para que el Juzgador se encuentre en posibilidad de fijar una pensión alimenticia provisional equitativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 311 del Código Civil en vigor, ello no debe estimarse indispensable para la admisión de la demanda principal, precisamente por ser preponderante la satisfacción del derecho alimentario para el peticionario, dado su carácter urgente y, atendiendo a la presunción que asiste al reclamante en el sentido de requerir los alimentos demandados, y más aún porque, como se explicó con antelación el segundo elemento de la acción, se reitera, se justifica en el transcurso del procedimiento, sin que su falta de demostración en un principio, represente un obstáculo para fijar una pensión alimenticia provisional. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo 195/2005 Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 27 de junio de 2005.Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

63. ALIMENTOS. PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA, BASES PARA LA FIJACIÓN DE AMBOS PORCENTAJES. Es pertinente referir que, si bien es cierto que la pensión alimenticia provisional se fijó por el A quo de acuerdo a las manifestaciones vertidas por la propia demandante al encontrarse satisfechos los lineamientos requeridos en el artículo 724 del Código Procesal Civil, no menos cierto es que, la pensión alimenticia que se decreta por el juzgador natural dentro de un juicio sumario de alimentos, se da en dos tiempos diversos del proceso, una al admitir a trámite la demanda propuesta, fijando la de carácter provisional y, la otra al momento de emitir la sentencia respectiva, en calidad de definitiva, sin perjuicio de que dentro de la secuela normal del procedimiento se pueda variar la primera, pero ello no implica que ambos porcentajes deban ser idénticos, toda vez que la primera se determina por la autoridad sin audiencia del deudor alimentista, puesto que al momento de proveer de conformidad la solicitud inicial, solamente cuenta con la información proporcionada por la demandante, de acuerdo a lo previsto en el numeral 726 del citado ordenamiento procesal, y esto es así, porque el juzgador al decretar la pensión provisional, carece de los elementos suficientes que le son proporcionados durante la secuela del procedimiento, los cuales le permiten conocer la capacidad económica del deudor alimentista, así como las necesidades de los acreedores alimentarios, pero acorde al espíritu de la norma, se deben fijar provisionalmente alimentos por la trascendencia e improrrogable necesidad de recibirlos, y la segunda, se genera al emitirse la resolución de fondo fijando el monto de la pensión definitiva, con base en los elementos de prueba que fueren allegados por los contendientes en el litigio, previo el correspondiente estudio, ya que es hasta ese momento procesal cuando el juzgador esta en optimas condiciones de normar su criterio y cumplir debidamente con lo establecido en el artículo 311 de la legislación sustantiva civil, el cual prevé que los alimentos se deberán proporcionar de acuerdo a las posibilidades del que

debe darlos y a las necesidades de quien tenga derecho a recibirlos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación N° 401/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia: 30 de Noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

64. ALIMENTOS. ES LEGAL ESTIMAR EL CAPITAL DE INVERSIÓN DEL DEUDOR ALIMENTISTA, A EFECTO DE DETERMINAR SU CAPACIDAD ECONÓMICA. De acuerdo a lo previsto en la parte final del artículo 311 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez estimará las ganancias de éste con base a los signos exteriores de riqueza que demuestre; por tanto, si en autos quedó comprobado que el obligado a dar alimentos invirtió algunas cantidades de dinero en un negocio de su propiedad, tal aspecto puede tomarse en consideración para determinar su potencial económico, ya que el capital de inversión refleja un signo exterior de riqueza del deudor alimentista, mediante el cual puede estimarse las ganancias que obtiene en su negociación mercantil; ello, como ya se indicó, en términos de la última parte del artículo 311 de nuestra Legislación Sustantiva Civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 232/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 16 de Diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

65. ALIMENTOS, ACCIÓN DE. COMPROBACIÓN DEL SEGUNDO REQUISITO PARA DECRETAR SU PROCEDENCIA. No es necesario para tener por justificada la capacidad económica del deudor alimentista, que la parte actora demuestre los ingresos que, según expuso en su demanda, éste último recibe con motivo de su trabajo; para ello, basta comprobar algún aspecto que ponga de manifiesto su solvencia económica para cumplir con la obligación alimentista, ya que, respecto al tópico en cuestión, el artículo 724 del Código Procesal Civil para el Estado de Nuevo León, en su fracción segunda, sólo exige justificar aproximadamente la capacidad económica del que deba dar alimentos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 232/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 16 de Diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

66. ALIMENTOS. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN ATENDERSE PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA, A FIN DE FIJAR LA PENSIÓN RESPECTIVA. La capacidad económica del deudor alimentista no implica únicamente los ingresos que percibe, sino todo el activo patrimonial que pudiere tener, así como también aptitud o condición para desarrollar o incrementar su haber patrimonial ya existente, conforme a su edad, condición social, preparación profesional, actividad, etcétera (capacidad productiva), por lo que la capacidad económica también implica tanto

la aptitud como los medios que tiene el deudor alimentista para hacer frente a sus obligaciones alimentarias. En tal virtud, a fin de fijar la pensión correspondiente, se deben valorar todos los elementos de prueba con los que se acredite tanto el activo patrimonial como las circunstancias particulares del obligado que evidencien su capacidad productiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 402/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 16 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

67. ALIMENTOS, PARA FIJAR SU MONTO SE DEBE ATENDER AL NIVEL DE VIDA OSTENTADO. Si bien la capacidad económica del deudor alimentario quedó acreditada en autos originales, llevados ante la autoridad de primera instancia, y que su patrimonio, conformado por bienes muebles e inmuebles se traducen a signos evidentes de riqueza al representar cantidad millonaria, se torna necesario aclarar, que resulta moralmente justificado, que si para la formación de tal patrimonio no coadyuvó ni contribuyó la accionante, ya que al momento de contraer matrimonio las partes, el deudor ya contaba con ésa capacidad económica, no es dable entonces considerar que el nivel de vida ostentado por la acreedora sea ni haya sido similar al de su consorte, pues la permanencia en el domicilio conyugal, fue menor a los dos años, y considerando además que la accionante, tuvo antes de casarse, el mismo domicilio que actualmente habita, que es propio de la acreedora y diverso al conyugal, y que su ingreso mensual al momento de terminar su relación laboral, era de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 moneda nacional), suma que le permitía vivir decorosamente, antes de contraer matrimonio, luego entonces, cabe concluir, que dicho nivel de vida puede y es el que debe ser cubierto por su cónyuge, quien tiene como obligación seguir manteniéndole tal nivel, que se estima holgado, suficiente, justo y acorde a sus necesidades, claro está, sin caer en el extremo de pretender le sean solventados lujos y riquezas excesivas, o gastos superfluos, sino asegurarle una calidad de vida idónea, digna, decorosa y, como ya se asentó, holgada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 0149/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 30 de junio del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

68. ALIMENTOS, CUANDO SE DEBE FIJAR SU PAGO EN ESPECIE. El deudor alimentista puede cubrir su obligación alimentaria proporcionando en especie los satisfactores necesarios para que su menor acreedor pueda tener una vida digna y decorosa, empero, en observancia siempre al principio del Interés Superior del Menor, consagrado como derecho individual en el artículo 4 Constitucional, así como en el numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ordenamiento internacional del que forma parte nuestro país, y que se reconoce en el rango jerárquico de segundo plano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Suprema ley, con base además, en lo establecido por los artículos 446 y 952 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado. Es

así, que este Órgano revisor, estima conveniente la modificación en cuanto al monto y forma de pago de la pensión alimenticia, la que será en especie, y que debe proporcionar el deudor a su menor hija, ello con la única finalidad de que la menor vea en forma mas eficiente la aplicación de los satisfactores para cubrir sus necesidades, así como para efecto de fomentar la sana convivencia, y la mejor y mayor integración del deudor alimentista con su menor hija, apreciándose de la documental relativa al acta de matrimonio aportada por el demandado en forma superveniente, que ha formado un nuevo hogar, lo que impone indicar que ello no debe distanciar el vínculo paterno filial, sino que el contacto entre padre e hija debe seguirse dando; estimándose que la fijación alimentaria en especie, se desprende e interpreta de nuestra propia legislación civil, en sus artículos 308 y 309, siendo apoyada por criterios doctrinales y federales. De esa forma, se reitera que se podrá fomentar el contacto entre padre e hija, y así el demandado estará más al pendiente de las necesidades particulares de la menor, al igual que cierto de que los alimentos efectivamente se aplican a su menor acreedora, fortaleciendo además su vínculo paterno-filial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 0274/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 30 de septiembre del año 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

69. ALIMENTOS. LA CÓNYUGE ENCINTA TIENE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PARA EXIGIRLOS A SU ESPOSO EN REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE ESTÁ POR NACER, SATISFACIENDO ESTE SUS ALIMENTOS CON LA PENSIÓN DECRETADA A FAVOR DE SU MADRE. Cuando la accionante encinta promueve el juicio de alimentos por sus propios derechos y en representación del producto que está por nacer, circunstancia que fehacientemente acreditó en autos mediante alguno de los medios de convicción establecidos por la ley, deviene procedente decretar una pensión alimenticia a favor del acreedor alimentario, en este caso el producto, quien a través de su madre, tiene acción para pedir el aseguramiento de los alimentos, según lo faculta la segunda fracción del artículo 315 de la codificación sustantiva de la materia vigente en el estado. Pues a pesar de que el producto aún es un no nato, el numeral 23 Bis del Código antes referido, protege al ser humano desde su concepción, momento en que entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para efectos legales; en ese sentido, la actora tiene legitimación ad causam para representar al feto. No obstante que se le hayan negado los alimentos al embrión, quedó protegido, así como salvaguardado su derecho a pedirlos, al considerar la Autoridad de Primera Instancia, la necesidad por parte de la actora de una alimentación balanceada así como asistir al médico con mayor frecuencia debido a su embarazo, pues es médicamente conocido que el embrión está conectado al útero de la madre, satisfaciendo sus necesidades a través del cordón umbilical, partiendo de esa premisa, los alimentos que ingiera su progenitora y la atención especializada que a esta le brinden los recibe directamente el aún no nato, quien hasta hoy, solo requiere comida y cuidados médicos para su sano desarrollo, siendo posterior a su alumbramiento que requerirá para sí mismo,

le decreten una pensión que cubra los rubros restantes que comprenden los alimentos. Consecuentemente, no es necesario fijar una pensión alimenticia especial para el embrión, pues con la decretada a su madre, satisface sus actuales necesidades, máxime que no demostró que aquel requiriera algún tratamiento especial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 183/2005 Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 20 de junio del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

70. ALIMENTOS. PARA CONSIDERAR EL RANGO PROMEDIO DE LOS GASTOS EROGADOS EN DETERMINADO SECTOR, SE ATIENDE AL COSTO DE LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS Y NO A LA CLASE SOCIAL DE LAS PERSONAS. Es infundado lo anterior, pues la Juzgadora de primer grado, llego a esa conclusión atendiendo al costo de los servicios domésticos que se desprendieron de las documentales allegadas al sumario consistentes en los recibos de pago de los servicios a Teléfonos de México Sociedad Anónima de Capital Variable, Agua y Drenaje de Monterrey y a la Comisión Federal de Electricidad, los cuales merecieron pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 229, 239 fracción III, 290, 297 y 373 del Código Procesal Civil del Estado, al no haber sido objetados por el señor ----, y no a la calidad en que se habitan las fincas de ese sector y la clase social de las personas, es decir la decisión de la resolutora fue estrictamente apegada a derecho, basada exclusivamente en las probanzas aportadas en el sumario, por lo que carece de apoyo legal lo sustentado por el demandado en éste agravio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en artículo 395/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. María Susana Alejandro Ortega.

71. ALIMENTOS. DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE LOS HIJOS, CUANDO ÉSTOS HABITAN EN COMPAÑÍA DEL DEUDOR ALIMENTISTA, ES CORRECTO DESECHARLA. Cuando de las constancias del sumario, se advierta que la parte actora, no cuenta con la custodia material de sus hijos, en cuyo nombre solicita alimentos, resulta correcto desechar la demanda, pues al pretender demandarlos en representación de sus menores hijos, cuando éstos se encuentran en compañía de su padre, según lo acepta y reconoce la propia demandante, sería antijurídico darle curso legal, pues es el demandado quien tiene incorporados a su domicilio a los menores y, en tal virtud es quien se hace cargo de su manutención, cuidado y alimentación, por lo que sujetarlo a un juicio de alimentos respecto de sus hijos que viven junto a el, redundaría en un abuso del derecho alimentista y del propio sistema judicial. En efecto, si con tal procedimiento, pretende obtenerse una pensión por concepto de alimentos, misma que comprenda los gastos relativos a comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y respecto de los menores, también lo necesario para su educación, desarrollo y sano esparcimiento, al tener el deudor alimentista demandado, la custodia de sus hijos, en virtud de resolución

judicial, cabe tenerle a él por cubriendo tales necesidades de sus hijos, siendo así antijurídico sujetarle a un procedimiento que tuviera como fin satisfacer esas mismas necesidades que se presumen son cubiertas por él, sin que en la demanda se señalara nada en contrario, conforme con los artículos 308 y 309 del Código Civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 261/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 14 de septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

72. ALIMENTOS, NECESIDAD DE LOS. ES INNECESARIO ACREDITARLA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE ALEGA INSUFICIENCIA EN LOS INGRESOS DE QUIEN LOS SOLICITA. Al estarse promoviendo demanda sumaria de alimentos por un ascendiente, en contra de sus hijos mayores de edad, acompañando el título por el cual se demandan los mismos, en particular, el acta de nacimiento de cada uno de los demandados, de donde se deduce el parentesco del accionante con ellos, así como aduciendo en su escrito inicial, la insuficiencia de sus percepciones actuales para subsistir, no debe desechársele de plano la demanda planteada, ya que si bien, cuando los alimentos se demandan por los ascendientes, éstos tienen la necesidad de acreditar la necesidad de percibirlos, lo que en el justiciable se alegaba en tal ocurso, en todo caso la existencia o no de tal necesidad, sería materia de la sentencia a emitirse en el principal, no así del auto que da cuenta del escrito de demanda. En efecto, siendo la necesidad de percibir alimentos, un elemento de la acción intentada en el principal, su estudio por el juzgador, debe ser abordado hasta el fallo definitivo, pues negarse a admitir la demanda en cuestión, cuando durante el curso del procedimiento el demandante tiene la posibilidad de justificar la insuficiencia de sus percepciones y por ello la necesidad en cuestión, resultaría antijurídico. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 276/2005. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 22 de agosto de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

73. DECLARACIÓN DE ESTADO DE INTERDICCIÓN. EN CASO DE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE INTERDICCIÓN DE DETERMINADA PERSONA, LA AUTORIDAD SE ENCUENTRA FACULTADA PARA PRACTICAR CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA ANTES DE DESIGNARLE TUTOR PROVISIONAL. Es conveniente, dentro de una sana lógica, que la Jueza de Primer Grado, antes de designar tutor provisional al presunto incapacitado, y por estar facultada en los términos de los artículos 49 y 904 del Código de Procedimientos Civiles, para practicar cualquier diligencia o allegarse de cualquier medio de prueba alguno que la oriente para dilucidar la supuesta incapacidad del señor----, como apersonarse en el domicilio de él o hacerlo comparecer al juzgado, haciéndose acompañar por un profesional de la materia, ello con la finalidad de salvaguardarle plenamente sus

garantías individuales, pues la admisión de la petición de declaración del estado de interdicción, trae como consecuencia que se le designe un tutor provisional, lo que inminentemente le priva de actuar por sus propios derechos, pues la función principal del tutor interino es proteger a su persona, y la conservación de sus bienes, tal como se advierte de lo establecido en el artículo 449 del Código Civil del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en artículo 435/2005. Diligencias de Jurisdicción voluntaria. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. María Susana Alejandro Ortega.

74. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. FACULTAD DE DESAHOGARLAS EN ASUNTOS DE DIVORCIO NECESARIO, POR SER EL MATRIMONIO DE ORDEN PÚBLICO. Se considera indiscutible que para estar en aptitud de conseguir la verdad y la justicia, que constituyen interés fundamental y común de las partes, y de la autoridad judicial ante quien se tramitan los procesos, los funcionarios encargados de su administración, estén facultados para que en cualquier momento puedan ordenar, con independencia de los elementos de convicción que hayan sido rendidos por las partes, el decretar la práctica de cualquier diligencia que se estime necesaria y conducente para lograr los citados objetivos, sin más limitante que sean las reconocidas por la ley y que tengan relación con los hechos controvertidos, según lo prevé el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles. De la norma legal invocada y, que de cierta manera rige la suplencia de la queja en beneficio del orden público del cual se encuentra revestido el matrimonio civil en los procedimientos relacionados con derechos emanados de éste, se evidencia que el legislador dotó a la institución de un amplio alcance, en el cual queda comprendida la atribución para invocar razonamientos no expuestos o perfeccionar los expresados deficientemente en la expresión de agravios. Por lo que la facultad de que se encuentra investido este órgano revisor, de suplir la deficiencia de la queja a favor del vínculo matrimonial, obedece principalmente al interés que tiene la sociedad de proteger la conservación de ese contrato civil; deviene innegable la necesidad de recabar oficiosamente los medios probatorios encaminados a obtener mayores elementos para conocer y decidir jurídica y objetivamente lo que resulte más benéfico para las partes involucradas en el presente litigio, así como para sus descendientes, con quienes guardan estrechamente una relación de familia, por lo que si éstos medios no se aportaron, debe ordenarse al Juez natural que mande reponer el procedimiento a efecto de que disponga lo necesario a fin de que se recabe la opinión de expertos en materia de psicología en relación con ambos contendientes, además de su hija, pues el grado de afectación y daño que en su caso pudieran haber resentido, tanto la actora como su nombrada hija, con la conducta desarrollada supuestamente por el demandado en el juicio principal, no puede ser determinado bajo los conocimientos generales que posee cualquier persona, pues tal conocimiento no es parte del acervo normal de cualquier sujeto, sino que para llegar a tal determinación es necesario que uno o varios expertos en la materia expresen su opinión al respecto, basándose en las circunstancias específicas del caso en concreto, para de esta forma contar con los elementos propicios a fin de estar en las

condiciones básicas que permitan al juzgador primario conocer de manera objetiva el entorno social de la citada familia, su descripción sintética del grupo familiar, su problemática vital, descripción de rasgos de carácter y personalidad, su salud mental y física, sus costumbres y educación, el tipo de conducta que ha desarrollado el demandado en su relación familiar, si con ese tipo de conducta a perturbado psicológicamente a su consorte y a la citada hija, en su caso, el grado de afectación que se ha generado en éstas y su secuela futura, la conclusión diagnóstica y pronóstico, y en base a dichas opiniones técnicas, el resolutor en su carácter de perito de peritos, determine que opinión es la más acertada en cuanto al planteamiento sometido a su consideración, resolviendo lo más benéfico sobre los integrantes de la referida familia, en su caso la conservación o disolución del vínculo matrimonial en conflicto, es decir, de todo lo que concierne a ésta, menos lo que el Estado debe realizar para que la sociedad no resulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es de orden público. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación Nº 084/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia 30 de Agosto de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

75. DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE DECLARACIÓN DE ESTADO DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE TUTOR. NO ES REQUISITO SINE QUA NON PARA ADMITIR A TRÁMITE LA SOLICITUD, ALLEGAR JUNTO A ÉSTA, LOS TRES CERTIFICADOS MÉDICOS QUE MARCA LA LEY. En otro orden de ideas, si bien es cierto, los promoventes no allegaron certificaciones médicas que justificaran el estado de demencia del presunto incapaz, conforme lo prevé el numeral 917 fracción II del Ordenamiento Procesal de la Materia, omisión que no debe traducirse en el desechamiento de la solicitud de mérito por las siguientes razones. Al efecto, resulta oportuno transcribir en lo conducente, dicho numeral: *"Artículo 917.- ... II.- El estado de demencia puede probarse con testigos o documentos, pero en todo caso se requiere la certificación de tres médicos cuando menos, sobre el estado de demencia, retraso mental moderado, grave o profundo, alguna otra enfermedad o trastorno mental cuya gravedad impida un adecuado funcionamiento de sus facultades. El tutor puede nombrar un médico para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen;".* Así las cosas, la disposición anterior, se refiere a la forma en que se prueba el estado de demencia, es decir con testigos o con documentos; y establece que para probar el mencionado estado de demencia se *requiere en todo caso la certificación de tres médicos cuando menos, sobre el estado de demencia, retraso mental moderado, grave o profundo, alguna otra enfermedad o trastorno mental cuya gravedad impida un adecuado funcionamiento de sus facultades;* es decir, de lo anterior se colige que no es indispensable que al momento de presentar la solicitud de declaración de estado de interdicción deban anexarse los tres certificados médicos, sino que, para probar dicho estado se requiere allegarlos, sin precisar en que momento hacerlo, además de que no existe precepto legal alguno que establezca como requisito de procedibilidad, la presentación de las mencionadas certificaciones, tan es así, que el multireferido numeral

917 infine, establece: *"El tutor puede nombrar un médico para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen"*, lo que implica, que una vez admitida la solicitud de declaración de estado de interdicción y designado el tutor interino, se procederá a la fase de pruebas para intentar acreditar la incapacidad del sujeto, y dicho tutor podrá nombrar un médico para que tome parte en esa audiencia, por lo que, ante las consideraciones expuestas, es de concluirse que no es requisito sine qua non para admitir a trámite la solicitud de declaración de estado de interdicción, allegar junto a ésta, los tres dictámenes médicos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 412/2005 Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Estado de Interdicción y Nombramiento de Tutor. Sentencia emitida en fecha 30 de noviembre del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

76. DIVORCIO NECESARIO INJURIAS. ES NECESARIA LA ESPECIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y MODO EN QUE ACAECIERON AUN Y CUANDO SE HAYAN EXPRESADO A TERCERAS PERSONAS Y NO DIRECTAMENTE AL CÓNYUGE OFENDIDO. Al reclamar el acaecimiento de diversos hechos injuriosos imputados a la cónyuge demandada (consistente en que este última informó a terceras personas la supuesta paternidad adulterina que se le imputa), es obvio que, por su naturaleza, tal proceder constituye una causal de divorcio necesario de las catalogadas como de realización instantánea, las cuales nacen y mueren en el mismo momento en que se profieren; por ello es de trascendental importancia su debida especificación en la demanda primaria, sin ser relevante que las mismas se hayan expresado a terceras personas y no directamente a la parte demandante; ya que por la naturaleza de los hechos reclamados, constituye un elemento de acción determinar la forma, el momento y el lugar en que tales injurias fueron proferidas, pues al tener como característica primordial el menosprecio que supone para la persona contra la que se dirige, es obvio trae consigo una repercusión dañina al menos en la dignidad de quien la recibe, por ende, es indiscutible su necesaria especificación en la demanda inicial, independientemente de que hayan sido expresadas de forma directa o no al cónyuge ofendido, pues tal situación de ninguna manera pudiera relevarlo de dicho deber procesal, pues sería inverosímil que un facto de tal magnitud como lo son los hechos injuriosos, no quedaren guardados en la psique de los testigos que presenciaron la conducta imputada a la demandada, quienes en todo momento debieron en su caso, informar al demandante, cuándo, cómo y dónde ocurrieron los hechos injuriosos analizados en este juicio; resultando ilegal que los testigos sean quienes en todo caso debieron hacer del conocimiento de la Justiciante tales peculiaridades, pues se insiste, tales eventualidades deben exponerse en el escrito inicial de demanda, ya que este es uno de los escritos con los que se integra la litis del juicio y, no debe pretenderse el perfeccionamiento de aquella con el resultado de las pruebas aportadas al procedimiento, pues no es dable subsanar las deficiencias de la demanda con las pruebas aportadas en el procedimiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 419/2005. Juicio

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesaria. Sentencia emitida en fecha 16 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

77. DIVORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS ESBOZADOS POR EL INCONFORME AL SER EL MATRIMONIO DE INTERÉS PÚBLICO. Por otra parte, tenemos que las cuestiones que tengan relación con la institución del matrimonio son consideradas de orden público, ya que la sociedad en general esta interesada en su conservación, y solo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial, por lo tanto, en los procedimientos mediante los cuales se reclama un divorcio necesario, se precisa que la causal invocada en él, quede plenamente acreditada; por ello, considerados los problemas de índole familiar como cuestiones del orden público, según lo prevé nuestra legislación civil, existe para la autoridad jurisdiccional al momento de cumplir con su función, la facultad de velar por el interés superior del instituto del matrimonio, como pilar de la familia e integración de la sociedad y, por ende, en suplir las deficiencias de los procedimientos judiciales en que se ventilen cuestiones que trasciendan a la desintegración de dicha figura jurídica, con independencia de los argumentos esbozados por las partes, ya que no debe estimarse un exceso de rigor en la aplicación del derecho en el acto de resolver la controversia puesta a su potestad, que tienda a hacer ineficaz la esmerada preocupación del Estado en la subsistencia de la familia como núcleo supremo de la sociedad, por lo que, en ese orden de ideas, al ventilarse un juicio como del tipo que nos ocupa a estudio, se llega a la plena convicción de que deberá suplirse la deficiencia de la queja, para estar en aptitud de poder resolver la controversia planteada con estricto apego a la realidad existente dentro de la relación matrimonial que pretende disolverse, máxime si ese rompimiento se centra en cuestiones de violencia familiar cometida por uno de los cónyuges que pudiera afectar al otro ó a los hijos de ambos, ó en actos conductuales no normales en el desarrollo habitual de una familia común, ejecutados por un consorte que pudieran causar trascendencia psicológica en el otro ó en los hijos de estos, como sucede en el presente asunto, donde algunas de las causales invocadas por la actora principal, pudieran encuadrar en las hipótesis descritas en las fracciones V y XVIII del artículo 267 del Código Civil; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación Nº 084/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia 30 de Agosto de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

78. DIVORCIO, LA SEPARACIÓN DE LA CASA CONYUGAL POR MÁS DE SEIS MESES SIN CAUSA JUSTIFICADA COMO CAUSAL DE, NECESIDAD DE ESPECIFICAR SI SUBSISTIÓ LA CASA MATRIMONIAL DURANTE LOS SEIS MESES DE LA SUPUESTA SEPARACIÓN, O BIEN, SI EXISTE UNA

JUSTIFICACIÓN PARA QUE EL ACTOR TAMBIÉN SE SEPARARA DEL MISMO. Basada la acción de divorcio en la separación del domicilio conyugal por más de seis meses sin causa justificada y, habiendo aducido la actora en su escrito demanda, que no se encuentra habitando el hogar matrimonial; para configurarse la aludida causal de divorcio, sólo en cuanto a su segundo elemento –existencia del domicilio conyugal-, es necesaria la manifestación en el escrito de demanda o replica y justificar en autos, que la casa marital subsistió durante los seis meses de la supuesta separación o, en su caso, que existe una justificación clara y concreta de porqué no pudo subsistir durante ese periodo de tiempo; lo primero, porque al haber referido la accionante que no habita la morada conyugal, sin precisar la fecha en que se separó de la misma, no es posible determinar si dicho domicilio subsistió durante los seis de la supuesta separación y mucho menos que el demandado estuvo apartado del mismo durante ese tiempo, siendo que la causal en cuestión exige la comprobación de tales aspectos, según se advierte del texto que integra la fracción VIII del artículo 267 del Código Civil Estadual; y lo segundo, porque el hecho de que la actora haya referido en forma general, que dejó de habitar el domicilio conyugal, es insuficiente para considerar que no estaba obligada a vivir en él durante los seis meses de la supuesta separación, pues con esa sola afirmación, no es posible sostener que estaba imposibilitada para habitar dicho domicilio, como hubiere ocurrido en caso de haber señalado y obviamente demostrado, sólo por mencionar un ejemplo, que se encontraba arrendando el supuesto domicilio conyugal y que carecía de ingresos para cubrir las pensiones rentarias, o bien, que a falta de ingresos no le era posible pagar los servicios domésticos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 239/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 23 de Agosto de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

79. DIVORCIO. CELEBRACIÓN DE CONVENIO POR LOS CONTENDIENTES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, A FIN DE QUE EL DEMANDADO SE ABSTENGA DE MOLESTAR A LA ACTORA, NO CONSTITUYE UN PERDÓN TÁCITO DE LA ACCIÓN CIVIL DE DIVORCIO. Cuando es aportado al Juicio de Divorcio Necesario, prueba documental pública consistente en copia certificada de una averiguación previa, tramitada ante la Agencia del Ministerio Público número dos, Especializado en Violencia Familiar y Atención a Menores, misma que merece valor probatorio pleno, conforme a los numerales 239 fracción II, 287 fracción V y 369, para el efecto de acreditar que la actora presentó denuncia de hechos en contra del demandado como presunto responsable del delito que resulte, por los hechos que refirió en su escrito inicial de demanda; averiguación en la que los contendientes celebraron un acuerdo, mismo que no implica un perdón tácito de la actora hacia el demandado en virtud de que el convenio dejó sin efectos la averiguación previa, como lo refirió la Autoridad de los autos, pues de su contenido solo se advierte que no es intención de la actora que la autoridad competente penalice la conducta atribuida como delictuosa a su esposo, debiéndose entender el convenio que únicamente se refiere a que este último se comprometa a no

molestarla física y verbalmente, y se abstenga de presentarse en el domicilio conyugal, resultando inadmisible que por ese solo hecho se tengan por extinguidas las demás responsabilidades penales o civiles derivadas de la conducta ilícita del ahora quejoso, máxime que en el convenio de referencia, en ningún momento se establece que, en forma expresa ni tácita, por ese conducto se otorgue el pleno perdón de toda responsabilidad penal o civil. Además, para que opere el perdón de parte ofendida se requiere que sea otorgado de manera expresa, lisa y llana, y nunca inferirse a base de presunciones, como sucede en la especie. Por si fuera poco, no puede hablarse de un perdón, puesto que este sólo puede concebirse cuando se reanude la vida en común, esto es, cuando los cónyuges ceden en su actitud de separación y prosiguen la vida matrimonial, ya que los actos encaminados a obtener esa reanudación por parte del cónyuge agredido, sólo pueden tomarse como la proposición de otorgar ese perdón, y en el caso justiciable, la actora pone de manifiesto su negativa a rehacer vida marital con su esposo. Y si bien es cierto, el convenio al que llegaron los contendientes, dejó en libertad al demandado, suspendiéndose el procedimiento en términos del artículo 287 BIS 1, segundo párrafo, fracciones I y IV del Código Penal del Estado, que en lo conducente dice: *"el agente del ministerio público o el juez podrá ordenar la suspensión del procedimiento y la inmediata libertad del inculpado o procesado, si se encontrase privado de ésta, cuando: I. exista acuerdo en tal sentido entre la persona agredida y el inculpado o procesado, otorgado o ratificado ante el ministerio público o el juez;... IV. el agente del ministerio público o el juez haya exhortado al inculpado o procesado a la enmienda y lo prevenga a que se sujete a tratamiento integral ininterrumpido dirigido a su rehabilitación médico-psicológica."*. Sin embargo, la suspensión y el archivo de la indagatoria, no implica que el procedimiento se haya concluido, mucho menos que se haya dejado sin efectos, como lo esbozó la resolutora, pues como lo establece la parte final del numeral en cita, *"Habrá sobreseimiento por extinción de la acción penal, si se acredita que en el transcurso de doce meses contados a partir de la orden de suspensión del procedimiento, el inculpado o procesado no realizó conducta que constituya el delito previsto en este Capítulo (violencia familiar), que cumplió con sus obligaciones alimentarias y que se sujetó al tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médica-psicológica, en caso contrario, se continuará el procedimiento. La orden de suspensión del procedimiento sólo podrá otorgarse si el inculpado o procesado no es reincidente por el delito previsto en este capítulo"*. En ese orden de ideas, la suspensión del procedimiento fue dictada por la Agencia de Ministerio Público Investigador Número Dos, Especializada en Violencia Familiar y Atención a Menores el 02 dos de julio del 2004 dos mil cuatro y la resolución de la Juez Natural en fecha 30 treinta de marzo del 2005 dos mil cinco, lo cual prueba que el procedimiento no había concluido, en virtud de que no habían transcurrido los doce meses aludidos por el precepto legal en comento para que operara el sobreseimiento por extinción de la acción penal que dejara sin efectos la averiguación previa iniciada en contra del demandado. A mayor abundamiento, para quien ahora juzga se crea la convicción de que las conductas imputadas al demandado se actualizaron como tales al estar dispuesto a convenir sobre las mismas. Consecuentemente, por todo lo anterior, contrario a lo expuesto por la Autoridad de Primera Instancia, no se actualiza la prohibición para pedir el divorcio cuando ha

mediado perdón expreso o tácito, contemplada en el numeral 279 del Código Civil en vigor. Finalmente, resulta necesario asentar que las acciones ejercitadas en materia penal y civil son autónomas e independientes, de manera que, el desistimiento de la acción realizada en un proceso criminal, solo extingue dicha relación jurídico-procesal, dejando sin efecto legal alguno su propósito inicial, circunstancia que no incide en la esfera de derechos del gobernado para que los haga valer mediante la vía civil, es decir, puede suceder como en el caso se interpreta que la actora no quería que se castigara con la cárcel a su marido, sin embargo, ello no constituye un perdón de la acción civil de divorcio lo que queda demostrado con la condición de establecer en el convenio celebrado ante la Agencia del Ministerio Público Investigador Número dos, Especializada en Violencia Familiar y Atención a Menores, que el demandado se comprometiera a no molestarla física ni verbalmente, de obra o de palabra y se abstuviera de presentarse al domicilio conyugal, lo que es muestra clara de su deseo de no seguir cohabitando con su marido dada las vejaciones, humillaciones e insultos recibidos por parte de este, conducta que la orillaron a prescindir de la presencia física de su cónyuge en el domicilio conyugal y mas tarde, mediante la demanda en estudio, a solicitar la disolución del vínculo matrimonial a través de la acción de divorcio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 268/2005 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 31 de agosto del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

80. DIVORCIO, INJURIAS GRAVES. CALIFICACIÓN DE SU GRAVEDAD, EL HECHO DE ENCONTRARSE SEPARADOS LOS CÓNYUGES NO LES AUTORIZA FALTARSE EL RESPETO. Considerando que el artículo 267 en su fracción XI del Código Civil, contempla como causal de divorcio las injurias graves proferidas por un cónyuge respecto del otro, misma que no señala como exigencia para su procedencia que los esposos vivan o cohabiten juntos, para cuando se den los hechos imputados como injuriosos, debe colegirse el que las partes se encontraran separadas al momento en que se dieron las injurias, de ninguna manera puede ser visto como justificante para que se den esa clase de actos. En efecto, habiendo reconocido ambas partes cónyuges entre sí, vivir separados, lo cual incluso fue corroborado con los testigos del actor y la ateste que acudió a juicio por la demandada, resulta claro que la relación marital entre ellos, en su calidad de marido y mujer, se encontraba en un momento difícil y frágil, lo que se deduce del hecho de encontrarse separados, por lo que a fin de que pudiera reanudarse su vida en común, era imprescindible el buen trato que debiera darse entre ellos, lo cual no fue así precisamente ante la ofensa proferida por la demandada a su marido enfrente de su madre y de su hermano, lo cual sin lugar a dudas ocasiona un despreció a éste frente sus parientes más cercanos y por ende frente a la sociedad al haber sido expresada en la vía pública, resultando por demás grave la injuria en cuestión, ya que pone de manifiesto la imposibilidad de reanudar la vida marital de los cónyuges contendientes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 351/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio

Necesario. Sentencia emitida el 30 de septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

81. DONACIONES ANTENUPCIALES, PROCEDE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE DECLARARSE INEXISTENTE EL MATRIMONIO POR EL CUAL SE OTORGARON EN UN PRINCIPIO. De una correcta intelección al contenido del artículo 230 del Código Civil del Estado, para la procedencia de la devolución de las donaciones antenupciales, basta el hecho de no celebrarse el matrimonio, por lo que al encontrarnos frente a un matrimonio inexistente, tal acto jurídico no pudo surtir efectos legales para las partes, debiendo concebirse tal inexistencia como la nada jurídica y, por ende, como no celebrado el acto, circunstancia la cual es suficiente para que opere la devolución de las donaciones antenupciales, pues el citado numeral, no señala como requisito para que proceda la devolución de éstas la necesidad de justificar la culpabilidad, la buena o la mala fe de los contrayentes, sino simplemente que el matrimonio no haya tenido verificativo independientemente de la causa que lo motive, lo que en la especie acontece al ser juzgado inexistente el matrimonio habido entre las partes. Así es, al ser definido en la doctrina el acto jurídico inexistente, como la nada, un hecho que no puede ni debe surtir efectos jurídicos, precisamente por carecer de un elemento esencial, que le era indispensable para nacer a la vida de derecho; debe concluirse que el acto jurídico del matrimonio al ser inexistente, no se materializó precisamente por adolecer de un elemento esencial para su formación, debiendo considerársele como la nada jurídica y, por tanto, el análisis a efectuarse sobre las donaciones cuya devolución se pretende, habrá de hacerse partiendo de la premisa como nunca celebrado el matrimonio del cual eran objeto las mismas, conforme con el artículo 2118 del Código Civil, pues de otra forma resultaría incongruente juzgar inexistente el matrimonio, y a su vez estimar que éste deba continuar surtiendo efectos jurídicos entre las partes, en cuanto a las donaciones antenupciales se refiere. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 310/2003. Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad e Inexistencia de Matrimonio. Sentencia emitida el 08 de septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

82. EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PERFECCIONAMIENTO SE REQUIERE QUE EL INTERESADO REFIERA LAS FECHAS DE SU INSERCIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL AL SER UN HECHO NOTORIO. Tenemos que adversa a la consideración emitida por el resolutor natural en la sentencia debatida, el demandado fue legalmente llamado a juicio, toda vez que, como se ha dejado asentado, se realizaron en debida forma las diversas publicaciones del edicto ordenado por el A quo, cumpliéndose así cabalmente con lo estatuido en los artículos 69 primer párrafo y 73 del Código de Procedimientos Civiles, constando en autos la totalidad de las publicaciones a que hace alusión el referido numeral 73, a excepción de la que por un error del personal del Juzgado de origen no fue glosada adecuadamente al expediente, no siendo

por ende una circunstancia que pueda atribuírsele a la demandante, pues ésta cumplió con la carga procesal que a ella competía, es decir, de haber realizado las gestiones necesarias para que se llevara a cabo la publicación de los edictos a fin de emplazar al demandado, además de cubrir las expensas correspondientes para su debida publicación y, exhibir a los autos la totalidad de las constancias relativas a las publicaciones efectuadas. Ello es así, ya que ante la desaparición de la constancia correspondiente al edicto que refiere el Juez cognoscitivo, antes de emitir su fallo en el sentido en que lo hizo, debió prevenir a la accionante para que exhibiera la constancia que demostrara de manera fehaciente haber efectuado los trámites correspondientes para la publicación de los edictos mencionados, estimándose por esta Alzada que, tal situación no es motivo para decretar la nulidad de lo actuado a partir del proveído que ordenó el emplazamiento de esa manera, ante la falta de una constancia de publicación del edicto para que el emplazamiento sea correcto, al no existir disposición alguna en la legislación procesal civil que permita sancionar de esa forma al promovente por dicha omisión; a mayor abundamiento, debe decirse que al constar una inserción en algún ejemplar del Periódico Oficial del Estado, ello es considerado como un hecho notorio que esta al alcance de los juzgadores, por ser tal órgano informativo una herramienta para el buen desempeño de su función jurisdiccional, máxime que la actora le indicó al Juez Natural las fechas en que el edicto ordenado por éste, había salido publicado en ese medio de comunicación, según se advierte de los autos del juicio principal, lo que restaba era verificar, por parte del órgano de justicia, si efectivamente se daba el supuesto planteado por el informante, obviamente realizando una revisión a los ejemplares mencionados por la promovente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación N° 385/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia 15 de Diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

83. MATRIMONIO, ES INEXISTENTE EL CELEBRADO SIN LA PRESENCIA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, POR CONSTITUIR ELLO UNA SOLEMNIDAD PARA SU CONFORMACIÓN. Atendiendo al contenido normativo del artículo 235 de la legislación civil sustantiva, acorde al cual son causas de nulidad de un matrimonio la contravención a los artículos 97, 98, 100, 102 y 103, del propio ordenamiento jurídico, nos encontramos frente a un matrimonio inexistente y no nulo, cuando el mismo se lleva a cabo ante la ausencia de la persona encargada de dar fe de su celebración, esto es, del Oficial del Registro Civil, ello así en consideración de el dispositivo legal aludido en primer término no contempla como causa de nulidad la infracción al contenido del artículo 99 del Código Civil. Artículo este último, mismo que establece propiamente las solemnidades que han de observarse y cumplirse por los participantes del acto del matrimonio, en el propio verificativo del acto, es decir, prescribe la serie de acciones solemnísimas que deben de colmarse tanto por el Oficial del Registro Civil como por los contrayentes, para agotar legalmente la celebración del matrimonio. Mismos que no son simples requisitos previos o posteriores al matrimonio, sino son solemnidades que dan vida jurídica al matrimonio, sin las cuales éste no tiene

existencia alguna; siendo crucial apuntar que la contravención al artículo 99 del Código Civil, como es que el Oficial del Registro Civil no presida el acto nupcial, en consideración a los dispuesto por el artículo 235, fracción III, no concibe la nulidad como sanción a tal irregularidad, pues este último dispositivo no hace mención de que la inobservancia de aquel numeral trae consigo la nulificación del acto, que presupone, aunque imperfecta, su existencia. En efecto si el enlace matrimonial entre las partes contendientes, no fue presidido por funcionario dotado de facultades para ello, cabe concluir que la voluntad de los contrayentes, no se otorgó con las solemnidades legales y, así vinculara a los interesados jurídica y legalmente; tal como lo resolvió la A quo; de conformidad con los artículos 99, 146, 2118 del Código Civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 310/2003. Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad e Inexistencia de Matrimonio. Sentencia emitida el 08 de septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

84. NOTIFICACIONES PERSONALES. SURTEN SUS EFECTOS EL MISMO DÍA. Si la quejosa compareció en forma unilateral a fin de que se le tuviera por notificada del auto que desechó su demanda, su actuar equivale a una notificación personal, la cual produce todos los efectos jurídicos desde la fecha misma en que se recibió el ocurso mediante el cual se notificó de la resolución en cuestión, toda vez que se hizo sabedora del contenido vertido en dicho proveído, sin tener que esperar una actuación de la autoridad jurisdiccional, cumpliéndose así, con el principio de instancia de parte que tiene preponderancia en la materia civil, conforme al cual el impulso y prosecución del procedimiento queda reservado a las partes contendientes. Así las cosas, nace la necesidad de especificar en que momento surtió efectos la notificación realizada bajo dichos términos, pues si bien el ordenamiento procesal civil dispone a partir de que momento empiezan a correr los términos judiciales, es omiso en establecer en forma expresa tanto en que momento queda legalmente hecha una notificación como a partir de cuando surten efectos las notificaciones personales, pues como se dijo antes, la comparecencia efectuada por la recurrente, al presentar el escrito dándose por enterada de la aludida resolución, se puede equiparar a una notificación de carácter personal; por lo que, para determinar lo anterior, debemos analizar armónicamente lo establecido en los artículos 56, 57, 71, 75 y 76 del Código de Procedimientos Civiles. Conforme a la vinculación lógica jurídica de dichos numerales, se puede establecer que, si el ordenamiento procesal en comento no dispone en forma expresa el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones personales, se puede establecer con claridad que aquellas surten sus efectos plenos el mismo día en que se realizan, puesto que cuando son varias las partes a notificar respecto a un mismo acuerdo que contiene un término común, éste corre al día siguiente de haberse notificado a la última de las partes, más aún, ante la omisión del legislador, debe estarse a la manera en que el interesado tiene conocimiento de la resolución notificada, ya que no puede darse a ese acto, un efecto que la ley no establece; luego entonces, ello significa que

ese tipo de notificaciones personales debe tenerse por legalmente hecha y surtir sus efectos el mismo día en que se realizó, que es el momento cuando tuvo pleno conocimiento de la resolución correspondiente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación Nº 330/05. Divorcio por Mutuo Consentimiento. Sentencia: 7 de Septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

85. PATRIA POTESTAD, NO PROCEDE DECRETAR SU PERDIDA, POR EL SOLO INCUMPLIMIENTO EN EL DEBER ALIMENTARIO. Atendiendo a que la hipótesis legislativa contenida en la fracción III del artículo 444 del Código Civil, señala que la patria potestad se pierde cuando por las costumbres depravadas, malos tratos, explotación o abandono de los deberes de quien la ejerza, pudiera comprometerse la salud, seguridad, dignidad, integridad o moralidad de las menores, resulta claro que el solo incumplimiento con la obligación de dar alimentos a sus hijos, es por sí solo insuficiente para condenar a la perdida pretendida, al ser necesario para ello acreditar que con motivo de tal incumplimiento se pudo ocasionar un riesgo en la salud física, mental o moral de los menores, lo que no ocurre con los elementos de prueba aportados al sumario, ya que la sola infracción a sus obligaciones patrimoniales, por sí sola, no hace de ninguna manera presumible la posibilidad de comprometer la salud física, mental, moral e integridad y dignidad de ellos, sino en todo caso tal peligro debe demostrarse en base a las circunstancias del caso. Lo anterior ya que aun cuando al demandado correspondía atender a las necesidades de sus hijos, si no lo esta haciendo deberá velarse porque lo haga, mas no privarle de la patria potestad que ejerce con relación a sus hijos; puesto que decretar tal condena importaría privar no a él sino a los menores involucrados de la oportunidad de ver y convivir e identificarse con su figura paterna, misma que al no observarse implique riesgo grave alguno, por no demostrarse lo contrario, provocaría un resultado más perjudicial que el ocasionado por el incumplimiento en sus obligaciones como padre, en detrimento del desarrollo emocional de los niños, al impedírsele como se dijo identificarse con su padre, derecho igualmente reconocido en la Convención Sobre los Derechos del Niño antes aludida, ello con el principal objetivo de que pueda existir la posibilidad de estrechar esos lazos paterno-filiales que deben existir entre ellos, pues por reprobable que sea el incumplimiento en sus obligaciones, tal circunstancia por sí sola, por deplorable y lamentable que resulte ser en la figura de cualquier padre, no puede conducirnos a decretar la perdida de la patria potestad en perjuicio de las relaciones familiares, ya que al no representar tal desacato una posibilidad de causar un riesgo grave latente e inminente, debe si a la fecha no se han dado por que el cumplimiento de las obligaciones afectivas no patrimoniales puedan complementarse, es decir, dar la oportunidad de que los menores hijos de la pareja convivan con su padre y éste con ellos, para que sus relaciones puedan desarrollarse en un campo lo más cercano posible a como si sus padres estuvieran juntos, atendiendo al interés superior de los menores involucrados, de conformidad con los artículos 444 fracción III del Código Civil, 223, 355, 356, 386, 402, 403 y 405 de la legislación civil adjetiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca

de Apelación en Definitiva 467/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio necesario. Sentencia emitida el 16 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

86. PATRIA POTESTAD, ADEMÁS DE DECRETAR SU PÉRDIDA, PUEDE IGUALMENTE RESTRINGIRSE E INCLUSO SUSPENDERSE SU EJERCICIO, ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Considerando que conforme al artículo 283 del Código Civil para el Estado, en la sentencia que decrete el divorcio la autoridad judicial tiene el deber de determinar los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad y custodia que conservara cada uno de los progenitores del matrimonio disuelto, cuando hubiere hijos. Habiéndose determinado que ambos padres habrán de continuar en ejercicio de ese derecho, esta Sala de Apelaciones, considera que el derecho de convivencia que le asiste al padre demandado, debe limitarse y por ende restringirse precisamente a que cumpla con sus obligaciones patrimoniales, relativas a dar alimentos, pues en el particular podemos observar que al habérsele demandado un Juicio Sumario de Alimentos para hacer efectiva tal obligación, sin haberse podido materializar, importa estimar una conducta que no debe soslayarse, sino por el contrario atendiendo a la misma, debe procurarse por la Autoridad Judicial velar por su exacto cumplimiento, por lo que así se considera que el derecho a ver y convivir con sus hijos debe estar sujeto al cumplimiento de dicha obligación, mismo que habrá de efectuar en los términos como se establezca en el juicio sumario de alimentos que la accionante tiene promovido en su contra, y que en todo caso solamente una vez acreditado que cumple con tal deber alimentista, es que podrá y deberá ver y convivir con sus menores hijos, determinación la cual se adopta por esta autoridad atendiendo a las circunstancias del caso, bajo las cuales se deduce que efectivamente el padre de los menores demandado no cumple con dicha obligación, no obstante habérsele exigido judicialmente la misma, pero tal incumplimiento al no generar un riesgo para los niños, es insuficiente para privarle de la patria potestad, pero no así para limitar y restringir su ejercicio, pues es únicamente velando por el bienestar superior de sus niños, por lo cual este tribunal tiene a bien decretar la presente medida, con el fin de procurar atender a una paternidad responsable, que sirva de base y sustento para las relaciones interfamiliares entre padre e hijos, tomando en cuenta que la patria potestad, puede también limitarse imponiendo restricciones al ejercicio de los derechos inmanentes a ella, como acontece en el presente, con fundamento en los artículos 415 bis y 447 bis del Código Civil. Derecho de convivencia, el cual al quedar condicionado en los términos apuntados, deberá hacerse efectivo como en derecho corresponda, atendiéndose preferentemente en caso de ser posible al común acuerdo de los padres contendientes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 467/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio necesario. Sentencia emitida el 16 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

87. PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA. LA ACCIÓN DE DIVORCIO SOPORTADA EN LA SEPARACIÓN DEL HOGAR CONYUGAL POR MÁS DE SEIS MESES, NO ENGENDRA COMO CONSECUENCIA DIRECTA LA. Esta autoridad jerárquica comparte la determinación adoptada por el A quo, de no condenar a la parte demandada a la privación del derecho a ejercer la patria potestad de su pequeña hija; ello es así, ya que la procedencia de la acción de divorcio soportada en la causal descrita en la fracción VIII del artículo 267 del Código Civil, consistente en la separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada, como lo es la que ejercitó el doliente, no engendra como consecuencia directa la pérdida de dicho derecho, ni mucho menos aún, puede ser considerada una sanción ineludible para el cónyuge culpable, toda vez que ambas acciones principales son independientes una de otra y, por consiguiente, deben probarse en forma autónoma, a mayor abundamiento, tenemos que el diverso numeral 444 de la codificación sustantiva en consulta, prevé clara y específicamente los supuestos por los cuales se puede perder el derecho a ejercer la patria potestad, observándose en ese dispositivo, que en ninguna de sus fracciones se establece que tal perdida dependerá de la procedencia de una causal de divorcio. En cualquier caso, la pérdida de dicho derecho, debe ser determinada por el juzgador inferior con las amplias facultades discrecionales que se le otorgan en esta materia, y por supuesto, atendiendo siempre al interés de los menores sujetos a ese régimen jurídico. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación N° 0315/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia: 27 de Septiembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

88. PATRIMONIO DE FAMILIA, EXTINCIÓN DEL. EL PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA SU DECLARACIÓN. Al estarse solicitando la cancelación de un patrimonio familiar dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, tal planteamiento no puede analizarse en tal vía, toda vez que con esa petición, pretende declararse la extinción de un derecho previamente constituido en favor de determinadas personas, cuando la jurisdicción voluntaria tiene como fin declarar la existencia de hechos o circunstancias. Por lo que entendida así la jurisdicción voluntaria, tenemos que no constituye el medio para sustentar una acción de condena respecto de la cual pueden oponerse excepciones por los beneficiarios del derecho que pretende extinguirse, como lo es la que se pretende ejercitar en el presente, de ahí, que si con tal promoción, pretende promoverse la extinción de un derecho en contra de determinadas personas, no se surten los supuestos necesarios para dar curso a la petición de diligencias de jurisdicción voluntaria formulada, al no ser dable que en éstas se presente cuestión litigiosa entre partes determinadas, conforme con el artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 267/2005. Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. Sentencia emitida el 11 de agosto de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

89. PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO DE FORMA EXPRESA NO ES UN REQUISITO PARA SU APORTACIÓN CUANDO SE ADVIERTE QUE FUERON ACOMPAÑADAS A LA DEMANDA INICIAL. Al advertirse de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda que, el accionante aportó determinadas pruebas con el fin de justificar los actos base de su acción (las cuales fueron anexadas a la propia demanda, según se lee del acuse de recibo de esta por parte de la Secretaría del Juzgado Primario), es falso que el demandante se abstuviera de ofertar las probanzas de su intención en la etapa establecida para ello por el numeral 561 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que no constituye requisito sine qua non para la prosperidad de las probanzas, que su aportación sea de forma particular ya que con el sólo hecho de presentar los documentos anexados a la demanda incidental, resulta explícita la voluntad del actor para que sean tomados en cuenta por vía de prueba, lo que hace innecesaria la formalidad de que se insista sobre esa voluntad en el término probatorio, pues la ley es clara al establecer que a la demanda deben acompañarse los documentos base de la acción, según se advierte de lo dispuesto por el artículo 614 fracción III del Código Adjetivo de la Materia (recordemos que las demandas incidentales deben presentarse con las formalidades establecidas en los numerales 612 y 614 del citado ordenamiento legal), así al ser un todo legal la demanda y los documentos acompañados a la misma, la falta de expresión del ofrecimiento de estos últimos no basta para decretar que el litigante ha perdido tal derecho, ya que su intención es incuestionable al presentar juntamente a la demanda los documentos en que apoyo la acción ejercitada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo 335/2005 Incidente sobre Reducción de Pensión Alimenticia. Sentencia emitida en fecha 29 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

90. TESTAMENTO PRIVADO. PARA QUE TENGA VALIDEZ Y SURTA EFECTOS LEGALES REQUIERE QUE SE CUMPLAN LAS EXIGENCIAS DEL CÓDIGO CIVIL. En efecto, analizando el documento privado exhibido por el denunciante como base del Juicio Sucesorio Testamentario que intenta promover a bienes de su finado padre, se tiene que el mismo, por el momento, no es suficiente para denunciar el referido procedimiento sucesorio, ya que a la fecha de presentación de la solicitud inicial de denuncia, no se han colmado las exigencias previstas en el Capítulo V Del Testamento Privado, contenido en el Título Tercero del Libro Tercero del Código Civil de la Entidad, para llegar a ser considerado como un verdadero testamento privado y pueda así surtir sus efectos legales consiguientes, puesto que, según se advierte de las constancias procesales que fueron remitidas por el Juez natural, el instrumento allegado como tal, no ha sido declarado válido por una autoridad jurisdiccional competente, acorde a lo establecido en los artículos 1468, 1469, 1470, 1471 y 1472 del citado ordenamiento civil, previo el desahogo del procedimiento judicial señalado en los diversos numerales 893, 894 y 895 del Código de Procedimientos Civiles; ello es así, ya que los elementos de validez del testamento privado se encuentran contemplados en los invocados numerales 1468, 1469 y 1472 de la codificación civil en estudio, los cuales disponen que el testamento

privado necesita para su validez la declaración judicial de estar arreglado a derecho y la declaración del contenido del dicho de los testigos idóneos que autorizaron el acto, como formal testamento de la persona de quien se trate, ordenando protocolizar el escrito en el que conste y extender los testimonios respectivos a quienes con derecho lo soliciten. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación Nº 360/04. Denuncia sobre Juicio Testamentario. Sentencia: 22 de Julio de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

91. SEPARACIÓN PROVISIONAL DE CÓNYUGES. ES FALSO QUE EXISTA VOLUNTAD DE UNO DE LOS CÓNYUGES DE SEPARARSE DEL OTRO, CUANDO ACCEDE AL MANDATO JUDICIAL DE SALIR DEL DOMICILIO CONYUGAL A VIRTUD DE UNA SEPARACIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, Y POR ELLO NO HUBO NECESIDAD DE CONSTITUIRSE EN EL HOGAR CONYUGAL PARA DECRETARLA. Es infundada la manifestación de la quejosa de que el señor ---, no tuvo inconveniente en salir del domicilio conyugal, pues la partida de éste último, obedeció a consecuencia de la interposición de un acto prejudicial, ante una Autoridad Judicial, donde la finalidad perseguida lo fue la separación provisional de consortes, y si no fue necesario constituirse al domicilio conyugal para que se materializará la medida, es porque el demandado manifestó su intención de salirse de manera voluntaria de dicho lugar, pues la única finalidad que se infiere de la voluntad de la parte reo es la evitar que se constituyera la Autoridad a la ubicación del domicilio conyugal a decretar la separación solicitada, ya que como es sabido, desde el punto de vista del derecho, la voluntad se define como “la expresión del querer de un sujeto o varios, dirigido a la realización de un determinado acto jurídico.” (página 498 del Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa) y en el caso concreto, tenemos que fue la señora ---- de manera unilateral, quien ejercitó su derecho de acción, solicitando su Separación Provisional de Cónyuges, motivando la función jurisdiccional de la Autoridad de Primera Instancia, y el señor , acató la determinación judicial, sin que con ello se deba colegir su consentimiento para que se materializara tal acto jurídico, motivos los anteriores que son suficientes para considerar infundado el agravio que nos ocupa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en artículo 440/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 8 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. María Susana Alejandro Ortega.

92. SOCIEDAD CONYUGAL. ES INCORRECTO CONSIDERAR QUE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL PERTENECEN PRECISAMENTE A ESA SOCIEDAD Y NO A LOS DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. Cabe resaltar, que de manera equivocada, la apelante considera que lo perteneciente a la sociedad conyugal, es precisamente de esa sociedad y no bienes propios de la cónyuge supérstite del de cujus, pues en primer término, se debe de tomar en consideración que la sociedad

conyugal es un régimen matrimonial que se caracteriza por constituir una masa indivisa de bienes entre los esposos y que provienen, en principio, de la contribución de cada uno de ellos, de la que resulta evidente su intención de que los bienes permanezcan indivisos, con el objeto de que se realice y se logre el fin común perseguido, satisfacer las necesidades de la familia. De las transcripciones anteriores, se puede colegir las formas en que se puede terminar la sociedad conyugal, siendo también de explorado derecho, que la disolución de la sociedad conyugal surte efectos entre otros situaciones, en caso de muerte de uno de los consortes, tal como lo hace ver el Doctor en Derecho Sergio T. Martínez Arrieta en su libro La Sociedad Conyugal, donde dice: "En el caso de fallecimiento de uno de los esposos o de ambos, la terminación de la sociedad conyugal se da desde ese preciso evento. Nuestra ley civil indica que "Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte". Inmediatamente, agrega:"La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. De ello se concluye que siendo la calidad de socio en la comunidad conyugal intransferible, dicho derecho se extingue con la muerte del titular; por lo que al no haber sucesor de ello, la comunidad termina erga omnes, desde el momento mismos de la muerte de alguno de sus miembros." Es decir, de lo anterior, se desprende, que al momento de la muerte de uno de los consortes, deja de existir la sociedad conyugal, pues precisamente la objeto de ella, parte de la vida en común de los consortes, y al disolverse, el cónyuge que sobrevive adquiere la calidad de copropietario del 50%.-cincuenta por ciento de los bienes que hayan formado con motivo de la duración de su matrimonio, salvo pacto en contrario en sus respectivas capitulaciones, que en el caso que nos ocupa, no se da, pues no existen tales, razones que son suficientes y bastantes para estimar que la señora --, es propietaria del 50%-cincuenta por ciento del acervo hereditario del señor --, y por ende al superar ello la porción que a cada hijo de él le corresponde por sucesión legítima, no hereda en la mencionada sucesión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en artículo 374/2005. Juicio Sucesorio de Intestado. Sentencia emitida el 15 de diciembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. María Susana Alejandro Ortega.

93. SOCIEDAD CONYUGAL. SU NATURALEZA JURÍDICA. La figura jurídica de sociedad conyugal se traduce en una institución *"sui generis"*, en cuanto a su constitución y forma, puesto que la misma la constituyen una universalidad de bienes, frutos y productos que aportan los consortes en un beneficio y esfuerzo común, y en cuanto a su forma, se asemeja tanto a una sociedad civil, como a una copropiedad. En efecto, la sociedad conyugal se conforma con la aportación que cada consorte realiza con el propósito de alcanzar un fin común (la satisfacción de las necesidades de la familia), y una vez constituida no puede modificarse, sino por el consentimiento de sus miembros, elementos esenciales de toda sociedad civil. Asimismo, la sociedad conyugal se asemeja a una copropiedad, puesto que el dominio de los bienes que la conforman radica en ambos consortes, y, por lo regular, los productos y beneficios que dichos bienes produzcan deben repartirse por mitad, es decir, en partes iguales. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

QUINTA SALA. Toca de Apelación 369/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre División de Cosa Común. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

94. SOCIEDAD CONYUGAL. CASOS EN QUE SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD GENERAL O A LA COPROPIEDAD. De una interpretación armónica de los dispuesto por los artículos 183, 184, 187, 188, 194, 197, 203 y 204 del Código Civil del Estado de Nuevo León, se puede colegir la forma en que se debe regular la sociedad conyugal, estableciéndose que ésta debe regirse, primeramente, por lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales que en su caso la constituyan, y en el supuesto que éstas no existan, por las disposiciones generales que sobre el particular contemple la propia codificación civil en el título respectivo, y en su defecto por las disposiciones que al respecto establece el contrato de sociedad. Ahora bien, debe precisarse que las semejanzas que guarda la sociedad conyugal con la sociedad civil en general y con la copropiedad no implica necesariamente que la sociedad conyugal esté regida estrictamente por todas y cada una de las disposiciones legales que rigen a la sociedad civil en general, o bien por aquellas que regulan a la copropiedad, ya que algunas de ellas son incompatibles con la estructura y naturaleza de dicha figura jurídica. Así por ejemplo, la sociedad conyugal se distingue de la sociedad civil, en que: *a) Carece de personalidad jurídica propia; b) Carece de nombre o denominación social; c) Carece de patrimonio propio, pues éste reside en los cónyuges; d) En ella, únicamente pueden participar los consortes, en la sociedad civil pueden ser dos socios o más; e) No necesariamente debe haber una aportación inicial para la conformación de la sociedad conyugal, en la sociedad civil sí; f) La sociedad conyugal termina con la muerte de uno de los cónyuges, la sociedad civil no termina necesariamente con la muerte de uno de los socios.* Asimismo, la sociedad conyugal se distingue de la copropiedad, en virtud de que: *a) Primeramente, existe distinción en cuanto a su constitución. La sociedad conyugal surge por la celebración del matrimonio o durante su vigencia, siendo necesario dicho vínculo matrimonial, mientras que la copropiedad puede surgir por voluntad de las partes o por la ley, en cualquier momento; b) Existe distinción en cuanto al número y calidad de los sujetos que las conforman. En la primera únicamente puede haber dos titulares, quienes forzosamente tienen que ser esposos, y en la copropiedad pueden ser dos o más, pudiendo ser parientes o no; c) También existe distinción en cuanto a la unidad física del objeto. La sociedad conyugal esta constituida con una universalidad de bienes aportados por los cónyuges, por lo que existe pluralidad de objeto y derechos que la conforman, mientras que en la copropiedad el objeto es unitario y definido. Es decir, en la sociedad conyugal, los bienes que la integran forman una masa común; d) Ambas figuras jurídicas también difieren en lo que a la dinámica económica se refiere. La sociedad conyugal puede alterarse constantemente, atento al incremento de los bienes y productos que la conforman, entre tanto que en la copropiedad, dicha variación no se presenta con la misma intensidad, pues ésta únicamente depende de la depreciación o plusvalía del bien común; e) En la sociedad conyugal, la masa común de bienes permanece indivisa, en*

virtud de que los mismos se encuentran sujetos a la finalidad de la comunidad que conforman y únicamente puede alterarse por el consentimiento de ambos consortes, o bien por las causas legalmente establecidas para su disolución, tan es así que el cónyuge copartícipe no puede transmitir en forma alguna su participación en ella, mientras que, en la copropiedad, el comunero no puede ser obligado a mantener la indivisión. En tal virtud, atento a todo lo anterior, puede válidamente concluirse en que la sociedad conyugal es un régimen matrimonial que se caracteriza por constituir una masa indivisa de bienes entre los esposos y que provienen, en principio, de la contribución de cada uno de ellos, de la que resulta evidente su intención de que los bienes permanezcan indivisos, con el objeto de que se realice y se logre el fin común perseguido, satisfacer las necesidades de la familia, por lo que su regulación supletoria con las disposiciones que rigen a la sociedad civil en general o a la copropiedad, debe realizarse atendiendo a que no se contrapongan a su naturaleza jurídica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 369/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre División de Cosa Común. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

95. SOCIEDAD CONYUGAL. BIEN PERTENECIENTE A LA. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN. Si bien el artículo 194 del Código civil del Estado de Nuevo León establece que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, no debe entenderse que sean aplicables al régimen de mérito, todas y cada una de las disposiciones que rigen a la copropiedad, sino solamente aquellas que no vayan en contra de la naturaleza del referido régimen, y siendo que dicha sociedad nace por el matrimonio, debe atenderse siempre al fin que está afecto dicho patrimonio común, es decir, la satisfacción de las necesidades de la familia y fortalecer el núcleo familiar. Así las cosas, resulta inconcuso que los bienes afectos a la sociedad, forman una universalidad que debe mantenerse en la indivisión, mientras no sea disuelta, o que por acuerdo de ambos consortes se enajenen, por lo que cualquier modificación que se pretenda en la misma, debe hacerse de común consenso de los cónyuges, de conformidad con lo establecido por los artículos 187 y 197 del Código Civil del Estado, o bien, que le asista una causa justificada, y prevista en la ley, a uno de los cónyuges para no seguir en la indivisión y disolver la sociedad, según se colige del contenido del diverso numeral 188 del cuerpo de leyes en comento. De allí que, de una recta interpretación del numeral 194 del Código Civil, se pueda válidamente concluir que los consortes tienen derecho por igual sobre los bienes que conforman la sociedad conyugal, de manera que como partícipes en la integración de dicha sociedad, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes deben ser por igual, y que sean aplicables, cuando así se amerite, y no se contraríe a la naturaleza de la misma, las disposiciones legales sobre copropiedad, por ejemplo, para resolver las cuestiones que en su caso surjan sobre el particular, al momento de hacer la partición de frutos, productos, o utilidades que deriven de los bienes que conforman la sociedad, o bien, cuando se dividan los bienes al disolverse la misma, apareciendo que del mismo numeral 194 del Código Civil se advierte

una limitante entre los consortes para disponer libremente de los bienes que conforman la sociedad conyugal, ya que refiere que el dominio común existe, mientras subsista la sociedad, de lo que se infiere que, para que los bienes ya no se encuentren afectados por la mancomunidad derivada de la sociedad conyugal, ésta debe disolverse. En efecto, no debe interpretarse aisladamente el contenido del artículo 194 en comento, sino que debe atenderse además lo dispuesto por los diversos numerales 183, 188 y 189, preceptos legales que reflejan que la sociedad conyugal, en cuanto a su forma, se equipara a un ente distinto a los consortes, similar a una persona moral, pero sin nombre, personalidad jurídica, ni patrimonio propio, por lo que el hecho de que el dominio de los bienes resida en ambos cónyuges, ello no implica que los mismos puedan excluirse de la sociedad a la libre voluntad de uno de los consortes, sino que es necesario que se sigan las formalidades legales previamente establecidas, por lo que resulta improcedente la acción de división deducida del artículo 936 del Código Civil, pues, de estimarse lo contrario, se desatendería la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal, máxime que el propio numeral de referencia aclara que debe prevalecer la indivisión en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la Ley, el dominio es indivisible; por lo que tomando en consideración que la sociedad conyugal es una comunidad formada por una universalidad de bienes, frutos, productos y gananciales, éstos deben mantenerse indivisos mientras subsista la sociedad, en lo que respecta particularmente a los consortes, por haber convenido, al momento de celebrar su matrimonio, la inclusión de los bienes a ese régimen patrimonial, indivisión que persiste mientras no se pongan de acuerdo en su exclusión, o bien la sociedad no sea disuelta, ya que, al no existir capitulaciones matrimoniales que rijan la sociedad, al adquirirse un bien durante la vigencia del matrimonio, se entiende que los cónyuges consienten en que éste forme parte del caudal común, por lo que con posterioridad no puede excluirse por la mera voluntad de alguno de ellos, sino que es necesario que se sigan las formalidades legalmente preestablecidas para su exclusión, conclusión a la que también se arriba, en atención al contenido del artículo 1694 del Código Civil, resultando claro que cualquier modificación que se haga sobre el particular, afectaría el cumplimiento del objeto de la sociedad conyugal, por lo que ninguno de los cónyuges puede disponer y comprometer libremente la parte proporcional que le corresponda de la sociedad, puesto que ese sería un motivo para solicitar su disolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 del Código Civil del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 369/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre División de Cosa Común. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

96. SOCIEDAD CONYUGAL. LA INDIVISIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS POR LA MISMA SOLAMENTE SURTE EFECTOS ENTRE LOS CONSORTES Y NO FRENTE A LOS TERCEROS ACREEDORES DE UNO DE LOS CÓNYUGES. Si bien la naturaleza de la sociedad conyugal es precisamente constituir un patrimonio común *"sui generis"*, respecto de los bienes adquiridos por los esposos para que la

conformen, a fin de hacer frente a los fines del matrimonio, creando una comunidad de bienes y sufragar las necesidades económicas que se pudieren presentar y fortalecer el núcleo familiar, formando una universalidad que debe mantenerse en la indivisión, mientras que la sociedad no sea disuelta, o que por acuerdo de ambos consortes se enajenen, por lo que cualquier modificación que se pretenda en la misma, debe hacerse de común consenso de los cónyuges, de conformidad con lo establecido por los artículos 187 y 197 del Código Civil del Estado, o bien, que le asista una causa justificada, y prevista en la ley, a uno de los cónyuges para no seguir en la indivisión y disolver la sociedad, según se colige del contenido del diverso numeral 188 del cuerpo de leyes en comento, por lo que uno solo de los consortes no puede disponer libremente de la parte alícuota que le corresponde, no menos cierto resulta que los efectos de la sociedad conyugal no pueden afectar a terceros de buena fe, sino únicamente a los que la conforman, de allí por lo que un acreedor de cualquiera de los consortes pueda hacer efectiva la deuda, con la parte proporcional que le corresponda al cónyuge deudor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 369/2005. Juicio Ordinario Civil Sobre División de Cosa Común. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

97. SUCESIONES TESTAMENTARIAS, EXCLUSIÓN DE INMUEBLES DEL INVENTARIO DE BIENES DE LAS. ES PROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN DOCUMENTOS PÚBLICOS A PESAR DE SU FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. Cuando al Incidente sobre Oposición al Inventario, los documentos exhibidos por las incidentistas ahora apelantes, son de aquellos considerados por la Ley del Notariado del Estado, así como por el Código de Procedimientos Civiles del mismo, como instrumentos públicos, por lo que quedan incluidos dentro de los que señala el artículo 1610 del Código Civil, como aquellos que resultan suficientes para hacer constar la propiedad ajena de alguna cosa que se pretende incluir en el inventario correspondiente, a diferencia de los contratos privados a los que hace referencia la tesis invocada, en donde la voluntad de las partes no es sancionada o ratificada ante quien está dotado de fe pública, como lo es un Notario Público. En tal virtud, de los instrumentos de mérito se desprende que los de cujus reconocieron celebraron contrato de compra venta con sus hijas respecto de un inmueble. De manera que, al haberse ratificado la voluntad de los de cujus sobre la transmisión de la propiedad del inmueble cuestionado a través del contrato de compraventa ante Notario, lo elevaron a la categoría de documento público, surtiéndose así, el supuesto del artículo 1610 del Código Civil vigente en el Estado, por lo que, el Juez de los Autos, debió haber declarado procedente el incidente para el solo efecto de que el albacea no considerara el inmueble de referencia dentro de la masa hereditaria, toda vez que a la muerte de los autores de la misma, ya había salido de su patrimonio. Con respecto a la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que argumenta el juez como fundamento para negarles a dichos documentos los efectos a que hace referencia el citado artículo 1610 del Código Civil en vigor, resulta procedente el precisar que la

mencionada inscripción no constituye un elemento de validez en los contratos de compraventa, a virtud del cual opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque dicha inscripción en el Registro Público, según nuestra legislación, no significa traslación de dominio, sino que es puramente declarativa y no constitutiva de derechos sustantivos, es decir, la traslación de dominio se realiza por el acto jurídico celebrado entre las partes y la inscripción no es mas que la declaración de lo que se realizó en ese acto. Por otra parte, es bien conocido que el requisito de inscripción en el Registro Público de la Propiedad tiene como objeto, dotar al acto de publicidad, con el fin de que terceras personas puedan enterarse de la situación jurídica y económica de aquellos con quienes pretenden realizar actos de tráfico mercantil o contratos del orden común. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 384/2005 Juicio Sucesorio de Intestado del que se deriva el Incidente sobre Oposición al Inventario. Sentencia emitida en fecha 30 de noviembre del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

98. ACCIÓN DE ALIMENTOS. LA FALTA DE NECESITARLOS, CUANDO QUIEN LOS DEMANDA ES MAYOR DE EDAD Y NO SE ENCUENTRA CURSANDO UN GRADO DE ESTUDIOS ADECUADO A SU EDAD, NO CONTRADICE EL DERECHO A PERCIBIRLOS, POR LO QUE SU ESTUDIO NO VULNERA EL ARTÍCULO 730 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. La excepción del demandado, a la acción de alimentos intentada por su hija, atinente a que ella no justifica estar cursando estudio alguno y, por tanto, no acredita necesitar percibir una pensión alimentaria de su parte, de ningún modo importa una negación al derecho de la nombrada descendiente del deudor alimentista, sino únicamente estriba en refutar su estado de necesidad para percibir dicha pensión, pues en todo caso el derecho emana precisamente de su condición de hija, pero ello no significa que pueda hacerse efectivo en cualquier momento, sino siempre y cuando se haga presente un estado de necesidad ajeno a las condiciones y circunstancias personales de quien los solicita. En efecto, nuestra legislación otorga el derecho a los hijos de demandar alimentos a sus padres, en su artículo 303 del Código Civil, pero tal derecho en todo caso queda sujeto a que el motivo por el cual los hijos los demandan, sea producto de un estado de necesidad motivado de su propia minoría de edad, de un estado de incapacidad, o de encontrarse cursando estudios adecuados a su edad, es decir, en todo caso la necesidad de recibir el pago de una pensión alimentaria de parte de sus padres, se encuentra sujeto a que se de cualesquiera de tales circunstancias, pues de lo contrario podría darse el absurdo de que los progenitores quedaran obligados a dar alimentos a sus hijos de por vida, con lo cual se alentaría una vida dedicada al ocio, cuando sabido es que el objetivo fundamental de los alimentos, no es ese, sino procurar que quienes tengan la obligación de contribuir al crecimiento y desarrollo o sostenimiento de otro, cumplan con tal obligación, siempre y cuando el cumplimiento de ese deber, responda al estado de necesidad de quien lo demanda. Por lo anterior y toda vez que la necesidad constituye un elemento para la procedencia de la acción alimentaria, aún cuando para la misma se haya

establecido que se presume a favor de quien exige los alimentos, dicha presunción no es de pleno derecho -jure et de jure-, sino es de las consideradas juris tantum por lo cual admite prueba en contrario, de ahí que si en el presente la acreedora alimentista demandaba alimentos, por conducto de su apoderada, contando a la fecha de interposición de la demanda con 21-veintiún años de edad, es decir, siendo mayor de edad, es en virtud de su propia mayoría de edad, por lo cual se considera que es una persona, capaz de actuar y subsistir por sí misma, ya que para la subsistencia del estado de necesidad que imperó durante su minoría de edad constituía un requisito primordial justificará cursar algún estudio adecuado a su edad, de lo contrario, es decir, al no demostrar estuviera estudiando, conlleva a considerar que el estado de necesidad que pudiere sufrir dependería de una vida dedicada al ocio, objeto ajeno y contrario al derecho alimentista. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 152/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 28 de abril de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

99. ACTO PREJUDICIAL SOBRE SEPARACIÓN CAUTELAR DE PERSONAS Y DEPÓSITO DE MENORES. NO ES REQUISITO PARA SU ADMISIÓN QUE EL PRESUNTO AGRESOR Y AGREDIDO DEBAN VIVIR EN EL MISMO DOMICILIO. De los artículos 180 Bis I, 180 Bis II, 180 Bis III, 180 Bis IV, 180 Bis VI y 180 Bis IX del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se colige: la intención del legislador es otorgar seguridad y protección jurídica a las personas sujetas a violencia familiar, siendo ello el motivo por el cual se creó el Acto Prejudicial sobre Separación Cautelar de Personas y Depósito de Menores, pues surgió al mismo tiempo que se incorporó a la legislación sustantiva la figura de violencia familiar; su fin se constata del contenido del artículo 180 bis II del citado ordenamiento legal, siendo su objeto tutelar la seguridad de las personas sujetas a violencia familiar, de ahí que sea requisito para su admisión el acompañamiento de un dictamen técnico que ponga de manifiesto, aún de forma indiciaria, la presencia de conductas de violencia familiar de las que es objeto el promovente. Haciendo una interpretación sistemática, histórica y comparativa de las normas atinentes al acto prejudicial, resulta: si bien su finalidad es disgregar de su agresor a quien sufre violencia familiar, de la lectura integral de las normas en mención, no se desprende que, la cohabitación de los individuos involucrados en la conducta de violencia sea un requisito indispensable para su prosperidad, pues si con las reformas publicadas del día 28-veintiocho de abril de 2004-dos mil cuatro, fue suprimido el requisito de la cohabitación en la separación de consortes, a mayoría de razón, por constituir dicho acto prejudicial, una protección para quien sufre violencia familiar, no es posible compeler a la parte agredida a hacer vida en común con su ofensor, máxime cuando es clara la intención de interponer una demanda por conductas u omisiones constitutivas de violencia familiar, lo cual se evidencia indiciariamente (con el dictamen técnico que al efecto se requiere como requisito de procedibilidad), generando la presunción humana en términos de los numerales 355 y 356 del Código de Procedimientos Civiles, siendo por tanto viable no exista cohabitación entre agresor y agredido. Entonces, al ser el principal objetivo de este

acto prejudicial tutelar la seguridad de las personas sujetas a violencia familiar, la cual se llega a presumir con el dictamen técnico anexado a la solicitud de separación de personas y depósito de menores, ello implica un posible riesgo de que la parte solicitante sea violentada continuamente de diversas formas (moral, física, psicológica y/o sexualmente) e incluso hasta estar expuesto a sufrir daños irreversibles producto del abuso reiterado de poder del que, en apariencia, es objeto; por lo tanto, el acto prejudicial sobre separación de personas y depósito de menores, constituye el medio idóneo para otorgarle certeza jurídica a dicha separación y decretar el depósito del menor afectado, en un domicilio donde su seguridad quede resguardada, dictándose las medidas de protección aludidas en el numeral 180 bis III del Código Adjetivo de la Materia, sin que sea menester instar a la parte ofendida a mantener una vida en común con su presunto agresor al momento de interponer la solicitud de separación de Personas y Depósito de Menores. Siendo indebido desechar la solicitud de este acto prejudicial bajo el argumento de que el agresor y el agredido deben vivir en el mismo domicilio, pues como se explicó, las normas atinentes a este medio jurídico no lo establecen expresamente como requisito de admisibilidad (tan es así que la promoción de este acto puede formularse de manera oral), máxime cuando su esencial fin es: tutelar la seguridad de las personas sujetas a violencia familiar, misma que adquiere un rango primordial al encontrarse en juego la estabilidad física, emocional, moral y mental de menores de edad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo 500/2005. Acto Prejudicial sobre Separación Cautelar de Personas y Depósito de Menores. Sentencia emitida en fecha 20 de Enero de 2006. Toca en artículo 494/2005. Acto Prejudicial sobre Separación Cautelar de Personas y Depósito de Menores. Sentencia emitida en fecha 23 de Enero de 2006. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

100. AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO YA HAN SIDO EXPRESADOS EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, NO ES NECESARIO EXPRESARLOS NI RATIFICARLOS ANTE LA AD QUEM. (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ANTERIOR A LAS REFORMAS DEL 21 DE JULIO DE 1997). Del contenido de los artículos 446 y 447 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, anterior a la reforma publicada el 21 veintiuno de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, los cuales refieren una vez notificadas las partes de la llegada de los autos o testimonio a la Sala que ha de conocer del recurso, el apelante, dentro de seis días, expondrá los agravios que, en su concepto, le cause la resolución recurrida, expresando clara y sucintamente los puntos de hecho y de derecho en que se funde cada agravio. Si no se hubiere formulado ningún agravio se declarará desierto el recurso, a petición de parte. Al haber expresado los inconformes juntamente con el escrito de interposición del recurso de apelación presentado al juez de la causa, los razonamientos que estimaron necesarios para ser oídos en relación a las posibles lesiones a sus derechos producidas en la sentencia de primera instancia, aún a pesar de que omitieron exponerlos ante esta Segunda Instancia, cumplieron la obligación de expresarlos, sin ser óbice que los formularan previamente al término para hacerlos valer, puesto que si fueron esbozados en el escrito por el que interpusieron la apelación, técnicamente existe la expresión de agravios, por lo que deben estimarse presentados en forma oportuna, sin que sea necesario ratificarlos ante el

tribunal de alzada. Máxime que conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 446 de la codificación adjetiva de la materia, anterior a la reforma publicada el 21 de julio de 1997, la declaración de deserción del recurso de apelación solo podrá hacerse en aquellos casos en que no se hubieren formulado agravios, y si en la especie, se expresaron ante el juez de génesis, no hay razón jurídica para declarar desierta la apelación por no surtirse dicho supuesto. De ahí que debió tenerse por presentados los agravios expuestos en el ocurso de interposición del recurso de apelación, debiendo correr traslado con las copias respectivas, por el término que corresponda para que se imponga de ellos, conforme lo establece el artículo 447 de la codificación en comento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo 91/2006 Juicio Sucesorio de Intestado, del cual deriva el incidente sobre objeción a las operaciones de inventario y avalúo formuladas por el albacea. Sentencia emitida en fecha 31 de mayo del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

101. ALBACEA ESPECIAL, DESIGNACIÓN DE. Son fundados los conceptos de agravio elevados, pues efectivamente, si bien la autoridad natural declaró con apego a Derecho la procedencia del incidente de remoción de albacea, fue omisa en atender las manifestaciones vertidas en el escrito de contestación y acreditadas con las pruebas aportadas por la demandada incidental, ahora apelante, en cuanto a la circunstancia de que la parte actora incidentista, no tenía la aptitud, ninguno de ellos, para ser nombrado albacea, en lugar de la apelante removida, ya que dichas personas demandaron a la sucesión testamentaria, la nulidad del testamento, por lo que se advierte la existencia de un interés opuesto al de la sucesión, al tener el albacea, entre otras de sus obligaciones, la de defender la validez del testamento, tal como lo prevé el artículo 1603 fracción VII del Código Civil vigente en el Estado. Impugnación que quedó plenamente demostrada por la demandada incidental, con la certificación del expediente relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE NULIDAD DE TESTAMENTO y demás conceptos, promovido por los actores incidentales; empero, cierto es también, que ello no constituye ninguna causa de inhabilitación o impedimento legal de las previstas en el Código Civil en consulta, para el desempeño del albaceazgo general, según se puede advertir de lo establecido en los artículos 1576 y 1577. Sin embargo, resulta a todas luces evidente el riesgo para la sucesión, al ser representada en el juicio contencioso de impugnación de testamento, precisamente por quien tiene un interés opuesto contra la misma, como sucede con el albacea nombrado incidentalmente por el a quo, por lo que la autoridad de origen debió pronunciarse al respecto, y emitir un nombramiento especial de albacea, cargo que inclusive podría recaer en la propia albacea removida, solo para el efecto de que ésta represente a la sucesión en el juicio ordinario civil de impugnación de testamento. Lo anterior se estima conveniente, por la suscrita Magistrada, sin soslayar que no existe disposición legal expresa que contemple la hipótesis antes plasmada, mas en vista de que la legislación sustantivo civil en consulta, en su artículo 1588 sí contempla la figura del albacea especial, y si bien no se indica cuales serían sus funciones, debe considerarse, por analogía, que el conflicto de intereses que se advierte en el caso concreto, amerita tal designación especial, como acontece en los asuntos de patria potestad, al disponer el mismo ordenamiento sustantivo, en su artículo 440; es decir, se prevé el nombramiento de

un tutor que represente a menores, en cada caso en que quienes sobre ellos ejercieren la patria potestad, tuvieren un interés opuesto al de los hijos. Tiene sustento lo antes expuesto, en lo dispuesto por los artículos 18, 19 y 20 del Código Civil vigente, en integración a la norma. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo número 0165/2006. Juicio sucesorio testamentario. Incidente sobre remoción de albacea. Sentencia emitida en fecha 23 de mayo del año 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

102. ALIMENTOS. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN RESULTA ATINENTE SUSPENDER AL DEUDOR EL DERECHO DE CONVIVENCIA QUE TIENE PARA CON SUS HIJOS. Demostrado que el deudor alimentista no cumple su obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, y tomando en cuenta que los alimentos son una cuestión de orden público, por la cual el Estado se encuentra interesado en su debido cumplimiento, por ser una obligación natural, en tal sentido, sin prejuzgar sobre las obligaciones alimenticias que asistan al accionante, velando por el interés superior de los menores, con el fin de procurar atender a una paternidad responsable que sirva de base y sustento para las relaciones interfamiliares entre padre e hijos, tiene a bien condicionar el derecho de convivencia que le asiste al actor, al cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales, relativas a dar alimentos, mismas que podrá efectuar en cualquiera de las formas posibles para ello; y en todo caso hasta que se encuentre al corriente en el cumplimiento de tal deber alimentista y se acredite así ante el Juez Inferior, es que podrá y deberá ver y convivir con sus menores hijos, con fundamento en los artículos 415 bis y 447 bis del Código Civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 78/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 16 de mayo del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

103. ALIMENTOS. CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR. INTEGRACIÓN Ahora bien, no pasa por desapercibido que el diverso numeral 164 del Código Civil del Estado establece que no tiene la obligación de dar alimentos el cónyuge que carezca de bienes y que esté imposibilitado para trabajar, ya que este numeral sólo contempla dicha imposibilidad para el supuesto de que no se pueda otorgar mediante un salario que al efecto se perciba, y no a la imposibilidad física ni económica de ministrar alimentos como causa que exima el cumplimiento de esa obligación. Y si en el caso concreto se justificó que el demandado tiene tres propiedades, además de que ha estado cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia provisional consistente en el pago mensual de la cantidad de $1360.50 (un mil trescientos sesenta pesos 50/100 m. n.), esto último indicador de un signo exterior de riqueza, es inminente que si se acredito fehacientemente su capacidad económica y por ende se encuentra en posibilidades de cumplir con su obligación de ministrar alimentos a su esposa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 485/2005 derivado del juicio sumario de alimentos dictada el

día 27 de febrero del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

104. ALIMENTOS DEBEN LLAMARSE A JUICIO A QUIEN SE CONDENE A PAGAR PENSIÓN. De lo expuesto anteriormente, quien ahora juzga, considera que es fundado el agravio en comento, en virtud de que efectivamente se advierte una clara violación al procedimiento llevado en primera instancia, consistente en que indebidamente se condenó a los quejosos --- y -- ambos de apellidos ----- a pagar una pensión definitiva a favor de su madre, cuando es de advertirse que no fueron legalmente llamados a juicio, pues no se les emplazó al mismo, y que estuvieran en condiciones de excepcionarse y ofrecer elementos de prueba tendientes a justificar sus argumentos, formular alegatos, etc.; es decir, el Juez Primario violento el presupuesto procesal de mayor magnitud en un procedimiento, y que es a saber el llamamiento a un Órgano Jurisdiccional, el cual su análisis es de oficio, vulnerándose con ello las garantías de legalidad ya audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales de los apelantes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 326/2005 derivado del juicio sumario de alimentos dictada el día 23 de febrero del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

105. ALIMENTOS. DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS MENORES MEDIANTE CONVENIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO CELEBRADO ENTRE SUS PROGENITORES, DEBEN SUBSISTIR FRENTE AL DERECHO QUE PUDIERE TENER EL NUEVO CÓNYUGE DEL DEUDOR ALIMENTISTA, EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. El hecho de que el deudor alimentista acredite haber contraído nuevas nupcias, no es razón bastante para estimar que dicha circunstancia deba afectar en detrimento a la pensión alimenticia pactada por el propio impugnante a favor de sus menores hijos, esto en atención a que la variación que invoca no es sino el resultado de su actuar, en el ejercicio de su libertad personal (como lo fue lo convenido como pensión alimenticia a favor de sus menores hijos), en donde el apelante, aún con el conocimiento de causa del compromiso adquirido a favor de sus menores hijos, optó por celebrar nuevas nupcias y adquirir un nuevo compromiso frente a una tercera persona, quien presumiblemente es mayor de edad, por lo que atendiendo al interés superior de los menores, que es un principio rector de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reconocido por nuestro País, el cual encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 4 constitucional, en relación con los diversos numerales 3 apartado “A” y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, resulta inconcuso que debe subsistir el derecho adquirido por los menores acreedores respecto del deudor alimentista, mediante convenio de divorcio necesario celebrado entre sus progenitores, frente al derecho que pudiere tener su nuevo cónyuge, por lo que su unión matrimonial en

nada afecta a la pensión alimenticia que se comprometió a cubrir a favor de sus menores hijos, apareciendo que, de igual manera, el hecho de que su actual esposa se encuentre desempleada y que tenga que cubrir diversos gastos para su sustento y habitación, en nada le pueden beneficiar, pues el doliente, aún conociendo del compromiso que tiene frente a sus menores hijos decidió de mutuo propio adquirir una nueva obligación, la que de ninguna forma puede afectar en menoscabo de los derechos ya adquiridos con anterioridad por sus hijos menores de edad, ya que en atención al mencionado principio debe asegurarse a los menores, en el ejercicio de una paternidad responsable, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, crianza y desarrollo, conforme a lo que disponen los artículos 11 y 12 de la citada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como lo preceptuado por el artículo 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 18.1 del propio ordenamiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 043/2006. Incidente Sobre Reducción de Pensión Alimenticia, derivado de un Juicio de Divorcio por Mutuo Consentimiento. Sentencia emitida el 24 de febrero de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

106. APELACIÓN. PARA QUE LOS AUTOS SEAN APELABLES, DEBE SATISFACERSE PLENAMENTE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN VIGOR ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 1997. El artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece sin lugar a dudas cuando serán recurribles los autos, ya que terminantemente prevé lo siguiente: “Los autos sólo son apelables cuando la ley lo disponga expresamente y además cuando lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicte.”; del contenido integro del numeral en cuestión, se puede advertir, que nuestros legisladores previeron que para la debida y exacta aplicación de dicha norma a un caso concreto, se requería saciar dos supuestos indispensables, es decir, que el auto que se pretende recurrir sea apelable por mandato de ley y que también lo sea la sentencia definitiva del juicio en que aquel se dicte. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo número 239/2006. Juicio sucesorio testamentario del que deriva incidente sobre remoción de albacea. Resolución Interlocutoria de fecha 26-veintiséis de mayo de 2006-dos mil seis. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

107. ALIMENTOS. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. El Juez está obligado, por imperativo constitucional contenido en el artículo 4, en observancia al principio del Interés Superior del Menor, a suplir la deficiencia de la queja, entratándose de juicios en donde los derechos de menores o incapaces se vean involucrados, mayormente si se trata de alimentos, y en tal virtud, admitir las probanzas tendientes a la demostración de la capacidad económica del deudor; teniendo además el A quo, la plena facultad conferida en el artículo 49 del Código Procesal Civil en vigor, en relación con el

diverso numeral 952 del mismo ordenamiento, para mejor proveer, de ordenar la diligenciación de pruebas que estime pertinentes, a fin de advertir y/o corroborar la capacidad económica del deudor, para efecto de estar en aptitud de fijar una pensión alimenticia justa, equitativa y proporcional, acorde a las particulares necesidades de la parte acreedora, así como a la real capacidad económica del deudor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 0184/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 31 de mayo del año 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

108. ALIMENTOS. TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD O INCAPACES, LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN OBSTAR QUE QUIEN APELA SEA EL DEUDOR ALIMENTARIO. De lo anterior, se desprende que en el procedimiento la Autoridad Primigenia, no cumple con las condiciones de proporcionalidad y posibilidad que consagra el artículo 311 párrafo primero del Código Civil para el Estado, el cual a la letra dice que “Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos”. Esto es así, puesto que el porcentaje de la pensión alimenticia que al demandado se le decrete pagar a favor de los acreedores, dependerá del ingreso que por pago de cualquier prestación reciba el deudor alimentario mensualmente por el desempeño de su trabajo, desprendiéndose de constancias procesales que el salario y demás prestaciones que percibe el demandado de manera mensual, equivale a casi seis salarios mínimos vigentes en la localidad, y que el citado 38% treinta y ocho por ciento fijado por la A quo, apenas excede el equivalente a dos salarios mínimos, por lo que tomando en cuenta que el salario mínimo es una cantidad apenas suficiente para subsistir, frente al costo de la vida, sería ilógico pensar que con el porcentaje decretado por el inferior, se logre el objetivo de satisfacer los alimentos de tres menores de edad, que comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia médica en casos de enfermedad y además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, según lo dispone el artículo 308, al igual que el sano esparcimiento y recreación, estímese como fundamento legal los numerales 3, 11, 14, 15 y 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, agregando la que ahora juzga, los medios de transporte, lo cual apunta hacia la conclusión que la resolución natural resulta ilegal por transgredir el principio de proporcionalidad que debe reunir la obligación alimenticia, dado que el porcentaje decretado es inferior a las posibilidades del deudor alimentista, por lo que choca frontalmente con la materia sustantiva. En razón de lo anterior, la suscrita Magistrada considera justo y equitativo, modificar dicho porcentaje para que a cada uno de los menores, cuando menos se le otorgue el equivalente a un mes de salario mínimo mensual, a razón de $1,414.80 (un mil cuatrocientos catorce pesos 80/100 moneda nacional), a fin de satisfacer sus necesidades más apremiantes cantidad que corresponde al 52% cincuenta y dos por ciento sobre el salario y demás prestaciones que percibe el demandado por su empleo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA.

Toca en definitiva 122/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida en fecha 16 de mayo del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

109. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. Conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto número 226, publicado el día 14-catorce de enero de 2005-dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado número 6, que reformó por modificación, adición y derogación diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, entre ellas el numeral 426, se dispone que la reforma a los artículos contenidos en tal Decreto no serán aplicables a los procesos jurisdiccionales en trámite con anterioridad a la vigencia del mismo; esto es, dicha disposición no vuelve al pasado modificando una situación favorable a un gobernado creada por la ley anterior, sino que sólo precisa el momento a partir del cual se aplicará la norma y que casos quedan exentos de su aplicación, de manera que la ultra actividad del referido artículo 426 es consecuencia lógica del mencionado numeral segundo transitorio, puesto que a los procesos jurisdiccionales en trámite con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Decreto, les tendrá que seguir siendo aplicable el texto de ese dispositivo, que si bien para los procesos presentados con posterioridad a la entrada en vigor del señalado Decreto, ya no estará vigente. En consecuencia, se estima que el proceder del Juez natural, para aplicar dicho cuerpo normativo, fue indebido, violentando con ello en perjuicio de la doliente tanto el artículo 426 (que se encontraba legalmente reformado al momento de emitir el proveído desechatorio), como el primero y segundo transitorio del aludido Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del citado ordenamiento procesal, entre ellas el señalado numeral 426, al fundar y motivar la resolución impugnada en la letra de ese dispositivo, que se encontraba vigente en la época en que tuvo lugar la tramitación del juicio principal del que deviene la incidencia planteada, pues esta cuestión se dedujo a consecuencia de la sentencia dictada el día 31-treinta y uno de agosto de 1995-mil novecientos noventa y cinco, dentro de un Juicio Sumario de Alimentos, de lo que se infiere que, si bien es cierto, el sumario en cuestión se inició y tramitó bajo el amparo de dicho cuerpo normativo, ello no implicaba considerar que cualesquier cuestión que se suscite con motivo de dicho proceso, debiera regirse por la ley que lo reguló, toda vez que las cuestiones secundarias aún y cuando dependen directamente del principal, pueden tramitarse en forma independientemente de aquél, máxime cuando se presentan en época posterior a la en que tuvo lugar el juicio de origen. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo número 061/2006. Juicio sumario de alimentos. Incidente sobre Reducción de Pensión Alimenticia. Resolución Interlocutoria de fecha 13-trece de febrero de 2006-dos mil seis. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

110. COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE LO FAMILIAR, NO OBSTANTE A QUE SE HAYA DECRETADO LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO

MATRIMONIAL, CUANDO SE RECLAMEN FRUTOS DERIVADOS DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD CONYUGAL, Y ÉSTA NO SE ENCUENTRE AÚN LIQUIDADA. No es correcto estimar que se trata de un asunto meramente patrimonial, del que deba conocer un Juez de lo Civil, cuando se reclame por uno de los excónyuges la rendición de cuentas y el pago de frutos civiles derivados de un bien que pertenece a la sociedad conyugal derivada del vínculo matrimonial que existía entre las partes contendientes, ya que la razón de pedir deriva precisamente de la mancomunidad existente por el régimen matrimonial elegido por los interesados, la cual, si bien cesó a virtud de la disolución del vínculo matrimonial que los unía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 del Código Civil del Estado, ésta no ha quedado liquidada, pues no existe constancia alguna de la que se desprenda que se ha seguido el trámite legal correspondiente para su liquidación, de acuerdo a lo preceptuado por los diversos numerales 203 y 204 del mismo cuerpo de leyes sustantivas en cita, por lo que los consortes tienen expedito su derecho de reclamar al otro la rendición de cuentas y el pago de los frutos y gananciales que generen respecto de los bienes que forman parte de la misma, mientras ésta no sea liquidada, por lo que, atendiendo al contenido de los artículos 34 fracciones II y III, y 35 fracciones I y II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, resulta inconcuso que corresponde al Juez Familiar conocer de los asuntos donde se ventilen cuestiones inherentes al patrimonio conyugal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 190/2006. Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación y Notificación Judicial. Sentencia emitida el 30 de mayo de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

111. CONTROVERSIAS SOBRE CONVIVENCIAS DE MENOR SE DEBE TOMAR EN CUENTA DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES. Apuntado lo anterior, quien ahora juzga, precisamente en protección al interés superior del menor, considera conveniente modificar el régimen de convivencia decretado por el Aquo, para una debida y armónica convivencia del menor con ambos padres, pues en primer lugar, al encontrase separados los padres, debe establecerse dichas convivencias de tal manera de que se asemeje a como si estuvieran juntos, es decir de manera constante y apegada: en segundo lugar porque la madre del menor tiene el mismo derecho de convivir con él los fines de semana, y en tercer lugar porque no se tomó en consideración los períodos vacacionales y días festivos, por lo que en estricta de lo dispuesto por los citados numerales 446 y 952 del Código Procesal Civil en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 10/2006 derivado del juicio especial sobre controversia y convivencia de menor dictada el día 23 de mayo del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

112. CONVIVENCIA ENTRE PADRE E HIJO. NECESIDAD DEL MENOR DE INTERACTUAR NO SOLO CON SU PROGENITOR, SINO CON LA FAMILIA

EXTENSA PATERNA. La convivencia decretada, debe fijarse atendiendo al interés superior del menor, y tomando en consideración las necesidades y actividades particulares de éste, siendo importante que los días y horas que se señalen permitan mayor posibilidad al menor de reincorporarse a la interacción con su progenitor, así como reintegrarse al círculo familiar paterno, es decir, que pueda convivir con sus abuelos, tíos, primos, paternos, pues resulta de evidente benéfico para el infante, en aras de su formación y desarrollo pleno, integral, sano y adecuado, derecho fundamental contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, además de los numerales 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19 y 23 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 0191/2006. Juicio especial de controversia sobre convivencia. Sentencia emitida en fecha 31 de mayo del año 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

113. DEMANDA DE ALIMENTOS, PRESENTADA POR UNO DE LOS CÓNYUGES. ES CORRECTO DESECHARLA, CUANDO DE LOS HECHOS EXPUESTOS, EL DEMANDANTE NO SE SITÚE EN ALGÚN SUPUESTO DEL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO CIVIL. La obligación de darse alimentos entre los esposos, si bien emana del lazo civil que los une, el derecho a hacer exigible esa obligación, se encuentra contemplado por el artículo 164 del Código Civil para el Estado, mismo que dispone los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a cuyo efecto solventarán sus alimentos y los de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga económica en la forma y proporción que acuerden según sus posibilidades y, que efectivamente una de las bases del matrimonio es la ayuda mutua. De donde se deduce la obligación de ambos consortes a aportar los alimentos, y únicamente se excluye a aquél que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para trabajar, o quien por convenio expreso o tácito con su pareja se ocupe de las labores del hogar o del cuidado de los hijos, en cuyo caso el otro solventará íntegramente esos conceptos. Por lo cual, atendiendo precisamente a una sana y lógica interpretación, debe inferirse que la obligación de darse alimentos entre los cónyuges, queda sujeta para hacerla exigible entre ellos, al surgimiento dé cualesquiera de las hipótesis ahí contempladas, mismas que a saber son: A) Carecer de bienes propios y estar imposibilitado para trabajar; o, B) Que por convenio expreso o tácito el cónyuge que pide los alimentos, se ocupe de las labores del hogar o del cuidado de los hijos. Únicamente cuando se surte alguno de éstos dos supuestos los cónyuges tienen el derecho a exigir del otro los alimentos, mientras no sea así, debe estimarse quien demanda alimentos no los necesita, pues de acceder a otorgarlos podría caerse en el supuesto de propiciar una vida dedicada al ocio, fin distinto al perseguido con la obligación alimentaria materia de la demanda formulada por el ahora recurrente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 047/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 30 de enero de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

114. DIVORCIO ES INCORRECTO ABSOLVER EN COSTAS A LA PARTE REO, CUANDO LA ACCIONANTE JUSTIFICÓ SÓLO UNA DE LAS CAUSALES INTENTADAS. Siguiendo con el análisis de los puntos de disenso del apelante, tenemos que en el tercero, se queja esencialmente de que en el juicio el demandado fue declarado culpable, sin obtener resolución favorable a sus intereses, por lo que es procedente condenarlo al pago de las costas judiciales, de conformidad con los artículos 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Resulta fundado lo anterior, en atención a que, prosperó la acción de divorcio entablada por la señora -----; y si bien es cierto, que la parte accionante para fundamentar su demanda expuso diversos hechos, para tratar de acreditar diferentes causales, la acción de divorcio es una, por lo que resulta incorrecto considerar que se probó en parte la acción ejercitada, ya que al haber resultado procedente el divorcio necesario solicitado apoyado en el adulterio cometido por su todavía consorte, procedieron sus respectivas consecuencias legales. Consecuentemente, es desatinada y contraria a derecho la determinación del Juez resolutor de no condenar al demandado al pago de los gastos y costas judiciales que su contraria haya erogado, pues como se dijo antes, procedió la acción de divorcio ejercitada, al haber justificado el adulterio cometido en su perjuicio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Tribunal superior de justicia quinta sala, toca en definitiva 49/2005 derivado del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario dictada el día 23 de febrero del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

115. JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO NECESARIO. LA AUDIENCIA EFECTUADA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO CIVIL, PUEDE SER VALORADA COMO PRUEBA PARA RESOLVER LA ACCIÓN EN LO PRINCIPAL, Y NO SOLO LO ATINENTE A LAS CUESTIONES DERIVADAS DE LA PATRIA POTESTAD. El hecho de haberse llevado a cabo una audiencia en acatamiento al artículo 283 del Código Civil, el cual establece que en la sentencia que decrete el divorcio, el juez deberá determinar los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad y custodia que conservará cada uno de los cónyuges, respecto a la persona y bienes de sus hijos, teniendo en cuenta el interés particular de los menores, su salud, costumbres, educación y conservación de su patrimonio, para lo cual según lo establecido en el último párrafo del citado numeral, el Juez podrá antes de pronunciar sentencia definitiva, oír al Ministerio Público, a los hijos mayores de doce años y, en caso de estimarlo necesario a familiares o personas que concurran con los mismos. Si con tal fundamento el juzgador citó a las menores hijas de los contendientes, quienes rindieron las declaraciones que de ellas se contiene en la diligencia respectiva, nada impedía al natural valorar sus declaraciones al resolver el fondo de la controversia, pues fueron rendidas ante la autoridad judicial, con presencia de ambas partes, en conjunción con el Ministerio Público, siendo así que se recibieron con audiencia de las partes, y si bien no se ofrecieron como testimonial, no puede pasarse por alto su recepción con apego a la ley, ya que precisamente el texto legal del citado numeral prevé la necesidad, de oír el parecer de los menores cuyos padres estén

en juicio de divorcio, parecer que debe ser valorado, no limitado únicamente a los derechos inherentes de la patria potestad, pues al obrar en autos nada impide al juzgador tomarlas en cuenta al resolver la acción principal, menos cuando como en el presente la acción de divorcio versaba entre otras causales respecto de la relativa a la violencia familiar, pues siendo así deben valorarse íntegramente todas las actuaciones del proceso a efecto de resolver lo que conforme en derecho resulte procedente y no pasar por alto cualesquier circunstancia que permita al juzgador obtener una verdad de los hechos más apegada a la verdad material que sujeta a los contendientes, pensar lo contrario, daría lugar a sentencias que resolviendo la litis dejaran de valorar la situación real persistente en la vida familiar de las partes, por lo cual es de primera necesidad procurar emitir un juicio que además de resolver la contienda legal, tienda igualmente a dirimir el verdadero conflicto que les vincula, a efecto de que la resolución judicial no quede en el solo pronunciamiento del derecho sino en la solución del caso concreto, cuando ello no quebrante en perjuicio de las partes ninguno de sus derechos esenciales, como en la especie se juzga así aconteció, pues como se dijo tales declaraciones fueron recibidas con audiencia de los interesados y ante la presencia judicial, así como del propio Ministerio Público. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 032/2006. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 28 de febrero de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

116. MATRIMONIO, NULIDAD DEL. NO SE REQUIERE LLAMAR A JUICIO AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR VICIOS ATRIBUIBLES AL ACTO JURÍDICO QUE LE DIO ORIGEN. En aquellos casos en que no se impute irregularidad alguna al oficial del Registro Civil que celebró el matrimonio sobre el cual se demanda la nulidad, éste carece de interés alguno de comparecer al juicio civil, pues es claro que no habrá de oponer excepciones ni defensas, ni ofrecer pruebas, ni alegar y muchos menos interponer recursos ordinarios o extraordinarios, sino que su actuación en el supuesto de que la actora obtenga sentencia favorable se reduce a hacer la anotación correspondiente. De manera que, el oficial del Registro Civil en ese caso no defendería derecho subjetivo alguno, y que al carecer de interés para intervenir en el juicio natural, carece de objeto que se le emplace al mismo, ya que no se actualiza la figura de litisconsorcio pasivo necesario, toda vez que para que el titular del Registro Civil tenga interés jurídico y, por ende, deba ser emplazado a juicio, se requiere que se le hayan atribuido vicios formales al acta de matrimonio, es decir, imputables a dicho funcionario. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 200/2005. Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de Matrimonio. Sentencia emitida en fecha 28 de noviembre del 2005. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Mariana Brandi Rigal.

117. MENORES. APELACIÓN, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR, AUN Y CUANDO NO ES EL PROMOVENTE DEL RECURSO. Atendiendo a que a que los derechos paterno-filiales no son exclusivos de los padres, sino también de los hijos, estos últimos, en un grado superior, dada la protección constitucional (incluyendo los tratados internacionales) y legal. Por tanto, el juzgador no debe basarse sólo en las pretensiones de los padres, sino atender también al bienestar del menor en aras de procurar su desarrollo integral. Tan es así, que en el Alto Tribunal ha asentado en diversos criterios judiciales, con toda precisión, que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, la sociedad, en su conjunto, está interesada en que la situación de los hijos se defina para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. En esa óptica, es concluyente que, el motivo de Ad-quem para suplir la queja deficiente, no es beneficiar a quien no apeló, ni erigirse en defensor oficioso de la contraparte, sino velar por el sano desarrollo del menor, pues se insiste, los derechos de éste no pueden supeditarse a las pretensiones de los padres.-- Acorde con lo hasta aquí expuesto, es dable establecer que aun cuando el Máximo Tribunal, para efectos del amparo, delimitó las condiciones que orientan la suplencia de la queja (es decir, a partir de los conceptos de violación), no menos es verdad que, tratándose de menores o incapaces, la suplencia adquiere una nueva dimensión, a partir de la tutela que los instrumentos legales, constitucionales e internacionales, como ley suprema del país, han dado a los derechos de los infantes. Por las anteriores consideraciones, el Tribunal Federal, concluyó abdicar del criterio por el sostenido tiempo atrás: “Alimentos. Apelación suplencia improcedente de la queja en los juicios de, cuando el acreedor no es el promovente de ese recurso, ya que la constitución, los tratados internacionales, las leyes federales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son acordes en establecer la supremacía que adquiere la tutela de los intereses de los menores, incluso, el Alto Tribunal ha considerado que no hay excusa ni límite para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales, pues la sociedad y el Estado están interesados en proteger los derechos de los menores e incapaces, supliendo en su favor la deficiencia de la queja, sin que obste para ello la naturaleza de los derechos controvertidos o los promoventes, incluso, cuando sin ser partes, puedan verse afectados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Ejecutoria de Amparo Directo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Acto Reclamado: Sentencia pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal del Estado en fecha 17 de Febrero de 2006 dentro del toca de apelación en definitiva 332/2006 relativo al Juicio Especial de Controversia sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores.

118. NECESIDAD DE RECABAR OFICIOSAMENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS ENCAMINADOS A CONOCER Y DECIDIR JURÍDICA Y

OBJETIVAMENTE LO MAS BENEFICIO PARA LA FAMILIA. Entonces, en orden con lo precedente, deviene innegable la necesidad de recabar oficiosamente los medios probatorios encaminados a obtener mayores elementos para conocer y decidir jurídica y objetivamente lo que resulte más benéfico para las partes involucradas en el presente litigio, así como para sus descendientes, con quienes guardan estrechamente una relación de familia, por lo que si éstos medios no se aportaron, debe ordenarse al Juez natural que mande reponer el procedimiento a efecto de que disponga lo necesario a fin de que se recabe la opinión de expertos en materia de psicología, toxicología y trabajo social, en relación con la parte demandada en lo que se refiere a las primeras dos especialidades, y la familia completa en el caso de que se les practique una evaluación de trabajo social; lo anterior, para dilucidar con certeza la supuesta conducta de la señora consistente en la realización de actos inmorales y su adicción a las bebidas embriagantes, para de esta forma contar con los elementos propicios a fin de estar en las condiciones básicas que permitan al juzgador primario conocer de manera objetiva el entorno social de la citada familia; y respecto a la parte demandada, conocer su perfil psicológico, así como los estudios necesarios para comprobar si efectivamente es adicta a las bebidas embriagantes, y en su caso si dicha circunstancia ocasiona trastornos en su conducta que afectan no solo la relación conyugal, sino familiar, y con ello el Juzgador se encuentra en condiciones de determinar si la conducta que ha desarrollado la demandada en su relación familiar, ha perturbado a su consorte y a sus hijos, en su caso, el grado de afectación que se ha generado en éstas y su secuela futura, la conclusión diagnóstica y pronóstico, y en base a dichas opiniones técnicas, el resolutor en su carácter de perito de peritos, determine que opinión es la más acertada en cuanto al planteamiento sometido a su consideración, resolviendo lo más benéfico sobre los integrantes de la referida familia, en su caso la conservación o disolución del vínculo matrimonial en conflicto, es decir, de todo lo que concierne a ésta, menos lo que el Estado debe realizar para que la sociedad no resulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es de orden público. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 71/2006 derivado del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario dictada el día 28 de marzo del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

119. NOTIFICACIONES PERSONALES. SURTEN SUS EFECTOS EL MISMO DÍA. Conforme a la vinculación lógica jurídica de los artículos 56, 57, 68, 69, 70, 71 y 75 del Código Procesal Civil del Estado, se puede establecer que, si el ordenamiento procesal en comento no dispone en forma expresa el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones personales, se puede establecer con claridad que aquellas surten sus efectos plenos el mismo día en que se realizan, puesto que cuando son varias las partes a notificar respecto a un mismo acuerdo que contiene un término común, éste corre al día siguiente de haberse notificado a la última de las partes, más aún, ante la omisión del legislador, debe estarse a la manera en que el interesado tiene conocimiento de la resolución notificada, ya que no puede darse a ese acto, un efecto que la ley no establece; luego entonces, ello

significa que ese tipo de notificaciones personales debe tenerse por legalmente hecha y surtir sus efectos el mismo día en que se realizó, que es el momento cuando tuvo pleno conocimiento de la resolución correspondiente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo número 061/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Incidente sobre Reducción de Pensión Alimenticia. Resolución Interlocutoria de fecha 13-trece de febrero de 2006-dos mil seis. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel Santos Aguillón Guerra. NOTA: Idéntico criterio fue sustentado en el Toca de apelación Nº 330/05. Divorcio por Mutuo Consentimiento. Sentencia: 7 de Septiembre de 2005. Publicado en la Revista Judicatus Año 7, Nº 14. Diciembre 2005.

120. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ACCIÓN DE INOFICIOSIDAD DE TESTAMENTO, ES LA VIGENTE A LA MUERTE DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN. Con sujeción al principio de irretroactividad de la ley, las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos realizados con anterioridad a su entrada en vigor; el mismo goza de la calidad de ser garantía constitucional consignado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, al momento en que ocurrió el deceso del de cujus, el artículo 1265 del Código Civil para el Estado de Nuevo León en su fracción III, disponía: “El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: III.- Al cónyuge supérstite, siempre que siendo varón esté impedido de trabajar, o que siendo mujer, permanezca viuda y viva honestamente”; dicha norma fue modificada por decreto número 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8-ocho de diciembre de 2004-dos mil cuatro, para quedar como sigue: artículo 1265:- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: “III.- Al cónyuge supérstite, siempre que esté impedido de trabajar, se encuentre libre de matrimonio o concubinato y viva honestamente”; por tanto, en vista de que la muerte del autor de la sucesión ocurrió en 1996-mil novecientos noventa y seis, las disposiciones aplicables a la acción de inoficiosidad intentada, son aquellas que regían al momento de su fallecimiento, pues fue a raíz de su deceso que se generaron las prerrogativas sucesorias para quienes tienen derecho al acervo hereditario, ya que es a partir de este momento en que herederos o presuntos herederos suceden al de cujus en sus bienes, derechos y obligaciones, de acuerdo a los artículos 1178 y 1185 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Luego, con la legislación en vigor, específicamente, con lo establecido en la fracción III del artículo 1265 del citado Ordenamiento Legal, se genera la posibilidad de modificar o suprimir un derecho adquirido por la actora, respecto a demandar la inoficiosidad de testamento que ahora intenta, consiguientemente al desecharse la demanda planteada por la promovente, se aplica en perjuicio de esta la legislación actual, cuando lo legal y justo es que, la sustancia del asunto se analice bajo la perspectiva legal consignada en la legislación anterior a las reformas decretadas al Código Civil en el Decreto 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado número 156 del día 8 de diciembre de 2004; lo cual se corrobora aún más con lo dispuesto en el numeral 1268 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de cuyo contenido, se pone de manifiesto de forma expresa, que las normas

aplicables a la acción a ejercitar, son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del de cujus, pues es en ese tiempo cuando se da la sustitución de los herederos a la persona de aquel para responder y ostentar los derechos y obligaciones que a el correspondían. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva 186/2006. Juicio Ordinario Civil sobre Inoficiosidad de Testamento. Sentencia emitida en fecha 30 de mayo de 2006. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

121. NULIDAD DE MATRIMONIO. INNECESARIO INTEGRAR EL LITISCONSORCIO PASIVO. En la nulidad de matrimonio, es innecesario integrar el litisconsorcio pasivo en la persona del Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio que se anula, así como en la persona del Director del Registro Civil de la entidad, si no se evidencia causa de responsabilidad alguna en el ejercicio de las funciones de dichas autoridades administrativas, pues la causa de nulidad ejercitada, obedece a la conducta desplegada por el único demandado, quien incurrió en el motivo de anulación previsto en el artículo 156 del Código Civil vigente, al contraer un segundo matrimonio estando vigente el primero. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en definitiva número 0177/2006. Juicio ordinario civil sobre nulidad de matrimonio. Sentencia emitida en fecha 31 de mayo del año 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

122. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI HUBO O NO, VIOLENCIA FAMILIAR. En aquellos asuntos donde alguno de los contendientes alegue fundadamente violencia en el seno familiar y, los elementos de prueba existentes en autos sean insuficientes para esclarecer tal circunstancia, el Juez, conforme lo previsto en los artículos 49 y 952 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, debe proveer lo necesario para desahogar las pruebas que estime pertinentes, a efecto de determinar, preferente con apoyo de quienes tienen conocimientos especializados en la materia, si alguno de los miembros de la familia ha sido violentado, como también si el sujeto que se dice es violentador, tiene una conducta o comportamiento generadora de violencia familiar; lo anterior, tomando en cuenta que de acuerdo con el segundo de los numerales en cita, todos los asuntos inherentes a la familia son considerados como orden público y, que la violencia de que se trata, repercute gravemente en la integridad física y mental de la víctima, puesto que se puede materializar como humillaciones, insultos, menosprecios, abandono, amenazas, agresiones físicas leves o graves, abuso sexual y cualesquier conducta similar, incluso la muerte de la persona sometida a este tipo de trataos; máxime, en aquellos casos en los que se encuentra involucrado un menor de edad, pues en estos últimos es obligación de la Autoridad garantizar el interés superior del menor de edad, conforme lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 7° de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 111/2006. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 29-veintinueve de Marzo de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

123. PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE MENOR. IMPROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN DE LA DECRETADA EN EL JUICIO SUMARIO RESPECTIVO, NO OBSTANTE A QUE EXISTA CONVENIO SOBRE EL PARTICULAR, CELEBRADO ENTRE LOS PROGENITORES. Resulta incuestionable que debe subsistir el derecho adquirido por la menor acreedora respecto del deudor alimentista, no obstante que en el convenio presentado dentro del divorcio voluntario promovido entre sus progenitores, ahora antagonistas, se haya pactado la forma en que deben cubrirse los alimentos a favor de dicha menor, pues estos deben quedar garantizados, aunado a que tal hecho en nada afecta al derecho de recibir alimentos de la referida infante, pues el título que se lo otorga, es decir la calidad de hija, queda subsistente no obstante al divorcio de sus padres, por lo que resulta ilegal la cancelación decretada de forma completa por el juez de la causa, pues, en todo caso, debió realizar la adecuación correspondiente, y sustituirla, pero no cancelarla llanamente, por lo que resulta ilegal la cancelación decretada por el resolutor de origen, esto independientemente que ante el juez que conoció el divorcio puedan hacerse efectivas las medidas para el aseguramiento y garantizar el debido cumplimiento de la obligación alimentaria, pues, se insiste, la calidad de acreedor alimentista con la que la menor compareció a juicio sumario de alimentos, representada por su madre, queda inmutable, por lo que, mientras que no se garantice en aquél procedimiento de divorcio el debido cumplimiento de las obligaciones del deudor alimentista, el aseguramiento derivado del presente juicio debe subsistir respecto a dicha acreedora alimentista, ya que en atención al interés superior del menor, debe asegurarse a los párvulos, en el ejercicio de una paternidad responsable, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, crianza y desarrollo, conforme a lo que disponen los artículos 11 y 12 de la citada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como lo preceptuado por el artículo 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 18.1 del propio ordenamiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 064/2006. Incidente Sobre Reducción de Pensión Alimenticia, derivado de un Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 24 de marzo de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

124. SUCESIÓN LEGÍTIMA. LA AUTORIDAD JUZGADORA CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO A LOS ACTOS CONTENIDOS EN LAS CERTIFICACIONES DEL REGISTRO CIVIL ALLEGADAS PARA ACREDITAR EL ENTRONCAMIENTO DENTRO DE LA. Las certificaciones del Registro Civil relativas al nacimiento de los recurrentes, allegadas

al juicio, tienen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 fracción II, 287 fracción IV y 369 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 35, 36 y 47 del Código Civil, para acreditar que los impugnantes, son hijos legítimos del autor de la sucesión de merito, puesto que tales certificaciones son concernientes al registro del nacimiento de los nombrados recurrentes, y con ellas se demuestra plenamente el entroncamiento de los referidos quejosos con el de cujus, ya que en los procedimientos sucesorios de intestado, como el que nos ocupa a estudio, el parentesco entre los interesados a la herencia con el autor de la misma, se justifica acompañando los documentos correspondientes para ello, acorde a lo establecido en el artículo 820 del Código Procesal Civil; así, tenemos que las actas del registro civil son las pruebas preconstituidas idóneas para acreditar el parentesco o entroncamiento dentro de los juicios denominados por la ley como sucesión legítima, y en la especie, esa clase de documentales fueron exhibidas por los ahora impugnantes para evidenciar la relación de parentesco que les corresponde frente al de cujus. Cabe agregar, que del texto vertido en las instrumentales públicas con las cuales se acredita el entroncamiento de los quejosos con el autor de la sucesión intestamentaria, no se desprende anotación marginal alguna que refiera que las mismas hayan sido canceladas o nulificadas por sentencia ejecutoriada, previo el procedimiento respectivo ventilado ante la autoridad competente; por lo tanto, queda vedado para éste órgano jurisdiccional así como para el Juez inferior, el pronunciarse sobre los actos o hechos que dieron origen a la inscripción de las actas del estado civil de los ahora apelantes, en virtud de que el objeto del proceso que nos ocupa a estudio, no tiene como finalidad indagar o analizar sobre la falsedad o inexistencia de algún asiento por no haber acontecido el suceso o hecho motivo del registro, pues para ello, se requiere, el ventilar el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, para obtener así una declaración judicial sobre que es falsa el acta en que se hizo constar dicho suceso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en artículo número 103/2006. Juicio sucesorio de intestado. Sentencia de fecha 27-veintisiete de abril de 2006-dos mil seis. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Fidel S. Aguillón Guerra.

125. VIOLENCIA FAMILIAR, POR SU NATURALEZA, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA DEMANDA, CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO Y MODO. La narrativa fáctica vertida por la accionante, dentro de su líbelo inicial, cubre los requisitos mínimos indispensables para sustentar el estudio de la causal en cuestión, ello si tomamos en cuenta que legalmente se conceptúa como violencia familiar, a la acción u omisión grave y reiterada, contra el cónyuge; concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; adoptante o adoptado, que tiene como fin dominarlo, someterlo o agredirlo, dañando la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de su familia, independientemente de que se produzcan o no lesiones o cualquier otro delito, o se proceda penalmente contra el agresor. De lo cual resulta claro, que los actos o conductas de violencia familiar son todos aquellos que al darse de forma

reiterada dentro del seno de la familia tienden a producir un daño al agredido, y así no es imprescindible precisar circunstancias de lugar, tiempo y modo para encuadrar la conducta del cónyuge demandado agresor en esa causal, tal como lo apreció la sentenciadora de origen, bastando solamente señalar ciertos hechos, actos o datos característicos de la conducta del agresor, en virtud de la cual pueda darse el daño que protege la causal en comento y en caso de estar acreditado decretar el divorcio. En efecto, debe considerarse que la violencia familiar, lamentablemente se da como una manifestación de poder con la finalidad de someter como un mecanismo de control, cuyas causas son muy variadas y generalmente tienen un origen psicológico, que hace al violentador observar dicha conducta en forma cíclica, entre las cuales, las más comunes son el abandono, la exclusión, el aislamiento y la desatención a las necesidades de estas personas, así como la negación y oportunidad de integrarse y participar activamente en la dinámica familiar y en la toma de decisiones respecto a ellos mismos. Incluso podemos observar, que la violencia familiar, doctrinalmente es vista de la siguiente manera “La conducta violenta no conlleva la intención de causar daño, sino la de someter a otro mediante el uso de la fuerza o el poder. Cuando esta violencia se ejerce dentro del seno del grupo familiar genera situaciones y conflictos tales que ameritaron una definición y regulación especiales. Por desgracia la violencia dentro del hogar se ha convertido en una situación común...La violencia familiar, además de ser un mal en sí, repercute en la formación y desarrollo de los individuos; principalmente en su etapa de formación, la infancia. Al penetrar al grupo familiar desgasta valores tan importantes como el respeto y la solidaridad familiares, generando conductas antisociales dentro y fuera de la estructura familiar...” (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México 2005.) Tales circunstancias, hacen suponer que la violencia familiar, rara vez deriva de hechos aislados, sino en sí, de una situación de familia, acaecida con motivo de un comportamiento reiterado o habitual, por lo que en tal caso, debemos considerar que las precisiones de la accionante contenidas en su líbelo demandatorio, relativas a una conducta viciosa, agresiva, e irresponsable de parte del cónyuge demandado, de agresiones físicas y verbales y la causación del daño que tales conductas les ha producido tanto a ella como a sus hijos, constituyen manifestaciones suficientes para encuadrar precisamente la conducta del demandado en aquella prevista como de violencia familiar, hechos los cuales le son imputados directamente al demandado y en todo caso en virtud de los mismos se le otorgaba a él la oportunidad de producir su defensa en tiempo y forma; pues por la causal de que se trata, imponer mayores requisitos a los real y legalmente exigidos, además de los queridos por la sociedad, sería dar trabas al sistema de impartición de justicia para solucionar tan gravosas situaciones como las que se presentan derivadas precisamente de actos o conductas que incidan en violencia familiar, las cuales dañan sobremanera a quienes las sufren en vida propia, por lo que en todo caso debe protegerse el interés superior, la integridad de las personas, máxime cuando en asuntos como en el presente se afectan también a los hijos menores de las partes contendientes. Pues demostrado el daño ocasionado con motivo de las conductas de violencia familiar, correspondía a la autoridad judicial examinar tales conductas con base a las circunstancias que rodeasen al caso particular, para en su caso decretar la disolución del vinculo matrimonial como en la

especie aconteció, de lo contrario el daño que pudiera causarse sería mayor a aquel que pretendiera evitarse con la narrativa de hechos que debe exponerse en el escrito de demanda, pues al haberse llevado el curso del juicio principal con intervención y audiencia de ambos interesados, es indudable que éstos tuvieron plena oportunidad de defenderse en el mismo y alegar lo que a sus derechos conviniera con relaciones a los hechos en discusión, como así ocurrió. Lo anterior con fundamento en los artículos 147, 267 fracción XVIII, 323 bis del Código Civil, en relación con los diversos numerales 402, 403, 405 y 612 fracción V del Código de Procedimientos Civiles. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 032/2006. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 28 de febrero de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González. (Nota.- Sustenta lo expuesto, la tesis de amparo de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Julio de 2005. Tesis: I.6o.C.351 C. Página: 1419 con el rubro: Divorcio Necesario a Causa de Violencia Familiar. Procede el estudio de esa acción, sin necesidad de que el promovente precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, quedando obligado el juzgador a intervenir de oficio, atento a las facultades que le otorga la ley en esos casos.)

126. ACCIÓN DE DESCONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD. LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITARLA TRATÁNDOSE DE LOS HIJOS DE MATRIMONIO. Si bien es cierto, tratando de investigar la paternidad, la prueba del ADN, prueba biológica molecular de la caracterización del ácido desoxirribonucleico de las células, tiene validez plena, sin embargo, ello es así, única y exclusivamente en los casos de reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, según se aprecia del numeral 381 Bis del Código Civil en vigor. Ahora bien, la interpretación armónica, sistemática y teleológica de los preceptos 324, 325 y 326 del ordenamiento en consulta, conducen a la conclusión que impugnando la paternidad de los hijos de matrimonio únicamente se admiten las siguientes pruebas: que haya sido imposible al marido tener acceso carnal con su mujer, en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento, o que aun habiéndolo tenido existan razones biológicas o fisiológicas plenamente comprobadas que imposibiliten la concepción y, que el nacimiento se le hubiese ocultado. En las apuntadas condiciones, en la especie, la menor nació después de ciento ochenta días de celebrado el matrimonio de los contendientes, por lo tanto, tiene a su favor la presunción de ser hija de los cónyuges; sin que el actor hubiese ofertado medio de convicción de los permitidos por los artículos 325 y 326 de la legislación civil en vigor, que hiciera dudar sobre su paternidad, de manera que el derecho de la menor a ser reconocida por su padre no se ve afectado, por lo que subsiste la paternidad reclamada. La ratio legis de los anteriores preceptos legales, consiste en proteger la filiación de los hijos de matrimonio fundándose en la existencia del mismo, así como la identidad de aquellos, pues resulta peligroso invocar una filiación contraria, que sólo lograrían la inseguridad en las familias y perturbar gravemente la paz; ante este fin de orden superior, es por lo que el legislador permitió

única y exclusivamente los medios de convicción antes referidos, admitiendo la prueba del ADN, prueba biológica de las células, caracterización del ácido de las células, sólo cuando se trate del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, tan es así, que lo consignó en capítulo aparte del ordenamiento sustantivo (Capítulo IV), al en que se encuentra el De los Hijos de Matrimonio (Capítulo I), de tal suerte que no cabe confusión entre las pruebas permitidas para cada uno de los supuestos antes mencionados. Toca en definitiva 341/2006 Juicio Ordinario Civil sobre Desconocimiento de Paternidad. Sentencia emitida en fecha 31 de agosto del 2006. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

127. ACCIÓN DE VARIACIÓN DE CUSTODIA. PARA LA PROCEDENCIA DE LA MISMA, NO OBSTA LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES CELEBRADO CON ANTELACIÓN AL INICIO DEL JUICIO. Si bien es cierto, a las actuaciones del juicio correspondiente fue allegado un acuerdo de voluntades de las partes involucradas en el procedimiento, atinente a la custodia de la menor hija de los contendientes, el cual no ha sido declarado nulo o inexistente, ello no quiere decir que por esa sola circunstancia deba declararse la improcedencia de la acción ejercitada, dada la preferencia del acuerdo de voluntades llevado a cabo por las contendientes; esto es así, pues aún y cuando efectivamente, de las constancias procesales se advierte, obra glosado al expediente primario un convenio llevado a cabo ante la Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por los padres de la pequeña afecta a la causa, así como la abuela paterna de dicha infante, de donde se colige del mismo que, los intervinientes pactaron que la abuela paterna de dicha párvula ejercería su derecho de custodia, resultando de considerable relevancia que tal convención no fue sancionada por la Autoridad Jurisdiccional competente para ello, pues la accionante del juicio de variación de custodia y madre de la infante afectada, se desistió del trámite correspondiente, por lo tanto, carece de firmeza y obligatoriedad para las partes en cuanto a exigir su cumplimiento, tal y como lo dispone el artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo tanto, la existencia del citado consenso no puede obstruir la eficacia del deber proteccionista que la Autoridad Judicial debe seguir para decidir en todo momento lo que resulta mas benéfico al interés de la niña cuya custodia se encuentra en litigio; además conviene dejar en claro que, aún en el supuesto sin conceder de que la convención en cita hubiese sido sancionada por la Autoridad Judicial Cognoscitiva, la misma no constituiría un impedimento u obstáculo para decidir de forma anticipada el curso de la acción reclamada (es decir, decretar su improcedencia), pues al encontrarse en juego los intereses de una menor de edad, los mismos no pueden soslayarse a la voluntad de sus ascendientes, sino que deben protegerse incluso de forma preferencial a los de estos, corriendo a cargo de la Autoridad Judicial la obligación, como representante del Estado, de velar por la efectiva protección de los derechos de la menor afecta a la causa, los cuales, se itera, no tienen porque verse condicionados a los derechos de sus ascendientes tal y como lo dispone el artículo 4 de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes vigente en el Estado y su correlativo 5 fracción I segundo párrafo de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vigente en el Estado, por tanto, la norma rectora de cualquier determinación judicial a dictar, es en definitiva, el interés superior de la pequeña afecta a la causa, ya que por su natural indefensión (física y psicológica), requiere que sus derechos se vean plenamente resguardados, lo cual ocurre en el particular, pues tanto en primer grado como ahora en la Alzada, el fin perseguido es otorgar una certeza jurídica al bienestar de la pequeña hija de los litigantes, resultando en consecuencia, como se estableció con antelación, infundado a todos luces lo pretendido por la recurrente (abuela de la menor) por cuanto a que un acuerdo de voluntades se anteponga al ejercicio del derecho de la pequeña a vivir bajo el cuidado y protección maternos, máxime cuando fue demostrado en autos que ello es lo más adecuado para su sano desarrollo, esto último a través de diversos exámenes psicológicos realizados a la menor afecta a la causa, por lo tanto, la reclamación formulada sobre este aspecto, deviene infundada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca en Definitiva 317/06. Juicio Ordinario Civil sobre Variación de Custodia. Sentencia emitida en fecha 31 de agosto de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

128. ALIMENTOS. DEBE ADMITIRSE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO DEBIDAMENTE SANCIONADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, EN DONDE SE PACTARON LOS MISMOS. El propósito fundamental de los alimentos es proporcionar al acreedor lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia cotidiana, y se requiere, entonces, de acciones adecuadas e inmediatas que permitan su pronta satisfacción, dado que se centran en una necesidad apremiante y perentoria, como es la conservación de la vida. Por tanto, la existencia de una pensión alimenticia previamente pactada en un convenio debidamente sancionado mediante sentencia definitiva, no constituye impedimento legal para admitir a trámite la acción autónoma de alimentos, pues si bien ante la preexistencia de la pensión convenida en el acuerdo de voluntades, para el caso de incumplimiento de la misma, los acreedores pueden ejercitar acción para exigir su pago, o bien, de estimarla insuficiente promover la correspondiente para su aumento; por ser los alimentos una cuestión de orden público cuyo objetivo primordial es garantizar la subsistencia del ser humano, debe admitirse la ejercitada de forma autónoma, o bien proveer lo necesario para su consecuente admisión, sin que esto implique prejuzgar sobre la procedencia de la misma, pues como ya se indicó, se requiere tomar las medidas necesarias, pero sobre todo inmediatas, con las cuales se garantice el cumplimiento debido y adecuado de los alimentos, por estar encaminados a la subsistencia del acreedor, más aún que en la acción autónoma se puede exigir y decretar por parte de la Autoridad, el pago de una pensión provisional como una medida urgente. Además, debe admitirse o proveer lo necesario para su admisión, a fin de salvaguardar a los acreedores alimentistas su garantía de acceso efectivo a la justicia, contemplada en el artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de desecharse, se les haría nugatorio su derecho de que se resuelva la cuestión planteada (alimentos), pese el valor fundamental que implica la satisfacción de la necesidad de los menores acreedores, elevada al rango constitucional en el artículo 4° de nuestra Carta Magna. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 518/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el día 19-diecinueve de Diciembre de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Juan Francisco Castillo Lara.

129. ALIMENTOS. NO ES MOTIVO DE REDUCCIÓN, EL HECHO DE QUE EL DEUDOR CONTRAIGA MATRIMONIO, SI EL ACREEDOR ALIMENTARIO ES MENOR DE EDAD. Aún y cuando el apelante acreditó mediante la certificación el acta del registro civil respectiva, que contrajo nupcias con posterioridad a la fecha en que las partes en litigio pactaron la pensión alimenticia cuya reducción se demanda, ello no constituye un motivo contundente para reducir dicha pensión, pues no pasa desapercibido para la Alzada, al momento en que el recurrente celebró nupcias, el mismo ya tenía cognición de su obligación alimentaria para con su menor hija, por tanto estaba conciente que ello implicaría una carga alimentaria más -ahora para con su esposa-, lo cual conduce a estimar que al contraer matrimonio, el deudor consideró que sus posibilidades económicas eran suficientes para afrontar su obligación alimentaria con todos y cada uno de sus acreedores; máxime que, el derecho alimenticio de la menor acreedora es prioritario frente al derecho de la cónyuge del apelante a recibir alimentos por parte de éste último, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 1, 3, 4, 11, 14 y 15 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los derechos que los adultos pudieran tener sobre un niño o niña, se supeditan al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para lo infantes, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, y con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social, de ahí que, es obligación de los Órganos Jurisdiccionales considerar siempre como primordial y como norma rectora de toda determinación judicial a pronunciar, el interés superior de los menores; y en el particular, al ser mayor de edad la cónyuge del recurrente y, no advertirse de autos que la misma tenga una incapacidad física que le imposibilite desempeñar una actividad remunerada, está en aptitud de proveerse por sí misma de sus propios recursos para solventar sus necesidades alimenticias, entre tanto, la pequeña acreedora (quien cuenta con 7-siete años de edad), no está en posibilidad dadas sus circunstancias, de allegarse por sus propios medios de lo necesario para su subsistencia cotidiana, siendo importante recordar, el verdadero y noble fin ético-moral de la institución de los alimentos, es precisamente, el de proteger y salvaguardar la supervivencia de quien no está en posibilidad de allegarse por sus propios medios, los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que es la vida. Toca en Artículo número 490/2006. Sentencia emitida en fecha 21 de Diciembre de 2006, por la Magistrada de la Quinta Sala

del H. Tribunal Superior de Justicia. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea Itendehuit Miranda Galindo.

130. ALIMENTOS. LOS CÓNYUGES PIERDEN EL DERECHO A RECIBIRLOS, AL HABERSE DECLARADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA, LA NULIDAD DE SU MATRIMONIO. Habiéndose acreditado plenamente dentro del procedimiento, que el matrimonio celebrado por las partes actora y demandada, fue declarado nulo por sentencia ejecutoriada, la accionante carece de legitimación para exigir alimentos al demandado, pues a virtud de la nulidad decretada por sentencia ejecutoriada, perdió el derecho deducido en este juicio y lo conducente en la especie es declarar la improcedencia de la acción de alimentos ejercitada; siendo incorrecto considerar que, al haber procedido la peticionaria de alimentos, de buena fe en la celebración del matrimonio anulado, la obligación alimentaria subsiste y debe regirse por las mismas reglas para el caso de divorcio, esto porque de ninguna manera son susceptibles de aplicar las mismas bases que regulan lo concerniente a los alimentos en tratándose de divorcio necesario, al caso de nulidad de matrimonio, puesto que se trata de situaciones jurídicas diversas, ya que el primero se refiere a la disolución legal del matrimonio válidamente celebrado, a solicitud de uno de los cónyuges, por haber incurrido el otro consorte en una de las causales de divorcio específicamente previstas en la Codificación Sustantiva de esta Entidad Federativa en su artículo 267, y en la segunda hipótesis, a virtud del vicio de que adolece el acto jurídico del matrimonio, éste es inexistente (en el particular porque había un impedimento para contraer nupcias: la existencia de un matrimonio anterior no disuelto); no habiendo así, sustento legal para equiparar ambas figuras jurídicas, pues nuestra Legislación prevé disposiciones expresas que resuelven las consecuencias jurídicas que producen cada una de ellas; más aún, no existe precepto legal alguno que indique que al anularse un matrimonio, alguno de los cónyuges esté en aptitud de recibir alimentos por parte del otro, asimismo, debe tomarse en consideración que al declararse judicialmente nulo un matrimonio, como consecuencia lógica - jurídica de ello, se pierde el título en cuya virtud se pudieren exigir los alimentos, en términos del artículo 724 fracción I del Código Procesal Civil de esta Entidad Federativa; luego, no es factible jurídicamente, prolongar los efectos del matrimonio declarado nulo después de su duración, lo que sucedería en caso de que se otorgara a la promovente el derecho a percibir alimentos por parte del demandado, con posterioridad a la nulidad decretada, pues conforme a lo dispuesto por el numeral 255 del Código Civil, los efectos de la unión anulada se concretan al tiempo en que duró la misma; siendo el espíritu del legislador, precisamente, delimitar la protección al cónyuge que, de buena fe celebró el vínculo que se nulificó, únicamente a que el matrimonio declarado nulo surta efectos civiles a su favor. Toca en Definitiva número 461/2006. Sentencia emitida en fecha 31 de Octubre de 2006 por la Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Atenea Itendehuit Miranda Galindo.

131. ALIMENTOS. EN EL CASO DE NO JUSTIFICARSE TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, NO ES INDISPENSABLE SU COMPROBACIÓN, PUES SON DE CONOCIMIENTO COMÚN SU MONTO APROXIMADO. Es así, que sumando el total de los gastos generados por los conceptos cuyas cantidades se precisan en líneas anteriores, mismos que aún cuando no están contemplados en su totalidad los requerimiento básicos que comprenden los alimentos, es de conocimiento común que para arribar al monto que sea mas adecuado fijar a favor de los acreedores, no es indispensable su comprobación, como se ha sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, y que medularmente, en lo que interesa, resuelve: "... Cabe precisar que el tema relativo a la capacidad económica del deudor alimentista ya no es materia de la presente litis constitucional, como quedó establecido en párrafos precedentes. Ahora bien, dada la finalidad perseguida por dicha institución, no es factible que la falta de pruebas que demuestren específicamente a cuánto asciende el monto mensual necesario para satisfacer las necesidades alimentarias de los acreedores, impida al órgano jurisdiccional fijar con aproximación la pensión respectiva, como lo hizo, y sin que se trate de apreciaciones personales y subjetivas de la responsable como lo menciona, pues es del conocimiento común de la gente y por disposición de la ley, los rubros que comprenden los alimentos para una familia." Toca de apelación en definitiva número 381/2006 relativo al Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 22 de noviembre del 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

132. CONVIVENCIA DE MENORES, AUN CUANDO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS ALIMENTOS, QUEDA SUPEDITADA A QUE NO REPRESENTE RIESGO PARA ELLOS. En tal virtud, es dable destacar que, el derecho a la convivencia de la parte actora, deberá quedar supeditado a que en primer lugar, se cumpla fehacientemente con la obligación de proporcionarle alimentos a sus hijas, y en segundo lugar a que también que se hayan realizado las recomendaciones efectuadas por la profesionista que intervino en primera instancia en la evaluación ecosistémica que les practico a toda la familia, consistentes en terapia psicológica para ambos padres y a las menores, sobre todo para la niña, y hecho que sea lo anterior, una vez que se acredite que es posible y benéfico otorgar la convivencia de padre e hijas, el Juez que corresponda, deberá fijar el régimen de visitas más apropiado para las partes, anteponiendo siempre el interés superior de las menores en base a los razonamientos efectuados en ésta resolución, pues si bien es cierto que existen criterios en diversas tesis jurisprudenciales donde se considera que el incumplimiento parcial en las obligaciones alimenticias no es obstáculo para que alguno de los progenitores conviva con sus hijos, en el caso concreto que nos ocupa, el señor, ni presuntamente demostró cumplir con dicha exigencia en forma parcial, mucho menos total, además de que se suma a lo anterior, la circunstancia de lo expuesto por la Psicóloga de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, donde recomienda que se sometan a terapia los integrantes de la

familia, sobre todo la menor, y que por la imagen que reportan las menores de su padre, fijar una convivencia entre ellos sería forzarlas a algo que no desean y que no esta dentro de sus intereses, es decir, de lo anterior queda evidenciado, que la negación a que el actor del juicio vea y conviva con sus hijas, no es solamente por la falta de cumplimiento sus deberes alimentarios, sino también a las consideraciones antes detalladas. Toca en definitiva 401/2006 formado con motivo del Juicio Especial Sobre Convivencia y Posesión Interina de Menores. Sentencia de fecha 28-veintiocho de noviembre del 2006, dictada por la Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

133. CLÁUSULA TESTAMENTARIA ESPECIAL. NO DEJA DE TENER EFECTOS POR LA EXISTENCIA DE UN TESTAMENTO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR QUE LA CONTIENE, EN LA QUE SE DISPONEN DE LOS BIENES QUE LO CONSTITUYEN. Independientemente de que la cláusula testamentaria sea un tipo especial de testamento, no por esta sola circunstancia se le deben aplicar todas y cada una de las normas que regulan a los testamentos en general, precisamente por la especialidad de la sucesión y transmisión hereditaria de los bienes afectados por el patrimonio familiar. En efecto, desacierta la Alcista cuando arguye que no existe razón legal alguna para limitar el derecho que la ley concede para disponer de los bienes por testamento después de la muerte, y que la A quo olvidó que el autor de la sucesión en momento posterior a la constitución del patrimonio familiar, y mediante nuevo testamento, cambió su voluntad y determinó designar a la actora, hoy apelante, como única y universal heredera de todos sus bienes, opinión que no se comparte por esta Autoridad, en virtud de que el patrimonio familiar es una afectación que se realiza sobre los bienes que lo constituyen, estableciéndose en el artículo 723 del Código Civil aplicable al caso que nos ocupa, que dichos bienes serán inalienables y no estarán sujetos a embargo o gravamen alguno, excepto en los casos a los que el mismo numeral se refiere, por lo que resulta inconcuso que dicho bien sobre el cual se constituyó el patrimonio familiar se encontraba afectado por el mismo, al momento de celebrarse el testamento en el que la hoy accionante funda su acción, deviniendo también incuestionable que no podía transmitirse la propiedad afectada por ningún acto traslativo de dominio que no fuera sino a través de la sucesión plasmada en la cláusula testamentaria especial, pues el autor de la herencia no podía disponer libremente del bien, al encontrarse afectado por el patrimonio familiar, el cual no solamente se constituyó por la sola voluntad de quien adquiría el inmueble en cuestión, sino porque tuvo intervención el Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso creado por éste, denominado “Fomento Metropolitano de Monterrey” (FOMERREY), surtiéndose los supuestos a los que se refiere el artículo 734 del Código Civil de la entidad, aplicable al caso que nos ocupa, por lo que era necesario que en el acto se estableciera la cláusula testamentaria automática, al ser la única forma de transmisión del dominio del inmueble, en términos de lo previsto por el segundo párrafo del diverso numeral 2211 del cuerpo de leyes en cita, el cual textualmente reza: *“En los casos en que se contrae el Artículo 734 de*

este Código se hará constar expresamente en el título de propiedad que se formaliza la constitución del, patrimonio familiar, estableciéndose además cláusula testamentaria automática en la que se determine que al fallecimiento de cualquiera de los cónyuges o concubinos, el que sobreviva será heredero de los derechos correspondientes al patrimonio familiar y que a falta de ambos, dicho carácter lo tendrán los hijos. El título referido podrá constar en documento privado, sin la exigencia de testigos o ratificación de firmas". En tal virtud, al resultar inalienable el inmueble sobre el cual se constituyó el patrimonio familiar, cuya cancelación hoy se reclama, y al ser la cláusula testamentaria automática la única manera de transmitirse el dominio del mismo, deviene inconcuso que el testamento que con posterioridad a su constitución se haya otorgado en nada le afecta, al no poder disponer libremente el autor de la herencia de dicho bien, al encontrarse afectado, asistiéndole razón a la resolutora primigenia, en cuanto a lo determinado a que la cláusula testamentaria automática forma parte de la constitución del patrimonio familiar, y que, por ende, no es factible que porque el señor XYZ haya llevado a cabo un testamento con posterioridad a la constitución del patrimonio de familia, se deje insubsistente la cláusula testamentaria automática integrante del acto, ya que, efectivamente y como bien lo determinó la A quo, el inmueble se encuentra afectado por dicha figura jurídica, la que busca proteger el entorno familiar y la única forma de transmisión es por muerte de quien la constituye, de acuerdo a la propia cláusula de referencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 082/2006. Juicio Ordinario Civil Sobre Cancelación de Patrimonio Familiar. Sentencia emitida el 27 de septiembre de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

134. DIVORCIO NECESARIO. ANTE INDICIOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EXISTENCIA DE MENORES, QUEDA OBLIGADO EL JUZGADOR A INTERVENIR DE OFICIO, ORDENANDO DESAHOGAR LA PERICIAL EN PSICOLOGÍA A FIN DE RESOLVER LO MÁS BENÉFICO A FAVOR DE AQUELLOS. Si en los casos en que se promueva la acción de divorcio necesario, el juzgador advierte el más mínimo indicio de violencia familiar ejercido por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de uno de ellos o de ambos, deberá tomar en cuenta su facultad legal para intervenir de oficio en los asuntos que se refieren a violencia familiar, ordenando recabar la prueba pericial en materia de psicología para determinar el estado mental de los menores hijos, así como la afectación que pudiera irrogarles el continuar conviviendo con el progenitor agresor, pudiendo constreñir el derecho de convivencia, para proteger la integridad de los párvulos, a fin de evitar que se afecte su integridad física, psíquica, o ambas. Toca en definitiva 281/2006 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 13 de diciembre del 2006. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

135. EN INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES, ES CORRECTO ABSOLVER AL ALBACEA DEL PAGO DE GASTOS Y COSTAS EN CASO DE QUE NO LE RESULTA FAVORABLE UNA SENTENCIA, CUANDO LA MASA HEREDITARIA ES EXCLUSIVAMENTE A FAVOR DE ELLOS. En lo que concierne a la condenación de gastos y costas en esta Alzada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 91 y 93 del Ordenamiento Adjetivo Civil del Estado, y si bien es cierto que no procedió el recurso de apelación interpuesto por la albacea en su carácter exclusivamente de albacea de la sucesión del señor, esta Autoridad, tiene a bien absolver a la recurrente del pago de este concepto; lo anterior atendiendo que, de una armónica interpretación de los numerales 952 del Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, y 1º, 3, 4 y 14 de la Ley par la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también los numerales 18, 20 y demás relativos de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo león, se concluye que el espíritu del legislador es el de proteger el derecho de los niños, de manera prioritaria, subordinando el ejercicio de cualesquier otro derecho que pueda deducirse, otorgado a los adultos. Corolario de ello, es prioritario y superior los derechos hereditarios de los menores, al derecho de su abuela paterna a ser resarcido en los gastos y costas que le pudiere haber originado la substanciación en esta Alzada del recurso de apelación promovido por la accionante, quien no resultó beneficiada con el mismo; por lo que, en el caso concreto esto implica que no puede producirse menoscabo alguno al derecho que le asiste a los infantes, a heredar por parte de su progenitor, dado que, la masa hereditaria que les pudiera corresponder se puede ver afectada al destinar de ella cantidad alguna para el pago de gastos y costas que haya erogado la abuela de ellos. Toca en artículo 466/2006 formado con motivo del juicio sucesorio de intestado ordinario. Sentencia emitida el día 12-doce de diciembre del 2006 por la Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

136. JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO, ES CORRECTO DECLARAR DERECHO A PERCIBIR ALIMENTOS DE ASCENDIENTE CUANDO CONCURRE CON DESCENDIENTES AL PROCEDIMIENTO, SIN QUE IMPLIQUE QUE SE FIJE PENSIÓN EN ESE MOMENTO O QUE PROCEDA LA ACCIÓN.- En principio, tenemos que, tal como quedó asentado en el análisis del agravio que antecede, la madre del de cujus, acreditó su entroncamiento con el autor de la herencia; y efectivamente como lo asevera la apelante, la mencionada ascendiente del de cujus, al momento de comparecer a juicio, solamente solicito se le tuviera por compareciendo como presunta heredera del autor de la herencia, , sin embargo, del numeral 1508 del Código Civil del Estado, que a la letra dice: “Artículo 1508.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.”; se desprende que, concurriendo hijos del de cujus con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, es decir, independientemente de que lo haya solicitado o no la madre del autor de la herencia, la Autoridad de Primer Grado se encontraba obligada a observar tal situación y

conforme al citado numeral, hacer declaratoria la respecto, pues en el caso concreto, se dio la hipótesis contenida en dicho precepto ya que concurrió la mamá del de cujus en su carácter de ascendiente con los hijos del señor, (entendiéndose por concurrir: Juntarse en un mismo lugar o tiempo diferentes personas, sucesos o cosas, según el Diccionario Océano Uno Color de Editorial Océano), por lo que la sentencia que se revisa fue congruente en lo resuelto, al apegarse a lo estipulado por nuestra legislación para el caso de que comparecieran dichas personas al juicio de intestado, no obstante de que no se haya solicitado expresamente que se le declarara el derecho a percibir alimentos, pues éste es un derecho establecido por el artículo 1508 del Código Civil, y tal como se dijo antes, la Autoridad de Primer Grado estaba constreñida a acatarlo y de esa manera cumplir cabalmente con el artículo 405 del Código Procesal Civil que establece entre otras cosas, que en toda sentencia se deben invocar los preceptos legales aplicables, por lo que en ningún momento, dicha Autoridad violentó el principio de congruencia consagrado en el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Toca en artículo 466/2006 formado con motivo del Juicio Sucesorio de Intestado Ordinario. Sentencia emitida el día 12-doce de diciembre del 2006 por la Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

137. PATRIMONIO FAMILIAR. EL SIMPLE TRANSCURSO DEL PLAZO DE QUINCE AÑOS AL QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 739 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES INSUFICIENTE PARA DECRETAR LA CANCELACIÓN DEL. En efecto, de una interpretación integral y relacionada de los artículos 723, 724, 725, 727, 728, 729 730, 731 732, 733, 738 y 744 del Código Civil de nuestra entidad, aplicable al caso que nos ocupa, se puede concluir en que el patrimonio familiar es una figura jurídica que afecta a los bienes sobre los cuales se constituye, al ya no poder disponerse libremente de los mismos, mientras no se proceda a su cancelación, siendo inalienables y no poder estar sujetos a embargo ni gravamen alguno, salvo los supuestos excepcionales expresamente señalados en la misma ley. Bajo este orden de ideas, cabe hacer mención de que, en cuanto a la cancelación del patrimonio de familia, debe atenderse primeramente a la forma en que el mismo se encuentra constituido, puesto que la cancelación reclamada se funda en lo dispuesto en al fracción V del artículo 739 del Código Civil de la entidad, apreciándose de dicho apartado que el supuesto contenido en dicha fracción solamente es aplicable en los casos previstos en el diverso numeral 734 de la misma legislación, es decir, cuando haya una intervención del Gobierno, como acontece en la especie, pues en el caso que nos ocupa, del contrato de compraventa base de la acción, mediante el cual se constituyó el patrimonio familiar cuya cancelación ahora se pretende, se desprende que sí existe una intervención por parte del Gobierno, en virtud de que el inmueble fue enajenado a través del fideicomiso creado por éste, denominado “Fomento Metropolitano de Monterrey” (FOMERREY), deduciéndose de la cláusula cuarta que, se obligó, precisamente, al Superior del Gobierno del Estado, al saneamiento para el caso de evicción, por lo que se tiene que el patrimonio familiar se constituyó conforme a lo previsto por el artículo 734 del Código Civil de la entidad,

aplicable al caso que nos ocupa, apareciendo que la promovente refiere que en su opinión, dicha afectación debe estimarse extinguida a los 15 quince años posteriores a su constitución, por estar así previsto por la fracción V del diverso numeral 739 del Código Civil, opinión que no se comparte por esta Alzada en virtud de que no es suficiente el simple transcurso del lapso de tiempo al que se refiere dicho apartado, sino que es necesario que exista la declaratoria de que queda extinguido el patrimonio familiar, según se colige de lo establecido por el artículo 740 del cuerpo de leyes en cita, ya sea por la autoridad judicial, o bien, por la autoridad administrativa a la cual el Ejecutivo del Estado le delegue dicha facultad, haciéndose referencia expresa en su segundo párrafo precisamente a la hipótesis contenida a la fracción V del artículo 739 de la codificación de mérito, en el que la actora funda su reclamo, advirtiéndose igualmente que la declaración de referencia debe ser comunicada al Registro Público para que haga la correspondiente inscripción, siendo la única excepción para estimar innecesaria la declaratoria de referencia, cuando el patrimonio se extinga por la expropiación que se haga sobre los bienes que lo constituyen a causa de utilidad publica, sin que se advierta que dicha declaración de extinción tenga efectos retroactivos a la fecha en que se cumplió el plazo de la misma, por lo que atendiendo al principio de derecho que reza: “Donde la ley no distingue, no cabe distinguir”, resulta incuestionable que los efectos de la cancelación se surten hasta el momento en que la misma es pronunciada y se inscribe en el Registro Público, por lo que no le asiste razón a la promovente cuando refiere que la extinción operó de manera automática y de pleno derecho, cumplido el plazo de quince años a partir de la constitución del patrimonio familiar, ya que, según lo reseñado en líneas precedentes, es necesaria la declaratoria que se haga sobre el particular por la autoridad correspondiente, así como la anotación en el Registro Público, pues solamente así puede quedar extinguida dicha afectación, apareciendo que del negocio que nos ocupa, no se advierte que se haya dado cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del citado artículo 740 del Código Civil del Estado, razones por las que se estima improcedente la cancelación reclamada por la actora. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 082/2006. Juicio Ordinario Civil Sobre Cancelación de Patrimonio Familiar. Sentencia emitida el 27 de septiembre de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

138. REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, AL RESULTAR PROCEDENTE, LA DISMINUCIÓN QUE DEBE SUFRIR LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y NO A UNA OPERACIÓN ARITMÉTICA. Al haber resultado procedente la incidencia, mediante la cual se ordena que deba quedar insubsistente la pensión alimenticia respecto a uno de los acreedores alimentistas en cuyo favor se había decretado la misma originalmente, ello no es razón bastante y suficiente, para reducir el importe de dicha pensión a la mitad, ya que si dicha pensión en origen debía satisfacer las necesidades de dos acreedores, y ahora dicha asignación debe ser para cubrir únicamente las necesidades del menor por quien subsiste, al no encontrarse previamente delimitado en la sentencia que

fijo esa pensión el porcentaje equivalente que para cada acreedor correspondiera, resulta incorrecta la premisa de que se parte para reducir a la mitad la pensión en cuestión, precisamente porque esta pensión no parte de un principio aritmético, sino de uno proporcional, en virtud del cual deben apreciarse y valorarse las necesidades de los acreedores, conforme al artículo 311 del Código Civil del Estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 284/2006. Juicio Sumario de Alimentos. Sentencia emitida el 31 de agosto de 2006. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

139. CONTROVERSIAS DE PATERNIDAD. AL ESTAR EN LITIGIO EL DERECHO DE IDENTIDAD DEL MENOR, ESTAS DEBEN RESOLVERSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA, RECABANDO LA PRUEBA EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), O CUALESQUIER OTRO ELEMENTO DE CONVICCIÓN QUE PERMITA ESCLARECER EL PUNTO CUESTIONADO. En los juicios sobre controversia de paternidad, no debe perderse de vista que el derecho primordialmente discutido lo es el derecho a la identidad del menor cuya filiación se reclama, ya sea en reconocimiento o desconocimiento de la misma, según se advierte de lo dispuesto por el artículo 22, fracción “C)”, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derecho del cual resulta inconcuso que los menores, para su completo y normal desarrollo, ocupan contar con una figura paterna con la cual puedan, no solamente identificarse y habituarse a convivir, sino contar también con el apoyo emocional y económico para que, en armonía con el vínculo materno, se logre un sano desarrollo físico y psicológico de dichos párvulos. Así, para lograr la correcta protección de los derechos de un menor involucrado en una contienda judicial, es menester tomar todas las medidas necesarias para su salvaguarda, y agotar toda diligencia que permita esclarecer el punto cuestionado, a fin de resolver lo que más le aproveche y convenga. En tal virtud, al consistir la identidad un derecho de los niños reconocido en la ley, para que éstos conozcan sus orígenes y filiación, es incuestionable que resultó necesario que la juez de la causa, en interés superior del menor, debió hacer uso de los diversos medios legales que estén a su alcance, a fin de averiguar la verdad de los hechos materia de la litis, así como tomar las medidas necesarias para la salvaguarda de sus derechos, esto con fundamento además en los artículos 4, 7, 13 B), 14, 19, 21 y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 1, 49, 952 y 954 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 1 y 4 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí que se estime, la autoridad de origen debió ordenar la práctica de una prueba en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), con el fin de indagar la autentica filiación y consecuente identidad del menor involucrado. Esto de conformidad con los artículos 49, 952 y 954 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 381 BIS del Código Civil de la entidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 083/2007. Juicio Ordinario Civil Sobre

Contradicción De Paternidad. Sentencia emitida el 26 veintiséis de junio de 2007 dos mil siete. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Rafael Antonio Torres Fernández.

140. DIVORCIO. LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN LA CAUSAL XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL, CONSTITUYE UNA SENTENCIA CONDENATORIA Y NO DECLARATIVA. Por sentencia declarativa debe entenderse aquella que tiene por objeto la pura declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sin que vayan más allá de esa declaración, pero en todas ellas se encuentra como elemento esencial, el que se estudia y resuelve el mérito o fondo de la cuestión, de la misma manera que se hace en los otros tipos de sentencias; mientras que la sentencia condenatoria lo constituye una declaración respecto del derecho del actor y de la obligación correlativa del demandado, además ordena la ejecución forzosa para el caso de que éste último no cumpla con la obligación declarado por la Juzgadora. Tomando como referencia lo anterior, el procedimiento que ahora es analizado, su fallo no debe catalogarse como declarativa, sino como se citó antes, es propiamente condenatoria, ya que las consecuencias legales que involucra la disolución del vínculo matrimonial, deriva una serie de circunstancias que el demandado debe acatar, pues en la sentencia dictada, se ordena principalmente la pretensión buscada por la accionante, que es la separación de manera definitiva de su enlace matrimonial; empero, a raíz de dicha ruptura, sobrelleva a la disolución de los bienes que hayan sido adquiridos por los contendientes, ya que si bien, se aprecia que las partes celebraron su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, también es, que puede darse el caso de que hayan comprado bienes de manera conjunta, lo cual es evidente que oportunamente se solicite la división de esa copropiedad, y en caso de que alguno de los protagonistas entorpezca tal partición, la autoridad con base a las disposiciones legales aplicables, ejecutará forzosamente esa obligatoriedad a que fueron conminados y, a partir de ahí, se encuentran sujetos a la aplicación de alguna medida correctiva que establece el numeral 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para el caso de incumplimiento a las determinaciones judiciales que ordene la autoridad de génesis, es por eso, que la sentencia pronunciada es condenatoria, porque sí contiene diferentes cuestiones que deben ventilarse al momento de agotarse la acción principal. Toca de Apelación en definitiva número 378/2007 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 24 de Septiembre del 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Javier Arturo Hurtado Leija.

141. DIVORCIO. CAUSAL XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUANDO SE ENCUENTRA JUSTIFICADA LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES DEBE DECRETARSE SU IMPROCEDENCIA. Cuando dentro del escrito inicial de demanda, el promovente (parte actora), hace alusión a la existencia de un procedimiento de divorcio anterior a la

demanda, mismo que se encontró subsistente durante la temporalidad de los dos años necesarios para que operara la causal invocada, consistente en la causal XIX del artículo 267 del Código Civil estatal, la invocación de tal hecho de parte del propio accionante, excluye por sí la operancia de dicha causal, pues la norma en cita, en su literalidad, sanciona exclusivamente la separación injustificada de los cónyuges, a diferencia de lo que acontece en otros estados de la República, donde fue igualmente incluida dicha causal, empero sin alusión a la justificación de la separación. En efecto, si el accionante alegaba encontrarse separado de su esposa por más de dos años, y en el tiempo inmediato anterior a la presentación de su demanda, aún se encontraba sub-júdice diversa acción de divorcio intentada por el mismo accionante en contra de su cónyuge, lo que el mismo expresó en la narrativa de hechos de su demanda e incluso acompañó copias certificadas de dicho juicio, debe colegirse, al ser uno de los efectos provisionales del juicio de divorcio, que durante su substanciación las partes en contienda, por virtud de su familiaridad y con motivo del pleito judicial, permanezcan separados, la separación de los consortes en contienda, al menos durante el tiempo que duró dicho procedimiento, se encuentra justificada, en términos del artículo 281 fracción I del citado ordenamiento. Situación que debió ser valorada y apreciada por el juez de los autos, aún cuando no se invocara como defensa, por haberse alegado tal situación dentro de los propios hechos de la demanda. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 322/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 31 de agosto de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

142. EN LOS CASOS DE DIVORCIO DONDE SE INVOCA LA CAUSAL XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL, ES PROCEDENTE CONDENAR EN COSTAS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Por otro lado, resulta también infundado el motivo de agravio, consistente en que el Juzgador inobservó lo establecido en los numerales 267 fracción XIX del Código Civil y 90, 91, 92 del Código Procesal Civil de la Entidad, aduciendo que el primer numeral dice que en dicha causal ninguno de los cónyuges tendrá la calidad de culpable, lo anterior se estima así porque se advierte de lo actuado en primera instancia, que el Juez de la causa, en ningún momento pronunció una resolución que no estuviera apegada a los preceptos legales que establece nuestra legislación procesal, ya que el capítulo VI, del Título Primero, del Libro Primero del Código Legal Civil del Estado, regula el apartado concerniente a las costas que se originan después de tramitada una controversia judicial. Como resultado a lo plasmado con anterioridad, se advierte que la inferior dictó un veredicto condenatorio, apegado al cuerpo de la normatividad aplicada a su función jurisdiccional, ya que resulta evidente que según las disposiciones legales mencionadas antes, en toda sentencia definitiva dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, por lo tanto, la resolución debe decidir a quién se le debe condenar a dicho gravamen o si no procede condena en ese punto; por ende, ante la circunstancia de que el actor probó su acción y se le condenó en absoluta

conformidad a la parte demandada, se estima acertada la opinión aplicada por el Juzgador, pues tal razonamiento deriva de un juicio llevado a cabo ante una autoridad, para lo cual el Juez estaba compelido a efectuar condena en gastos, y lo efectuó de manera correcta, al haber procedido la acción intentada, y al no desvirtuarse la acción intentada a través de excepciones de la demandada, es por ello que resulta acertada la decisión de la A quo de realizar tal condena en acatamiento a lo establecido por el multicitado numeral 91, toda vez que, la situación de que en la referida causal ninguno de los cónyuges tenga el carácter de culpable en nada se relaciona con lo anterior, pues dicha circunstancia se refiere a las consecuencias inherentes al vínculo que se disuelve, entre las cuales se encuentran las obligaciones de los alimentos o lapsos referentes a impedimentos para contraer nuevo matrimonio, mismos que se encuentran regulados por los artículos 286, 288, 289 y demás relativos del Código Civil Estadual, y no para el caso de determinar el pago de los gastos y costas en caso de que proceda la causal consistente en: "*La separación de los cónyuges por más de dos años siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio*."; además la condena en gastos y costas no señala ninguna salvedad para el caso de que se ejercite la causal de divorcio intentada por el actor, en consecuencia, se reitera lo infundado del disenso en análisis por las razones antes citadas. Toca en definitiva 425/06 formado con motivo del Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, sentencia dictada el día 28 de septiembre de 2007 por la Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

143. INJURIA GRAVE. EL OCULTAMIENTO DE LA DONACIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL SIN COMUNICAR TAL SITUACIÓN A LA ESPOSA, ES CONSTITUTIVO DE. CUANDO ESTA SE ENTERA DEL ACTO JURÍDICO REFERIDO AL SER REQUERIDA DE LA DESOCUPACIÓN DEL CITADO INMUEBLE. Resulta evidente que, al haber procedido el esposo demandado de la forma en que lo hizo, esto es, disponer del bien inmueble donde los contendientes fijaron su residencia conyugal para donarlo a un tercero, sin comunicar dicho acto jurídico a su esposa, y continuar ocultando tal acto traslativo de dominio durante la materialización de la separación provisional de cónyuges, y hasta el día en que la actora tuvo conocimiento del acto jurídico en cuestión, porque fue requerida de la desocupación del lugar que constituyó el hogar conyugal de las partes y el domicilio de los hijos menores de edad procreados por estos; todo ello, hace evidente: dicha omisión se llevó a cabo con la total intención de romper con los principios de ayuda y socorro mutuos, pues dicha falta de consideración para con la consorte atenta contra su dignidad de esposa, y por tanto, también quebranta la autoridad que la referida consorte poseía en su casa, pues dicha falta de diálogo y comunicación trajo como consecuencia, que la demandante y sus hijos menores de edad tengan que abandonar el lugar en el que han habitado, lo cual, dada su posición social agrava aún más el sentimiento de humillación que dicho proceder genera, máxime por que no consta en las actuaciones judiciales, que el demandado se ocupara de proveer a su familia (hijos y consorte) de otro lugar para establecer su residencia, siendo propiamente dichas omisiones (comunicar a su esposa que donó el domicilio conyugal y el

no procurar establecer una vivienda sino con las mismas, al menos en semejantes condiciones de vida) lo que constituye una injuria grave hacia la accionante, pues no fue si quiera enterada de los propósitos del demandado respecto de la donación que pretendía llevar a cabo del bien inmueble que constituye el domicilio conyugal de los contendientes, independientemente de que el bien en cuestión perteneciera en exclusiva propiedad al demandado, pues lo que se sanciona, es la omisión de comunicarle a la demandante que donó el domicilio conyugal, así como el soslayar proporcionar una vivienda a su familia, sobre todo, considerando que los hijos procreados por las partes contaban en ese entonces con casi cuatro años de vida; denotando con ello una actitud de desprecio para con la accionante, al ni siquiera tomarla en cuenta para llevar a cabo un acto traslativo de dominio del inmueble donde se estableció el hogar connubial. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 30 de marzo de 2007. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Secretario: Atenea I. Miranda Galindo.

144. NO ES IMPEDIMENTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DENTRO DE UNA SUCESIÓN, EL HABER SIDO REMOVIDO EN DIVERSO JUICIO SUCESORIO DONDE SE DESEMPEÑABA IGUAL ENCOMIENDA. No es obstáculo para ejercer el cargo de albacea dentro de una sucesión, el haber sido removido en diverso juicio sucesorio donde se desempeñaba igual encomienda, pues para que se actualice el supuesto a que hace referencia la fracción II del artículo 1577 del Código Civil del Estado de Nuevo León, debe acontecer que en el mismo juicio hereditario, haya sido removido de nueva cuenta por haber incurrido en acción u omisión respecto de los deberes y obligaciones del cargo, en riesgo, daño, menoscabo o perjuicio de la herencia que ameritó su remoción; empero, bajo ninguna circunstancia puede considerarse que el desempeño de un albaceazgo en diverso juicio sucesoral, deba tener la misma consecuencia en juicios diferentes, llevado conforme lineamientos jurídicos distintos, puesto que los efectos del albaceazgo se constriñen únicamente a la sucesión que representan, siguiéndola hasta la entrega de los bienes, concluyendo así en el encargo, como se hace mención en el artículo 1644 del Código Civil de la Entidad. Toca de Apelación en Artículo 356/2007. Juicio Sucesorio de Intestado, Primera Sección. Sentencia emitida el día 31 de agosto de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Nancy Aurora Torres Luna.

145. NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. EL INFORME SOBRE LA PERSONA QUE DEBE SER NOTIFICADA, SIENDO EXTRANJERA, DEBE RENDIRLO EL DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL LUGAR DONDE ESTÉ UBICADO EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL QUE SE TENGA CONOCIMIENTO. La disposición que autoriza para hacer el emplazamiento por medio de edictos, cuando se ignora el domicilio del demandado, debe entenderse que tiene aplicación a los casos en que la

ignorancia es absoluta, al grado de que resulta imposible la localización de la persona que debe ser notificada. En el caso, no se cumplen esos propósitos con el llamado a juicio a través de edictos como lo ordenó la juzgadora, habida cuenta de que lo hizo a partir del oficio que giró al Ciudadano Vocal Electoral del Instituto Federal Electoral del Estado, y sucede que en la especie está demostrado que la demandada es extranjera, según se aprecia de la copia certificada del acta de matrimonio de los contendientes y del documento migratorio del no inmigrante FM3, expedido por la Secretaría de Gobernación, por lo que lógico es que no se encuentra registrada en la base de datos del padrón electoral de la entidad, en la que sólo se encuentran las personas de nacionalidad mexicana, de manera que ésta no es la autoridad apropiada para localizar a la demandada, pues por las razones antes apuntadas, ningún dato puede proporcionar acerca de su domicilio; luego, no se está en el supuesto de considerar que se desconoce el paradero de la demandada; en tal virtud, si la Resolutora advierte la nacionalidad extranjera del que se busca, es indudable que a fin de indagar su paradero, debió girar oficio al Ciudadano Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración de Nuevo León, Secretaría de Gobernación, quien se encarga de sujetar a los extranjeros a reglas propias que implican el sometimiento al control y vigilancia por parte del Estado, cuando se internan al territorio nacional, por ende, es la autoridad adecuada para especificar si la demandada ha salido del país, y en el supuesto caso de obtener una respuesta negativa, girar oficio a las autoridades que estime pertinentes para que procedan indagar el paradero de la demandada cuyo domicilio se ignora, y una vez efectuada la investigación correspondiente, fuera infructuosa su localización, debido al desconocimiento general de su paradero, podrá ordenar el emplazamiento por edictos; empero, si por el contrario, del informe rendido por el Instituto Nacional de Migración del Estado, se advierte su salida del país, no se está en el supuesto de considerar que se desconoce su paradero y con ello emplazarla por edictos, porque será del pleno conocimiento del juzgador que la demandada se encuentra en un país extranjero. Por consiguiente, en dicho supuesto, deberá mediante carta rogatoria que se remita al país en el que se encuentre radicando la demandada, emplazarla, para que el llamamiento a juicio revista la legalidad debida, en cuanto a que indefectiblemente tiene que hacerse en el domicilio en que vive la demandada. Sin embargo, a pesar de la violación procesal relativa al emplazamiento de la demandada, no procede reponer el procedimiento a fin de llamarla a juicio, pues a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento que a final de cuentas resultaría improcedente por los mismos motivos expuestos en párrafos precedentes, esto es, debido a que posterior al análisis de la demanda se desprende que el actor no cumplió con los requisitos de procedencia de la causal de injurias graves en que sustentó su acción, al omitir narrar la circunstancia de tiempo en que las mismas le fueron proferidas por la demandada, puesto que una vez expuestas en el escrito inicial de demanda, no pueden ser modificadas con posterioridad, por ende, no le causa agravio alguno a la demandada la ilegalidad del emplazamiento. Toca en definitiva 298/2006 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 23 de agosto del 2006. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

146. PATRIA POTESTAD. PROCEDE LA PÉRDIDA DE SU EJERCICIO Y NO LA SUSPENSIÓN, CUANDO SE JUSTIFICÓ EN UN MISMO PROCEDIMIENTO, ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PARA DECRETAR UNA U OTRA DETERMINACIÓN JUDICIAL. Conforme el artículo 447, fracción I, del Código Civil para nuestro Estado, procede suspender el ejercicio de la patria potestad, por la incapacidad declarada judicialmente. Sin embargo, si en un mismo procedimiento, se acreditó al demandado dicha circunstancia y, asimismo, que ha tenido conductas consideradas de violencia familiar respecto su hijo menor de edad, así como que, este último presenta daños psicológicos con motivo de la conducta violenta de su progenitor, legalmente no es factible condenar al demandado a la suspensión del ejercicio de la patria potestad con fundamento en el artículo 447, fracción I, del Código Civil Estatal, pues, procede condenarlo a la pérdida de dicho ejercicio, puesto que, por la conducta violenta acreditada al enjuiciado y los daños psicológicos demostrados al menor de edad, así como la gravedad que implica uno y otro aspecto, se configura una de las causas para decretar la pérdida de la patria potestad y debe decretarse la misma por la trascendencia del caso, dado que, conforme lo previsto en la fracción III, del artículo 444 del Código Civil Estatal, los malos tratos, cuando puedan comprometer la salud, seguridad, dignidad, integridad o moralidad del menor, son causa de pérdida de la figura jurídica en mención. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 206/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 30-treinta de Julio de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

147. REGISTRO CIVIL, CANCELACIÓN DE ACTAS DEL. SI EL ACTOR SOSTIENE QUE EL ACTA DE DEFUNCIÓN POR CANCELAR ES LA SUYA, REQUIERE PROBAR SU IDENTIDAD CON EL TITULAR DE LA MISMA. Si una persona demanda la cancelación de un acta de defunción que dice ser la suya, se requiere que acredite como elemento indispensable de su legitimación a la causa, su identidad con la persona que por medio de dicha acta aparece registrada, a fin de adecuarse al supuesto de legitimación que consagra la fracción I del artículo 136 del Código Civil para Nuevo León, que dispone: "Artículo 136. La cancelación, la rectificación, o la modificación de un acta del estado civil, pueden pedirla: I.- Las personas de cuyo estado se trata...". Toca de Apelación en Definitiva 262/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Cancelación de Acta del Registro Civil. Sentencia emitida el día 28 de septiembre de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Martha Eugenia de la Rosa García.

148. SUCESIÓN HEREDITARIA, OPERA A FAVOR DE SUS HEREDEROS LEGÍTIMOS O TESTAMENTARIOS, A LA MUERTE DEL AUTOR DE LA HERENCIA, AÚN CUANDO NO HAYA SIDO DENUNCIADA. Al disponer el artículo 1185 de nuestro Código Civil, que a la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, entre tanto, se proceda a la división. De su contenido expreso, debemos concluir, que la transmisión

hereditaria de una persona opera de hecho y por derecho al momento de su fallecimiento, con independencia de la falta de forma que deba otorgársele a través de cualesquiera de los procedimientos sucesorios. De tal manera si en el presente se denuncia acumuladamente la sucesión de un padre, y de su único hijo, al constatarse de las partidas de defunción de cada uno de ellos, que el fallecimiento del hijo fue posterior al de su padre; la sucesión de éste último, ante la ausencia de otros herederos legítimos, operó por derecho a favor de su único hijo, más aún cuando se otorgó disposición testamentaria declarándolo único y universal heredero de los bienes del padre. Por lo que en tal caso, la declaratoria de herederos correspondiente a la primera sección de la sucesión del padre, debe considerarse opere a favor y en provecho de la sucesión legítima de su único hijo, y no como sucesión intestada del padre. Toca de Apelación en Artículo 232/2007. Juicio Sucesorio Intestado, Primera Sección. Sentencia emitida el 19 de julio de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

149. ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ALIMENTISTA NO CUENTA CON INGRESOS FIJOS, ELLO NO EXIME LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR EL SUSTENTO A QUIEN TIENE DERECHO DE EXIGIRSELO. Tratándose de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir de todas formas las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. En efecto, lo dicho con anterioridad, no exime al deudor la obligación de entregar el sustento a quien tiene el derecho de exigírselo, pues de autos quedó plenamente evidenciado que la parte demandada, es propietario de una negociación dedicada al ramo computacional, y, con motivo de ello puede generar recursos económicos, suficientes para solventar sus propias necesidades alimenticias, lo que, en todo caso, le permite también dar sustento a su consorte, por lo tanto, toda documentación que sirva para presumir el potencial económico del deudor debe tomarse en consideración al momento de resolver sobre su situación financiera, de ahí que, resulta correcta la apreciación que realiza la Juez de la causa para advertir de manera aproximada la economía del ahora quejoso, y con eso, dar cabal cumplimiento a lo estatuido en la fracción II del dispositivo legal 1068 del Código de Procedimientos Civiles. Toca de Apelación en definitiva número 327/2007 relativo al Juicio Oral de Alimentos. Sentencia emitida el 28 de Noviembre del 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Javier Arturo Hurtado Leija.

150. DIVORCIO. LA SEPARACIÓN A QUE SE REFIERE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 267 FRACCION XIX DEL CÓDIGO CIVIL, NO ENTRAÑA NECESARIAMENTE LA COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL DOMICILIO CONYUGAL. Siguiendo con la tarea analítica de los motivos de agravio, se continua con la inconformidad que hace consistir en el hecho de que se violó

en su perjuicio lo establecido en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado porque se el concedió eficacia probatoria a la constancia de Abandono de hogar de fecha 29 de Enero del año 2007 dos mil siete la cual fue expedida por la secretaría de Ayuntamiento de Linares, la cual había objetado señalando que nunca existió domicilio conyugal y que también justificó con la prueba de inspección judicial que se desarrollo donde según el actor establecieron domicilio conyugal, misma que según dice, la A quo relacionó con el testimonio de PATRICIA CIENFUEGOS GÓMEZ y BENITO VAZQUEZ GUERRERO. Es infundado y además inoperante lo que antecede porque la documental señalada, en primer término, no fue objetada, según se colige del escrito de contestación a la demanda, y en el supuesto de que así hubiera sucedido, no existe en el sumario, elemento de prueba tendiente a acreditar la falsedad que supuestamente refiere, pues como es sabido, quien objete un instrumento en términos del artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene la obligación de justificar su dicho, llevándose a cabo su tramite en la vía incidental y resolver lo conducente al momento de dictarse la sentencia definitiva; además, la inoperancia de lo anterior recae en que, independientemente del valor probatorio en cuanto a los alcances del mismo, en nada le perjudica, puesto que la recurrente alega que con la valoración de dicho documento le perjudica porque lo que pretende aseverar es que no existió domicilio conyugal, y esa circunstancia en nada repercute respecto a la causal de divorcio intentada y acreditada por la parte actora del juicio y que hizo consistir en; “La separación de los cónyuges por más de dos años siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan con los fines del matrimonio”; no requiere que se justifique la existencia del domicilio conyugal para la procedencia de la misma, según se advierte de su contenido, de ahí que independientemente de la trascendencia de la instrumental de referencia, en nada afecta la acción de divorcio intentada respecto a su procedencia y alcances. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 434/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 29 de enero de 2008. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: María Susana Alejandro Ortega.

151. DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. PRUEBA TESTIMONIAL, NO ES INDISPENSABLE QUE LOS ATESTES CONOZCAN PERSONALMENTE A LOS CÓNYUGES. Para la actualización de la causal en escrutinio, deben concurrir los siguientes elementos: a) La existencia del matrimonio, b) la separación de los cónyuges por más de dos años, c) que no exista causa justificante de la separación; y d) contravención al cumplimiento de los fines del matrimonio, debiéndose precisar que el tercero de dichos elementos deviene presumiblemente a favor de la parte actora, debiendo en todo caso desvirtuarse por parte de la demandada, al igual que el último de ellos, incumbiendo así, a la parte reo demostrar que se encuentran dando cumplimiento con los fines del matrimonio. Así las cosas, el primero de los requisitos quedó fehacientemente demostrado con la certificación del registro civil relativa al matrimonio de los contendientes, misma a la que se le otorga valor

pleno atento a lo dispuesto por los numerales 239 fracción II, 287 fracción IV, 289 y 369 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, motivo por el cual, no es indispensable que las atestes conozcan a la demandada y les conste sea cónyuge del actor, por ello, no es dable restarle eficacia probatoria al dicho de la primer deponente, solo por el hecho de que hubiera declarado no conocer a la actora, si quedó demostrado el consorcio con la documental antes referida; el segundo elemento de la acción, lo demostró con la testimonial, al advertirse de las declaraciones, la separación de los cónyuges por más de dos años, de cuyas respuestas se aprecia les consta los contendientes no viven en el mismo domicilio, pues la primera ateste refiere que su presentante (actor) vive enfrente de su casa junto con su hermana, es decir, con persona distinta a su consorte, incluso, al dar respuesta a diversa pregunta, afirma que el actor tiene tres años de no vivir con su esposa, máxime que del conjunto de respuestas otorgadas, específicamente de los generales, la razón del dicho y de la copia cotejada de la credencial de elector con la cual se identificaron el día de la audiencia, se advierte manifestaron cómo se dieron cuenta de la separación de los cónyuges por más de dos años, pues de éstas se desprenden que las deponentes viven en la misma calle y casa que el accionante, por lo que humanamente se presume, conforme a los numerales 355 y 356 del ordenamiento procesal civil en vigor, que debido al trato constante con el accionante por ser vecina y hermana de aquel respectivamente, tienen conocimiento que no vive con su cónyuge, resultando lógico que al no existir una cohabitación entre los consortes, tampoco se cumplan el resto de los deberes connubiales, así que los hechos motivo de probanza fueron apreciados a través de los sentidos de las deponentes y conocidos por sí mismas. Igualmente queda acreditado el transcurso del tiempo necesario para que se surta la causal en estudio, pues las testigos mencionaron que los contendientes no viven juntos desde hace tres años, temporalidad que coincide con la referida por el actor en su escrito de demanda, y que excede a los dos años que exige la ley para la configuración de la causal en escrutinio, siendo oportuno precisar que solo se requiere que los declarantes concuerden, por lo menos que aconteció con un lapso mayor de dos años, y si se dio con exceso dicho periodo, resultaría irrelevante establecer la fecha exacta de la referida separación. Toca en definitiva 470/2007 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 22 de noviembre del 2007. Lic. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

152. DIVORCIO, SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS, COMO CAUSAL DE. PROCEDE AUNQUE SE CUMPLA CON EL PAGO DE LOS ALIMENTOS DEBIDOS. En tratándose de la causal en estudio, separación de los cónyuges por más de dos años siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio, basta con que se justifique en el juicio, por cualquier medio de convicción apto y suficiente, que se ha interrumpido la vida en común entre los consortes, durante más de dos años, para que se actualice el rompimiento del vínculo matrimonial. En lo que hace al cuarto de los elementos que implora la causal en análisis, "*Probar que no se cumplen los fines del matrimonio*"; conviene dejar establecido que los citados deberes que

regula el precepto legal 147 del Código Sustantivo Civil del Estado, son los siguientes**:** *a) Asistencia mutua; b) Fidelidad; c) Perpetuar la especie;* y *d) Crear una comunidad de vida permanente*. De los deberes antes citados, el principal como se dijo en parágrafos precedentes, es la comunidad de vida, pues solo mediante el trato diario es como se fortalece día a día el lazo matrimonial, cuando no es así, la unión de los esposos está destruida. Podemos decir que (la comunidad de vida) constituye una relación jurídica fundamental, de la cual depende un conjunto de relaciones jurídicas que pudiéramos denominar accesorias. Por ello, al evidenciarse la separación por el espacio de tiempo requerido (dos años), es dable arribar a la inminente conclusión de que no se cumplen con el resto de los otros deberes, aún y cuando de constancias procesales se advierta que el actor otorga a favor de su esposa una pensión alimenticia. Lo anterior así es, porque al darse esa separación, debe entenderse que el matrimonio ya no es tal y no presenta por tanto la base armónica para la convivencia en común, que es el objeto y finalidad del matrimonio. Así, el objetivo fundamental de la causal de divorcio por la separación de los cónyuges durante más de dos años, siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio, es lograr la extinción del vínculo matrimonial cuando la relación respectiva se encuentre destruida de modo irreversible, por el alejamiento de la pareja, lo cual implica que ya no se persiga un fin común, sin ser óbice el cumplimiento en el pago de alimentos debidos y otros similares; de ahí que el solo transcurso del tiempo indiscutiblemente actualiza la aludida causal y origina su disolución. Toca en definitiva 470/2007 Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida en fecha 22 de noviembre del 2007. Lic. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Magistrada de la Quinta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciada Mariana Brandi Rigal.

153. DIVORCIO. LA SEPARACIÓN VOLUNTARIA O EL ACUERDO MUTUO, NO DEBE CATALOGARSE COMO CAUSA JUSTIFICADA DE LA CAUSAL XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO CIVIL. El acuerdo de voluntades de las partes para distanciarse del hogar constituido por ellos como conyugal, no debe catalogarse como “causa justificada” para que ya no puedan crear una comunidad de vida permanente, pues precisamente lo que sanciona la causal que se analiza, es la separación de los consortes por no cumplir con sus fines matrimoniales, y el hecho de que los involucrados hayan pactado desunirse por voluntad propia, ello no resulta ser una causa justificada para impedir la cohabitación de los cónyuges, ya que de las actuaciones judiciales no se advierte que cuenten con alguna suspensión que devenga obligatoria para no cohabitar conjuntamente, pues no se aprecia que alguno padezca una enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, situaciones que en un momento dado se entendería como causa justificada para no hacer vida en común con el actor, pues el hecho de optar por realizar una separación voluntaria, se traduce en la intención de las partes de efectuar un espacio en su vida matrimonial, dados los eventos que pudieron haberse suscitado en el lapso de tiempo que vivieron juntos, sin embargo, ello no puede dejarse al arbitrio de los interesados sobre si es factible continuar haciendo o

no una vida marital. Ahora bien, al no existir una separación efectuada por una autoridad de acuerdo a las formalidades que establece el Código Adjetivo Civil del Estado, en la que apruebe la separación temporal de los cónyuges, ni menos aún que, de las constancias procesales remitidas a esta Sala para su análisis, no se advierte que la quejosa desempeñe un trabajo fuera del País, o bien, que se encuentre internada en un Centro Penitenciario con motivo de pugnar una condena penal, o inclusive contar con alguno de los supuestos que se mencionaron anteriormente para que se decrete la suspensión de manera obligatoria para cohabitar con su cónyuge; por consiguiente, es evidente que no existe una verdadera causa justificada para que los contendientes se hallen distanciados desde hace mas de cuatro años, sin cumplir con los fines matrimoniales, por ende, al invocarse la acción de divorcio con fundamento en la fracción XIX del numeral 267 del Código Civil, es indudable que se demuestra en exceso el lapso de tiempo que regula dicho dispositivo legal para que prospere el ejercicio de la causal de referencia, ya que incluso, de las actuaciones judiciales que integran el procedimiento principal, no se advierte indicio alguno para que se interrumpa el término que marca la legislación a fin de que se considere no procedente la causal de divorcio de que se trata, pues para ello, es necesario que se lleve a cabo una reconciliación entre los cónyuges que demuestre de manera plena y fehaciente la unión de los mismos, por ejemplo, que ambos cónyuges cohabiten con todas las obligaciones inherentes al matrimonio, débito carnal, alimentos, ayuda mutua, etc., lo que en la especie no acontece. Toca de Apelación en definitiva número 388/2007 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 24 de Septiembre del 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Javier Arturo Hurtado Leija.

154. DIVORCIO. NO CONSTITUYE IMPEDIMENTO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION CON BASE A LA FRACCION XIX DEL NUMERAL 267 DEL CODIGO CIVIL, LA CIRCUNSTANCIA DE NO EXISTIR PETICION SOBRE LA REINTEGRACION AL DOMICILIO CONYUGAL. El hecho de que no se le haya ordenado mediante una orden judicial, que se reintegrara al hogar conyugal, no debe catalogarse como obligatoria para que proceda la presente acción de divorcio con base a la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil del Estado, por ende, es incuestionable que el apelante debió haberse reincorporado de manera inmediata y voluntaria a su domicilio para continuar habitando el mismo juntamente con la actora, ya que ello, denota la nula intención del reclamante de querer continuar con las obligaciones que se originan con el contrato matrimonial, y seguir haciendo entre ambos una comunidad de vida permanente, pues precisamente lo que sanciona la causal que se analiza, como se dijo antes, es la separación de los consortes por no cumplir con sus fines matrimoniales, que establece el numeral 147 del Código Civil del Estado, que son: la ayuda mutua, fidelidad, perpetuar la especie y, crear una comunidad de vida permanente, sin pasarse por alto además el amor, el diálogo y respeto que en todo matrimonio debe existir, circunstancia que no se aprecian en la presente contienda, ya que se aprecia que el inconforme en ningún momento de la fecha en que se separó del hogar conyugal, tuvo la intención de reincorporarse a su

domicilio, pues de autos se observa que el impetrante reconoce encontrarse habitando un domicilio distinto al de su consorte, además de que en ese lugar fue legalmente emplazado al presente juicio, de acuerdo a los artículos 612 fracción III y 624 del Código de Procedimientos Civiles, dejando incluso transcurrir el tiempo sin importarle que pudiera incurrir en alguna de las causales previstas en el Código Civil del Estado en su artículo 267. Toca de Apelación en definitiva número 462/2007 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 30 de Noviembre del 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Javier Arturo Hurtado Leija.

155. DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. COMO CAUSAL DE. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA FECHA EXACTA DE SEPARACIÓN. Del análisis de la causal de divorcio prevista en el artículo 267 fracción XIX del Código Civil del Estado, se desprende que para acreditar el supuesto legal contenido en la misma, consistente en la comprobación de la separación de los cónyuges por más de dos años, siempre que no exista causa que la justifique y no se cumplan los fines del matrimonio, no es requisito indispensable establecer la fecha exacta en que sucedió la referida separación pues basta con que se acredite que ésta aconteció con un lapso mayor de dos años por cualquier medio de prueba que permita la ley, toda vez, que si se dio con exceso el periodo a que se refiere la hipótesis normativa, resultaría irrelevante establecer la fecha exacta de la separación. Toca de Apelación en Definitiva 466/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el día 29 de noviembre de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Martha Eugenia de la Rosa García.

156. COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN EL JUICIO DE DIVORCIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTE ÚLTIMO SE HUBIERE FUNDADO EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Conforme lo establecido en los artículos 90 y 91 del Código Procesal Civil Estatal, en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la contraria las costas que se le hayan causado en el juicio, y además, siempre serán condenados bajo dicho concepto, el litigante que no obtenga resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda y el que fuere condenado en absoluta conformidad con la reclamación formulada en su contra; luego, lo previsto en tal sentido por nuestra Legislación Procesal Civil, por constituir un imperativo de ley, debe ser acatado por el Juzgador al emitir su sentencia, de tal suerte que, si en juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, se decretó procedente la acción, condenándose a la demandada en absoluta conformidad de las reclamaciones formuladas en su contra, procede condenar a esta última al pago de gastos y costas judiciales, en virtud de configurarse uno de los supuestos normativos previstos en los mencionados numerales 90 y 91, sin que constituya impedimento alguno, el hecho de que la acción de divorcio se

haya fundado en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil para nuestro Estado, y que por la naturaleza de esta causal, no exista en el caso la figura de "cónyuge culpable", pues, tal situación no exime a las partes de la condena en costas, dado que, esta última es una consecuencia del comportamiento procesal de las partes en un procedimiento judicial, cuyo objeto es resarcir los gastos causados al contrario por acudir ante la Autoridad Jurisdiccional, y la determinación del "cónyuge culpable", es una cuestión sustancial o de fondo, que tiene trascendencia para determinar las consecuencias del divorcio en la familia, verbigracia en relación al derecho alimentista de los cónyuges, la posibilidad de contraer nuevas nupcias, pero no así, en las cuestiones meramente procedimentales; en otra palabras, al ser la condena en costas una cuestión relacionada únicamente con el actuar procesal, procede imponer la misma a la demandada de ser condenada en absoluta conformidad de la acción, con independencia de, si es o no, cónyuge culpable, ya que, nuestra codificación procesal civil establece dicha obligación para los juzgadores sin hacer distinción sobre la naturaleza del litigio, o bien, sin exceptuar los casos de divorcio en que no existe cónyuge culpable. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación 484/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 19-diecinueve de Diciembre de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Lic. Juan Francisco Castillo Lara.

157. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, INSUFICIENTE POR SÍ SOLO, PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL MATRIMONIO, PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA CAUSAL DE DIVORCIO, RELATIVA A LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De una exégesis a la hipótesis normativa en consulta, artículo 267 fracción XIX del Código Civil del Estado, se tiene que si bien uno de los elementos componentes de dicha causal de divorcio, es precisamente el incumplimiento de los fines del matrimonio, las defensas desplegadas, en torno a que dicha disposición debe interpretarse en el sentido, de que el incumplimiento debe ser en torno a la totalidad de los fines de dicha relación jurídica, es infundada y carece de razón legal. Esto así, pues considerando como se apunta en la doctrina, que de entre los efectos que se generan a virtud del matrimonio, para los cónyuges, se destaca el derecho a exigir una vida en común, con la obligación de habitar bajo el mismo techo, que es indiscutiblemente el principal de todos los demás fines, dado que se expone sólo a través de él puede existir la posibilidad física y espiritual de cumplir los fines del matrimonio; se afirma, dicho fin constituye la relación jurídica fundante de la cual dependen un conjunto de relaciones jurídicas que pudieran denominarse fundadas o derivadas. Razón, por la cual, al no darse una comunidad de vida entre los cónyuges actuantes, la subsistencia del matrimonio entre ellos, implica una situación anormal, contraria al orden público, pues permite romper con la armonía que debe haber dentro del seno matrimonial, resguardada en el artículo 147 del Código Civil, que señala precisamente como fin del matrimonio, crear esa comunidad de vida, previendo incluso

que cualquier condición contraria a los fines indicados por ese dispositivo se tendrá por no puesta. Ya que si bien, la ayuda material, como lo es la pensión alimenticia que dice la demandada le es otorgada por su marido, y el hecho de que la tenga dada de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una obligación derivada de la relación nupcial, esta, constituye precisamente una obligación legal, que no puede ser negada salvo los casos expresamente señalados por la ley, y su observancia no se deja al arbitrio de los obligados a prestarla, de forma que su cumplimiento, en los términos como se haya obtenido, no implica de forma alguna, que se estén cumpliendo al interior del matrimonio los fines de esa relación, sino implica solamente que por obligación legal e incluso por temor a represalias legales, no se ha dejado en estado de abandono al consorte que tenga a su favor la obligación de pedir alimentos, por parte del obligado; mas, sí como dijimos, al no darse una comunidad de vida, no puede afirmarse que se este dando una ayuda y socorro espiritual, que obliga a los consortes, ya no legalmente, sino meramente como una obligación natural del matrimonio, a prestar atención a su pareja para brindarle el entendimiento y guía que les permita continuar y crecer dentro de su comunidad de vida, el núcleo familiar y social que hubieren creado entre ellos. Y si bien, el otorgamiento de una obligación alimentaria, puede validarse como el cumplimiento parcial a uno de los fines del matrimonio, ello, no puede considerarse suficiente para estimar la improcedencia de la causal de divorcio; pues el señalamiento que el legislador hizo al incumplimiento de los fines del matrimonio, aún cuando hubiese sido en forma plural, no debe ser entendido que para su procedencia forzosamente deba acreditarse el incumplimiento a todos y cada uno de los fines que emanen de esa relación, sino entraña, únicamente a estima de esta autoridad, el hecho que la separación habida entre los consortes, rompa con la armonía matrimonial, a tal grado que torne imposible la reanudación de esa comunidad de vida, lo que en la especie, debe estimarse así acontece, por no deducirse circunstancia alguna que pusiere de manifiesto la existencia de algún signo distintivo que hiciera suponer la continuidad de las relaciones entre los esposos como pareja. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 525/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 29 de enero de 2008. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

158. INCUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL MATRIMONIO, COMO ELEMENTO PARA LA OPERANCIA DE LA CAUSAL DE DIVORCIO, CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Cabe señalar que si bien el incumplimiento de los fines del matrimonio, al constituir uno de los elementos configurativos de la causal de divorcio contenida en la fracción XIX del artículo 267 del Código Civil, entraña un hecho negativo que implica la falta de observancia a los fines de esa relación, no puede decirse que la misma este sujeta a prueba, en términos del artículo 224 del Código Procesal Civil, sino en todo caso, la acreditación o no de tal extremo de la causal en comento, corresponde valorarla a la autoridad judicial, partiendo de las

circunstancias particulares de cada caso, esto, justipreciar los hechos alegados y demostrados en autos, conforme a los cuales haya sido planteada la litis, para con sujeción a ellos, concluir si dentro del matrimonio, cuya disolución se pretenda, se dan o no cumplimiento a tales fines, lo que debe ser razonado por el juzgador partiendo de los hechos que rijan la contienda; pues tampoco debe eximirse del todo al accionante, el deber que le asiste de proponer en su demanda los hechos integradores de su acción, ni arrojarle al demandado por completo la necesidad de desvirtuar tal extremo. Por lo que en esa medida, para apreciar si se cumplen o no con los mismos, es menester apreciar las circunstancias de cada caso, partiendo de la premisa, de que la comunidad de vida, constituye el fin fundante de las demás relaciones derivadas de la relación nupcial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 525/2007. Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 29 de enero de 2008. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

159. REINCORPORACIÓN AL DOMICILIO CONYUGAL. DEJADA SIN EFECTOS LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE CÓNYUGES, SU FALTA DE MATERIALIZACIÓN, NO ES JUSTIFICANTE DE LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE DIVORCIO, CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL ESTADUAL. Debe señalarse, que si bien, de los antecedes del caso, se aprecia una separación entre los esposos en juicio, que data de más de 02-dos años, aún cuando dicha la separación haya sido originada con motivo de un mandamiento de autoridad, dentro de un procedimiento prejudicial sobre separación provisional de cónyuges, dicha separación se torno injustificada a partir de que fuera dejada de plano sin efectos tal medida cautelar, pues desde ese momento quedaba plenamente autorizada la reincorporación del cónyuge separado a su hogar conyugal, y no hasta su plena materialización, pues desde que se emitió el acuerdo respectivo quedo sin efectos el mandamiento de autoridad que autorizaba la separación de los esposos pleitistas judiciales, por lo que a partir de ese momento, el cónyuge separado quedaba autorizado a reincorporarse a su domicilio, independientemente que ello materialmente no ocurriera u ocurriera con posterioridad; mas no por ello puede estimarse que la separación de los cónyuges continuara siendo justificada hasta la materialización de tal reincorporación, ya que si precisamente, la autoridad levanto de plano la medida cautelar de referencia, entonces su posterior materialización, queda sujeta a la voluntad de las partes interesadas, quienes podrán cumplir voluntariamente tal decisión, en su caso oponerse o bien incluso ser coaccionados a su cumplimiento; mas al depender ello de la voluntad de las partes, se tiene, que su observancia no implica la continuidad de la medida en cuestión, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir la continuidad caprichosa e injustificada de una separación que jurídicamente fue dejada sin efectos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. QUINTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 503/2007. Juicio

Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2007. Magistrada: Graciela Guadalupe Buchanan Ortega. Secretario: Paulo Gabriel Garza González.

PENAL

1. ABANDONO DE FAMILIA. ACREDITACION DEL DELITO DE. No es obstáculo para que se actualice el delito de Abandono de familia, previsto por el artículo 280 del Código Penal en Vigor, la circunstancia que señala el juez inferior en cuanto a que la ofendida recibe el apoyo moral y económico de sus familiares, toda vez que con independencia de ello esta sala consideró que el delito que nos ocupa se actualiza con el incumplimiento del acusado G.M.G. de cumplir con sus obligaciones familiares, consistente en atender las necesidades económicas necesarias para la subsistencia de las ofendidas, lo anterior es así si tomamos en consideración que el delito de que se trata se encuentra previsto dentro del capítulo V del título duodécimo del libro segundo parte especial del Código Penal en Vigor, en donde se contiene bajo el rubro de delitos contra la familia, por lo que el bien jurídico tutelado de dicho ilícito lo es el de la seguridad de la familia consistente en proteger a dicha institución como núcleos de la sociedad, buscando que el obligado a ministrar los recursos necesarios de subsistencia cumpla con ello, en tales condiciones corresponde, en su caso al obligado el demostrar la causa justificada o el cumplimiento de la obligación, máxime que se hace patente, en el caso concreto el abandono en el que se colocó a la querellante y su menor hija, tan es así que tuvieron que dejar el domicilio que habitaban con el acusado, para trasladarse y cohabitar con los padres de la ofendida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 99/2002, derivado del Proceso Penal número 48/02, instruido en contra de G. M. G. por el delito de Abandono de Familia. Juzgado de Origen: Primero Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado. Sentencia emitida el 10 de Mayo de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

2. ABANDONO DE FAMILIA. CUANDO NO SE CONFIGURA ESTE. Para que se actualice el delito de Abandono de Familia, es requisito sine-qua-non, que el inculpado deje a los ofendidos en una situación de desamparo o ante la existencia de un riesgo que ponga en peligro la vida o su integridad personal y no se configura este delito, cuando ha quedado demostrado que la querellante y sus menores hijos recibieron la ayuda de sus familiares como lo son los padres.- Criterio que encuentra apoyo en el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro es “ABANDONO DE FAMILIARES.- BIEN JURÍDICO TUTELADO”, visible en la página 313 del Semanario Judicial. Octava Época, Tomo XII, Agosto 1993. Tribunales Colegiados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA Toca de apelación en artículo número 176/2000, relativo al proceso número 120/2000, instruido en contra de A.O.G., por el

delito de Abandono de Familia. Sentencia emitida el 25 de Julio de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

3. ABANDONO DE FAMILIA. DOLO ESPECÍFICO EN EL DELITO DE. El delito de Abandono de Familia tipificado por el artículo 282 del Código Penal vigente en el Estado, requiere de un dolo específico, consistente en que el activo con su conducta atente contra la integridad de la familia al tratar de evadir el cumplimiento de la condena de alimentos mediante la práctica de maniobras ilegales, como pudiere ser el dilapidar u ocultar los bienes de su patrimonio contra los que se pidiere despachar ejecución. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 687/98, relativo al Proceso Número 65/97/D, instruido en contra de C.M.E., por el Delito de ABANDONO DE FAMILIA.- Sentencia emitida el 24 de marzo de 1999.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

4. ABANDONO DE FAMILIA, LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR A LOS PASIVOS LOS RECURSOS PARA ATENDER SUS NECESIDADES DE SUBSISTENCIA, NO DESAPARECE CUANDO ESTOS SE TRASLADAN AL DOMICILIO DE UN FAMILIAR. Se encuentra acreditado el cuerpo del delito de Abandono de Familia, previsto por el artículo 280 del Código Penal Vigente en el Estado, así como la probable responsabilidad de JCMM en la comisión del mismo, en términos del artículo 39 fracción I del mismo Ordenamiento, no obstante que la querellante GEM, en unión de sus menores hijos JR y M, se fue a vivir en el domicilio de la hija de ambos AM, ya que tal situación no desliga de su obligación al querellado, ya que esta surge de su carácter de cónyuge y padre, quien debe solventar los alimentos, sin que pueda trasladarse dicha obligación a los familiares o amigos de los pasivos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 690/01, relativo al proceso número 201/2001, instruido en contra de J. C. M. M. delito Abandono de Familia. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

5. ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA. CASO EN EL QUE ESTE ÚLTIMO QUEDA SUBSUMIDO EN EL PRIMERO. La figura delictiva de Abuso de Autoridad no puede coexistir con el diverso de Allanamiento de Morada, pues la violación de ingresar los policías aludidos al domicilio del menor J. C. C. A. constituyó sólo un medio para sacar a éste del mismo, sin orden de autoridad judicial competente, por lo tanto, ese delito de Allanamiento de Morada queda subsumido en el de Abuso de Autoridad ya que dicho proceder fue un acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en los artículos 14 y 16 constitucionales. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEGUNDA SALA Toca en artículo número 33/2004, derivado del Proceso número 250/03, instruido en contra de J. G. F. C., P. S. P., J. M. D. N. y R. R. V. por los

delitos de Abuso de Autoridad y Allanamiento de Morada. Sentencia emitida el 19 de Marzo de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

6. ABUSO DE CONFIANZA, ART. 384 DEL CODIGO PENAL. PRESUPUESTO INDISPENSABLE.- El presupuesto jurídico indispensable para la configuración del delito de ABUSO DE CONFIANZA lo es que el sujeto activo tenga la posesión derivada de la cosa mueble, la cual se debe entender como la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa poseída un poder distinto al de la mera detentación material, diferenciándose el poseedor precario y el poseedor derivado en que el poseedor derivado recibe la cosa a virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma, en cambio el poseedor precarista recibe la cosa a virtud de una situación que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto, es decir, cuando la cosa mueble está dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jurídico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en sí, no tendrá una posesión derivada sino una posesión precaria y por tanto no se configura el delito de ABUSO DE CONFIANZA. Amen de que no se desprende que el inculpado haya sido designado depositario judicial del bien que se declaró embargado y si bien se desprende que no se ha hecho entrega del bien aludido al depositario judicial designado dentro de aquel juicio del orden civil, ello no es constitutivo del delito de ABUSO DE CONFIANZA previsto por el artículo 384 del Código Penal en vigor, pues para que se configure este delito es necesario que el activo tenga una posesión derivada sobre la cosa mueble de la que se le exige la entrega y de autos no se desprende que el inculpado tuviera una posesión derivada sobre el bien mueble que se declaró embargado en el expediente del orden civil aludido, siendo que ello es indispensable para estimar acreditado el delito de ABUSO DE CONFIANZA." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 11-once de Octubre del 2004-dos mil cuatro, Toca en Artículo número 255/2004, Proceso 204/2004, instruido a A.R.E., por el delito de ABUSO DE CONFIANZA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

7. ABUSO DE CONFIANZA CONFORME AL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR. NO SE CONFIGURA SI EL COMPRADOR TIENE EL CARÁCTER DE ARRENDATARIO. Si a virtud de un contrato de compra-venta se hizo entrega al comprador, de los tractocamiones que refiere el querellante, contrato mediante el cual la venta es perfecta además de obligatoria para las partes contratantes, pues tanto el vendedor (querellante) como el comprador (indiciado), han convenido sobre la cosa y su precio, incluso se entregó por el vendedor la cosa vendida y respecto del pago del precio, se estableció que la cantidad correspondiente iba a ser liquidada en doce pagos mensuales sucesivos, lo anterior conforme al artículo 2143 del Código Civil vigente en la Entidad, de ahí que resulte que la venta fue perfecta y obligatoria para las partes contratantes, por lo que efectivamente su incumplimiento puede hacerse valer en la vía civil, sin que sea obstáculo que en dicho contrato de compra-venta se estableciera que el mismo era con reserva de dominio, ya que el artículo 2206 del Código Civil vigente en el Estado prevé,

que puede pactarse válidamente que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida, hasta que su precio haya sido pagado y el artículo 2209 del Código Civil citado, también prevé que respecto de la venta de que habla el artículo 2206, mientras que no pasa la propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa será considerado como arrendatario de la misma, por lo que en el caso en concreto el comprador tiene el carácter de arrendatario de la cosa vendida a virtud de que en el contrato de compra-venta en mención, en la cláusula sexta así se conviene, más aún que de acuerdo a los numerales citados el vendedor se reservó el dominio de dichos bienes inmuebles hasta en tanto se terminara de pagar el monto total de la compra-venta, luego entonces es obvio que al tener el comprador el carácter de arrendatario, para el caso de incumplimiento del contrato de mérito, se debe estar a las reglas que establece el Código Civil para el caso de incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, por lo que en la especie, no se pueden considerar que se surtan las hipótesis jurídicas del artículo 381 del Código Penal en vigor, que prevé el delito de ABUSO DE CONFIANZA y entonces los hechos narrados en la querella, no caben en el campo del derecho penal, sino en el derecho civil, teniendo además apoyo a este criterio jurisprudencial con rubro "ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA CUANDO SE ACREDITA QUE SE CELEBRÓ UNA COMPRAVENTA (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 82/2003, derivado del Expediente número 218/2000, instruido en contra de R.J.R. por el delito de Abuso de Confianza. Sentencia emitida el 31 de Marzo de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

8. ABUSO DE CONFIANZA, DISPOSICION DE BIENES EMBARGADOS POR PARTE DEL DEPOSITARIO CONFIGURA EL DELITO DE. Se actualiza la hipótesis de los artículos 381 y 383 fracción II del Código Penal vigente en el Estado, si la indiciada tenía jurídicamente la tenencia de un vehículo por haber sido nombrada como depositaria judicial de dicho mueble dentro de un juicio ejecutivo mercantil, y dispone de él al entregárselo a un tercero quien lo trasladó a su domicilio y lo usó en tres ocasiones, causando un perjuicio al querellante. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEXTA SALA Toca de Apelación en Definitiva Número 132/98, relativo al Proceso Número 723/97, instruido en contra de F.S.T., por el Delito de ABUSO DE CONFIANZA.- Sentencia emitida el 23 de noviembre de 1998.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

9. ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO. LA ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO REQUIERE ADEMÁS DE QUIEN HACE EL REQUERIMIENTO TENGA DERECHO SOBRE LA COSA Y QUE ESTÉ LEGITIMADO A TAL EFECTO, PUES SÓLO SIENDO LA NEGATIVA O LA OMISIÓN DE DEVOLVER CONVIERTE LA RETENCIÓN DE LA COSA EN ILEGÍTIMA. El Tribunal de Alzada, luego de analizar en forma detallada y pormenorizada las constancias de autos que fueron remitidas por el A-quo para la substanciación del recurso interpuesto, entre las que destacan la querella presentada, así como las copias certificadas del Juicio

Ejecutivo Mercantil que allega y lo declarado por el inculpado, llega a la conclusión que el responsable, efectivamente teñía tenencia en precario del bien mueble embargado, sin embargo, conviene destacar que el poder adquirido por el ahora inculpado sobre dicho bien no fue otorgado por el querellante mediante algún titulo que produjera la obligación de entrega o devolución por parte del activo, sino que una diversa persona fue quien le llevó dicho bien al taller de su propiedad para que procediera a su reparación, lo cual sin duda resulta importante, porque permite concluir que el ahora querellante no se encontraba legitimado para requerir al inculpado de la devolución del bien mueble embargado, además dentro del sumario no existe dato que conduzca a establecer que existió un acto o negocio jurídico que determinara la entrega originaria de la cosa por parte del querellante al inculpado, por tanto no puede sostenerse en forma válida que a éste último le asistía obligación de devolver la cosa y que su posesión se tomó ilegítima con la negativa de devolver, pues la posesión que tuvo fue derivada de un acto realizado con el dueño de la misma y fue este quien con posterioridad al requerimiento dispuso de la misma, sin existir ánimo de apropiación por parte del activo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 47/2000, relativo al proceso penal número 376/99, instruido en contra de A.D.L.R.L., por el delito de abuso de confianza Sentencia emitida el 24 de marzo del 2000.-Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

10. ALLANAMIENTO DE MORADA. NO SE CONFIGURA EL DELITO SI EL SUJETO SE INTRODUCE A UN DOMICILIO PARA EVITAR SER DETENIDO. El sujeto al ser objeto de una persecución por parte de los oficiales de policías municipales, en virtud de haber sido sorprendido ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, se introdujo a un domicilio y posteriormente al patio de otra casa, en donde fue detenido; sin embargo al realizar dicha conducta, el acusado no tenía el propósito de introducirse a una morada sin el consentimiento de la persona autorizada para darlo, ni tampoco quedó demostrado que tuviera como intención violar la integridad de dichos domicilios, que es el bien jurídico tutelado en dicho ilícito, y con esto causar zozobra en sus moradores, ya que su único fin lo fue el de huir de un peligro inesperado derivado de la persecución de que era objeto, oponiéndose a que se efectuara su detención, lo cual justifica el motivo por el cual se introdujo a los domicilios; por lo que ante tal circunstancia y tomando en cuenta además que de autos no se desprendió que los domicilios en donde se introdujo el acusado, estuvieran habitados, tan es así que no existió denuncia de algún propietario o morador de dichos inmuebles, tenemos la ausencia de los elementos constitutivos del delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, pues existió un motivo justificado explicable del actuar del agente. Por lo que se revocó la sentencia condenatoria. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 866/00, relativo al proceso penal número 300793, instruido en contra de JOSE O LUIS ENRIQUE MOCTEZUMA RAMOS, por el delito de Allanamiento de Morada. Sentencia emitida el 6 de Diciembre de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

11. AMENAZAS, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE. Aun y cuando se encuentra demostrada la existencia del primer elemento constitutivo del delito de Amenazas, pues mediante el enlace lógico jurídico de las probanzas desahogadas en autos se acredita que el activo amenazó verbalmente al querellante con causarle un mal en su persona; no sucede lo mismo con el segundo de los elementos constitutivos del citado ilícito de Amenazas, pues como se desprende de la declaración rendida por el querellante ante la Autoridad de Primera Instancia, el supuesto ofendido pone de manifiesto que no tiene ningún temor de que el ahora sentenciado pueda cumplir la amenaza que le profiriera, ya que aún lo considera su amigo, además de que no tiene nada en contra de él, lo que se traduce en que no tiene ningún sentimiento de temor o desconfianza hacia al acusado, que lo pudiera mantener en zozobra o intranquilidad, por lo que se reitera que no se acredita en el presente asunto el segundo elemento constitutivo de la figura delictiva en cuestión. Por lo que se revocó la sentencia condenatoria. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 210/03, relativo al proceso penal número 297/00, instruido en contra de R. C. A., por el delito de AMENZAS. Sentencia emitida el 31 de Agosto de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

12. AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN PREPARATORIA. CASO EN QUE NO PROCEDE. En principio debe decirse que no tiene razón la defensa en señalar que causa perjuicio al inculpado la determinación recurrida, si en la misma el juzgador advierte la posibilidad de estimar, en su caso, la manifestación que por comparecencia crea conveniente realizar el inculpado, lo cual sin duda conduce a estimar que el de primer grado en forma alguna perjudica al acusado con su decisión, ya que en ella no le coarta ningún derecho de defensa a éste; por otro lado, no debe confundirse la declaración preparatoria como garantía individual consagrada en el artículo 20 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la garantía individual establecida en la fracción V del mismo precepto constitucional, pues aquella debe ser recabada dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la consignación del detenido y tiene por objeto hacer saber al inculpado el motivo de la acusación, la naturaleza y causa de la misma para que conozca bien el hecho punible y pueda contestar al cargo, así como las demás garantías que le otorga el artículo 20 Constitucional y rendir su declaración o abstenerse de hacerlo, mientas que la segunda, se refiere al derecho que tiene el inculpado de ofrecer y rendir pruebas en su defensa dentro del término que la ley conceda al efecto. Es cierto que la defensa se refiere a “ampliación” de la declaración preparatoria y no declaración preparatoria, sin embargo, aquélla no se encuentra contemplada dentro del catálogo de pruebas que la ley reconoce como tales, en su artículo 219 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. De igual modo, fundamenta su pretensión en lo establecido por los artículos 222 y 223 del citado ordenamiento procesal, al señalar que la confesión ante el Tribunal de la Causa se admitirá en cualquier estado del procedimiento, pero es de destacarse que el inculpado, al rendir su declaración preparatoria, refiere que no se considera responsable de los hechos que se le imputan, por lo que en este caso no procede la ampliación de la declaración preparatoria, como se

establece en el siguiente criterio que reza: “DECLARACIÓN PREPARATORIA, CASO DE IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA.- No procede la ampliación de la declaración preparatoria que pretende apoyarse en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque este precepto legal dispone que únicamente se recibirá la confesión del reo hasta antes de pronunciarse sentencia irrevocable y por confesión debe entenderse el reconocimiento del inculpado de su propia responsabilidad penal derivada de hechos propios y no las manifestaciones tendientes a demostrar que no es responsable, con la pretensión de retractarse de su confesión contenida en su declaración preparatoria.” Informe 1988. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Núm. 6, Pág. 861. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 195/2000, relativo al proceso número 258/99, instruido en contra de G.L.S., por el delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo. Sentencia emitida el 17 de agosto de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

13. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. CASO EN QUE NO PROCEDE. Debe destacarse que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que señale la ley, por lo que remite al diverso artículo 212 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, el cual es muy claro en señalar que el plazo para resolver la situación jurídica del indiciado, se duplicará únicamente cuando lo solicite el inculpado o su defensor, al rendir su declaración preparatoria o dentro de las tres horas siguientes, siempre que sea con la finalidad de aportar pruebas para que el Juez resuelva su situación jurídica, que no es otra cosa, más que dar, proporcionar, o contribuir, según definición que proporciona el Diccionario de la Lengua Española, lo que significa que debe el inculpado o su defensor presentar los medios de convicción ante el Juez para que los analice al resolver el auto de plazo constitucional y no que éste tenga obligación de recabar medios de convicción ofrecidos, que son propios de la etapa de la instrucción, por lo que si en la especie la defensa se concretó a solicitar la ampliación para estar en aptitud y posibilidad de ofrecer pruebas y no aportó elemento de prueba que pudiera haberse desahogado dentro de ese lapso de tiempo, se deviene acertada la negativa del Juez de ampliar el plazo para resolver la situación jurídica del indiciado, máxime que como bien lo señala en su resolución recurrida, el defensor del inculpado no enunció las pruebas que pretendía desahogar, pues es cierto que mencionó documentales que obran en su poder, careos y testimoniales, sin embargo, no indicó a que documentales se estaba refiriendo, tampoco señaló entre qué personas se celebrarían los careos, ni quiénes deberían rendir sus testimonios, por lo que el Juez de primer grado no se encontraba en posibilidad de valorar su pretensión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 88/2000, relativo al proceso número 153/99, instruido en contra de B.C.O., por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 21 de junio de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

14. ARMA PROHIBIDA. UN PORTALLAVERO NO CONFIGURA EL DELITO DE. Si bien es cierto, que del objeto del cuál se diera fe por parte de la autoridad judicial y que el acusado aceptara portar el día de los hechos, consistente en "un llavero de plástico en color negro, el cuál en su interior tiene una hoja de aproximadamente cuatro centímetros de longitud, un abre sodas y unas tijeras pequeñas", esto no debe considerarse como una "arma prohibida", en términos del artículo 173 fracción I del Código penal vigente, por no resultar potencialmente lesiva y tener un uso doméstico y cotidiano para las personas, al no ser apta para inferir heridas inciso-punzantes o cortantes que puedan ocasionar la muerte o lesiones graves; máxime que el procesado, al momento de presentarse los elementos de Seguridad Pública al lugar donde se consumen bebidas embriagantes, les hizo la entrega voluntaria del objeto, además de que de acuerdo al dictamen médico que se le practicara resultó sin estado de ebriedad, por lo que entonces no expresó intimidación, ni atacó ni dañó la tranquilidad pública.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 119/2001, relativo a] proceso penal número 429/2000, instruido en contra de J.F.M., por el delito de Portación Prohibida de Armas. Sentencia emitida el 14 de Mayo de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

15. ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL, SUS EFECTOS. La finalidad del artículo 200 del Código Penal, no es que el Órgano encargado de integrar una averiguación previa, amplíe la misma, sino que practique nuevas pruebas y apoyado en pruebas diversas a las anteriores, solicite de nueva cuenta la orden de aprehensión, puesto que esta facultado para ejercitar nueva acción penal ante cualquier Órgano jurisdiccional, sin que tal proceder signifique que a una persona se le esta juzgando dos veces por el mismo delito, pero debe hacerlo allegando más elementos de prueba, y no tan solo variar el ejercicio de la acción penal, con los mismos medios de prueba e iguales hechos por los que se le había negado la orden de captura con antelación." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 31-treinta y uno de Agosto del del 2004-dos mil cuatro. Toca en Artículo número 232/2004. Proceso penal número 124/2004, instruido a M.D.R.M.C. y J.G.M.M., por el delito de ROBO. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

16. ATAQUES PELIGROSOS. CASO EN EL QUE NO PUEDE COEXISTIR CON EL DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO. Si bien es cierto que con su actuar el acusado agredió a los pasivos disparando un arma de fuego, colocándoles en grave peligro de muerte, lo que en razón del arma empleada y el resultado de peligro producido configuran los elementos que integran el delito en comento, (Ataques Peligrosos), no menos cierto es que esa misma conducta se consideró constitutiva del delito de Disparo de Arma de Fuego, porque con el mismo, se puso en riesgo la seguridad e integridad física de dos personas, y por lo tanto, en e! caso a estudio es aplicable la regla señalada por el artículo 35 del Código Penal en vigor, que dispone que cuando varias normas contemplen

un mismo hecho delictivo, se aplicará aquella que contenga la modalidad específica a juzgar, o en su defecto se atenderá a la finalidad de la conducta. Esto, en razón de que en la especie, por las razones ya comentadas, la conducta desplegada por el acusado, encuadra a la perfección tanto con la figura típica del Disparo de Arma de Fuego, como en el delito de Ataques Peligrosos, por lo que siguiendo lo prevenido en el dispositivo citado, debe prevalecer únicamente la norma específica a juzgar, en este caso, la de Disparo de Arma de Fuego, porque el delito de Ataques Peligrosos, contiene el concepto genérico de la conducta del activo, pues mientras que en el mismo la agresión peligrosa puede darse con cualquier tipo de arma, en el delito de Disparo de Arma de Fuego la agresión debe hacerse obviamente, con disparos de arma de fuego. Lo anterior, nos conlleva a la conclusión de que al estimar acreditados ambos ilícitos, seria tanto como recalificar una sola conducta. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 9/2000, relativo al proceso penal número 118/99, instruido en contra de C.T.M., por los delitos de disparo de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares, allanamiento de morada y ataques peligrosos. Sentencia emitida el 9 de febrero del 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

17. AUSENCIA DE DOLO. EN EL DELITO DE ROBO. Requiere para su integración, entre otras cosas, que el sujeto activo realice una acción de apoderamiento de una cosa, con la intención de ejercer sobre tal cosa, derechos de dueño, es decir, poder gozar y disponer de la misma, por lo que al no advertirse dolo en su conducta, que sería la voluntad de obtener el resultado previsto en el tipo legal a estudio, y solo emerge la intención de V. G. y de L. R., de causarle un daño a T. C., pero no de tipo patrimonial sólo físico y toda vez que éste último pidió auxilio aduciendo que lo querían matar, pero nunca se quejó del robo de objeto, quedando manifiesta la intención de los ahora acusados, de tomar la camioneta y retirarse, pero no de apoderarse de la camioneta, resulta obvio que al faltar la voluntad en los activos de obtener el bien mueble para apropiárselo y disfrutar y disponer del mismo, no se colma el principal supuesto jurídico a que alude el precepto 364 del Código Penal Vigente en el Estado; y por tanto no se materializa la figura delictiva de robo. En esas condiciones, debe decretarse Sentencia Absolutoria en favor de A. V. G. y S. L. R. al no estar colmada la exigencia del artículo 364 en relación al 371, ambos del Código Penal Vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 552/2002, relativo al proceso número 246/2001-III, instruido en contra de A. V. G. y S. L. R. por el delito de Robo Con Violencia. Sentencia emitida el 31 de Marzo de 2003. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

18. AUSENCIA DE VIOLENCIA, FURTIVIDAD O ENGAÑO EN LA OCUPACIÓN DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ACTIVO. DESPOJO DE INMUEBLE NO SE ACREDITA. De las declaraciones no se acredita en forma alguna que la acusada D. E. R. L. haya ejercido violencia o empleado amenazas o engaño para

ocupar el inmueble citado, las mismas no reúnen los requisitos previstos por el artículo 323 del Código Procesal en Vigor, pues bien, para que se configure el ilícito en comento, primeramente se debe demostrar que el despojado, tenga la posesión del mismo, lo cual se advierte, con el contrato de arrendamiento (visible a foja 3 de la causa) que celebrara con el C. R. H. A., propietario del inmueble ubicado en el número 386 de la avenida Conquistadores de la colonia Los Robles, en Apodaca, Nuevo León, por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) como renta mensual, amén de que B. M. expresa, que lo ocupó por haber celebrado un contrato de arrendamiento con el esposo de la acusada R. L., ubicando en el mismo su oficina, pero que en el mes de agosto de 1999-mil novecientos noventa y nueve- sin precisar qué día y en qué forma, cuando se encontraba fuera de la ciudad por cuestiones de negocios, le fue cambiada la chapa de la puerta principal de su oficina, por su denunciada R. L., la cual refiere le dijo, que ella se la había cambiado, por motivo de un adeudo de mensualidades atrasadas; sin embargo, como ya se dijo, para la configuración del ilícito de despojo de inmueble, se requiere que la ocupación se haga de propia autoridad, haciendo uso de la violencia física o moral a las personas, furtivamente o empleando amenazas o engaños, esto aunque el inmueble pertenezca o no a quien lo ocupa en las condiciones apuntadas, si la ley no lo autoriza y aún que la posesión haya sido usurpada o esté en la forma que refiere el denunciante, ninguno de estos supuestos acontece en el presente caso, dado que, del análisis realizado en torno a las constancias que integran el sumario, se advierte con claridad que B. M., por el mes de agosto del año de 1999-mil novecientos noventa y nueve-, fue informado por G. A. que la llave de la puerta principal de su oficina, no abría la chapa, refiriendo éste que al cuestionar a la acusada sobre tal situación, R. L. le dijo que ella había cambiado dicha chapa, no precisando la forma y modo en que lo realizara. Sin que pase desapercibido para la suscrita Magistrada que la denuncia de los supuestos hechos delictuosos se realizó a cinco meses doce días después de que la acusada ocupó el inmueble, es decir que fue hasta el día 01-primero- de febrero de 2000-dos mil-, cuando se duele de haber sido despojado de un inmueble, sin embargo, tampoco pasa desapercibido por esta Autoridad que la denuncia de B. M. no puede tenerse como veraz, puesto que en ella dice que la procesada lo desposeyó del inmueble en cuestión, sin embargo, en autos consta que en el año de 1999-mil novecientos noventa y nueve-, el mismo lo arrendó a H. A. quien es esposo de la acusada R. L. a quien había autorizado para que le cobrara las rentas mensuales, por lo tanto, no se reúnen los elementos constitutivos de la figura delictiva de despojo de inmueble a que se refiere la Fracción II del artículo 397 del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 381/2001, relativo al expediente número 425/2000-V, instruido en contra de D.E.R.L, por el delito de Despojo de Inmueble. Sentencia emitida el 31 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

19. AUTO DE FORMAL PRISIÓN EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO, TIENE APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR

OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL. Es cierto que el artículo 19 de la Constitución General de la República establece que el Auto de Formal Prisión se dictará cuando aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado; sin embargo, nuestro artículo 212 del Código de Procedimientos Penales en vigor, aún requiere la comprobación de los elementos del tipo para el dictado del Auto de Formal Prisión, siendo criterio de los Tribunales Federales que tiene aplicación preferente el artículo del Código Procesal de la materia; porque otorga mayores prerrogativas al inculpado y, en esa medida se extiende la garantía constitucional que es el mínimo de derechos de que disponen los gobernados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 670/01, relativo al proceso número 168/01, instruido en contra de R. P. E., por el delito de Equiparable a la Violación. Sentencia emitida el 27 de Noviembre de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

20. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SI DE LAS CONSTANCIAS PROCESALES APARECE DEMOSTRADA LA MODALIDAD DE PANDILLA, DEBE DECLARARSE ACREDITADA EN EL. Del proceso se desprende que el A quo, dictó auto de formal procesamiento contra los acusados por el delito de robo con violencia, y no obstante que de los elementos de convicción que obran en la referida causa criminal, se advierte que dicho ilícito fue cometido en común por los tres acusados, reunidos en forma transitoria, dicha autoridad de primer grado, no estableció en la resolución impugnada, que en el proceso estuviera acreditado que dicho ilícito se cometió en la modalidad de pandilla, ni hizo alusión al artículo 177 del Código Penal del Estado, que contempla dicha modalidad; por lo que aun y cuando dicho numeral establece en su tercer párrafo, que la calificación de la modalidad de pandilla será en la sentencia y queda al arbitrio del juez, no debe perderse de vista que conforme al primer párrafo del artículo 19 de la Constitución General de la República, es obligación constitucional y legal de todo juzgador al emitir un auto de formal prisión, determinar no únicamente el tipo básico, sino además incluir las modificativas o calificativas de los hechos materia de la consignación que advierta, para garantizar que el inculpado tenga la posibilidad de conocer en todas sus dimensiones los hechos por los cuales se le va a seguir el proceso y pueda enderezar adecuadamente su defensa. Sin que sea obstáculo para lo anterior que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Por ello es que deben declararse fundados los agravios aducidos por la Fiscalía Mayor e incluirse la modalidad de pandilla en el auto de formal prisión dictado en contra del acusado. Lo anterior en aplicación de la tesis de jurisprudencia 13/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de marzo de dos mil tres, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE", publicada en el Semanario Judicial de la

Federación, Tomo XVII, Abril de 2003, Primera Parte, Tesis: 1ª./J. 13/2003. Página 9. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca en artículo número 5/2003, relativo al Proceso Penal número 361/2002, instruido en contra de L. M. R. C., J. A. R. C. y O. O. S. R. por los delitos de Robo con Violencia y Delincuencia Organizada, en la cual se modifica el auto de formal prisión dictado en Primera Instancia. Sentencia emitida el 6 de Junio de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

21. AUTO QUE DECLARA DESIERTA UNA PRUEBA NO ES APELABLE. Pues bien, de las actuaciones del Juez de Primer Grado se advierte, que éste en ningún momento negó la admisión de las probanzas ofrecidas por la C. Procuradora General de Justicia del Estado, consistentes en las declaraciones Informativas en vía de ratificación a cargo de las personas ya citadas, sino que por el contrario realizó todas las gestiones legales posibles para obtener la comparecencia de las mismas; sin que lograra lo anterior, y por lo tanto no fue posible el desahogo de dichas pruebas ofrecidas por la Representación Social; siendo necesario establecer que la fracción VII del numeral 385 del Código Adjetivo de la Materia, señala que son apelables en el efecto devolutivo, entre otros, los autos que nieguen la admisión de una prueba; sin que de dicho precepto legal se advierta que pueda apelarse el auto que declara desierta la misma como acontece en el caso concreto, menos aún por la Representación Social a quien en términos de los artículos 21 Constitucional, y 2 y 7 el Código Adjetivo de la Materia, corresponde la persecución de los delitos, así como comprobar la existencia de éste y la responsabilidad del inculpado. Así las cosas resultan inoperantes los agravios formulados por la C. Procuradora General de Justicia del Estado y se CONFIRMA el auto recurrido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 519/03, relativo al Proceso Penal número 396/02, instruido en contra de O. A. P. Y. por el delito de Daño en Propiedad Ajena. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

22. CALIFICATIVAS, NO SE DEBEN TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE DICTAR LA MEDIDA DE SEGURIDAD A UN INIMPUTABLE. Resulta incorrecta la determinación del A-quo al haber acreditado en el ilícito de Homicidio, las calificativas previstas en las fracciones I y IV del artículo 316 del Código Punitivo en Vigor, y que con motivo de ello, alargara el término de la medida de seguridad que le impuso al inimputable; ya que pasó por alto el hecho de que uno de los requisitos esenciales que componen las calificativas mencionadas, lo es precisamente la intencionalidad del activo al momento de la ejecución del ilícito, circunstancia que evidentemente no se demostró en la causa debido a la condición del activo el día y hora de hechos, y que precisamente por ello se le declaró inimputable y se le siguió el procedimiento especial, de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 487 a 492 del Código Penal en Vigor; razón por la cual no debe ser considerado como calificado dicho ilícito, al momento de dictar el término de la

medida de seguridad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA Toca en definitiva número 383/02, instruido en contra de M. de J. L. R. por los delitos de Homicidio Calificado, Amenazas y Daño en Propiedad Ajena. Sentencia emitida el 18 de Febrero de 2003. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

23. CAREOS CONSTITUCIONALES, MINISTERIO PÚBLICO NO ESTÁ FACULTADO PARA SOLICITARLOS. Las diligencias de careo que ofreció la Representación Social como prueba, eran de los procesados... con los CC. ... señalando que ello lo hacía no sólo para dirimir las contradicciones existentes entre las declaraciones rendidas por los procesados y los testigos de referencia, sino también para lograr una mayor claridad y comprobación de los hechos y para justificar en forma plena la participación que los inculpados ... tuvieron durante la perpetración del ilícito, esto es para justificar la Representación Social su acusación; pasando por alto la Institución del Ministerio Público, que las diligencias de careo no están reconocidas como medio de prueba en las primeras cinco fracciones del artículo 219 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, sin embargo tomando en consideración que la última fracción del citado numeral previene que también se reconocen como medios de prueba todos aquellos que se ofrezcan como tales, siempre y cuando, a juicio del funcionario que practique la averiguación o del juez o tribunal, sean pertinentes y conducentes y no estén prohibidos por la ley; por tanto es posible considerarlas como medios de prueba, siempre y cuando se advierta que existen discrepancias entre las declaraciones vertidas por los testigos propuestos, o bien de un testigo con el procesado, o de un testigo con el ofendido, dado que el artículo 305 y 306 de la Ley procesal Penal prevé este tipo de careos llamados careos procesales, cuya finalidad es la de aclarar los puntos de contradicción que existen entre las declaraciones respectivas para que el juzgador cuente con pruebas eficaces para resolver la cuestión sujeta a su potestad. No se dice lo mismo en cuanto a los llamados careos Constitucionales, que son aquellos que se realizan entre el acusado y las personas que deponen en su contra; se afirma lo anterior porque la Constitución General de la República consagra como garantía individual de defensa a favor de todo acusado en el artículo 20 fracción IV que todo acusado tiene derecho de ser careado con las personas que depongan en su contra, esto es con la finalidad precisamente de que conozca a esas personas y esté en la posibilidad jurídica de refutarles sus imputaciones y de interrogarlos, para que de esta manera se defienda en el proceso, en consecuencia, los careos de índole Constitucional no pueden estimarse como un medio que tenga exclusivamente como finalidad el de acreditar o no la responsabilidad penal del sentenciado, ya que tan solo se trata de una garantía otorgada por la Carta Magna a favor de todo acusado, de ahí que estos solo deben celebrarse cuando fueron ofrecidos por el acusado o su defensor, sin que le asista la razón al Ministerio Público.” TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 24-veinticuatro de Mayo del 2004-dos mil cuatro. Toca en Artículo número 108/2004. Proceso penal número 342/2002, instruido a R.C.S., V.C.S. y A.C.S., por el delito de DESPOJO DE INMUEBLE. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

24. CERTIFICACIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SU VALIDEZ. La certificación que hizo el Agente del Ministerio Público de la factura exhibida por el querellante M.A.L.L., con la que justifica su legitimación para presentar tiene validez, en atención al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ministerio Público tiene la facultad de expedir certificaciones y si en el caso concreto se solicitó por parte del querellante M.A.L.L., se llevara a cabo la certificación de mérito y el Órgano Investigador así lo efectuó, obró atinadamente, conforme al referido numeral 71. Tiene aplicación al efecto, la tesis consultable en la Novena Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Abril de 2000. Tesis: XIV.1o.9 P. Página: 967, misma que en su rubro es: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR EL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)". Máxime que el artículo 71 mencionado, sí establece como facultad del Ministerio Público, expedir certificaciones, sin que sea óbice para ello el que en el diverso numeral 96 se establezca como facultad y obligación del Secretario del Ministerio Público, también expedir certificaciones, ya que son referentes a tal funcionario en particular, pero que el Ministerio Público no deja de tener tal atribución, aunado a que debe de tomarse en consideración que el Ministerio Público no solamente puede actuar con la asistencia de un secretario, sino también con testigos de asistencia. Por ello, lo que procede es tener como válida la certificación realizada por el Agente del Ministerio Público." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 21-veintiuno de Octubre del 2004-dos mil cuatro. Toca en Artículo número 270/2004. Proceso penal número 190/2004, instruido a R.A.G.A., por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSO. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

25. CICATRIZ (LESIONES), NO SE ACREDITA SI NO SE DA FE CORRECTAMENTE DE SU NOTABILIDAD POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. La suscrita Magistrada considera que en el presente caso no es aplicable la sanción prevista por el artículo 303-I del Código Penal vigente en el Estado, toda vez que, si bien es cierto que de los dictámenes médicos evolutivo y definitivo, relativos a los exámenes practicados a la pasivo, se desprende que como consecuencia de las lesiones causadas, le dejaría como secuela una cicatriz vertical de 5 cm. en región frontal derecha, y que existe diligencia practicada por la Secretaría del Juzgado de origen, en la que se hace constar que la ofendida presentó una cicatriz de aproximadamente 4.7 cm., la cual es visible a una distancia de medio metro; también es que en la citada diligencia no se establece si la cicatriz es vertical u horizontal, su dimensión, coloración, lugar que ocupa en la cara, profundidad, y sí su notabilidad o visibilidad es a una distancia mayor a la que se da fe, pues para los efectos de tal agravante se requiere que la misma sea modificativa de la apariencia original de la cara del pasivo, que quizá la hace o hasta la haga repulsiva, lo cual no sucede en la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de

apelación en definitiva número 546/02, relativo al proceso número 186/01, instruido en contra de F. N. L. N. por el delito de Lesiones. Sentencia emitida el 11 de mayo de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

26. CICATRIZ PERPETUA Y NOTABLE, PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN POR ESE CONCEPTO, ES IRRELEVANTE QUE LA INSPECCIÓN JUDICIAL UTILICE EL TÉRMINO VISIBLE Y NO NOTABLE, SI LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MISMA PERMITEN ESTABLECER SU NOTORIEDAD. no es obstáculo para declarar operante la sanción a que hace referencia la fracción I, del artículo 303 del Código Penal del Estado, la circunstancia de que la Autoridad Judicial haya empleado incorrectamente el término de lesión visible y no de notable, si las constancias que obran en autos dejan al Juez en aptitud de apreciar la calidad de notable de las cicatrices, en la medida en que sus trazo, dimensiones y relieves en su caso, rompen la armonía y regularidad del rostro del lesionado, que permiten considerar que las cicatrices se destacan y son perceptibles dentro del espacio físico necesario para el trato entre dos personas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA PENAL. Toca de apelación en definitiva 123/2004, relativo a la causa penal número 337/96-C, instruida a ... por el delito de LESIONES EN SU MODALIDAD DE PANDILLERISMO. Definitiva de fecha 26 veintiséis de Mayo de 2004 dos mil cuatro. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

27. COHECHO INDETERMINADO. INEXISTENCIA DE PUNIBILIDAD. Aunque la conducta desplegada por el activo coincide plenamente con la hipótesis típica prevista por la fracción I del artículo 215 del Código Penal Vigente en el Estado, pues demostrando tal condición, son contundentes los dichos de los testigos, quienes afirman que vieron cuando el propietario de la camioneta involucrada en el evento vial le entregó un fajo o rollo de billetes al acusado, y éste, al ejercer su función como oficial de tránsito lo dejó retirarse del lugar, no se acredita la existencia del delito de Cohecho, porque los testigos indicados no especifican que cantidad de dinero contenía el fajo de billetes que mencionan y sin que de autos se advierta algún otro dato que sirva para determinar la suma entregada al acusado, por lo que el valor del cohecho es indeterminado, siendo que el artículo 216 del Código Penal vigente en el Estado no establece en ninguna de sus tres fracciones sanción alguna para tal supuesto, por lo que no nos encontramos en presencia de delito, entendido este en su sentido lato, teóricamente como un hecho o conducta típica, antijurídica, culpable y punible, pues dichos elementos positivos del delito no se reúnen en el caso concreto, porque no obstante que existió de parte del acusado una conducta típica, antijurídica, y culpable, para que la misma alcance el rango de delito es necesario que la normatividad castigue su comisión, y si esa conducta no encuentra sanción alguna en la ley, la misma no constituye delito, pues se carece del elemento punibilidad y lógicamente, sin el mismo el Estado no cuenta con el derecho de represión para esa conducta antisocial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número

332/2000, Acusado: E. V. M., por el delito de Cohecho. Sentencia emitida el 10 de Enero de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

28. COHECHO. CARÁCTER BILATERAL. Para la configuración del delito de cohecho, es necesario la intervención de dos conductas, uno el que entrega llamado cohecho activo y otro el que recibe denominado cohecho pasivo; no resulta bilateral porque sean dos delincuentes copartícipes, sino por la concurrencia de voluntades, tan es así que nuestra Legislación en las fracciones I y II del artículo 215 del Código Penal en vigor, tipifica y sanciona ambas conductas, ya sea que se trate de un servidor público (entre los que se encuentran los agentes de la policía ministerial), estatal, municipal, de empresa paraestatal o de participación estatal, que en forma directa o indirecta solicite o reciba indebidamente dinero o cualquiera otra dádiva para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, o quien no ostentando el anterior carácter, ofrezca a éstos últimos, dinero o cualquier dádiva para que hagan u omitan un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Por lo tanto, la aseveración que realiza el inculpado en el sentido de que entregó el numerario a los policías ministeriales, por que ellos se lo pidieron, de ninguna manera le beneficia, puesto que tal postura nunca la acreditó, más sin embargo si se justificó que entregó a los aprehensores numerario en efectivo, del que se dio fe en autos, suficiente para tener por acreditado el delito de cohecho previsto en la fracción II del artículo 2l5 del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 511/00, relativo al proceso número 07/2000, instruido en contra de M.R.G. y Y.C.P., por el delito de Cohecho.- Sentencia emitida el 15 de enero de 2001.- Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

29. CONCEPTO DE TENENCIA, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Bajo este marco, se concluye que para efectos del artículo 381 del Código Penal del Estado, el concepto de "tenencia" implica algo más que la simple detentación material (manejo o poder) de la cosa, esto es, que por virtud de un acto jurídico, el propietario de la misma renuncie al poder de hecho que tiene sobre ella, confiándoselo temporalmente a otra persona, de forma que la cosa sale de la esfera de poder del dueño, es decir de su custodia. Estas notas distintivas, no se presentan en las relaciones de dependencia, en las que el patrón, hace entrega, o bien permite la detentación y manejo de cosas muebles (numerario, títulos de crédito etc.), por motivos meramente operacionales, sin que por este hecho pueda reputarse la renuncia a la posesión de tales cosas muebles. Consecuentemente, al no darse el requisito de posesión o tenencia sobre la cosa, devienen intrascendentes los demás elementos del cuerpo del delito de Abuso de Confianza, para efectos de revocar el auto impugnado, en esa tesitura, resultan parcialmente fundados, pero insuficientes, los razonamientos de la Representación Social. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA. Toca en artículo

81/2005, proceso número 605/2003, instruido en contra de M.S.G.S. por los delitos de Abuso de Confianza y Fraude Genérico. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

30. CONCEPTOS DE FIANZA, SANCIÓN PECUNIARIA Y MONTO ESTIMADO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO. DEBEN SER CUBIERTOS COMO REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. Está demostrado que adecuadamente se otorga el beneficio de la libertad provisional bajo caución si en autos está GARANTIZADO el monto ESTIMADO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, hasta por la cantidad que fuera reclamada por el sujeto pasivo en su escrito inicial y que la misma está cubierta mediante la garantía de tipo HIPOTECARIA que tiene un valor comercial por mucho superior a la cantidad que es reclamada por el sujeto pasivo del delito ya que remitiéndonos al texto expuesto en el numeral 493 del Código Procesal Penal en vigor, no se impone la obligación de que se rebase el monto estimado de la reparación del daño, pues su fracción I únicamente cita "que se garantice el monto estimado de la reparación del daño", sin prevenir que se imponga para cumplir con esta garantía el uno y medio veces mayor al monto de la caución fijada, ya que al conceder el beneficio a los reos el Juez fijó en lo que respecta al monto estimado de la reparación del daño la cantidad nítida que reclama el sujeto activo y la misma se vio acompañada del monto estimado de las sanciones pecuniarias así como la caución que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones, de ahí que satisfizo debidamente las exigencias que tanto la ley fundamental del país previene, así como las que establece la ley secundaria procesal penal para la concesión de la libertad provisional bajo caución de los reos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 412/03, derivado del Expediente número 408/00, instruido en contra de B. G. G. y B. G. G. por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 02 de Octubre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

31. CONCLUSIONES ACUSATORIAS, DEFICIENCIAS DE, EL JUEZ DEBE ENVIARLAS AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 348 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, 1.- delimitan el objeto fundamental y el objeto accesorio del proceso; 2.- hacen posible una defensa adecuada; y 3.- fijan los límites de hecho en la sentencia. Respecto de la primera y tercera de las finalidades del pliego acusatorio, cabe decir que a través de ellas el Órgano Técnico, perfecciona el ejercicio de la acción penal, al definir el tema y los alcances de la sentencia y vincula el ejercicio de la función jurisdiccional de manera tal, que el Juez no puede rebasarlas. Con relación a la segunda finalidad de las conclusiones, debe decirse que si en las conclusiones acusatorias el Ministerio Público precisa el contenido del proceso y reduce su pretensión, señalando el delito por el cual pide se sancione al inculpado, señalando, además, con que elementos de prueba está acreditado el delito, el porqué está probada la responsabilidad penal del acusado en su comisión, y fija las penas que pide se le impongan; consiguientemente, el

inculpado y su defensor están en aptitud de refutar tales puntos, pues para ello justamente se les hacen de su conocimiento, en términos del artículo 342 de la Ley Procesal de la Materia, a fin de que rebatan la acusación. Luego, si el Ministerio Público rindió conclusiones contrariando las constancias procesales, específicamente contra el auto de prisión preventiva decretado contra los procesados por el Juez Instructor, queda claro que no concretizó la pretensión punitiva del Estado, en los términos que se lo exigen los artículos 343 y 344 del Código de Procedimientos Penales y por ello el mismo Juzgador Natural debió, con apoyo en el artículo 348 del mismo ordenamiento legal, disponer que juntamente con el proceso fueran enviadas al Procurador General de Justicia del Estado, informándole el motivo de la remisión, para que dentro de los términos a que se refiere el artículo 350 de la misma Legislación y oyendo el parecer de sus auxiliares, dicho funcionario las revoque, modifique o confirme. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA PENAL. Toca de apelación en definitiva 311/2003, relativo a la causa penal número 260/2001-I, instruida a ... por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO y otros. Definitiva de fecha 28 veintiocho de Enero de 2005 dos mil cinco. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

32. CONCURSO DE DELITOS. NO ES NECESARIO QUE LA PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ESTÉ MOTIVADA PERO SÍ FUNDADA PARA LA PROCEDENCIA DEL. Esta autoridad discierne con el criterio adoptado por el Juez A quo en los argumentos que expone en el sentido de que el Agente del Ministerio Público al solicitar al Juez Instructor la aplicación de las reglas del concurso real o material de delitos, se concretó a invocar los artículos que lo regulan, sin exponer los hechos que configuran esa concurrencia material de delitos, ni las razones o motivos por los que considero los diversos hechos delictivos demostrados, en efecto esta autoridad no comparte el criterio por las siguientes razones: en efecto el Ministerio Público en sus conclusiones al referirse al concurso real de delitos señaló: “CUARTO: La pena que esta Representación Social solicita sea impuesta al acusado ....., por la comisión del delito de ALLANAMIENTO DE MORADA es la prevista en el artículo 296 del Código Penal Vigente en el Estado y por la comisión del delito de ATENTADOS AL PUDOR será la prevista por el Segundo Caso del Primer Párrafo del artículo 260 del mencionado Ordenamiento Penal, en virtud de que el procesado de referencia ejecutó el delito mediante la violencia física, ya que le tapó la boca a la ofendida ..... a la vez que la tocaba en sus senos, por lo cual se acredita que utilizó la fuerza material para cometer dicho ilícito. Debiéndose aplicar lo previsto por el artículo 76 en relación al 36 del mismo Código antes citado en virtud de existir CONCURSO REAL DE DELITOS. Así como también deberá de tomarse en cuenta el grado de peligrosidad del inculpado de referencia este es el punto equidistante entre la MÍNIMA y la MEDIA, en virtud de los razonamientos antes expuestos” Ahora bien, en concepto del suscrito magistrado lo expresado por el Ministerio Público constituye una proposición concreta que en esencia contiene la pretensión punitiva y solicitud de la aplicación de la sanción correspondiente conforme a las reglas del concurso real o material de delito y con ello dio cumplimiento a lo establecido por los

artículos 343 y 344 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Cuenta habida que dichos preceptos no exigen ninguna motivación; máxime que en la fase procesal del juicio, que comprende las conclusiones acusatorias, el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad y por lo mismo no está constreñido a realizar la motivación en cumplimiento del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual sólo obliga a las autoridades a fundar y motivar debidamente sus determinaciones; obligando en consecuencia a la Representación Social simplemente a fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que se atribuyan al acusado y solicitar la imposición de la sanción correspondiente, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, citando las leyes aplicables al caso, por lo que no se puede sustentar válidamente que las conclusiones en el aspecto que se analiza, carecen de las exigencias esenciales que establecen los numerales citados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. NOVENA SALA. Toca de apelación en definitiva número 116/02, relativo a la Causa Penal número 64/01, instruida en contra de A. D. R. E. por los delitos de Allanamiento de Morada y Atentados al Pudor. Sentencia emitida el 7 de Febrero de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

33. CONCURSO IDEAL, APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL.- En efecto, el artículo 37 del Código Penal en vigor, precisa la existencia del concurso ideal “cuando con una sola conducta se cometen varios delitos”. Ahora bien, ya se acuda a los conceptos de valoración, resultado, infracción o tipos en múltiples concurrencias, lo relevante es que el concurso ideal en nuestro derecho positivo se estructura en la unidad de conducta (acción), caracterizándose por la violación de varias normas penales que constituyen una pluralidad de delitos. A esta forma de concurso se le ha denominado “ideal” en virtud de que regula la acción, conducta o hecho en una múltiple tipificación delictiva, puede afirmarse que su “calificación” corresponde a varias figuras jurídicamente autónomas, las que en razón de la “unidad del momento de la culpabilidad” deben sancionarse como un solo delito, lo que excluye la pluralidad delictiva desde el punto de vista real o material. La unidad de acción existe cuando se refleja: a) Un dolo genérico, descartando la voluntad hacia varios resultados; b) La coetaneidad o simultaneidad de la conducta con el resultado. Aun cuando en el evento se realicen varios actos, un elemental juicio de valoración permite estimarlos como integrantes de una misma acción. En la especie quedó demostrado con el conjunto de datos que obran en la causa, que la intención de los acusados era la de acudir a un determinado lugar para apoderarse de bienes muebles, lo que se traduce en un dolo genérico, además las conductas fueron realizadas en un solo acto en el cual participaron todos, de ahí la simultaneidad con el resultado. Por lo tanto, debe punirse la conducta de los acusados de acuerdo a las reglas del concurso ideal previstas por el artículo 37 en relación al 77 del ordenamiento en consulta, que consigna la facultad potestativa de aplicar la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se podrá aumentar hasta en una mitad más del máximo de su duración. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 227/99, relativo al proceso número 57/97, instruido en contra de J.F.U.O. Y E.A.M. por el delito de ROBO CON

VIOLENCIA.- Sentencia emitida el 25 de agosto de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

34. CONCURSO REAL DE DELITOS, APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL, TRATÁNDOSE DE CALIFICATIVAS. Debe precisarse que según la doctrina para penar los casos de concurso real, existen tres sistemas: el primero, conocido como Acumulación Material de Penas, establece que el sujeto activo de varios delitos debe sufrir todas y cada una de las penas correspondientes a los diversos tipos realizados; el segundo, es el de Absorción, conforme al cual la pena del delito mayor absorbe las correspondientes a los delitos de menor sanción, y el tercero, denominado Acumulación Jurídica, el cual se traduce en un sistema intermedio entre el de la acumulación y el de la absorción, que en opinión del suscrito Magistrado, es el que adopta el artículo 76 de nuestro código Penal en vigor, ya que así se advierte de su contenido al establecer: "En los casos del concurso real o material, se impondrá la pena del delito mayor, la que se aumentará hasta la suma del término medio aritmético de las demás correspondientes...", y al hablar de las demás correspondientes, significa que quedan también comprendidas las penas relativas a las calificativas demostradas en relación a los restantes delitos, que de igual modo deben aumentarse hasta la suma del término medio aritmético como se señala en el dispositivo comentado, por lo que si el Juez de Primer Grado estableció un aumento de las penalidades correspondientes a las calificativas de los delitos concursados igual a la del delito mayor, debe corregirse tal falla. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 395/98, relativo al Proceso Número 39/98, instruido en contra de M. A.C.G. Y OTROS, por los Delitos de ROBO CON VIOLENCIA Y PORTACIÓN PROHIBIDA DE ARMAS.- Sentencia emitida el 26 de enero de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

35. CONFESION. CASO EN QUE LA DETENCION DEL REO EN FORMA ALGUNA VALIDA SU DECLARACION INICIAL. La argumentación del acusado en el sentido de que le causa agravio el auto constitucional en el cual tratan de justificar la privación ilegal de libertad, señalando que se justifica su detención en virtud de que fue aprehendido en flagrante delito, de conformidad con los artículos 134 fracciones 1, 2, 3 y 4, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, y aún sin reconocerlo, no existe en autos elementos -suficientes y ni tan siquiera indicios que hagan presumible la flagrancia del delito, resulta improcedente, pues la circunstancia que enuncia en forma alguna trasciende para invalidar su declaración inicial, puesto que ha operado un cambio en su situación jurídica y la ilegalidad, en caso de que se hubiese presentado al ser detenido dicho inculpado, ha quedado subsanada por la formal prisión, que inclusive el reo no recurrió y por la sentencia de primer grado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA Toca de apelación en definitiva número 45/2000, relativo al proceso

penal número 77/99, instruido en contra de J.D.G.D. ó J.A.G.C., por el delito Equiparable al Robo. Sentencia emitida el 7 de marzo del 2000.-Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

36. COPIAS AL CARBÓN DE ACTUACIONES CARECEN DE VALOR PROBATORIO PARA LA REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. De lo expuesto se colige con claridad que el Juez de la causa, para dictar sentencia de condena en contra del acusado J.C.M.S. por el delito de LESIONES, tomó como base para emitir su determinación una documental, obtenida para la reposición del procedimiento y si bien es cierto del artículo 30 del Código Penal vigente en el Estado se deviene que cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrán por probadas plenamente la existencia de las que se inserten en el auto de detención, en el de formal prisión o en el de sujeción a proceso, o en cualquier otra resolución de que haya constancia, siempre que no se haya objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita que de ella se haga; también lo es que es opinión que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104 fracción V, 310 del Ordenamiento Legal antes citado, el cual señala este último: " Los jueces y Tribunales apreciaran las pruebas con sujeción a las reglas de este capítulo; y tratándose de documentos públicos conforme al artículo 313 del aludido cuerpo normativo, se consigna el derecho a las partes para redargüirlos de falsedad, y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos, teniéndose como documentos públicos conforme al diverso numeral 314 del Código en comento, y 287 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado respectivamente, los documentos auténticos expedidos por Servidores Públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones y las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos, expedidos por Servidores Públicos a quienes competen, circunstancias que no se dan en la especie en la constancia de fecha 30-treinta de Enero de 1996-mil novecientos noventa y seis, la cual es una copia al carbón, de la que se deviene que no se encuentra firmada por el C. Juez y Secretario; por lo que no es el caso de tomarlo como documento auténtico, ni se encuentra certificada por el Servidor Público a quien compete hacerlo, de ahí que contrario a las opiniones vertidas por el A quo, la misma carece de valor probatorio de documento público; por lo que la constancia de referencia de fecha 30 de Enero de 1996, se estima que no requería ser objetada, de ahí que con la misma no se probaba plenamente la existencia de las actuaciones que en ella se insertaban; por consiguiente el mismo quedó reducido como un indicio, insuficiente por sí solo para condenar. No siendo obstáculo para lo anterior que obre a foja 79 del Sumario, dictamen médico definitivo emitido por el médico legal de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado, de donde se desprende que se examinó ANTONIO ZARAGOZA MENDEZ; constancia la anterior que no robustece el valor de indicio dado el documento de referencia, puesto que se basa en el dictamen de fecha 23-veintitrés de Diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, mismo que no obra en autos; aunado a la circunstancia de que el facultativo referido encontró curado de sus lesiones a dicho pasivo sin dejar secuela funcional. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA.

Toca penal en definitiva número 90/2003, relativo al proceso número 816/1995, instruido en contra de J. C. M. S. por el delito de Lesiones, ante el C. Juez Primero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

37. CORRUPCIÓN DE MENORES. DEFINICIÓN DE LA PALABRA CANTINA COMO ELEMENTO INTEGRANTE DEL DELITO DE. Toda vez que la intención del legislador al establecer la figura delictiva a estudio lo fue el proteger el sano desarrollo psicosexual y moral de los menores de edad, haciendo una interpretación lógica restrictiva del artículo 198 del Código Penal vigente en el Estado, por "cantina" debe entenderse aquel establecimiento público donde los parroquianos consumen bebidas embriagantes sin límite y cuyo ambiente pueda propiciar, por inducción o imitación, que los menores de edad adquieran los hábitos del alcoholismo, el uso de substancias tóxicas o prácticas de perversión sexual. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 659/98, relativo al Proceso Número 154/98, instruido en contra de E.L.M., por el Delito de CORRUPCIÓN DE MENORES.- Sentencia emitida el 21 de enero de 1999.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

38. CORRUPCIÓN DE MENORES. LA MARIHUANA NO ES CONSIDERADA COMO SUBSTANCIA TÓXICA. El hecho delictivo imputado al enjuiciado consiste en haberle proporcionado al pasivo en dos ocasiones cuando era menor de dieciocho años de edad (17 años), el enervante conocido como "marihuana"; lo que no puede quedar inmersa en la hipótesis normativa antes invocada, ya que el Iter criminis imputado al acusado, recae sobre un vegetal llamado "marihuana", narcótico que no se encuentra considerado en el numeral de que se trata, ni tampoco es dable incluirlo dentro de aquellas substancias que producen "efectos similares", ya que al efecto, el Código Penal Federal en el Título Séptimo, Capítulo Primero, denominado Delitos contra la Salud, concretamente, en el artículo 193, remite a los numerales 237, 245 fracciones I, II y III, y el 248 de la Ley General de Salud, como objeto de la prevención, en dichos numerales se incluye a la marihuana como de aquellos que constituyen un grave problema para la salud pública. A lo anterior debe agregarse el principio de especialidad a que se refiere el artículo 6º. Del Código Penal Federal, de todo lo cual se concluye que tal narcótico no puede quedar incluido dentro de aquellas substancias a que se refiere el numeral 197 bis del Código Penal en vigor, ya que de considerar lo contrario, sería violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, por cuanto a la imposición de una pena por analogía, ya que los principios "nullum crimen sine lege" y "nulla poena sine lege", en que descansa la garantía y que refieren a que un hecho que no esté señalado en la ley como delito, no es delictuoso y por ello, no puede conducir a la imposición de una pena y, por otro lado, a que por todo hecho relacionado en la ley como delito, se debe prever expresamente la pena que le corresponda, en caso de su comisión, que proscribe el párrafo tercero del artículo 14 Constitucional, sin que ello implique que no se esté en presencia de un hecho no penado por la ley. Consecuentemente se revoca la sentencia motivo del grado

y se dicta en su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del acusado por el delito de CORRUPCIÓN DE MENORES previsto en el numeral 197 Bis del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 487/2003, derivado del Expediente número 200/2001, instruido en contra de D. P. T. ó D. I. P. T. por el delito de Corrupción de Menores. Sentencia emitida el 16 de Octubre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

39. CORRUPCIÓN DE MENORES. NO SE CONFIGURA EN VIRTUD DE LA EDAD DE OFENDIDA. Ahora bien en cuanto al delito de Corrupción de menores en perjuicio de L.Y.C. de J., la suscrita Magistrada estima que la existencia de dicho ilícito no se encuentra acreditada en autos, ni por ende la plena responsabilidad del acusado, toda vez que si bien es cierto que el dictamen de examen mental que le fue practicado a dicha afectada, se desprende que ésta presentó datos clínicos de ansiedad la cual solo se evidencia al recordar el supuesto abuso, también es cierto que la pasivo citada contaba con siete años de edad al momento de acontecer los hechos en su perjuicio, por lo que es evidente que por la escasa edad de ésta no es posible que por su desarrollo fisiológico se inicie en la vida o la depravación sexual al no haber despertado en ella la libido y por ende la práctica voluntaria de actos sexuales prematuros, pues a esa edad, un acto de la naturaleza del que se le impuso, en lugar de procurar o facilitar la depravación sexual en la afectada, produce molestias y repugnancia hacia tales actos; sirviendo de apoyo a la presente determinación el criterio jurisprudencial cuyo rubro dice: Corrupción de menores (Hipótesis de iniciación en la vida sexual o depravación sexual) no acreditado. Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, fuente: Semanario Judicial de la federación, tomo X, septiembre de 1992, página 256. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 840/01, relativo al expediente número 8/01, instruido en contra de J.A.G.M., por el delito de Corrupción de Menores y Otros. Sentencia emitida el 28 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

40. CULPA Y PELIGROSIDAD, DIFERENCIAS. La culpa es un factor básico que debe considerarse para individualizar la pena que corresponda imponer a los responsables de la comisión de un delito de naturaleza culposa, pues el juicio de reproche recae en la conducta imprudente de quien no desea cometer un delito, sin embargo, aquel se realiza, debido a su comportamiento negligente, falto de cuidado, carente de pericia, o cuando, representado como posible el hecho, confía en que no se producirá, ésta forma de graduar la sanción, es diferente al juicio de peligrosidad que debe llevarse a cabo ante la presencia de delitos cometidos a título de dolo, en los que el agente activo se ha propuesto el quebrantamiento del orden jurídico y su comportamiento va dirigido precisamente a lograr el daño de un bien jurídicamente protegido. De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que resulta evidente que los delitos culposos e intencionales se encuentra sujetos a

diferentes reglas para la calificación de la sanción; ya que, en tratándose de delitos de naturaleza culposa, su sanción descansa en el principio básico de la gravedad de la culpa; y no obstante, que el mismo dispositivo legal, -es decir, el artículo 65 de la Ley Penal del Estado- establece que la Autoridad Judicial, para calificar el grado de culpa, habrá de tomar en cuenta, además, las circunstancias generales señaladas en el artículo 47 del Código Penal, ello de ninguna manera implica que la sanción a imponer habrá de sostenerse en la peligrosidad revelada por el delincuente, pues la remisión que se hace a dicho dispositivo legal, es de carácter complementaria, ya que lo fundamental en el caso de delitos de carácter imprudencial, es que se califique la gravedad de la culpa de acuerdo a las reglas especiales contenidas en la Legislación Penal, las que en ningún momento hacen alusión al concepto de peligrosidad, de ahí que al tomar como parámetro la peligrosidad del procesado para sancionarlo por la comisión de un delito culposo, se aplica inexactamente la Ley. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA PENAL. Toca de apelación en definitiva 179/2004, relativo a la causa penal número 68/99, instruida a ... por el delito de HOMICIDIO A TITULO DE CULPA. Definitiva de fecha 24 veinticuatro de Enero de 2004 dos mil cuatro. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

41. DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TITULO DE CULPA. DAÑOS EXIGIBLES EN LA VÍA CIVIL, SI SE TENÍA EL USO DEL VEHÍCULO A VIRTUD DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Si de las constancias que obran en autos como lo son el escrito de querella presentado por J. A. C. y lo manifestado por el acusado D. R. se advierte que precisamente el uso que tenia el acusado respecto del vehículo marca Nissan, modelo Tsuru, 4-cuatro puertas año 1992, sin placas, número de serie 2BLB13-55534 número de motor hecho en México, número E16-521431M, provenía de la celebración de un Contrato de Arrendamiento celebrado entre A. C. y el acusado respecto a tal vehículo a fin de que fuera utilizado de acuerdo a dicho convenio en donde como se señala por el propio A. C. se lo arrendó para que lo trabajara por las noches, de lo que se deviene que el acusado tenía el uso y disfrute de dicho bien y si se toma en cuenta que conforme al artículo 2319 del Código Civil se establece que el arrendatario esta obligado entre otras cosas a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o arrendatarios y si de las constancias de autos se advierte que el acusado tenía el uso del vehículo propiedad de J. A. C. a virtud de la celebración de un contrato civil de arrendamiento entre ambos según el propio A. C., como lo señala el citado artículo 2319 fracción II del Código Civil en vigor en la Entidad, está obligado el arrendatario en este caso L. R. D. R. a responder de los perjuicios que sufra el bien arrendado, pero en la vía civil, pues si bien el acusado causó daños al vehículo motivo del arrendamiento, ello fue precisamente por el uso que se le concedía para ese efecto mediante un contrato civil de arrendamiento y por lo tanto su deuda resulta ser de este tipo y no castigable a través de la materia penal ya que como se dijo existe disposición expresa en los artículos 2319 fracción II y 2336 del Código Civil en el sentido de establecer que el arrendatario esta obligado a devolver la cosa arrendada tal como la recibió y además a

responder de los perjuicios que la cosa sufra por su culpa o negligencia. Teniendo aplicación el criterio jurisprudencial que tiene como título: "DAÑOS CULPOSOS. SU NATURALEZA PENAL QUEDA EXLUIDA CUANDO SE GENERAN EN FUNCION DE UN CONTRATO DE COMODATO (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Sin que sea obstáculo que la tesis anteriormente descrita derive del estudio de un contrato de comodato y no de un contrato de arrendamiento, ya que en ambos contratos se establecen las mismas obligaciones, o sea también el hecho de responder de los perjuicios que se causen con motivo del uso del bien motivo del contrato. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 87/2002, derivado del Proceso Penal número 284/2002, instruido en contra de L. R. D. R. por el delito de Daño en Propiedad Ajena y otro a título de Culpa. Sentencia emitida el 16 de Abril de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

42. DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR INCENDIO, COMETIDO EN FORMA IMPRUDENCIAL. Los elementos de convicción, analizados con anterioridad, son suficientes para demostrar la existencia del cuerpo del delito de Daño en Propiedad Ajena, que tipifica el artículo 402 del Código Penal Vigente en el Estado, el cual a la letra dice: "Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicará la sanción de robo simple". Siendo los elementos constitutivos de dicha figura delictiva, los siguientes: a) que por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro, b) que se realice en cosa ajena o en cosa propia en perjuicio de tercero, y c) la relación de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado final. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, pues si bien es cierto que los daños causados al domicilio de M.E.T.L. fueron consecuencia de un incendio, ninguna prueba existe en el sumario que demuestre que G. L. T. tenía la intención de causar tal incendio, dado que el conocimiento por parte del activo de que pueda causar "graves daños personales" por medio de incendio, inundación o explosión, configura un dolo específico, caso en el cual el delito solo puede ser doloso, pero sin ese conocimiento y sin que sea dolosa la causación del incendio, como en el caso a estudio, el delito será imprudencial y deberá sancionarse de acuerdo con el artículo 65 del Código Penal en Vigor, tal y como lo establece el diverso 406 del Ordenamiento citado, ya que el factor determinante de ese resultado, es decir del daño material ocasionado por el referido acusado en el domicilio de la pasivo, se debió sin lugar a dudas, a una falta absoluta de precaución, de reflexión y sobre todo de cuidado, cuando L. T., bajo el influjo de las bebidas embriagantes se introdujo al domicilio de su vecina M.E.T.L. para evitar el regaño de su padre, lugar en donde se tomó otra cerveza y encendió un cigarrillo cuando se encontraba sentado en la cama, quedándose dormido y despertó cuando la cama se estaba quemando. En estas condiciones, la probable responsabilidad penal de G.L.T. se demuestra en términos del artículo 28 en relación al 39 Fracción I ambos del Código Penal Vigente en el Estado, pues con su conducta carente de precaución y cuidado, causó el daño en el domicilio de M.E.T.L./ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 207/02,

relativo al proceso número 12/02, instruido en contra de G.L.T., por el delito de Daño en Propiedad Ajena. Sentencia emitida el 14 de Junio de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

43. DAÑO EN PROPIEDAD AJENA SIMPLE Y NO POR INCENDIO. El artículo 403 fracción II del Código Sustantivo de la materia previene que comete el delito de daño en propiedad ajena, el que cause incendio, inundación o explosión, con daño o peligro de ropas, muebles u objetos, en tal forma que puedan causar graves daños personales. En este caso concurren dos circunstancias, la primera, es que los medios específicos de comisión deben ser incendio, inundación o explosión, y la segunda, que estos siniestros deben causar daño, poniendo en peligro a ciertos bienes con riesgo de alguna persona. Las "ropas, muebles u objetos" que se citan, son exclusivamente aquéllos en que, por su naturaleza propia, destino o demás circunstancias del lugar o de tiempo, el incendio, inundación o explosión "pueden causar daños graves personales", dicho de otra manera, al momento de producirse tal daño debe correr un riesgo personal el sujeto pasivo, ya que se tenga puesta la ropa a la que se prende fuego, se encuentre en el interior de un mueble o en un objeto donde pretenda resguardar su persona. Consecuentemente, si el incendio se produjo cuando no había moradores en el inmueble y la pasivo se encontraba a salvo en otro lugar distante de éste, es incuestionable que el daño producido encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 402 del Código Penal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 377/2000, relativo al expediente número 93/2000, instruido en contra de CAC, por el delito de Daño en Propiedad Ajena. Sentencia emitida el 1º. de Noviembre de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

44. DAÑO MORAL EN EL DELITO DE LESIONES, CONDENA ILEGAL AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL. En lo tocante a la indemnización moral, por dicho concepto no es dable condenar al acusado, no obstante que nuestro Código Civil de la Entidad establece lo relativo al daño moral, el cual no puede exceder de la tercera parte del importe de la responsabilidad civil; sin embargo, el pago del daño moral sólo se exige tratándose de homicidio y no de lesiones, ya que la reparación del daño comprende la indemnización del daño material y moral causado a la persona agredida, lo anterior conforme al artículo 144 del citado Ordenamiento Legal, el cual dispone en lo que interesa, que la reparación del daño y perjuicio a que se refiere la fracción II del artículo anterior, será fijada por la autoridad judicial tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil en su caso, por lo anterior, al remitirnos al artículo 1813 del Código Civil del Estado, el cual es aplicable al caso y que a la letra dice: "Independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar a favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización equitativa, a título de reparación moral, que pagará el responsable del hecho..." Del contenido de tal dispositivo legal, se denota claramente que únicamente prospera la indemnización de

reparación moral a favor del sujeto pasivo de un hecho ilícito, en el supuesto de que el ofendido muera a consecuencia de haber sido víctima por una conducta ilícita, anterior circunstancia que no se aplica al presente caso tratándose de lesiones; motivos por los cuales debe de eliminarse del concepto a cubrir por parte del acusado, la suma que fuera determinada por parte del Juez como condena por daño moral. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 23-veintitrés de febrero del año 2005-dos mil cinco, Toca en Definitiva 539/2004, Proceso 497/2002 y su acumulado 250/2003, instruido a S. F. M. M. u O. L. M. M., por los delitos de LESIONES y ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

45. DAÑO PROPIEDAD AJENA POR CULPA, TARJETA DE CIRCULACIÓN, LEGITIMACIÓN PARA QUERELLARSE. Para que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León expidiera la tarjeta de circulación, el comprobante de pago sobre tenencia o uso de vehículo y el recibo de pago de derechos de un vehículo que ha sido legalizado por las Autoridades Gubernamentales Mexicanas, fue necesario que el contribuyente a cuyo nombre aparece el vehículo, presente documentos que lo acrediten con el carácter de poseedor a título de propietario, esto es que previamente exhiban la factura o título de propiedad; por tanto siendo la tarjeta de circulación un documento público no objetado, ni redargüido de falso, se le otorga eficacia jurídica en los términos del artículo 313 y 314 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, que resulta apto para determinar que C. R. V. esta legitimado para querellarse, habida cuenta que la tarjeta de circulación y el recibo de pago de impuestos sobre tenencia de vehículos son documentos público suficientes para acreditar la posesión o propiedad de un vehículo en el dado caso de que no se presente la factura que ampara la propiedad del mismo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 72/2004, derivado del Expediente número 13/2004, instruido en contra de A. M. C. por el delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

46. DAÑO PROPIEDAD AJENA, BIEN JURÍDICO TUTELADO. No debe olvidarse que el bien jurídico tutelado por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, no solo es el derecho de propiedad sobre las cosas, sino también el patrimonio de las personas basado en la posesión en concepto de dueño o poseedor de la cosa si resienten perjuicios o daños de carácter económico que repercuten en su esfera jurídica tutelada cuando se afecta la cosa que poseen, por tanto para el perfeccionamiento de la querella tratándose del mencionado delito, no es estrictamente necesario acreditar el derecho de propiedad de la cosa conforme a las disposiciones del Código Civil, pues para ello basta demostrar que sobre los bienes dañados se tenía un legítimo derecho y son ajenos al patrimonio del activo, o bien, que aún perteneciendo a éste, su destrucción o deterioro cause perjuicio a tercero. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 72/2004,

derivado del Expediente número 13/2004, instruido en contra de A. M. C. por el delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

47. DEBE ELIMINARSE A FAVOR DEL REO, LA APLICACIÓN DEL AGRAVANTE DE PARENTESCO A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LA ÉPOCA DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS DELICTUOSOS, APLICADO CONFORME AL ARTÍCULO 4º TRANSITORIO DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. Por otra parte tenemos que de igual forma del fallo que se recurre se advierte que el Juez Natural al momento de aplicar la sanción señalada por el diverso numeral 269 del Código Penal vigente al momento de los hechos, determinó: "...a las sanciones, señaladas en la segunda parte del artículo 260 y en los artículos 263, 266, 267 y 268, se aumentará de tres a seis años de prisión, cuando el responsable tenga parentesco, entre otros, por afinidad con la persona ofendida, por lo que se declara procedente la pretensión del Ministerio Público..."; deviniéndose de lo anterior que el A-quo no fue acertado en su apreciación, toda vez que el artículo 269 del Código Penal vigente en la época de la comisión de los hechos delictuosos, aplicado conforme al artículo 4º Transitorio del Código Penal vigente en el Estado, no consideraba la agravante de parentesco en tratándose en el delito de VIOLACIÓN que contrae el artículo 269 del Código Penal vigente, por lo tanto en debida reparación, se MODIFICA la determinación de primer grado, para el efecto de eliminar la agravante a que se contrae el artículo 269 del Código Penal vigente al momento de los hechos, y por ende la sanción impuesta por el mismo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 10/2003, derivado del Proceso número 8/2001, instruido en contra de J. H. S. por los delitos de Violación y Equiparable a la Violación y por Violación en Grado de Copartícipe. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

48. DECOMISO ARMA DE FUEGO CUANDO COMPETE AL JUEZ FEDERAL Y NO AL JUEZ DEL FUERO COMÚN. Si bien es cierto que el artículo 64 del Código Penal dispone que en los delitos dolosos se determinará la pérdida a favor del Estado de los instrumentos con que se cometan, también lo es que dispone que se hará respetando los derechos de terceros y cuando se trate de armas de fuego se estará a lo dispuesto en las Leyes relativas. Por tanto si un revolver, calibre .38, marca Colt, matrícula D67352/G, modelo Diamond Back, Pavón en color negro, cachas de madera en color café, con el que se dispararon los proyectiles que privaron de la vida al ahora occiso, fue remitida físicamente a la Autoridad Federal para que conociera por el delito de Disparo de arma de fuego sin licencia dictando auto de formal prisión en contra del acusado y, esa arma de fuego se puso a disposición del Juez del fuero común por el delito de Homicidio cometido en perjuicio de J. D. M. M. instruido al inculpado O. R. M., es a la autoridad federal a la que le compete únicamente el decomiso y destino de la aludida arma de fuego y no al

C. Juez Aquo del fuero común, puesto que no le fue consignada a él, de acuerdo a lo que disponen los artículos 1°, 40 y 88 del Código Penal Federal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 441/2003, derivado del Expediente número 40/2001, instruido en contra de O. R. M. por el delito de Homicidio Calificado. Sentencia emitida el 26 de Agosto de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Del contenido de tal dispositivo legal, se denota claramente que únicamente prospera la indemnización de reparación moral a favor del sujeto pasivo de un hecho ilícito, en el supuesto de que el ofendido muera a consecuencia de haber sido víctima por una conducta ilícita, anterior circunstancia que no se aplica al presente caso tratándose de lesiones; motivos por los cuales debe de eliminarse del concepto a cubrir por parte del acusado, la suma que fuera determinada por parte del Juez como condena por daño moral. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 23-veintitrés de febrero del año 2005-dos mil cinco, Toca en Definitiva 539/2004, Proceso 497/2002 y su acumulado 250/2003, instruido a S. F. M. M. u O. L. M. M., por los delitos de LESIONES y ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

49. DELITO CONTRA SERVIDOR PUBLICO NO CONSTITUYE UN AGRAVANTE SINO UN DELITO AUTÓNOMO. No es procedente agravar las penas a imponer a los acusados por los delitos de LESIONES conforme al artículo 191 del Código Penal en vigor, ya que la circunstancia de ser servidores públicos los lesionados, es un delito autónomo como lo concibe Raúl Carranca y Trujillo y Raúl Carranca y Rivas, en su obra Código Penal Anotado de Editorial Porrúa, página 487, es decir, no se trata de una agravante, de acuerdo a lo que prevé el numeral 191 del Código Penal de Nuestra Entidad, pues en primer lugar se encuentra en el capítulo cuatro denominado “Delitos Cometidos Contra Instituciones Oficiales y Servidores Públicos” y en segundo lugar, si el Juez lo consideró como una agravante por así haberlo solicitado el Ministerio Público, ello es incorrecto, pues el órgano acusador lo considera como una agravante, no siéndolo, pues como se dijo se trata de un delito autónomo, razones por las que dicha circunstancia no se puede subsanar, pues de hacerlo se causaría perjuicio grave a los acusados, pues se supliría indebidamente la queja del Ministerio Público, violentándose lo previsto por el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales en vigor, además de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los acusados, por lo que resulta inoperante el agravio expuesto por el órgano técnico en cuanto a la pena impuesta a los acusados conforme al artículo 191 del Código Represivo en vigor y en suplencia de la queja se debe modificar la sentencia de primer grado en lo que a éste apartado corresponde, a efecto de no imponer pena alguna a los acusados por la circunstancia de que cometieron el delito de lesiones contra servidores públicos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia de fecha 15 de Marzo del 2005.-Toca en Def. No. 526/2004, Proceso No. 350/2001. Acusado: - F.J.S.P. y V.L.C. Delito: ROBO y otros.

50. DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES. ELEMENTOS DEL DELITO DE. La característica del delito de desobediencia es la resistencia abierta, hostil, maliciosa, acompañada de actos de contradicción decidida y resuelta, de reiterada pasividad punible, que implica una franca actitud de rebeldía, por lo que si el demandado mostró su disposición a la entrega de los bienes requeridos y se ofreció a realizar las gestiones para que se llevara a cabo la entrega, no se puede decir que se haya conducido con una marcada desobediencia a la determinación dictada por el Juez Civil, y por tanto, su conducta no debe ser reprochable. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 177/99, relativo al Proceso Número 210/96, instruido en contra de M.W.T.G., por el Delito de DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES.- Sentencia emitida el 31 de mayo de 1999.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

51. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES. INEXISTENCIA DEL DELITO DE. La negativa de un delincuente, y la resistencia ejercida en contra del agente de policía que trata de detenerlo, no es constitutiva del delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, porque la actitud adoptada por el inculpado, constituye una reacción natural y lógica del delincuente que es la de tratar de escapar de su persecutor, surgiendo con ello la figura de la autoeximición, que previene que toda detención exige violencia en persona o fuerza en los cosas y la resistencia a la intimación de prisión, configura la eximición cuyas reglas son idénticas al derecho de evasión, ya que la eximición no puede ser considerada como delito, sino solamente el elemento criminoso que se encuentra en los medios empleados para tratar de evadirse del arresto inminente, por lo que la fuga o su pretensión no puede ser sujeta de sanción, sino solo los ilícitos que se cometen para lograr esta. Este criterio encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro “Resistencia de Particulares, oposición a la detención que no configura el delito de”. La cual es visible en la Actualización Octava Penal de la Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1982- 1983. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 9/2000, relativo al proceso penal número 118/99, instruido en contra de C.T.M., por los delitos de disparo de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares, allanamiento de morada y ataques peligrosos. Sentencia emitida el 9 de febrero del 2000.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

52. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 125-II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN LA ENTIDAD. Bajo el mismo contexto, debe tenerse presente, que el artículo 42, del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, estatuye, después de expresar que los Jueces Civiles, pueden emplear para hacer cumplir sus determinaciones, cualquiera de los medios de apremio que ahí se indican, que "Si el caso exigiere mayor pena, se consignará al Ministerio Público para los efectos legales"; lo que implica que esta última disposición constituye uno de los

requisitos previos a los que alude el artículo 125-II, del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, que establece "Que el Ministerio Público y los Agentes de la Policía Judicial a su mando, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos del orden común de que se tengan noticia; excepto en los casos siguientes: II.- Cuando la Ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado."; supuesto el anterior, que a su vez se traduce en la imposibilidad legal de que la Autoridad, a quien corresponde el monopolio del ejercicio de la acción penal (Ministerio Público Investigador), en términos del artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la haga valer por cuanto ve a los ilícitos de Desobediencia y Resistencia de Particulares, tipificados por los pre-citados numerales legales del Código Punitivo vigente en la Entidad, sin que previamente se llene el requisito, ya puntualizado. Hipótesis que se surte en el caso concreto, en virtud de que al examen acucioso de las constancias que tienen fuerza de atestado, y que integran la Indagatoria Previa, particularmente de las fotocopias debidamente certificadas por la Secretaría de Juzgado Décimo Civil, del Primer Distrito Judicial en el Estado, relativas a las que integran el expediente judicial número 470/98, que contiene el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado..., en su carácter de endosatario en procuración, de .... en contra de..., no obstante que se desprende, se utilizaron los medios de apremio establecidos por la Ley Procesal Civil, para el cumplimiento de las determinaciones judiciales (el auxilio de la fuerza pública y el cateo), a efecto de que el depositario judicial designado, señor..., entrara en posesión material y jurídica del bien mueble embargado consistente en un vehículo marca Dodge, Tipo Neón, color gris, cuatro puertas, modelo 2000 dos mil, número de serie 1B3BS546C4YD524205 y con placas de circulación RNZ-4112, de esta ciudad; en ningún momento se advierte proveído alguno decretado por la Autoridad Civil, que haya tenido por objeto ordenar la consignación al Órgano Persecutor de los delitos, del demandado... TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 44/2001, relativo al proceso penal número 398/01-III, instruido en contra de ..., por el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares. Sentencia interlocutoria emitida el día 30 de Noviembre de 2001. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

53. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES, CASO EN QUE SE PERSIGUE DE OFICIO Y NO A PETICIÓN DE PARTE. El artículo 407 del Código Penal vigente en el Estado es muy claro en señalar que en los casos de los delitos en relación con el patrimonio, como lo es el de Despojo de Cosas Inmuebles, se perseguirán a petición de parte ofendida cuando sean cometidos por ascendientes contra descendientes o por éstos contra aquéllos; los de un cónyuge contra el otro, los del suegro o suegra contra su yerno o nuera, o por éstos contra aquéllos; por el padrastro o madrastra contra su hijastro o hijastra o viceversa, o entre hermanos, así como entre concubina o concubinario, entre adoptante o adoptado o de quien tenga posesión de estado de hijo; hipótesis que en la especie no se actualizan, por lo que debe concluirse que el delito en estudio es perseguible de oficio y no a petición de parte como en forma incorrecta se pretende hacer ver. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva

Número 208/99, relativo al proceso número 267/97, instruido en contra de G.T.B., F.B.F. Y V.C.M., por el delito de DESPOJO DE COSAS INMUEBLES.- Sentencia emitida el 12 de agosto de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

54. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES. EL MISMO SUJETO ACTIVO DE DELITO QUE SE APODERE DE UN INMUEBLE, NO PUEDE COMETER INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LAS DOS PRIMERAS FRACCIONES DEL NUMERAL 397 DEL CODIGO REPRESIVO DE LA MATERIA. En otra tesitura se llama la atención que de igual forma en el caso concreto se solicita la inclusión en oposición de los incriminados ..., de su probable participación penal de la comisión del distinto flagelo social de DESPOJO DE COSAS INMUEBLES, antijurídico conocido por el artículo 397-II del Código Represivo de la materia, cuyo texto es el siguiente: "Comete el delito de Despojo de cosas inmuebles o de aguas: II).- El que de propia autoridad, y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, o en los casos en que la Ley no lo permite, por hallarse en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; y..". Los componentes constitutivos de esta diversa figura delictiva son a saber: 1. El sujeto cualificado que debe ser el propietario del inmueble; 2. El objeto material del delito, que debe ser el inmueble propio; 3. Las acciones delictivas, o sea la ocupación del inmueble de su propiedad, o en los casos en que la Ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona, o bien ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; y, 4. Los modos de ejecución de dichas acciones, a saber: la violencia, la furtividad, la amenaza o el engaño. Sin embargo, la Suscrita Magistrada considera improcedente la anterior petición puesto que al ser analizados en conciencia todos y cada uno de los elementos de convicción que forman la averiguación previa de origen se arriba al firme convencimiento de establecer que los mismos son insuficientes para demostrar la existencia corporal de esta diferente conducta delictiva que se pretende reprochar a los imputados..., por parte de la Institución del Ministerio Público, esto es la del injusto social advertido por el numeral 397-II del Código Represivo de la Materia, ni por ende se demuestra la probable participación criminal que en la comisión de la misma les deviene a los incriminados y lo anterior es así por las razones que a continuación se pasan a explicar: Efectivamente: debe por su trascendencia subrayarse que el antijurídico de DESPOJO DE COSAS INMUEBLES que enuncia el numeral 397-II del Código Represivo de la Materia vigente para esta Entidad Federativa, se configura cuando el sujeto activo de propia autoridad y haciendo uso de la violencia o furtivamente o empleando amenazas o engaño, ocupa un inmueble de su propiedad en los casos en que la Ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona, o bien ejerce actos de dominio que lesionan derechos legítimos del ocupante. En otros términos, el sujeto cualificado de la figura delictiva a comento debe ser el propietario del inmueble cuya ocupación lleva a cabo a pesar de que se halle en poder de otra persona por una causa legítima o bien ejecuta actos de dominio sobre el inmueble y lesiona derechos del ocupante. De lo que se sigue que si no queda fehacientemente demostrada en la causa

penal correspondiente la cualidad de propietario resulta que no se actualiza la hipótesis contenida en la disposición legal enunciada... En ese orden de ideas deviene oportuno acotar sobre las siguientes reflexiones de índole legal: Es de estudiado derecho que las dos fracciones del dispositivo 397 del Código Penal vigente para esta Entidad Federativa, tipifican delitos autónomos. Es cierto que coinciden con el monto de la penalidad: tanto en lo que se refiere a la sanción corporal como a la pecuniaria; coinciden a la par, en los medios de que se valga el sujeto activo del delito para ocupar el inmueble objeto de los actos ilícitos penales. Con todo existe una diferencia esencial entre las dos fracciones, que no es otra que la que se refiere a la calidad del trasgresor, esto es que sea propietario o no lo sea del inmueble ocupado. En el supuesto que sea propietario del inmueble y que haya hecho uso de los medios que enumera la fracción segunda, comprobados los elementos constitutivos de la infracción, es procedente decretar la formal prisión, con fundamento en la invocada fracción secundaria. Mas no siendo propietario el sujeto activo del delito, al ocupar el inmueble ajeno por los medios de violencia física y moral, o furtivamente etcétera, entonces debe imponérsele el formal procesamiento con fundamento en la fracción I. Todo lo cual equivale a decir que sí es verdad que por lo que se relaciona a la posesión de hecho lograda por los medios a que aluden las dos disposiciones objeto de esta consideración los mandamientos de la ley son semejantes, también lo es que por lo que respecta a la propiedad del inmueble ocupado, hay autonomía entre las dos fracciones, es más un mismo sujeto activo de delito que se apodere de un inmueble, no puede cometer indistintamente cualquiera de las infracciones previstas en las dos primeras fracciones del numeral 397, pues si es propietario, incurrirá en el delito de la fracción II, excluyendo el ilícito acto penal configurado en la fracción I; y lo mismo es posible expresar en el supuesto de que no sea propietario, pues entonces, al cometer ese tipo de infracción, excluirá la instituida en la fracción II, y el criterio contrario sobre no distinguir la autonomía de los dos flagelos sociales, implica una violación al artículo 19 constitucional por cuanto que genéricamente se imputaría un delito a los incriminados que no es posible indistintamente admitir la comprobación de elementos de delitos que se configuran por hechos distintos, ya que si en el cuerpo de la presente decisión se determina que los acusados cometieron el acto injusto penal a que alude la fracción I del numeral 397, no se está en condiciones de decretárseles la formal prisión por el antijurídico a que alude la otra. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. DECIMA SALA PENAL. Toca de apelación en artículo 441/2003, relativo a la causa penal número 178/03-II, instruida a ... por el delito de DESPOJO DE COSAS INMUEBLES. Interlocutoria de fecha a 24 veinticuatro de Febrero del 2004 dos mil cuatro. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

55. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES. LOS REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTE DELITO TAMBIÉN SON APLICABLES EN EL CASO DE QUE LA CONDUCTA SE VERIFIQUE SOBRE UN DERECHO REAL. Resulta pertinente señalar que los requisitos para la integración del antijurídico que nos ocupa, en tratándose de un bien raíz, también son aplicables en el caso de que la conducta se

verifique sobre un derecho real, como se advierte de la interpretación del artículo 397-I del Código Represivo de la Materia, pues de la redacción de este dispositivo legal se advierte que se refiere a dos características en que es posible materializarse la usurpación: 1. La ocupación o el uso de un bien mueble ajeno; y 2. La ocupación o el uso de un derecho real que no le corresponda al activo. El apoderamiento o el uso de tal derecho para que sea estimado penalmente relevante e integrador del flagelo social en análisis, exige que sea de propia autoridad, que la realización de la conducta se exteriorice en el mundo real en forma activa y se materialice por cualquier método antijurídico, ya que la explicación de la mencionada fracción I, referente a que el activo de propia autoridad y a través de cualquier procedimiento delictivo, se aplica no solo al supuesto del uso o la ocupación de un predio ajeno, sino también para la hipótesis de que esas conductas se confirmen sobre un derecho real que no le pertenezca al acusado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 278/2002, derivado del Proceso Penal número 168/02, instruido en contra de... por el delito de Despojo de Cosas Inmuebles. Sentencia emitida el 10 de Enero de 2003. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

56. DESPOJO DE INMUEBLE ENTRE CÓNYUGES. CUANDO NO SE ACTUALIZA. La denunciante en ningún momento señala que el domicilio del que se dice despojada, hubiera sido adquirido por ambos dentro de su matrimonio y que por ende les perteneciera a los dos, sino que señala que en ese lugar establecieron su domicilio conyugal, lo cual no es sinónimo de que sean propietarios de ese bien, pues para justificar lo anterior es menester que justifique la propiedad, dado que en la hipótesis de la fracción II del artículo 397 del Código Sustantivo de la materia, es requisito indispensable para la configuración del delito, que el inmueble sea propiedad del sujeto activo y tal extremo no se encuentra probado en autos, porque no basta que los hijos de ambos declaren que el inmueble mencionado por la denunciante sea la casa de ellos, lo cual solo justifica que habitaban en ese inmueble, más no así que fuera propiedad del ahora inculpado, para dar por cierto que ocupó un inmueble de su propiedad ejerciendo violencia lesionando los derechos legítimos de terceros. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 324/2003, derivado del Expediente número 71/2003, instruido en contra de G. R. B. por el delito de Despojo de Inmueble. Sentencia emitida el 06 de Agosto de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

57. DESPOJO DE INMUEBLE SOBRE BIEN PROPIO. SI EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCITA LA ACCIÓN POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 397. NO SE CONFIGURA EL DELITO DE. El Agente del Ministerio al ejercitar su acción, lo realizó por el ilícito previsto por el artículo 397 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, lo que ratificara al presentar sus conclusiones acusatorias, y posteriormente sostuviera ante esta Instancia, el Titular de la representación social al expresar sus motivos de agravio; más sin embargo, dicha conducta delictiva, no se configura, ante la celebración de un contrato de promesa de venta que quedaba condicionada al otorgamiento de un

crédito, y que en caso de no otorgarse éste, ese contrato quedaría sin efectos, quedando supeditada a esa condición suspensiva. Lo que aconteció en la especie, en virtud de que el querellante no justificó, el cumplimiento de esa condición, consistente en el otorgamiento del crédito, y como lo pactaron los celebrantes, quedó sin efectos.- Entonces ese bien inmueble, no salió del patrimonio del querellado, y por lo tanto la ocupación que realizó no obstante de resultar ilegal, en virtud de haber otorgado la posesión derivada del inmueble, mediante un contrato de arrendamiento, la efectuó en su calidad de propietario, y de acuerdo a ello, el Fiscal debió haber ejercitado la acción penal conforme a la fracción II del artículo 397 del Ordenamiento Sustantivo en vigor, y no por la que lo acuso, entonces, lo que procede es confirmar la resolución de grado y absolver al acusado de esa imputación.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 179/2001, relativo al proceso penal número 123/99, instruido en contra de J.R.M. y E.B.R., por el delito de Despojo de Inmueble. Sentencia emitida el 25 de Junio del 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

58. DESPOJO DE INMUEBLE, DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE NO ACREDITAN LA POSESIÓN NI PROPIEDAD DEL INMUEBLE INVADIDO. Si bien el Juez del Proceso no tomó en cuenta las documentales públicas ofrecidas por las acusadas al rendir su declaración preparatoria; también es que las mismas no sirven para desacreditar el hecho que se les imputa, ya que tales documentales sólo justifican la propiedad que les asiste sobre los lotes de terreno números 45 y 46 de la manzana 17, de la colonia Andrés Caballero, en Escobedo, N. L., mas no la posesión de la porción del terreno que invadieron, el cual colinda con sus inmuebles, pues aquél tiene asignado como lote de terreno los números 18 y 19 de la misma manzana, colonia y municipio, el cual se encuentra en posesión el denunciante M. Á. M. L. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 792/04, relativo al proceso número 196/03, instruido en contra de J. I. M. y M. del C. P. I., por el delito de Despojo de Inmueble.- Sentencia emitida en fecha 07 de Enero del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

59. DESPOJO. CAMBIO DE CHAPAS EN EL INMUEBLE DADO EN ARRENDAMIENTO CONSTITUYE VIOLENCIA. Si fueron cambiadas las chapas de la puerta de acceso al inmueble en el que se encuentra establecido un negocio sobre el cual el pasivo tenía la posesión pacífica, con el cambio de chapas se empleó la violencia para ocupar ese inmueble, el cual era ajeno a la propiedad del inculpado ya que su coinculpado refirió que una empresa afectada subarrendaba ese inmueble a otras personas, y ambos dijeron trabajar para esa empresa cervecera. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 346/03, derivado del Expediente número 175/2001, instruido en contra de R. R. M. por el delito de Despojo de Inmueble. Sentencia emitida el 25 de Septiembre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

60. DICHO AISLADO, AL DESESTIMARSE LO DECLARADO POR EL ACUSADO, EN VIRTUD DE QUE EL MINISTERIO NO SE AJUSTÓ A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NI A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTRAE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO. El Primer elemento del delito de Portación Prohibida de armas, tipificado por el artículo 174 del Código Penal en Vigor, relativo a la acción de portar un arma, éste no se encuentra debidamente acreditado, puesto que sólo tenemos en su contra el dicho aislado del testigo,...dicho que no se encuentra debidamente corroborado con ningún otro elemento de prueba que cree convicción, para determinar que el ahora inculpado el día de los hechos portaba un arma; ...y si bien es cierto que de lo declarado por el inculpado, ante la C. Delgado del Ministerio Público se deviene que inculpado reconoce el cuchillo como el que se encontró en el interior del bar denominado "Max" y se lo guardó en la bolsa del lado derecho, también, es cierto que lo anterior no produce convicción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, 135 y 142 segundo párrafo, todos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues lo anterior lo realizó a virtud de cuestionamientos realizados por la Representación social, luego de que el inculpado había manifestado su deseo de no declarar, absteniéndose de hacerlo, acogiéndose a los beneficios del artículo 20 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no deviniéndose que hubiese manifestado su deseo de declarar, infringiéndose lo dispuesto por el artículo 135 en su inciso a) del Código Procesal de la materia en vigor, mediante el cual, se le indica al Ministerio Público la forma de proceder con el inculpado, cosa que como ya se asentó infringió al realizarle el cuestionamiento al inculpado, después de que éste había manifestado su negativa de declarar, acogiéndose al beneficio constitucional ya citado, de ahí que dicha representación social no se ajustó a los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni a las disposiciones que se contrae en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, razón por la cual y en base a las facultades otorgadas al suscrito por los artículos 310 y 396 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado, es dable determinar que lo declarado por el inculpado, carece de valor probatorio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 22/2001, relativo al Proceso Penal número 165/2001, instruido en contra de C. A. V. C. por el delito de Portación Prohibida de Armas. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

61. DICTAMEN DE EBRIEDAD. VALORACIÓN DEL. EN EL DELITO DE PORTACIÓN PROHIBIDA DE ARMAS. El segundo supuesto del artículo 174 del Código Penal en vigor previene que se actualiza el Delito de Portación Prohibida de Armas, cuando el activo porte alguna de las armas señaladas en el artículo 173 del código punitivo en consulta, estando ubicado en cualquier lugar público, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o substancias tóxicas, por lo que para la comprobación de la hipótesis típica mencionada, es menester que se demuestre a plenitud que el activo se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o substancias

tóxicas al ser encontrado en lugar público portando el arma que le fuera asegurada, para lo cual se requiere la confesión del acusado a ese respecto, o bien, un dictamen pericial que reúna los requisitos que exigen los artículos 248 y 251 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por lo tanto, si no existe confesión del acusado, y en el dictamen médico previo practicado al mimo no se especifica si fue realizado por un experto en la materia, ni las operaciones o métodos efectuados para arribar al diagnóstico de ebriedad que en el mismo se apunta, debe considerarse que dicho dictamen carece de valor probatorio y por ende, queda indemostrado uno de los elementos del delito que nos ocupa, lo que tiene como consecuencia la no integración de la figura delictiva imputada al reo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 328/98, relativo al Proceso Número 340/95, instruido en contra de F.G.L. y OTRO, el delito de PORTACIÓN PROHIBIDA DE ARMAS.- Sentencia emitida el 9 de octubre de 1998.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

62. DICTAMEN PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. VALOR DE ÉSTE. El dictamen pericial en grafoscopía emitido por peritos de la Dirección de Servicios Periciales adscritos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, merece valor probatorio de acuerdo al artículo 319 del Código Procesal Penal, no obstante que los peritos en grafoscopía hayan emitido su dictamen teniendo a la vista una copia del documento original certificada por un Notario Público, valor que adquiere a virtud de que los peritos que lo suscriben, expresaron los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamentos a su dictamen, y sobre todo, que el mismo se encuentra adminiculado a otros medios de información como lo son: un diverso dictamen de grafoscopía, dicho del acusado, del querellante y los testigos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 184/2000, relativo al proceso número 116/200, instruido en contra de H.M.C. y M.Y.H.M., por el delito de Falsificación y Uso de Documentos en General y Fraude en grado Tentativa. Sentencia emitida el 28 de Julio de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

63. DICTAMEN PERICIAL FAVORABLE AL ACUSADO. NO ES SUFICIENTE PARA LA PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. El suscrito magistrado no comulga con lo expresado en agravio por el acusado, ya que atendiendo a que si bien es cierto que se realizó el correspondiente peritaje tercero en discordia con resultados que favorecen el acusado S. M. H. R., al discrepar el mismo con la opinión vertida por los Peritos de adscripción a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, no menos cierto es que aquel dictamen pericial de modo alguno puede ser considerado como prueba indubitable que destruya, invalide o desvanezca los datos de información tomados en cuenta para el dictado del auto cabeza del proceso, puesto que el artículo 319 del Código Procesal Penal en vigor previene que los tribunales apreciarán los dictámenes según las circunstancias del caso, es decir, que el hecho de que una opinión pericial se eleve en un sentido

determinado, no obliga a la autoridad judicial a tener por cierto el mismo y darle validez absoluta, sino que por dicha disposición procesal no pueden los tribunales sujetarse a dicha opinión, sin analizar el resto de las constancias procesales con la finalidad de apreciar en forma plena las circunstancias del caso y con base a ellas, señalar por cual de las opiniones periciales extendidas en la causa se inclina, realizando para ello todos los razonamientos conducentes del caso. Lo anterior nos conlleva a la convicción de que no por el hecho de que como en la especie acontece el perito tercero en discordia, obtenga un resultado que favorece al reo, de forma obligatoria el Juez debe de otorgarle al mismo valor probatorio pleno y restarle valor a los medios de información que se tomaron en cuenta para el dictado de la formal prisión, teniéndolos inclusive por desvanecidos, pues tal condición es totalmente contraria a lo ya señalado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 51/2002, derivado del Proceso Penal número 525/01, instruido en contra de S. M. H. R. por los delitos de Daño en Propiedad Ajena y Allanamiento de Morada. Juzgado de Origen: Segundo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 09 de Abril de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, Y ADOPTADO POR LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ANTERIORMENTE CITADO.

64. DIFAMACIÓN, CASO EN QUE NO SE APLICA SANCIÓN EN EL DELITO DE. Si en el caso concreto las declaraciones se encuentran debidamente apoyadas con las documentales que aparecen a fojas 66, 106, 155, 156, 218, 244 y 258, que sin duda conducen a asegurar que las manifestaciones que en su caso hubieren vertido los reos, fueron motivadas pon un interés público, toda vez que según se desprende de los elementos probatorios mencionados con antelación, las expresiones de los inculpados fueron realizadas con el fin de que el funcionamiento del colegio no originara un deterioro en la calidad de vida de los residentes del área, encuadrando así su conducta en la hipótesis prevista por el artículo 347 fracción II del Código Penal, por lo que no debe aplicarse sanción alguna. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 411/98, relativo al Proceso Número 64/98, instruido en contra de A.J.E. Y OTROS, por el Delito de DIFAMACIÓN.- Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1998.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

65. DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CAUSA DE JUSTIFICACIÓN. Si bien es cierto que los elementos de Seguridad Pública inculpados en la causa, realizaron disparos con las armas de fuego asignadas, también lo es, que esto obedeció, a la actitud asumida por los denunciantes al no cumplir con las indicaciones de los agentes de que detuvieran el vehículo en que viajaban, del cual se les informó por la frecuencia, que sus ocupantes habían realizado disparos con arma de fuego contra diversa unidad de policía, e incluso ante tal indicación los acusados fueron objeto

de disparos con arma de fuego, por parte de los ahora denunciantes, por lo que dichos elementos de policía se encontraban ante una situación de extremo peligro y ante la necesidad imperiosa de utilizar los medios mas convenientes para vencer la resistencia desarrollada por las personas que se encontraban a bordo de la camioneta en persecución, pues era clara la oposición de los denunciantes, para que los oficiales ejercieran su función, por lo que al observar que obrar con violencia era necesario, para evitar continuar con la persecución y detener a esas personas, al haber sido infructuosa la intención de rebasarlos y detenerlos, optaron por detener la marcha del vehículo perseguido, utilizando para ello la fuerza, consistente en disparar las armas de fuego a su cargo hacía las llantas de dicho vehículo, logrando su objetivo, pues en razón de ello, el conductor de la camioneta que perseguían detuvo la marcha, al no poder continuar circulando con las llantas sin aire, deteniendo a los denunciantes, de lo que se concluye que los inculpados obraron en cumplimiento de un deber, como servidores públicos en funciones, de acuerdo al contenido de los artículos 65, fracciones I y III, y 66, fracciones I, II, VII, y X de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, y 21 de la Constitución Política del País, por lo que en consecuencia se actualiza la causa de justificación prevista por el artículo 17, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 438/01, derivado del Proceso Penal número 42/01, instruido en contra de M.M.T. y G.S.P. por los delitos de Disparo de Arma de Fuego, Daño en Propiedad Ajena y Otros. Sentencia emitida el 11 once de Enero de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

66. EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS, NO SE JUSTIFICA SI NO SE JUSTIFICÓ QUE CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES EL REO PERJUDICÓ EL SERVICIO PÚBLICO. La existencia del cuerpo del delito no se justifica ya que el delito de abandono de funciones públicas lo comete el empleado o funcionario publico que abandona su comisión, empleo o cargo antes de que le sea admitida la renuncia y en el caso a estudio el acusado ni siquiera evidenció su deseo de renuncia o bien que éste presentare su renuncia al puesto que desempeñaba, simplemente dejó de asistir a su centro de labores y con motivo de esto se levantaron las correspondientes actas en las que se hizo notar la ausencia del reo, así como del vehículo que éste tenía asignado para el cumplimiento de sus funciones como agente de la policía ministerial; conducta la anterior desplegada que no encuadra dentro del delito de abandono de funciones publicas pues si bien es cierto que el citado elemento de la policía ministerial dejó de cumplir con sus labores al no presentarse a sus labores sin una causa justificada, sin embargo el fundamento del delito es el de salvaguardar a la administración pública y a los servicios que ella presta, tratando de mantener su continuidad y normal funcionamiento, impidiendo que sus servidores se separen de su actividad en condiciones tales que puedan perjudicar al servicio publico; y de autos no se advierte que se hubiera aportado por parte de la institución Ministerial probanza alguna que justificara lo anterior; por lo cual es evidente que en su caso con la ausencia que tuvo el citado acusado a sus labores, no se trastocó el servicio público, por lo cual no

se puede tener por justificada la existencia del cuerpo del delito de abandono de funciones públicas ya que para la existencia del mismo debió de haberse justificado en autos que con motivo de la separación de sus actividades el reo perjudicó el servicio público, lo cual no acontece en la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 19/04, derivado del Proceso Penal número 23/02, instruido en contra de C. R. S. O. por los delitos de Ejercicio Indebido o Abandono de Funciones Públicas y Otro. Sentencia emitida el 22 de Marzo de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

67. EL ARTÍCULO 173 DEL CODIGO PENAL SOLO ESTABLECE CUALES OBJETOS PUEDEN SER CONSIDERADOS ARMAS. LO PROHIBIDO ES SU PORTACIÓN EN LAS CONDICIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 174 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. Sin que pase desapercibido para la Suscrita Magistrada, que el A-quo estableció en su razonamiento, al dictar el fallo motivo del grado, que el acusado portaba un arma de las prohibidas por la ley, equivocando así el concepto del delito de Portación Prohibida de Armas, dado que nuestra Legislación Penal, no determina que las armas sean prohibidas, sino que el artículo 173 sólo establece los objetos que se consideran armas, puesto que al tenor del diverso 174 de la Ley Sustantiva de la Materia, lo que está prohibido por la Ley es la portación de las armas que señala el artículo 173 ya mencionado, en lugares donde se consuman bebidas embriagantes y centros de diversión ó en cualquier otro lugar público, cuando en este último caso, el activo se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefaciente o sustancias tóxica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 696/02, relativa al proceso número 349/02, instruido en contra de M.A.A.S. por el delito de Portación Prohibidas de Armas. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

68. EL BIEN JURÍDICO QUE TUTELA EL DELITO DE ATENTADOS AL PUDOR, EN TRATÁNDOSE DE MENOR DE EDAD (IMPÚBER) ES LA SEGURIDAD SEXUAL. El bien jurídico tutelado de Atentados al Pudor lo es la seguridad sexual, ya que dicha sujeto pasivo R. M. es una persona menor de edad, ya que es el interés social de impedir la corrupción de los impúberes, favorecida por la acción de los actos libidinosos consentidos o no por ellos, ya que por su edad aun no despierta en esta el sentimiento de ocultación y vergüenza de los órganos, atributos y actos sexuales que conforman el pudor, por lo que carecen aun de facultad de elección en cuanto a los actos sexuales. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 281/03, relativo al Expediente número 378/02, instruido en contra de F. R. L. por el delito de Atentados al Pudor. Sentencia emitida el 3 de Octubre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

69. EL DELITO DE VIOLACIÓN A LAS LEYES DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN, DEBE SER EFECTUADO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A QUIEN COMETIÓ EL HOMICIDIO. En suplencia de queja omisa, este Tribunal de Alzada estima, que no se acreditó legalmente la existencia del cuerpo del delito de Violación a las Leyes sobre Inhumaciones y Exhumaciones, tipificado por el artículo 288 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, que se atribuyen al procesado J.R.P.M.; en virtud de que conforme al criterio de nuestros más altos Tribunales de Justicia del país, la conducta que se señala en tal dispositivo legal, debe ser efectuada por una persona extraña al delito, dado que el sujeto activo del ilícito de homicidio, de llevar a cabo dichos actos, lo hace con la finalidad de ocultar o destruir los vestigios del homicidio que cometió, tal y como se demuestra que ocurrió en el caso a estudio, ya que el propio acusado confesó que después de que dio muerte a la víctima a bordo de la camioneta que conducía ésta, lo pasó al asiento el copiloto, tomó el volante de la camioneta y circuló en la misma por la carretera a Ciudad Victoria un tiempo aproximado de 20 minutos, que escondió el vehículo en la entrada hacia una labor y dejándola junto con el cuerpo en dicho lugar, para luego dirigirse a su domicilio a bordo de la bicicleta y que al día siguiente, acudió al mismo lugar, con la finalidad de quemar la camioneta y el cuerpo del hoy occiso, por lo que roció gasolina en el interior de la cabina encendió un cerillo y se lo arrojó, lo que hizo que se comenzara a quemar el vehículo; lo que se corrobora con la diligencia de inspección ministerial y fe cadavérica, la serie de fotografías que obran a fojas 7 a 15 del sumario; así como con la declaración del perito en el área de incendios, quien concluye que dicho incendio fue provocado; aunado a que el inculpado aceptó que privó de la vida al hoy occiso. Así las cosas advirtiéndose de autos que fue el propio acusado quien destruyó el cadáver de E.P.G., después de haberlo privado de la vida, constituyendo este último hecho la parte final de la conducta del acusado, la misma no puede acreditar el cuerpo del delito previsto por el artículo 288 Fracción I del Código Sustantivo de la Materia, y por ende en suplencia de queja deficiente, este Tribunal de Alzada decreta Auto de Libertad con la Reservas de Ley, a favor de J.R.P.M., por el delito de Violación a las Leyes sobre inhumaciones y Exhumaciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 470/04, relativo al proceso número 40/04, instruido contra J.R.P.M., por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, VIOLACIÓN A LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. Sentencia emitida el 14 de Septiembre del año 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

70. EL ELEMENTO DE ENGAÑO EN EL DELITO DE FRAUDE. NO SE CONFIGURA, SI EL CHEQUE ES OTORGADO EN GARANTÍA. Se advierte que la acusada R. C. L. C. compró diversa mercancía a la empresa “A. y P. L., S.A. de C.V.”, desde el día 24-veinticuatro de junio hasta el 12-doce de julio del 2002-dos mil dos, realizando la inculpada el pago con cheques posfechados, lo cual fue consentido por C. E. E., Administrador Único de dicho comercio, por ende dichos cheques posfechados eran una garantía de la operación de compra venta antes aludida, al no ser pagaderos de manera

incondicional al momento de ser entregados al librador (sujeto pasivo), consecuentemente al haber aceptado el sujeto pasivo que la operación de compra venta con la indiciada se efectuara con cheques posfechados, estos documentos de crédito dejan de tener la característica señalada en el artículo 175 fracción III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, referente a "la orden incondicional de pagar una suma determinada en dinero", toda vez que los cheques posfechado pasan a ser una garantía de pago a futuro y no de un pago presente e inmediato, por lo tanto el sujeto pasivo no fue engañado ya que acepto que dichos documentos mercantiles no fueran liquidados en ese momento de la operación de venta. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 488/03, derivado del Expediente número 238/03, instruido en contra de R. C. L. C. por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 18 de Noviembre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

71. EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO NO ES LA VIA CORRECTA PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DEL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, PARA QUE PUEDA EL OFENDIDO EXIGIR SU PAGO. Tampoco le asiste la razón a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su agravio, acerca de que en el incidente planteado debe de fijarse y determinar el monto de la reparación del daño para así exigir al inculpado E. M. M. que lo garantice en el proceso, porque no es la vía idónea para que el acusado se obligue a pagar o garantizar el daño, y aún y cuando no se promueva incidente sobre reparación del daño el Ministerio Público adscrito tiene la obligación de solicitar la condena al pago del mismo en su pliego de conclusiones y el Juez de la causa tiene la obligación de resolver respecto de esa solicitud en la sentencia correspondiente una vez declarada la responsabilidad del inculpado, lo anterior se deviene de los artículos 141 del Código Penal en vigor, 7 y 344 del de Procedimientos penales vigente en el Estado . La reparación del daño como sanción económica de carácter público, corre a cargo del delincuente, y también puede ser deducida en contra de tercero obligado mediante un incidente en ejercicio de la acción de responsabilidad civil correspondiente, lo anterior atendiendo a lo establecido en el artículo 471 del Código de procedimientos penales en vigor, pero aún y cuando se promoviera el incidente de reparación de daño y perjuicio exigible a terceras personas a que se refiere dicho precepto legal, es requisito indispensable que exista declaración judicial de que el acusado es responsable del delito que se le atribuye, porque el diverso artículo 475 del mismo ordenamiento procesal penal, señala que el incidente se fallará al mismo tiempo que el proceso o dentro de los ocho días, si en éste se hubiere pronunciado sentencia, luego entonces el A-quo no se puede pronunciar en el incidente sobre reparación del daño promovido por el ofendido A. G. S. L. sin que en el proceso penal se haya hecho declaración alguna sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, de lo contrario sería violatorio de garantías; y tampoco puede el A-quo establecer el monto de la reparación del daño en este incidente para que garantice el mismo, porque el estudio de ese concepto de la reparación del daño, es materia de sentencia. Al caso es aplicable la siguiente tesis: Sexta Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Segunda Parte, CI Página: 49

REPARACION DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCERA PERSONA, INCIDENTE DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32 y 35, fracción IV, del Código Penal de Michoacán, la reparación del daño como sanción económica de carácter público, corre a cargo del delincuente, pero puede ser deducida en contra de tercero obligado mediante un incidente en ejercicio de la acción de responsabilidad civil correspondiente. Ahora bien, para que dicha acción prospere, es requisito indispensable que exista declaración judicial de que el acusado es responsable del delito que se le atribuye, pues tal pronunciamiento genera jurídicamente el derecho a la reparación del daño causado con la comisión del hecho delictuoso. Consecuentemente, la sentencia que condena a los terceros obligados en el incidente de reparación del daño, sin que en el proceso penal se haya hecho declaración alguna sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, es violatoria de garantías. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 103/2004, instruido contra E. M. M. por el delito de LESIONES CULPOSAS, derivado del proceso 195-2001, ante el C. Juez Primero de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado.

72. EL PELIGRO CORRIDO Y LA EDAD DEL ACUSADO NO DEBEN CONSIDERARSE COMO AGRAVANTES. Este Tribunal Colegiado advierte que al precisarse por la autoridad responsable las circunstancias agravantes, señala la edad del sentenciado, veintiséis años, considerando la existencia de suficiente madurez para comprender los alcances de su conducta. Esta conclusión es incorrecta legalmente ya que, además de que la edad es una circunstancia relacionada con las condiciones del activo (artículo 47, fracción V, del Código Penal del Estado), que no necesariamente incide en la mayor capacidad del sujeto activo para comprender los alcances de su conducta, según se tenga más edad, tampoco es indicativo de que tenga menor capacidad de readaptación, razón por la cual lo expuesto no tiene sustento fáctico ni jurídico alguno. Ahora bien, tomando en cuenta que el delito de robo lo cometió el ahora quejoso aproximadamente a las cinco treinta horas, en ausencia de personas que pudieran impedirlo, deberá considerarse que la facilidad en la comisión del delito y, por ende, la ausencia de riesgo alguno, no puede considerarse como agravante, precisamente por ser tales datos atinentes a la circunstancia de ejecución del delito en cuanto al modo, tiempo y lugar, constituyendo por ende, una recalificación de conductas la que hace sobre el particular la responsable. Sobre este último tema en estudio, este Tribunal colegiado comparte el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia II.2º.P.A. J/2 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Publicada en la página 429 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena época, del epígrafe siguiente: “INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, RECALIFICACION DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE GARANTIAS. De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el Juzgador al efectuar la individualización al efectuar la individualización de la pena, aquellas circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica

en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador, al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos del soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas por parte del justiciable, que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado en el apotegma "non bis in idem", reconocido por el artículo 23 constitucional." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva número 142/2003, instruido contra J. E. R. E. por el delito de ROBO AGRAVADO, derivado del proceso 363-2002, ante el C. Juez Segundo de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, Amparo directo 338/2004.

73. EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD EN SU COMETIDO. El panorama reseñado no deja a lugar a dudas que es correcta la apreciación de que no se encuentra justificada la responsabilidad de J.A.V.P., en términos del artículo 39 del Código penal vigente en el Estado, pues al sostener relaciones sexuales con M. J. G. G., ignoraba que ésta estuviera enferma de su sistema nervioso, y que estuviere bajo tratamiento médico, por lo que se da la existencia de lo previsto por el numeral 30, en su fracción VI, del Código Penal vigente en el Estado, pues contrario a lo que se argumenta, si bien es cierto, que el A-quo, refirió en su resolución de mérito como apoyo, los atestados rendidos por J.L.G.A., J.F.R.C., M.R.C. Y P. J.G., los mismos no son fundamentales para que adoptara la resolución de la cual muestra su inconformidad el Órgano Técnico, en virtud de que para ello, tuviera principal importancia las pruebas periciales desarrolladas por los Peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 117/2002, instruido en contra de J. A. V. P. por el delito Equiparable a la Violación. Sentencia emitida el 07 de Mayo de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

74. EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, PROCEDENCIA DE LA CAUSA DE INCULPABILIDAD PREVISTA POR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE. Resulta aplicable en la especie la causa de inculpabilidad prevista por la fracción VI del artículo 30 del Código Penal vigente, toda vez que si bien es cierto que el activo sostuvo cópula con la menor pasivo; no menos cierto es que el referido encausado no tenía conocimiento que ésta afuera menor de 13 años de edad, además de que tampoco se acredita que el activo haya actuado en forma dolosa, es decir, que ejecutara intencionalmente el delito por el cual se le procesó, aprovechándose que la pasivo tenía menos de 13 años, para poder efectuar el acto sexual con ésta, pues tal como se desprende del sumario, los testigos no señalan que el acusado tenía conocimiento

de la edad de la ofendida, sino por el contrario, el acusado y la madre de éste refieren que la menor les indicó que tenía 15 años de edad, circunstancia con la cual, la citada menor estuvo de acuerdo al celebrarse la diligencia de careo entre ella y el acusado, aún más, de las constancias se desprende que de acuerdo a las características tanto de la menor pasivo como del activo, la primera mide 1.45 metros, y el segundo mide 1.60 metros, por lo que se deduce que era factible que el acusado creyera que la menor tenía 15 y no 12 años de edad; por lo tanto, el acusado no es responsable, en virtud de que ejecutó un hecho que no es delictuoso sino por circunstancias de la ofendida, y el acusado la ignoraba inculpablemente al tiempo de obrar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEXTA SALA Toca de Apelación en Definitiva número 93/02, relativo al Proceso Penal número 72/02, instruido en contra de M. F. S. M. por el delito de Equiparable a la Violación. Sentencia emitida el 29 de Noviembre de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

75. EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN Y EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, SU DEMOSTRACIÓN EN EL PROCESO, NO IMPLICA RECLASIFICACIÓN DE UNA MISMA CONDUCTA. Del proceso se advierte que el Ministerio Público ejercitó acción penal contra el procesado por los delitos de corrupción de menores, equiparable a la violación, y equiparable a la violación en grado de tentativa, previstos por los artículos 196, 268, segunda parte y 267 en relación al 31, todos estos dispositivos del Código Penal de Nuevo León; sin embargo, en el auto impugnado, el A quo únicamente tuvo por acreditados los dos primeros delitos en mención, argumentando que el bien jurídico tutelado por los delitos de equiparable a la violación y equiparable a la violación en grado de tentativa ya mencionados, tutelan el mismo bien jurídico, que es la libertad sexual de las personas y tomando en consideración además que se trata del mismo sujeto pasivo; criterio que no comparte el suscrito Magistrado, toda vez que los elementos de cada una de dichas figuras delictivas son distintos y asimismo, el delito de equiparable a la violación, previsto por el artículo 268, segunda parte, del Código Penal de Nuevo León, es instantáneo, pues sus elementos constitutivos se agotan en el momento en que el activo introduce el miembro viril, por la vía oral del pasivo; por ello, si de autos aparece acreditado que el día de los hechos el acusado primero introdujo su miembro viril en la boca de la menor afectada y luego realiza actos de ejecución tendientes a penetrarla por vía vaginal, sin lograr su propósito por causas ajenas a su voluntad, es evidente que existe pluralidad de acciones delictivas, esto es, una figura equiparada a la violación consumada y otra en grado de tentativa; lo cual no implica que se esté reclasificando la misma conducta, pues dada la naturaleza del delito, el propósito del acusado se agota en cada momento de comisión, por lo que es indudable que al estar acreditado en el sumario el cuerpo del delito de equiparable a la violación en grado de tentativa, antes citado, así como la probable responsabilidad del acusado en su comisión, debe decretarse auto de formal procesamiento en su contra por el citado delito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOVENA SALA Toca en artículo número 7/2003, relativo al Proceso Penal número 403/2002, instruido en contra de F. J. R. L. por los delitos de Corrupción de Menores, Equiparable a la Violación y Equiparable a la

Violación en Grado de Tentativa. Sentencia emitida el 30 de Mayo de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

76. EQUIPARABLE AL ROBO SE CONFIGURA CON LA POSESIÓN DE UN SOLO VEHÍCULO. En autos se demostró que el acusado tenía en su poder (conducía, disfrutaba) un vehículo que había sido reportado como robado, por lo que dicha posesión resulta ilegítima en virtud de que la misma lesiona el bien jurídico tutelado en la norma, que es precisamente el resguardo del patrimonio, siendo dicha acción la de poseer, el núcleo del tipo configurado por la conducta humana, al ejercer el agente una acción de goce o disfrute sobre una cosa, y por lo tanto, la consideración del Juez A quo, en el sentido de que por el hecho de que el encausado poseyera un solo vehículo y no dos o más, lo conlleva a concluir que la conducta del acusado no coincide con la hipótesis legal que expresamente señala la detentación, posesión o custodia ilegítima de vehículos robados, prevista en el Artículo 365 Bis, fracción III, del Código Penal del Estado, resulta ser inadmisible por la razón expuesta en líneas precedentes, en razón de que dicha interpretación no conduce a desentrañar el espíritu de tal disposición que lo es de inicio, la protección patrimonial y específicamente el de evitar el ilegítimo uso o disfrute de vehículos sobre los que no se tiene derecho. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEGUNDA SALA Toca de apelación en definitiva número 89/2001, relativo al proceso número 356/2000, instruido en contra de V.H.G.G., por el delito de Equiparable al Robo. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

77. ESTABLECER LA SANCIÓN. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE NI DE FONDO NI DE FORMA EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, COMO LO ES PRECISAR LA FIGURA DELICTIVA BÁSICA O EN SU CASO LA ESPECIFICA REFERENCIA A UN TIPO COMPLEMENTADO, SUBORDINADO O CUALIFICADO. La Representación Social señala que el Juez fue omiso en considerar dentro del auto de Formal Prisión la sanción que le correspondía por el delito de ROBO, ya que el monto argumenta excede de las 100 cuotas pero no de 250 cuotas. A lo anterior debe decirse que no le asiste la razón a la Fiscalía Mayor, pues si bien es cierto el Juez de Primer Grado no mencionó el precepto o los preceptos que sancionan la conducta del acusado, también lo es que no es requisito indispensable ni de fondo ni de forma; dicha circunstancia para el dictado de un AUTO DE FORMAL PRISIÓN; observándose que no se trasgredió el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado; puesto que acertadamente el A-quo en la resolución que se estudia determinó la configuración del cuerpo del delito que se imputa al acusado señalando que lo era el delito de ROBO tipificado por el Artículo 364 del Código Penal Vigente en el Estado, que señala " Comete el delito de ROBO el que se apodera de una cosa mueble, ajena sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella"; siendo esta obligación Constitucional y Legal de todo juzgador al emitir un AUTO DE FORMAL PRISIÓN, precisar la figura delictiva

básica o en su caso la específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado; como en el caso se realizó, pero no mencionar en este fallo el articulado que contiene la sanción, por lo que al no ser requisito indispensable ni de fondo ni de forma del auto que se estudia, la circunstancia que pretende hacer valer la Representación Social, se estima que no causa agravio a la Representación Social y resulta improcedente su queja al respecto. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 29/2003, Expediente número 46/2001, instruido en contra de E. D. P. P. por el delito de Robo. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

78. ESTADO CIVIL, DELITO CONTRA EL. Sólo basta que el reo se proponga alterar el estado civil del menor para que se configure el delito, ya que el bien jurídico protegido por la ley, lo es la propia institución del Registro del Estado Civil, por lo que todo atentado contra el estado civil de las personas implica un perjuicio social. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 128/01, relativo al proceso número 241/00, instruido en contra de los acusados J.D.C., C.E.F.G., R.N.G.N. y M.I.M.G., por el delito de Contra el Estado Civil. Sentencia emitida el 26 de Noviembre de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

79. ESTADO DE EBRIEDAD. NO SIGNIFICA QUE NO TUVIERA PLENA CONCIENCIA DE LA SUPERIORIDAD. No es óbice para considerar calificado el homicidio, el hecho de que el acusado se encontrara en estado de ebriedad, pues esa circunstancia no es significativa de que no tuviera plena conciencia de la superioridad que tenía sobre la pasivo del delito, mas si se procuró voluntariamente la ingestión de ésa sustancia como el mismo lo refiere pues como dijo es afecto a las bebidas embriagantes y que el día de los hechos andaba ebrio, ya que había estado tomando vodka y cerveza en la vulcanizadora desde las 9:00 horas aproximadamente. Criterio que se apoya en la tesis jurisprudencial visible en el Amparo Directo 3587/1961. Lázaro Teodoro Ríos. Resuelto el 14 de agosto de 1961, por unanimidad de 4 votos. Ponente el Sr. Mtro. Mercado Alarcón. 1ª. Sala. Boletín 1961, pág. 504 (No publicada oficialmente); reiterada en asunto distinto en el Vol. VII, Sexta Época, Segunda Parte, Pág. 50, y en nuestra Actualización IV Penal, Tesis 886, Pág. 478, cuyo rubro es: “EBRIEDAD. El estado de inconsciencia por ingestión de bebidas embriagantes que no trae aparejada inimputabilidad. Surtiéndose por ende la hipótesis a que alude la fracción II del artículo 316 del Código Punitivo en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 200/2001, relativo al expediente número 79/2000, instruido en contra de P.C.R., por el delito de Homicidio Calificado. Sentencia emitida el 21 de Junio de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

80. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO EN EL DELITO DE. Si bien es cierto que en autos no existe dictamen pericial alguno

que indique que uno de los procesados fue la persona que materialmente estampó la firma falsa en el documento impugnado, no obstante tal condición, queda evidente la participación de los inculpados en tal hecho, puesto que con dicha falsificación, los inculpados pretendieron obtener beneficios indebidos según se demostró en la causa con el testimonio del Juicio Ordinario Civil promovido en contra de los acusados, en el que aparece allegado por éstos el documento falso; por lo que es determinante para la responsabilidad penal las distintas periciales que concluyen la falsedad del mismo y el testimonio de quien apoya el dicho de la querellante, en el sentido de que esta última nunca firmó el documento impugnado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 160/2000, relativo al proceso número 116/99, instruido en contra de A.P.B. Y M.I.P.B., por el delito de Falsificación y Uso de Documentos en General.- Sentencia emitida el 30 de Mayo de 2000.-Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

81. FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA APELAR EN CUANTO A LA REPARACIÓN DE DAÑO. La Reparación del Daño es un derecho exclusivo de la víctima u ofendido de algún delito, por lo que si aquél o su legítimo representante no ejercen el derecho que tienen de apelar, respecto a la acción reparadora la misma causa ejecutoria y trae la improcedencia de lo alegado por el Fiscal Mayor, por no estar legitimado para impugnar conforme a la Fracción III del Artículo 384 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, sobre todo si no se está en el caso de renuncia de la parte ofendida a la Reparación de Daño. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 34/99, relativo al proceso número 78/97, instruido en contra de P.S.I.V., por el delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo, Sentencia emitida el 7 de Marzo de 2000.-Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

82. FALTA DEL ELEMENTO DOLO EN LA CONDUCTA DE LOS ACUSADOS. Se acredita la ausencia de dolo en la conducta de B.R.C. y como consecuencia la de C.C. R. y J. A. C.R., quienes ocuparon el inmueble ubicado en el lote de terreno número 2, de la manzana 46 del Fraccionamiento Unidad San Bernabé Fomerrey 51, en esta Ciudad, con el permiso de la primera quien estaba con la certeza de que el inmueble aun le pertenecía, confirmándose aun más, la ausencia de dolo en la conducta de los acusados, con la restitución del inmueble que en forma voluntaria hicieron los acusados a favor de la denunciante. Así las cosas, al faltar uno de los elementos del delito, como es el dolo, no puede acreditarse la existencia del mismo, conforme al criterio sustentado por nuestro Más Alto Tribunal de la Nación visible en los Anales de Jurisprudencia, Tomo V, Página 34, que al efecto dice: “No puede haber delito sin que concurran el elemento objetivo con el subjetivo, o sea, la intención de ejecutar el acto sancionado por la Ley, la voluntad

conciente, libre de toda coacción, de infringir la Ley Penal." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 485/01, relativo al proceso número 27/98, instruido en contra de B.R.C., C.G. R. y J.A. C.R., por el delito de Despojo de Inmueble. Sentencia emitida el 17 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

83. FRAUDE COMETIDO EN AGRAVIO DE VARIAS PERSONAS, NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL CONCURSO, POR TRATARSE DE UN SOLO DELITO. Si el acusado al encontrarse afuera de un edificio donde se tramitan solicitudes para la obtención de créditos de vivienda, engañó a cuatro personas, las cuales lo conocían por motivos religiosos haciéndoles creer que trabajaba en dicha dependencia y que les agilizaría el trámite para que obtuvieran un crédito de vivienda, solicitándoles a cada uno de ellos la cantidad de quince mil pesos, obteniendo así un lucro indebido por la cantidad de sesenta mil pesos; estamos en presencia de un solo delito de Fraude cometido en agravio de varias personas, al haber sido engañadas en forma colectiva por el ahora acusado; existiendo por ende unidad de acción e intención por parte del activo y pluralidad de sujetos pasivos, por lo que no ha lugar a la aplicación de reglas de concurso, debiéndose sancionar al acusado con la pena prevista por el artículo 385 fracción II del Código Penal en vigor, solicitado por el Ministerio Público en su pliego de conclusiones, pero aplicado una sola vez, por las razones expuestas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 912/01, relativo al Proceso Penal número 410/00, instruido en contra de G. H. M por el delito de Fraude Genérico. Sentencia emitida el 14 de Octubre de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

84. FRAUDE DE FRACCIONADORES, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PENAL VIGENTE EN EL ESTADO, SUJETO PASIVO DEL DELITO DE. Es de observarse que el C. Juez de Primer Grado no toma en cuenta para los efectos del capítulo que ahora nos ocupa, que el delito de Fraude específico cometido por el acusado de referencia protege el adecuado desarrollo urbano del Estado, pues éste debe ejercer control sobre los asentamientos humanos que se generan en su territorio, ya que de otra forma no sería posible para las dependencias gubernamentales correspondientes, garantizar la efectiva y adecuada urbanización de dichos asentamientos. Esta condición origina que, para la creación de nuevos fraccionamientos urbanos, el fraccionador necesite primero solicitar los permisos correspondientes a las autoridades competentes, la cual, según la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que se encontraba vigente hasta el mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dicha autoridad lo era la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, misma que había expedido a los fraccionadores del Fraccionamiento denominado S. C. de V. del Noroeste, en el municipio de Santa Catarina Nuevo León, resolución de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual se autorizaba el

anteproyecto de dicho fraccionamiento, pero en la misma prohibía a los solicitantes la transmisión de porciones o lotes correspondientes al mismo. De lo anterior se obtiene que, al no acatar el inculpado H. S. G., como presidente de la Sociedad Cooperativa mencionada, la prohibición indicada, la persona moral que sufre directamente la afectación con dicha acción lo es el Estado de Nuevo León, y no precisamente las personas a las que se transmitió el dominio de las fracciones de terreno, tan es así que según se desprende del oficio signado por el C. Secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Santa Catarina Nuevo León, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el proyecto ejecutivo del fraccionamiento C. U. del N. fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León, entonces, no produce la acción omisiva del acusado, ninguna consecuencia jurídica sobre los compradores mencionados, quienes ante la autorización que con posterioridad fue otorgada por la dependencia correspondiente, están en posibilidad legal de escriturar sus inmuebles para la protección de su patrimonio, si así fuere el caso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 619/2002, derivado del Proceso Penal número 268/96, instruido en contra de H. S.G. por el delito de Fraude. Juzgado de Origen: Primero Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 06 de Marzo de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

85. FRAUDE ESPECÍFICO, ARTÍCULO 386-V. ENGAÑO, NO SE ESTABLECE COMO ELEMENTO DEL. En el mismo tenor, aparece improcedente el segundo apartado del agravio que se analiza, cuando el impugnante señala que en los autos no existe el elemento de engaño, requisito constitutivo del antijurídico, y lo anterior es así, en atención a que en el Fraude Específico a comento, no se establece el engaño como elemento del mismo y por ende, para la demostración del ilícito en estudio únicamente se requiere de la comprobación de sus elementos. Cabe señalar que en el delito que nos ocupa, el dolo queda patente al realizarse la conducta que el mismo ilícito prevé; esto es, el elemento subjetivo del dolo en la comisión del Fraude Específico en estudio, se exterioriza objetivamente a través de la conducta descrita en el tipo penal, puesto que si el sujeto activo compra una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y después de recibirla se rehúse a hacer el pago o devolver la misma y el vendedor le exige lo primero dentro de un término de noventa días después de que recibió la cosa del pasivo, obteniendo así un lucro indebido, es incuestionable que al conducirse de esa forma se revela que tiene el ánimo de defraudar, o sea que deseaba el resultado, pues a pesar de que adquiere la cosa ofreciendo pagar su precio de contado y rehúsa después de entrar en dominio de ella pagar su precio o devolverla, no obstante habérsele exigido dentro del término legal y del que la recibió el importe de las mismas, existe así una relación causal entre la conducta desplegada y el lucro obtenido en detrimento del patrimonio de la querellante. Luego, si la conducta desplegada por el activo está tipificada como delito en la figura de Fraude Específico que se estudia, es claro que la misma se cometió en forma dolosa y debe analizarse tal conducta a la luz del Derecho Penal y no solamente a la del Derecho Civil, como incorrectamente lo pretende el expositor de agravios, con independencia de que tales

hechos puedan dar lugar en igualdad de condiciones a acciones de esta última naturaleza. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DECIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 22/2002, relativo a la causa penal número 202/2001-C, instruida en contra de R. F. P. G., por el delito de Fraude Específico. Sentencia emitida el 30 de Mayo de 2002. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

86. FRAUDE ESPECÍFICO ARTÍCULO 386-VI DEL CÓDIGO REPRESIVO DE LA MATERIA, EL OFENDIDO NO ES SIEMPRE EL SEGUNDO COMPRADOR. Siguiendo con el estudio y decisión del primero de los agravios elevados por el disconforme en donde alega que los querellantes son compradores en primer término y la compraventa con ellos es perfecta e insiste en la ausencia del engaño; en replica de lo anterior debe explicarse lo siguiente: Que si bien es cierto conforme al Código Civil vigente en la Entidad (artículos 2143, 2163 y 2164), por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho; que ninguno puede vender si no lo que es de su propiedad, y que la venta de cosa ajena es nula; nos vemos llevados a concluir que la víctima de este Fraude Especial es siempre el segundo comprador pues nunca podrá adquirir la propiedad que fue transmitida ya en la primera enajenación. Si esta conclusión fuera correcta la hipótesis legal que nos ocupa resultaría inútil por redundante e innecesaria, pues es obvio que el que vende a dos personas una misma cosa, conceptualmente ya se encuentra inmerso en la fracción II del propio artículo 386, habida cuenta de que cuando realiza la segunda enajenación de la cosa lo hace con pleno e inequívoco conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella. Bien puede afirmarse que si suprimimos con nuestro pensamiento esta especie típica ningún cambio experimenta la casuística del Código. Pero si en cambio tomamos en cuenta que el Código Civil (artículos 2158, 2159 y 2160) para el caso de que una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, establece las siguientes reglas: a).- Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de esta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa; y b).- Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado, y si ninguno lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior. Luego, entonces, se arriba al firme convencimiento de establecer que la víctima del fraude no será siempre el segundo comprador, pues también puede serlo el primero en todos aquellos casos en que conforme a las reglas trascritas la primera venta no prevalece. En complemento de lo anterior, debe señalarse que por excepción resulta defraudado el primer comprador, en aquellos casos en que la compraventa, para producir efectos contra terceros, necesite llenar ciertas formalidades externas y estas no se cumplen, tal y como sucede tratándose de inmuebles en que se requiera la escritura y el Registro (artículos 2214 y 2216 del Código Civil); en estos casos, puede resultar válida la segunda venta para un adquirente de buena fe; el fraude existe por la violación de los derechos patrimoniales del primer comprador. Hipótesis la anterior, que se considera operante en el caso concreto pues recuérdese que según las documentales públicas que corren debidamente agregadas a los autos

consistentes en los oficios enviados por el Director del Departamento Jurídico de Fomento Metropolitano de Monterrey al Ministerio Público que previno, los cuales fueron debidamente desglosados y valorados conforme a derecho y se reproducen para evitar repeticiones fútiles, de ellos se advierte en forma concreta y primeramente que sobre el inmueble adquirido por el querellante ..., existe un trámite de escrituración a nombre de ...; igualmente, del diverso encontramos que existen dos expedientes en trámite sobre el lote de terreno número 22 de la manzana número 11 de la Colonia Provivienda, Nuevo Escobedo del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, el primero a nombre de ... y ..., y el segundo a nombre de ... y la señora ... Para concluir con lo anterior es pertinente señalar que como en forma correcta lo señala la Autoridad del conocimiento en la determinación recurrida, la legislación punitiva local, omite señalar quién es el damnificado en la doble venta de una misma cosa, por lo que existe la posibilidad, como acontece en el caso de la especie y por las razones puntualizadas, de que lo sea el primer adquirente, o bien, el segundo comprador y en el último de los casos cualquier tercero. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 244/2002, derivado del Proceso Penal número 352/2001-I, instruido en contra de... por el delito de Fraude Específico. Sentencia emitida el 19 de Diciembre de 2002. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

87. FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 391 Y FRAUDE GENÉRICO CONTEMPLADO POR EL DIVERSO NUMERAL 385 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA ESTA ENTIDAD FEDERATIVA. DIFERENCIAS. Es procedente hacer mención de la diferencia que existe entre los fraudes de que tratan el artículo 391 del Código Punitivo en vigor y el diferente sabido por el numeral 385. En éste el engaño era el vulgar, el usual, el de palabra, el suficiente para inducir a una persona de criterio medio a incurrir en un error, con perjuicio de su patrimonio; y en cambio el engaño a que se refiere el dispositivo 391 configura una maquinación especial, de mayor fuerza y de mayores elementos de convicción para el engañado pues el mencionado artículo 391 prevé, el fraude que se causa mediante maquinaciones, engaños o artificios, los cuales al realizarse integran un factor tan convincente que, anulando la serenidad del juicio, menoscaban las defensas que la lógica pone al alcance no ya del hombre medio, sino hasta el mejor dotado para salvaguardar sus intereses legítimos, todo lo cual ocurre si puede concederse que la conducta del reo constituye en la hipótesis de su existencia una maquinación de la señalada índole, que motive con una relación estrecha de causa a efecto la obtención del lucro indebido. Siguiendo con la misma tesitura deviene ahora oportuno precisar que el antijurídico de fraude específico o maquinado o, más bien, estafa, que consigna el repetido artículo 391 del Código Punitivo vigente en el Estado, tiene como característica que lo distingue de los demás casos de fraude, la de que el engaño se realice a través de una serie de actos que impresionan objetivamente a la víctima y hacen nacer en ella la confianza necesaria para que, de manera más o menos espontánea, haga entrega de los valores a los delincuentes. Todo lo contrario de lo que pasa en el fraude genérico, establecido en el artículo 385 del indicado Código Represivo, con respecto a la calidad de

las maniobras empleadas para obtener el lucro, acontece en la estafa, a pesar de que ambos delitos coinciden en sus características fundamentales. En la estafa, por su complicado mecanismo, el delincuente nunca se aprovecha del error en que previamente pueda encontrarse el ofendido; tampoco obtiene el lucro o beneficio con una simple palabra engañosa, una afirmación falsa o cualquiera otra actitud capaz de hacer incurrir en error a un tercero; el estafador se sirve, por el contrario, de procedimientos más complejos, más lentos y por lo mismo más difíciles de advertir. Esto da lugar a que también a diferencia de lo que acontece en el fraude los actos finales del delito no tienen por sí mismos una significación engañosa sino por el contrario la apariencia de un contrato o negocio cabalmente legal. Sucede en estos casos que el carácter delictuoso del hecho se deriva más bien del conjunto de maniobras precedentes, que del acto final en que se logra la entrega de las cosas o de los valores, de la cual aparece, hasta cierto punto, desconectado todo aquel conjunto de maniobras. En el delito de estafa o fraude calificado de que se habla en el citado artículo 391, son clásicos los procedimientos que tienden a impresionar a la víctima escogida previamente, haciéndola creer que los delincuentes son personas que gozan de gran fortuna y poder en la vida de los negocios. A esto llegan, con el fin de captarse totalmente la voluntad de la presunta víctima que, a su turno, espera realizar negocios que le dejen pingües ganancias, después de construir el escenario apropiado para atraerse la confianza del ofendido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DECIMA SALA PENAL. Toca de apelación en Artículo 132/2004, relativo a la causa penal número 41/04, instruida a ... por el delito de FRAUDE. Interlocutoria de fecha 29 veintinueve de Noviembre de 2004. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

88. FRAUDE GENÉRICO Y NO ESPECÍFICO. Si quedó acreditado que la intención de la encausada fue la de generar en el pasivo una creencia falsa, al hacerle pensar que liquidaría el total de la operación comercial que realizaban y que servía como garantía una factura apócrifa, generando con ello un detrimento patrimonial al pasivo, con el consecuente lucro indebido obtenido por la inculpada, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 385 del Código Penal Vigente en el Estado de Nuevo León, que tipifica el delito de Fraude Genérico y no el Específico a que se refiere el de primer grado (386 fracción VII del Código Penal en cita), puesto que la expedición de la factura mencionada en la que se inscribió la garantía prendaria, no puede ser considerada como un acto o contrato simulado, puesto que para que el mismo se actualice como elemento del delito de fraude específico por el que se dictó el auto que se revisa, es menester que aquel acto o escrito simulado contenga una declaración de contenido no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto a aquel que realmente se ha llevado a cabo, es decir, que es menester que el acto o escrito se simule entre ambas partes, con la finalidad de perjudicar a un tercero, lo cual no es el caso en la especie, en donde únicamente aparecen el activo y pasivo del delito, sin la intervención de otra persona. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 157/2000, relativo al proceso número 69/2000, instruido en contra de J.M.T.G.B., por el

delito de Fraude. Sentencia emitida el 6 de Julio de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

89. FRAUDE INEXISTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO LAS PARTES NO IMPUGNAN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. Aunado a la circunstancia de que si las partes que intervienen en dicha compraventa no declaran ante el Ministerio Público impugnando los términos de ese contrato, entonces es dable estimar que impera la voluntad expresa de los contratantes en el documento pasado ante la fe del Notario Público y no evidencia simulación, ya que la voluntad que le dio origen conformó una realidad concreta que ninguna de las partes negó, por lo que no se configuran los elementos del Delito de Fraude. Estimándose aplicable la tesis: "FRAUDE. INEXISTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO SE ACREDITA QUE EL ACTO EN EL QUE SE BASA LA ACCIÓN NO FUE SIMULADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial en la Federación, volumen VIII. Octubre 1998. Página 1151. Segunda Parte de la Novena Época, aplicada en el amparo en revisión 175/97". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de Apelación en Artículo Número 158/99, relativo al proceso penal número 57/99, instruido en contra del acusado R.G.A., por el delito de FRAUDE.- Sentencia emitida el 23 de septiembre de 1999.- Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

90. FRAUDE INEXISTENTE. CUANDO SE TRATA DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO. El término fraude significa engaño, prácticamente, la palabra quiere decir conducta dolosa; entendiéndose solo en *lato sensu* como engaño *per se*, implicando actitud encaminada y propiciada a desfasar al pasivo de la realidad, a grado tal, que lo hace otorgar su conformidad para ser despojado de su patrimonio. Por esta razón, resulta demasiado arduo, incierto y convierte en aventura considerar el asunto dentro de lo sancionable, cuando no se tiene una directriz para diferenciar, o al menos detectar la frontera entre el ámbito civil y el ámbito penal en lo ateniente al dolo, factor común con perfiles semejantes en ambos campos, y aun cuando pudiera pensarse que toda violación de contratos es factible penalizarla, debemos guiarnos no por los acontecimientos futuros relativos al incumplimiento, sino en retrospectiva, y características llevadas a cabo, para de esta forma explicitar una conducta engañosa con la preconcebida idea por parte del activo, bajo la pretensión casual inequívoca de lograr la entrega de las cosas, generando el enriquecimiento ilegítimo, o la obtención de un lucro indebido en perjuicio del pasivo, es decir, debemos repasar los acontecimientos iniciales y no la conducta desarrollada con posterioridad, pues ésta sólo dará margen a un incumplimiento civil. Apreciándose de tales instrumentales, en cuanto al contrato privado de promesa de compra venta, que en el mismo no se establecía si el inmueble materia de la enajenación contaba con servicios básicos o no, incluso al formalizarse esa operación y al acudir ante el Notario Público correspondiente, el indiciado manifestó categórico que nunca se ha contratado los servicios

de Agua y Drenaje porque no los ha utilizado, a lo que la empresa querellante, señaló mediante su representante en ese acto, que conocía el inmueble materia de la operación y que su deseo era adquirir su propiedad, posesión y dominio, de lo cual válidamente se puede concluir que la circunstancia relativa a que si el inmueble estaba conectado o no a la red de drenaje, de ninguna manera constituye el elemento o factor "engaño o aprovechamiento del error", necesario para la integración del delito de fraude, toda vez que en el contrato de promesa de compraventa, nunca se estableció que el indiciado vendía el inmueble multicitado con ese tipo de servicios públicos, sino sólo se describieron la ubicación y extensión del mismo, en tato que al formalizar esa operación de compraventa ante fedatario público, el indicado categórico señaló que no había contratado ese servicio, con todo y esto, la empresa querellante insistió en su intención de adquirir el inmueble, lo que finalmente llevó a cabo; de lo que se advierte, que de lo que hoy se queja el ofendido, es que el indiciado no cumplió con lo que se había obligado en ese contrato de Obra a Precio Alzado, sin que exista elemento de prueba que dé convicción al suscrito Magistrado, acerca de que el indiciado hubiera efectuado ese contrato, a sabiendas que no lo iba a cumplir, toda vez que aquellas probanzas no poseen esa fuerza retroactiva, en cuanto a que mediante ellas pueda establecerse la existencia de un engaño en el pretérito, es decir, en la época en que se celebró el contrato, por lo que no puede atribuírsele a ese simple incumplimiento el carácter penal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 235/99, relativo al proceso número 414/99, instruido en contra de J.M.M.S., por el delito de FRAUDE.- Sentencia emitida el día 5 de noviembre de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

91. FRAUDE POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AJENO NO ACREDITADO POR SER EL ACTIVO HIJO DE LA OFENDIDA Y HABERSE ACREDITADO LA PRESTACIÓN DEL INMUEBLE AL ACTIVO. De la redacción del artículo 386 fracción II del Código Penal vigente en el Estado permite considerar a este delito como de acción, ya que La propia estructura típica del precepto revela que el proceder del autor requiere una actividad, un hacer positivo, una acción engañosa integrada por varios actos que la ley describe en las operaciones de enajenar, arrendar, hipotecar, empeñar o gravar una cosa, careciendo del derecho para hacerlo y teniendo pleno conocimiento de ello; es también un delito material o de resultado, porque la acción produce causalmente un evento que consiste en la recepción del valor de la operación concertada o de un lucro equivalente; es plurisubsistente ya que cuando menos se requiere el ofrecimiento u oferta a concertar cualquiera de los actos jurídicos a que la ley se refiere y el recibir el precio de la enajenación, arrendamiento, hipoteca, empeño, etc., o un lucro equivalente; es instantáneo porque su consumación tiene realidad en el momento en que se recibe el lucro indebido que lo perfecciona, aún cuando sus efectos puedan prolongarse en el tiempo (instantáneo de efectos permanentes). Como todos los delitos patrimoniales, es un delito de daño, por la lesión patrimonial sufrida por la víctima. El pasivo, puede ser una persona física o una persona moral; el objeto del delito lo puede ser una cosa mueble o inmueble; es un delito doloso, el agente tiene pleno conocimiento, al realizar cualquiera de

los actos descritos en la ley, de que no tiene derecho, para disponer de la cosa en el caso de su venta, ni de gravarla en alguna forma o transmitir su posesión, dándose al realizar tales actos el dolo directo perfeccionado en dicho conocimiento y la voluntad de ejecución; el defraudador en este ilícito, dolosamente engaña a su víctima haciéndole creer falsamente que adquiere determinados derechos reales (de propiedad o de garantía) o personales (de uso), cuando, en realidad, el activo carece de facultades para transmitirle tales derechos. El error del pasivo debe llevarlo a tomar un acto de disposición patrimonial que resulta en beneficio del defraudado y es precisamente ese enriquecimiento al que se refiere la fracción II del dispositivo 386 del Código Sustantivo cuando afirma que el activo debe haberle "recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente". La víctima del perjuicio en este tipo de fraude es aquella persona de cuyo patrimonio salieron los bienes o derechos que constituyen el lucro del activo, pues pierde el precio o la renta pagada al falso dueño, o el préstamo garantizado con la hipoteca o prenda de la cosa ajena o gravada; esto es, que en el caso a estudio la víctima del delito de Fraude lo serían las personas que rentaban la finca multicitada (RTJ y L.A.R. de L.) mismos que no se querellaron en contra de Francisco Tovar Ramírez, y la señora Alicia Ramírez Quiroga (querellante en el caso) no sufre perjuicio que pueda ser relacionado con la conducta de Francisco Tovar Ramírez y sus derechos sobre la propiedad puede hacerlos valer por la vía idónea. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 127/02, relativo al proceso número 314/01, instruido contra F.T.R., por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 28 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

92. FRAUDE POR ENAJENACIÓN DE COSA AJENA. INEXISTENCIA DEL DELITO CUANDO EL PROPIETARIO DE LO VENDIDO NO ES EL PASIVO U OFENDIDO DEL DELITO, SINO EL COMPRADOR. El propietario de la cosa enajenada carece de personalidad jurídica para ostentarse como parte ofendida, en virtud de que no es a él a quien se le ha causado un detrimento patrimonial, ya que en el caso que existiese la disposición indebida, como lo es la venta ilegítima de cosa ajena, a título oneroso con conocimiento de que no se tiene derecho a disponer de ella, habiendo recibido total o parcialmente el precio, como es el caso que refiere el querellante, en esta hipótesis delictiva, el sujeto activo es el vendedor quien engaña al pasivo haciéndole creer que adquiere determinados derechos reales, cuando en realidad carece de facultades para transmitirlos, el pasivo del delito lo es el comprador o adquirente a título oneroso, pues éste es el que resiente el engaño o es colocado en el error sufriendo el quebranto patrimonial, por lo tanto el copropietario de la cosa indebidamente vendida no es el ofendido en éste ilícito, pues éste no sufrió un perjuicio que pueda ser directamente vinculado con la actuación del activo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 517/99, relativo al proceso penal número 613/94, instruido en contra de G.G.M., por el delito de fraude.- Sentencia emitida el día 4 de mayo del 2000.- Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

93. FRAUDE POR GRAVAR COSA CON CONOCIMIENTO DE QUE NO PUEDE DISPONER DE ELLA. INEXISTENCIA DEL DELITO CUANDO EL PASIVO SABÍA DE LA EXISTENCIA DEL GRAVAMEN QUE TENÍA LA PROPIEDAD QUE ADQUIRIO. Independientemente de que el pasivo conozca o desconozca la situación del inmueble, el solo hecho de haberlo gravado, una vez que se había comprometido a venderlo, genera la conducta delictiva especial contenida en la fracción II del artículo 386 del Código Penal en vigor, sin embargo, esto sería verdad si el gravamen de que se duele el querellante fuese otro diverso al mencionado en el contrato de promesa de compraventa, lo cual no sucedió en la especie, pues de las pruebas que obran en el sumario se desprende que el pasivo tenía conocimiento de dicho gravamen y aun así celebró el contrato de compraventa, razón por la cual se estima incomprobado el delito a estudio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 754/00, relativo al proceso número 7/99, instruido en contra de J. M. M. S., por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 30 de Marzo de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

94. FRAUDE POR SIMULACIÓN, DELITO DE.- Para que se actualice la hipótesis del artículo 386 fracción VII del Código Penal en vigor, se requiere que el contrato celebrado por las partes sea simulado con el único fin de perjudicar a otro en su patrimonio, pues si aquél reúne todos los requisitos legales para su perfeccionamiento debe acreditarse la intención engañadora mediante una declaración que carezca de contenido volitivo, vacía, efímera y ficticia que no represente una voluntad real de las partes, actuando así para perjudicar a otro en su patrimonio u obtener un beneficio indebido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 402/98, relativo al Proceso Número 78/98, instruido en contra de C.E.G.S., J.C.A. Y G.G.S., por el Delito de FRAUDE.- Sentencia emitida el 30 de octubre de 1998.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

95. FRAUDE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR, EL NÚCLEO DEL DELITO DE. El núcleo del delito que nos ocupa, como lo es el ilícito de FRAUDE previsto en la fracción I del artículo 387 del Código Penal vigente en el Estado, se constituye con la sola transmisión o el ofrecimiento de la propiedad o posesión de cualquier lote de fraccionamiento no autorizado por la autoridad correspondiente, lo que acontece en el caso concreto; resultando por ende intrascendente que los referidos lotes fueran rústico o que contaran o no con los servicios públicos básicos pues el núcleo de la hipótesis delictiva se encuentra satisfecho, y lo cual es suficiente para la integración del cuerpo del delito, entendiéndose así mismo por fraccionamiento para los efectos de la hipótesis delictiva contemplada en la fracción I del artículo 387 del Código Penal Sustantivo toda división de predios en lotes o fracciones, para la transmisión de la propiedad o posesión de los mismos, o que tienda a ese objeto, ello acorde a lo que previene el Artículo 5 de la Ley de Ordenamiento

Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. NOVENA SALA. Toca de apelación en artículo número 37/2002, relativo a la Causa Penal número 251/2002, instruida en contra de J. B. B. V. y L. C. B. F. por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 29 de Enero de 2003. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

96. HOMICIDIO CALIFICADO Y NO SIMPLE, CUANDO EL ACTIVO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EBRIEDAD VOLUNTARIA. En la especie se acredita que el delito de homicidio es calificado, pues de los autos se advierte que el activo tenía conciencia de que era superior físicamente en relación con el ahora occiso, ya que aquél se hallaba en compañía de varios sujetos más; por lo que, contrario a lo alegado por la defensa, si bien es cierto que el activo se encontraba tomando; también es que la ingesta de alcohol fue voluntaria; sin que se justifique con ningún elemento de prueba, el grado de embriaguez en que se encontraba el citado acusado, por lo que se deduce que éste se encontraba en condición de premeditar el homicidio, ya que existía la intención de vengarse por el anterior altercado que había tenido con el ahora occiso, es decir, que los hechos delictuosos fueron consumados bajo las circunstancias de querer causar un daño; además, el activo y sus coacusados tenían la seguridad de que el ahora occiso no tenía la oportunidad de responder al ataque de que fue victima, pues fue sorprendido por el golpe que le propinó uno de los coacusados prófugo, hermano del activo, y una vez que el occiso se encontraba tirado en el suelo, fue golpeado por todos los participantes, además de que el ahora occiso estaba lastimado del cuello y portaba collarín; por lo que los elementos subjetivos y objetivos de la calificativa de ventaja se encuentran acreditados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 02/04, relativo al proceso número 314/01, instruido en contra de A. A. D. por el delito de Homicidio. Sentencia emitida el 12 de Febrero de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

97. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, CUANDO NO EXISTE IMPUTACIÓN DIRECTA CONTRA EL INCULPADO. En contestación a lo alegado por la defensa particular, vuelve asentarse por quien ahora resuelve, la apreciación de los datos que arrojó la averiguación previa, realizada por la Autoridad de origen en el fallo combatido, es acorde a las constancias de autos y no pugna con las reglas de valoración de las pruebas, ni con los principios rectores de la lógica; es decir, el A-quo una vez que apreció y otorgó valor a los elementos probatorios integrantes de la indagatoria, en su conjunto, no alteró los hechos, ni les dio una eficacia diferente a la que marca la Ley y tampoco infringió los principios fundamentales de la lógica y de la sana crítica, además, correctamente empleó el mecanismo de la prueba circunstancial o indiciaria, pues ante la falta de imputación directa en contra del inculpado para tener por acreditada su probable responsabilidad en la comisión de un delito, ésta adquiere suma importancia, ya que es el resultado de la apreciación en conjunto, de los datos arrojados

por la averiguación, los cuales no deben considerarse en forma aislada, pues cada uno constituye un indicio que, concatenados en forma lógica y natural con los demás, llevan al conocimiento de la verdad que se busca, como acontece en el caso de la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA. Toca en artículo 58/2005, proceso número 256/2002, instruido en contra de M.A.V.R. por el delito de Robo. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

98. INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, IMPROCEDENCIA DEL. No existen agregados al expediente elementos de prueba con el carácter de indubitable que para la procedencia de un incidente como el de la naturaleza que se plantea exige la ley, pues los que obran en autos y que fueron desahogados después de la formal prisión, en esencia no dejan sin efecto ni eliminan los tomados en cuenta en el auto de plazo constitucional, sostén del procedimiento, lo que sólo es eficaz en cuanto exista prueba indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos que sirvieron de base para comprobar el delito, o bien, la probable responsabilidad del acusado; requiriéndose entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de prueba de referencia, resultando insuficientes, como se dijo, el simple ataque o el poner en tela de juicio los datos o circunstancias en cuestión, lo que a lo más es lo que acontece en la especie, pues suponiendo sin conceder, que aún y cuando hayan algunos que le favorezcan, cuando tal apoyo no sea del alcance radical como se preindica, es obvio que en el caso tal valorización es materia de la sentencia definitiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 262/98, relativo al Proceso Penal Número 49/98, instruido en contra del acusado O.R.C., por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO.- Sentencia emitida el 8 de diciembre de 1998.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

99. INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SUS EFECTOS. El C. Juez de primer grado, basándose en el contenido de una sentencia pronunciada por una Autoridad Federal a favor de otra persona, vuelve a analizar y justipreciar la querella presentada por ..., los testimonios de los CC. ..., y pone en tela de juicio el contenido de los mismos, restándoles eficacia jurídica, aduciendo que las declaraciones rendidas por los tres últimos no son claras ni precisas, además de que incurren en contradicciones, y en cuanto al querellante, no está probado que haya existido un engaño hacia la persona moral... porque ya sabía que las inversiones iban a ser mutuadas. Proceder del Juez natural que a todas luces es inexacto, porque estaba resolviendo sobre un incidente, y por ende no podía variar el valor jurídico otorgado a las pruebas en las que se basó para pronunciar el auto de formal prisión, sino analizar si existían nuevas pruebas que las destruyeran por completo, y al no haberlo hecho así, es claro que trasgredió lo dispuesto por el artículo 109 del Código Procesal Penal, como bien lo hizo ver el C. Procurador General de Justicia en el Estado, en su escrito de agravios,

dado que el valor probatorio del testimonio debe ser calificado en sentencia, tal y como lo dispone el artículo 275 último párrafo del Código Procesal Penal." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 25-veinticinco de Octubre del 2004-dos mil cuatro. Toca en Artículo número 97/2004. Proceso penal número 169/97, instruido a A.C.E., por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

100. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ESTADO DE EBRIEDAD Y LA HORA EN QUE SE LLEVARON A CABO LOS HECHOS NO DEBE CONSIDERARSE COMO AGRAVANTES. Tampoco debe estimarse que el acusado se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes, por tratarse también de una circunstancia personal y si bien al declarar en preparatoria manifestó que andaba un poco tomado al suceder los hechos, también lo es que la pasivo del delito no hizo mención de esa circunstancia; luego no se advierte de qué forma pueda influir en la determinación del grado de peligrosidad; respecto de que los hechos se suscitaron en la noche, tampoco es una circunstancia agravante, debe considerarse que es una circunstancia de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito a que se refiere la fracción III del artículo 47 del Código Penal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva número 10/2003, instruido contra J . H . S. por el delito de VIOLACION, derivado del proceso 8/2001, ante el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Duodécimo Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

101. INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, NO DEBE CONSIDERARSE COMO AGRAVANTES LOS ANTECEDENTES PENALES DEL ACUSADO CUANDO SE ACREDITA EL CARÁCTER DE REINCIDENTE. En lo que respecta a las circunstancias agravantes, se prescinde de considerar como agravantes los antecedentes del sentenciado, y que se contienen en el informe que obra agregado a foja 31 del sumario, del que se deviene que fue sentenciado en el proceso 69/96 por el delito de robo, sentencia que se modificó a cuatro años nueve meses de prisión por la Sexta Sala en el toca penal en definitiva número 15/97, sentencia de la cual obra copia certificada a foja 142 del proceso, la que se consideró para acreditar el carácter de reincidente, por lo tanto el informe sobre antecedentes penales no es susceptible de ser tomado en cuenta para ubicar la peligrosidad del acusado, ya que equivaldría a hacer un doble reproche de su conducta. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva número 149/2001, instruido contra J. M. R. R. por el delito de LESIONES, derivado del proceso 77-99, ante el C. Juez Tercero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

102. INDUCCIÓN Y AUXILIO AL SUICIDIO CONFIGURADO. SE DA CUANDO FUE DIRECTO Y SUFICIENTE. Doctrinalmente, inducir al suicidio significa excitar,

instigar a él, debiendo ser la inducción directa y suficiente; prestar auxilio para el suicidio equivale a proporcionar medios (armas, veneno, etcétera) o cualquier otro género de cooperación, por ejemplo, auxilio de carácter moral, como indicaciones acerca del modo de ejecutarlo, de servirse del arma, etcétera. (Derecho Penal Mexicano, Francisco González de la Vega, Pág. 88). En la especie, quedó debidamente demostrado con los elementos de prueba dentro del sumario, que el acusado al encontrarse en compañía de unos amigos en un festejo en su domicilio, invitó al pasivo a que jugaran a la ruleta rusa, al intervenir éste último, el sentenciado empezó a buscar pleito con uno de los acompañantes del occiso, por lo que sacó de entre sus ropas un revólver y únicamente dejó una bala diciéndole a la víctima: "Si no te la pones, yo te la voy a poner" refiriéndose a la pistola, que luego dio la vuelta al cilindro, jaló el gatillo, sabiendo de antemano que no le tocaría y posteriormente el occiso tomó el revólver, se lo colocó en la región occipital derecha y accionó el gatillo saliendo el tiro, provocándose lesiones cráneo encefálicas secundarias a herida por proyectil de arma de fuego, que a la postre le causó la muerte, como puede verse de la autopsia que le fuera practicada. Esa expresión que hace el reo pone de manifiesto la instigación que produjo el resultado letal al obtener mediante la frase mencionada que el pasivo se viera constreñido a apretar el gatillo, lo que constituye los actos tendientes a lograr el convencimiento por parte de aquél, para que se privara de la vida. La mayoría de los testigos coinciden que tanto el acusado como la víctima acordaron jugar con el revólver a la "ruleta rusa", sin embargo, destaca el hecho de que los testigos manifestaron que antes de que el pasivo accionara el gatillo, el acusado le dijo "Si tu no te la pones, yo te la voy a poner" y "métete el tiro, si no te lo meto yo", respectivamente, lo cual es indicativo de que el acuerdo no fue libremente tomado por el pasivo, sino presionado por las palabras del sentenciado, las cuales no le dieron oportunidad de reflexionar sobre la mucha o poca posibilidad de que el disparo pudiera generarse y la certeza de que ello ocasionaría. En el caso es indudable, que la inducción fue directa y suficiente, ya que fue a través de la conversación personal que sostuvieron acusado y víctima como se desarrollaron los hechos, en que ambos tomaron la determinación de tomar el arma que solamente tenía una bala, con la diferencia de que al occiso lo animó, no sólo la invitación del activo, sino el hecho de que lo presionó para que lo hiciera, sin que para ello fuera necesario que el convencimiento se realizara por un lapso determinado, si en la especie fue suficiente el instante que duró su conversación para obtener el convencimiento del pasivo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 496/99 relativo al proceso penal número 263/96 instruido en contra de V.J.L. por el delito de inducción y auxilio al suicidio.- Sentencia emitida el 14 de Marzo de 2000.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

103. INEJERCICIO DE LA ACCION PENAL O SOBRESEIMIENTO EN LOS DELITOS CULPOSOS DE HOMICIDIO Y LESIONES. DEBE OBSERVARSE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 72 TERCER PÁRRAFO DEL CODIGO PENAL Y NO EL 111 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso a estudio

la determinación impugnada, como ya se dijo, trata de un sobreseimiento, por perdón del ofendido, declarándose extinguida la acción penal; dicha resolución para emitirse, debe reunir los supuestos a que se refiere el numeral 72 tercer párrafo del Código Penal en vigor, tal y como lo hace ver el apelante, por tratarse de un delito originado por un hecho vial. Dicho artículo no fue observado por el Justiciante de Primer Grado, por el contrario adecua el caso concreto a la hipótesis prevista por el numeral 111 del mismo Ordenamiento Legal en cita, el cual enuncia diversos requisitos para extinguir la acción penal, y si bien es cierto el delito imputado al acusado, es de oficio como lo requiere el mencionado artículo 111, también lo es que se originó por un hecho vial, de ahí que se debe estar a lo dispuesto por el referido dispositivo 72 del Código Penal en vigor para declarar extinguida la acción penal, y como consecuencia el sobreseimiento de una causa penal, esto atendiendo al principio de la regla especifica, la cual excluye a la general, al tratarse de un hecho previsto por dos normas vigentes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA. Toca en artículo 83/2005, proceso número 403/2002, instruido en contra de R.G.L. por el delito de Lesiones por Culpa. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

104. INEXISTENCIA DE LA MODALIDAD DE PANDILLA EN INIMPUTABLES, ADEMÁS ES INEXACTO SU ESTUDIO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. En cuanto a la modalidad de pandillerismo, se considera que la Autoridad de Primer Grado, erróneamente aplicó tal modalidad en su resolución, pues primeramente debe decirse que de conformidad con el último párrafo del artículo 177 del Código Sustantivo de la materia en vigor, dicha modalidad debe ser calificada en la sentencia, por lo que su estudio en el auto de plazo constitucional es inexacto; y por otra parte, tal modalidad no se da en el presente caso, pues si bien hasta este momento quedó determinado que el procesado y sus coacusados se reunieron ocasionalmente y cometieron en común el delito de equiparable a la violación, también se justifica en autos que el inculpado padece de sordomudez, según la fe judicial que obra en el sumario, tan es así que el Juez A quo, decretó la apertura del procedimiento especial para sordomudos, pues advirtió que el acusado es probable inimputable, por lo que la hipótesis de la pandilla no se actualiza, pues la deficiencia somático-funcional constituida por la sordomudez repercute en una limitación de facultades cognoscitivas del sujeto, que le impide el adecuado empleo de su voluntad, por lo mismo, carece de un libre discernimiento sobre lo que le conviene o no, y al acreditarse hasta este momento que los participantes en ese delito son inimputables, no puede acreditarse la modalidad de pandillerismo que se les atribuye. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 271/01, relativo al proceso número 400/2000, instruido en contra de J.D.L.U., por el delito de Violación Equiparada en Pandilla. Sentencia emitida el 21 de Junio de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

105. LA INSUBSISTENCIA DE UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN DECRETADA MEDIANTE AMPARO, JURÍDICAMENTE IMPIDE RESOLVER LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL INCIDENTE QUE NIEGA LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. En cumplimiento del Amparo número 592/2003, el A quo declaró insubsistente la resolución pronunciada el día 25-veinticinco de Abril de 2003-dos mil tres, de ahí que al estar esta Sala, jurídicamente imposibilitada para analizar una resolución que fue declarada insubsistente, no se está en condiciones de pronunciarse si en el curso del proceso se apreciaron pruebas indubitables que desvanecieron las que sirvieron para comprobar los elementos del tipo, así como desvanecidas las que se consideraron para tener como probable responsable al acusado J. R. M., como lo establece el artículo 482 del citado ordenamiento adjetivo de la materia; por lo que se estima que la insubsistencia del auto de formal prisión, jurídicamente impide analizar la litis procesal planteada, por lo que con fundamento en el artículo 38 y 395 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, esta autoridad declara sin materia el recurso de apelación interpuesto por el acusado J. R. M., contra la improcedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 19/2004, derivado del proceso número 127-2003, instruido en contra de J. R. M. por el delito de Fraude, ante el C. Juez Segundo de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

106. LA NATURALEZA PENAL DEL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, QUEDA EXCLUIDA CUANDO EL USO DEL BIEN PROCEDE DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PRECISAMENTE ESE BIEN FUE EL DAÑADO. Cuando en el uso del bien mueble por tránsito de vehículos resulta dañado, proviniendo la autorización del uso por medio de un contrato de arrendamiento, no se acreditan los elementos constitutivos del cuerpo del delito de Daño en Propiedad Ajena por Culpa, ya que de acuerdo al artículo 2319 fracción II del Código Civil, se establece que el arrendatario responderá de los daños y perjuicios que cause al bien objeto del contrato, y el diverso 2336 del mismo Ordenamiento Legal señala que el arrendatario deberá entregar la cosa arrendada tal como la recibió, por lo que la reclamación de los daños ocasionados a tal vehículo deberá promoverse mediante la vía civil. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 29/2000, relativo al proceso penal número 2/99, instruido en contra de J.A.B.H., por el delito de Daño en Propiedad Ajena por Culpa. Sentencia emitida el 10 de marzo del 2000.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

107. LEGÍTIMA DEFENSA. PRESUNCIÓN DE LA. LOS HECHOS QUE DE ACUERDO A LA LEY LE SIRVEN DE BASE DEBEN QUEDAR PROBADOS PLENAMENTE. Seguidamente se procede a dar respuesta a los motivos de

inconformidad que sobre el capítulo que nos ocupa eleva el Defensor Particular del sentenciado y así las cosas en relación al primero de ellos que se estima conveniente tenerlo por presente en todas y cada una de sus partes en obsequio al principio de economía procesal, esta Sala Revisora estima adecuado pronunciarse en los siguientes términos: De autos no se desprende ninguno de los hechos que establecen los párrafos segundo y tercero de la fracción cuarta del artículo 17 del Código Penal vigente en esta Entidad Federativa, como fundamento de la presunción de legítima defensa, pues no aparece que el hoy occiso... haya realizado el escalonamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de la casa habitación del inculpado..., entendiéndose por escalonamiento la entrada del ofensor por vía no destinada al efecto empleando medios extraordinarios y no los normalmente en uso para vencer los obstáculos opuestos por la condición de cerrado del lugar y por fracturas el forzamiento de los escollos materiales que han sido opuestos a la entrada de cualquier ofensor, como cortar, fracturar, perforar, demoler, forzar, destruir esas barreras, en hacer saltar la cerradura o violentarla mediante llave falsa, forzar la cadena de seguridad que afirma la entrada, etcétera; esto es no aparece que el hoy extinto... o incluso su hermano..., hayan roto o fracturado la puerta de la barda del acceso al domicilio ni mucho menos la de este último del hogar de..., para entrar, ni tampoco que se rechazare la introducción del hoy difunto ni como ya se dijo de su hermano... en el momento mismo de estarse verificando; del mismo modo no es posible decir que se sorprendió al fallecido ni al lesionado en local habitado o en el que hubiese bienes debiéndose considerar así solamente en el interior de la casa, a la que aquellos no llegaron a penetrar, ni hay prueba de que hicieran intento para ello. Asimismo, de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, no resultan datos que denoten que la víctima ni el herido pretendían hacer objeto al inculpado... de una agresión con las características que la ley señala para que opere la presunción de defensa legítima, pues no aparece que el hoy extinto ni el lastimado..., se introdujeran en el domicilio del incriminado buscando la forma de causarle un daño y que necesariamente el hoy sentenciado tuviera la obligación de defenderse ante tal agresión. Además, siendo la conjetura de legítima defensa, una presunción juris tantum, los hechos que la destruyan deben justificarse; pero asimismo para que dicha inferencia opere, los acontecimientos que de acuerdo con la ley, le sirven de base, deben quedar probados plenamente, lo que en la especie se considera no sucedió y siguiendo el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en que las excluyentes, para que ameriten la concesión del amparo, deben comprobarse en la causa, lo propio puede aseverarse de los sucesos que sirven de apoyo a la presunción de la eximente de legítima defensa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 414/2002, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Origen, el acusado y su Defensor Particular, contra la Sentencia dictada por el C. Juez Primero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, dentro de la causa penal número 313/1993, instruida a ... por el delito de Homicidio. Definitiva de fecha 30 de Mayo de 2003. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

108. LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR QUERELLA POR EL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. De autos se justifica plenamente que el querellante e poseedor en calidad de propietario del vehículo dañado en el evento vial que se imputa al querellado, en razón de que para acreditar tal extremo se allegó a la indagatoria previa el recibo oficial de pago de impuestos que por la regularización del vehículo realizara el pasivo, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Estado de México, documento que adquiere valor probatorio en términos del artículo 313 del Código Procesal Penal en vigor, y además, la persona que conducía el automóvil al momento en que se suscitó el evento vial, indicó que el mismo es propiedad del querellante, lo cual también se advierte del parte y croquis elaborado por un agente de tránsito de esta ciudad. Por lo que tales elementos de convicción son suficientes para tener por demostrada la legitimación del querellante, en razón de que su carácter de propietario del vehículo dañado se presume en términos del artículo 798 del Código Civil del Estado, al haberse comprobado a plenitud la posesión que en carácter de dueño dicha persona detenta sobre el bien, con lo cual se actualiza el requisito de procedibilidad relativo a la existencia de querella en contra del indiciado, exigido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 236/98, relativo al Proceso Número 321/97, instruido en contra de H.F.R., por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA (POR CULPA).- Sentencia emitida el 20 de octubre de 1998.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

109. LESIONES Y DELITO COMETIDO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS FALTA DE QUERELLA. Si bien de los mismos elementos de prueba que obran en el expediente, sirven para acreditar que el activo S. A. H., le alteró la salud física al Oficial de Policía F. A. L. De L., quien se encontraba de servicio, causándole una herida que como consecuencia le dejó cicatriz perpetua, al no haberse determinado la notabilidad de la cicatriz, debe decirse entonces, que no se acredita la existencia de la agravante prevista por la fracción I del artículo 303 del Código Penal vigente en el Estado, por lo tanto, clasificada como de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar, y sancionada por ende, de conformidad con lo señalado por el artículo 301-I del Ordenamiento Penal en mención, delito que sólo se perseguirá a petición de parte ofendida; y en el presente caso, en ninguna de las comparecencias del ofendido exteriorizó su voluntad de poner en actividad a la Autoridad para la persecución del ilícito cometido en su perjuicio; así entonces, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, procede absolver al acusado del ilícito de lesiones; y por consecuencia, también se deberá absolver al activo del Delito Cometido Contra Servidores Públicos, previsto por el artículo 191 del Código Penal en comento, pues no obstante que existió la causasión de una lesión a un servidor público ejerciendo su cargo, éste no puso de manifiesto su voluntad de que se ejerciera acción en contra del activo del delito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 165/04, relativo al proceso número 188/03, instruido en contra de S. A. H., por los delitos de Daño en Propiedad Ajena,

Lesiones y Delito Cometido contra Servidores Públicos.- Sentencia emitida en fecha 30 de Julio del año 2004.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

110. LESIONES, AMPUTACIÓN O PÉRDIDA DE UN DEDO, NO PRODUCE LA PÉRDIDA DE UN MIEMBRO, CONFORME AL ART. 303 FR. III DEL CÓDIGO PENAL EN EL ESTADO. La pérdida de un dedo del pie izquierdo del sujeto pasivo J. J. S. A., por amputación del mismo, no debe sancionarse conforme al artículo 303 fracción III del Código Penal vigente en esta Entidad federativa, toda vez que a consecuencia de la lesión recibida se sufrió amputación de un dedo del pie, empero dicha pérdida del dedo del pie no puede considerarse como pérdida de un miembro, ya que los dedos de los pies o de las manos son parte del miembro llamado "pie o mano", según corresponda. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 541/2003, derivado del Proceso número 170/03, instruido en contra de Y. E. H. G. por el delito de Lesiones. Sentencia emitida el 29 de Enero de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

111. LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. NO ES OBSTÁCULO PARA SU CONCESIÓN EL QUE EL ACUSADO NO HAGA MANIFESTACIÓN ALGUNA RESPECTO DE LA NATURALEZA DE LA CAUCIÓN QUE SOLICITA. Efectivamente como lo manifiesta el apelante, el artículo 498 del Código de Procedimientos Penales en vigor, establece que: La naturaleza de la caución quedará a elección del acusado, quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige, para los efectos de la fracción V del artículo anterior. En caso de que no se haga la manifestación mencionada, de acuerdo con el artículo que antecede se fijará la cantidad que corresponda en los términos de la fracción I del artículo siguiente, observándose lo que establecen las demás fracciones cuando el depósito no se pueda hacer en efectivo y así se solicite. Empero también es cierto que en el caso en concreto, se advierte que el Juez de Primer Grado no aplica inexactamente dicho dispositivo legal y por lo tanto ningún agravio le causa a dicha institución el auto recurrido, en razón de que el propio Legislador en el artículo 498 en comento dejó claro que en caso en que no se haga manifestación alguna por el acusado respecto de la naturaleza de la caución que solicita, como ciertamente acontece en la especie, ello no es obstáculo para que se le conceda el beneficio de su libertad caucional, ya que como lo previene dicho artículo el Juez está facultado de acuerdo con el artículo 497 del Código Procesal Penal en vigor, para fijar la cantidad que corresponda en los términos de la fracción I del artículo 499 del mismo cuerpo de leyes, circunstancias que acontecen en la especie, máxime que el A-quo en el auto recurrido precisa que sirven de apoyo y fundamento lo expresado en el artículo 20 Constitucional y los diversos 493 fracción III, 494, 495 y 497 y demás relativos del citado Ordenamiento Legal y que los montos que se fijan son tomando en cuenta la naturaleza de los delitos, características personales del inculpado y sus condiciones económicas y que una vez hechos los depósitos respectivos, se levantara el acta correspondiente y se ordenara su

libertad, por lo que es obvio que se cumple con lo establecido por el artículo 498 del Código Procesal de la materia, en el pronunciamiento del auto motivo de la instancia. De lo cual resulta la improcedencia de los agravios formulados por la C. Procuradora General de Justicia en el Estado en contra del auto recurrido.

Mas sin embargo, no es el único elemento de prueba que pueda acreditar la figura jurídica de la reincidencia, ya que existen otros elementos, que valorados en su conjunto, pueden crear convicción, como podrían ser las certificaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales instructores, los informes rendidos por las autoridades encargadas de ejecutar las penas, así como la declaración del sujeto activo. Ahora bien, las pruebas aportadas por las diversas autoridades, en forma aislada, son insuficientes para acreditar la reincidencia, dichas pruebas podrán tener el rango de documento público, pero necesariamente tendrán que ser adminiculadas con otras probanzas para acreditar la figura jurídica en comento de manera indubitable... No obstante lo anterior según se dejó explicado aún y cuando le asiste la razón al Órgano Técnico Acusador en el aspecto que nos ocupa, en la especie no existen elementos de convicción suficientes para proceder de la manera puntualizada pues si bien es cierto que de los autos de la causa de origen a fojas 21 y 22 aparece el informe de antecedentes penales con que cuenta... y del que destaca que fue objeto de un fallo de condena consistente en cinco años seis meses de cárcel y multa de $648.13 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M. N.) o en su defecto treinta días de trabajo en beneficio de la comunidad a partir del día 5 cinco de Agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco por parte de la Cuarta Sala de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca penal número 63/96 relativo al proceso penal 258/95 instaurado por el C. Juez Primero de lo Penal por el flagelo social de ROBO CON VIOLENCIA; no menos verídico lo es también que se carece del dato trascendental a cerca de la fecha de la resolución de segunda instancia o sea del antecedente de la resolución que causó estado, lo anterior para estar en condiciones de realizar el cómputo correspondiente pues no pasa inadvertido que el fenómeno jurídico a comento opera cuando una persona comete un nuevo delito si no ha transcurrido desde que cause ejecutoria dicho fallo un término igual al de la prescripción de la pena, según se obtiene de la simple lectura del artículo 43 del Código Penal vigente en la Entidad; siendo exacto matizar que no aparecen diversos medios probatorios que se adminiculen con el reseñado informe de antecedentes penales como podrían ser las certificaciones efectuadas por los Órganos Jurisdiccionales Instructores, las noticias enviadas por la Autoridades encargadas de ejecutar las penas, incluso la declaración del encausado pues de la preparatoria solamente obtenemos que al ser cuestionado sobre este aspecto sin más explicó: “... Que es la “Si” vez que se le procesa...” . Así pues que se estime como insuficiente el agravio elevado por la Representación Social ante la carencia de material probatorio suficiente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 426/2002, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial del sentenciado y el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Origen, contra la Sentencia dictada por el C. Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad, dentro de la causa

penal número 299/97-B, instruida a... por el delito de Allanamiento de Morada. Definitiva de fecha 16 de Enero de 2003. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

112. MEDIDAS DE SEGURIDAD. LAS REGLAS DEL CONCURSO REAL DE DELITOS NO SON APLICABLES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS. Al analizar la resolución que motiva el grado se obtiene que el Juez A quo consideró que la medida de seguridad de tipo curativa e internamiento del inimputable Leobardo Ramírez García no excedería de 06-seis años 10-diez meses, y para arribar a su decisión, consideró el máximo de la sanción por el delito de Daño en Propiedad Ajena efectuado el 02 de noviembre de 1999, y a este le sumó el término mayor obtenido del término medio aritmético para el Daño en Propiedad Ajena del día 30 de abril del 2001, para el Allanamiento de Morada del día 02 de noviembre de 1999 y el Allanamiento de Morada del día 30 de abril del 2001; lo cual lo llevó a determinar que el tiempo máximo que duraría la medida curativa y de internamiento no excedería de seis años diez meses. Lo anterior denota que el A quo aplicó las reglas del concurso real o material para determinar el tiempo que duraría la medida curativa y de internamiento, lo cual resulta inexacto, en principio porque si bien es cierto que el inimputable participó en la comisión de varios delitos en actos distintos, sin que se hubiera dictado sentencia por ellos, no menos cierto lo es que el artículo 76 del Código Sustantivo de la materia, habla de la aplicación de penas para los casos de concurso real, y en este caso por tratarse de un inimputable no se le imponen PENAS, sino MEDIDAS DE SEGURIDAD; y en segundo lugar porque nuestra Legislación Procesal Penal dispone en el titulo décimo capítulo único el procedimiento que habrá de seguirse a los enfermos mentales y sordomudos, por tanto, se les sujeta a un procedimiento especial como bien lo hizo el A quo hasta antes de dictar la sentencia de la segunda etapa del procedimiento especial, pues al proceder al dictado de la misma mezcló el procedimiento especial con el ordinario que se sigue a cualquier persona imputable siendo que el apartado del Procedimiento especial para enfermos mentales no contempla la suma de cada uno de los delitos cometidos por los inimputables como el término máximo del tiempo que deberá durar la medida de internamiento; sino que señala que no podrá exceder del término máximo de la sanción por el delito cometido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 153/2002, derivado del Proceso Penal número 113/02 y 143/02 acumulados, instruido en contra de L. R. G. por los delitos de Daño en Propiedad Ajena y Allanamiento de Morada. Juzgado de Origen: Octavo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

113. MEDIDA DE SEGURIDAD. PECULIARIDAD: TUITO-CURATIVA, POR TENER FINALIDAD TERAPÉUTICA FUNDAMENTALMENTE. Hay que hacer hincapié sobre la siguiente reflexión: El fundamento de la medida de seguridad de internamiento a los enajenados se encuentra en exigencias indeclinables de defensa social o comunitaria por la peligrosidad demostrada por el inimputable con la participación del

suceso que se le reprocha. Toda infracción criminal supone la peligrosidad en mayor o menor medida pero ostensible e indiscutible, requiriendo el tratamiento del sujeto psiquiátricamente un régimen de duración indefinida; tal medida no puede tener un sentido de castigo o represión, sino que por su naturaleza al margen de toda función punitiva debe ser tuitivo-curativa, por tener finalidad terapéutica fundamentalmente. Siendo el fundamento del internamiento del enajenado el tuitivo-curativo no resulta extraño que la norma penal imperativamente mande a la Autoridad Jurisdiccional que decreta tal medida y que este Tribunal de Justicia Penal la venga sin vacilación interpretando en el sentido de ser una situación precautoria que inexcusablemente debe adoptar esta Sala Revisora, sin excepción alguna, y sin que esté en sus facultades discrecionales acordarla o dejarla de imponer en razón a circunstancias concurrentes, ni siquiera resulta posible remitirla a un posterior procedimiento civil o gubernativo, toda vez que resulta imperativa y preceptiva su observancia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 33/2003, relativo a la causa penal número 45/96-I y 240/96 acumuladas, instruida a ... por los delitos de Homicidio, Daño en Propiedad Ajena y Disparo de Arma de Fuego. Sentencia emitida el 03 de Marzo de 2004. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

114. MODALIDAD DE PANDILLA, EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA QUE SE LE APLIQUE LA SANCIÓN QUE AL RESPECTO CORRESPONDE AL ACUSADO, EN VIRTUD DE QUE EL JUEZ NATURAL LO OMITIÓ. Al respecto, atendiendo a que todo proceso se seguirá por el hecho o hechos que consigne la Representación Social Investigadora, respecto a la persecución de determinado delito (s); se tiene que este hecho no fue considerado por el Fiscal Investigador, al consignar la averiguación previa por el ilícito de Robo con Violencia; ahora bien, no obstante que el tercer párrafo del artículo 177 del Código Represivo en vigor, establece que la clasificación de la modalidad de pandilla se estudiará en la sentencia; en el Auto de Plazo Constitucional se deben establecer las circunstancias de modo y ejecución sobre la participación de tres o más personas que, sin estar organizados con fines delictuosos, cometen en común algún delito, y que en base a las pruebas que se aporten durante el proceso, tomando en consideración la identidad de sus miembros y su actuación anti-social revele una predisposición delictiva, se podría así sancionar dicha modalidad, lo cual no se suscitó en la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 520/01, relativo a los procesos acumulados números 211/00 y 237/00, instruidos en contra de R.G.R., por los delitos de Robo con Violencia y Robo. Sentencia emitida el 27 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

115. MODALIDAD DE PANDILLA, NO SE APLICA SU SANCIÓN CUANDO EXISTE RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA. No obstante que en la especie se acredita que los acusados pertenecen a la padilla “Los Califas” o “Los Cachorros”, que se reunían habitualmente en la colonia donde habitaban, que son más de tres personas y que,

sin estar organizados con fines delictuosos cometieron en común el delito en estudio; no es dable aplicar la modalidad de pandilla, puesto que de autos se desprende que los ahora acusados respondieron a una agresión por parte del occiso y de la pandilla "Los Solitos" a la cual pertenecía, lo que demuestra que C. G. y sus coacusados no aprovecharon su superioridad numérica para cometer este ilícito, sino que al aceptar la contienda, se pusieron en un mismo plano de ilicitud, y dicha modalidad es técnicamente incompatible con la de la riña, pues en los hechos delictivos que nos ocupan no se tiene desconocimiento de la causación material en que se privó de la vida a L. G. V., sino en la específica, es decir, quien produjo una lesión y quien otra, continuando así la complicidad correspectiva con la que actuaron, pues en los delitos cometidos por pandilla se requiere una participación pura y simple que no puede coexistir con la complicidad correspectiva, tal como sucede en la especie; razón por la que dicha modalidad de pandilla no es factible aplicar en el presente caso a estudio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 03/04, relativo al proceso número 457/01, instruido en contra de C. V. C. G. Y Otros, por el delito de Homicidio Calificado en su Modalidad de Pandilla.- Sentencia emitida en fecha 30 de Julio del año 2004.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

116. NO ES SUFICIENTE QUE EXISTA AGREGADO A LOS AUTOS INFORME DE ANTECEDENTES PENALES, SI DEL MISMO NO SE DESPRENDE QUE SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIADA EN CONTRA DEL ACUSADO, PARA EFECTO DE CONCEDER EL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL. SEXTO. Ahora bien tenemos que del fallo combatido, no se deviene que el A quo haya acordado lo correspondiente a la solicitud planteada en el pliego de conclusiones de la defensa oficial del acusado, tocante a que se le conceda el beneficio a que se refiere el artículo 108 del Código Penal en vigor, por lo que en debida reparación y en suplencia de la queja que se hace valer a favor del acusado se MODIFICA la resolución de primera instancia para el efecto de conceder a C. R. I., el beneficio de la Condena Condicional, siempre y cuando reúna los requisitos a que se contraen los incisos d) y e) de la fracción I, del artículo 108 del Código Penal vigente en el Estado. No siendo obstáculo para la anterior consideración, la circunstancia de que obre agregado a foja 41 de autos, informe de antecedentes penales del acusado, toda vez que del mismo no se desprende que se haya pronunciado sentencia ejecutoriada, y por ende esta Sala no se encuentra en posibilidad de determinar, que con anterioridad a este proceso el acusado de referencia haya observado un modo deshonesto de vivir. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 2/2003, relativo al Proceso Penal número 347/2000-II, instruido en contra de C. R. I. por los delitos de Ataques Peligrosos y Lesiones. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

117. NO ES UN INDICIO DE SU RESPONSABILIDAD, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACUSADO SE ADHIERA AL DERECHO DE NO DECLARAR. Respecto

de esta declaración, (ampliación de declaración preparatoria, presentada por escrito), no le asiste la razón al C. Juez de la causa al decir que le resta valor por el hecho de que al momento de comparecer en preparatoria se acogió al beneficio del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esta garantía constitucional que se otorga en todo proceso penal no puede tomarse como un indicio contra el acusado, puesto que esta ejerciendo un derecho previamente otorgado en nuestra carta magna; por ello es importante analizar esa declaración para estar en posibilidad de declarar si la misma es verosímil o no. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva número 307/2004, instruido contra J. S. R. por el delito de EQUIPARABLE AL ROBO, derivado del proceso 156-2003, ante el C. Juez Segundo de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado.

118. NO OPERA LA EXCUSA ABSOLUTORIA QUE JUSTIFIQUE EL APODERAMIENTO CON EXENCIÓN DE PENALIDAD, SI NO SE ACREDITAN LOS CASOS EXTREMOS Y DE PROBADA NECESIDAD A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO PUNITIVO EN VIGOR. Adminiculado a lo anterior se encuentra conexa la declaración del acusado M. A. C. P. quien en su declaración preparatoria refiere que si se encuentra de acuerdo con el robo de los quesos, pero que es la primera vez que se mete a ese oxxo y ese día salió de una cantina y andaba tomado y traía mucha hambre, siendo este el motivo por el cual los agarró. A esta admisión de hechos por parte del acusado se le confiere la categoría de confesión calificada divisible, ya que a través de ella admite su participación en una conducta que nuestro Código punitivo señala como delito; más sin embargo pretende evadir de plano su responsabilidad, al manifestar que si se robo los quesos del oxxo, pero que lo hizo ya que andaba muy tomado y traía hambre, tratando de que su conducta encuadre en alguna de las disposiciones legales referentes a las excluyentes de responsabilidad que en el presente caso lo es según la doctrina el robo famélico o por estado de necesidad, que en el Código Penal del Estado lo consagra el numeral 375, situación la cual en el presente caso no se surte dicho supuesto, ya que el dispositivo de referencia establece claramente: *"Que no se impondrá sanción a la persona que sin emplear engaños ni medio violentos, se apodere por una sola vez de objetos indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares por el momento";* ahora bien... de la mecánica en que acaecieron los presentes hechos no se deviene que opere en su favor dicha excusa absolutoria que justifique el apoderamiento con exención de penalidad, en casos extremos y de probada necesidad, en donde el sujeto actúe bajo la manifestación instintiva de conservación, por circunstancias de lugar y propias del actuante que hacen enfrentar bienes jurídicos de valía desigual, donde se justifique la conducta del activo, para preservar su vida, lo que no acaece en la especie; puesto que el acusado expuso que ese día salió de la cantina, lo que permite inferir que se encontraba bebiendo en dicho lugar, y refirió andar tomado, lo que se acredita con el dictamen medico que le fuese practicado el 19-diecinueve de Noviembre del 2001-dos mil uno, en el que se le determinó ebriedad incompleta; situación por la cual no es de tomarse en consideración la excluyente de responsabilidad por la cual pretende

evadir la misma. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 106/2003, derivado del Proceso número 348/2001, instruido en contra de M. A. C. P. por el delito de Robo. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

119. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE PANDILLA CUANDO LOS SUJETOS ACTIVOS SON POLICÍAS. La última parte del artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado establece: "la calificación de la modalidad de pandilla será en la sentencia y queda al arbitrio del Juez, quien en base a las pruebas que se aporten durante el proceso deberá tomar en consideración la identidad de sus miembros y su actuación antisocial que revele una predisposición delictiva." Por lo que al análisis de las constancias que integran el sumario no se encuentran pruebas claras y contundentes que indiquen que los acusados pertenecían a un grupo de mas de tres personas identificadas como sujetos antisociales, toda vez que la actividad que desempeñaban los acusados como Policías de Seguridad Pública dista mucho de ser antisocial, amén de que conforme a la Ley Orgánica de los Cuerpos de Seguridad Pública, en su artículo 7 señala que en materia de seguridad y tranquilidad pública, a la policía preventiva corresponde, entre otras cosas, prevenir la comisión de hechos contrarios a la tranquilidad de personas, de lo que se deriva que sus miembros se encargan de prevenir los delitos; lo que no sucede en la modalidad de pandilla, en donde sus miembros revelan una predisposición delictiva, circunstancia que no acaece en la especie, en tratándose de los tres acusados, dada la actividad que desempeñaban, a pesar de haber cometido un delito en común, por lo que no se acredita la modalidad de pandilla. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 297/99 relativa al proceso penal número 215/98-II, instruido en contra de R.E.I., E.R.A. y A.H.G., por el delito de robo calificado en su modalidad de pandillerismo.- Sentencia emitida el 23 de Marzo del 2000.- Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

120. NO SE ACREDITA LEGALMENTE LA EXISTENCIA DE DELITO DE EQUIPARABLE AL ROBO QUE PREVÉ LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO PUNITIVO EN VIGOR. La fracción III del citado artículo 365 del Código de referencia, textualmente establece: "También se equipara al delito de Robo... al que: Detente, posea o custodie ilegítimamente vehículos robados", sin embargo, en la especie nos encontramos que se trata de un solo vehículo y no vehículos como lo refiere la citada fracción, por lo que en estricta observancia del artículo 14 Constitucional, que en su párrafo tercero prohíbe imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito que se trate debe decirse que en autos no se surten los extremos de la fracción III del aludido Dispositivo Legal; resultando totalmente erróneo el razonamiento del inferior, al acreditar la existencia del ilícito que nos ocupa, con base en el artículo 366 del Código Represivo en vigor, toda vez que en la presente causa se le instruye al acusado un proceso por el ilícito de Equiparable al Robo y no Robo como lo señala el aludido precepto

366. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 729/01, relativo al proceso número 171/2000, instruido en contra de J. L. G. C., por el delito de Equiparable al Robo. Sentencia emitida el 5 de Abril de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

121. NO SE CONFIGURA DELITO DE ROBO SI ACTIVO COMO EJECUTIVO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PACTA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS CON UNA PERSONA MORAL Y RECIBE LA PRIMA POR PARTE DE ESTA, SIN INGRESAR DICHO NUMERARIO A LA COMPAÑÍA PARA LA CUAL LABORA. El artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece: "Si no hubiere sido pagada la prima o la fracción de ella en los casos de pago en parcialidades, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de sus vencimiento, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de este plazo"; ahora bien, en el supuesto caso de que, como lo estableció el Juez en su fallo impugnado, J.E.M.A., como ejecutivo de cuenta de la empresa A.M.S.I. S. A. de C. V., pactara con la agencia de viajes "S", la contratación de pólizas de seguros para un viaje de verano de un grupo de quinceañeras en el mes de Julio del año 2001, y que por tal motivo recibiera de dicha agencia de viajes la cantidad de tres mil dólares, firmando un recibo por concepto de anticipo de la prima correspondiente al seguro contratado, sin que tal numerario lo ingresara a la caja de la empresa para la cual laboraba, ello ningún perjuicio patrimonial ocasiona a la persona moral que se dice afectada, puesto que al tenor del artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al no recibir dicha compañía aseguradora, el importe de la prima o la fracción de ella en los casos de pago en parcialidades, cesan automáticamente los efectos del contrato dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento; de lo que se infiere que ante tal situación, como bien lo aduce la Defensa en agravios, el delito configurado no sería el de robo, sino otro diverso por el que el C. Agente del Ministerio Público Investigador no ejercitó acción penal, y que quien resultaría afectado en su patrimonio seria la agencia de viajes que contrató la póliza de seguro de referencia, pues es dicha negociación, la cual entregó en confianza a M. A. en su calidad de Ejecutivo de Cuenta de la empresa A.M.S.I. S.A. de C. V, el importe de la prima correspondiente al seguro contratado, y sí éste, en lugar de ingresar ese dinero a la caja de la compañía para la cual laboraba, dispone para sí del mismo, entonces la póliza contratada como ya se dijo, cesará sus efectos automáticamente dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, y ello a quien perjudica es a la agencia de viajes citada; sin embargo en autos no consta que la misma haya denunciado tales hechos en su perjuicio; y por lo tanto, sin tal requisito de procedibilidad sería inconstitucional el dictado de un fallo condenatorio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 320/03, relativo al proceso número 76/02, instruido en contra de J. E. M. A. por el delito de Robo. Sentencia emitida el 26 de Marzo de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola

122. NO SE CONFIGURA EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, CUANDO SE ESTÁ EN FACULTADES PARA EJERCERLA. Dicha figura delictiva no se encuentra acreditada, ya que del sumario se desprende que el acusado de referencia en su calidad de Director de Desarrollo Urbano del Municipio según se corrobora con el oficio signado por el Presidente Municipal, en donde lo designó con tal categoría; tenía el carácter de autoridad competente para dictar la orden de demoler lo ilegalmente construido en el paso de servidumbre consistente en una cerca de alambre, motivo de la presente causa penal, en términos de lo dispuesto por los artículos 22, inciso d), fracciones XIV, XVII, XXI y XXII, 166, 195, 196, 197, 198, 199, 200, fracciones VI, VII y IX, 201, fracción IV, 207 y 209 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, anteriormente vigente, pues queda plenamente demostrado que el indiciado en su carácter de director de la dependencia administrativa referida, fue competente para dictar la citada orden; por tanto, no se justifica que dicha orden pueda considerarse como un acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución, ello en base a los preceptos legales invocados; pues además de autorizarlo para ese efecto, expresamente prevén el procedimiento administrativo empleado por dicho servidor público, conforme al artículo 207 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, anteriormente vigente; ya que la referida orden tiene el carácter de un mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundada y motivada, pues se apegó estrictamente al procedimiento administrativo previsto por el numeral invocado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 142/99, relativo al proceso 167/98, instruido en contra del acusado M.R.V., por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD.- Sentencia emitida el 28 de octubre de 1999.- Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

123. NO SE SATISFACE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE QUERELLA POR LA PARTE OFENDIDA, REQUERIDO POR EL ARTÍCULO 72 DE CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. Para entrar al estudio del delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo, previsto por el artículo 402 en relación con los diversos 28 y 65 del Código Penal vigente en el Estado, y si bien es cierto, que MMG ostentándose como Representante Legal de la empresa AAP, personalidad que justificó anexando copia certificada por Notario Público del Poder que la acredita como tal, presentó ante el Órgano Investigador escrito de querella en contra del acusado JRCG, en la que se duele de los daños materiales ocasionados a un vehículo el cual refiere es propiedad de la empresa citada; también es cierto, que en la especie no esta acreditado que la persona moral sea legitima propietaria del vehículo, dado que aun y cuando dentro de autos obra copia de la factura número 5159, expedida por ASL, por concepto del vehículo antes referido, así como copia de la tarjeta de circulación, documentos con los que se pretende acreditar que la negociación es propietaria del bien mueble; dichos documentos carecen de validez legal, puesto que solamente obran en copia en el sumario y son insuficientes para comprobar que dicho establecimiento, es propietario del vehículo por tratarse de copias fácilmente alterables y que no se encuentran corroboradas con otro medio de prueba, dado

que aun y cuando en el reverso de dichos documentos, se aprecia una supuesta certificación del Representante Social, la misma carece de validez, en virtud de que los Agentes del Ministerio Público carecen de facultades para efectuar la certificación mencionada, ya que los artículos 71 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 96 fracción XII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ordenan: "Artículo 71.- ... El Ministerio Público expedirá copias simples o certificadas de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento...", y "Artículo 96.- Son deberes y facultades de los Secretarios del Ministerio Público, los siguientes: ..... XII.- Expedir las copias certificadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de acuerdo que dicte el Ministerio Público", de la interpretación de las disposiciones transcritas, se infiere que el legislador local ordinario, concedió a la Institución del Ministerio Público, la facultad genérica de expedir copias simples o certificadas de constancias o registros que obren en las averiguaciones previas a su cargo, requeridas por autoridades competentes, por el ofendido, la victima, el indiciado o su defensor, sin especificar el procedimiento u órgano del Ministerio Público autorizado para ello, por ende, correspondió al Ejecutivo del Estado reglamentar esa atribución, administrativamente para su ejecución, para lo cual, en uso de la facultad que le confiere el artículo 85 fracción X, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ordenó en el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que las certificaciones que correspondan al Ministerio Público, se realicen por los Secretarios de éste, previo acuerdo de aquél o del titular de la dependencia de que se trate, delimitando así las facultades y atribuciones de los integrantes del Ministerio Público, y si bien de las supuestas certificaciones realizadas por el C. Agente del Ministerio Público, se aprecian dos firmas más, con lo que se infiere que las mismas fueron llevadas a cabo en compañía de dos testigos de asistencia, es de resaltarse que no se advierte el nombre de los mismos, lo cual indica que éstas tan sólo atestiguaron el acto de firma del Ministerio Público, ya que la misma no es llevada a cabo por un Secretario de dicho Órgano Técnico, como lo establece el artículo 96 citado, resultando de ello, que el Órgano Investigador actúo fuera de las funciones que tiene encomendadas por la ley, por lo tanto, esas constancias no merecen el valor probatorio que le pretende atribuir el A-quo, conforme lo disponen los artículos 313 y 314 del Código Procesal de la materia y el diverso 287 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 454/04, relativo al proceso número 254/03, instruido en contra de JRCG, por el delito de Daño en Propiedad Ajena por culpa.- Sentencia emitida en fecha 31 de mayo del año 2005. – Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

124. OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO APELANTE. En la especie, la determinación impugnada es

una definitiva y el recurrente es la parte afectada del delito, evento en el cual esta Sala estudiará con estricto apego a derecho los motivos de inconformidad hechos valer y lo anterior es así ya que el dispositivo legal 382 del Código de Procedimientos Penales establece entre otras cosas que el Tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o su Defensor, o siéndolo éste último se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente, lo anterior con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que en el presente Toca se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable. Además de que no resulta equitativo comparar al ofendido con el reo en el proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél al ser quien resiente los efectos del hecho delictivo representa la figura antagónica de la persona a que se refiere la indicada norma procedimental, esto es del sujeto a quien se le imputa la comisión de un delito. No es óbice para lo anterior la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 veintiuno de Septiembre de 2000 del dos mil, se haya adicionado un apartado B a su artículo 20, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que no se instituyó a favor de aquellos dicha suplencia de la queja, que se rige por el Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, el cuál no ha sido modificado en sus numeral 382 con posterioridad a la exteriorizada reforma constitucional. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DECIMA SALA PENAL. Toca de apelación en definitiva 409/04, relativo a la causa penal número 225/2003-I, instruida a... por el delito de LESIONES. Definitiva de fecha 29 veintinueve de Octubre de 2004. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

125. ORDEN DE COMPARECENCIA. PROCEDE DECRETARLA AUN Y CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO HAYA SOLICITADO ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCULPADO POR EL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSO, DADO QUE EN EL PERÍODO TRANSCURRIDO ENTRE EL AUTO DE CONSIGNACIÓN Y EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, ACAECIERON REFORMAS AL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO. Tomando en consideración que el hecho de que el Ministerio Público investigador, al momento de consignar la indagatoria origen del proceso del que se deduce este toca, no solicitó orden de comparecencia contra la indiciada de referencia por el delito en estudio, obedeció simplemente a que lo que procedía conforme a derecho, de acuerdo a la ley vigente en ese entonces, era solicitar la orden de aprehensión, debe concluirse que el advenimiento de las reformas al artículo 209 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, que establecen que tratándose de delitos culposos no graves y el indiciado no se encuentre detenido, el Ministerio Público solicitará al Juez dicte la orden de comparecencia; es una situación imprevista, que no debe repercutir en perjuicio del Ministerio Público y el ofendido, mas aún si en el particular dicho órgano investigador cumplió cabalmente con su función de recabar las pruebas necesarias a fin de acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la indiciada en su comisión. Por ello, a fin de salvaguardar el principio de equidad y equilibrio procesal de las partes, pues tanto los derechos del acusado como del ofendido son de elevada trascendencia social; al resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer por el Procurador General de Justicia del Estado, lo procedente es revocar la resolución impugnada y tomando en consideración que en la especie se acredita el cuerpo del delito de daño en propiedad ajena por culpa, así como la probable responsabilidad de la inculpada en su comisión, con fundamento en los artículos 16 párrafo primero de la Constitución General de la República y 209 del Código de Procedimientos Penales del Estado, lo que procede es decretar orden de comparecencia contra dicha indiciada por el expresado delito, en razón de que tal determinación no excede de lo peticionado inicialmente por el Ministerio Público investigador en el auto de consignación". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo 150/2004, deducido del proceso penal 73/2004, instruido contra K.V.G.M., por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, en el Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el treinta de noviembre de dos mil cuatro.

126. ORDEN DE COMPARECENCIA Y ORDEN DE PRESENTACIÓN. ACTOS JURÍDICAMENTE DISTINTOS. Ahora bien, la suscrita Magistrada considera menester señalar, que una orden de comparecencia y una orden de presentación son actos jurídicamente diferentes, ya que la primera es librada para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia Judicial, a fin de que rinda su declaración preparatoria, tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien para los que la Ley prevé pena alternativa; para lo cual el Juez de la causa debe analizar si existen elementos que acrediten la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del acusado; en tanto que la orden de presentación, puede ser girada tanto por la Autoridad Investigadora, como por la Judicial, para el único fin de que una persona se presente ante tales autoridades, ya sea voluntaria o mediante la fuerza pública, para la práctica de una diligencia; sentado lo anterior, debe decirse que en el presente caso, el A-quo dictó una Negativa de Orden de Presentación o Comparecencia, y al ser estas dos resoluciones distintas, como ya quedó precisado en líneas precedentes, tenemos por consecuencia que no se encuentra definida cual es la resolución motivo del grado, es decir, si lo es la orden de comparecencia, la cual resulta apelable de conformidad con la fracción VI del artículo 385 de la Legislación Adjetiva de la Materia; o la orden de presentación, la cual no se encuentra contemplada como apelable, ni por el precepto legal antes citado, así como tampoco por el numeral 386 del mismo ordenamiento legal; máxime que el C. Subprocurador del Ministerio Público, al formular sus agravios, se conduce en los mismos términos que el A-quo, al citar que la resolución que le causa agravios lo es la orden de presentación o comparecencia; lo cual perjudica al acusado; por lo que ante la imposibilidad de suplir la deficiencia de agravios de la Representación Social, y previa declarativa de inoperancia de los mismos, se CONFIRMA, la resolución que se revisa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en artículo número

500/01, derivado del Proceso Penal número 193/2001, instruido en contra de M. M. L. por el delito de Daño en Propiedad Ajena. Sentencia emitida el 15 de Octubre de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

127. PANDILLA APLICACIÓN DE LA. CASO EN QUE LAS PERSONAS QUE COMETEN UN ILICITO EN COMÚN SON FAMILIARES. El último párrafo del artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado señala que la calificación de la modalidad de la pandilla será en la sentencia y queda al arbitrio del Juez, quien basándose en las pruebas que se aporten durante el proceso deberá tomar en consideración la identidad de sus miembros y su actuación antisocial que revele una predisposición delictiva. Dicha calificación no se encuentra acreditada, toda vez que el sentido lato de la pandilla, es la unión o liga para engañar a otros o para causarles algún daño; o es el lazo que une a varias personas para algo, concretamente para hacer un daño, por lo tanto, en el sumario no se desprende una identidad pandilleril de los acusados, esto es, que sean miembros de alguna pandilla, ni ejerzan conductas contrarias a la organización social, para predisponer anticipadamente el cometer un fin determinado, como los son los delitos atribuidos a los acusados, ya que uno de los inculpados empezó a realizar la conducta delictiva, cuando posteriormente llegan los otros dos acusados, quienes son familiares del primero, en su auxilio, realizando esto, en virtud del lazo consanguíneo y sentimental que existe entre ellos, por lo que resulta, que realizaron la conducta porque existe entre ellos un lazo de familia, y no por existir un acuerdo previo de reunirse ocasionalmente o habitualmente para consumar un hecho delictivo, por lo tanto no se reúnen las exigencias del primero y segundo párrafo del artículo 177 del Código Penal en mención. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 418/99, relativo al proceso penal número 141/97, instruido en contra de M. y M.E.J.A., por los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones sujetas a proceso.- Sentencia emitida el día 17 de marzo del 2000. - Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

128. PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, DEBE SURTIRSE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIAD DE LA QUERELLA, POR EL OFENDIDO. En autos no se encuentra justificado el requisito de procedibilidad de la querella por la parte ofendida, dado que en la especie no está acreditado que H.S.G.L. y M.del P.C.L., sean los legítimos propietarios del vehículo marca Mazda, tipo Pick-Up, color gris, modelo 1991, con placas de circulación PP-46180 del Estado de Nuevo León, del que se duelen dañado, pues no obra en la causa ningún documento que los acredite como tales, dado que aún y cuando en la misma consta el pedimento de importación de la camioneta tipo Pick-Up, marca mazda, número de serie JM2UF1131M0154233, modelo 1991, de tal documento solo se desprende que H.J.M.L. importó dicho bien mueble a este país; lo cual coincide con el parte del hecho vial que nos

ocupa, levantado por el Comandante de Tránsito J.C.C.G, en el que aparece que el vehículo de referencia es propiedad de H.J.M.L.; siendo que los querellantes, tratando de justificar la propiedad de la camioneta descrita en líneas anteriores, únicamente allegaron al sumario, copia del aviso en caso de venta del vehículo en mención, en donde aparece que J.M.L. lo vendió a H.S.G.L., en fecha 17-diecisiete de Abril del año 2004-dos mil cuatro, sin embargo, este último no es un documento oficial, además de que puede ser llenado por cualquier persona, por lo que de ninguna manera sirve para acreditar que S.G.L. y M. del P.C.L. sean los legítimos propietarios de la camioneta tipo Pick-Up, marca mazda, número de serie JM2UF1131M0154233, modelo 1991, que se duelen fue dañada en el hecho vial que nos ocupa, amen que dicho documento únicamente consta en copia simple en el sumario, por lo que carece de valor jurídico probatorio, pues precisamente, por tratarse de una copia simple, es fácilmente alterable, máxime que los documentos idóneos para acreditar la propiedad del bienes muebles como vehículos, son la factura o título de propiedad y la tarjeta de circulación, o algún otro documentos público que constate plenamente que el bien inmueble está inscrito ante las Autoridades administrativas correspondientes y a nombre de determinada persona, y que ésta se encuentra reconocida como propietaria ante las oficinas recaudadoras, dotado de valor probatorio; sin embargo, los querellantes no allegaron a la causa tales documentales como prueba, y por lo tanto, no tienen personalidad para presentar la querella por tal es daños, la cual resulta necesaria para que el Ministerio Público, cumpliendo con el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 72 del Código Penal Vigente en el Estado, ejercitara la acción penal correspondiente. Sirviendo de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudencial cuyo rubro reza: “DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, DELITO IMPRUDENCIAL DE. QUERELLA NECESARIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA.- Toca de apelación en artículo número 115/05, relativo al Proceso 139/04, acusado A.P.O., por el delito DAÑO EN PROPIEDAD AJENA y LESIONES CULPOSOS, Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

129. PARA LA CONFIGURACION DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, ES MENESTER QUE OBRE EN AUTOS EL DOCUMENTO QUE SE DICE FALSIFICADO. En autos no se encuentra legalmente acreditada la existencia del delito de Falsificación y Uso de Documentos en General, previsto por el artículo 245 fracción III con relación al diverso 248, ambos dispositivos del Código Penal Vigente en el Estado, ni por ende la plena responsabilidad del acusado F.A.R de L. en la comisión del mismo, dado que si bien es cierto, que la C. B.G.G.G., denunció ante el C. Agente del Ministerio Público Investigador, que en fecha 30-treinta de Enero del año 2001-dos mil uno, suscribió un pagaré por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), a favor del Lic. F.A.R de L.; también es cierto, que el ilícito en comento, como elemento primordial, requiere para su configuración, la existencia de un documento verdadero, en el presente caso el denominado “pagaré” el cual asentó el de Primer Grado, que se le antepuso al número 5,000, el número “7” para que arrojara la cifra 75,000.00, y

que se llenó con dicha cantidad en letra el restó del documento, y que fue utilizado por el acusado para promover un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Sexto de lo Civil, del Primer Distrito judicial del Estado, en contra de B. G.G.G.; sin embargo, en autos no obra el original de dicho documento, ni copia certificada del mismo, sino que solamente se observa éste, en las fotografías que fueron anexadas a los dictámenes periciales en materia de Documentoscopía, que rindieron los peritos ofrecidos por el actor y la demandada, dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por F.A.R de L., en contra de B.G.G., ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, Juicio del cual obra copia certificada en el sumario; en consecuencia, no se puede afirmar válidamente que éste exista o que se trate de un documento verdadero como lo exige la disposición legal antes citada; sirviendo de apoyo a la presente resolución la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro reza: "FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, DELITO DE. NO SE ACTUALIZA LA FRACCION X DEL ARTÍCULO 165 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN AUTOS NO EXISTE EL DOCUMENTO VERDADERO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA.- Toca de apelación en definitiva 684/04, relativo al Proceso 71/03, acusado FA.R. DE L., delito FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS EN GENERAL, Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola. No siendo obstáculo para la anterior consideración, la circunstancia de que obre agregado a foja 41 de autos, informe de antecedentes penales del acusado, toda vez que del mismo no se desprende que se haya pronunciado sentencia ejecutoriada, y por ende esta Sala no se encuentra en posibilidad de determinar, que con anterioridad a este proceso el acusado de referencia haya observado un modo deshonesto de vivir. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 2/2003, relativo al Proceso Penal número 347/2000-II, intruido en contra de C. R. I. por los delitos de Ataques Peligrosos y Lesiones. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

130. PARA LA PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1813 DEL CÓDIGO CIVIL DE NUEVO LEÓN, DEBEN APORTARSE LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE UNA AFECTACIÓN EN ALGUNO DE LOS DERECHOS DE PERSONALIDAD DE LA VÍCTIMA. Cuando el artículo 144 del Código Penal del Estado, establece, entre otras cosas, que tratándose de la reparación del daño a que se refiere el artículo 143 del mismo ordenamiento legal, el monto de aquélla será fijada por los jueces tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil del Estado, está disponiendo una base o monto mínimo al cual en todo caso deberá sujetarse el juzgador para calcular el monto de la indemnización; sin embargo, en el caso de que el Ministerio Público o los interesados consideren que los daños ocasionados a la víctima son superiores a los previstos en la legislación laboral, y que debe condenarse al responsable del delito de lesiones, al pago a

su favor de la indemnización a que se refiere el artículo 1813 del Código Civil del Estado, por el daño moral causado, están obligados a aportar al Ministerio Público o al Juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales. No obstante, aun y cuando la apelante G. C. E., solicita que esta autoridad condene al acusado a resarcir a su favor el daño moral que le fue ocasionado tanto a ella como a su menor hija en mención, tal condena es improcedente, dado que no señala mediante qué probanzas se acreditó la existencia del comentado daño, dado que primeramente debió justificar la existencia del mismo, y además citar los medios convictivos mediante los cuales considera se encuentra probado éste, lo que no aconteció en la especie, máxime que en el sumario no se desahogó ninguna probanza tendiente a justificar tal circunstancia, pues ni los exámenes psicológicos practicados a las pasivos en mención, ni ningún otro elemento de convicción de los que obran en el sumario, demuestran que las víctimas de referencia sufrieran una afectación como consecuencia del hecho delictuoso en su decoro, prestigio, honor, buena reputación o en su consideración social, es decir, en alguno de sus derechos de personalidad, para que así fuera procedente la indemnización respectiva, de ahí que resulta infundado este punto del agravio planteado por la recurrente G. C. E". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva 233/2004, deducido del proceso penal 306/2001, instruido contra J. o J.A.C.D.L., por los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES A TÍTULO DE CULPA, en el Juzgado Segundo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Guadalupe, Nuevo León. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

131. PARTICIPACIÓN DIRECTA Y NO PRETERINTENCIÓN. Por preterintención se entiende que el hecho cometido por el activo provoca un resultado que va más allá de la pretensión dañina del agente, es decir, que el resultado dañino ocasionado por el activo excede de la intención del agente; para que se actualice la preterintencionalidad, es necesario que se acredite que el resultado no haya sido parte de la representación del delito; lo que no acontece en la especie pues ya se demostró que tanto el acusado así como sus coacusados ya sabían que le iban a robar al hoy occiso y dado el actuar intempestivo y con violencia física, como medio para su objetivo en cuanto a que todos estuvieron de acuerdo desde el momento en que corrieron tras la persona referida y para lograrlo lo golpearon de modo tal que ello le causó la muerte a la víctima, evidencia que este hecho se les representó como posible y no renunció; y por el contrario lo aceptó continuando con su objetivo, de ahí que sí del acuerdo para cometer el robo se emplearon como medio los golpes, de modo tal que sobrevino como resultado la muerte del ahora occiso, también le resulta responsabilidad al acusado por el deceso y al considerarse de esta manera su participación en los hechos, ello evidentemente no acredita la preterintencionalidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 159/2001, derivado del Proceso número 370-99, instruido en contra de I. V. H. por el delito de Homicidio Calificado y Robo. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

132. PELIGROSIDAD. LA NATURALEZA DEL DELITO NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE LA. La circunstancia que alega el Ministerio Público en su pliego de agravios, para que el tribunal de alzada eleve el grado de peligrosidad estimado por el A quo al sentenciado, que hace consistir en que éste es apto para entender la magnitud del daño ocasionado, y que con ello denota un desprecio total a los valores morales y jurídicos establecidos por la sociedad, deviene infundada, porque en principio, la comisión de todo delito de naturaleza dolosa presupone la conciencia en el activo de entender y querer producir el resultado dañino, por ende, también comprende el desprecio o desacato a las normas establecidas para la convivencia social, pues en ello consiste el elemento positivo de antijuridicidad de la conducta, requerido para que la misma sea considerada como delito, esto es, que la actividad del acusado es antijurídica, por cuanto se desarrolla contraviniendo el orden jurídico y social de la vida comunitaria, establecido en las normas prohibitivas del derecho penal, por lo tanto, el aspecto que menciona la Institución recurrente, no puede ser considerado como agravante de peligrosidad en la pena del inculpado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva No. 368/99, relativo al proceso número 169/98, instruido en contra de R. DE L.R., por el delito de LESIONES.- Sentencia emitida el 27 de octubre de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

133. PENA, CONSECUENCIA DE LESIONES, CASO EN QUE NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN III ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO PENAL. Si el dictamen médico definitivo que se practicó al pasivo revela que le quedó como secuela pérdida ósea de 6.5 centímetros en región Parieto Temporal derecha, con dificultad a la Marcha, por incoordinación y falta de fuerza en miembro inferior izquierdo, así como también en miembro superior izquierdo, así como de amnesia y dificultad para expresarse, por lo que le corresponde una incapacidad del 65%, según el artículo 514, en sus fracciones 245 (30%) y 241 (35%) de la Ley Federal del Trabajo. Debe entenderse que no esta incapacitado permanentemente para trabajar, ya que puede realizar alguna otra actividad que le remunere un ingreso lícito, pues no debe confundirse una incapacidad parcial permanente con una incapacidad total permanente, ya que los artículos 497 y 498 de la Ley Federal del trabajo respectivamente determinan que la incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar; mientras que la incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Lo cual revela que si el afectado hubiese resultado con una incapacidad permanente total, entonces sería de aplicación las penas previstas por la fracción III del artículo 303 del Código Penal, porque solo entonces estaríamos ante la hipótesis de una incapacidad permanente para trabajar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 75/2003, derivado del Proceso Penal número 4/02, instruido en contra de E. R. B. por el delito de Lesiones. Juzgado de Origen: Octavo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 23 de Abril de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

134. PERDÓN OTORGADO POR UN MENOR. PROCEDENCIA DEL.- Si la víctima del delito de Lesiones y Violencia Familiar es menor de edad y se encuentra unida en matrimonio con su agresor, el perdón que ésta otorga tiene plena validez jurídica porque al contraer nupcias con el acusado adquiere la emancipación, tal y como lo establece el artículo 641 del Código Civil, ya que la restricción a la que se refiere el artículo 643 del citado ordenamiento legal vigente en el Estado, es únicamente en cuanto a los bienes del menor quien durante su minoría requerirá de un tutor para la administración de ellos, pero no así para decidir en cuanto a su persona; por tanto, si la menor compareció ante el Juez de la causa para otorgar el perdón expresó a favor de su esposo, es incuestionable que está decidiendo sobre su persona, más no así en torno a sus bienes, y por ello no requería de un tutor especial para otorgar el perdón a favor de su esposo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 347/2001, relativo al Proceso Penal número 340/2001, instruido en contra de R.R.V.C. por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones. Sentencia emitida el 25 de Octubre de 2000. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

135. PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES CUANDO SE BASAN EN COPIAS FOTOSTÁTICAS. El razonamiento dado por el Órgano Técnico no es adecuado ni suficiente para destruir el fundamento en que el Juez de Primer Grado apoyó su decisión, pues aquel se concreta a indicar que existe una tesis jurisprudencial que sostiene que es posible determinar la falsedad de un documento mediante la prueba pericial practicada en una fotostática, que sea legible, cuando esto no es así, pues erróneamente invoca un criterio jurisprudencial que no resulta aplicable al caso concreto, por referirse a la hipótesis en que el Juez otorga valor convictivo al documento original, con respecto a un documento que obra en fotocopia ilegible; además reconocido es que el estudio de una firma que aparece en una fotocopia aunque sea certificada no permite analizar con mayor pericia las características de la misma, que si ésta obrara en original, o sea la firma autógrafa, pues entre otros datos no permite determinar a los peritos la presión muscular del suscriptor, al momento de estampar su firma, por lo que adquiere relevancia lo manifestado por los peritos en el área de grafoscopía de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el sentido de que no es posible realizar dicho estudio sobre copias certificadas porque las firmas o escritura pierden sus características propias y debe concluirse, como bien lo apuntó el de primer grado, que no puede hablarse en forma válida que en el contrato de compraventa multicitado existe una firma o rúbrica falsa estampada en un documento privado con el que se desprende sacar un provecho para sí y a virtud de ello, puede resultar un perjuicio a un particular y como no se acredita ello, tampoco se puede decir que se hizo uso de un documento falso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 287/99, relativo al proceso número 147/98, instruido en contra de M.T.G.B., G.H.T. Y H.V.B.., por los delitos de FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS (Los dos primeros) y FALSIFICACIÓN

Y USO DE DOCUMENTOS FALTOS (el tercero).- Sentencia emitida el 29 de septiembre de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

136. PORTACIÓN PROHIBIDA DE ARMAS, DELITO QUE NO SE ACREDITA ANTES DE LAS REFORMAS DEL 28 DE JULIO DEL AÑO 2004. La conducta desplegada por R. C. de L. P., no encuadra dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 174 en relación con el diverso 173-I, ambos del Código Penal vigente en la Entidad, toda vez que si bien cierto que el ahora acusado aceptó haber portado el desarmador al momento de ser detenido por el elemento captor; también es cierto que dicho desarmador no puede ser considerado como arma o instrumento prohibido, esto por carecer de las características propias de los objetos a que se refiere la figura delictiva de portación prohibida de armas, dado que el mencionado desarmador se trata únicamente de un objeto útil para laborar, que aún y cuando el acusado lo traía escondido, éste no deja de tener la característica de ser utilizado en actividades propias de tal instrumento, más aún que el mismo ni siquiera termina en punta para considerarlo como punzante, y mucho menos cortante o punzo cortante, pues tal como se aprecia en la diligencia de inspección ministerial, la autoridad investigadora da fe de que la punta del desarmador es plano. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 672/03, relativo al proceso número 23/02, instruido en contra de R. C. De L. P., por el delito de Portación Prohibida de Armas.- Sentencia emitida en fecha 03 de Enero del año 2005. – Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

137. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PROCEDENCIA DE LA. El artículo 139 del Código Penal vigente en el Estado, señala como base para que opere la prescripción de las acciones penales el término medio aritmético de la sanción señalada al delito de que se trate, pero en ningún caso bajará de tres años. Así mismo, el artículo 134 del mismo ordenamiento legal señala que una vez consignada la investigación a la jurisdicción, la prescripción sólo se interrumpe por las actuaciones practicadas y ordenadas por el Juez para la comprobación del delito y de la responsabilidad del inculpado y resulta aplicable la parte final del artículo 132 que a su vez expone que el término total para que opere la prescripción, nunca podrá exceder del que corresponda según el artículo 139 y una mitad más. Al análisis de estos artículos, se deviene que el tiempo de tres años que señala el primero de ellos, es un término mínimo, que solo es aplicable cuando la media aritmética de la pena no lo supera. El supuesto previsto por el artículo 134, es un caso especial en que, el Juez debió haber practicado diligencias para comprobar el delito y la responsabilidad del inculpado, condición necesaria para que al término medio aritmético de la pena se incremente en una mitad mas, de tal forma que si el Juez de la causa recibió la averiguación, y no desahogo diligencias con tal finalidad, debe tomarse la base de los tres años para que opere la prescripción de la acción penal porque en el presente caso, el objeto materia de apoderamiento fue valorizado, cuyo monto no excede de las cien cuotas

que señala el artículo 367 fracción I del Código Penal en vigor y que prevé pena de seis meses a tres años de prisión, resultando como término medio aritmético un año y nueve meses. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 59/99, relativo al proceso penal número 310/95 instruido en contra de J.C.R.T. y otros por el delito de robo.- Sentencia emitida el 8 de mayo del año 2000. Magistrado: Rodolfo Segundo Salinas Cantú.

138. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL. TÉRMINO NO SE SUSPENDE AUNQUE SE CONTINÚE PROCESO POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 132 Y 134 DEL CÓDIGO PENAL. Si bien tiene razón el órgano técnico, en cuanto a que en el expediente de donde se deriva la resolución reclamada, se han seguido practicando diligencias tendientes a la averiguación del delito de ROBO CON VIOLENCIA y la responsabilidad que en su comisión les resulta a D. F. R y J. DE J. G. C., por otro lado, no le asiste la razón en cuanto a que dichas actuaciones son de las que alude el artículo 134 del Código Penal en vigor y que por lo tanto deba considerarse lo establecido por el artículo 132 y 134 del mismo Ordenamiento Legal, lo anterior en razón de que como lo señala el propio apelante, dichas actuaciones se realizaron con el objeto de esclarecer lo relativo a la existencia del delito y a la responsabilidad del acusado, pero precisamente en relación al delito atribuido a D. F. R. y J. DE J. G. C., no en relación al indiciado J. C. C. y si bien los procesos seguidos en contra de los dos primeros, concluyó con sentencia condenatoria, ello no puede repercutir en perjuicio de J. C. C., ya que en relación a éste no se ha practicado actuación alguna ordenada por el Juez para la comprobación del delito y la responsabilidad de J. C. C., ya que en lo que a él corresponde, solo existe el dictado de la orden de Aprehensión y Detención en su contra, la que no ha sido ejecutada hasta la fecha en que el Juez dicta la resolución recurrida y el hecho de que se hubiesen practicado actuaciones posterior al dictado de dicha orden de captura, ello es en relación a dos sujetos distintos a C. C. y el hecho de que a éstos se les haya dictado sentencia de condena, no significa que J. C. C. se encuentre en las mismas condiciones, pues de ser así, resultaría inútil que al momento de que se ejecutara la orden de captura se continuara el proceso en su contra, agotando todas y cada una de las etapas procesales para determinar en su caso la comprobación del delito y la responsabilidad de C. C. es decir, si fuera como lo pretende el órgano técnico, en el sentido de que ya está averiguado lo relacionado con el delito y la responsabilidad, carecería entonces de todo sentido el agotamiento de todas las etapas procesales en los términos citados, una vez que se ejecutara la orden de captura del indiciado C. C., resultando así improcedente el argumento esgrimido en cuanto a que todo lo actuado con posterioridad a la orden de captura, deba considerarse de las actuaciones a que se refiere el artículo 134 del Código Penal en vigor, pues es claro que dichas actuaciones no tienen por objeto la comprobación del delito ni la responsabilidad del acusado J. C. C., por ende tampoco tiene aplicación en la especie la última parte del artículo 132 del mismo cuerpo de leyes, en relación con el 134. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 324/2002, derivado del

Proceso Penal número 220/98, instruido en contra de J. C. C. por el delito de Robo. Sentencia emitida el 20 de Septiembre de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

139. PRESCRIPCIÓN. REGLA GENÉRICA Y EXCEPCIÓN. Como regla genérica para que opere la prescripción de la acción penal, en términos de los artículos 124 y139 del Código Penal Vigente en el Estado, es necesario que transcurra el término medio aritmético de la sanción aplicable y una mitad más, el cual no debe ser menor de tres años, sin diligencia o actuación alguna tendiente a la comprobación del delito o delincuente, contado dicho término a partir de la comisión del delito, es decir que dicha operación es aplicable cuando no se presenta alguna de las causas que de acuerdo a los artículos 132 primera parte, y 134 del Código Sustantivo en cita, interrumpen la prescripción. De existir alguna de dichas causas de interrupción, el término comienza a contarse nuevamente a partir del día de la última actuación o diligencia. Sin embargo, en éste último supuesto se tiene la regla de excepción prevista en la parte final del mencionado artículo 132, del que se obtiene que no obstante que se hayan presentado interrupciones a la prescripción, el término total para que opere la misma lo es el previsto por el artículo 139 ya mencionado, y una mitad más, tomando en cuenta como inicio en éste cómputo, el momento de la consumación del delito, o del último acto de ejecución del mismo, y ya no la fecha de la última actuación o diligencia. Esto es así, porque se trata del término máximo que la ley previene para declarar operante la prescripción de la acción penal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 52/2001, relativo al proceso 7/93, instruido en contra de F.G.B.S., por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 9 de Marzo de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

140. PREVALENCIA DEL DICTAMEN RELATIVO AL EXÁMEN MÉDICO PREVIO PARA LA CLASIFICACION DE LAS LESIONES, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Le asiste la razón a la Representación Social, en el sentido de que hasta este momento procesal, el acreditado delito de Lesiones también se encuentra sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 303 fracción I del Código Penal Vigente en el Estado, pues si bien cierto, que del dictamen relativo al examen médico previo que fue practicado a C.D.L.C.S., por médico legista de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y de la fe ministerial respecto de las lesiones que fueron inferidas al pasivo por S.S.R., no se desprende que el referido D.L.C.S., presente una cicatriz, sino que presenta una herida cortante de 18 centímetros de longitud, que fue suturada y se extiende desde el lóbulo de la oreja, hasta la base del cuello; también es cierto, que el galeno que examinó a C.D.L.C.S., estableció en el referido dictamen médico, al hacer su clasificación médico-legal, que la lesión que éste presentó en el cuello, ya descrita, es de las que sí ponen en peligro la vida, tardan más de quince días en sanar y sí dejará cicatriz perpetua, experticia a la que el Juez Natural concedió eficacia probatoria; lo cual es suficiente hasta el momento, para determinar que dicha

herida que fue inferida por el activo al pasivo en el cuello, le dejará una cicatriz, ignorándose si será o no de indeleble permanencia, por lo que dicha opinión deberá prevalecer hasta en tanto se verifique por la Autoridad Judicial si la lesión causada dejó secuelas en el cuello del pasivo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 644/04, relativo al proceso número 37/04, instruido contra S.S.R., por el delito de LESIONES. Sentencia emitida el 24 de Noviembre del año 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

141. PRISIÓN PREVENTIVA. SU NO CONTRADICCIÓN CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DERIVA DE LOS FINES QUE PERSIGUE Y NO DE SU CARÁCTER CAUTELAR. En otro giro se llama la atención que al recepcionarse la respectiva Audiencia de Vista dentro del presente toca en que se actúa tanto el encausado... como su Defensor Particular de la misma forma expusieron diversas alegaciones que a su interés legal correspondía, las cuales en concepto de esta Sala Revisora resultan inatendibles y esto es así por las razones que en seguida se pasan a explicar: En efecto hallamos que el recurrente del medio de impugnación enfatiza en el principio de presunción de inocencia que contempla el Derecho Penal Mexicano y particularmente el Código Penal vigente en la Entidad. En virtud de lo antepuesto acontece oportuno realizar las siguientes reflexiones de índole legal: Antes de continuar con el tema a comento hay que hacer hincapié que la Autoridad Natural tuvo a bien estimar la firmeza del Auto de Formal Prisión emitido en oposición de ... por su probable participación de la comisión del flagelo social de HOMICIDIO realizado en agravio de quien en vida llevara el nombre de..., resolución de fecha 12 doce de Julio de 1996 mil novecientos y que esta Sala Revisora lo comparte. Cumplido lo expuesto se tiene lo siguiente: Fines de la prisión preventiva: Doctrinalmente se han sintetizado los fines de esta medida precautoria, distinguiéndolos en *generales* y *específicos*. Entre los primeros, cuentan: El aseguramiento de una pronta y buena administración de justicia, la garantía del orden público al restablecerse la tranquilidad social perturbada como consecuencia del delito y la posibilidad de facilitar el descubrimiento de la verdad utilizando las investigaciones cuya realización no debe verse interrumpida por el procesado. La finalidad de las medidas de coerción se vincula con: *A).- La adquisición de la verdad*. Se evita adoptando la medida cautelar cuando el imputado borra huellas, intimida o soborna a testigos o concierta con sus cómplices. B).- *El desarrollo del procedimiento.* Más que nada permite la presencia del imputado en el proceso, ya que el Código no admite el Juicio de rebeldía. C).- *La aplicación de la Ley*. Ante todo, en orden a la efectiva cumplimentación de la pena que se habrá de aplicar. Conviene precisar que estas tres finalidades tienen un claro y fuerte denominador común; *asegurar*, es decir, *garantizar* que se cumplan los fines del proceso. Entre los fines específicos del proceso se hallan: El aseguramiento de la presencia del inculpado ante su Juez durante la secuela procesal, la garantía de que, en su caso, será ejecutada la pena y el ejercicio de los derechos de defensa del inculpado; lo mismo que impedir el ocultamiento o la evasión del imputado, prevenir la comisión de nuevos delitos por el inculpado o en su contra, evitar la destrucción u ocultamiento de pruebas, vestigios,

efectos o instrumentos del delito, así como dificultar el soborno a la intimidación a funcionarios judiciales, Ministerio Público, testigos o al propio ofendido, además de obstaculizar la colusión del inculpado con sus cómplices. Por ende, la prisión preventiva, como una medida cautelar, cuyo objeto es asegurar, mediante la privación de la libertad del inculpado, el resultado del proceso penal, se justifica no tanto porque al estar acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, desde el inicio del enjuiciamiento hasta el dictado de la sentencia, tenga que aguantar los efectos de su conducta aparentemente delictiva; tampoco porque haya que segregarlo socialmente mientras se sucede el juzgamiento para evitar que delinca o para satisfacer el sentimiento público de justicia que clama la gente. La verdadera justificación de esta medida cautelar parece derivar del aseguramiento de su presencia en los actos del juicio, que de otra suerte se verían frustrados, pues enseña la experiencia que la misma naturaleza humana lleva a sustraerse de ellos, desapareciendo de la escena procesal y evitando el cumplimiento de los fines del proceso penal. Por otra parte, la misma gravedad de las penas que se asignan a los delitos en nuestra legislación penal insta a excusar la prisión preventiva, con la creencia de que esa sola circunstancia será suficiente para resolver el problema de la delincuencia poniendo fin a la impunidad; además de utilizar la prisión cautelar como regla y no como una excepción, todo lo cuál estimula el interés por escapar de las consecuencias del delito. Prisión sin juicio. Se ha argumentado también que la prisión preventiva es una privación de la libertad sin previo juicio que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, a esta manifestación se opone, quizá con razón, que el artículo 18 de la propia Constitución autoriza esa forma cautelar de privación de la libertad para quienes se hallen procesados por delitos que merezcan pena de prisión; de tal modo que esa medida constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa y al principio de presunción de inocencia, ya que su propósito se finca en preservar el desarrollo del proceso, garantizar la ejecución de la pena y evitar un probable daño al ofendido y a la sociedad. Por lo anterior que aparezca inatendible la defensa hecha valer sobre el específico por el demandante de la apelación, toda vez que dadas las razones puntualizadas ninguna duda cabe a fin de llegar al pleno convencimiento de establecer que la prisión preventiva, la que según se dejó explicado con antelación en el caso concreto perdura y no se contradice con el principio de presunción de inocencia en razón de los fines que persigue aquella decisión de auto cabeza de proceso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. DECIMA SALA PENAL. Toca de apelación en artículo 438/2003, relativo a la causa penal número 45/96, instruida a... por el delito de HOMICIDIO, Interlocutoria de fecha 19 diecinueve de Febrero de 2004 dos mil cuatro. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

142. PROBABLE RESPONSABILIDAD. VALOR DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El material probatorio, valorado y concatenado al tenor de los dispositivos legales antes invocados, en concepto del que ahora resuelve, es suficiente para acreditar el delito de ROBO cometido en perjuicio de la entidad Crediticia, como la probable participación del acusado en la comisión del mismo y, para arribar a dicha

conclusión, se emplea el mecanismo de la prueba circunstancial o indiciaria, la cual se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, un dato para complementar, una incógnita para determinar, o una hipótesis para verificar, sobre la materialidad del flagelo social y acerca de las circunstancias de los hechos incriminados, puesto que son parte de los acontecimientos probados y conocidos, consistentes en que, en oposición del inculpado, se levantan las probanzas anteriormente enunciadas, esto es, la denuncia interpuesta ante la Autoridad Investigadora por el afectado, como los atestos vertidos por los respectivos testigos, el dictamen contable practicado en la Institución Crediticia afectada, como las documentales internas practicadas por el personal de tal entidad Bancaria, los cuales se tienen por presentes para evitar repeticiones fútiles y que fueron debidamente analizados y valorados conforme a Derecho; desprendiéndose entonces, que estas pruebas, señalan al acusado como probable responsable de la comisión del delito de ROBO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA.- Toca en artículo 58/2005, proceso número 256/2002, instruido en contra de M.A.V.R. por el delito de Robo. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

143. PRUEBA PERICIAL. SI NO CONTIENE EL FUNDAMENTO DE SUS CONCLUSIONES, EL JUZGADOR PUEDE NEGARSE A ADOPTARLA COMO PRUEBA. Es cierto que a la autoridad jurisdiccional, no le corresponde cuestionar o emitir juicios acerca de las técnicas o métodos aplicados por los peritos en sus dictámenes, porque escapa a sus conocimientos, sin embargo, no debe caerse en el extremo de pensar que la prueba pericial goce de un valor probatorio *per se*, ya que, atendiendo a su naturaleza, como lo han afirmado los Tribunales Federales, la peritación constituye una actividad procesal encargada a personas especialmente calificadas por sus conocimientos artísticos o científicos, a efecto de suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre los hechos que se tratan de verificar, por lo que acorde a lo dispuesto en el numeral 251 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones; si el perito se limita a emitir sus resultados, sin explicar las razones o circunstancias que lo llevaron a emitir su dictamen, el mismo carecerá de eficacia probatoria, evaluación la cual le corresponde al Juzgador apreciar, y en uso de las leyes de la lógica y de la sana crítica, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente. Bajo la citada directriz, y una vez analizada en su integridad la pericial en psicología, practicada a la acusada, esta Sala la estima carente de valor probatorio, basado en que las conclusiones a las que arribó el especialista respectivo, no se encuentran sustentadas por la información capturada en el dictamen, ya que, no se advierte ninguna sesión de preguntas y respuestas, como lo supone una auténtica *entrevista* (el método y la técnica empleada fue la entrevista clínica, como se advierte del propio dictamen), que haya motivado las anotaciones vertidas en el apartado número sexto de la experticia, es decir, no se aprecia cuales fueron los datos o circunstancias que

determinaron un estado de ánimo *ansioso* y *temeroso* en la pasivo, entre otras anotaciones; en consecuencia, tampoco está claro por qué el daño psicológico, que refiere el perito sufre la ofendida, se encuentra asociado a los hechos de la denuncia; en este orden de ideas, atento a lo dispuesto en el numeral 319 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, no se requiere ser experto en psicología, para apreciar que las circunstancias del presente caso (a saber, que la acusación se basa sobre un daño psicológico y no físico, pues el examen médico previo no arrojó indicadores de lesiones físicas), exigen que los peritajes denotaran y fundamentaran una condición de carácter *interno*, como lo es la existencia de un daño psicológico en la agraviada, circunstancia la cual deviene imposible, sin un procedimiento tendiente a indagar el estado de la *psique* de la persona afectada por la conducta delictiva." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA. Toca en artículo 271/2005, proceso número 43/2005, instruido en contra de A.G.H. por el delito de Violencia Familiar. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

144. PRUEBA SUPERVENIENTE, CONCEPTO DE. Si de las constancias que tienen fuerza de atestado, se aprecia que los inconformes en infinidad de ocasiones tuvieron acceso al expediente, y no es sino hasta en la etapa de juicio, donde solicitan el desahogo del medio de convicción que se viene hablando, como prueba superveniente, resulta evidente que tal probanza no reúne esta exigencia, pues por ella se entiende lo que nace después de que se fijó la litis (que en la especie consiste en el auto cabeza del proceso), y si bien el artículo 356, del Código Procesal Penal vigente en la Entidad, hace referencia a la posibilidad de que las partes rindan pruebas durante el desahogo de la Audiencia de Vista, lo cierto es que debe entenderse por aquellas las conocidas por las partes, con posterioridad al Auto de Formal Procesamiento, que sobrevienen después de esa etapa procesal, pues el legislador estableció en esas reglas legales, que la parte interesada tiene el derecho de rendir todos aquellos elementos demostrativos que persigan la finalidad de acreditar los hechos por ella alegados que conforma la litis, con objeto de no privarla de su defensa; sin embargo, sucede en el caso, que la resolución de bien preso decretada en contra del encausado..., se dictó el día 22 veintidós de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete, en tanto que la documental expedida por la mencionada dependencia Municipal, precisa una solicitud de la renovación del permiso de demolición y construcción, del evento siniestrado el 28 veintiocho de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, y además, el proveído dictado por la Autoridad de primer grado, para acceder a la solicitud del licenciado..., en calidad de apoderado del..., y del Ministerio Público Adscrito, es de fecha 15 quince de agosto de 1997 mil novecientos noventa y siete; deviniéndose de estas últimas actuaciones, que las mismas se practicaron y aparecen con fecha anterior al auto de prisión preventivo, es decir, que la parte inconforme tenía conocimiento de la existencia de la circunstancia que nos ocupa, o sea, los trabajos de aseguramiento, estudios, planes y reparación, del edificio del...; lo que evidencia que no se trata de una probanza del carácter comentado; así es que por ese motivo, el actuar del Juez de origen, no irroga violación procesal alguna en perjuicio de los inconformes, al desechar el medio de convicción del que se hizo referencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 73/2001, formado con motivo del recurso interpuesto por el acusado y su defensor particular, contra el Auto en que le fueron desechadas las probanzas, decretado por el C. Juez Primero de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro de la Causa Penal número 380/97-A, instruida a... por los delitos de Homicidio y Lesiones de naturaleza culposos. Sentencia emitida el 17 de Septiembre del año 2001. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

145. PRUEBA TESTIMONIAL, INDEBIDO APERCIBIMIENTO EN LA. No existe disposición del Código Procesal Penal vigente en el Estado, que autorice al Juzgador para apercibir al procesado o a su defensor de tener por no ofrecida la prueba testimonial cuyo desahogo se solicita, en caso de no presentar a los testigos, pues si bien en la fracción I del artículo 49 del Código Procesal en consulta, se contempla el apercibimiento, ello es solamente como corrección disciplinaria cuando se comente una falta, más no para desechar pruebas, pues en el caso de haberse omitido la presentación de testigos, el Juez natural debe actuar en los términos de la fracción V del artículo 20 de la Constitución General de la República, que preceptúa "Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la Ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso". Para lo cual está obligado, acorde además con lo dispuesto por el artículo 51 de la legislación procesal invocada, a emplear los medios de apremio, que al efecto le faculta dicho numeral, con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 301/98 relativo a los Procesos Acumulados Números 330/97 y 341/97, instruidos en contra del acusado J.L.R., por el delito de FRAUDE Y OTRO .- Sentencia emitida el 20 de enero de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

146. PRUEBA TESTIMONIAL. SU ANÁLISIS Y VALORACIÓN EN EL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. La disposición del artículo 275 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, en el sentido de que "el valor probatorio del testimonio se calificará en sentencia", no puede ser interpretada como una limitante al arbitrio judicial en cuanto al análisis de la prueba testimonial en resoluciones como la recurrida, pues este Tribunal, considera que la prevención legal en estudio, se encamina mas bien a la imposibilidad del órgano jurisdiccional de prejuzgar sobre la pertinencia o impertinencia de las pruebas durante el período de instrucción, por lo que no es hasta la sentencia cuando está facultado para hacer las apreciaciones que quiera, sin embargo, una vez recibidas las pruebas, el Juez está en aptitud de analizarlas para determinar lo conducente a las cuestiones que se le planteen, máxime si como lo es en el caso a estudio, se trata de análisis de pruebas de descargo para decidir sobre la procedencia o improcedencia de un Incidente de Libertad por

Desvanecimiento de Datos, ya que proscribir la valoración de pruebas de ese tipo, tratándose del capítulo de la responsabilidad probable, por la sola presencia de indicios de incriminación, es contrario a la fracción V del artículo 20 constitucional, elevada al rango de garantía individual, pues en la misma se consigna la obligación de recibir del indiciado las pruebas que ofrezca en su defensa, lo que entraña la propia obligación de valorarlas, ya que la recepción de pruebas no puede concebirse sin la finalidad obvia de su apreciación, de modo que la autoridad está obligada a examinar todas y cada una de las pruebas que ofrezca el inculpado de descargo. Por lo tanto, las pruebas testimoniales de descargo deben ser debidamente analizadas en la resolución de la incidencia planteada, pues de no hacerlo así, no se cumpliría con los requisitos de legalidad que exigen el artículo 16 Constitucional y 103 del Código Adjetivo de la Materia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 40/2000, relativo al proceso penal número 178/99, instruido en contra de A.L.D.L.D.L., por el delito de privación ilegal de la libertad. Sentencia emitida el 6 de marzo del 2000.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

147. QUERELLA PRESENTADA EN REPRESENTACIÓN DE PERSONA FÍSICA O MORAL. SE REQUIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON CLÁUSULA ESPECIAL PARA FORMULARLAS. Tenemos que O. S. R. dijo ser Apoderado para Pleitos y Cobranzas de S. J. M. F. R. y con tal carácter presentó ante el C. Agente del Ministerio Público escrito de formal querella en contra de E. G. L. C., por los daños materiales que narra sufrió el vehículo propiedad de la referida F. R. en el evento vial que nos ocupa; sin embargo para justificar su personalidad allegó a la causa copia certificada de un poder que en su favor otorgaron la C. S. M. F. R. y J. R. L., de fecha 21-veintiuno de Abril del año 2001, pasado ante la fe del Notario Público número 73, con ejercicio en esta ciudad; más de la lectura de dicho poder se advierte que éste no fue otorgado con cláusula especial para formular querellas como lo exige el numeral 130 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, el cual señala: “Las querellas formuladas en representación de personas físicas o morales, se admitirán cuando el compareciente lo haga con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial para formularlas....”; y considerando que el artículo 72 del Código Penal Vigente en el Estado, establece que el delito culposo de Daño en Propiedad Ajena a que se refiere el artículo 402 de este Ordenamiento, es perseguible a Instancia de Parte, ello hace necesaria la presentación de una querella por quien es el propietario, o su legítimo representante, sin embargo, en el caso concreto, quien presenta la querella es el C. O. S. R., quien si bien según se desprende del poder que le fue otorgado, tiene facultades para en nombre y representación de J. R. L. y S. J. M. F. R., acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Tesorería General del Estado y Dependencias Municipales y realizar cualquier trámite fiscal y contable en relación con su condición de contribuyentes, pudiendo para tal efecto firmar cualquier solicitud, inconformidad, altas o bajas, impugnar resoluciones, firmar declaraciones, solicitar información, presentar recursos, celebrar convenios y en fin realizar cualquier gestión

relacionada con su relación de contribuyentes ante las dependencias citadas; no cuenta con un Poder General para Pleitos y Cobranzas con cláusula especial para formular querellas, como lo exige la Legislación Procesal de la Materia, y por lo tanto, en la especie no está debidamente acreditada su personalidad para querellarse en nombre y representación de S. J. M. F. R., ni por ende se surte el requisito de procedibilidad de la querella, por la parte ofendida, la cual es necesaria para perseguir el delito de daño en propiedad ajena por culpa. Sirviendo de apoyo para la presente determinación las siguientes tesis de jurisprudencia: *"QUERELLA NECESARIA. Quinta Epoca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CXIX, Página: 3755."* TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 728/03, relativo al proceso número 7/02, instruido en contra de E. G. L. C. por el delito de Daño en Propiedad Ajena por Culpa. Sentencia emitida el 29 de Marzo de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

148. RAPTO. RETENCIÓN, COMO TOMA DE POSESIÓN DE LA MUJER, FORMA DE MANIFESTARSE. Consiguientemente, de los anteriores elementos de convicción reseñados, que son reconocidos por la Ley como medios de prueba, y tienen valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 181, 196, 219-II, III y V, 224, 225, 226, 237, 239, 240, 245, 273, 274, 275, 297, 310, 313, 314, 319, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 del Código Procesal Penal Vigente en la Entidad, se deviene, particularmente siguiendo los lineamientos de la prueba presuncional o circunstancial, es decir arribar a una verdad desconocida, por medio de indicios que en su conjunto adquieren el carácter de prueba plena, enmarcada por el precitado numeral 325 de dicho Ordenamiento Legal, como ya se dijo, realizando un enlace lógico y natural, entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, que en el caso de la especie se llega a la conclusión y certeza jurídica de establecer, como acertadamente lo precisa la representación Social, en su escrito de Agravios, que ..., el día 8 ocho de Enero del año 2000 dos mil, al encontrarse en el interior del domicilio ubicado en la calle Constitución Federal número 609 de la colonia Vicente Guerrero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y particularmente para amanecer al día siguiente, se apoderó de la menor ..., quien en esa época contaba con quince años de edad, a través de la seducción, para el efecto de satisfacer el primero un deseo erótico sexual. Esto es, que en el caso analizado, la existencia del flagelo social aparece consumado pues se objetivizó la lesión al bien jurídico tutelado por la norma legal (libertad de las personas), agotándose desde el momento en que se logra la retención de la mujer, en la especie la menor..., a efecto de satisfacer un deseo con la característica precisada, ya que sobre el particular es pertinente llamar la atención que en general, por apoderamiento de la mujer se entiende la conducta del infractor de ponerla bajo su dominio o control, bajo su potestad personal, privándola del medio y circunstancias de su vida ordinaria; ésta toma de posesión trascurre en un tiempo más o menos prolongado, pero se consuma en el momento mismo en que el raptor ha logrado su segregación; puede manifestarse de dos diversas maneras que, aún cuando en ellas la conducta varía, dan el

mismo segregativo resultado*: a) En forma de sustracción; o, b) De retención. En esta última forma de apoderamiento se supone que la mujer se encuentra accidentalmente o por cualquier motivo en sitio a ella ajeno y cerca de infractor; la acción consiste en privarla física o psíquicamente de su libertad por la violencia, el fraude, o como en el caso analizado, la seducción, impidiéndole el regreso a su ambiente de vida familiar y ordinaria. Es decir, que el elemento subjetivo del injusto (el dolo), por parte del agente activo del delito aparece justificado de manera* circunstancial con el cúmulo de las anteriores probanzas debidamente detalladas y valoradas conforme a derecho, pues no pasa inadvertido, que en la especie opera la presunción en contra del encausado ..., de haber materializado el rapto en contra de la menor ..., a través de la seducción, toda vez, no hay duda que ésta en el momento de la comisión del evento era menor de dieciséis años de edad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DECIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 18/01, relativo a las causas penales acumuladas números 191/2001 y 296/2002, instruidas en contra de E. A. O. S., por los delitos de Rapto y Otro. Sentencia emitida el 18 de Junio de 2002. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

149. REGLAS DEL CONCURSO. BASTA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRECISE LA CAUSA DE PEDIR, PARA QUE TENGAN APLICACIÓN. Debe de aplicarse lo referente a los artículos 76 con relación al 36 artículos los anteriores del código penal vigente en el estado, por encontrarnos en un caso de concurso real de delitos, ya que se cometieron varios delitos en actos distintos, y no se ha pronunciado antes sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no está prescrita, con referencia a los delitos de robo en perjuicio de las sujetos pasivos *M.* E.G.de G. y A.M.F. de M. así como el delito de cohecho que se le imputa E.S.O. ya que si bien esta Sala había sostenido que los concursos deben de fundamentarse y motivarse, dicho criterio ha sido superado conforme al criterio que a su vez ha sostenido el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Cuarto Circuito al establecer en el amparo directo numero 65/2004, cuyo quejoso lo es R.C.A. de fecha 28 de abril del año que transcurre, que al solicitar la aplicación de la pena el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad y por lo mismo basta que precise la causa de pedir, dejando patente la pretensión punitiva de sancionar, para que la autoridad judicial en ejercicio de sus facultades y en uso prudente de su arbitrio determine la sanción correspondiente conforme a la ley. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 74/04, derivado del Proceso número 99/99, instruido en contra de E. S. O. O. G. S. y J. G. J. por los delitos de Robo y Cohecho. Sentencia emitida el 13 de Mayo de 2204. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

150. REINCIDENCIA. REQUISITOS PARA QUE EXISTA LA. Para acreditar el carácter de reincidente es necesario que en la causa se cuente con copia certificada, tanto de la resolución definitiva que dará origen a ese carácter, como del auto en el que causa ejecutoria; para que a partir de ese supuesto se analice la figura de la reincidencia, por lo

que tiene razón la defensa al afirmar que al no contar en la causa con esos documentos, es imposible aumentar su condena, por el carácter en comento. Es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que señala: "REINCIDENCIA. INFORME DE ANTECEDENTES PENALES ES INSUFICIENTE PARA JUSTIFICARLA. Si la autoridad responsable para acreditar la reincidencia del acusado, tomó en base al informe de antecedentes penales, en el que se asentó que al procesado se le impuso una pena corporal por haberlo encontrado responsable por un delito diverso, documento que si bien alcanza el rango de público, dicho informe no es apto ni suficiente para justificar la reincidencia del sentenciado, en virtud de que el medio eficaz para acreditar tal extremo lo constituye la copia autorizada de la sentencia anterior, así como el auto que la declara ejecutoriada, por ser los únicos testimonios apropiados para dilucidar si en el asunto sometido a juicio se cumple con las exigencias que hacen operantes la figura jurídica de la reincidencia; de modo que si el órgano acusador omitió aportar los indicados medios de prueba es claro concluir que no debe tenérsele al acusado como reincidente. Tesis IV.3º.J/33, Tomo 74, Febrero 1994. Página 61.- Jurisprudencia 213341.- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 123/99, relativo al Proceso Número 524/98, instruido en contra de A.N.P., por el Delito de ROBO.- Sentencia emitida el 19 de mayo de 1999.- Magistrado: José Manuel López Valero.

151. REINCIDENCIA. SU ACREDITACIÓN PUEDE REALIZARSE CON LAS COPIAS AUTORIZADAS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS ANTERIORES, ASI COMO DE LOS AUTOS QUE LAS DECLARAN EJECUTORIADAS, O POR OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA, QUE VALORADOS EN SU CONJUNTO LA ACREDITEN DE MANERA INDUBITABLE. Sobre el particular debe subrayarse que se elevan motivos de inconformidad por parte de la Representación Social los cuales y como ya se dijo son fundados pero insuficientes para acceder a sus pretensiones es decir estimar al sentenciado... con el carácter de reincidente, y esto es así en virtud de las siguientes consideraciones de orden legal: Que la visión retrospectiva sobre el tema que nos ocupa llevaron a reflexionar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la Contradicción de Tesis 83/97 entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (hoy primer Tribunal) que para efectos de acreditar la figura jurídica de la reincidencia, la prueba idónea será la copia de la sentencia condenatoria y el auto mediante el cual se declara ejecutoriada, pero debiendo advertir, que no es el único medio eficaz para constatar dicho extremo, sino que también lo constituyen otros, que adminiculados lleven a la convicción de que se cumplieron las exigencias requeridas por dicha figura procesal. En efecto, para acreditar la figura jurídica de la reincidencia, el punto neurológico lo constituye la sentencia y el auto mediante el cual se declara ejecutoriada, pues es precisamente la copia certificada de estas constancias, el documento escrito en el

cual el órgano jurisdiccional plasmó la pretensión punitiva del Estado, dado que un sujeto llevó a cabo una conducta típica, antijurídica y culpable. Mas sin embargo, no es el único elemento de prueba que pueda acreditar la figura jurídica de la reincidencia, ya que existen otros elementos, que valorados en su conjunto, pueden crear convicción, como podrían ser las certificaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales instructores, los informes rendidos por las autoridades encargadas de ejecutar las penas, así como la declaración del sujeto activo. Ahora bien, las pruebas aportadas por las diversas autoridades, en forma aislada, son insuficientes para acreditar la reincidencia, dichas pruebas podrán tener el rango de documento público, pero necesariamente tendrán que ser adminiculadas con otras probanzas para acreditar la figura jurídica en comento de manera indubitable... No obstante lo anterior según se dejó explicado aún y cuando le asiste la razón al Órgano Técnico Acusador en el aspecto que nos ocupa, en la especie no existen elementos de convicción suficientes para proceder de la manera puntualizada pues si bien es cierto que de los autos de la causa de origen a fojas 21 y 22 aparece el informe de antecedentes penales con que cuenta... y del que destaca que fue objeto de un fallo de condena consistente en cinco años seis meses de cárcel y multa de $648.13 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M. N.) o en su defecto treinta días de trabajo en beneficio de la comunidad a partir del día 5 cinco de Agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco por parte de la Cuarta Sala de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca penal número 63/96 relativo al proceso penal 258/95 instaurado por el C. Juez Primero de lo Penal por el flagelo social de ROBO CON VIOLENCIA; no menos verídico lo es también que se carece del dato trascendental a cerca de la fecha de la resolución de segunda instancia o sea del antecedente de la resolución que causó estado, lo anterior para estar en condiciones de realizar el cómputo correspondiente pues no pasa inadvertido que el fenómeno jurídico a comento opera cuando una persona comete un nuevo delito si no ha transcurrido desde que cause ejecutoria dicho fallo un término igual al de la prescripción de la pena, según se obtiene de la simple lectura del artículo 43 del Código Penal vigente en la Entidad; siendo exacto matizar que no aparecen diversos medios probatorios que se adminiculen con el reseñado informe de antecedentes penales como podrían ser las certificaciones efectuadas por los Órganos Jurisdiccionales Instructores, las noticias enviadas por las Autoridades encargadas de ejecutar las penas, incluso la declaración del encausado pues de la preparatoria solamente obtenemos que al ser cuestionado sobre este aspecto sin más explicó: "... Que es la "Si" vez que se le procesa...". Así pues que se estime como insuficiente el agravio elevado por la Representación Social ante la carencia de material probatorio suficiente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 426/2002, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial del sentenciado y el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Origen, contra la Sentencia dictada por el C. Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad, dentro de la causa penal número 299/97-B, instruida a... por el delito de Allanamiento de Morada. Definitiva de fecha 16 de Enero de 2003. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

152. REPARACIÓN DEL DAÑO, AUN CUANDO NO SE HAYA EROGADO LA CANTIDAD SEÑALADA. PROCEDE LA. No basta para determinar en la sentencia, la negativa a la condena a la reparación del daño causado, la circunstancia de que la ofendido no haya erogado efectivamente la cantidad señalada en un presupuesto exhibido y ratificado en autos, referente a la cuantía de los honorarios para la realización de cirugía correctiva de nariz por desviación septal de tabique nasal que se necesita practicar con motivo de la lesión inferida, toda vez que se dejaría en estado de indefensión a los sujetos pasivos del delito, que por su precaria situación económica, no pudiere adquirirla, previamente al dictado de la sentencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 684/2002, derivado del Proceso Penal número 329/00, instruido en contra de L. A. H. B. y M. B.M. por el delito de Lesiones. Juzgado de Origen: Sexto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 24 de Enero de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

153. REPARACIÓN DEL DAÑO. CONDENA DEBIDA AUNQUE PASIVO SEA DERECHOHABIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Se condenó correctamente al acusado al pago de la cantidad de $73,655.00 y para ello se tomó en cuenta la constancia expedida por el Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que se desprende que esa es la cuenta pendiente de liquidar en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de la atención del pasivo con motivo de las lesiones que sufrió.- Lo anterior porque se advierte que efectivamente a dicha cantidad ascienden los gastos de atención médica que recibió el pasivo con motivo de las lesiones que le infiriera el acusado y por lo tanto dicha documental se encuentran estrechamente vinculada con los hechos delictuosos que nos ocupan, además el hecho de que el afectado sea asegurado no exime de responsabilidad al acusado respecto de la reparación del daño, pues el propio artículo 141 del Código Penal en vigor, prevé que el responsable de un hecho delictuoso lo es también del daño y perjuicio causado, de ahí que se deba condenar al acusado al pago de la cantidad aludida, teniendo aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: “Novena Época .Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: III, Marzo de 1996.-Tesis: XX.57 P.-Página: 1010.- REPARACIÓN DEL DAÑO. AUN CUANDO EL SUJETO PASIVO HAYA SIDO DERECHOHABIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO EXIME AL ACTIVO DEL PAGO DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Tratándose de la reparación del daño, no afecta en nada a la esfera jurídica del quejoso la circunstancia de que el sujeto pasivo hubiera sido trabajador y que por ello pudieran sus deudos ser indemnizados de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, supuesto que aún cuando esto resultara cierto, no por ello se liberaría al acusado de cubrir la reparación del daño que causó, pues tal reparación tiene el carácter de pena pública y sería desquiciante del orden jurídico admitir que el efecto producido por el pago de una indemnización de parte de la institución en comento, pudiera dejar sin vigencia las disposiciones de orden público que establecen la

obligación del reo de reparar el daño. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo Directo 876/95. Adán Pérez Vázquez. 11 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA.- Sentencia de fecha 10-diez de Enero del 2005. Toca en Def. No. 498/2004. Proceso No. 170/2003, Acusado Y. E. H. G.- Delito: LESIONES CALIFICADAS, ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA DETERMINADO Y SANCIONADO CON LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 367 DEL CODIGO PENAL, CUANDO NO EXISTE VALUACIÓN DEL OBJETO MUEBLE, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MINISTERIO PÚBLICO. En lo que respecta a la sanción a aplicar por el delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, debe atenderse al objeto que sería materia de apoderamiento y que consiste en un vehículo de alquiler volkswagen, sedán, modelo 1995, color verde con blanco, placas de circulación 1440-MKF de la Entidad, por su naturaleza es susceptible de ser cuantificable de manera intrínseca, al encontrarse en constante circulación en el mercado; además para estimar la cuantía del robo no es indispensable tener a la vista el objeto para determinar su valor intrínseco, según lo dispone el último párrafo del artículo 367, del Código Penal del Estado, por lo tanto la falta del dictamen de valuación correspondiente es una deficiencia imputable al Agente del Ministerio Público, al no promover y perfeccionar la prueba conducente a la fijación correcta del valor del bien mueble materia del delito; si el objeto producto del robo no fue debidamente valuado fue por omisión del Ministerio Público quien tenía la obligación de allegar al juicio las pruebas conducentes para apoyar su acusación. En esas condiciones lo que procede, es lo que más favorece al acusado, sancionarlo por su responsabilidad en la comisión del delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, con la pena contemplada en el artículo 367 fracción I del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA.- Toca en Definitiva número 294/2004, instruido contra R. L. R. por el delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, derivado del proceso 288-2003, ante el C. Juez Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

154. REPARACIÓN DEL DAÑO. CONDENA EN BASE A UN PRESUPUESTO. Debe de condenarse al acusado al pago de la cantidad de $1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en base al presupuesto que obra en autos, documental que fuera ratificada, por lo que la misma adquiere eficacia jurídica conforme al artículo 317 del Código de Procedimientos Penales en vigor y que además tiene relación directa con los hechos delictuosos que nos ocupan, amen de que no debe pasar por alto que el derecho a la reparación del daño a que cualquier víctima de un delito goza, se convirtió a raíz de diversas reformas al artículo 20 Constitucional en una garantía individual, tratando de esta manera de salvaguardar y proteger los intereses de todo gobernado afectado por la comisión de un ilícito, así, al artículo 20 constitucional, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, se le modificó su párrafo inicial y la fracción IV, para agrupar su

contenido en dos apartados, el “A” en el que se contienen los derechos de las personas sujetas a un proceso de carácter penal, y el “B” en el que se consignan los derechos de las víctimas de un delito. Debiendo tomar en cuenta así mismo que la finalidad protectora que inspiró el contenido de las reformas al artículo 20 Constitucional, resulta más que evidente que la reparación del daño no puede comprender únicamente los gastos erogados por el pasivo del delito, sino que en dicha reparación debe incluirse el costo de todos los tratamientos curativos que sean necesarios para la recuperación total de la salud del ofendido, inclusive los que aún estén por pagarse; pues inclusive la legislación sustantiva penal, señala que la reparación material del daño debe incluir el pago del tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-sicológica del afectado, pues sólo de esta forma se conseguiría la finalidad pretendida por el constituyente al establecer como una garantía individual de la víctima la reparación del daño, la cual no puede ser de otra forma que, restableciendo la situación del afectado al estado en que se encontraba antes del delito, teniendo aplicación la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Página 1136, bajo el número l.7o.P.19 P, cuyo rubro es: “REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES PRIVADAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LOS GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA SU CONDENA”. Consecuentemente, tiene razón la parte afectada en cuanto a que debe condenarse al acusado al pago de la cantidad de $1,800.00 pesos, que ampara la documental a que se ha hecho referencia, a pesar de que se trata de un presupuesto y que la persona que lo ratificara manifestara que no ha sido pagada esa cantidad y que no se realizó el trabajo, ya que es claro que el presupuesto es en relación al tratamiento que requiere la parte afectada con motivo de la lesión que le infiriera el acusado, de ahí que sea válido condenarlo al pago de dicha cantidad, pues de no hacerlo, se haría nugatoria la garantía constitucional referida, pues se dejaría en estado de indefensión a la pasivo del delito, que por su precaria situación económica o cualquier otra circunstancia, no estuviere en posibilidades de sufragar el referido gasto médico, antes del dictado de la sentencia, al respecto tiene aplicación el criterio del Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216, Sexta Parte, en la Página 433, cuyo rubro es: “REPARACIÓN DEL DAÑO. AUN CUANDO NO SE HAYA EROGADO LA CANTIDAD SEÑALADA, PROCEDE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)”. Máxime, que no existe precepto legal alguno en el que se exija como requisito para la condena a la reparación del daño que todos los gastos hayan sido previamente liquidados, pues lo que en verdad es necesario, es que durante la instrucción, se aporten al Juez los elementos suficientes para demostrar la necesaria vinculación de la lesión materia del proceso con el tratamiento médico, que éste sea necesario y además el costo de las intervenciones a realizar, así el juzgador contará con los medios para determinar la cantidad realmente necesaria para reparar el daño ocasionado, sin que pase por alto que dicho presupuesto no fue objetado en forma alguna por el acusado y su defensor, de ahí que tenga eficacia jurídica para emitir condena en contra del acusado en los términos anotados, teniendo aplicación en relación a esto el criterio del Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Sexto Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, a página 770, y bajo el número Vl.P.29 P, cuyo rubro es: "REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS MERECEN EL VALOR DE PRUEBA PLENA, PARA EFECTOS DEL PAGO, CUANDO ÉSTOS NO SON OBJETADOS Y SE ENCUENTRAN ADMINICULADOS CON OTROS DATOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Además de que la naturaleza de la lesión inferida a la pasivo del delito, requiere de dicho tratamiento, pues de acuerdo al dictamen médico previo número 53736, se desprende que la afectada presenta dolor en el incisivo inferior con fractura del mismo y del dictamen definitivo con folio 1200, se desprende que la pasivo en cuestión presenta como secuela fractura de incisivo central inferior, por lo que obvio resulta que el tratamiento que se refiere al presupuesto de fecha 20 de Agosto del 2003-dos mil tres, no resulta innecesario en este momento, sino que por el contrario, el mismo resulta indispensable para volver al estado de salud en que se encontraba la afectada antes de los hechos en donde fue agredida por el acusado." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 09-nueve de Noviembre del 2004-dos mil cuatro. Toca en DEFINITIVA número 435/2004. Proceso penal número 266/2003, instruido a P.J.R.M., por el delito de LESIONES. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui

155. REPARACIÓN DEL DAÑO. CORRESPONDE AL JUZGADOR FIJARLA. POR LO QUE PUEDE ANALIZAR PRUEBAS NO CITADAS POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La naturaleza de la reparación del daño exigible al delincuente tiene el carácter de sanción pública, como así lo establece el artículo 41 del Código Penal del Estado de Veracruz, lo que necesariamente conduce a considerar que su imposición corresponde al juzgador, de acuerdo con la valoración de las pruebas existentes en el sumario; sin que sea obstáculo que el agente del Ministerio Público no indicara en su correspondiente pliego acusatorio los medios de convicción que la justifiquen, pues basta que al respecto la haya solicitado en sus conclusiones para que el Juez del proceso se abocara legalmente a su análisis. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Diciembre de 2001- Tesis: VII.2º.P.27 P. Página 1800. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 545/03, relativo al proceso número 158/03, instruido en contra de S. O. P o L. L. D. por el delito de Lesiones. Sentencia emitida el 30 de Abril de 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

156. REPARACIÓN DE DAÑO. LÍMITE PARA EL ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD PARA SU RECLAMACIÓN. Por lo cual se condena por concepto de reparación del daño material y moral al acusado a pagar a favor del Erario del Estado, a fin de que sea empleado para el mejoramiento del sistema integral de justicia, en términos

de lo dispuesto por la parte final del artículo 143 del Código Penal vigente en el Estado, dado que de autos no se deviene que persona alguna haya justificado tener derecho a reclamar su importe, puesto que antes de la sentencia la compareciente no acreditó con documento idóneo tener el carácter de parte civil, de ahí que no se deviene habérsele tenido como coadyuvante del Ministerio Público para los efectos de la reparación del daño, puesto que es de explorado derecho conforme a lo previsto por el artículo 8 del Código de Procedimientos Penales y 143 última parte del Código Penal vigente en el Estado, que si bien es cierto, que el ofendido puede comparecer en el proceso a manifestar lo que a su derecho convenga, entre otras cosas respecto a la satisfacción de la Reparación del Daño, también lo es que debe de presentarse ante el Juzgador acreditando plenamente tener derecho a reclamar su importe, para así determinar lo correspondiente en la sentencia, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo 20 de la Constitución, es el caso declarar improcedente el derecho a la reparación del daño a favor de la compareciente puesto que no acreditó el parentesco con la hoy occisa; no siendo obstáculo que posterior a la sentencia el Ministerio Público pretendió acreditar dicho parentesco allegando una acta del registro civil, toda vez que el a quo acordó que con el mismo no acredita ningún tipo de parentesco con la ahora occisa, amen de que es de explorado derecho que conforme al artículo 237 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, tratándose de la prueba documental señala como límite para su presentación antes de que se declare visto el proceso, no deviniéndose que se hubiera cumplido con el requisito señalado en la segunda parte de dicho numeral. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 188/2000, relativo al proceso número 153/99-C, instruido en contra de J.LG.M., por el delito de Homicidio Culposo, sentencia emitida en fecha 24 de Agosto de 2000.-Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

157. REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ES PROCEDENTE, POR ELLO DEBE ANALIZARSE LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN DICHO CONCEPTO. Le asiste la razón a la Fiscalía Mayor al decir que toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 fracción IV del Código Penal en vigor que establece: La reparación del daño comprende VI.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el delito comprendido....por ello al no devenirse del documento las características del vehículo que tiene adeudo en Garajes y Talleres, por concepto de servicio de grúa y pensión, y que la representación Social pide en su agravio se tome en cuenta para el pago de los perjuicios, debe resolverse que ese documento analizado es insuficiente para establecer la causación de los perjuicios ocasionados a Y. G. O. A., pues la Fiscalía Mayor en sus agravios solicito que esta autoridad tomara en cuenta el documento a que nos hemos hecho referencia, por lo tanto era importante su estudio y al realizarlo se deviene insuficiente, y si bien del mismo se desprende la fecha de ingreso del vehículo, es un hecho notorio que Garajes y Talleres S. de R. L., recibe con día innumerables vehículos para su estancia por diferentes circunstancias, entonces la fecha proporcionada en el documento no es suficiente para saber a que vehículo se refiere su información, tampoco es obstáculo para llegar a esta

determinación lo expuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito, en su agravio al momento de presentar la apelación y que se refiere a "el adeudo que tiene con la empresa denominada GRUAS Y TALLERES, S de R. L., con motivo del encierro del vehículo de la marca Chrysler, tipo Shadow, color guindo;" desprendiéndose de lo anterior que proporciona los datos del vehículo de Y. G. O. A., porque esos datos no se devienen del documento en estudio. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva número 206/2004, instruido contra E. C. V. por el delito de LESIONES CULPOSAS, derivado del proceso 369-2002, ante el C. Juez Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado.

158. REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE EQUIPARABLE AL ROBO. Si bien es cierto que el artículo 367 último párrafo del Código Penal en vigor, establece que para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor intrínseco de la cosa, también lo es que el robo equiparado a que se refiere el artículo 365 Bis del mismo Ordenamiento Punitivo en consulta, contiene una sanción específica sin atender al valor de la cosa, por lo tanto es opinión de esta Sala que para la reparación del daño por lo que hace a este delito de equiparable al robo, debe estarse al valor del objeto, aunado a lo dispuesto por el diverso 143, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, que indica: "la reparación del daño comprende: I.- La restitución de las cosas obtenidas por el delito, de no ser posible el pago del precio de las mismas;" en el caso a estudio, el Juez de la causa condenó al pago del precio de los vehículos para lo cual tomó en cuenta las facturas allegadas por cada uno de los denunciantes, por lo tanto es viable analizar si tales documentos cumplen con los requisitos para conferirles el valor probatorio pleno. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 244/2000, relativo al proceso penal número 7/99-I, instruido en contra de A.S.S., L.G.C., F.S.M.A. y G.M.G., por el delito de Equiparable al Robo. Sentencia emitida el 07 de Junio de 2001. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

159. REPARACION DEL DAÑO. ES PROCEDENTE POR GASTOS FUTUROS. Por su parte la responsable, en el fallo impugnado, estimó que no procedía condenar al acusado al pago de la reparación del daño, porque los presupuestos de mérito se referían a gastos futuros e inciertos que no había erogado el ofendido. Una vez precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado, estima como ya se señaló, que le asiste razón al peticionario de garantías. En efecto, es cierto que a la fecha no ha podido ser reparado el vehículo controvertido, empero esto no es causa suficiente para estimar que el afectado esté obligado a realizar previamente el pago total de los daños causados al automotor, pues de ser así, se llegaría al extremo de que si el ofendido no cuenta con recursos para solventar tales gastos, no tendría derecho a reclamar el pago de la reparación del daño, circunstancia por demás violatoria de garantías e injusta, pues deja en estado de indefensión a la parte afectada, la cual tiene el derecho al pago del perjuicio generado con motivo del delito, con independencia de sí erogó o no la cantidad fijada. De ahí que si en la especie los

presupuestos ofrecidos para acreditar la condena, están debidamente ratificados por su suscriptor, requisito esencial para proceder en consecuencia; y también se corroboran con la fe ministerial de los daños sufridos al vehículo Volkswagen, modelo 1992, con placas de circulación 2979-MKE del Estado de Nuevo León; así como con las fotografías antes mencionadas, glosadas a foja treinta y uno, y con la diligencia de inspección ocular que obra a foja treinta y tres. Elementos de convicción que no fueron justipreciados por el tribunal de alzada, debe convenirse que tales medios de convicción son suficientes para reconocer el derecho que le asiste al ofendido. En ese sentido, resolvió este Órgano Jurisdiccional los amparos directos 110/2002 y 157/2002, con fecha primero y veintidós de octubre del año dos mil dos, respectivamente, así como el diverso 190/2002, el día veintidós de abril del año en curso". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 290/2001, derivado del Proceso Penal número 56/2000, instruido en contra de M. A. T. S. Por el delito de Daño en Propiedad Ajena por Culpa. Amparo Directo número 75/2003. Sentencia emitida el 21 de Mayo de 2003. Magistrado: Lic. José Luis Gálvez Pérez.

160. REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCERA PERSONA, INCIDENTE DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32 y 35, fracción IV, del Código Penal de Michoacán, la reparación del daño como sanción económica de carácter público, corre a cargo del delincuente, pero puede ser deducida en contra de tercero obligado mediante un incidente en ejercicio de la acción de responsabilidad civil correspondiente. Ahora bien, para que dicha acción prospere, es requisito indispensable que exista declaración judicial de que el acusado es responsable del delito que se le atribuye, pues tal pronunciamiento genera jurídicamente el derecho a la reparación del daño causado con la comisión del hecho delictuoso. Consecuentemente, la sentencia que condena a los terceros obligados en el incidente de reparación del daño, sin que en el proceso penal se haya hecho declaración alguna sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, es violatoria de garantías. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 103/2004, instruido contra E. M. M. por el delito de LESIONES CULPOSAS, derivado del proceso 195-2001, ante el C. Juez Primero de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado

161. REPARACIÓN DEL DAÑO, LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LA PARTE AFECTADA DE QUE SE LE REPARE EL DAÑO NO CONSTITUYE AGRAVIO. La suscrita Magistrada considera que es improcedente lo alegado por la parte afectada, toda vez que sus manifestaciones no pueden considerarse como agravio, pues por éste se entiende la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por lo tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto legal que se estima violado y explicar el concepto por el que fue

infringido; lo cual en la especie no acontece; por tal razón, lo anterior resulta improcedente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 163/03, relativo al proceso número 187/02, instruido en contra de G.I.R. por el delito de Robo. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

162. REPARACIÓN DEL DAÑO POR INCAPACIDAD, MONTO. SOLO HASTA EL 100% DE INCAPACIDAD A PESAR DE QUE LA SUMA DE ÉSTA SEA DEL 110%.- Si el juez inferior sumó el 50%, el 30% y 30% por incapacidades parciales permanentes, ya que del dictamen médico definitivo realizado por los peritos adscritos a la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se desprende que efectivamente I. S. presenta esas incapacidades, también es cierto que de acuerdo al artículo 494 del la Ley Federal de Trabajo, se debe de tomar en cuenta solamente hasta el 100% de incapacidad y en esa magnitud condenarse a pesar de que la suma de las incapacidades parciales excedan del 100% como acontece en la especie donde sumadas las mismas dan un total de un 110%. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 450/2001, relativo al Proceso Penal número 193/99, instruido en contra de R.G.L. por los delitos de Lesiones y Daño en Propiedad Ajena a Título de Culpa. Sentencia emitida el 11 de Enero de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

163. REPARACIÓN DEL DAÑO, SU ABSOLUCIÓN ES PROCEDENTE CUANDO LA PASIVO DEL DELITO SE DA POR SATISFECHA DE DICHO CONCEPTO EN OTROS TÉRMINOS. En la especie no es dable condenar al acusado al pago de reparación del daño, toda vez que tal como se desprende de autos, precisamente a foja 49 del sumario, la pasivo, al rendir su declaración informativa ante el A-quo, dijo textualmente. “Que también me faltaron otras cosas chicas, pero que con eso que se recuperó está más que bien, que es todo lo que pide en contra de estos muchachos, y que paguen con cárcel”, manifestaciones de las que se deduce que la pasivo del delito se da por satisfecha del pago de reparación del daño, pues ésta indicó que con lo que se recuperó estaba más que bien, y que lo único que solicitó fue que el acusado pagara con cárcel; por tal razón habrá de absolverse al acusado de dicho concepto. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 608/02, relativo al proceso número 119/99, instruido en contra de J. B. G. y F. C. R. por el delito de Robo (el primero) y Encubrimiento (el segundo). Sentencia emitida el 23 de Abril de 2003. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

164. REPARACIÓN DEL DAÑO, TRATÁNDOSE DE GASTOS FUNERARIOS. La condena al respecto, está prevista por el artículo 144 del Código Penal que establece: “La reparación del daño y perjuicio a que se refieren las fracciones II y IV del artículo anterior (Indemnización del daño material y moral causado y el resarcimiento de los perjuicios

ocasionados por el delito cometido), será fijada por los jueces tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil en su caso, sin perjuicio de valorarlas proporcionalmente según el daño y perjuicio causado, el delito cometido, lo obtenido por el delito, las condiciones de la víctima y especialmente, las condiciones económicas del obligado a pagarlo". A su vez la Legislación Laboral refiere en su numeral 500: "Cuando el riesgo del trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá: I.- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios...", consecuentemente, si se condena al responsable apoyándose en documentos allegados al proceso, queda de manifiesto la inobservancia a la norma legal aplicable, lo procedente es el modificar tal aspecto de la sentencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 4435/98, relativo al Proceso Número 56/98, instruido en contra de C.A.T.G. Y OTRO, por el Delito de HOMICIDIO.- Sentencia emitida el 18 de febrero de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

165. REPARACION DEL DAÑO Y PERJUICIO, CONCEPTO, CLASIFICACION Y CONDENA, DE LA. En términos del artículo 144 del Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León, la reparación del daño y perjuicio a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 143, será fijada por los jueces tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Civil en su caso. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2002 y 2003 de esta última legislación, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; y se reputa perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. En la especie, el daño, como consecuencia directa del delito cometido se cuantificó en la cantidad de trescientos mil dólares americanos, lo que indudablemente generó un perjuicio para el pasivo, pues por ese motivo dejó de obtener una ganancia lícita, como lo son los respectivos intereses que la cantidad defraudada le hubiesen generado. Ahora es oportuno establecer que no existe en autos, dadas las circunstancias del caso, un dato de información que permita establecer la voluntad de las partes para fijar el porcentaje de un interés convencional; por lo que en términos del artículo 2289 del Código Civil se aplicará el interés legal, consistente en el nueve por ciento anual de la cantidad defraudada, es decir, trescientos mil dólares americanos, o su equivalente en moneda nacional al momento de hacer el pago. Resta agregar que el perjuicio inició desde el momento que se causó el daño, esto es, desde que se consumó el delito, siendo aquéllos consecuencia directa e inmediata de éste. Luego entonces, los intereses que el acusado tendrá que pagar, deberán computarse a partir de la comisión del delito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 735/98, relativo al proceso penal número 312/97 instruido en Contra de E.RG. por el delito de fraude.- Sentencia emitida el 2 de marzo del 2000. Magistrado: Rodolfo S. Salinas Cantú.

166. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO POR NO HABER ABIERTO EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL, CUANDO EL JUEZ, DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO, NO OBSTANTE LA EXISTENCIA DE DATOS DE INIMPUTABLIDAD. Tenemos que conforme a lo dispuesto por el artículo 397-V, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se considera que se da la susodicha causal para la procedencia de la Reposición de procedimiento, lo anterior toda vez que el A-quo, le dictó Sentencia condenatoria, no obstante que obra a fojas 119-120, el informe de antecedentes Penales que enviara el C. Director del Penal del Estado, dado que se advierte que en la fecha en que fue puesto a disposición, en los autos del proceso 27/99, esto, en fecha 27 de Octubre del 2000, según se aprecia del oficio que obra a foja 29, el cual adquiere valor jurídico, de conformidad con lo establecido por los artículos 313 y 314 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, el acusado, ya se encontraba internado por el proceso anterior y al análisis de éste, se deviene que se refiere al número 114/99 por el delito de Equiparable a la violación donde el juez Octavo de lo penal, el 10 de Junio de 1999, lo declaró inimputable en un procedimiento Especial, decretándole una medida de seguridad por el tiempo indispensable para ello. Habiendo causado ejecutoria dicha sentencia en fecha 28 de Agosto de 1999, por lo que conforme a lo establecidos por el artículo 25 del Código Penal en vigor, 487 y 488 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, debió de haber dictado la suspensión del procedimiento común y abrir el procedimiento Especial, dando la intervención a las partes y designando tutor especial, por lo que se deviene que tanto al acusado como a su defensa se les violentaron sus derechos al haberse practicado diligencias en forma distinta a las prevenidas por la ley. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 11/2003, Expediente número 27/99, instruido en contra de J. J. F. M. por el delito de Robo. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

167. REQUISITO PARA SOBRESEIMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR. TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Apareciendo que conforme al artículo 287 Bis 1 del Código Penal Vigente en la época del hecho delictuoso, establecía que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, se perseguirá por querella de la parte ofendida salvo que la persona agredida sea incapaz se perseguirá de oficio; le asiste la razón a la Representación Social cuando dice: Causa agravio a esta Representación Social la apreciación que realiza el resolutor, al considerar en la determinación recurrida, que el ilícito de Violencia familiar cometido en perjuicio de la menor S. D. V. es un delito perseguible a instancia de parte; por lo tanto el desistimiento y perdón otorgado por la quejosa I. V. H., como lo señaló el Fiscal mayor en su escrito de agravios, no debió considerarse extensivo en cuanto al daño sufrido por su menor hija S. D. V. y por consiguiente el A quo no debió haber declarado extinguida la acción penal por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR imputado al acusado como cometido en perjuicio de la menor, consecuentemente no debió haber decretado el sobreseimiento de la presente causa. No siendo obstáculo para lo anterior que por decreto número 81, publicado en el periódico oficial en fecha 28-veintiocho de Abril del 2004, el

Artículo 287 Bis 1, se hubiese reformado, pues no se considera este delito de VIOLENCIA FAMILIAR imputado al acusado perseguible a instancia de parte; por lo que el perdón otorgado por I. V. en representación de su menor hija S. D. V. no produce el sobreseimiento tocante a este hecho. Por lo que se deja sin efecto la extinción de la acción penal y con consiguiente el sobreseimiento de la causa instruido a M. D. V. por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en tal virtud remítase el original al C. Juez de origen a fin de que lo continúe por sus demás tramites legales, sin perjuicio de que el A quo con plenitud de jurisdicción pueda ordenar la suspensión del procedimiento, cuando a su juicio estime reunidos los lineamientos del artículo 287 Bis 1 reformado del Código Penal Vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo número 126/2003, derivado del expediente número 131/2003, instruido en contra de M. D. V. por el delito de Violencia Familiar. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

168. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LA UNICA SALVEDAD PARA QUE LA DEMANDADA DEJE DE RESPONDER DEL DAÑO CAUSADO ES QUE ÉSTE SE PRODUZCA POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VICTIMA. Sobre el particular, debe subrayarse que la demandada se excepcionó en la forma y términos que aparecen en su escrito recepcionado por la autoridad de origen el 12-doce de septiembre del año 2000-dos mil, y así pues debe decirse que carece de razón en cuanto estima no haberse acreditado los elementos de la incidencia planteada en contra de su representada, ya que ambas partes convienen en que la suerte de la víctima se produjo a raíz del evento vial precisado, aspecto en relación con el cual la accionante cumplió con la carga procesal que le correspondía, y en cambio la reo adujo que esto se debió a causas atribuibles a la víctima; entonces, si la única salvedad para que la demandada deje de responder del daño causado es que éste se produzca por culpa o negligencia inexcusable de la inmolada, evento sobre el cual la exigencia categórica de su demostración que establece el artículo 1810 in fine del Código Civil vigente en el Estado, implica una carga procesal para la litigada; con mayor razón cuando ésta al contestar la incidencia aduce negligencia e imprudencia del hoy extinto; éstas afirmaciones las debió de demostrar atendiéndose a la obligación que le impone el artículo 223 del Código Procesal Civil, de probar los hechos constitutivos de sus excepciones, acorde además con el precedente que como cuarta tesis relacionada a la Jurisprudencia Civil número 336 se publica en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: “RESPONSABILIDAD OBJETIVA. Si el demandado a quién se reclama la reparación del daño por causa de responsabilidad objetiva opone la excepción prevista en el artículo 1913 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales, relativa a que esa responsabilidad no existe, cuando el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, debe precisar los hechos y circunstancias constitutivas de la causa o exoneración que aduce, pues sobre ellos debe versar la prueba a su cargo”. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 72/2002, formado con motivo del recurso interpuesto por la demandada..., contra la interlocutoria de fecha 30-treinta de Julio del 2001-dos mil uno, dictada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Linares, Nuevo León, dentro del Incidente de Responsabilidad Civil exigible a terceras personas, promovido por la señora ... en oposición de la Empresa de referencia, derivado de la causa criminal número 123/99-I seguida a ... por los antijurídicos de Homicidio, Lesiones Y Daño en Propiedad Ajena, de Naturaleza Culposo. Interlocutoria de fecha 31 de Enero de 2003. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

169. RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA. PROCEDENCIA DE LA. Si debido a la mecánica en que acontecieron los hechos, se dejó de manifiesto la presencia de más de tres personas como sujetos activos, quienes actuaron intempestivamente, sin acuerdo previo, mismo que tampoco resultó durante la ejecución del evento delictivo; y el desconocimiento de la causación material especifica, que en este asunto fue el deceso de quien en vida llevó por nombre L.C.H.A. y la alteración de la salud física que se le ocasionó al pasivo J.J.C.P., al cual le ocasionaron lesiones que fueron clasificadas como las que no ponen en peligro la vida, tardan menos de quince días en sanar y no dejan cicatriz visible y perpetua; ello deja de manifiesto en el sumario la responsabilidad correspectiva del acusado en la ejecución de los ilícitos de Homicidio y Lesiones; y en consecuencia lo que procede en este caso, es sancionar a R.A.D. por su responsabilidad en los ilícitos de Homicidio y Lesiones, conforme a la sanción que prevén los numerales 312 y 301 fracción I, ambos del Código Penal en Vigor, que señalan, el primero, una pena de quince a veinticinco años de prisión y el segundo, de tres días a seis meses de prisión o multa de una a cinco cuotas o ambas, mismas que en suplencia de queja deficiente, aplicarán en términos de lo dispuesto por la segunda parte del artículo 41 de la Legislación Sustantivo de la Materia, que señala "...Cuando haya intervención material de varias personas en la ejecución de un delito, sin que haya existido participación; ello es, sin preordenación ni adherencia, en forma tal que cada quien actúa de propia decisión, cada quien responderá por la lesión jurídica producida, si se identifica la causación material. Si no hay dicha identificación, pero si se demuestra que hubo la intervención material, se impondrá una pena hasta la mitad del mínimo y hasta la mitad del máximo del o los delitos cometidos"; lo que se traduce en la especie, en la mitad del mínimo y hasta la mitad del máximo de la sanción ya señalados de los numerales 301 fracción I y 312, ambos del Código Penal en Consulta. A esta determinación se arriba, al tomarse en cuenta los testimonios de G.T.O., C.H.G.S., J.C.M.A., P.N.E. y A.A.V., mismos a los que en párrafos anteriores se les otorgó relevancia legal, y que de ellos se desprende, que el día de los hechos, el acusado R.A.D. se encontraban en compañía de otros sujetos, disfrutando de un convivio en el interior de un departamento del edificio que se ubica enfrente del lugar donde acontecieron los hechos, cuando de repente, se dirigieron hasta donde se encontraba el hoy occiso y el citado C.P., quienes estaban en compañía de otras dos personas más, comprando cerveza, llegando aquéllos en ese momento y en forma conjunta procedieron a agredirlos físicamente, desconociéndose precisamente quién o quiénes de dichos participantes y debido a esos actos, produjeron el resultado por el cual hoy se le procesa al acusado R.A.D., quien también, como ya se dijo, intervino en ello; esta

determinación es apoyada por los criterios Jurisprudenciales cuyos rubros rezan: HOMICIDIO Y LESIONES, COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LOS DELITOS DE. y COMPLICIDAD CORRESPECTIVA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEXTA SALA Toca penal en definitiva número 690/02, relativa a proceso número 314/02, instruido en contra de R.A.D. por los delitos de Homicidio y Lesiones. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

170. RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE COMO COPARTICIPE. EL NO QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO EL MONTO DEL BENEFICIO INDEBIDO OBTENIDO O AUN QUE HAYA LOGRADO ALGUNO EL ACUSADO, NO IMPLICA QUE NO SE DEMUESTRE SU. Si ha quedado acreditado que el coacusado sí obtuvo un lucro al desplegar la conducta ilícita como ya quedó asentado en líneas anteriores, pues tenemos que su coacusada, siendo empleada de las empresas afectadas tenía a su cargo el manejo y vigilancia de la emisión de las solicitudes de SPEUAS al realizar pagos a empresas que forman parte de las ofendidas, pero no así para realizar pagos a personas ajenas o extrañas a las que no tenía autorización y aprovechándose de la función encomendada realizó los pagos a la cuenta del coacusado de referencia, comprobándose que éste cooperó activamente con su coacusada, su conducta es necesariamente relacionada al haber retirado las cantidades que fueran depositadas por ésta última, como bien lo asentó el Juez de Primera Instancia, y si bien es cierto que de autos no queda plenamente demostrado el monto del beneficio indebido obtenido en lo personal por el acusado, o aún, que haya logrado alguno, ello no implica que no se demuestre su responsabilidad en la comisión del delito que nos ocupa, como copartícipe del mismo, siendo aplicable al respecto y en lo conducente la tesis de jurisprudencia que lleva como rubro: FRAUDE, EXISTENCIA DEL DELITO DE. Séptima Época Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 85 Segunda Parte. Página: 48. Amparo directo 1068/75. Raymundo Luján Tafoya. 14 de Enero de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 38/2001, relativo al expediente número 40/98, instruido en contra de J.C.S.H. y Otra, por el delito de Fraude. Sentencia emitida el 01 de Marzo de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

171. RESPONSABILIDAD OBJETIVA. EN LOS CASOS DE COLISION DE VEHICULOS EN MARCHA, ES NECESARIO DETERMINAR QUIÉN ES EL CAUSANTE DE LOS DAÑOS. Con base en el criterio del H. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, Agosto de 1995. Tesis: VI.1o.4 C. Página: 612., es menester asentar que en los casos de colisión de vehículos en marcha, que dejan de manifiesto la imprudencia al conducir un vehículo de motor, con resultado de daños de consideración, como ocurrió en la presente causa, se estima que el dictamen pericial es el documento idóneo para

establecer quién de los participantes de dichos vehículos fue el causante de la colisión, por su imprudencia en el manejo, pues al carecerse de ello, existe la duda de que al procesado por esos sucesos, haya sido quien tuvo una conducta imprudente; toda vez que los protagonistas de dicho evento se encuentran en igualdad de condiciones, esto es, que todos ellos utilizaron vehículos en marcha, por lo que no es posible examinar el asunto con el purismo de la norma correspondiente, ya que podría estarse en presencia de una responsabilidad concurrente, o bien, podría darse la hipótesis de que uno de los conductores originara la colisión, aún cuando físicamente los daños los ocasionara otro de los participantes; de donde resulta que es ineludible acudir a la investigación sobre cual conductor fue el causante de esa colisión, al ser ésta la única manera de dilucidar quien es el causante de los daños, ello desde un plano Jurídico. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en artículo número 860/01, derivado del Proceso Penal número 332/01, instruido en contra de J. L. T. R. por el delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo. Sentencia emitida el 03 de Julio de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

172. RETRACTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL DEL PASIVO, APOYADA POR OTRAS PRUEBAS. En opinión de la suscrita Magistrada, el Juez Natural estuvo en lo correcto al concederle valor a la retractación de la inicial denuncia interpuesta por el menor pasivo F. R. Z. alías el “Konan”, pues contrario al agravio de la Representante de la Sociedad, en el sentido de que tal retractación no se encuentra corroborada en el sumario, y que debe aplicarse el principio de inmediatez procesal, debe decirse que la retractación del menor pasivo R. Z. alías el “Konan” sí se encuentra corroborada con los dichos de los también menores I. A. C. G. apodado el “Chupa cabras” y D. A. D. V. apodado “Colchón”, de donde se desprende que el acusado C. V. no fue el que le proporcionó el resistol cinco mil, pues como lo refirió el menor C. G. alías el “Chupa cabras”, el resistol cinco mil se lo vendió un sujeto apodado “Chopo”, además de que en otras ocasiones se lo robó de las bodegas de Aurrera en compañía de los menores apodados el “Konan” y “Colchón”, por lo que en esa tesitura, si nos remitimos a la inicial declaración del menor pasivo F. R. Z. alías el “Konan”, su denuncia resulta aislada, la que a su vez, no sería suficiente para dictarle al acusado una resolución de condena, pues como se advierte de autos, no se encuentra apoyada con algún otro elemento de prueba incriminatorio que revele que fue el acusado C. V. el que proporcionó o vendió dicha substancia tóxica, es decir, resistol cinco mil, al menor R. Z. alías el “Konan”, para que se drogara junto con los menores D. V. alías “Colchón” y C. G. alías el “Chupa cabras”, y si bien es cierto, C. V. no impidió que se drogaran los menores, esa conducta no encuadra en los supuestos del artículo 196 del Código Penal en vigor en el Estado, pues no indujo, incitó o propició a los menores de referencia, a la práctica de la drogadicción o de otros hábitos distorsionados al común cultural. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Definitiva número 541/2001, relativo al Proceso Penal número 621/96, instruido en contra de J. C. C. V. por el delito de Corrupción de Menores, en el

cual se confirma la sentencia absolutoria dictada en Primera Instancia. Sentencia emitida el 18 de Noviembre de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

173. RIÑA. CUANDO SE ACREDITAN LAS VÍAS DE HECHO. El elemento subjetivo se acredita con la declaración del acusado, cuando refiere que el ahora occiso lanzó expresiones de reto al acusado y que éste aceptó, de ahí el ánimo rijoso de ambos protagonistas, llegando a las vías de hecho, cuando dice el acusado que se percató que el tipo se colocaba la mano en la cintura del lado derecho imaginándose que iba a sacar la pistola; esta actitud del ahora occiso, de colocarse la mano en la cintura, determinan las vías de hechos que culminó con la contienda de obra al situarse el acusado en la misma posición, pues su actitud de violencia material se traduce cuando dice: " que en ese instante sin darle tiempo e inmediatamente sacó la pistola que portaba en la cintura del lado derecho apuntándole al tipo accionando el gatillo una sóla vez"... Por lo tanto al acreditarse la voluntad de los protagonistas de contender, así como la agresión por ambas partes, se demuestra la atenuante de riña a que se refiere el artículo 319 del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 234/93, derivado del proceso número 3-93, instruido contra I. G. O. por el delito de Homicidio. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

174. ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA DETERMINADO Y SANCIONADO CON LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 367 DEL CODIGO PENAL, CUANDO NO EXISTE VALUACIÓN DEL OBJETO MUEBLE, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MINISTERIO PÚBLICO. En lo que respecta a la sanción a aplicar por el delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, debe atenderse al objeto que sería materia de apoderamiento y que consiste en un vehículo de alquiler volkswagen, sedán, modelo 1995, color verde con blanco, placas de circulación 1440-MKF de la Entidad, por su naturaleza es susceptible de ser cuantificable de manera intrínseca, al encontrarse en constante circulación en el mercado; además para estimar la cuantía del robo no es indispensable tener a la vista el objeto para determinar su valor intrínseco, según lo dispone el último párrafo del artículo 367, del Código Penal del Estado, por lo tanto la falta del dictamen de valuación correspondiente es una deficiencia imputable al Agente del Ministerio Público, al no promover y perfeccionar la prueba conducente a la fijación correcta del valor del bien mueble materia del delito; si el objeto producto del robo no fue debidamente valuado fue por omisión del Ministerio Público quien tenía la obligación de allegar al juicio las pruebas conducentes para apoyar su acusación./ En esas condiciones lo que procede, es lo que más favorece al acusado, sancionarlo por su responsabilidad en la comisión del delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, con la pena contemplada en el artículo 367 fracción I del Código Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. - Toca en Definitiva número 294/2004, instruido contra R. L. R. por el delito de ROBO CON VIOLENCIA EN GRADO DE TENTATIVA, derivado del proceso 288-2003, ante

el C. Juez Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

175. ROBO CON VIOLENCIA FÍSICA. SÓLO SE CONFIGURA LA CALIFICATIVA CUANDO SE EJERCE SOBRE LAS PERSONAS Y NO SOBRE LAS COSAS. El acusado para lograr el apoderamiento del producto de robo consistente en una cadena de oro que traía la ofendida no empleó la violencia física en atención a que ésta puntualiza "*me la jaló, y se fue hacía la cadena y me la jaló y después del segundo jalón me la reventó"*, lo cual no se encuentra desvirtuada y al provenir de la misma ofendida resulta verosímil, aunado a que el acusado en toda la fase del procedimiento puntualiza que en ningún momento hizo uso de la violencia física sobre el cuerpo de la víctima para lograr el apoderamiento de los mencionados objetos, de lo que se advierte que el acusado para lograr el apoderarse del aludido producto de robo sí hizo uso de la fuerza material como lo fue el jalar la cadena pero lo anterior no se realizó en la persona de la pasivo es decir, no se efectuó esa acción de tal forma que al ejercerse en dicha ofendida se lograra el aniquilamiento de su voluntad por el activo se dirigió directamente al objeto y no a la persona y, por tanto, no se integra la calificativa en cuestión; pues se infiere que la descrita acción que desarrolló el acusado para lograr el apoderamiento en cuestión lo fue exclusivamente sobre el objeto y no sobre la persona de la ofendida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 710/2003, en contra de R. G. CH. por el delito de Robo Ejecutado con Violencia. Sentencia emitida el 21 de Enero de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

176. ROBO CON VIOLENCIA. IMPROCEDENTE APLICAR LA AGRAVANTE QUE SEÑALA LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 374 DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR. Resulta erróneo aplicar en perjuicio del reo la agravante que señala el artículo 374 fracción I del Código Punitivo en Vigor, el cual a la letra dice: ... .I.- "Cuando el robo se cometa en un edificio, vivienda, aposento o cuarto, que estén habitados e destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no solo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos". Y ello se determina así, toda vez que el robo que perpetró el acusado, en compañía de otros dos sujetos más en perjuicio de la pasivo P. V. Z. quedó acreditado en autos que fue en un negocio, y éste no está contemplado dentro del numeral que se acaba de mencionar; y el hecho de que la citada V. Z. haya referido que dicho negocio, forma parte del domicilio donde habita, debe decirse que ello, para efectos de agravar la penalidad del hurto en comento, no debe presumirse, sino quedar debidamente justificado dentro de la causa, lo cual no aconteció, ya que no se advierte alguna Diligencia de Inspección Ocular correspondiente dentro del sumario, tendiente a demostrar que efectivamente dicho negocio sea utilizado como casa-habitación. Por lo tanto, en este caso, al carecer de prueba contundente con la cual quedase debidamente acreditado lo señalado por dicho numeral (371 fracción I), se determina improcedente sancionar al referido Ch. M. por dicha

agravante. Sirviendo de apoyo para la anterior determinación, los siguientes criterios que llevan como rubro: “ROBO EN CASA HABITADA”. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVIII. Página: 3446. Amparo penal directo 6221/43. Góngora Novelo Juan. 17 de noviembre de 1943. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. “ROBO EN CASA HABITADA. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXII. Página: 1322. Amparo penal directo 2284/51. Zúñiga Luna Miguel. 9 de junio de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no menciona el nombre del ponente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 667/01 instruido en contra de J.L.CH.M, por los delitos de Robo con Violencia y Otro. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

177. ROBO DE CUANTÍA DETERMINADA Y NO INDETERMINADA AUNQUE SE TRATE DE DÓLARES. En cuanto a los 200 dólares no por tratarse de moneda extranjera se debe considerar como indeterminado el robo, pues para el caso de cumplimiento de obligaciones contraídas dentro o fuera de la República, la moneda extranjera se debe convertir a su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago, conforme a lo que dispone la Ley Monetaria en su artículo 8 y si en el particular tomando en cuenta que la moneda extranjera (dólar) de acuerdo a lo que fija el Banco de México para solventar obligaciones en moneda extranjeras, el día de los hechos delictuosos que nos ocupan tenía un valor en moneda nacional (peso) de $9.49.18 pesos, entonces es obvio que el monto del hurto no excede a las doscientos cincuenta cuotas a que se refiere la fracción II del artículo 367 del Código Punitivo, si cada cuota al día de los hechos equivalía a $35.10 pesos, pues al realizar las operaciones aritméticas correspondientes multiplicando 200 dólares por $9.49.18 pesos para convertirlos a moneda nacional, nos da $1,898.36 pesos, cantidad que sumada a los $6,600.00 pesos nos da un total de $8,498.36 pesos y al dividir esta cantidad entre $35.10 pesos (valor de una cuota) nos da un total de 242.11 cuotas, entonces es obvio que estamos en presencia de un robo de cuantía determinada y no indeterminada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 460/2000, relativo al Proceso Penal número 125/2000, instruido en contra de C. A. C. M. por el delito de Robo. Sentencia emitida el 7 de Enero de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

178. ROBO DE VEHÍCULO, NO SE ACTUALIZA LA CALIFICATIVA DE VÍA PÚBLICA. No se configura cuando queda de manifiesto que el activo desapoderó al denunciante cuando el ofendido se encontraba a unos metros del mismo, instantes después de que lo había dejado estacionado en la calle. De ahí que el pasivo se encontraba cerca del bien materia del apoderamiento, de tal manera que su presencia podría inhibir la actuación del agente, por lo que no se actualizan los supuestos para aplicar la sanción

correspondiente a la calificativa en comento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 235/2001, derivado del Proceso Penal número 139/2001, instruido en contra de R. C. R. por el delito de Robo. Sentencia emitida el 17 de Julio de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

179. ROBO TENTADO. CALIFICATIVA. En razón de que los actos de ejecución idóneos para el apoderamiento de bienes muebles ajenos que no se allegó a consumar por causas ajenas a la voluntad del acusado, se dieron en un lugar cerrado, como lo es una de las salas de la empresa afectada, según se desprende de la inspección ministerial efectuada en la misma, en la que se describe el lugar como un edificio rodeado por una malla ciclónica, debe aplicarse la sanción agravadora prevista por el artículo 347 fracción II del Código Penal vigente en la entidad, puesto que, a pesar de que se trata de delito tentado, en la ejecución de los hechos el acusado agredió el bien jurídicamente tutelado por dicha calificativa, por lo que la no consumación del delito de robo no implica la imposibilidad de agravar la sanción en los términos señalados, ello con apoyo en el respetable precedente sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Informe de 1968, bajo el rubro "Tentativa Calificada". TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva No. 291/99, relativo al proceso número 480/98, instruido en contra de F.M.S., por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.- Sentencia emitida el 13 de septiembre de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

180. ROBO Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA QUE RECAE EN EL OBJETO MATERIA DEL APODERAMIENTO. El Juez de la causa condenó al pago de la cantidad de $2,500.00 pesos, por ser la cantidad que se duele que el pasivo erogó para reparar el daño ocasionado por el activo para cometer el hurto; a su estudio se deviene que tales daños consistentes en el cristal posterior del costado derecho del vehículo marca Ford tipo Sedan 2 puertas color dorado modelo Cougar 1992, placas de circulación TKJ45J del estado de Texas y que se acreditan con la fe ministerial así como con el dicho del paciente del delito al referir que con una bujía quebró el vidrio, tales daños no recayeron en el objeto materia del robo pues del auto de formal prisión decretado por el delito de ROBO, se deviene que el acusado se apoderó de una carátula de auto estéreo para discos compactos marca KENWORTH en color negro, lo que evidencia que la Representación Social estuvo en presencia de dos lesiones patrimoniales constituidas, la primera, en el apoderamiento de la carátula de auto estéreo, y la otra por la destrucción del vidrio, sin embargo por este último no se ejercitó acción penal. Por lo tanto, al no demostrarse que el objeto producto del robo, que en este caso lo constituye la carátula de estéreo, haya sufrido daño alguno, no es dable condenar al pago de la reparación del daño, máxime que el producto del robo fue recuperado, es por ello que se ABSUELVE al acusado de este concepto. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva

número 201/2001, derivado del Expediente número 205/00, instruido en contra de D.E.F.L. por el delito de Robo. Magistrado: José Luis Galvez Pérez.

181. ROBO. PENA CONFORME AL ARTÍCULO 367 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL SI NO SE VALORIZÓ EL PRODUCTO DEL ROBO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MINISTERIO PÚBLICO. Si de la denuncia formulada se desprende que el acusado se apoderó de un teléfono celular marca "Motorola", una videocasetera marca "Magnavox", un modular, una pistola tipo revólver calibre .38" marca "Smith & Wesson", color negra, con cachas café, matrícula 592409 y una pistola tipo revólver marca "EIG" calibre .22" color negro, con cachas blancas, matrícula 166896, y de estas últimas incluso se dio fe ministerial, pues fueron asegurados; además, los restantes objetos eran fácilmente valuables y bastaba, por ejemplo, con que se hubiese recabado su descripción para que un perito las valuara, sin necesidad de tenerlos a la vista, por el conocimiento que existe acerca del valor comercial que pudieran tener dichos objetos, fácilmente valuables en dinero. Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 367, última parte, del Código Penal del Estado que establece: "Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor intrínseco de la cosa, misma que no será indispensable tener a la vista para determinar". Luego si la valuación de los objetos no se llevó a cabo, ello es por la negligencia del Ministerio Público, a quien correspondía realizar todas las diligencias e indagaciones necesarias para que se valuaran los objetos, debe sin duda aplicarse lo más favorable al reo, que es lo dispuesto por el artículo 367, fracción 1, del Código Penal del Estado. Es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, Tomo LXXlll, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es "ROBO, LA FALTA DE AVALUO DEL OBJETO DEL, DEBE RESOLVERSE EN EL SENTIDO MÁS BENEFICIOSO PARA EL REO SENTENCIADO, así como la cuyo rubro es: "ROBO INDETERMINADO, SANCIÓN EN CASO DE (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL) y "ROBO, INDETERMINACIÓN DEL VALOR DEL OBJETO EN EL DELITO DE. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEGUNDA SALA Toca en definitiva número 303/2003, derivado de los Procesos números 460/2001 y 471/2001 acumulados, instruido en contra de H.O.M. por los delitos de Robo Calificado y Robo Ejecutado con Violencia Moral. Sentencia emitida el 03 de Octubre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

182. SE ACREDITA LA EXISTENCIA MATERIAL DE LOS DELITOS DE LESIONES Y ROBO, MAS NO ASÍ EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA. Ello es así, pues de la mecánica de realización de los hechos, se advierte que éstos ocurrieron el día 23-veintitrés de noviembre del año 2003-dos mil tres, aproximadamente a las 22:00 horas, cuando el menor pasivo J.E.D.L circulaba por la Avenida Santa Rosa de Lima, a la altura de una tienda denominada OXXO, de la colonia Tres Caminos, del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a bordo de una bicicleta de color rojo, tipo montaña, rodada 26,

propiedad de su tío E. R., y de repente le salió a su paso el acusado C. B. R. R., quien se le fue encima tratando de darle un golpe en la cabeza, pero como el citado menor se agachó, el acusado lo agarró del gorro de la sudadera que traía puesta, tirándolo al piso, en donde le propinó dos patadas en la cabeza y le dijo "que onda hijo de tu pinche madre", y al lograr el menor D. L. zafarse del acusado R. R., corrió hacia la Avenida y posteriormente aquél, es decir, el acusado, agarró el anterior bien mueble, siendo la ya descrita bicicleta, retirándose de dicho lugar; apareciendo con motivo de los golpes que el acusado le propinó al menor D. L., éste resultó con las siguientes lesiones: hematoma en región parieto-occipital izquierdo y escoriación dermoepidérmica en codo izquierdo, mismas que fueron clasificadas como las cuales no ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar, según se desprende del Dictamen Médico relativo al examen que al mismo se le practicó por parte de un Médico de Guardia de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Guadalupe, Nuevo León. De donde resulta, que la finalidad de la conducta que desplegó el acusado C. B. R. R. el día de los hechos, al momento de abordar al menor J. E. D. L., quien tripulaba la bicicleta ya descrita, fue la de agredirlo físicamente, mas no así de desapoderarlo del mencionado bien mueble, y aún y cuando esto último también aconteció, se advierte que ello lo efectuó el referido acusado de manera posterior a aquélla agresión, la cual de ninguna manera es dable considerar como medio comisivo para ese fin. Esto se estima así, dado que se advierte, tomando en cuenta lo expresado por el menor pasivo, que el acusado lo había estado amenazando dos meses atrás a la fecha en que ocurrieron los presentes hechos, ya que le decía que lo iba a matar, que lo tenía que pescar, y que cuando esto ocurriera lo iba a lamentar, e incluso que lo esperaba cerca de su casa, y que en tres ocasiones le echó encima un vehículo que el acusado iba tripulando; por lo que esta situación, aunada al hecho de que el menor pasivo y el menor J. H. C. Z. coincidieron en señalar que el día de los hechos, después de que el pasivo logró zafarse de la agresión de la cual era objeto por parte del acusado, ambos menores se fueron corriendo hacia la Avenida, dándose cuenta que aquél, es decir el hoy acusado, agarró la referida bicicleta retirándose con la misma del lugar; lo que evidentemente deja de manifiesto que el acusado R. R. lo que pretendía era agredir al menor de referencia como se lo había exteriorizado en las anteriores amenazas que según el pasivo le había estado haciendo, es por ello que el acusado el día de los hechos, al ver al citado menor, lo agredió al tiempo en que le decía "Que onda hijo de tu pinche madre", expresión ésta, que como bien se observa del testimonio rendido por el menor pasivo ante la Autoridad Judicial, coincide con las palabras que como amenazas él mismo señaló, el activo le había estado profiriendo con anterioridad, así como también con lo expuesto por la C. S. D. D. R., quien ante la Autoridad Judicial manifestó que le consta que el hoy acusado ha estado agrediendo a su sobrino el menor pasivo, amenazándolo y diciéndole que lo va a matar; pero sin que se advierta de lo anterior, que la intención del acusado, al haberle propinado diversos golpes al menor pasivo, fuese con la finalidad de desapoderarlo de su bicicleta, pues esta circunstancia, aún y cuando también se demostró que el acusado llevó a cabo, como ya se dijo, la efectuó en un momento y conducta distinta al de la agresión física realizada al citado menor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo

número 125/04, relativo al proceso número 474/03, instruido en contra de C. B. R. R. por los delitos de Lesiones y Robo. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

183. SE ACREDITA LA PARTICIPACIÓN DIRECTA Y NO LA RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA. En los términos del citado artículo 41 del Código Penal, las reglas ahí consideradas para la aplicación de la sanción corresponden a los casos en los que haya intervención material de varias personas en la ejecución de un delito, sin que haya existido participación, lo que evidencia que sea inaplicable en el presente caso, en que, como quedó enunciado con anterioridad, la responsabilidad del acusado se ubica en la participación preceptuada en el artículo 39-I del Código Penal en vigor, por haber intencionalmente tomado parte directa en el acuerdo dañoso recíproco y en su ejecución, lo anterior aunado a la circunstancia de que el artículo 41 del Código Penal alegado requiere para su aplicación que no haya existido preordenación y en la especie si la hubo, puesto que como se indicó con antelación, existió un vínculo en las intencionalidades de los agentes del delito, vínculo que se predeterminó a la ejecución del mismo, es decir, que en el caso a estudio se actualizó la participación material y directa del acusado al existir un acuerdo previo en cuanto a la ejecución de la acción que constituía el delito principal como lo era el ROBO, la acción que constituía el medio de ejecución del mismo obviamente que también debe considerarse como concertado previamente a los hechos, siendo que esta última acción trajo como resultado la muerte de la víctima, por lo tanto, aquella preordenación para la ejecución del delito principal informa de manera trascendente al convenio previo en los activos para la ejecución de esos hechos que tuvieron como consecuencia la muerte del pasivo. Por lo tanto, en la especie no se actualiza la responsabilidad modulada conforme al artículo 41 del Código Sustantivo de la Materia, porque como se indicó, para que esta hipótesis tenga lugar es necesario que cada uno de los agentes del delito persiga su propia intención en la ejecución de los hechos, y que la misma no tenga lazo de vinculación alguno con el pensar del resto de los activos, aunque la exteriorización de su voluntad tenga similitud o identidad con la de los copartícipes, lo que como ya se señaló no es el caso en la especie, porque ya se precisó, ese vínculo psicológico quedó plenamente acreditado en el caso estudio, al demostrarse el concierto previo de los activos para la ejecución del delito principal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en definitiva número 159/2001, derivado del Proceso número 370-99, instruido en contra de I. V. H. por el delito de Homicidio Calificado y Robo. Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

184. SEGURIDAD SEXUAL. BIEN JURÍDICO QUE TUTELA EL DELITO DE ATENTADOS AL PUDOR, EN TRATÁNDOSE DE MENOR DE EDAD (IMPÚBER). El bien jurídico del delito de atentados al pudor atribuido a F. R. López no es la libertad sexual, toda vez que, la ofendida es una persona impúber y carece aun de facultad de elección en cuanto al ámbito sexual, por lo tanto el bien jurídico tutelado de Atentados al Pudor lo es la seguridad sexual, por ser el sujeto pasivo una persona menor

de edad y la libertad sexual consiste en que, una persona que realiza una actividad sexual lo haga de manera voluntaria, sin ninguna coacción, lo cual no sucede en la especie, al ser la ofendida menor de edad (impúber), en donde el interés social es el de impedir la corrupción de los impúberes, favorecida por la acción de los actos libidinosos consentidos o no por ellos, ya que por su edad aun no despierta en ellos el sentimiento de ocultación y vergüenza de los órganos, atributos y actos sexuales que conforman el pudor, por lo que carecen aun de facultad de elección en cuanto a los actos sexuales. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 281/03, derivado del Expediente número 378/02, instruido en contra de R. F. L. por el delito de Atentados al Pudor. Sentencia emitida el 03 de Octubre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

185. SOBRESEIMIENTO POR PERDÓN DEL OFENDIDO. PROCEDENCIA DEL. Aún y cuando el delito de daño en Propiedad Ajena que se atribuyó el acusado fue considerado cometido bajo la modalidad de pandillerismo al dictarse el auto cabeza del proceso, proceden los efectos del perdón del ofendido en términos de la última parte del artículo 111 del Código Penal vigente en el Estado, de acuerdo a las reformas que entraron en vigor en fecha 30 de enero de 1997, pues en las mismas no se hace referencia en forma alguna a modalidades, sino únicamente al delito cometido, es decir, a la figura típica principal que se atribuye al reo, sin que sea dable ampliar o extender el concepto de "delito" que se señala, a las calificativas o modalidades bajo las cuales fue cometido, pues comprenderlo así, se interpretaría innecesario y erróneamente dicho dispositivo, violentado el principio de estricto derecho que impera en el derecho penal, así como el de "in dubio pro reo". Por lo tanto, si el delito que nos ocupa se persigue de oficio, no es de los considerados como graves por la Legislación Penal Estatal, la pena a imponer no excede de tres años de prisión, y se logró la conciliación entre el reo y el ofendido, proceden los efectos del perdón en términos de la fracción I del artículo 369 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva Número 106/98, relativo al Proceso Número 56/96, instruido en contra de M.A.R.M., por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA.- Sentencia emitida el 28 de mayo de 1998.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

186. SOBRESEIMIENTO. EXCEPCIÓN DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA DECRETARLO. Si bien en la especie se trata del delito de HOMICIDIO A TÍTULO DE CULPA, previsto por el artículo 308, en relación con el 28 del Código Penal en vigor, que compareció ante el Juez de origen M. J. B. en su carácter de parte afectada y otorgó su perdón y desistimiento a favor de J. M. A. por haber llegado a un arreglo satisfactorio de la Reparación del Daño, no menos cierto es que en la especie no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 72 del Código Penal en vigor, para poder decretar el sobreseimiento a favor del acusado, ya que en contra de lo que se

establece en la resolución recurrida, en autos obra el dictamen médico expedido por J.C.P.C. de la Cruz Verde Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, visible a foja 4 de la causa y del que se desprende que J.M.A. el día 15 de Febrero del 2002-dos mil dos, a las 00:12 horas, presentaba ebriedad completa, dictamen con valor probatorio conforme al artículo 319 del Código de Procedimientos Penales en vigor y que además se apoya con lo que expone el propio acusado J.M.A. en el sentido de que el día de los hechos estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, que se tomó una cerveza caguama, dictamen y manifestación del acusado que se adminicula con lo asentado en el parte croquis número 4436 elaborado por el Oficial de Tránsito J.G.CH.S. del que se desprende que el conductor J.M.A. no declaró ya que se encontraba en estado inconveniente (E.C), probanzas con valor probatorio conforme a los artículos 311, 319, 323, 324, 325, 326 y 327 del Código de Procedimientos Penales en vigor y con las que se acredita que el acusado J.M.A. el día del accidente vial en que resultara muerto M.R.G.D., conducía un vehículo de motor en estado de intoxicación voluntaria y por lo tanto, no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 72 del Código Penal, para poder decretar el sobreseimiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en artículo número 97/2003, derivado del Proceso Penal número 21/03, instruido en contra de J.M.A. por el delito de Homicidio a Título de Culpa. Juzgado de Origen: Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el 29 de Abril de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

187. TENTATIVA DE HOMICIDIO, NO SE DA SI EL ACTIVO NO PONE DE MANIFIESTO SU INTENCIÓN. Del cúmulo de probanzas que integran el sumario, así como de la mecánica de los hechos a estudio, primeramente, se desprende que el activo G. S. M. o C. L. M., no tuvo el propósito directo de privar de la vida al oficial de policía R. S. B., ya que el hecho de que haya disparado hacia el referido policía, al momento del salir de la Institución Bancaria afecta a la causa, no significa que quería matarlo, pues, el hecho de accionar un arma de fuego en contra de una persona, no necesariamente implica que sea el propósito de privarle de la vida, porque para ello se requiere que tal intención se manifieste a través de la ejecución de actos que así lo revelen, lo que no sucede en el presente caso, ya que como bien lo dice el A-quo en la resolución de mérito, la finalidad del inculpado fue evadir la acción persecutoria del policía y procurarse la fuga, sin que proceda lo que alega el apelante, en el sentido de que si el activo no hubiese tenido la intención de matar al policía, inmediatamente después de su salida del banco, una vez perpetrado el robo, hubiese huido del lugar sin disparar hacía el policía, puesto que tenía oportunidad; ya que hay que recordar, que el referido S. B. manifestó que esperó a que el activo saliera del banco y al hacerlo, apuntó con su arma de cargo, siendo un revolver calibre .38 especial, y le dijo “arriba las manos, arroje el arma”, lo que demuestra que el inculpado no llevó a cabo los actos necesarios e idóneos para privar de la vida al policía, pues, su acción fue evitar la detención y no provocar la muerte del policía, por lo tanto, como no hay ninguna prueba que determine que el inculpado G. S. M. o C. L. M., haya tenido la intención de matar a S. B. y que no se llegó a realizar por causas ajenas a su voluntad; requisitos

indispensables para que se configure el ilícito de Homicidio en Grado de Tentativa en cuestión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo 606/04, relativo al proceso número 153/04, instruido contra G. S. M. o C. L. M., por los delitos de ROBO CON VIOLENCIA, RESISTENCIA DE PARTICULARES, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y ROBO. Sentencia emitida el 29 de Octubre del año 2004. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

188. TENTATIVA DE ROBO. NO CONFIGURADA POR ESPONTÁNEO Y VOLUNTARIO DESISTIMIENTO DEL ACTIVO. Ahora bien, en cuanto al cuerpo del delito de Robo en Grado de Tentativa que el C. Agente del Ministerio Público imputa a J.C. o J.C.G.R. o J.C.S.H. o J.F.G.O. y que el A-quo dio por demostrado en su resolución impugnada, la Suscrita Magistrada estima en suplencia de queja, que el mismo no se encuentra acreditado en autos, toda vez que si bien es cierto que el acusado, momentos antes de cometer el Robo en perjuicio de E. G. realizó actos de ejecución idóneos encaminados directamente a apoderarse de algún objeto mueble y ajeno al quebrar el vidrio trasero izquierdo de la camioneta tipo Van, marca Dodge, color beige con café, modelo 1977, placas de circulación RPG-9467 del Estado de Nuevo León, propiedad de R.B.Z., también es cierto que no pudo abrir la puerta de dicho vehículo, razón por la que desistió voluntariamente de la ejecución del delito de robo, dejando éste inconsumado y quedando los hechos ejecutados por el inculpado en la intención y en actos preparatorios que no son punibles, en virtud de que no existió una causa externa ajena a la voluntad del agente que le impidiera realizar la conducta delictiva; sino que no consumó el delito a virtud de su propio y espontáneo desistimiento. Sirviendo de apoyo a la presente determinación el criterio Jurisprudencial cuyo rubro dice: “TENTATIVA. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX. Página: 1765.” TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 141/02, relativo al expediente número 338/01, instruido en contra de J.C. o J.C.G.R. o J.C.S.H. o J.F.G.O., por el delito de Robo en Grado de Tentativa y Otros. Sentencia emitida el 22 de Mayo de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

189. TESTIGO, SI AL PRINCIPIO A NADIE INCULPAN Y POSTERIORMENTE SEÑALAN A DETERMINADA PERSONA ADUCIENDO DIVERSOS MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEN EL INICIAL SILENCIO, DEBEN JUSTIFICAR AQUELLOS. En mejoramiento de lo preconcebido resulta importante destacar por ser de explorado derecho las siguientes apreciaciones de índole legal: Que cuando en las declaraciones primigenias a nadie se inculpa del resultado de un hecho delictuoso y después los testigos cambian de actitud, apoyando su silencio original en determinadas razones, para que los atestados posteriores resulten eficaces, se hace imprescindible la presencia de datos que sostengan las nuevas afirmaciones, pues un criterio inverso dejaría al inculpado a merced de la incertidumbre y reticencias de quienes lo acusen, en detrimento de su seguridad

jurídica y de su libertad. Que además tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados de Circuito han coincidido en sostener que si quien confiesa se retracta, debe probar esa retractación; que si el ofendido se desdice, debe demostrar los motivos en que se apoya, que si los testigos se retractan debe acreditarse el motivo que los induce a ello, criterios todos enfocados al caso en que se acepta la culpabilidad o a aquél en que se señala a determinada persona como autor de un delito; sin embargo, la misma razón debe existir en casos como el presente, en que la situación es a la inversa, esto es, si el testigo se calla y después señala pretendiendo justificar el silencio original a través de diversos argumentos, debe acreditar éstos para que su exposición resulte eficaz como prueba. En este orden de ideas, si de las piezas procesales integrantes de los autos y que tienen fuerza de atestado encontramos entre otras cosas lo que sigue: A).-.... B).... C)... D).... Entonces, por la armonía lógica-natural y concatenamiento legal que existe entre los anteriores elementos de convicción que por cierto adquieren el valor demostrativo legal que se les otorgó el líneas precedentes y se estima conveniente transcribirlos en obsequio al principio de economía procesal, que aparece entre la verdad conocida y la que se busca, valorándolos en su conjunto y no son considerados en forma aislada, sino que de su enlace natural se establece la verdad resultante que indiscutiblemente llevó a la Autoridad de Origen y a esta Sala Revisora a la verdad buscada que evidentemente ... fue objeto de amenazas por parte de ... para el fin de que se condujera en la forma en que aparece en su inicial declaración del 27 veintisiete de Mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, razón por la cuál y para la que ahora resuelve ninguna duda cabe a corolario de establecer que la informante de cargo si bien se desdijo de lo expresado y justifica que se le había obligado a declarar mediante intimidaciones es indudable que su primitivo declarado queda totalmente falseado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 33/2003, relativo a la causa penal número 45/96-I y 240/96 acumuladas, instruida a ... por los delitos de Homicidio, Daño en Propiedad Ajena y Disparo de Arma de Fuego. Sentencia emitida el 03 de Marzo de 2004. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

190. TESTIGOS, PARIENTES DE ACUSADO. VALOR PROBATORIO. El hecho de que los testimonios provengan de la madre y cuñada respectivamente del incriminado, no es obstáculo para otorgarles valor, ya que conforme al artículo 275 del Código de Procedimientos Penales en vigor, toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición o antecedentes, deberá de ser examinada como testigo, siempre que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito y del delincuente, por lo que toda persona que sea testigo está obliga a declarar respecto a los hechos investigados, tal y como ocurre en el presente caso, y el valor jurídico de dicha probanza se apreciara con sujeción a las reglas del capítulo noveno, segunda parte del Título Cuarto del Código Adjetivo Penal en vigor, en especial con el numeral 323 del citado Código, del cual se destaca la fracción II, que cita la probidad, la independencia de la posición y antecedentes personales del testigo y que tenga completa imparcialidad, aunque es de indicarse que la

circunstancia de que el oferente de esta probanza sea familiar de los testigos, no implica que estos al declarar se conduzcan con parcialidad, ya que sus narrativas deben de apreciarse conforme al cúmulo de probanzas, para poder determinar su credibilidad o mendicidad en sus aseveraciones, y contemplando las circunstancias del caso concreto, en donde los hechos que exponen dichas declarantes acaecieron en el interior del domicilio donde se encontraba el acusado cuidando a su menor hijo y por ser este un domicilio particular, es obvio que quienes se encuentran en ese sitio lo son precisamente sus moradores, los cuales por regla general son los familiares, como es el caso a estudio, ya que dichos testigos se percataron cuando llegaron elementos de policía, los posteriormente detuvieron al procesado, lo anterior tiene soporte con la siguiente tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "TESTIGOS LIGADOS A LA PARTE QUE LOS PRESENTA. VALOR DE SUS DECLARACIONES". De la Novena Epoca. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Agosto de 1996. Tesis: X.1o.31 L. Página: 745." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 17-diecisiete de noviembre del 2004-dos mil cuatro.- Toca en DEFINITIVA 373/2004. Proceso penal número 20/04, instruido a M.A.Z.S., por el delito de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

191. TESTIGOS POCA CAPACIDAD DE RETENCIÓN Y EVOCACION. Cuando la propia afectada al comparecer ante el Ministerio Público investigador, señaló su edad, al referir que contaba con 21 años, su dicho adquiere eficacia jurídica al tenor de los artículos 219-V, 273 y 323 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado. No siendo obstáculo el grado de retraso mental que padece, toda vez que del dictamen emitido por el perito el cual tiene valor probatorio conforme a los artículos 219 Fracción III, 239, 245, 250, 253, 255 y 319 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, se deviene que es moderado, que no tuvo alteración de la memoria ni en la asociación de las ideas y si bien menciona poca capacidad de retención y evocación, también lo es que no puntualizó que esta fuera nula, de ahí el valor probatorio que se le hizo a su testimonio, siendo aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia visible en la página 626, tomo VI, Segunda Parte de la Octava Época del Semanario Judicial, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el Amparo Directo 110/90, en el sentido de "PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIGOS INCAPACES, VALOR DE SU DICHO. En el proceso penal, los incapaces no están impedidos de declarar ni por el solo motivo de la incapacidad cabe negarle todo valor probatorio al testimonio, a menos que aquella fuera tan extrema que imposibilitara para percibir, comprender, retener en mente o exponer los hechos materia de la declaración. Deviniéndose de lo anterior que la pasivo es una persona mayor de edad." TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 473/94, relativo al proceso número 126/94, instruido en contra de W.F.R., por el delito de Equiparable a la Violación, Sentencia emitida el 27 de Junio de 2000.-Magistrado: José Luis Gálvez Pérez.

192. TESTIMONIAL DE LA DELEGADA DEL MINISTERIO PÚBLICO, RESULTA INADMISIBLE. Con relación al diverso motivo de inconformidad planteado por el Apelante, relativo al desechamiento a proceder al desahogo de la Informativa de la Licenciada..., por el de primera instancia, el mismo se estima inatendible y esto es así, en atención a que es incorrecto que el Juez A-quo, admita la prueba testimonial a cargo de la Delegada del Ministerio Público, auxiliadora del Investigador de los delitos, toda vez, que no es posible tenga la doble calidad, de Autoridad y testigo, incompatibilidad que se deriva de la estructura del procedimiento de carácter penal, por ser distinta la posición de la Autoridad responsable de averiguar los ilícitos, que define su función, y la del testigo, que comparece para expresar ante el Órgano Jurisdiccional, lo que ha visto, oído o sentido, en relación con el hecho que se pretende justificar. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 48/2001, formado con motivo del recurso interpuesto por el defensor particular, contra el Auto en que le fueron desechadas las probanzas, decretado por el C. Juez Cuarto de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, dentro de la Causa penal número 23/99-B, instruida a... por los delitos de Homicidio, Equiparable a la Violación y Portación Prohibida de Armas. Sentencia emitida el 14 de Agosto del 2001. Magistrada: María Nancy Valbuena Estrada.

193. TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA, CASO EN QUE MERECE VALOR AUNQUE NO SE PRECISEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR. Si las víctimas de un delito resultan ser menores de ocho años de edad, o bien mayores de ésta, pero afectadas de sus facultades mentales, y en razón de ello no precisan el tiempo en que ocurrieron los hechos ni el lugar en que acontecieron, es incuestionable que sus testimonios merecen eficacia jurídica en proporción a otros elementos de prueba, ya que por su corta edad, o bien su pobre desarrollo mental y psicomotriz les resulta difícil señalar fechas exactas y lugares precisos, por no estar bien ubicados en tiempo y carecer de capacidad suficiente para proporcionar domicilios correctos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en artículo número 9/2001, relativo al expediente núniero223/2000, instruido en contra de MMF, por los delitos de Corrupción de Menores, Atentados al Pudor, Equiparable a la Violación y Violencia Familiar. Sentencia emitida el 30 de Enero de 2001. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

194. TRAICIÓN, NO SE INTEGRA LA CALIFICATIVA DE, SOLO POR EL PARENTESCO. Resulta desafortunado el agravio de la Representación Social, en el sentido de considerar que el delito de Homicidio cometido en perjuicio de S. M. M. se cometió bajo la calificativa de Traición contenida en el artículo 316 fracción V del Código Penal vigente en el Estado, toda vez que tal circunstancia no se acreditó en autos, pues para que exista dicha calificativa no es suficiente el simple parentesco entre la víctima y el activo, ya que se requiere de la presencia de otros elementos, tales como la alevosía y la perfidia, que violen la fe o seguridad que tácitamente debía prometerle a su víctima por su

relación de parentesco, mismos que no se acreditan en los hechos que motivaron la presente causa, pues la acusada F. M. R., en ningún momento actuó con cautela que le asegurara la comisión del delito de homicidio contra su menor hija, evitando la defensa por parte de ésta; ya que claramente se advierte del sumario que dicho ilícito fue ejecutado en forma preterintencional, pues existió el dolo que sumado en cuanto a la finalidad prevista y deseada, y la culpa respecto al resultado causado, rebasó la intención original, pues la acusada F. M. R. en ningún momento tuvo la finalidad de privar de la vida a su menor hija S. M. M., sino que su intención era reprenderla por medio de los golpes, sin prever que uno de ellos iba a provocar el deceso de la menor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca penal en definitiva número 84/02, relativo al Proceso Penal número 140/99, instruido en contra de O. M. M. y F. M. R. por los delitos de Equiparable a la Violación (ambos) y Homicidio Preterintencional (segunda). Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola

195. VIOLACIÓN. COMPROBACIÓN DE LA VIOLENCIA MORAL EN EL DELITO DE. Ahora bien, este Tribunal determina, que contrariamente a lo señalado por el de menor grado, en el sumario no se acreditó legalmente la existencia del ilícito de equiparable a la violación en su modalidad de pandillerismo, que se les atribuyó a los acusados A.L.V., F.R.S., y J.L.U., al no haberse demostrado fehacientemente los medios comisivos que exige la Ley como elementos que configuran el ilícito de equiparable a la violación, esto es, el uso de la violencia física o moral; debiéndose señalar a ese respecto, que se entiende como fuerza material, la que se ejerce en el cuerpo del ofendido y que anula su resistencia, y en cuanto a la violencia moral, el empleo de amagos o amenazas graves que se le infirieron e intimidó de tal forma, que le imposibilitó resistirse al acto sexual. Ello se estima así, dado que las circunstancias señaladas por el pasivo, no constituyen el elemento de la violencia que requiere para su configuración el delito de equiparable a la violación que ahora se les reprocha a los acusados, dado que a ese respecto, debe señalarse en primer lugar, que si bien es cierto que el pasivo dijo que el día de los hechos sufrió agresiones físicas por parte de los acusados, lo cual en parte se corrobora con el dictamen médico relativo al examen que al mismo se le practicó; también lo es, que de ello no se puede concluir que haya sido como resultado del hecho que hoy se duele el pasivo, pues como bien se observa de su declaración, las agresiones físicas que recibió ese día, se originaron por diversa causa y momento, esto es, cuando se negó a fumar un cigarro; no advirtiéndose que de dicha situación hubiese existido una connotación directa con el hecho a estudio, ya que el propio pasivo señaló que después de que fue golpeado, el acusado F.R., le dijo que se quitara la ropa o de lo contrario, lo golpearían de nueva cuenta, por lo que el pasivo procedió a bajarse su pantalón y boxer, pero como los acusados se estaban burlando de esta última prenda, el mismo decidió subírsela, al igual que su pantalón, el cual se lo abrochó, y los demás siguieron burlándose, y después de esto, según su expresión, fue cuando el acusado J. D. le manifestó que tenía que hacerle sexo oral a cada uno de los acusados, lo cual realizó debido al miedo que dijo sentir de que aquél le aventara un block con el cual lo amenazaba con aventárselo; de

donde resulta que de estos hechos narrados no se desprende violencia física alguna en contra del que se dice ofendido para lograr el ayuntamiento carnal, y que es precisamente en el momento en que dijo el pasivo que les realizó sexo oral a cada uno de los acusados; asimismo es menester señalar que de ello tampoco se acredita la violencia moral a la que el supuesto pasivo dice fue sometido, debido a que su dicho no se encuentra apoyado con probanza alguna que de manera indudable hagan manifiesto el peligro actual e inminente al que se vio sujeto en virtud de la supuesta amenaza que dijo recibir por parte del acusado J.D., y que además, ello hubiese sido realizado de tal forma que al mismo lo haya imposibilitado para resistirse del acto sexual; esto es así, porque se advierte de la propia declaración del pasivo que en el lugar donde aconteció el hecho, se encontraban cerca de él varios de sus amigos, de los cuales si bien señaló que se encontraban dormidos, ello no resulta suficiente para estimar que el mismo se hubiese sentido imposibilitado para efecto de realizar acción alguna con la finalidad de solicitarles su ayuda para no consumar lo que supuestamente le era obligado a realizar en ese momento; o bien, que realizara lo que posteriormente llevó a cabo, una vez terminado el acto sexual, que fue el hecho de descender las escaleras y dirigirse a la planta baja, en donde al tocar la puerta, le fue abierta por una persona, y así logró salir de dicho domicilio; es por ello que se estima que tampoco se acreditó la violencia moral (vis compulsiva) como medio preparatorio que requiere la Ley para la obtención del acceso carnal, pues tal violencia debe ser capaz de vencer la resistencia del pasivo por la grave amenaza de que es objeto, de modo que se presente como causa inmediata y directa de dicho acceso, pues el que se dice víctima solo refiere que sintió miedo ante la supuesta amenaza recibida por parte del acusado J. D., dado que ésta, no surte efecto cuando se conjetura de lo que puede o no acaecer, como bien se aprecia, ocurrió en este caso, al señalar el pasivo que le dio miedo de que el acusado J. D. le aventara el block que traía, mas sin embargo, por las circunstancias ya señaladas en líneas precedentes, es por lo que se deja establecido la no demostración de la violencia en el ilícito a estudio. Por otra parte, esta Sala revisora no pasa por alto el hecho de que el que se dice ofendido presenta una condición de sordomudez, sin embargo el hecho imputado a los ahora acusados fue encuadrado durante la secuela procesal, en el artículo 268 del Código Penal Vigente en el Estado, el cual, para su comprobación se requiere necesariamente el uso de la violencia física o moral, dado que el único delito de equiparable a la violación en el cual no es necesario acreditar estos supuestos es el contenido en el artículo 267 del mismo Código de referencia y queda a cargo del Ministerio Público, en su función de Órgano acusador, demostrar que el sujeto pasivo al encontrarse impedido para articular lenguaje, era incapaz de resistir la cópula por lo que carecía de voluntad y conciencia para realizar el acto sexual; y por consiguiente encuadrar dicha acción, bajo la norma legal correspondiente, ya que de caso contrario, se pasaría por alto la garantía de legalidad en materia penal que señala el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que en los juicios de orden criminal, se prohíbe imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata; y como bien se observa en este asunto, el ilícito de equiparable a la violación que se les imputó a los acusados, fue encuadrado bajo el dispositivo legal 268 de la Legislación

Sustantiva de la Materia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 88/03, relativo al proceso número 400/00, instruido en contra de A.L.V., F.R.S., y J.L.U. por el delito de Equiparable a la Violación en su Modalidad de Pandillerismo. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

196. VIOLACIÓN. ELEMENTO COPULA SE DEMUESTRA AUN CUANDO LA PENETRACIÓN SEXUAL SEA O NO TOTAL. Sin que generen duda, con los medios probatorios está demostrado el elemento cópula, que en su más amplio sentido consisten en la conjunción o ayuntamiento carnal, que siempre implica la introducción del pene en el cuerpo de otra persona, puesto que si bien, en el dictamen médico realizado por los peritos oficiales, se establece que la menor denunciante presentaba himen íntegro, y que ello significa que no existía desgarro, agregando la primera que eso se debe a que no sufrió una dilatación excesiva provocada por la introducción de algún objeto, ello contrario a lo que concluye el Juez de la Causa no es significativo, que no haya existido la cópula, puesto que son dos circunstancias muy diferentes, tan es así, que para que exista el delito en comento, no se requiere que exista desfloramiento, sino únicamente cópula, la que se tiene por realizada aún cuando no se agote fisiológicamente el acto sexual, incluso, para los efectos de dar por integrado el tipo de violación, basta que se acredite que hubo penetración sexual independientemente que sea o no total, e incluso no es indispensable el orgasmo del activo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 363/99, relativo al proceso número 123/99, instruido en contra de R.C.G., por el delito de EQUIPARABLE A LA VIOLACION.- Sentencia emitida el 22 de octubre de 1999.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

197. VIOLACIÓN, NO SE ACREDITA SU EXISTENCIA SI NO SE JUSTIFICAN TODOS SUS ELEMENTOS. No se encuentra acreditada la existencia de dicho ilícito, pues si bien es cierto que el primer elemento se encuentra justificado mediante el dictamen de laboratorio de criminalística, elaborado por los P. Q. F., D. A. P. G. y H. M. V. S., adscritos al Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se determinó en conclusiones, que los frotis tomados de vagina y ano de S. L. T. M., resultaron positivo en vagina y negativo en ano; aunado al dictamen de autopsia número 647/98, elaborado por el Dr. E. G. S. y E. R. P. G., Peritos Adscritos a la Institución antes mencionada, en el que se estableció que a la exploración de órganos genitales, la menor T. M. presentaba desfloración antigua con escotaduras hasta la base del himen a las 5 y 7 del reloj con mucosa escoriada en orquilla posterior; también es que el segundo elemento del delito en estudio, el cual es un medio operativo señalado por la ley para la configuración del ilícito, que consiste en que dicha acción de cópula se ejecute sin consentimiento de la víctima, por medio de la violencia física o moral, debe decirse que éste no se encuentra fehacientemente acreditado; pues no obstante que la Delegada del Ministerio Público, al realizar la fe e inspección cadavérica, estableció que la victima presentaba escoriaciones dermoepidérmicas en la pierna y antepierna del lado derecho e

izquierdo, escoriaciones en mejilla del lado derecho e izquierdo, escoriaciones en ambos glúteos, espalda y pecho del lado derecho, desprendimientos de piel en brazo del lado derecho, pierna y ante pierna del mismo lado; es menester precisar que en la misma fecha y en el mismo lugar, los A. R. de E., al rendir su informe indicaron que el Médico Legista, al revisar el cuerpo de la hoy occisa, mencionó que ésta no presentaba aparentemente signos de violencia externa; por lo tanto, merece mayor credibilidad el informe recabado por los peritos recolectores de evidencias, en virtud de que éste fue levantado en base a la opinión de un médico legista, mientras que la delegada del ministerio público, no es perito en la materia. Además, en el dictamen de autopsia, los peritos establecieron que al examen traumatológico, el cadáver de la victima presentó escoriaciones dermoepidérmicas en cara lateral de cadera derecha, en glúteo derecho y cara anterior de rodilla derecha, así como otras que son del tipo post mortem, por lo que se deviene que no existió violencia física en la realización de la cópula con la menor. Por otra parte, en cuanto al dictamen de laboratorio, emitido por los citados peritos, relativo a las prendas de vestir recolectadas en el lugar de los hechos, en el que se establecen, entre otras cosas, que el pantalón de mezclilla en color rojo, marca Rifle, talla 5, presentaba el broche de ajuste del ziper, sujeto sólo de un lado de los dientes, mientras que en el otro lado le faltaban dos dientes metálicos, así como que el brassiere en color blanco, marca Talía, talla 32 A, presentaba uno de los broches de ajuste incompleto; es pertinente destacar que de acuerdo a la acta de fe e inspección cadavérica y el informe de los A. R. de E., al momento en que fue hallado el cadáver de la menor S.L.T.M., éste se apreciaba desnudo de la cadera hacia abajo, es decir, que presentaba su blusa y su brassiere en posición normal, y sobre su abdomen sus otras prendas de vestir; por lo tanto, tal dictamen de laboratorio de criminalística, resulta inapropiado para justificar la existencia de la violencia física para lograr el consentimiento de la cópula, tal como erróneamente lo determina el Juez A-quo, pues no existen elementos de convicción que acrediten la falta de consentimiento; así pues, si bien el dictamen de laboratorio, en el cual se determinó que a la observación de las uñas de las manos derecha e izquierda, se detectaron unas fibras de color verde; fue apreciado para acreditar la existencia del delito de Homicidio y la responsabilidad de G. E. C. D., en su comisión; también es que éste se tomó en consideración, pero tomando en cuenta que las fibras encontradas en las uñas de la occisa, fueron debido a la asfixia por sofocación a que fue sujeta; es decir que dichas fibras de color verde, pertenecientes a la camisa que el activo traía el día de los hechos, éstas se pudieron haber recabado al momento de que la menor movía sus manos para hacer algo; como pudo ser la acción de tratar de defenderse al momento que le eran obstaculizadas sus vías aéreas para impedir la ventilación pulmonar; aún más, porque es de observarse que dentro de los autos obra el dictamen emitido por la Q. F., M. E. V. D., en el que determinó que del resultado del Laboratorio, se concluyó que con base a los resultados de los perfiles de ADN, obtenidos de la fracción de esperma y fracciones de no esperma de la placa vaginal (muestra 1), son consistentes una con otra, consistente con haberse originado con una persona del sexo femenino, y distinta de perfil de ADN, obtenido de la muestra de células de la descamación bucal de G. E. C. D., por lo que se excluye al mencionado C. D., como la fuente del material genético de esas muestras; en tal razón, al no acreditarse el segundo elemento del delito en cuestión, y

por consecuencia el tercer elemento, es decir el nexo de causalidad, se determina que en la presente causa no se acreditó la existencia del delito de Violación, por lo que se dicta sentencia Absolutoria. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en definitiva número 05/03, relativo al proceso número 572/98, instruido en contra de C.D.G.E. por el delito de Homicidio y Violación. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

198. VIOLACIÓN Y EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, NO SE ACREDITAN, AL EXISTIR CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA PASIVO. Si bien, la ofendida denunció haber sido atacada sexualmente por el inculpado, por vías vaginal, anal y oral, argumentando que fue amagada con un cuchillo por el activo, también resulta cierto que su declaración es totalmente inverosímil y sin corroboración alguna, ya que se desprende claramente que la pasivo no opuso resistencia real, seria, efectiva y constante, pues el amago con el cuchillo (violencia moral) fue según su dicho, en un principio, ya que el primer ataque sexual fue en una de las recámaras de la planta alta, en donde se quedó el arma, para posteriormente conducirla a la sala y comedor de la planta baja en donde supuestamente también fue agredida en varias ocasiones, sin embargo, no obra en la causa elemento de prueba alguna en donde conste que la ofendida haya sido agredida físicamente, además resulta ilógico y poco creíble, que ni su hija de nueve años de edad que se encontraba dormida en la misma cama que la pasivo, ni su hijo de diecisiete años de edad, quien se encontraba dormido en el cuarto contiguo a la recámara de la pasivo a una distancia de cincuenta centímetros, se hayan despertado, pues una reacción común y espontánea por parte de la ofendida al darse cuenta de la presencia del inculpado, sería tratar de resistirse a la conducta que dice estaba ejecutando el acusado en su persona, como el haber hecho algún movimiento brusco o simplemente gritar, por lo que su versión resulta insuficiente para acreditar los delitos atribuidos al inculpado ya que se aprecia que en ningún momento existió negativa de voluntad expresa o tácita, pero efectiva y constante por parte de la pasivo, ni por ende hubo necesidad de que el inculpado empleara la violencia física o moral, como medio operatorio para la obtención del acceso carnal o para la introducción vía vaginal o anal, o este último por la vía oral, que fuere capaz de superar o vencer la resistencia de la pasivo, por lo que nunca existió el elemento esencial e indispensable que caracteriza a este tipo de ilícitos como lo es la violencia física o moral. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de apelación en artículo número 693/01, relativo al proceso penal número 125/01, instruido en contra de BERNARDO JESUS DOMINGUEZ ORTIZ, por los delitos de Violación y Equiparable a la Violación. Sentencia emitida el 4 de Diciembre de 2001. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

199. VIOLENCIA FAMILIAR. ARTÍCULO 287 BIS. NO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DEL CONCUBINATO CUANDO UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA UNIDO EN MATRIMONIO. Si bien se justifica que existió vida marital

entre el acusado y la afectada durante un tiempo aproximado de seis años, manifestando en sus comparecencias aquél su condición civil de vivir en unión libre con esta última, mientras que la citada J. I. refirió desde su denuncia que es casada con el señor A. R. A., además en la copia certificada del acta de nacimiento de la menor ofendida K. I. R. G., visible a foja 62 aparece como padre de dicha menor tal persona, corroborando tal condición las C.C. T. P. M. y B. M. G. P. Luego entonces, contrario a lo que se establece en el fallo recurrido, no se acreditó uno de los elementos del delito de Violencia Familiar, como lo es la existencia del estado de un hombre y una mujer no casados que conviven maritalmente, como lo es el CONCUBINATO, por tanto no se actualiza la calidad de concubino por parte del activo, no demostrándose el cuerpo del delito de que se trata y por consecuencia tampoco la probable responsabilidad del apelante en su comisión. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEGUNDA SALA Toca en artículo número 288/2003, derivado del Expediente número 532/2002, instruido en contra de D. U. G. M. por el delito de Violencia Familiar y Otros. Sentencia emitida el 24 de Septiembre de 2003. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

200. VIOLENCIA FAMILIAR, EL SOBRESEIMIENTO OPERA CUANDO EL PERDÓN DE LA MENOR DE 14 AÑOS ES RATIFICADO POR QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD. Si bien el artículo 646 y el diverso 23, ambos del Código Civil vigente, establecen respectivamente que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, y que la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la Ley, son restricciones de la personalidad jurídica; también es cierto que este último precepto señala que los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, además, el artículo 148 del mismo Ordenamiento Civil, establece que la mujer de 14 años cumplidos puede contraer matrimonio, lo que la hace apta para obtener derechos y adquirir obligaciones dentro del mismo; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 127 del Código Procesal Penal vigente, que refiere que tratándose de menores de 16 años, o de otros incapaces, la querella se presentará por quienes ejerzan la patria protestad o la tutela, se tiene que con fundamento en el artículo 414-Bis del Ordenamiento Civil vigente antes mencionado, la madre ejerce el derecho de legítima representación de la menor pasivo, aunado a que, de conformidad por lo previsto por los artículos 424 y 425, ambos del referido Ordenamiento Civil, la menor, al momento de comparecer ante el Juez Natural, lo hizo en compañía de su madre, quien ejerce el derecho de la patria potestad sobre dicha menor, y en carácter de su legítima representante, expresó su consentimiento para que la menor otorgara el perdón a favor del acusado; por ende, tomando en cuenta lo anterior, debe decirse que cuando el ofendido es un menor de edad, corresponde a su representante legal el otorgarlo para que surta sus efectos, tal como aconteció en la especie, por lo que habrá de tenerse por extinguida la acción penal a favor del acusado, decretándose el sobreseimiento de la causa de conformidad con la fracción I del artículo 369 y el diverso 371, ambos del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en

Definitiva número 215/02, relativo al proceso número 272/2001, instruido en contra de M. S. R. por el delito de Violencia Familiar. Sentencia emitida el 03 de Octubre de 2002. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

201. VIOLENCIA FAMILIAR. GRAVEDAD Y REITERACIÓN SÓLO LAS EXIGE EL ARTÍCULO 287 BIS DEL CÓDIGO PENAL, RESPECTO A LA CONDUCTA DE OMISIÓN. *Son* fundados los agravios en cuanto que la figura delictiva de Violencia Familiar, prevista por el numeral 287 Bis del Código Penal en vigor, mismo que se transcribió en párrafos anteriores, efectivamente no prevé dicho supuesto, esto es, no exige que la conducta de "acción" sea de naturaleza grave y reiterada, como lo señala el Juez de la causa, dado que claramente dispone: *"...realice una acción o una omisión, y que esta última sea grave y reiterada..."*, por lo que de una interpretación armónica, se infiere que las circunstancias calificativas de "gravedad" y "reiteración" sólo las exige, respecto a la conducta de "omisión", ya que de considerar lo contrario sería vulnerar la ratio essendi del delito de violencia familiar, pues es innegable que tratándose de una conducta de "acción", por sí sola puede causar daño físico o psicológico a algún miembro de la familia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA. Toca en artículo 17/2004, proceso número 210/2004, instruido en contra de E.G.V. y S.C.D. por el delito de Violencia Familiar. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

202. VIOLENCIA FAMILIAR INEXISTENTE CUANDO NO SE JUSTIFICA EL CONCUBINATO. Para que se actualice dicho ilícito es indispensable que el sujeto activo al momento de los hechos, sea alguna de las personas que refiere el artículo 287 Bis del Código Penal vigente en el Estado, y si de la denuncia se desprende que el activo se separó de la denunciante desde hace quince días al momento de los hechos, y por ende cesa la vida en común que llevaban. Entonces, la imputación por violencia familiar en contra del activo no se configura ya que los participantes de los hechos, dieron por terminada su relación de concubinato quince días antes de suscitarse los hechos, cesando su vida en común, pues esa relación es de momento a momento y puede darse por terminada, en virtud de ser necesaria la vida en común, para que exista la relación de concubinato. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca en definitiva número 431/01, derivado del Proceso Penal número 88/01, instruido en contra de J.M.S. por los delitos de Lesiones Sujetas a Proceso y Violencia Familiar. Sentencia emitida el 7 de Enero de 2002. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

203. VIOLENCIA FAMILIAR. LA NUEVA LEY NO DEJA DE CONSIDERARLA COMO DELITO, SOLO ADICIONO EL TIPO, INCORPORANDO COMO DELICTIVA LA CONDUCTA DE "OMISION" Y CALIFICANDO ESTA COMO "GRAVE REITERADA". El artículo 10 del Código penal en vigor dispone: "Cuando una nueva ley deja de considerar un determinado hecho como delictuoso, se ordenará la

libertad de los procesados o sentenciados, cesando el procedimiento o los efectos de la sentencia, con excepción de la reparación del daño cuando ya se haya hecho efectiva. En caso contrario se dejarán a salvo los derechos del ofendido.". En el caso e delito de VIOLENCIA FAMILIAR por el cual se le dictó sentencia de condena al sentenciado en esta Segunda Instancia, de fecha veintitrés de abril del 2004-dos mil cuatro, es el previsto por el artículo 287 Bis, cuya redacción, en aquella época, reza al tenor de lo siguiente: " Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habitando o no en la casa de la persona agredida, realice una acción que dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de su familia, independientemente que pueda producir o no otro delito." Como lo aduce el peticionario, el día veintiocho de abril del 2004-dos mil cuatro, se publico en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 81, mediante el cual se reforma por adición y modificación el Código Penal del Estado y, en lo que nos interesa el artículo 287 Bis, que contempla el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, para quedar su redacción actual de la siguiente manera: "Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; adoptante o adoptado; que habitando o no en el domicilio de la persona agredida, realice una acción o una omisión grave reiterada, que dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de su familia de la concubina o del concubinario.". Con base a lo anterior, esta Autoridad después de analizar el tipo delictivo de VIOLENCIA FAMILIAR, tanto en su redacción anterior al veintinueve de abril del 2004-dos mil cuatro, como en la vigente a partir de tal fecha, llega al pleno convencimiento de que contrario a la pretensión del sentenciado, la nueva ley no dejo de considerar como delito la VIOLENCIA FAMILIAR, sino que únicamente se adiciono el tipo contenido en el artículo 287 Bis, incorporando como delictiva la conducta de "omisión" y calificando que esta debe de ser "grave reiterada", adición la anterior que de ninguna manera dejo de considerar como delito el hecho por el cual fue sentenciado el peticionario, pues a aquél se le encontró penalmente responsable de una conducta de "acción" consistente en inferir un daño físico a su menor hijo, siendo el caso que, el artículo 287 Bis que se encuentra en vigor a partir del día veintinueve de abril del 2004-dos mil cuatro, continúa contemplando como delictiva tal conducta de "acción".- En razón de lo anterior, se concluye que la nueva ley (artículo 287 Bis) no deja de considerar como delito de VIOLENCIA FAMILIAR la conducta de acción por la cual se condenó al peticionario por lo que se DESECHA de plano la petición formulada, al no encontrarse dentro del supuesto contenido en el artículo 10 del Código Penal en vigor. No es obstáculo alguno para lo anterior el argumento que aduce el promovente en el sentido de que la actual redacción exige que la "acción u omisión sean graves y se realice de manera reiterada", ello en razón de que de la simple lectura del contenido actual del artículo 287 Bis del Código Penal en vigor, se pone de manifiesto que la conducta de "acción" se continúa considerando como delictiva, además que, no exige el precepto que tal acción sea de naturaleza "grave reiterada" como lo pretende hacer ver el sentenciado, pues de la

descripción típica contenida en el actual 287 Bis se advierte que la circunstancia calificativa de "gravedad y reiteración" solo las exige el precepto respecto a la conducta de "omisión" que fue el motivo de la adición en la reforma de tal precepto legal, aunado a que considerar lo contrario sería vulnerar la ratió essendi del delito de violencia familiar, pues es innegable que en tratándose de una conducta de "acción", por si sola puede causar el daño físico o psicológico a algún miembro de la familia, por lo que no requiere de un juicio valorativo de la autoridad para determinar la gravedad o reiteración, pues el resultado que produce la acción, por sí mismo es integrador del delito que nos ocupa; por ende NO HA LUGAR a acceder a lo peticionado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Toca de apelación en definitiva número 101/2004, derivado del proceso número 142/03, instruido en contra de M. Z. G. por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones sujetas a proceso. Sentencia emitida el 20 de Mayo de 2004. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

204. VIOLENCIA FAMILIAR NO CONFIGURADO. DICTAMEN MENTAL, NO EFICAZ PARA ACREDITAR DAÑO PSICOLÓGICO. Como se advierte del contenido de la experticia que fue realizada por parte de la Licenciada A. B. R., Psicóloga Clínica designada por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, no se establece los motivos que le permitieron llegar a la conclusión de que la pasivo CH. C. presentaba síntomas clínicos de reacción a estrés agudo; al no apreciarse en tal pericial, signos característicos que evidencian tal estado, asentándose únicamente que la pasivo posee conciencia normal, orientación normal en tiempo, lugar y persona, acorde a su edad, memoria normal, actitud y posición libremente escogida, contacto visual bueno, en el lenguaje curso y volumen normal, alteraciones sensopercepción ninguna, pensamiento e inteligencia normal, y si bien se advierte en dicho dictamen afecto ansioso y depresivo, no se asienta en que se hicieron consistir tales estados característicos de la neurosis, máxime que en la experticia psicológica se estableció como conclusión por parte de la experta sobre la presencia de stress agudo detectado en la persona de G. I. Ch. C., pero respecto al cual, no asentó en la experticia de manera debida los signos característicos que hicieran evidenciar tal estado en la paciente; por lo cual resulta obvio que no se le causó algún daño psicológico con motivo de la conducta que fue desplegada por el acusado V. M. M. G. hacia la referida Ch. C. Más aún, porque del contenido de la experticia de mérito, se advierte que la psicóloga A. B. R. no establece las operaciones y experimentos que su ciencia le exige para su elaboración, ni mucho menos indica los hechos y circunstancias que tomó en cuenta para su realización, lo que viene a ser la esencia del dictamen pericial, según lo establecido por el artículo 251 del Código Procesal Penal en vigor, por lo que al no establecerse en tales evaluaciones una opinión razonada, basada en la técnica propia de su ciencia, debe concluirse que no se reúnen los requisitos indispensables para constituir un dictamen pericial propiamente dicho, por lo que debe restársele valor probatorio a la experticia mental aludida ya que la misma no se encuentra fundada en las pruebas de la causa, ya que si bien se basó para su elaboración en la entrevista que tuvo con la citada pasivo G. I. Ch. C., también se observa

que la conclusión a la que llega la perito en psicología, como lo es el síntoma clínico de reacción a estrés agudo, es como consecuencia de la actitud amenazante y manipuladora con la que le informó la pasivo actúa su esposo V. M. M. G., por tanto, dicho resultado obedece más que a un resultado científico, sólo a una mera apreciación subjetiva, que no demuestra por sí solo que a la pasivo de referencia se le haya causado un daño psicológico al momento en que el acusado le profirió la frase "que iba por una pistola para matarla y luego matarse ya que no le importaba nada". Luego entonces, debe decirse que en la especie no se acredita la existencia del delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto en el numeral 287 Bis del Código Penal del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia dictada en fecha 2-dos de febrero del año 2005-dos mil cinco, Toca en Definitiva número 517/2004, Proceso 421/2001, instruido a V. M. M. G., por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

205. DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR. LA SANCIÓN A IMPONER TIENDE A PROTEGER EL NÚCLEO FAMILIAR. El delito de VIOLENCIA FAMILIAR es el previsto por el artículo 287 Bis del Código Penal en vigor, precepto que establece como figura delictiva la siguiente: Artículo 287 Bis:- "Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; adoptante o adoptado; que habitando o no en el domicilio de la persona agredida realice una acción o una omisión, y que ésta última sea grave y reiterada que dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de su familia, de la concubina o del concubinario. Si además el delito de violencia familiar resultase cometido otro, se aplicarán las reglas del concurso.". La figura típica descrita en el precepto invocado, se distingue por que el resultado dañoso que puede producir la conducta, daño físico o psíquico, puede recaer en "...uno o varios..." miembros de la familia, de lo que se deviene, en opinión de quien ahora resuelve que la protección y por consecuente la sanción a imponer tiende a proteger el núcleo familiar, sin importar si es uno o varios de los miembros que integran la familia los que resultan dañados, por el actuar u omisión en que incurra el agente activo del delito; de aquí que resulta inexacto aplicar una sanción por cada uno de los miembros de la familia que presente un daño, pues, se repite, al contemplar el tipo penal descrito la posibilidad de un resultado múltiple, pone de manifiesto que lo que sanciona el ilícito es la afectación a la familia y, en su caso, la consecuencia derivada de aquella cuando constituya un delito diverso es la que debe ser motivo de la aplicación de las reglas de concurso, en los términos contemplados en el segundo párrafo del artículo 287 Bis ya trascrito. En estas condiciones, en suplencia de la omisión de queja, se determina que la sanción que se deberá imponer a J.A. G.L., por su plena responsabilidad en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en perjuicio de su cónyuge y de sus hijos debe de sancionarse en términos del primer párrafo del artículo 287 Bis I del Código Penal vigente al momento de la comisión delictiva. Debiéndose imponer la sanción respectiva como unidad, respecto al múltiple resultado dañoso producido, sin aplicación de la regla de concurso real que incorrectamente estimó

el Juez de primer grado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 15 de Junio del 2005, Toca Def. 147/2005.- Proceso No. 288/2003.- Acusado: J.A.G.L. Delitos: VIOLENCIA FAMILIAR y AMENAZAS. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

206. CALIFICATIVAS. ARTÍCULO 316 FRACCION I DEL CODIGO PENAL.- NO SE ACTUALIZA LA PREMEDITACIÓN. En el caso concreto no se acredita la calificativa prevista por el artículo 316 fracción I del Código Penal en vigor, ya que el citado incriminado no tuvo oportunidad de reflexionar sobre el delito que iba a cometer.- Lo anterior es así, al considerar que el día de los hechos la victima le reclamó al acusado, lo cual molestó al sujeto activo quien tomo un cuchillo de la cocina, momento en el cual la ahora occisa procedió a morder uno de los dedos de la mano izquierda del acusado lo que provoco mayor enojo de éste, razón por la cual la hirió con el cuchillo lo cual produjo el fenecimiento de la victima.- Por ende, se colige que el citado acusado lejos de preparar y proyectar el ilícito en cuestión, lo ejecutó a virtud de un trance emocional llevado simplemente por un impulso emotivo, ya que antes de haber privado de la vida a la sujeto pasivo, fue insultado y mordido en uno de los dedos de su mano izquierda por la víctima, aunado al hecho de que el incriminado el día de los hechos se encontraba intoxicado con tolueno, por ende el acusado V. C. no alcanzó la madurez en proceso de reflexión o deliberación, por lo que en la especie no existió la premeditación, ya que no existió algún intervalo de tiempo en el cual el inculpado reflexionara sobre la conducta ilícita desplegada. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 29 de Junio del 2005, Toca Def. 75/2005.- Proceso No. 60/2004.- Acusado: J.F.V.C., Delitos: HOMICIDIO CALIFICADO. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

207. HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.- NO SE CONFIGURA SI EXISTE DESISTIMIENTO ESPONTÁNEO DEL PROCESO EJECUTIVO PARA NO VERIFICARSE EL RESULTADO. Si en el caso R. S. B. realizo actos de ejecución idóneos, encaminados directamente a la consumación del injusto de homicidio en perjuicio de P. T., al disparar en tres ocasiones con un arma de fuego en la corporeidad del citado ofendido, sin que se produjera el delito de homicidio ya que fue interrumpido el proceso ejecutivo, al haber exteriorizado el acusado en forma voluntaria la decisión de abandonar la ejecución de los actos futuros, pero próximos y necesarios para arribar al resultado de privar de la vida al ofendido.- Lo anterior se concluye, ya que como se preciso con anterioridad los hechos delictivos se suscitaron en vía pública, aproximadamente a las 23:45 horas, donde el acusado R. S. B. disparo en tres ocasiones al sujeto pasivo P. T., siendo que dos disparos se proyectaran en la pierna y otro en palma de la mano del ofendido, sin que dichos actos de ejecución fueran impedidos por causas ajenas la voluntad de quien representó el hecho, dicho en otras palabras, los medios estaban a disposición del inculpado en comento, al no tener ningún impedimento para seguir con la

conducta delictiva de seguir disparando con el arma de fuego al ofendido para privarle la vida, o sea hasta llegar al resultado y aun así no lo hizo, al desistir espontáneamente del proceso ejecutivo para no verificarse el resultado, ya que se retiró del lugar de los hechos por voluntad propia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 6 de julio del 2005, Toca en Art. 30/2005, Proceso penal No. 230/04.- Acusado: R.S.B., Delito: HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

208. FALSEDAD EN DECLARACIONES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD. NO SE CONFIGURA SI EL SUJETO ACTIVO NO HA SIDO INTERROGADO, SINO QUE SE CONDUCE DE MOTU PROPIO EN FORMA MENDAZ. La interpretación del artículo 249 fracción I del Código Penal en vigor, conlleva a estimar que la declaración falsa proporcionada a una autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, contemplada en dicho numeral, es exclusivamente aquella que se produce al tiempo en que una persona es interrogada, o sea, cuestionada directamente por la autoridad pública, por lo que si en la especie ante el C. Agente del Ministerio Público Investigador, compareció A. T. T. a presentar una denuncia de hechos que estimó delictuosos y se conduce motu propio en forma mendaz, ello pudiera encuadrar en algún otro tipo penal, mas no en el que se examina, puesto que el numeral 249, fracción I del Código Penal, prevé requisitos específicos para tipificar el delito, entre los que está precisamente el relativo a que el sujeto activo sea "interrogado".- Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia cuyo rubro es “FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 247, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL)”. De ahí que la apreciación del apelante, es inexacta, pues el acontecer descrito carece del elemento normativo específico propio del ilícito que nos ocupa, previsto en la fracción I del artículo 249 del ordenamiento sustantivo de la materia, identificado con que el acusado haya sido interrogado. Ello es así, porque de la interpretación del mencionado artículo, se desprende que la exigencia normativa que posee, trasciende de una simple manifestación falaz espontánea del sujeto activo, a la necesidad de un cuestionamiento directo. En este orden, es claro que la conducta que se imputa a A.T.T. no puede encuadrarse en el tipo penal a estudio, porque este ciertamente manifestó haber sido víctima de un robo del vehículo Volkswagen tipo sedan modelo 2002 con placas de circulación 5106 MKL del Estado de Nuevo León, color verde y blanco con la leyenda de Taxi en las puertas, ello a sabiendas de que esa afirmación era falsa, como posteriormente según el informe rendido por el Detective responsable de la división de vehículos reportados como robados, lo que sin embargo realizó de motu propio, no como consecuencia de ningún interrogatorio que el Ministerio Público le haya formulado. De lo anterior se desprende que aunque la conducta de A.T. T. pudiera ser formal y materialmente antijurídica, no encuadra en el delito que se le atribuye previsto en la fracción I del artículo 249 de la ley sustantiva de la materia, sino, en todo caso, en tipo diverso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada

en fecha 4 de Agosto del 2005, Toca Art. 109/2005, Proceso No. 129/2005, Acusado: A. T.T. Delitos: FALSEDAD EN DECLARACIONES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.- Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

209. INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION. DEBE SER MOTIVO DE ESTUDIO EN EL MOMENTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO AL DICTARSE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Independientemente de que el artículo 67 del Código Penal, se refiere a una presunción, de acuerdo al contenido de los artículos 65 y 66 del Código Punitivo en vigor, estos tienen relación directa con la individualización de la sanción, aspecto que debe ser motivo de estudio en el momento del dictado de la sentencia definitiva, es decir su análisis es en un estadio procesal muy diverso al del dictado de auto de formal prisión y por lo tanto el juez de primera instancia no estaba obligado a determinar el grado de culpa al momento de pronunciar el auto cabeza del proceso, sin que pase por alto que el Juez de origen, si observó el dictamen medico numero 04486 practicado por el medico de guardia de la Cruz Verde y ponderó el mismo, tan es así que estimo que del mismo "se desprende que al momento de que se le practicó dicho examen al ahora querellado Salvador Saldaña Meléndez, este se encontraba con presencia de alcohol en su organismo con 234 grados de alcohol, catalogado como ebriedad completa", sin embargo a pesar de ello, no estaba obligado a determinar en el auto de formal prisión recurrido, el grado de culpa del acusado y menos a determinarla como grave, como lo pretende la representación social, pues acorde con lo que dispone el artículo 65 del Código Penal en vigor, es al momento de individualizar la pena donde el juez haciendo uso de su arbitrio judicial calificara el grado de culpa, para lo cual deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 47 del mismo Código y las que enumera el citado artículo 65. A mayor abundamiento, debe decirse que no pasa desapercibido lo que prevén los artículos 343 y 344 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que el primero de los numerales en cita, señala en lo conducente, que el Ministerio Publico, al formular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; mientras que el segundo numeral prevé en lo que aquí interesa, que deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la imposición de las sanciones correspondientes, que estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida, que para este último fin, el Ministerio Público considerará las reglas que el código penal señala acerca de la individualización de las penas o medidas. De la transcripción de dichos numerales se deviene que en la etapa de juicio al formular sus conclusiones, el Ministerio Público tiene la oportunidad de peticionar al de primer grado, lo concerniente a la imposición de las sanciones correspondientes, haciendo una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado y señalando las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena, considerando para este último fin las reglas que el código penal señala acerca de la individualización de las penas y será en la

sentencia definitiva donde el Juez analizará las pretensiones que se le planteen al respecto y resolverá lo que conforme a derecho proceda. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 2 de Noviembre del 2005, Toca Art. 166/2005, Proceso No. 203/2005, Acusado: S. S. M. Delitos: DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TITULO DE CULPA. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

210. NO SE DEMUESTRA EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE SELLOS, LLAVES, CUÑOS O TROQUELES Y MARCAS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 243 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. En primer término tenemos que el delito de FALSIFICACIÓN DE SELLOS, LLAVES, CUÑOS O TROQUELES Y MARCAS, se encuentra previsto por el artículo 243 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, el cual a la letra dice: 243: "Se impondrán de uno a diez años de prisión, y muta de diez a cuarenta cuotas: I.-Al que falsifique los sellos o marcas oficiales..." Tras analizar dicho dispositivo legal, es el caso señalar que por sello oficial, debe entenderse el instrumento mediante el cual se le imprime una determinada figura que sirve para identificar ciertos documentos como provenientes de una autoridad en ejercicio de su función pública. De ahí que dicha figura delictiva no puede demostrarse en la presente causa que se estudia, en la cual el hecho imputado al acusado consistente en haber falsificado el sello de certificado del Banco Nacional de México que obra en el reverso de un título de crédito denominado "cheque"; ello toda vez que dicho sello pertenece a una Institución privada como lo es el referido banco BANAMEX, en consecuencia tal sello de ningún modo puede considerarse como oficial, al no ser utilizado por una autoridad pública para autentificar sus actos, lo anterior impide acreditar a figura delictiva de FALSIFICACION DE SELLOS, LLAVES, CUÑOS O TROQUELES Y MARCAS. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca de apelación en Artículo 184/2005 relativo al proceso 373/2004 instruido en contra de A.G.G. por el delito de FALSIFICACIÓN Y USO DE SELLOS, LLAVES, CUÑOS O TROQUELES Y MARCAS Y FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS EN GENERAL. Sentencia emitida el 30-treinta de Septiembre del 2005-dos mil cinco.

211. COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. CASO EN EL QUE NO DEBE ATRIBUIRSE LA AFECTACIÓN O DETERIORO DE UNA FINCA DADA EN ARRENDAMIENTO, A UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Esta autoridad de alzada no comparte el criterio de considerar que los daños materiales que presenta la finca afectada, de los que diera fe el Ministerio Público y que fueron causados por la remoción de las instalaciones de alumbrado, energía eléctrica, gas y clima artificial; no constituyan delito, sino que participen de una naturaleza civil, atendiendo al hecho de que en el contrato de arrendamiento celebrado entre el denunciante como arrendador y como arrendataria la empresa en mención, respecto de dicho inmueble, los contratantes convinieron en una de sus cláusulas que se reputarían como obras de las que deben quedar en beneficio de la

finca, las instalaciones de alumbrado, energía eléctrica, gas y clima artificial que hiciere el inquilino y que éste es responsable de los daños y perjuicios que se causen al arrendador por el incumplimiento de dicha estipulación. Lo anterior, en razón de que no pude considerarse que los daños materiales en cuestión estén exentos de ser sancionados por la ley penal, bajo el argumento de que la existencia de tal contrato de arrendamiento, el cual por ser de naturaleza civil, convierte a cualquier afectación o deterioro en un incumplimiento de dicho contrato. En efecto, si bien es cierto que la voluntad de las partes es soberana para regir las situaciones que se han creado por virtud de un contrato, no menos cierto resulta que, la responsabilidad que de dicho acuerdo de voluntades deriva, está limitada con relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo del Estado. Es por ello que aunque la línea divisoria entre la esfera civil y penal presenta una sutileza tal que pueda dar lugar a la confusión de dichos ámbitos; empero, es factible que una conducta aparentemente civil, pueda tener por el contrario carácter penal, como acontece en el caso que nos ocupa al haberse acreditado el dolo penal. Esto es, al quedar en evidencia que los daños que presentaba el inmueble en mención, dado en arrendamiento, no son el resultado del simple daño natural, uso o desgaste, sino que existió una fuerza exterior para el desprendimiento de instalaciones, puertas, baños y barandales, puesto que los ocupantes anteriores de dicha finca, ante el inminente desalojo del que iban a ser objeto, después de haber sido vencidos en un juicio especial de arrendamiento, optaron por desocupar el inmueble y al hacerlo llevaron a cabo la remoción de objetos que se encontraban adheridos en forma permanente a las fincas propiedad del afectado, según quedó acreditado en el expediente, con los elementos de prueba previamente reseñados y valorados, por lo que debe concluirse que en el sumario se encuentra acreditada una acción de daño, destrucción y deterioro, que recayó en cosa ajena, como lo es el inmueble antes descrito, propiedad del denunciante; ello, en razón de que los activos, quienes se encontraban en posesión de éstos, desprendieron los objetos antes mencionados que se hallaban fijos o adheridos a dichas fincas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo 221/2005, deducido del proceso penal 119/2005, instruido contra G.M.C., E.C.M.V., J.C.S.R. y M.A.S.R., por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, en el Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

212. AUDIENCIA DE VISTA, LA DEBE PRESIDIR EL JUEZ Y ÉSTE DEBE DAR POR TERMINADO EL PERÍODO DE JUICIO Y CITAR PARA SENTENCIA. A foja 152 del sumario se observa, que se llevó a cabo en primera Instancia la Audiencia de Vista a que se refiere el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, en la cual se estableció, que estaban presentes el acusado J.M.P.C. su defensora oficial y el Agente del Ministerio Público Adscrito; procediendo posteriormente el Secretario Fedatario a dar lectura a las partes de las constancias que conforman el expediente, además de interrogarlos sobre su deseo de ofrecer prueba alguna de su intención, y además, cuestionarlos sobre si era su deseo de realizar algún alegato; para

luego, una vez hecho lo anterior, establecer lo siguiente, de manera textual: "....*Una vez lo anterior, e interrogadas las partes sobre si es su deseo hacer manifestación alguna adicional, y ante la negativa de los mismos, se da por concluida la presente diligencia, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, en unión de los C.C. Juez y Secretario del Juzgado.-DOY FE.-";* diligencia la cual fue firmada al calce por los que en ella intervinieron, siendo el C. Juez, el Secretario, el acusado, su defensor oficial y el C. Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado; mas sin embargo, en suplencia de la queja, este Tribunal de Alzada determina que la Audiencia de Vista celebrada en Primera Instancia, no se encuentra ajustada a Derecho, toda vez que en el caso concreto, tenemos que no obstante de que la diligencia en cita fue firmada al calce por el Juez Natural, no fue presidida por éste, puesto que de tal diligencia se advierte que fue el Secretario Fedatario quien dirigió el desarrollo de dicha diligencia y no el Juez de la causa; practicándose así diligencias en forma distinta de la prevenida por la Ley, dado que el Juez Instructor debió llevar a cabo el desarrollo de tal diligencia, toda vez que el acto de mayor relevancia durante el proceso, lo es la Audiencia de Vista, en la cual no sólo se reciben alegatos de las partes, sino que se pueden ofrecer y desahogar pruebas, también se puede interrogar al acusado, y el Juez está en aptitud de ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, cuando lo estime necesario para ilustrar su criterio; por lo que de ahí deriva la importancia de que el propio Juzgador sea quien presida la citada audiencia de vista; mas aún, que el artículo 357 del Código Procesal Penal en Vigor, es claro al establecer que es al Juez de Primera Instancia a quien le corresponde hacerles saber a las partes que ha concluido la tramitación del proceso del proceso y citarlas para sentencia; y al no haberlo hecho así el A-quo, se actualiza la violación procesal advertida, por lo que en suplencia de queja, se declara insubsistente la sentencia motivo del grado, y en su lugar, de conformidad con lo previsto por el artículo 397 fracción V del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se ordena la Reposición del Procedimiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SEXTA SALA. Toca en Definitiva número 437/2004, relativo al Proceso Penal número 193/2003, instruido en contra de J.M.P.C o I.M.P.CV., por el delito de Violación, en el cual se revoca la sentencia condenatoria dictada en Primera Instancia. Sentencia emitida el 7 de diciembre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

213. LA MATERIALIZACIÓN DEL DELITO DE AMENAZAS NO ES INSTANTÁNEA. "El de menor grado para determinar el sentido del fallo que hoy se revisa, estableció que no existe probanza alguna dentro del sumario que indique que la conducta realizada por el activo J.G.H.M., en perjuicio de quien se dijo ofendido, el menor M.I.E.S., consistente en haberle proferido "que se anduviera con cuidado, que ya le había puesto cola y que no sabía de donde le iban a llegar los golpes", ello le hubiese perturbado la tranquilidad de ánimo por un lapso más o menos prolongado en la inquietud y la zozobra de que el activo cumpla con el amago, y que por ello, el pasivo de referencia tenga el temor de que se le cause un mal futuro, lo cual es menester para que se configure el delito de referencia, pues no obstante de que obra dentro del sumario el dictamen médico

relativo al examen mental que se le practicó al citado menor por un psicólogo adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es de resaltarse que el de menor grado claramente dejó establecido que la mencionada pericial fue realizada dentro de la etapa de averiguación previa dentro de la presente causa, y con posterioridad no obra probanza diversa en la que se aprecie la anterior situación, que esencialmente se requiere para configurar el delito de Amenazas, razón por la cual, resulta inatendible lo que a ese respecto alega el apelante, en cuanto a que "la materialización del delito en estudio es instantánea" ya que la anterior circunstancia es precisamente la que debe demostrarse para que surta efecto el delito de Amenazas, tal y como lo establece el tercer párrafo del artículo 291 del Código Penal Vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Definitiva número 72/2005, relativo al Proceso Penal número 55/2004, instruido en contra de J.G.H.M., por el delito de Amenazas, en el cual se confirma la sentencia absolutoria dictada en Primera Instancia. Sentencia emitida el 19 de octubre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

214. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL ÓRGANO ACUSADOR. Contrario a lo esgrimido por el C. Representante Social, en el caso a estudio no se acredita la prueba circunstancial, puesto que esta se basa en el valor incriminatorio de los indicios, teniendo como punto de partida hechos y circunstancias que se encuentren probados, lo que no sucede en el caso a estudio y el C. Representante Social, fue omiso en mencionar, en su pliego de agravios, cuales son esos hechos que sirven de fundamento para la prueba circunstancial; asimismo resulta completamente desatinado lo manifestado por el recurrente al decir que no es obstáculo para justificar la existencia del delito de robo, que el sentenciado haya negado los hechos que se le imputan, puesto que debe justificar su dicho; argumento este que resulta contrario a lo estipulado en el artículo 26 del Código Penal vigente en el Estado, el cual señala que toda persona acusada de un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, infiriéndose conforme a esta norma, que siempre la carga de la prueba de la responsabilidad penal, es a cargo del Ministerio Público como órgano técnico de la acusación. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Definitiva número 101/2004, relativo al Proceso Penal número 201/2003, instruido en contra de J.L.G., por el delito de Robo, en el cual se confirma la sentencia absolutoria dictada en Primera Instancia. Sentencia emitida el 29 de noviembre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

215. FALTA DE DENUNCIA O QUERELLA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. Del estudio de la resolución apelada y los agravios esgrimidos por el Representante Social, se pone de manifiesto que el Juez de la causa aplicó correctamente la Ley, no violentó los principios reguladores de la valoración de las pruebas ni alteró los hechos, al estimar que en el caso a estudio no se surte el requisito de procedibilidad (querella) para instaurar proceso al inculpado P.C., pues si bien es cierto, como lo alega el apelante, que la Ley no exige palabras sacramentales para externar a la

Autoridad el deseo de que se castigue al responsable de un delito, también es cierto que al menos, debe existir la voluntad manifiesta de la persona ofendida por el delito, de que se persiga al responsable, lo que, contrario a lo alegado por la Representación Social, no sucede en el caso a estudio, dado que como bien lo determinó el A-quo en su resolución, los supuestos pasivos solo comparecen ante la Autoridad Investigadora a relatar los hechos con relación a la queja que recibieron por parte de una señora que dijo llamarse T.J.V.G. y aunque R.H. dice que el ahora acusado lo picó en el brazo izquierdo, en ningún momento solicita la intervención de la Autoridad para que se castigue al responsable de ese hecho, ni siquiera se establece que comparece a DENUNCIAR hechos delictuosos cometidos en su perjuicio, lo que daría lugar a considerar, en un momento dado, como su deseo de que se castigue al responsable del hecho denunciado. En tanto que A.C.E., en ninguna parte de su declaración ministerial, se ostenta como afectado por algún hecho delictuoso, ni menos aún, comparece a denunciar la comisión de algún delito en su perjuicio. De ahí la inoperancia de los agravios que al respecto formula el C. Representante de la Sociedad, pues en efecto, en la causa a estudio, falta el requisito de la querella para instaurar proceso en contra de J.E.P.C.. No pasa desapercibido para esta Autoridad, que conforme a lo establecido en la fracción segunda del artículo 449 del Código de Procedimientos Penales Vigente en la época de los hechos (28 de agosto de 2002), lo que procedía era la suspensión del procedimiento hasta en tanto se cumpliera con la presentación de la querella, sin embargo esto no fue alegado por la Representación Social y, por lo tanto, esta Autoridad se encuentra impedida para suplir la deficiencia de los agravios. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Artículo número 82/2004, relativo al Proceso Penal número 35/2003, instruido en contra de J.E.P.C., por el delito de Lesiones, en el cual se confirma el auto de libertad dictado en Primera Instancia. Sentencia emitida el 30 de noviembre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

216. DESPOJO DE INMUEBLE, DERECHO REAL. Es bien sabido que no es la costumbre la que establece el derecho a los vecinos a pasar por el predio del acusado, sino la declaratoria legal de ese derecho, consistente en un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, o su otorgamiento por quien pueda transmitirlo, en este caso, el activo; de ello, tenemos que aún y cuando obra en la indagatoria, copia fotostática del Certificado Parcelario número XXXXX, emitido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, y de un Convenio celebrado ante el Director del Departamento Jurídico de la Presidencia Municipal, entre los señores V.O.G., M.M.P., D.M. y B.R.M., con los cuales, pretende acreditar la posesión que ha tenido de la parcela número YYY, ubicada en el Ejido ZZZ, así como, justificar el derecho de servidumbre a que se refiere en su denuncia; dichos documentos carecen de validez legal por tratarse de copias fotostáticas de simple reproducción fotográfica y dada la naturaleza de reproducción y los avances de la ciencia, son fácilmente alterables, tan es así, que del convenio de cuenta, se aprecia el mismo tipo de letra con relación al manuscrito que aparece sobre cada uno de los nombres de las personas que supuestamente celebraron el convenio, y aun y cuando en el reverso de los documentos a estudio, se aprecia una

certificación hecha por el Ministerio Público, debe decirse que la misma carece de validez, en virtud de que los Agentes del Ministerio Público no tienen facultades para efectuar ese tipo de certificaciones, puesto que los artículos 71 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 96 fracción XII del Reglamento de dicha Ley, delimitan las facultades y atribuciones de los integrantes del Ministerio Público, al señalar: (Artículo 71) "... El Ministerio Público expedirá copias simples o certificadas de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de Autoridad competente que funde y motive su requerimiento. Así mismo, cuando las soliciten el denunciante o querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor y quienes tengan interés jurídico, para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previsto por la ley", y (Artículo 96) "Son deberes y obligaciones de los Secretarios del Ministerio Público, los siguientes: ... XII.- Expedir las copias certificadas que la Ley determine o deban darse a las partes en virtud de acuerdo que dicte el Ministerio Público"; lo cual no aconteció en el caso a estudio, y si bien de las supuestas certificaciones realizadas por el C. Agente del Ministerio Público, se aprecian dos firmas, sobre los nombres de N.E.G. y M.B.C.G., de ello se infiere que las mismas fueron llevadas a cabo en compañía de dos testigos de asistencia, lo cual indica que éstas tan solo atestiguaron el acto de firma del Ministerio Público, pero no por parte del Secretario de dicho Órgano Técnico, como lo establece la fracción XII del artículo 96 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo tanto, esas constancias que obran a fojas 5 y 6 del sumario, carecen de valor probatorio, pues el querellante debió acompañar a su escrito de querella, los documentos originales a que se ha hecho referencia, o en su defecto, copia de los mismos, certificada por Notario Público; y así mismo, en caso de que dichos documentos se hubiesen presentado en original, es evidente que resultan inadecuados para las pretensiones de la denunciante, ya que ninguno de ellos constituye la declaratoria legal necesaria para acreditar la existencia del derecho real. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Definitiva número 877/2004, relativo al Proceso Penal número 80/2002, instruido en contra de V.O.P., por el delito de Despojo de Inmueble, en el cual se revoca la sentencia condenatoria dictada en Primera Instancia. Sentencia emitida el 30 de noviembre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

217. REINCIDENCIA. APLICACIÓN DE LA SANCIÓN MÁS FAVORABLE CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO NO INDIQUE CUÁL DE LAS SANCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO PENAL ES LA QUE DEBE APLICAR. El dispositivo 80 del Código Penal del Estado en comento, a la letra dice: "*A los reincidentes se les aplicará la sanción que debiera imponérseles por el último delito cometido, aumentado hasta un tercero de su duración a juicio del juzgador. Si la reincidencia fuera por delitos de la misma especie, el aumento será hasta de los dos tercios de la duración de la pena.*" La anterior descripción, deja latente que tal numeral, prevé dos sanciones distintas, siendo la segunda, para el caso de que se trate de delitos de la misma especie y por ende, es mayor el aumento de tal sanción; sin embargo, tal

petición en concreto no fue peticionada por la Institución del Ministerio Público, al no precisar en cuál de los supuestos, se ubica la sanción a imponer al acusado con el carácter de reincidente, resulta así deficiente la petición que realizó el Órgano Técnico; a raíz de lo anterior procedía entonces, que el Resolutor determinara la aplicación de la sanción que le resultaba más favorable al acusado, como lo es, la señalada en la primera parte del numeral 80 y no enmendar la actuación de la Institución Ministerial, con violación de las garantías del acusado; ya que el Juez se encuentra impedido para suplir las deficiencias de la Institución Ministerial, porque ello significa una invasión de las facultades que le concede al Ministerio Público, el artículo 21 Constitucional; además porque se trata de un órgano técnico, que si bien precisó la acusación, respecto a la figura jurídica de la reincidencia y solicitó la sanción condigna en el numeral 80 del Código Penal, no menos cierto lo es, que al no razonar cuál de las sanciones correspondía aplicar en el caso en concreto; debió de aplicarse la que le resultara más benéfica al acusado, como lo es la que se establece en la primera parte del primer párrafo del numeral en comento, misma que señala que al sujeto reincidente, se le aplicará la sanción que debiera imponérsele por el último delito cometido, aumentado hasta un tercio de su duración a juicio del Juzgador.- En consecuencia, se modifica la determinación motivo del grado para determinar que la sanción fijada para la reincidencia, será conforme lo señala la primera parte del primer párrafo del numeral 80 del Código Penal del Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 6 de Enero del 2006, Toca Def. 311/2005. Proceso No. 133/2004. Acusado: L.C.C.L. Delito: Robo ejecutado con violencia. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

218. PENA. SU APLICACIÓN PROCEDE AUN CUANDO NO LO EXPRESE CON PRECISIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS CONCLUSIONES ACUSATORIAS.- No se excede de la acusación del Ministerio Público, si este en sus conclusiones acusatorias solicitó que por el delito de robo equiparado se impusiera la pena prevista en el diverso 365 bis fracción I y III del Código Punitivo en vigor, ya que de dicho numeral se desprende que la pena es de 5 cinco a 15 quince años de prisión y multa de cien a mil multas. Máxime que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en lo que nos interesa que la imposición de las pena es propia y exclusiva para la autoridad judicial y la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, quien es el encargado de la investigación de los delitos y de señalar al probable responsable, para luego consignar los hechos al órgano jurisdiccional, autoridad ante la que se sigue el periodo de preparación del proceso e instrucción y culmina con la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo del auto de formal prisión y es donde se define o concretiza su posición definitiva respecto a la existencia y clasificación del delito, tal y como se desprende del artículo 1 del Código de Procedimientos Penales en vigor y continuamente procede el juez a dictar la sentencia procedente; lo anterior tiene soporte con la siguiente tesis jurisprudencial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO. DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Novena Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Octubre de 2001. Tesis: XIX.3o.2 P. Página: 1156.

219. PENAS, IMPOSICIÓN DE LAS. PROCEDE SU APLICACIÓN AUN CUANDO NO LO EXPRESE CON PRECISIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS CONCLUSIONES ACUSATORIAS. El artículo 21 constitucional claramente delimita atribuciones y establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva para la autoridad judicial y la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, investigación que inicia con la reunión de elementos que sirven para caracterizar el delito y señalar al probable responsable, para luego consignar los hechos al órgano jurisdiccional, autoridad ante la que se sigue el periodo de preinstrucción y culmina con la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, en la que define o concretiza su posición definitiva respecto a la existencia y clasificación del delito, así como en relación con la responsabilidad del acusado, para lo cual debe sujetarse a las reglas que establece el dispositivo 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, que no es otra cosa que la imputación de los hechos que se clasifican dentro de un tipo legal; por tanto, si al presentar las conclusiones acusatorias en las que se estableció el delito por el que se acusa y, además, se menciona el precepto legal que prevé la pena, de ello se infiere la omisión formal del representante social de especificar en su pedimento el quántum de las sanciones que a su juicio corresponden al actuar típico, antijurídico y culpable del acusado; empero, tal irregularidad no afecta el arbitrio judicial de que se encuentra investido el juzgador, en razón de que las conclusiones deben ser consideradas como un todo y si en ellas la fiscalía determinó la actividad delictiva del procesado y señala que la misma se sanciona, conlleva implícito que se le deben imponer las sanciones, conforme al precepto legal que se citó, dentro de los parámetros mínimo y máximo que la ley prevé al caso típico; de lo acotado se infiere que la referida deficiencia no impide que el juzgador determine el monto de la pena, puesto que con ello cumple con el mandato constitucional que le impone el artículo 21 de la Carta Magna. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 16 de Enero del 2006. Toca Def. 310/2005. Proceso No. 359/2003. Acusado: J.G.V.R. Delito: Robo equiparado y otro. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

220. PANDILLA. MODALIDAD NO ACREDITADA AL NO PROBARSE QUE LOS ACTIVOS SE REUNIERAN HABITUAL (FRECUENTE), OCASIONAL (EVENTUAL), O TRANSITORIAMENTE (MOMENTÁNEAMENTE) PARA COMETER ALGÚN DELITO. Por otro lado, se estima necesario suplir la falta de queja, a favor de los acusados, en lo tocante a la modalidad de pandilla, toda vez que la misma no se prueba debidamente en la especie. En efecto, la modalidad de pandilla, se halla contenida dentro del artículo 177 del cuerpo de leyes penal en vigor, el cual a la letra dice: “Cuando se ejecuten uno o más delitos por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, de tres meses a nueve años de

prisión, además de las penas que les corresponda por el o los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que, sin estar organizados con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Queda al árbitro de juez la calificación de la modalidad de pandilla, en base a las pruebas que se aporten. Deberá tomar en consideración la identidad de sus miembros y su actuación antisocial que revele una predisposición delictiva." Como puede observarse, el anterior artículo establece una calificativa que agrava la pena a quienes intervengan en la comisión de algún delito en número de tres o más personas y con los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este numeral; circunstancias las enunciadas que no se actualizan. La anterior decisión resulta así, pues de lo declarado por parte de los acusados J.P.G. G. o G. G. y N. .G. L como por el coacusado A.C.M. se advierte que estos, no forman parte de una pandilla, al no probarse a través de sus deposiciones que se reunieran habitual (frecuente), ocasional (eventual), o transitoriamente (momentáneamente) para cometer algún delito y más aún, de acuerdo a la narrativa que hacen los involucrados, no se prueba que en la actuación antisocial que desarrollaron haya habido una predisposición delictiva.- En relación a lo expuesto, tiene relación lo argumentado por la defensora particular de J. P. G. G. o G. G. vía agravio, al aducir que tanto su defenso como N. G. L. y A.C.M. resultan contestes en mencionar que acudieron al domicilio de la ahora afectada a reclamarle a un sujeto le deuda que tenía con Alfredo, pero que en ningún momento antes de llegar al lugar indicado, manifiestan que tuvieran la intención de robar.- Por ello, es que se considere incorrecta la actuación del Juez de aplicar la modalidad de pandilla en el caso en particular, supliéndose la queja deficiente en razón de lo cual se debe modificar el fallo combatido, para declarar incomprobada la modalidad de pandilla prevista en el artículo 177 del Código Penal del Estado y por ende, eliminar la sanción impuesta en el fallo de primer grado, en lo tocante a dicha modalidad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 21 de Abril del 2006. Toca Def. 27/2006. Proceso No. 156/2001. Acusado: J.P.G.G. o G.G. y N.G.L. Delito: Robo calificado en su modalidad de pandilla. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

221. DELITO CULPOSO. CALIDAD ESPECÍFICA EN EL ACTIVO. PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO PENAL, SE REQUIERE QUE EN EL MOMENTO DE OCURRIR LOS HECHOS, SE PRESTE EL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS Ó ESCOLAR.- A raíz del decreto número 129 de fecha 05 de junio de 1990 y publicado en el periódico oficial número 74 del día 20-veinte de junio de 1990, se reformó el artículo 66 del Código Penal de la Entidad, en el que se consigna la aplicación de una pena agravada para los conductores de vehículos del servicio público de pasajeros o de transporte escolar, que existiendo culpa grave, causen lesiones graves u homicidio, quedando, en lo que interesa, de la siguiente forma: "ARTÍCULO 66.- Cuando se trate de conductores de vehículos del servicio público de pasajeros o de transporte escolar, si hubo culpa grave que produzca lesiones graves u homicidio, se impondrá una pena de tres a diez

años de prisión.” La exposición de motivos de la citada reforma, presentada al H. Congreso del Estado, el día 29 de mayo de 1990, mencionaba que: “El artículo 66 en mención, es oscuro, en virtud de que en su primera parte no aclara a qué delito se refiere para imponer la pena de tres a diez años, asimismo consideramos violatorio de garantías que el artículo en mención se refiera exclusivamente a conductores de vehículos de pasajeros y transporte escolar, contrariando por concepto de la generalidad de la Ley, así como a que hace referencia el Artículo 13 constitucional.” Por su parte, las comisiones unidas de Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, consideró lo siguiente: “Efectivamente el Artículo 66 del Código en cuestión, no es claro en su redacción, pues no menciona a qué delito se refiere cuando impone una pena de tres a diez años de prisión. Ahora bien este Artículo si bien es cierto sólo hace referencia a los conductores del servicio público de pasajeros y de transporte escolar, es en razón de ser ellos, quienes deben tener más y mejor cuidado en la conducción del vehículo, pues no debemos olvidar que en sus manos están la vida de miles de pasajeros.” Así de las transcripciones anteriores, se deviene que la sanción que se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 66 del Código Penal vigente en la época en que ocurrieron los hechos, es aplicable solo a los conductores que presten el servicio público de transporte de pasajeros o de tipo escolar, bajo un estado de voluntaria intoxicación, que produzca lesiones graves y homicidio, ello en razón al tipo de oficio que desempeñan y para que procedan con extrema diligencia en la conducción. Por ende, para la aplicación de la sanción a que se refiere el citado dispositivo legal, se requiere, además de que el activo conduzca un vehículo de servicio público de pasajeros o de transporte, bajo un estado de voluntaria intoxicación y produzca lesiones graves y homicidio, que tenga la calidad especifica que prevé el mencionado numeral, es decir, que al momento de ocurrir los hechos, preste el servicio público de pasajeros ó escolar, toda vez que la finalidad de los legisladores, de acuerdo a la exposición de motivos del mencionado dispositivo legal, es la de evitar que conductores que tenga por oficio el traslado de personas en vehículos autorizados, a cambio de una remuneración, deben de tener más y mejor cuidado en la conducción de un vehículo de pasajeros y evitar así, poner en peligro la integridad de las éstos. Luego entonces, al no acreditarse que el acusado, al momento de ocurrir los hechos que motivaron la causa instaurada en su contra estuviera brindando un servicio público de pasajeros, se estima que el Juez fue acertado en sancionarlo, por su responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio por Culpa con la pena que se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 66 del Código Penal vigente en la época en que ocurrieron los hechos, es decir, con la pena que va de 02-dos a 08-ocho años de prisión y no así la solicitada por el Representante de la Sociedad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia dictada en fecha 21 de Abril del 2006. Toca Def. 11/2006. Proceso No. 294/2004. Acusado: J. M. A .P.- Delito: Homicidio Culposo. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

222. CAREOS PROCESALES, CASO EN QUE SU DESAHOGO NO CUMPLE A CABALIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL NUMERAL 308 DEL CÓDIGO

PENAL DEL ESTADO. Este Tribunal de apelación considera que en el desahogo de las diligencias de careo procesal ordenadas en la resolución de segunda instancia, como puede observarse a fojas 390, 391 y 392, no se cumplió cabalmente por parte del Juez A quo, con lo dispuesto en el numeral 308 del Código Adjetivo de la materia, esto es, que al momento de carear de nueva cuenta a H. H. E. con P. D. H. C. y R. B. R., y de recibir y celebrar la diligencia de careo procesal entre R. B. R. y P. D. H. C., no llamó la atención de ellos sobre sus contradicciones, en cuanto a los hechos concretos que motivan la causa, para que discutieran entre sí y se aclarara la verdad, ya que como es de observarse de tal desahogo por parte del Juez, los puntos contradictorios que se tocaron en esas diligencias de careo, no fueron acerca de cómo fue que se ocasionaron los daños a la motocicleta Dinamo, modelo 2004, tipo turismo, Shoper de lujo, color plata con negro y con placas de circulación LJ V36 del Estado de Nuevo León, lo cual era necesario esclarecer a través de esas diligencias de careo, de la forma ordenada al reponerse el procedimiento. Lo anterior es así; habida cuenta que H. H. E. coincidió con el acusado en cuanto a que la motocicleta había sido tumbada por el denunciante cuando caminaban hacia atrás, pues refirió "... entonces ellos empiezan a caminar hacia atrás para quedar frente a mi esposo, diciéndole "retírate, no son palabras para que vengas a ofender a esta casa" y ellos siguen caminando hacia atrás, el señor de los lentes obscuros tumba la moto y dice "ya ves lo que hice, por tu culpa tumbé la pinche moto"...". Mientras que R. B. R. y P. D. H. C., señalan que el acusado le dio una patada a la motocicleta, toda vez que B. R. refiere "... el señor se acerca a la moto, pensando que le iba a pegar con el tubo, más el señor le da una patada a la moto y la tumba,..."; H. C. señala: "...procedió a retirarse del lugar junto con B. y en eso el señor le dio una patada a la motocicleta en la que habían llegado..."; Por otro lado, R. B. R. declara en forma distinta a la de su testigo P. D. H. C., en cuanto a la forma como sucedieron los hechos y el momento preciso en que dicen el acusado le ocasionó los daños a la motocicleta del primero, ya que P. D. H. C., declaró ante la Autoridad Investigadora en lo que interesa: "..." y posteriormente ante el Juez de primer grado: "..." . Mientras que R. B. R., declaró ante la Autoridad Investigadora: "..."; posteriormente, ante el C. Juez de primer grado refirió: "..." Luego entonces, y dadas las anteriores contradicciones existentes en los atestos del afectado y los testigos de referencia, resultaba necesario que las diligencias de careo procesal cuyo desahogo se ordenó en la resolución de segunda instancia, fueran desahogadas en la forma como lo previene la ley, específicamente, que cumplieran a cabalidad con lo que dispone el numeral 308 del Código Procesal Penal, lo cual, sin embargo, no se advierte de las constancias de autos que haya llevado a cabo el Juez A quo, ya que de las diligencias practicadas, visibles a fojas 390, 391 y 392 de autos, no se observa que el Juez haya llamado la atención de los testigos sobre sus contradicciones en cuanto a los hechos concretos que motivan la causa, para que discutieran entre sí y se aclarara la verdad respecto a cerca de cómo fue que se ocasionaron los daños a la motocicleta marca dinamo, modelo 2004, tipo turismo, shoper de lujo, color plata con negro y con placas de circulación LJ V36 del Estado de Nuevo León, lo cual era necesario esclarecer a través de esas diligencias de careo. En consecuencia, al haberse violado el procedimiento en perjuicio de las garantías de legalidad del acusado M. J. G. T.; conforme lo previene el artículo 20 Constitucional

fracción V y en suplencia de la queja a favor del referido acusado, se REVOCA la Sentencia Condenatoria pronunciada en primer grado y se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, de acuerdo a lo que dispone el artículo 397 fracción V de la Ley Adjetiva de la materia, a fin de que el A quo subsane la violación procesal en la que incurrió y proceda al desahogo de la diligencia de careo procesal de P. H. C. con R. B. R.; así como al desahogo de las diligencias de careo procesal de H. H. E. con los referidos P. H. C. y R. B. R., en estricta observancia a lo estipulado en el numeral 308 del Código Procesal Penal en vigor, que prevé que esta clase de careos procesales, se practicarán dando lectura a las declaraciones que reputen contradictorias, llamando la atención de los careados sobre sus contradicciones, a fin de que discutan entre sí y pueda aclararse la verdad; pudiendo el Juez repetir las diligencias de careo en caso de ser necesario, siempre y cuando existan nuevos puntos de contradicción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia de fecha 17 de Mayo del 2006.- Toca Def. 67/2006.- Proceso No. 154/2004.- Acusado: M. J. G. T. Delito: Daño en Propiedad Ajena. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

223. ANTECEDENTES PENALES DEL ACUSADO.- NO AGRAVANTE DE CULPABILIDAD. Procede suplir la deficiencia de la queja a favor del acusado N.G.L., en cuanto al factor aducido por el Juez, consistente en “que es la tercera vez que se le procesa como se advierte del Informe de Antecedentes Penales el cual remitió el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social del Estado”; atento que al análisis comparativo del artículo 47 del Código Penal del Estado de Nuevo León, en vigor, antes y después de la reforma contenida en el decreto número 118, publicado en el Periódico Oficial de esta Entidad, el veintiocho de julio del dos mil cuatro, respectivamente, en concordancia con la exposición de motivos relativa a la reforma de que se trata y del dictamen de origen relativo; se obtiene que la intención del legislador es que la legislación penal estatal evolucione hacia una verdadera política de prevención del delito, para apartarse del enfoque que ésta tenía primordialmente sobre el castigo del delincuente. Así entre otros aspectos, en la fracción V, delimitó cuáles son los aspectos relacionados con las características del acusado, que el juzgador debe considerar al individualizar la pena, y con ello, en lo conducente suprimió lo que en esa fracción establecía el referido numeral, concerniente a los antecedentes personales de dicho acusado. Precisado esto, es dable sostener que resulta ilegal el proceder del Juez de primer grado, de tomar en cuenta los antecedentes penales del acusado como agravante de culpabilidad, habida cuenta que de las transcripciones antes precisadas, se aprecia que la intención del legislador estatal al reformar el artículo 47 del Código Penal, fue entre otras, que el Juzgador considerara las circunstancias del sentenciado, bajo las establecidas específicamente en la fracción V de ese numeral, en las que no aparecen comprendidas los “antecedentes personales”, como anteriormente lo contemplaba el dispositivo legal en comento. De modo tal que, deviene incuestionable que los “antecedentes penales”, no deben de tomarse en cuenta para determinar el grado de “peligrosidad” del sentenciado. Lo anterior se estima de esa manera, puesto que a partir de la reforma antes invocada, se estima que la pena o sanción

debe graduarse bajo el criterio de la culpabilidad del acto concreto por el que se juzga al sentenciado, más no por lo que éste representa por su pasado –peligrosidad-, o lo que pudiere representar para el futuro –temibilidad-, (locuciones que en la práctica común de los juzgadores de instancia se utilizan indistintamente y aún como sinónimos) Sobre el tema de que se trata, el Honorable Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, sustentó la tesis número TC0408029.9PE1, pendiente de publicación, que dice: *"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA O SANCIÓN. A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE 28 DE JULIO DE 2004, LOS ANTECEDENTES PENALES NO DEBEN CONSIDERARSE PARA GRADUARLA CON BASE EN LOS CRITERIOS DE PELIGROSIDAD O TEMIBILIDAD DEL REO, SINO BAJO EL DE CULPABILIDAD*. La intención del legislador estatal al reformar el 28 de julio de 2004, el artículo 47 del Código Penal de la Entidad fue, entre otras cosas, que el juzgador considerara las características del sentenciado, específicamente establecidas en su fracción V, entre las que no se incluyeron de manera expresa los "antecedentes personales", como en la anterior redacción. Entonces, es inconcuso que ponderar los antecedentes penales para determinar el grado de peligrosidad del sentenciado a partir de la aludida reforma resulta incorrecto, porque la pena o sanción debe graduarse bajo el criterio de la culpabilidad del acto en concreto por el que se juzga al procesado, más no por lo que éste representa por su pasado –peligrosidad- o para el futuro –peligrosidad- (locuciones que en la práctica común de los juzgadores de instancia se utilizan indistintamente y aún como sinónimos sin serlo). En efecto, dicha reforma viene a concretar lo dispuesto por los artículos 13, 26 y 39 del aludido ordenamiento legal, por ello, los antecedentes penales, en todo caso, serían útiles para verificar si posteriormente la prevención y readaptación han funcionado en él, pero no para individualizar la pena o sanción, lo cual no impide tomarlos en cuenta para efectos de la punición en casos de reincidencia." PRECEDENTES: Amparo Directo Penal 192/2005. Quejoso: Jorge Carlos Elías Gutiérrez. 30 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: José Daniel Aguilar del Toro. En cuanto al agravante de culpabilidad establecido por parte del Juez Natural en la persona de J. P. G. G. o G. G., consistente en el siguiente: "ha sido procesado con anterioridad por lo que conoce las consecuencias legales de sus actos y aun así volvió a delinquir"; el mismo se elimina por las razones ya expuestas con anterioridad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Sentencia de fecha 21 de Abril del 2006.- Toca Def. 27/2006.- Proceso No. 156/2001.- Acusados: J.P.G.G. o G.G. y N.G.L.- Delito: Robo Calificado en su Modalidad de Pandilla. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui.

224. PRUEBAS OFRECIDAS FUERA DEL TÉRMINO PROBATORIO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLAS, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCION ESTABLECIDOS EN LA LEY, PERO PUEDE ORDENAR SU PRACTICA COMO DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, SI ASÍ LO CONSIDERA NECESARIO. El derecho del inculpado a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca, no implica que el acusado o su defensa estén autorizados para

ofrecer pruebas en cualquier momento o etapa procesal, ya que deben hacerlo precisamente dentro del tiempo que la ley establezca; y tratándose del procedimiento ordinario, la regla general es que las partes deberán ofrecer sus pruebas dentro del término de quince días comunes contados desde el día siguiente al de la notificación del auto de plazo constitucional, según se dispone en el artículo 339 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Fuera de los plazos que este artículo 339 establece, sólo podrán recibirse pruebas en los casos específicos que la ley procesal establece de modo expreso por tratarse de excepciones a la regla general; entre estos casos de excepción, los siguientes: la confesión se admitirá en cualquier estado del procedimiento y hasta antes de pronunciarse sentencia irrevocable; los documentos públicos y privados podrán presentarse en cualquier estado del proceso, hasta antes de que se declare visto. Por lo tanto, dentro del procedimiento ordinario, las pruebas que las partes ofrezcan fuera del término de quince días que la ley establece para su ofrecimiento, el juzgador no está obligado a admitirlas, de tal manera que su desechamiento en modo alguno agravia los derechos de la oferente, a menos que se esté frente a alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, en los que la prueba deberá recibirse aun cuando hubieren transcurrido los términos señalados en el artículo 339 del Código adjetivo penal. Lo anterior sin perjuicio de que el juzgador, ordene la práctica de todas o alguna de las pruebas propuestas por la parte oferente, no porque ésta las haya ofrecido, sino en ejercicio de su facultad de ordenar las diligencias probatorias que estime pertinentes para el mejor esclarecimiento de los hechos, ya que estas pruebas para mejor proveer reguladas en el artículo 220 del Código procesal penal, constituyen precisamente otro de los casos de excepción de pruebas que pueden practicarse incluso una vez agotados los términos probatorios ordinarios. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en artículo 19/2006, instruido contra P. L. M. M. por el delito de Homicidio Calificado, derivado del proceso 198/2005, ante el C. Juez Cuarto de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

225. VIOLENCIA FAMILIAR. EL PERDON OTORGADO A FAVOR DEL ACUSADO O LA CONCILIACIÓN ENTRE ESTE Y LA VICTIMA AGREDIDA, NO EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL Y SOBRESEE LA CAUSA, SINO HASTA DESPUÉS DE DOCE MESES DE HABERSE SUSPENDIDO EL PROCEDIMIENTO. Tratándose del delito de violencia familiar, no resulta aplicable el artículo 369, fracción I, del Código de Procedimientos Penales, que ordena decretar el sobreseimiento de la causa cuando se extinga la responsabilidad penal o se logre la mediación o conciliación en términos del artículo 111 del Código Penal. Lo anterior, ya que para el caso concreto del delito de violencia familiar, en el artículo 287 Bis 1 del Código Penal, en relación con el artículo 369, fracción XI, del Código de Procedimientos Penales, se prevé una regla especial que ordena que el acuerdo entre la persona agredida y el inculpado o procesado, otorgado o ratificado ante el Ministerio Público o el Juez, no conlleva de manera inmediata a la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento de la causa, sino que únicamente es motivo para decretar la suspensión del

procedimiento. El sobreseimiento por extinción de la acción penal, sólo podrá decretarse hasta después de transcurrir doce meses a partir de haberse suspendido el procedimiento. Esta interpretación del artículo 287 Bis 1, como regla especial aplicable al delito de violencia familiar, que prevalece sobre la regla general aplicable a los demás delitos en materia de sobreseimiento por extinción de la acción penal, es acorde con la voluntad original del legislador, quien en el año 2004 reformó el citado numeral 287 Bis 1, fue precisamente para evitar las injusticias que se generaban por el siguiente fenómeno: Las víctimas de los delitos de violencia familiar, ordinariamente están dispuestas a conciliar u otorgar el perdón a favor de su agresor, en razón de que se encuentran vinculadas a éste por fuertes lazos de dependencia afectiva, social o económica; siendo también frecuente que el agresor perdonado, no obstante que hubiere prometido corregir su conducta, vuelva a incurrir en agresiones contra sus familiares, todo lo cual favorecía la indefensión de las víctimas y la impunidad de los agresores, ya que aquellas frente a cada nueva agresión tenían que volver a empezar, desde la denuncia inicial, a recorrer todo el procedimiento penal, sólo para volver a llegar a un punto procesal previo a la sentencia, en donde nuevamente perdonan a su agresor. En cambio, a partir de la citada reforma de 2004, debe considerarse que el perdón o la conciliación entre las partes, sólo interrumpe el procedimiento, debiéndose éste reactivar en el caso de que el indiciado o procesado incurra en una nueva agresión o incumpla con los términos de la conciliación pactada. Por su relevancia para la adecuada interpretación del artículo 287 Bis 1, a continuación se transcribe en lo conducente, la exposición de motivos de la iniciativa de reformas al citado precepto, publicada en la Gaceta Legislativa número 31, correspondiente a la semana del 8 al 14 de febrero de 2004, del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, LXX Legislatura: *"...Se recomienda una medida innovadora en el artículo 287 Bis 1, mediante la cual el delito de violencia familiar se perseguirá ya no por querella, sino de oficio, con la finalidad de que no sea el perdón del ofendido el que extinga la responsabilidad penal, sino que se condicione a que en caso de que pueda llegarse a un acuerdo mediante mediación o conciliación entre el agresor y la víctima, el sobreseimiento por extinción de la acción penal únicamente pueda darse si el agresor dentro de los siguientes doce meses a la fecha del acuerdo, acredita que se sometió a un tratamiento dirigido a su rehabilitación médico psicológica, que cumplió sus obligaciones alimentarias y que no incurrió en nuevas conductas de violencia familiar, y de no acreditar estas circunstancias, se continuará con el procedimiento. Esta sugerencia tiene por objeto evitar las constantes extinciones de la acción penal en este delito, originadas por el perdón del ofendido, ya que se detectó una conducta reiterada en la que se acusaba y perdonaba constantemente al agresor, sin que se percibiera ni incentivara una mejora en la actitud, por lo que a través de esta propuesta se busca generar un cambio positivo en el agresor, por supuesto, siempre que la víctima acepte por su propia voluntad mediar o conciliar el conflicto..."* TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Artículo número 43/2006, instruido contra J. M. A. L. por el delito de Violencia Familiar, derivado del proceso 331/2005, ante el C. Juez Primero del Tercer Distrito Judicial del Estado. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

226. EL ABOGADO DEFENSOR NO PUEDE TENER EL CARÁCTER DE TESTIGO. EL COACUSADO NO PUEDE SER OBLIGADO A DECLARAR Asentado lo anterior, no obstante que el Defensor de J.C.S. o C.S. formuló solo un agravio respecto de un apartado del fallo recurrido, una vez que se procede hacer un acucioso examen de las constancias que integran el sumario, la suscrita Magistrada determina que tal y como lo consideró el A-quo, en el auto de mérito las pruebas ofrecidas por la defensa del acusado J.C.S. o C.S., consistentes en las declaraciones testimoniales de los C. C. H.G.C., A. G.V. e I.C.H., son inadmisibles en este procedimiento, toda vez que por lo que respecta a las dos primeras testimoniales, éstas recaen sobre los Defensores Particulares del coacusado I.C.H., los cuales no tienen el carácter de testigos de los hechos relativos al presente proceso, aunado a que tal como lo estableció el A-quo en la determinación recurrida, los defensores de los acusados tienen el deber de guardar sigilo respecto de todo lo que competa a su Defensa, aún y cuando la ley establezca que toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada como testigo, pues cierto es, que deberá ser bajo la justificante de que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito y del delincuente, luego entonces, resulta evidente que dichos profesionistas conocen los hechos motivo de la presente causa, es en virtud del carácter que como Defensores tienen y resulta obvio que es sólo por referencia de su propio representado.- De igual manera se estima correcta la decisión del de Menor Grado en la resolución que se revisa, en el sentido de negar la admisión de la declaración de I.C.H., pues resulta indudable que al haberse dictado Auto de Formal Prisión en su contra, por el delito de Robo Continuado, tiene el carácter de coacusado, por lo que cuenta con las garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, específicamente en la establecida en el apartado A fracción II, que establece que no podrá ser obligado a declarar; pues contrario a ello y de recabarse su testimonio, tendría que ser bajo las reglas fijadas por la legislación Procesal Penal vigente, es decir, con la protesta de conducirse con verdad y advertirle de las penas que se imponen a quien declara con falsedad ante una Autoridad en funciones, lo cual contravendría completamente con la disposición Constitucional citada en líneas precedentes, puesto que el acusado tiene el derecho de declarar libremente lo que a sus intereses convenga, e incluso, tiene el derecho de mentir, si así considera que su situación se ve favorecida, pues lo que en el ámbito de la ética es criticable, en lo legal es aceptable, tratándose del acusado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 79/06, relativo al proceso número 388/04, instruido en contra de J.C.S. y o, por el delito de Robo.- Sentencia emitida en fecha 13-trece de junio del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

227. VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, NO SE ACREDITAN LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IDONEOS, ENCAMINADOS DIRECTAMENTE A LA CONSUMACIÓN DEL DELITO, NI LAS CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE QUIEN REPRESENTÓ EL HECHO. No se acreditó que el acusado G.H. realizara actos de ejecución idóneos, encaminados directamente a la consumación del delito de

Violación, tal y como lo prevé el artículo 31 del Código Penal vigente en el Estado, ya que la pasivo H.S., en ningún momento señaló que el referido acusado le haya quitado su pantaleta, siendo esta última circunstancia de toral importancia, pues resulta un acto de ejecución idóneo y encaminado directamente para la consumación de tal ilícito, y no el simple hecho referido por la citada pasivo, en el sentido de que sintiera el pene del acusado en su vagina, y que al ponerse de pie y prender el foco, se percatara que el acusado tenía el cierre de su pantalón abierto, y que éste traía su pene de fuera y lo tenía erecto, pues no debemos olvidar, que antes de que esto pasara, el acusado se encontraba tocando la vagina de la pasivo por debajo de su pantaleta como acariciándola cuando ésta despertó, por lo que sería lógico pensar, que el acusado al estar haciendo esto último se estuviera masturbado, pues ni siquiera se bajo su pantalón, sino que simplemente traía el cierre abierto y su pene de fuera, máxime que la referida pasivo, tampoco señala si vio en qué momento el referido acusado se bajó el cierre de su pantalón y sacó su pene, por tanto, tal circunstancia no se puede considerar como un acto de ejecución idóneo y encaminado directamente a la consumación del delito de Violación; por otra parte, es de señalarse, que tampoco quedó debidamente demostrado el supuesto previsto en el citado artículo 31 de dicho Ordenamiento Penal, en el sentido de que no se llegó a producir la consumación del referido delito por causas ajenas a la voluntad del referido G.H., ya que si bien es cierto que la citada H.S., manifestó que después de que el acusado de referencia la agarró de ambas manos, su hijo G. de seis años se despertó, se sentó en la cama y empezó a llorar sin decir nada, refiriendo que al ver esto el acusado se puso de pie, sin embargo, dicha circunstancia no se puede considerar como una causa ajena a la voluntad del referido acusado, que le impidiera producir la consumación de dicho ilícito, ya que en el supuesto de que la intención del acusado hubiera sido la de tener cópula con la citada pasivo, el referido menor en nada hubiese podido impedir que el acusado llevara a cabo tal acción, pues por su corta edad de 6-seis años, no representaba un obstáculo para éste, además de que dicho menor se quedó sentado en la cama llorando sin decir nada, por lo que tampoco existió la posibilidad de que saliera del inmueble y le fuera a avisar a alguien para que auxiliaran a la pasivo H.S., por lo anterior, debe decirse, que tampoco quedó debidamente acreditado este último extremo a que se refiere dicho dispositivo legal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 29/06, relativo al proceso número 172/05, instruido en contra de A.G.H., por el delito de Violación en Grado de Tentativa.- Sentencia emitida en fecha 28-veintiocho de Abril del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

228. JUEZ APLICA RETROACTIVAMENTE LA LEY EN PERJUICIO DEL REO, SI POR EL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSO, FIJA LAS GARANTÍAS EN BASE AL REFERIDO ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN VIGOR EN LA ENTIDAD, CUANDO LOS HECHOS OCURRIERON ANTES DE LA ADICIÓN DE DICHO ARTÍCULO AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES POR DECRETO 118, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO 96, EL DÍA 28-VEINTIOCHO

DE JULIO DEL AÑO 2004. Si bien es cierto, que el artículo 209 Bis del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, señala que: "Al dictarse la orden de comparecencia el Juez señalará día y hora para que el inculpado rinda su declaración preparatoria. Si pronunciase auto de formal prisión, le hará saber al inculpado que contrae las siguientes obligaciones que deberá cumplir dentro de los siete días siguientes: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño;...II.- Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias, que en su caso, puedan imponérsele; y III.- Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de Ley se deriven a su cargo, en razón del proceso."; también es cierto, que dicho dispositivo legal, se adicionó al Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, por decreto número 118, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 96, el día 28-veintiocho de Julio del año 2004, por lo que tomando en cuenta que los hechos constitutivos del delito de Daño en Propiedad Ajena Culposo, que el C. Agente del Ministerio Público imputa a M.G.L., acontecieron el día 2-dos de Julio del año 2003-dos mil tres, quien ahora resuelve estima, que acertadamente como lo refiere el procesado en agravios, dicho numeral no existía en la época en que acontecieron los hechos; amen que del sumario se advierte que el día 3-tres de Julio del año 2003-dos mil tres, G.L., obtuvo el beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución, que le fue concedido por el C. Agente del Ministerio Público durante la averiguación previa, por lo que al fijar el Juzgador de Primera Instancia, al acusado, las garantías establecidas en el auto apelado, en base al referido artículo 209 Bis del Código Procesal Penal en Vigor en la Entidad, aplicó retroactivamente la ley en perjuicio del reo, violando la garantía de seguridad Jurídica de éste, prevista en el artículo 14 Constitucional; máxime que el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, en vigor en la época en que ocurrieron los hechos, en relación con el diverso 195 del Código Adjetivo de la Materia vigente en el Estado, señala que la garantía otorgada ante el Ministerio Público, se considerará prorrogada ante el Juez, hasta en tanto no se decida su modificación o cancelación, por lo que en todo caso, si el Juez de Primer Grado estimara que la fianza que le fue fijada al acusado M.G.L., por el C. Agente del Ministerio Público Investigador, resulta insuficiente para garantizar el monto estimado de la reparación del daño causado, las posibles penas pecuniarias a imponer y la caución, debió haber modificado la cantidad señalada por el Órgano Investigador de acuerdo con lo señalado en los artículos 194 y 493, ambos dispositivos del Código Procesal Penal vigente en la época de los hechos, con relación al 195 del Código Adjetivo de la Materia en vigor en la Entidad y no como lo hizo, en base al precepto 209 Bis del mismo Ordenamiento Legal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en definitiva número 494/05, derivado del proceso penal 108/2005, instruido en contra de M.G.L. por el delito de Daño en Propiedad Ajena culposo. Sentencia emitida el 08 de Febrero del 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

229. NO SE CONFIGURA DELITO DE VIOLACIÓN A LAS LEYES SOBRE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES CUANDO ES EL PROPIO HOMICIDA QUIEN OCULTA EL CADÁVER DE LA VÍCTIMA. En suplencia de queja deficiente,

este Tribunal de Alzada estima, que no se acreditó legalmente la existencia del delito de Violación a las Leyes sobre Inhumaciones y Exhumaciones, tipificado por el artículo 288 fracción I que se atribuye al procesado J.M.B.G. o R.B.G.; en virtud de que, conforme al criterio de nuestros más altos Tribunales de Justicia del país, la conducta que se señala en tal dispositivo legal, debe ser efectuada por una persona extraña al delito, dado que el sujeto activo del ilícito de homicidio, de llevar a cabo dichos actos, lo hace con la finalidad de ocultar o destruir los vestigios del homicidio que cometió, tal y como se demuestra ocurrió en el caso a estudio, ya que los dos coacusados del activo, en sus confesiones de hechos, involucran a J.M.B.G., en el delito de Homicidio cometido en perjuicio de J.A.R.T. y J.A.C.R., al señalarlo como quien propinara diversas heridas con cuchillos al primero y les disparara en la cabeza a ambos pasivos, lo cual les produjo la muerte, según se advierte de las autopsias de ley practicadas por peritos médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los cuerpos sin vida de ambos occisos, dado que ambos fallecieron a consecuencia de herida por arma de fuego penetrante en cráneo; amen que de la confesión calificada rendida por J.A.C.C. se advierte que él junto con el encausado J.M.B.G. envolvieron el cuerpo de la víctima que vestía short y camiseta con un cobertor de colores vivos en tonos verde que estaba sobre la cama, y lo subieron en el asiento trasero de su ecotaxi, guiándolo J.M.B., hasta una brecha ubicada en el Municipio de Juárez, a la altura de la quinta Santa Lucia, lugar en el cual bajaron el cuerpo del vehículo, lo arrastró hasta unos matorrales, lo desenvolvieron para llevarse el cobertor y ahí abandonaron el cadáver, asimismo en el pueblo de San Mateo, a la altura de un letrero que decía Juárez 15 KM, tiraron el cobertor; lo que se relaciona a la diligencia de fe e inspección cadavérica de fecha 13-trece de Julio del año 2001-dos mil uno, en el kilómetro 4.5, de la carretera Benito Juárez-San Mateo, en el Municipio de Benito Juárez, Nuevo León, en donde por una brecha, a una distancia de 300 metros de la carretera, al atravesar un falsete, aproximadamente a 70 metros de distancia del mismo, sobre la brecha del lado izquierdo, a una distancia de aproximadamente a 6.40 metros, se encontró un cuerpo de una persona sin vida en estado esquelético, el cual se encuentra en posición decúbito dorsal, que en la cabeza del lado derecho, en la región occipital derecha, se observó un orificio al parecer de entrada de 0.8 centímetros y uno al parecer de salida en región temporal izquierda de aproximadamente 0.8 centímetros, así como el cráneo fracturado; probanza que ya fue valorada conforme a lo establecido en el diverso 321 del mismo Ordenamiento Legal; y se entrelaza al Informe de criminalística de campo, rendido por perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del que se advierte la descripción del lugar de los hechos, la posición del cuerpo, las ropas y pertenencias, la localización de evidencias, así como un croquis del lugar en donde fue encontrado un cuerpo sin vida en estado esquelético y 07-siete impresiones fotográficas del lugar donde fue encontrado dicho cuerpo; informe al cual se le otorgó eficacia probatoria de acuerdo a lo señalado en los artículos 324 y 325 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado; aunado a la declaración de M.A.J.M., en la cual describió la ropa que vestía su esposo J.Á.C.R., el día de su desaparición, asimismo le fueron mostradas las pertenencias encontradas a un cuerpo sin vida que se localizó el día 13-trece de Julio del año dos mil uno, en la carretera a San

Mateo, a la altura del kilómetro 4.5, en el Municipio de Benito Juárez, Nuevo León, reconociéndolas como propiedad de su esposo, asimismo reconoció la gorra que aparece como indicio 11, color oscuro con la leyenda "NBA CHAMPIONS", como propiedad de su esposo; misma a la que se le otorgó eficacia probatoria. Así las cosas advirtiéndose de autos que fue el propio acusado quien ocultó el cadáver de J.Á.C., después de haberlo privado de la vida, constituyendo este último hecho la parte final de la conducta del acusado, la misma no puede acreditar la existencia del delito previsto por el artículo 288 Fracción I del Código Sustantivo de la Materia, y por ende este Tribunal de Alzada dicta Sentencia Absolutoria, a favor de J.M.B.G. o R.B.G., por el delito de Violación a las Leyes sobre inhumaciones y Exhumaciones. Sirven de apoyo a la presente determinación las siguientes Tesis de jurisprudencia: *"INHUMACION CLANDESTINA, HOMICIDAS QUE NO INCURREN EN EL DELITO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE). Amparo directo 1742/68. Antonio Aguirre Hernández. 16 de febrero de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y A. Séptima Epoca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 38 Segunda Parte, Página: 21.". "OCULTACION DE CADAVER, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.Sexta Epoca: Sexta Epoca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo II, Parte SCJN, tesis: 224, Página: 128."* TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en definitiva número 209/05, derivado del proceso penal 219/2001, instruido en contra de J.M.B.G. o R.B.G. por los delitos de Homicidio Calificado, Robo en su modalidad de pandillerismo y Violación a las Leyes Sobre Inhumaciones y Exhumaciones. Sentencia emitida el 24 de Marzo del 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

230. ROBO AGRAVADO, NO SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. Resultan insuficientes los medios de prueba acotados a la causa, para acreditar la responsabilidad del referido M.M. en la comisión de tal ilícito. Lo anterior se estima así, ya que en lo que respecta a los testimonios de G.J.M.R., J.A.G. y A.A.G., del análisis de los mismos, se advierte que a dichas personas no les consta personalmente que el acusado Nazario Medina Martínez haya sido quien cometió el referido ilícito, sino por el contrario, solamente refieren a este respecto, que un vecino menor de edad de nombre A.B.M., le manifestó a M.R. que vio quien se había llevado la caja registradora, siendo una persona que le dicen CH., y tres personas mas que le "echaban" aguas; mientras que en lo que se refiere al testimonio del citado menor A.B.M., este solo manifestó, que al dirigirse a un mandado y pasar por la tienda del señor G., observó que dicha tienda estaba cerrada, y que adelante de el iban 5-cinco personas, manifestando que una de estas llevaba cargando una caja registradora, y que los otros, uno llevaba un six de cerveza de la denominada Modelo, que no les dijo nada, y que estos siguieron caminando, señalando que reconoció la caja registradora como la que había visto en la tienda del señor G., asimismo reconoció a uno de los sujetos a quien apodan CH, ya que lo ha visto en varias ocasiones en la colonia, refiriendo que este sujeto no llevaba nada en las manos, pero que iba acompañando a las otras cinco personas; de lo que se advierte, que si bien es cierto, el referido B.M. reconoció al acusado de referencia a quien conoce como CH, dicho testigo

claramente manifestó que este último no llevaba nada en las manos, asimismo, en ningún momento señala haber visto a dichas personas sustraer del citado negocio la caja registradora y el six de cerveza que refiere, mucho menos haber visto al referido acusado cometiendo tal acción, máxime que el acusado de referencia al rendir su declaración ante la Autoridad Investigadora, negó su participación en los presentes hechos, aunado a que al momento de su detención, no se recuperó ni siquiera parte del producto de robo, además de que el dicho de B.M. se encuentra totalmente aislado dentro del sumario, pues no se corrobora con algún elemento de prueba que lo robustezca, adquiriendo dicho testimonio el carácter de testigo singular. En esa virtud, la declaración del menor A.B.M., resulta insuficiente para acreditar plena y legalmente la responsabilidad de N.M.M. en la comisión del delito de Robo Agravado que se le imputa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 190/05, relativo al proceso número 41/04, instruido en contra de N.M.M., por el delito de Robo Agravado.- Sentencia emitida en fecha 3-tres de Mayo del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

231. FRAUDE. RESPONDABILIDAD EN EL DELITO DE. Resulta falso que existan elementos que demuestren la inculpabilidad del reo, ya que el argumento de que el ofendido aceptó la supuesta compraventa de tales vehículos, sin comprobante alguno, y que no era ajeno a la situación jurídica del activo del delito, es decir, que ya se le había denunciado por algo similar, debe decirse que tales extremos no se acreditan con ningún elemento de prueba, así entonces, ningún medio de convicción desvirtúa los hechos plasmados en la querella del pasivo, ni que el adeudo se deba en virtud de que el querellante se aproveche de la conducta anterior del ahora encausado, o que no exista el engaño en atención a que el ofendido tuviera conocimiento de los otros procesos que se le seguían al reo por hechos semejantes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 64/05, relativo al proceso número 367/01, instruido en contra de J. O. F. G., por el delito de Fraude.- Sentencia emitida en fecha 07 de Noviembre del año 2005. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

232. VIOLENCIA FÍSICA, SÍ ESTÁ DEBIDAMENTE SOLICITADA CUANDO SE INCLUYE EN EL CUERPO DE LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS. En cuanto a que el Ministerio Público no funda y motiva debidamente la petición de la aplicación de la calificativa de violencia física en el presente proceso, debe decirse que a juicio de quien hoy resuelve, tal petición se encuentra adecuada, en virtud de que el pliego de conclusiones acusatorias forma parte de un todo y como tal debe analizarse, ya que la lectura íntegra de dicho escrito se observa que la Representación Social acreditó los elementos del ilícito de Robo ejecutado con Violencia, razón por la que no existe ninguna violación a lo dispuesto por los artículos 343 y 344, ambos del Código Procesal Penal vigente en el Estado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 796/04, relativo al proceso número 413/03, instruido en

contra de E. B. E., por el delito de Robo con Violencia.- Sentencia emitida en fecha 09 de Noviembre del año 2005. Magistrada Rosa Elena Grajeda Arreola.

233. PRESCRIPCIÓN. PARA SU CÓMPUTO SE TOMA COMO BASE EL TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO DE LA SANCIÓN ABSTRACTA FIJADA POR EL LEGISLADOR AL DELITO DE QUE SE TRATA, CONFORME AL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO Y NO LA ESPECÍFICA SEÑALADA POR EL JUZGADOR AL DELINCUENTE. Se ha sostenido el criterio de que la prescripción de la acción penal, en los delitos que ameritan pena de prisión, opera, en términos generales, tomando como base la sanción abstracta fijada por el legislador al delito de que se trata y no a la específica señalada por el juzgador al delincuente, de acuerdo con las circunstancias concurrentes que pueden disminuir aquella y aun rebasar el máximo de la misma por circunstancias accesorias que agraven la penalidad, por lo tanto, debe estarse a la regla general de que para la prescripción de las acciones penales, se tendrá como base el término medio aritmético de la sanción a aplicar, según el delito de que se trate, esto de conformidad con el artículo 139 del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece: "Para la prescripción de las acciones penales se tendrá como base el término medio aritmético de la sanción señalada al delito de que se trate, pero en ningún caso bajará de tres años; por lo tanto, no resulta ser viable incrementar a los 09-nueve años que la C. Primer Secretario en Funciones de Juez fijo como término medio aritmético de la sanción a imponer al acusado E. L. H. como probable responsable de la comisión del delito de Violación, la de 04-cuatro años 06-seis meses, que se obtuvo como el término medio aritmético de la sanción aplicable como agravante, en los casos en que existe parentesco entre el acusado y la víctima, según lo refiere el Representante de la Sociedad. De lo anterior se deduce que no puede servir de base para computar el término prescriptorio, además de la sanción correspondiente al delito, las modalidades que establezcan los preceptos relativos del Código Penal, porque éstas, o bien agravan la sanción o, por el contrario, la disminuyen, y por tal motivo, procede estarse a la regla general de que para la prescripción de las acciones penales, se tendrá como base el término medio aritmético de las primeras, según el delito de que se trate. Sentencia dictada en fecha 11-once de octubre de 2006-dos mil seis, por el C. Magistrado Obed R. Jiménez Jáuregui de la Segunda Sala. Toca de Apelación en Artículo 144/06, proceso 200/94, instruido a E.L.H.Z, por el delito de VIOLACIÓN.

234. PERDÓN OTORGADO POR UN MENOR DE EDAD.- CARECE DE VALIDEZ LEGAL, CUANDO NO HA SIDO RATIFICADO POR LA PERSONA LEGITIMADA PARA ELLO, POR LO TANTO, NO REÚNE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO, PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO. Como lo puntualiza el apelante, en el presente caso, nos encontramos ante la presencia de un procedimiento de índole penal y para que el desistimiento de un menor, como resultado del perdón concedido al delincuente, sea

bastante para extinguir la acción penal, es preciso que éste se halle legítimamente representado, situación que en el presente caso no acontece, ya que al comparecer la menor B.L.J.E., ante el Juez de Origen y otorgar su mas amplio perdón y desistimiento a favor del inculpado R.P., en términos del numeral 111 del Código Penal en vigor, ésta lo hizo sola, es decir, dicha diligencia no fue ratificada por el tutor o representante de la menor afectada, por tanto, tal actuación carece de validez y legalidad en términos de la ley penal, para tener por otorgado el perdón de la ofendida, ya que dicha menor no tiene el discernimiento ni la experiencia necesarios para disponer de su persona, bienes o derechos, aunado a que ésta no se encuentra debidamente legitimada para otorgar el perdón, sino que el mismo debió ser ratificado por su tutor o legitimo representante, teniendo aplicación al caso concreto la tesis que a continuación se transcribe: **"MENORES OFENDIDOS, PERDÓN DE LOS**. Cuando se trata de iniciar un procedimiento penal, a petición de la persona ofendida, el interés de ésta y el de la sociedad, coinciden en el propósito de salvaguardar los intereses mutuos; por ello la ley exige, en este caso, menos requisitos, y faculta al menor para presentar directamente la querella; en cambio, cuando se trata de extinguir la acción penal y de suspender la persecución de los delitos, el interés de la sociedad y el de la persona ofendida se encuentran en conflicto; aquella necesita la represión de la delincuencia, el ofendido juzga conveniente detener la acción penal, mediante el desistimiento, que pone fin a la persecución judicial. Como resultado de esa oposición de intereses, la ley ha fijado mayor número de requisitos, ya que la extinción de la acción penal pone en peligro la seguridad de la colectividad; por ello se exige, en estos casos, que el menor se encuentre debida y legalmente representado, a fin de evitar que su inexperiencia sea explotada por el reo, obteniendo el perdón que pondrá fin a la actividad judicial, mediante maniobras indebidas, que deben ser evitadas, en caso de existir, por el legítimo representante de la parte ofendida. Por tanto, para que el desistimiento del menor, como resultado del perdón concedido al delincuente, sea bastante para extinguir la acción penal, es preciso que éste se halle legítimamente representado. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXIV. Pagina: 1833." Razonamientos los anteriores por los cuales le asiste la razón al apelante, dado que efectivamente al encontrarnos ante la presencia de un procedimiento de índole penal, el perdón otorgado por la menor B.L. J. E. carece de validez legal, en virtud de que el mismo no fue ratificado por la persona legitimada para ello, por lo tanto, éste no reúne los requisitos del artículo 111 del Código Penal vigente en el Estado, y por ende no se puede decretar el sobreseimiento de la acción penal a favor de R.P., debiéndose continuar la presente causa por sus demás etapas procésales. Sentencia dictada en fecha 15 de Agosto del 2006, por el C. Magistrado Obed R. Jiménez Jáuregui de la Segunda Sala. Toca de Apelación en Artículo 115/2006, proceso 17/2006, instruido a R.P. por el delito de ATENTADOS AL PUDOR.

235. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- ES EFICAZ EL PERDON OTORGADO POR LA MADRE DE MENORES, PARA DECRETARLA, POR SER ÉSTA LA PERSONA QUIEN LEGALMENTE LOS REPRESENTA.- En

primer término, debe dejarse en claro que si bien es cierto no existe Legislación Penal y Procesal Penal, que exprese de forma especifica que la madre pueda otorgar perdón judicial a nombre y representación de sus menores hijos, no menos cierto lo es que el numeral 111 del Código Penal vigente, establece en su párrafo inicial que el perdón pude ser otorgado por la victima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarlo, circunstancia que en el presente caso acontece, ya que dentro de autos, obra el perdón y desistimiento otorgado por la C. M. del C. P.E., madre de los menores O. y V. H. ambos de apellidos R.P., quien es la persona que se encuentra legitimada para hacerlo, ya que es ésta quien ejerce la patria potestad sobre sus menores hijos, por consecuencia, tiene a su cargo la representación de los citados menores, lo anterior de conformidad con lo establecido por el numeral 425 del Código Civil vigente en el Estado, mismo que establece entre otras cosas, *"los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella...";* máxime que en este tipo de delitos (Violencia Familiar), al resultar dañados psicológicamente la madre e hijos de un mismo entorno familiar, por conflictos con el padre, es la madre quien tiene el mayor interés de salvaguardar la seguridad jurídica de los referidos menores, y no obstante de que la citada P.E., se desiste de toda acción penal, civil y de cualquier otra índole que pudiese intentar en contra del acusado, otorgando su mas amplio perdón y desistimiento en nombre propio y de sus menores hijos O. y V. H. R. P., en términos del artículo 111 del Código Penal en vigor, ello lo hace sin pasar por alto, que es ella quien tiene a su cargo la representación de los citados menores, ya que al comparecer la citada P. E. en fecha 30-treinta de Noviembre del año 2005-dos mil cinco, ante el Juez de Primer Grado, expresa de forma clara, entre otras cosas, que al llegar a un acuerdo satisfactorio con el acusado, en el sentido de que éste último no va a agredir ni a molestar, tanto a ella como a sus menores hijos, tampoco va a acudir al domicilio de los padres de ésta, lugar donde actualmente habita la mencionada P.E. junto con sus menores hijos, es decir, ésta cambio de domicilio, ello con el propósito de resguardar la integridad física y seguridad jurídica de ella como de sus menores hijos, por lo cual, es evidentemente claro que M. del C. P. E., madre de los menores O. y V. H. R. P., lo que pretende primordialmente es protegerse a si misma junto con sus menores hijos, de quienes ella tiene su legítima representación por ser su madre; por tanto, ello es suficiente para que la citada P. E. pueda comparecer en el procedimiento judicial penal en que se actúa en representación de sus menores hijos, al encontrarse legitimada para representarlos, al ejercer la patria potestad de los mismos, acorde a lo dispuesto por el artículo 425 del Código Civil del Estado ya aludido; sin que existe prueba alguna de que se encuentre privada o disminuida de tal derecho Ahora bien, al encontrarnos ante la presencia de un procedimiento de índole penal, y contrario a lo que señala el Representante Social, en el sentido de que no existe un acuerdo entre los menores agredidos O. y V. H.R.P. y el procesado J.L.R.S., para con ello haber decretado la Suspensión del Procedimiento en términos del artículo 287 bis 1 del Código Penal en vigor, debe decirse, que al haber llegado a un acuerdo satisfactorio la C. M. del C. P. E., madre de los menores O. y V. H. de apellidos R. P., con el acusado J. L. R. S., como quedo asentado en el párrafo precedente, se encuentra satisfecho el requisito exigido en la fracción I del citado numeral 287 bis 1, tal y como lo asentara el Juez de Grado en su

resolución de fecha 30-treinta de Noviembre del año 2005-dos mil cinco, pues dicho acuerdo entre el procesado y los menores afectados O. y V. H. R. P., es a través de su madre M. del C. P. E., esta última en representación de los citados menores, por ser ésta quien legalmente los representa, al tener la patria potestad de dichos menores, ya que como se dijo con antelación, es ella misma la principal interesada en que la inexperiencia de sus menores hijos no sea explotada por el acusado o por persona distinta, además que tiene a su cargo la representación legal de los multicitados menores, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito exigido en la fracción I del numeral antes citado. Razonamientos los anteriores por los cuales el Juez de Origen fue acertado al decretar la Suspensión del Procedimiento a favor del J.L.R.S., por el delito de Violencia Familiar, por el hecho de que la C. M. del C. P. E., otorgó el perdón judicial a favor del reo, en nombre y representación de sus menores hijos O. y V. H. ambos de apellidos R. P., por ser ésta la persona quien legalmente representa a los citados menores, por tanto, se encuentra satisfecho el requisito (acuerdo entre la persona agredida y el inculpado) exigido en la fracción I del citado numeral 287 bis 1 del Código Penal vigente. Sentencia dictada en fecha 13 de Septiembre del 2006, por el C. Magistrado: Obed R. Jiménez Jáuregui de la Segunda Sala. Toca de Apelación en Artículo 126/2006, proceso 296/2005, instruido a J.L.R.S. por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR.

236. GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL. CASO EN QUE SE INFRINGE EN PERJUICIO DEL ACUSADO LA.- En el asunto sometido a consideración de este Tribunal de alzada, resulta oportuno señalar que en la resolución de fecha 28-veintiocho de marzo del año 2006-dos mil seis, el Juez de primer grado dicta sentencia definitiva condenatoria al acusado J. B. M. G., al estimarlo plenamente responsable de los delitos de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN y VIOLENCIA FAMILIAR previstos en los numerales 268 y 287 bis, respectivamente, del Código Penal del Estado, así mismo pronuncia Sentencia Absolutoria a favor de J. B. M. G., por el diverso delito de CORRUPCIÓN DE MENORES, al estimar que no se justifica la existencia de tal ilícito y por ende, tampoco se prueba la plena responsabilidad del acusado en su comisión. La sentencia absolutoria es recurrida en la presente instancia por el Ministerio Público y la condenatoria es motivo de inconformidad para el acusado, su defensor y el Ministerio Público; sin embargo, es el caso señalar como antecedente histórico al respecto, que resulta un hecho notorio que esta Sala resolvió el diverso toca de apelación en definitiva 208/2003, formado con motivo del recurso de apelación que interpusiera el acusado J. B. M. G., su defensor y Ministerio Público contra la Sentencia definitiva pronunciada por el Juez A quo el día 26-veintiséis de febrero del año 2003-dos mil tres dentro de los autos del expediente de origen 80/2001, advirtiéndose en dicho toca que se resolvió por esta Segunda Sala dejar INTOCADO el fallo absolutorio dictado por los delitos de CORRUPCIÓN DE MENORES y VIOLENCIA FAMILIAR, al no haber sido motivo del recurso de apelación interpuesto por el acusado, su defensor y la Representación Social, y por otro lado, se modificó el fallo condenatorio impuesto por el

A quo, en lo tocante al delito de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, para disminuir la sanción corporal impuesta a treinta años de prisión.- Resolución de segunda instancia contra la cual el acusado J. B. M. G. promoviera el juicio de amparo directo 296/2005, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien en su ejecutoria del día 30-treinta de noviembre del año 2005-dos mil cinco ordenó a esta Sala declarara la insubsistencia de la sentencia condenatoria pronunciada por el delito de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, ordenando se repusiera el procedimiento a primera instancia, en los términos ahí plasmados, lo que así se cumplió por parte de este Tribunal de apelación en la resolución de fecha 08-ocho de diciembre del año 2005-dos mil cinco, enviando el original del expediente 80/2001 de nueva cuenta al Juzgado Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, el que una vez que llevó a cabo el desahogo de la probanza ordenada en la ejecutoria de amparo, dicta de nueva cuenta en el expediente 80/2001 sentencia definitiva el día 28-veintiocho de marzo del año 2006-dos mil seis, pero condenando ahora al acusado J. B. M. G., por los delitos de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR y lo absuelve por el diverso delito de CORRUPCIÓN DE MENORES; fallo este último que como al principio se dijo, es el que motiva el análisis en la instancia. Así las cosas, es pertinente señalar que las actuaciones obrantes en el toca de apelación en definitiva 208/2003 mismas que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 313 y 314 del código procesal penal en vigor; dejan latente como hecho notorio que en lo tocante a los delitos de CORRUPCIÓN DE MENORES y VIOLENCIA FAMILIAR ya existe con anterioridad al fallo recurrido, sentencia absolutoria a favor del acusado J. B. M. G. por tales delitos en agravio de la menor M. A. G. M. V., resolución que es irrevocable y causó ejecutoria en términos del artículo 410 fracción I del código procesal penal en vigor, a virtud que las partes dejaron expirar el término fijado por la ley para interponer en su contra el recurso de apelación; de manera que si el Juez en la sentencia que es motivo del presente grado, vuelve a juzgar al acusado J. B. M. G. por tales ilícitos, es decir por VIOLENCIA FAMILIAR Y CORRUPCIÓN DE MENORES, los cuales derivan en los mismos hechos delictivos por los cuales ya lo había declarado absuelto en una primer sentencia definitiva y cuya resolución se había declarado Intocada por esta Sala al resolver el toca de apelación en definitiva 208/2003; resulta obvio que el A quo infringió en perjuicio del acusado la garantía de seguridad jurídica a que se contrae el artículo 23 de la Constitución Política Federal, pues el mismo dispone en lo conducente: "... Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene..." En efecto, en la interpretación del artículo mencionado, se consagra el principio non bis in idem, que prohíbe el que alguna persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo delito, norma jurídica que trata de proteger a los gobernados para que éstos no sean sometidos a dos juicios o procesos por los mismos hechos delictivos, lo que sin embargo, soslayó el Juez Natural en el caso en particular, en lo tocante a los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR Y CORRUPCIÓN DE MENORES, al momento que en el fallo recurrido le reprocha nuevamente al acusado J. B. M. G., la misma conducta delictuosa establecida en el auto de formal prisión cabeza del proceso, por la cual ya había sido enjuiciado e incluso absuelto mediante sentencia que causó firmeza, o dicho de otra manera, por resolución contra la

cual no procede ningún otro recurso legal. Al caso, se enuncian los siguientes criterios jurisprudenciales cuyo contenido no se transcribe por versar en los términos anotados y que tienen como rubro: "NON BIS IN IDEM" sostenido por la Primera Sala, Sexta Epoca, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo Segunda Parte, VI, Página 194.- Y "ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL" sostenido por la Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Página 1746. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Ad quem estima procedente, en suplencia de la queja, el MODIFICAR el fallo de primer grado, para ABSOLVER al acusado J. B. M. G. del delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto por el artículo 287 bis del código penal del Estado, mientras que por lo que hace al diverso de CORRUPCIÓN DE MENORES previsto en el numeral 196 del código penal, al no ocasionarle agravio alguno la sentencia absolutoria dictada por el A quo en el fallo recurrido, la misma queda Intocada. Sentencia dictada en fecha 9 de Agosto del 2006, Toca Def. 103/2006. Proceso No. 80/2001. Acusado: J. B. M. G. Delitos: Equiparable a la Violación y Otros. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

237. ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. EN LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIONES POR LOS DELITOS DE EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN y VIOLACIÓN EN PERJUICIO DE UNA MISMA PASIVO, DEBE HACERSE UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL.- En relación a la falta de imposición de sanción por el diverso delito de VIOLACIÓN cometido en perjuicio de A. A. A. A., es oportuno señalar que le asiste la razón al Representante de la Institución Ministerial, cuando argumenta vía agravio, que el Juez de primer grado incurre en una incorrecta interpretación del numeral 14 del Código Penal en vigor, pues no se está ante la presencia de un delito continuado por el solo hecho de que se actualizó primeramente el delito de Equiparable a la Violación y posteriormente el diverso de Violación en perjuicio de la misma menor ya citada; habida cuenta que como lo refiere el Órgano Técnico, los delitos antes señalados con dos tipos delictivos distintos, actualizándose el primero (Equiparable a la Violación) al momento que el acusado consumó la cópula con la pasivo del delito cuando ésta aún era menor de trece años de edad, tal como lo aceptó el propio acusado, mientras que el segundo de los delitos mencionados (Violación) se consumó cuando el acusado consumó la cópula con la misma pasivo del delito en contra de su voluntad, cuando ésta ya superaba la edad de trece años, empleando la violencia moral contra su víctima, al amenazarla con golpearla y a su madre si no lo dejaba consumar en ella su conducta delictiva; luego entonces, el propósito del acusado se agotó en cada momento de la comisión de los delitos, lo cual genera la existencia de un concurso real de delitos, de conformidad con lo previsto en el numeral 36 en relación con el diverso 76 del Código Penal del Estado; por ello es que en el delito de violación equiparado no cabe la continuidad del delito a que hace referencia el numeral 14 del cuerpo de leyes mencionado, al tratarse de un delito de naturaleza instantánea, pues en su consumación se agotan todos sus elementos constitutivos, sin que influyan acontecimientos posteriores; además porque tampoco quedó demostrado dentro de autos, la existencia del elemento

unidad de propósito del activo, esto es, que no está demostrado en autos que el acusado desde la primera imposición de la cópula en perjuicio de A. A. A. A., haya tenido el uniforme propósito delictivo de sostener con dicha pasivo todas las cópulas que en ella ejecutó con posterioridad, sino que por el contrario, demostrado está que la finalidad del acusado al ejecutar tales ilícitos demostrados, no era la de tener ayuntamiento carnal con su menor hija en un número indeterminado de ocasiones, sino la de satisfacer cada vez que ejecutada cada cópula, sus instintos sexuales; luego entonces, y ante la inexistencia de una unidad de propósito, resulta equívoca la apreciación del A quo al considerar que la conducta delictiva ejercida por el acusado en perjuicio de A. A. A. A. reviste el carácter de delito continuado y por ende, no estuvo ajustada a derecho la decisión del Justiciante de dejar sin sanción el delito demostrado de Violación por el cual también estimó plenamente responsable a A. A. B. Al efecto, son de aplicación los criterios de Jurisprudencia a que hace alusión el apelante, como resultan ser los siguientes: "VIOLACIÓN. DELITO CONTINUADO. ACTUAL LEGISLACIÓN. La figura del delito continuado en la actual legislación penal tiene como uno de sus elementos esenciales la unidad de propósito delictivo. Por lo que si en el caso concreto no se acredita que el activo hubiese tenido desde la primera imposición de cópula de que hizo víctima a la ofendida, la unidad de resolución de tener con ésta un determinado número de veces el ayuntamiento sexual; o por lo menos la unidad de ocasión, o sea de cometer el ilícito siempre que la ocasión se lo permitiera, no se puede concluir que se da la unidad de propósito que exige el delito continuado, sino un concurso de delitos, llamado indebidamente continuado sólo porque se trata de violación a la misma disposición legal y del mismo sujeto pasivo." Amparo directo 1834/91. Julio Espinoza Valle. 28 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretario: Hermenegildo Castillo López. Octava Época; Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: X, Septiembre de 1992; Página: 395. **"VIOLACIÓN, INADMISIBLE LA INTEGRACIÓN CONTINUADA DEL DELITO DE**. De acuerdo con lo preceptuado en la fracción III del artículo 7º. del Código Penal para el Distrito Federal, para que se configure un delito de naturaleza continuada, se requiere: a) Que exista pluralidad de conductas; b) Las que violen el mismo precepto legal; y, c) Que en todas ellas coexista la unidad de propósito delictivo. Ahora bien, tratándose del delito de violación a que se refiere el numeral 265 del ordenamiento punitivo en cita, ante la múltiple concreción de conductas típicas sobre la misma pasivo, no cabe afirmar que se actualice también la unitaria finalidad delictual que se requiere para tenerlo como continuado; porque, dada la naturaleza del delito, el propósito del activo se agota en cada momento de comisión, gestándose por tanto en tal circunstancia un concurso real homogéneo de delitos de violación y no un ilícito complejo con carácter continuado, ya que, por otra parte, es inadmisible el fraccionar el bien jurídico de la libertad y seguridad sexual del pasivo en cada caso, para sostener que el activo se propuso, en un primer momento, afectar tanto una como otra y que en sus restantes actos no volvería a conculcar esa libertad (unidad de propósito); por ello, es que en la violación no cabe la continuidad del delito." Amparo directo 642/91. Federico Aguilar Joaquín. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernández

Rivera. Octava Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: IX, Enero de 1992; Página: 278. Luego entonces, al resultar procedente el agravio del Órgano Técnico, se MODIFICA el presente apartado, para sancionar el delito de VIOLACIÓN cometido en perjuicio de A. A. A. A. conforme lo dispone el numeral 266 primer párrafo primer supuesto del Código Penal del Estado, que prevé sanción de 6-seis a 12-doce años de prisión, a virtud que al momento de actualizarse tal ilícito la menor ofendida contaba con una edad superior a los trece años; en la inteligencia de que al momento de la imposición de la sanción correspondiente al delito de VIOLACIÓN aludido, deberán observarse las reglas del concurso real o material de delitos a que hacen referencia los numerales 36 y 76 del Código Penal del Estado, debiéndose tener como delito mayor el ilícito de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN cometido en perjuicio de A. A. A. A. y como delito concursado el de VIOLACIÓN en perjuicio de dicha pasivo. Sentencia dictada en fecha 13 de Septiembre del 2006, Toca Def. 120/2006. Proceso No. 40/2005. Acusado: A.A.B. Delitos: Equiparable a la Violación y Otros. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Penal.

238. LEGÍTIMA DEFENSA. INEVITABILIDAD DE LA AGRESIÓN.- Es criterio de nuestros máximos Tribunales que para que la excluyente de legitima defensa pueda surtir sus efectos, es menester que la agresión debe ser inevitable, lo cual no sucede en el caso a estudio, pues de las pruebas que obran en el sumario, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte que el acusado J.J.A.R. no repelió una agresión, sino por el contrario, éste se le fue encima al occiso, provocándole la herida mortal ya conocida. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 930/04, relativo al proceso número 219/01, instruido en contra de J.J.A.R., por el delito de Homicidio Calificado. Sentencia emitida en fecha 31 de Agosto del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

239. USO DE DOCUMENTOS FALSOS, EXISTENCIA DEL DELITO DE.- Con las pruebas debidamente reseñadas y valoradas en párrafos precedentes y que en obvio de repeticiones inútiles no se trascriben, quedó debidamente acreditada la existencia del delito de uso de documentos falsos, así como la plena responsabilidad del acusado G.H.V. en su comisión, pues se acreditó que el ahora acusado, es la persona que hizo uso de tres documentos denominados pagares a sabiendas de que eran apócrifos, pues con ellos demandó al pasivo G.H.C. y le embargó bienes, además la condición previa e indispensable para la existencia del delito de uso de documento falso es la comprobación de la falsedad del documento, lo cual quedó debidamente acreditado en el caso a estudio, específicamente con los dictámenes periciales de grafoscopía elaborados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el perito tercero en discordia, por lo que no le asiste la razón al apelante cuando alega que jamás se probó con ningún medio de prueba que el acusado haya sabido o tenido conocimiento de que los pagares eran falsos, dado que

se encuentra debidamente probado en el sumario que G.H.C. no se encontraba en el país en la fecha en que aparecieron suscritos tales documentos y el acusado no refiere que hubiese sido un tercero quien entregó los multicitados pagares, por lo tanto, se deduce que sabía perfectamente que estos documentos estaban falsificados. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 06/06, relativo al proceso número 239/03, instruido en contra de G.H.V., por el delito de Uso de Documentos Falsos.- Sentencia emitida en fecha 10 de Agosto del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

240. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL ACUSADO DEL CIERRE DEL PERÍODO DE INSTRUCCIÓN, ES CAUSA DE REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El A-quo declaró cerrada la instrucción; sin embargo, de las constancias no se aprecia que lo anterior le fuera debidamente notificado al acusado, siendo que de conformidad con lo descrito por el artículo 119 en relación con los diversos 57, 111, 117 y 120 segundo párrafo, todos del Código Procesal Penal vigente en el Estado, se le debió de notificar al inculpado, lo que implica una inobservancia de las formalidades del procedimiento, pues al no tener el reo conocimiento personal del proveído en donde se comunicaba a las partes del último término para la objeción de alguna diligencia no desahogada o incorrectamente celebrada, incluso de hacer un repaso de su material probatorio para estar en condiciones de observar la conveniencia de alguna otra prueba más que ofrecer, implica que no se le suministraron los datos necesarios que el reo tiene para promover lo que a su derecho conviniera para su defensa; causándole con lo antes expuesto un grave perjuicio al reo. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 134/05, relativo al proceso número 28/00, instruido en contra de R. M. A., por el delito de Privación Ilegal de la Libertad en su Modalidad de Secuestro.- Sentencia emitida en fecha 09 de Noviembre del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

241. DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES, NO SE ACREDITA CUANDO. – Es falso que lo expresado por la denunciante, bajo protesta de decir verdad, ante el Juez de lo Familiar, lo hizo con la única finalidad de que el demandado en aquel juicio y ahora querellante, no tuviera la oportunidad de defenderse, para así agotar el derecho de audiencia que consagra en su favor el artículo 14 Constitucional, puesto que si la denunciada hubiera actuado con dolo, ésta hubiese proporcionado un domicilio falso, o manifestando bajo protesta de decir verdad, que no tenía conocimiento del demandado, pero sin embargo no fue así, ya que a fin de reunir todos y cada uno de los requisitos que establece la Legislación Procesal Civil, la denunciada sí señaló domicilio para emplazar en aquél juicio al citado demandado, en el cual efectivamente se localizó y fue emplazado personalmente, aún más, el referido demandado hizo valer su derecho de presentar sus excepciones dentro de ese juicio. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 165/05, relativo al

proceso número 42/05, instruido en contra de D. M. G. G., por el delito de Falsedad en Declaraciones.- Sentencia emitida en fecha 02 de Marzo del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

242. DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES, NO ES IMPEDIMENTO PARA EL JUZGADOR CONSIDERAR LA FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD AL MOMENTO DE RESOLVER EN DEFINITIVA. Si bien es cierto, como lo alega el apelante, que el A-quo debió prever la falta del requisito de procedibilidad previsto por la fracción II del artículo 125 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al momento de resolver sobre la emisión de la Orden de Aprehensión y Detención, o posteriormente al resolver la situación jurídica del acusado de referencia, también lo es que, ello no le impide considerarlo al momento de resolver en definitiva, puesto que la Ley no establece el momento en que tal requisito debe ser analizado, por supuesto, si se estudiara por el Juzgador en el primer auto decisorio, sería lo ideal. Así las cosas, es de verse que el artículo 125 fracción II del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, establece: "El Ministerio Público y los agentes de la policía ministerial a su mando, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos del orden común de que tengan noticia; excepto en los casos siguientes: I.-... II.- Cuando la ley exija algún requisito previo", de lo que se advierte un impedimento por parte de la Autoridad Investigadora para proceder de oficio en los casos en que la Ley exija algún requisito previo y éste no se haya llenado, como sucede en el caso concreto, donde hay ausencia de un requisito previo, para que el Órgano Investigador proceda oficiosamente a la investigación del delito a estudio, y ello no le impide al juzgador advertir dicha circunstancia al momento de resolver en definitiva, sino que por el contrario, lo obliga a considerarla, al resultar un requisito imprescindible para que proceda la investigación del ilícito a estudio por parte del Ministerio Público. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 229/05, relativo al proceso número 348/03, instruido en contra de J.A.G.C., por el delito de Desobediencia de Particulares. Sentencia emitida en fecha 31-treinta y uno de marzo del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

243. FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, SI NO SE PRUEBA EL ELEMENTO ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Si bien, de autos se advierte que en fecha 22-veintidós de Octubre del año 2002-dos mil dos, los indiciados J.M.D.M. y M.D.H.S., recibieron la cantidad de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 MN.), por parte de los querellantes, respecto de una compra-venta del inmueble ubicado en la Calle Cariátide, número 100, de la colonia residencial Cuauhtémoc, del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León; de ello, no se justifica el elemento principal del ilícito a estudio, consistente en el engaño, puesto que como bien lo estimó el A-quo en la resolución de mérito, y contrario a lo alegado por el recurrente en sus agravios, es evidente

que la obtención de dicho numerario no fue producto de un engaño ni se obtuvo ilícitamente, dado que el mismo proviene de una operación contractual y fue entregado a los indiciados de mutuo propio, por los que se dicen afectados, según se desprende de la foja 5 de la causa a estudio, consistente en un recibo, que únicamente ampara dichos hechos, sin que del mencionado documento, se advierta que en ese preciso momento, los referidos indiciados, se hayan valido de argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, o un falso conocimiento en los que se dicen afectados, es decir, que se hubiesen ostentado como propietarios del inmueble en cuestión, que provocara en éstos, la determinación de realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio de los sujetos activos; cabe señalar que para la fecha en que se realizó la operación de compra-venta que nos ocupa (22-Octubre-2002), los indiciados D.M. y H.S., ya tenían el carácter de propietarios del inmueble, desde el año de 1991, mismo que adquirieron al celebrar un contrato verbal de permuta con los señores V.M.M.L. y M.G.P.G., intercambiando así la propiedad y posesión de sus respectivas viviendas, acordando que al liquidar las mismas, harían los trámites legales correspondientes; circunstancia ésta última, que contrario a lo alegado por el recurrente en sus agravios, sí es de tomarse en cuenta para la presente determinación, puesto que como bien lo estimó el A-quo en la resolución de cuenta, se deduce de las testimoniales de los propios M.L. y P.G., tan es así, que en fecha 12-doce de Septiembre del año 2001-dos mil uno, un año antes de la fecha en que se celebró la compra-venta en cuestión, los referidos M.L. y P.G. otorgaron a favor del indiciado J.M.D.M., Poder Especial para Pelitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio, respecto del inmueble ya mencionado, mismo que en fecha 20-veinte de Junio del año 2003 dos mil tres, ratificaron ante la fe del Notario Público número 68 con ejercicio en Montemorelos, Nuevo León; en esa tesitura, debe decirse que el hecho de que los indiciados no tuvieran a su nombre, mediante Escritura Pública, la propiedad en cuestión, solo es una falta de formalidad, que incluso éstos últimos pasaron por alto, sin que se advierta dolo por parte de los inculpados, dado que ellos transmitieron la posesión y propiedad del inmueble a los que se dicen afectados, sin que hubiesen formalizado la compra-venta ante Notario.- Así las cosas, en el sumario no obra dato alguno que permita determinar fehacientemente que los referidos indiciados se hubiesen ostentado como propietarios del inmueble en cuestión, y mediante el engaño, hayan obtenido de los que se dicen afectados, un lucro indebido, consistente en la cantidad de $150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), por lo que de no acreditarse el elemento engaño, es inexistente el tipo penal de Fraude, y debe concluirse que se trata de un convenio de naturaleza meramente civil, cuyo incumplimiento sólo trae aparejadas acciones de la misma naturaleza. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 357/04, relativo al proceso número 68/04, instruido en contra de J.M.D.M. y M.D.H.S.., por el delito de Fraude.- Sentencia emitida en fecha 27-veintisiete de Octubre del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

244. ALLANAMIENTO DE MORADA, RESULTA PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PERDÓN DEL OFENDIDO. Contrario a

lo aducido por la Institución recurrente, el de Menor Grado no se encontraba impedido para decretar el Sobreseimiento de la causa a favor del acusado P.S. por lo que respecta al ilícito de Allanamiento de Morada, pues en primer término debe decirse, que del sumario se advierte que el Juez de la Causa correctamente dejó establecido en la resolución de fecha 29-veintinueve de octubre del año 2003-dos mil tres, mediante la cual ordenó la presentación del acusado de referencia, que: "Por lo que hace al delito de allanamiento de morada, se desprende lo siguiente: a).- se acredito que el activo R.P.S. sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permite, se introdujo furtivamente y sin permiso de J.R.V. ó en su caso de J.A.L.R., al interior del domicilio ubicado en la calle R.G. número 211 de la Colonia U.R. en G.G., N.L.....", determinación la anterior, que además de no haber sido impugnada en su momento por la Representación Social, resulta acertada al establecer que la pasivo L.R. no otorgó el permiso al acusado de referencia para introducirse al citado domicilio, por que contrario a lo argumentado por el Órgano Técnico, la citada pasivo si se encontraba autorizada para dar dicho premiso, pues si bien es cierto que del sumario se advierte que ésta no es la propietaria del referido inmueble, ello además de que no lo exige como requisito la figura penal a estudio, no le impide poder autorizar que alguna persona se introduzca al citado domicilio, pues manifestó vivir en el mismo con sus padres, e incluso, en un tiempo, ahí vivió también el referido acusado en unión libre con la denunciante J.A.L.R., además de que ésta, por su mayoría de edad, cuenta con el criterio suficiente para responsabilizarse del domicilio que habita junto con su hijo y sus padres. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 295/04, relativo al proceso número 221/03, instruido en contra de R.P.S., por el delito de Allanamiento de Morada y Otro.-Sentencia emitida en fecha 29-veintinueve de septiembre del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

245. DELITO DE AMENAZAS. LAS MANIFESTACIONES PROFERIDAS POR EL ACTIVO SIN POSIBILIDAD DE EJECUCION NO CONSTITUYE EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). AMENAZAS, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.- dentro de la causa no se acreditó la existencia del delito de Amenazas, ni por ende la responsabilidad que en su comisión se le imputa a I.S.G.; pues el hecho de que la pasivo refiera que el acusado Sánchez González después de agredirla a golpes, al llegar su nieta, quien trató de ayudarla, el acusado agarró un cuchillo y con el mismo la amenazó con matarla; no es suficiente para constituir el delito de Amenazas que tipifica el artículo 291 del Código Penal vigente en el Estado, pues dicha circunstancia no afectó la paz y seguridad de la querellante F.G.M., de tal manera que le produjera estado de inquietud, zozobra y desasosiego, durante un lapso más o menos largo y futuro, ya que no le anunció para un futuro que la privaría de la vida, sino que solo fue una reacción lógica de enojo al sentirse sorprendido por otra persona, por lo tanto, la simple advertencia de un mal, no concurre a la integración del delito en estudio, puesto que no obra dato alguno que acredite lo contrario; más aún, que del dicho de la también pasivo G.J.R.S., quien también presenció los hechos, en ningún momento refiere que su abuelita F.G.M.,

haya sido amenazada con el cuchillo por el acusado. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 387/05, relativo al proceso número 25/05, instruido en contra de I.S.G., por los delitos de Amenazas y otros.- Sentencia emitida en fecha 29-veintinueve de Septiembre del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

246. PARA QUE SE ACREDITE EL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, SE REQUIERE QUE SE JUSTIFIQUE LA CALIDAD DE CONDENADO DEL SUJETO ACTIVO. En autos no se encuentra acreditada la existencia del cuerpo del delito de Abandono de Familia, previsto por el artículo 282 del Código Penal Vigente en la época de los hechos, que señalaba: "Igual pena y procedimiento se seguirá, si el cónyuge condenado al pago de la pensión alimenticia deja de cubrirla sin causa justificada."; dado que no se acredita en la especie la calidad de "condenado" que exige el numeral en cita para que se configure el ilícito en comento, puesto que aún y cuando se advierte de la causa, que la C. A.R.S. se duele en su escrito de querella presentado en fecha 28 de Junio del año 2002, ante la Autoridad Indagadora, que dentro del juicio sumario de alimentos, con número de expediente 1250/2001, el Juez condenó a F.R.D. al pago de alimentos pagar a favor de la C. A.R.S. en representación de sus hijas Y.J.y D.A., ambas de apelativos R.R., y que el acusado ha incumplido con tal obligación; dicha acusación por parte de la querellante es en base a la sentencia dictada en fecha 24-veinticuatro de abril del año 2002-dos mil dos, por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos del expediente judicial antes citado, relativo al juicio sumario de alimentos, promovido por la señora A.R.S., en representación de sus hijas D.A. y Y.J., ambas de apelativos R.R., en contra de F.R.D., en la cual se condena a este último al pago de alimentos para sus menores hijas, resolución la anterior que de ninguna manera constituye una sentencia firme, como necesariamente se requiere para tener por acreditado el elemento normativo de que se trata, ya que la calidad específica de "condenado" debe valorarse acorde a lo que implica la fuerza y obligatoriedad de la cosa juzgada, que solo la da la sentencia firme; y en el caso concreto, F.R.D., interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución antes citada, tan es así, que dicho recurso de apelación fue resuelto el día 12-doce de Noviembre del año 2002, por el Magistrado de la Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, es decir con posterioridad a la presentación de la querella que originó la causa en estudio, modificando la sentencia de primer grado, y por lo tanto sustituyéndola legalmente, y no obstante que F.R.D. promovió juicio de amparo directo en contra de la misma, éste le fue negado por la Justicia de la Unión, mediante resolución de fecha 20 de Junio del año 2002-dos mil dos; por lo que es evidente, que en la fecha en que la C. A.R.S. presentó su escrito de querella, F.R.D., como ya se dijo, aún no estaba condenado al pago de la pensión alimenticia mediante sentencia firme, por lo que no se acredita uno de los elementos constitutivos del delito de Abandono de Familia, previsto por el artículo 282 del Código Penal Vigente en el Estado, en la época de los hechos. TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 543/05, relativo al proceso número 39/05, instruido en contra de F.R.D., por el delito de Abandono de Familia.- Sentencia emitida en fecha 09 de Noviembre del año 2006. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

247. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE CUANDO POR EL ESTADO DE SALUD DEL ACUSADO, NO SE LE PUEDE HACER SABER NOMBRE DE SU ACUSADOR Y LA NATURALEZA Y CAUSA DE LA ACUSACIÓN, O ESTÉ IMPOSIBILITADO PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, Y NO OBSTANTE ELLO, EL JUEZ NATURAL DECRETA AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN SU CONTRA Y CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO HASTA DICTAR SENTENCIA.- Se advierte de la causa, que el Juez, acompañado del Secretario Fedatario se constituyó en el Hospital Universitario, a efecto de recabar la declaración preparatoria del acusado V.oV.L.H. encontrándose presentes el C. Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado y el Defensor Oficial; sin embargo, la misma no pudo llevarse a cabo, toda vez que se hizo constar que el referido procesado se encontraba entubado, con ventilador mecánico con sondas e inconsciente completamente; y no obstante lo anterior, el A-quo decretó en contra de V.oV.L.H. Auto de Formal Prisión, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de Homicidio y Lesiones, ambos a Título de Culpa, aún y cuando el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, señala que la formal prisión se pronunciará cuando se haya tomado la declaración preparatoria del inculpado, en la forma y con los requisitos de Ley o bien, que conste en el expediente que se rehusó a declarar; y que el diverso numeral 449 de la misma codificación procesal, establece: "Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes:...V.-Cuando no se pueda hacer saber al inculpado el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, o esté imposibilitado para rendir su declaración preparatoria, en virtud de su estado de salud certificado médicamente;..."; por lo que es evidente que el Juez Natural practicó diligencias en forma distinta de la prevenida por la Ley, violando de esta manera, las leyes del procedimiento y afectando las defensas del sentenciado, ya que no recabó la declaración preparatoria del inculpado y no obstante ello, lo declaró formalmente preso, siendo que aquélla diligencia es una garantía que tiene todo inculpado, prevista en el artículo 20 Constitucional fracción III, y en ella se debe hacer saber al activo en audiencia pública, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo; por lo que en suplencia de queja, se declara INSUBSISTENTE la sentencia motivo del grado, y en su lugar se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 46/06, relativo al proceso número 69/04, instruido en contra de V.o V.L.H., por el delito de Lesiones Culposo.- Sentencia emitida en fecha 04 de Octubre del año 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

248. CONFESIÓN. LA REALIZADA ANTE AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL CARECE DE TODO VALOR PROBATORIO. En atención a la inconformidad del Órgano Técnico, en el sentido de que lo declarado por los Policías Ministeriales J. A. S. L. y J. G. L. R. produce valor jurídico indiciario, contrario a ello, a los testigos en cuestión no les consta de manera personal, que el acusado haya cometido los hechos que se le imputan, además, si bien aseguran en sus declaraciones que el indiciado manifestó haber realizado el apoderamiento de los objetos del robo, ello carece de todo valor probatorio, pues el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, claramente establece que la Policía solamente podrá rendir informes pero no obtener confesiones, y si lo hace, estas carecerán de todo valor probatorio; en consecuencia, no es posible otorgarles a tales atestados el valor que la recurrente solicita. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca en Definitiva 423/04, relativo al proceso número 119/04, instruido en contra de R.E.A. por el delito de ROBO.- Sentencia emitida en fecha 18-dieciocho de Octubre de 2006.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

249. ROBO. LA PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA CON LA CUAL SE PRETENDE JUSTIFICAR LA PREEXISTENCIA, PROPIEDAD Y FALTA POSTERIOR DEL OBJETO DEL ILÍCITO, NO CORROBORADA CON OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, RESULTA INSUFICIENTE PARA ELLO.- Son procedentes los agravios de la Defensa Oficial del acusado, pues el Juzgador Primario aplicó incorrectamente la ley y violó los principios reguladores de la valoración de la prueba, al tener por acreditada en el presente asunto la existencia del delito de ROBO, así como la responsabilidad penal de J. T. D. en su comisión, ello en atención a que, de las pruebas que obran en el sumario se desprende, que si bien es cierto que el sujeto activo se introdujo en el negocio aludido y para tal efecto rompió un vidrio de una de las ventanas del citado inmueble, fue descubierto en su interior por el C. E. F. R. S., pero al intentar escapar fue detenido por el C. A. Q. C., para ser entregado al elemento de policía R. L. C., también es cierto que al ser detenido el acusado, no se encontró en su poder el supuesto producto del ilícito, ni de autos se desprende que el acusado hubiese confesado haber cometido el hurto que se le imputa, aunado a que en el sumario tampoco se encuentra acreditada la preexistencia, propiedad y falta posterior del objeto que se dice fue robado, es decir, de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en billetes de doscientos pesos, los cuales según declaración del supuesto afectado, se encontraban en el cajón de un escritorio, exponiendo que él los había puesto en ese lugar, lo cual pretende justificar con un recibo de la empresa “A. J. I.”, suscrito por el señor P. V. G. en favor de E. E. L., por la cantidad de cinco mil pesos, documental ésta que no justifica la preexistencia, propiedad y falta posterior del objeto de lo robado, ya que no se encuentra corroborada con otros elementos de prueba que la hagan creíble, puesto que los testimonios de C. R. L. C., elemento de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y de A. Q. C., no acreditan tales extremos, dado que el primero solo se concretó a acudir al auxilio solicitado por el denunciante y el segundo expresa haber visto

cuando el ahora acusado salió corriendo del negocio de su amigo el ahora denunciante, mas sin embargo, a ninguno le consta personalmente sobre la existencia del numerario de que se duele R. S. y mucho menos de su falta posterior, pues, como ya se dijo, el ahora acusado fue detenido minutos después de que el denunciante lo encontró en su negocio, y no tenía en su poder la cantidad que refiere el citado R. S.. En esa tesitura debe decirse que los testimonios de L. C. Y Q. C. no reúnen los requisitos establecidos por el artículo 323 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, por ser testigos de oídas, es decir, no conocieron del ilícito por ellos mismos o a través de sus sentidos, sino por inducciones o referencias de otro, como lo fue el denunciante, ya que los propios declarantes expresaron que tuvieron conocimiento del ilícito por así habérselos manifestado E. F. R. S., consecuentemente ante la falta de otros elementos que acrediten fehacientemente que E. F. R. S. fue desapoderado de la cantidad de dinero de que se duele y mucho menos que justifique que J. T. D. se hubiese apoderado del mismo, se determina que en autos no se acreditó legalmente la existencia del delito de robo, en perjuicio de E. F. R. S., ni por ende, la responsabilidad que en su comisión se le imputa a J. T. D. TOCA DE APELACIÓN EN DEFINITIVA 547/05, RELATIVO AL PROCESO 153/05, instruido en contra de J. T.D. POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO.- Sentencia emitida en fecha 20 de octubre de 2006.

250. ROBO. CUANDO EL VALOR DEL PRODUCTO DEL ILÍCITO NO FUE ESTIMADO DENTRO DEL SUMARIO, PROCEDE APLICAR LA PENA CONTENIDA EN LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 367 Y NO EL DIVERSO 369 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON.-Los agravios formulados por la Representación Social son improcedentes, lo anterior en virtud de que la Institución apelante, primeramente señala que no es posible dictar el Sobreseimiento, pues no se encuentra satisfecho el requisito de que la sanción a imponer por los delitos en comento no exceda de 03-tres años como pena máxima, ello en atención a que, al no haberse valorizado el producto del ilícito, en consecuencia cobra aplicación el contenido del artículo 369 del Código sustantivo de la materia. Motivo de inconformidad que, como ya se dijo resulta improcedente, pues contrario a lo señalado, el Juez de origen estuvo en lo correcto al considerar la fracción I del artículo 367 del Código Penal vigente en el Estado al momento de los hechos, dado que, como lo han determinado nuestras Autoridades Federales, corresponde a la Institución del Ministerio Público acreditar el monto del delito, ya que no es posible considerar que por el incumplimiento de esa obligación de la Representación Social, en perjuicio del acusado, se deban aplicar las reglas previstas para los casos en que no fuere posible estimar el valor de los mismos, luego, como ya se indicó, fue correcta la determinación del Juez Natural, al considerar la fracción I del artículo 367 del Código Penal en vigor para dictar el sobreseimiento de la causa, motivo por el cual se reitera lo improcedente del agravio del recurrente. TOCA EN ARTÍCULO 582/04 relativo al proceso número 100/01, instruido en contra de E.J.C.B. por los delitos de ROBO Y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.- Sentencia emitida en fecha 14 de noviembre de 2006.

251. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. CONCEPTO, CAUSAS GENERADORAS Y MEDIOS DE PRUEBA, DE LA "DELEGACIÓN PARCIAL DE FACULTADES", COMO ELEMENTO DEL DELITO DE. La "delegación parcial de facultades para el manejo, cuidado o administración de bienes ajenos", que es el primero de los elementos que forma parte de la descripción típica del delito de administración fraudulenta previsto por el artículo 396 del Código Penal del Estado, se da cuando el sujeto activo tiene respecto de ciertos valores o bienes ajenos, o respecto de los rendimientos o productos de éstos, una disponibilidad completa, la cual ejerce de manera autónoma aunque dentro de ciertos límites, ya que no actúa con el carácter de dueño, sino en provecho de otro. Por lo tanto, la "delegación parcial de facultades" no se actualiza, entre otros, en los siguientes casos: a) Cuando el sujeto activo posee ciertos bienes ajenos, pero sin tener respecto de ellos disponibilidad completa o facultades de dominio, ya sea porque sólo los posee en depósito, o a título precario por haberlos recibidos momentáneamente con la obligación de entregarlos de inmediato a quien puede disponer de ellos (apropiarse o desviar tales bienes, actualiza otros delitos, como por ejemplo el abuso de confianza, o el robo); b) Cuando el sujeto activo tiene respecto de los valores y bienes ajenos, una disponibilidad ilimitada equivalente a la de dueño, por ejemplo cuando actúa al amparo de un poder general para actos de dominio; c) Cuando el sujeto activo en realidad carece de facultades para disponer de ciertos valores o bienes ajenos, ya que sólo tiene atribución para formalizar contratos respecto de éstos, de tal manera que la disposición o la celebración de contratos respecto de tales capitales, le correspondería a otros, y no al sujeto activo, el cual sólo tendría facultades para darle al contrato propalado por otros, la forma jurídica que le corresponde. Ahora bien, la delegación parcial de facultades puede tener diversos orígenes jurídicos, ya sea la voluntad de las partes, o el mandato de la ley o de la autoridad: a) La delegación parcial de facultades tendrá como origen la voluntad de las partes, por ejemplo, en los siguientes casos: cuando las partes suscriban un contrato civil de mandato, el cual puede celebrarse con representación o sin ésta; cuando las partes celebren un contrato mercantil de comisión; o bien, tratándose de los factores o dependientes de una sociedad o empresa mercantil, regulados principalmente por los artículos 309 al 331 del Código de Comercio; y b) La delegación parcial de facultades, tendrá como origen el mandato de la ley o de la autoridad, por ejemplo, en el caso de los albaceas, síndicos, o interventores. En este orden de ideas, debe tenerse presente que los requisitos de existencia y validez del acto jurídico generador de la delegación parcial de facultades, y los medios de prueba para acreditar ésta, serán diversos dependiendo precisamente de cuál acto jurídico generador se trate, de tal manera que, por ejemplo, la "delegación parcial de facultades", podrá acreditarse con un poder notarial, cuando la delegación derive de un contrato de mandato con representación, pero cuando ésta derive de la figura mercantil del dependiente, entonces la prueba idónea será el respectivo contrato laboral. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Artículo 57/2006, relativo al proceso 61/2006, instruido en contra de T.G.P. por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, en el cual se confirma la Negativa de Orden de Aprehensión y Detención dictada en primera Instancia. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

252. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL TÉRMINO PARA COMPUTARLA SE INTERRUMPE CON LA CONSIGNACIÓN AUN SIN DETENIDO, VOLVIENDO A CORRER A PARTIR DE QUE SE LIBRA LA RESPECTIVA ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA INTERRUMPIRSE CON LA CAPTURA DEL INCULPADO. La consignación que hace el Ministerio Público ante el Juez, de una averiguación previa aun sin detenido, constituye un acto tendente a la persecución del delito, e inicia el ejercicio de la acción penal, por lo tanto debe considerarse que la referida consignación interrumpe la prescripción de la acción penal, pues no podría entenderse que este derecho pueda prescribir mientras se ejerce. Ahora bien, cuando la consignación es sin detenido y el Juez libra la orden de aprehensión solicitada, a partir de este momento el término para la prescripción de la acción penal nuevamente vuelve a correr, ya que los procedimientos penales no pueden quedar abiertos indefinidamente, y sólo se interrumpe en los dos casos previstos en los artículos 134 y 135 del Código Penal vigente en el Estado: a) hasta que se logra la captura del inculpado, o b) por las actuaciones practicadas y ordenadas por el Juez para la comprobación del delito y la responsabilidad del inculpado, y siempre y cuando estas actuaciones se realicen antes de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción de la acción, ya que si se realizan después no interrumpirán la prescripción. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Artículo 123/2006, relativo al proceso 232/2006, instruido en contra de M. A. A. C por el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA POR CULPA, en el cual se confirma el sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictada en primera Instancia. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

253. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SI EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, SE RECLASIFICA EN SEGUNDA INSTANCIA A HOMICIDIO EN RIÑA, EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN DEBERÁ HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA PENA QUE CORRESPONDE AL DELITO DETERMINADO POR EL AD QUEM. Cuando en la segunda instancia, se varía o reclasifica el delito o las circunstancias de éste, a partir de ese momento el cómputo del término para la prescripción de la acción penal, deberá hacerse tomando en cuenta la sanción que corresponda al delito definido por el Tribunal ad quem, y no al delito originalmente determinado por el Juez a quo. Por lo tanto, si desde que se ordenó la aprehensión del inculpado, y hasta que éste fue aprehendido, transcurrió un periodo no suficiente para prescribir la acción penal por el delito de homicidio simple originalmente determinado por el a quo, pero sí suficiente para prescribir la acción penal por el delito de homicidio en riña definido por el ad quem, entonces la prescripción deberá declararse al variar el delito de homicidio simple a homicidio en riña. Esto, particularmente considerando que el artículo 123 del Código Penal del Estado, ordena que la prescripción debe declararse en cualquier momento, tan luego como el juzgador tenga conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Artículo 148/2006, relativo al proceso 395/97, instruido en

contra de R.A.B. por el delito de HOMICIDIO, en el cual se modifica el Auto de Formal Prisión dictado en primera Instancia. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

254. ABANDONO DE FAMILIA. LA CONDENA POR REPARACIÓN DEL DAÑO, DEBE INCLUIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR ALIMENTOS, QUE SE HUBIEREN VENCIDO ANTES DEL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y QUE HUBIEREN SIDO PRECISADAS EN ÉSTE, PERO NO LAS QUE HUBIEREN VENCIDO DURANTE EL PROCESO O CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 280 del Código Penal vigente en el Estado, en la parte que establece que el delito de abandono de familia, incluye como pena, el pago como reparación del daño, de las cantidades por concepto de alimentos no suministradas oportunamente por el acusado; debe interpretarse de manera conforme con la Constitución Federal y con la Constitución Estatal, en el siguiente sentido: La condena por reparación del daño que se imponga al responsable del delito de abandono de familia, sólo debe incluir el pago de las cantidades adeudadas por concepto de alimentos, que se hubieren vencido antes del dictado del auto de formal prisión y que hubieren sido precisadas en éste. Por lo tanto, no cabe condenar al pago de las cantidades adeudadas por alimentos, que se hubieran vencido durante el proceso penal, y menos aún a las que se sigan venciendo con posterioridad al dictado de la sentencia, ya que con esta interpretación se le daría al citado artículo 280 del Código Penal un alcance que resulta violatorio de diversas garantías penales previstas en la Constituciones Federal y Estatal, por ejemplo las siguientes: Se violaría la garantía penal de litis cerrada (artículo 19, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Estatal), de acuerdo con la cual todo proceso debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión, quedando el juez impedido para conocer y juzgar hechos posteriores; Se violaría también el precepto constitucional que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe de manera exclusiva al Ministerio Público (artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal, y artículo 25, primer párrafo, de la Constitución Estatal), y en general se violarían los más elementales derechos del acusado, si a éste se le condena a reparar el daño causado por conductas respecto de las cuales el Ministerio Público no ejercitó acción penal, y respecto de las cuales el acusado no tuvo dentro del proceso penal, la debida oportunidad de defensa por tratarse de conductas posteriores a la acusación e incluso posteriores a la sentencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CUARTA SALA. Toca en Definitiva 146/2006, relativo al proceso 116/2003, instruido en contra de R. G. M. por el delito de ABANDONO DE FAMILIA, en el cual se modifica la Sentencia de Primer Grado. Magistrado: Carlos Emilio Arenas Bátiz.

255. AUTO DE CONSIGNACIÓN DEL ÓRGANO INVESTIGADOR.- SU TRASCENDENCIA AL MOMENTO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- El numeral 193 del Código de Procedimientos Penales vigente en

el Estado, determina lo siguiente: **"**Agotada la averiguación por el Ministerio Público, por reunirse los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercitará la acción penal. El Ministerio Público estará obligado a precisar de una manera breve el hecho por el cual ejercita acción penal; expresará el delito que se le imputa al inculpado, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas de éste, en su caso, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, propondrá las cuestiones de derecho y citará las leyes aplicables...**"** El artículo 150 Bis del código de procedimientos penales en vigor, establece: **"**Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por el Código Penal vigente en el Estado. Tratándose de la orden de aprehensión y detención, del auto de formal prisión y del auto de sujeción a proceso, deben incluirse los elementos integrantes de la figura penal y las modalidades o circunstancias modificativas del delito...**"** Atendiendo al contenido de los anteriores dispositivos, es de observarse que en el auto de consignación visible de la foja 41 a la 52, el Representante de la Institución Ministerial no establece que los hechos por los cuales ejercita la acción penal se hubiesen realizado bajo alguna de las circunstancias calificativas a que hace alusión el numeral 316 del Código Penal del Estado, y por ende, el Juez no estaba obligado dentro de su fallo a proceder a su análisis sólo porque se lo hubiese solicitado el Representante Social al momento de tener verificativo la audiencia de declaración preparatoria; pues con tal proceder el A quo no se aparta de los lineamientos establecidos en el dispositivo 216 del Código de Procedimientos Penales en vigor, que prevé como facultad discrecional del Juez, el dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, por el delito que aparezca comprobado, correspondiéndole así a la Autoridad Judicial determinar el delito que se configure de tal ejercicio de la acción penal, pudiéndose estar en condiciones de realizar un cambio de la clasificación de un delito por otro por el que se sujete al inculpado a formal prisión, sin implicar con ello una variación de los hechos por los que ejercitó la acción penal el Ministerio Público, pero no lo faculta de igual modo a incluir circunstancias agravadoras que no fueron materia de su consignación a la Autoridad Judicial; de manera que esta última restricción para el Juez supedita a que su actuar será tomando en consideración sólo los hechos materia de la consignación, la descripción típica legal y la probable responsabilidad correspondiente, por lo anterior es que este Tribunal de apelación considere que efectivamente, el Juzgador de primer grado se encontraba imposibilitado para proceder a entrar al estudio de las calificativas previstas en las fracciones I y II del artículo 316 del código penal en vigor, precisamente porque en el auto de consignación dictado por parte del C. Agente del Ministerio Público Investigador no se incluyeron circunstancias calificativas del hecho por el cual ejercitó la acción penal correspondiente, sino únicamente se avocó en el auto de consignación correspondiente a precisar en relación al hecho por el cual ejercitó la acción penal, expresando únicamente que el delito imputado a D. A. V. F. lo es el de Homicidio, previsto en el artículo 308 en relación con el diverso 312 del Código Punitivo de la materia, expresando lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, proponiendo las cuestiones de derecho y las leyes aplicables; empero, no incluye en el hecho imputado a la inculpada alguna de las calificativas previstas en el numeral 316 del Código Penal del

Estado. En relación a lo expuesto, conviene decir también que, de la interpretación del párrafo primero del artículo 21 Constitucional, se deduce que la función persecutora del Ministerio Público consiste en ejercitar la acción penal y pretender punitivamente mediante el acto llamado "consignación", lo que evidentemente constituye una obligación o deber para tal Institución de ejercitar la acción penal ante el Tribunal; por tanto, si tal presupuesto no aconteció respecto a las circunstancias calificativas a que hace referencia la Institución del Ministerio Público en su agravio y que pretende se dé por demostrado en esta Instancia; conlleva a determinar que esa omisión de la Fiscalía Investigadora no puede ser abordada por parte del suscrito Magistrado, al resultar violatorio de garantías para la inculpada D. A. V. F. Luego entonces, legalmente el Juzgador no estaba obligado a estudiar acerca de la actualización o no de las calificativas que le fueron señaladas al momento de la declaración preparatoria de D. A. V. F., debido a la cuestión técnica arriba precisada, de manera que aún y cuando este Tribunal de apelación comparta la opinión del Ministerio Público en su agravio, relativo a la actualización de la calificativa prevista en la fracción II del artículo 316 del Código Penal del Estado; en atención a lo dispuesto por los numerales 150 bis y 193 del código adjetivo de la materia, este Tribunal de alzada se encuentra impedido para pronunciarse con motivo de la cuestión planteada vía agravio, y en consecuencia, el agravio elevado en esta segunda instancia por el Ministerio Público deviene inoperante en la especie. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA UNITARIA PENAL. Sentencia dictada en fecha 8 de enero del año 2007, Toca Art. 180/2006. Proceso No. 130/2006. Acusado: D. A. V. F. Delito: Homicidio y otro. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Unitaria Penal.

256. SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA.- CASO EN QUE OPERA EL CONTENIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 287 BIS 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. Contrario a lo sostenido en agravio por el Órgano Técnico, de la lectura del fallo recurrido se observa que, la resolución de Sobreseimiento por extinción de la acción penal que fuera decretado por parte del Juez, no fue a virtud del perdón de la ofendida, sino más bien, quedó condicionado a que en caso, de que se llegase a un acuerdo mediante mediación o conciliación entre el acusado y la víctima del delito, como en el caso ocurrió, tal sobreseimiento únicamente podía operar, si el agresor, dentro de los doce meses a la fecha del acuerdo de suspensión del procedimiento, acredita haber cumplido con los requisitos mencionados en el penúltimo párrafo del artículo 287 bis 1 del Código Penal del Estado, mismo que a la letra dice: "... Habrá sobreseimiento por extinción de la acción penal si se acredita en el transcurso de doce meses contados a partir de la orden de suspensión del procedimiento, el inculpado o procesado no realizó conducta que constituya un delito previsto en este Capítulo, que cumplió con las obligaciones alimentarías y que se sujeto al tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médica-psicológica, en caso contrario, se continuará el procedimiento..." Las exigencias antes señaladas, son abordadas en forma correcta por parte del Juez al emitir su determinación, e inclusive en su libelo de agravio, el Órgano Técnico admite que efectivamente obra la suspensión del procedimiento por parte del Juez; que además a la fecha del fallo

combatido, trascurrió el lapso de tiempo a que alude el numeral transcrito; que además obra la manifestación de la afectada A. M. A. C. a la Autoridad Judicial, en el sentido de que el acusado no la ha vuelto a agredir ni física ni psicológicamente y no ha tenido ninguna clase de problemas con el acusado; que de igual modo, obra la manifestación de la pasivo que le consta que el acusado M. U. P. o M. V. U. o M. U. G. acudió a recibir terapia psicológica y ha cumplido con sus obligaciones alimentarias para con dicha afectada, además de obrar dentro de autos el informe rendido por el Director del Centro Preventivo de Readaptación Social en el Estado, en el que se hace constar que ante dicha dirección no se ha registrado nuevo proceso del fuero común o del federal que haya ameritado cárcel privativa. No obstante lo anterior, considera el apelante en su agravio, que el único aspecto de los previstos en el penúltimo párrafo del artículo 287 bis 1 del Código Penal del Estado que no se encuentra probado, es que el acusado se haya sujetado al tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médica-psicológica y apoya su aseveración con el informe rendido por el C. Licenciado E. J. P. G., de fecha veintidós de enero del año dos mil siete, visible a foja 90, estimando así que en la especie no se ha cumplido con el tratamiento orientado a la rehabilitación médico-psicológica del acusado, incumpliéndose con lo previsto en la norma contemplada en el artículo 287 bis 1 del Código Penal en vigor, que dispone entre otros aspectos, que en el transcurso de los doce meses el acusado debe sujetarse a dicho tratamiento y que al hacerlo, es decir, cuando ya se sujetó al mismo, durante el plazo de la suspensión del procedimiento, procede el sobreseimiento de la causa, lo cual en el caso en específico no se ha colmado para el apelante. En relación a lo señalado por el Representante Social, debe decirse que de la documental visible a foja 90, consistente en el escrito remitido por el C. Licenciado E. J. P. G., Coordinador del Departamento de Psicología de "Renace A.B.P. una justa oportunidad", y dirigido al C. Juez Natural, se obtiene la siguiente información: "LIC. E. J. P. G., en mi carácter de Coordinador del Departamento de Psicología de INSTITUCIÓN RENACE A.B.P., ante Usted, con el debido respeto hago de su conocimiento que en respuesta al oficio 112/2007 que fue remitido con fecha del 18 de enero del presente año y que recibí el 19 de enero de este mismo año, referente al expediente 290/2005, dirigido a esta Institución mediante el cual Usted solicita atentamente informar si en esta institución se le brindó atención médico-psicológica al C. M. U. P. o M. V. U. o M. U. G. y en caso de ser afirmativo que informe si esta fue por el período de 12 meses, comparezco a informar lo siguiente: El día 8 de enero del año 2007 se presentó a esta institución una persona que refiere llamarse M. U. P. mencionando que fue referido del Juzgado Segundo de Monterrey ya que en el mes de octubre del año 2006, discutió y agredió físicamente a su hijo y a su esposa. Desde esta fecha y hasta el día de hoy el C. M. se encuentra en evaluación ya que debemos de recabar cierta información para determinar si en esta institución estamos en condiciones de brindarle el tratamiento orientado a su rehabilitación médico-psicológica. Por lo que hago de su conocimiento que el C,. M., en esta institución no ha recibido el tratamiento que le fue indicado por Usted..." Como puede desprenderse del informe antes transcrito, se prueba en la especie que M. U. P. o M. V. U. o M. U. G. acudió ante dicha Institución en fecha 8-ocho de enero del año 2007-dos mil siete, a someterse al tratamiento señalado en el artículo 287 bis 1 del Código Penal en vigor,

donde al día de la presentación del informe en el Juzgado, se encuentra en evaluación. En relación con lo detallado, se precisa necesario señalar que conforme al decreto número 81, publicado en el Periódico Oficial de esta Entidad, el veintiocho de abril del año dos mil cuatro, en concordancia con la exposición de motivos relativa a la reforma por modificación al artículo 287 bis 1 del Código Penal del Estado, y del dictamen de origen relativo; se obtiene lo siguiente: "... Se recomienda una medida innovadora en el artículo 287 Bis 1, mediante la cual el delito de violencia familiar se perseguirá ya no por querella, sino de oficio, con la finalidad de que no sea el perdón del ofendido el que extinga la responsabilidad penal, sino que se condicione a que en caso de que pueda llegarse a un acuerdo mediante mediación o conciliación entre el agresor y la víctima, el sobreseimiento por extinción de la acción penal únicamente pueda darse si el agresor dentro de los siguientes doce meses a la fecha del acuerdo, acredita que se sometió a un tratamiento dirigido a su rehabilitación médico-psicológica, que cumplió con sus obligaciones alimentarias y que no incurrió en nuevas conductas de violencia familiar, y de no acreditar estas circunstancias, se continuará el procedimiento. Esta sugerencia tiene por objeto evitar las constancias extinciones de la acción penal en este delito, originadas por el perdón del ofendido, ya que se detectó una conducta reiterada en la que se acusaba y perdonaba constantemente al agresor, sin que se percibiera ni incentivara una mejora en la actitud, por lo que a través de esta propuesta se busca generar un cambio positivo en el agresor, por supuesto, siempre que la víctima acepte por su propia voluntad mediar o conciliar el conflicto..." De lo transcrito, es que se sostiene lo infundado del agravio, pues la intención del legislador al establecer el penúltimo párrafo del precepto legal 287 bis 1 del Código Penal del Estado, no persigue como imperativo que el procesado tenga que cumplir con el tratamiento por un tiempo preciso, sino más bien, busca que en el transcurso del tiempo indicado en el numeral, contado a partir de la orden de suspensión del procedimiento, como lo es en el presente caso el día 29-veintinueve de noviembre el año 2005-dos mil cinco, se acredite entre otras cosas, que el procesado de referencia se sujete al tratamiento integral dirigido a su rehabilitación médico-psicológica; percibiéndose o incentivándose así una mejora en la actitud del procesado y se genere un cambio positivo en dicho agresor; lo cual en el caso acontece, desde el momento mismo que el procesado de referencia puso en evidencia su voluntad de sujetarse al tratamiento en cuestión desde el día 8-ocho de enero del año 2007-dos mil siete, según se observa en el informe arriba transcrito, donde a la fecha de su presentación en el Juzgado, se encuentra en evaluación; demostrándose entonces, que M. U. P. o M. V. U. o M. U. G. efectivamente cumplió con la condición prevista en el penúltimo párrafo del numeral 287 bis 1 del Código Penal, al sujetarse al tratamiento integral dirigido a su rehabilitación médica-psicológica, acorde a lo manifestado en el informe rendido por el Licenciado E. J. P. G., Coordinador del Departamento de Psicología del Instituto Renace A.B.P., de fecha 22 de enero del año 2007-dos mil siete. Así las cosas, contrario al agravio del Órgano Técnico, la condición que nos atañe, al igual que el resto de las señaladas en el penúltimo párrafo del numeral 287 Bis 1 del Código Penal del Estado, hacen operante el sobreseimiento de la causa, de la forma que lo estableció el Juez Natural en la determinación de fecha 25-veinticinco de enero del año 2007-dos mil siete;

consecuentemente, al ser infundado el agravio elevado por la Representación Social, lo que procede es CONFIRMAR en sus términos, la resolución de fecha 25-veinticinco de enero del año 2007-dos mil siete, mediante la cual se decretó el Sobreseimiento de la causa, a favor de M. U. P. o M. V. U. o M. U. G., por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, al encontrarse satisfechos los requisitos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 287 bis 1 del Código Penal vigente y 369 fracción I del Código Procesal Penal en vigor. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA UNITARIA PENAL. Sentencia dictada en fecha 29 de marzo del año 2007, Toca Art. 25/2007. Proceso No. 290/2005. Acusado: M. U. P. o M. V. U. o M. U. G. Delito: Violencia Familiar. Magistrado: Obed Renato Jiménez Jáuregui. Segunda Sala Unitaria Penal.

257. FRAUDE MAQUINADO, NO SE ACREDITA EL DELITO DE. No se justifica la existencia del delito de Fraude Maquinado que se le imputa al acusado J.B.P., previsto por el artículo 391 del Código Penal en Vigor, ya que no se acreditó plenamente que éste haya empleado maquinaciones, engaños o artificios para lograr que se le entregaran las diversas cantidades en efectivo de las cuales dispuso, mismas que resultaron ser propiedad de CH.D.S.A.C.V.; ya que tal y como se desprende de las diversas declaraciones de los empleados de dicha empresa, tales cantidades en efectivo le eran entregadas voluntariamente a B.P. por el cajero general de dicha negociación, en virtud del puesto de mensajero que desempeñaba dentro de la mencionada empresa, en el cual tenía entre otras funciones, la de recibir por parte de dicho cajero las cantidades en efectivo o en cheque del corte de caja, mismas que debía depositar en la institución bancaria donde la referida empresa tenía sus cuentas, y posteriormente entregar al citado cajero las correspondientes fichas de depósito que amparaban dichas cantidades de dinero que le habían sido entregadas; de ahí que no se encuentren acreditadas las maquinaciones, engaños o artificios empleados por B.P. para obtener tal numerario, pues como ya se dijo, le fue confiada voluntariamente la tenencia del mismo por el cajero de dicha empresa en virtud de la función de mensajero que desempeñaba dentro de dicha negociación, sin que obste para lo anterior, el hecho de que B.P. haya mutilado las diversas copias al carbón de las fichas de depósito que él entregaba al cajero por las cantidades en efectivo que este último le confiaba para su deposito en el banco, ya que tales circunstancias no constituyen las maquinaciones, engaños o artificios como incorrectamente lo estableció el A-quo, sino que tales actos tienen como finalidad la ocultación de la conducta por él desplegada para disponer de dicho efectivo; por tanto, al haberse acreditado dentro del sumario que se le confió al acusado voluntariamente la tenencia de tales cantidades en efectivo, solo que éste violó la finalidad jurídica de dicha tenencia, pues en lugar de hacer el respectivo depósito en el banco donde la referida persona moral tenía sus cuentas, actuó como si fuera dueño de tales cantidades y dispuso de las mismas, en todo caso lo que constituiría sería la figura delictiva de abuso de confianza y no la fraude Maquinado como incorrectamente lo determinó el de Menor Grado, pues como ya se dijo, necesariamente se tendría que acreditar que el activo haya empleado maquinaciones, engaños o artificios para lograr la entrega de tal numerario, lo que en la especie no acontece, ya que el mismo le fue

entregado de forma voluntaria por el cajero de dicha empresa, pues cabe señalar, que una cosa es disponer de la cosa entregada en confianza y otra lograr la confianza de alguien para que entregue la cosa. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 260/06, relativo al proceso número 148/05, instruido en contra de J.B.P., por el delito de Fraude Maquinado.- Sentencia emitida en fecha 13-trece de marzo del año 2007-dos mil siete.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

258. CORRUPCIÓN DE MENORES, NO SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO POR OMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. No se acredita dentro del sumario la probable responsabilidad por omisión del inculpado Víctor Hugo Huereca Ayala en el ilícito de Corrupción de Menores, en términos del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado, toda vez que si bien el referido H.A., pudo haber evitado que las menores D.L.A.L. y G.C.G. ingirieran bebidas embriagantes, éste no tenía el deber jurídico de hacerlo como incorrectamente lo determinó el de Menor grado, pues es menester dejar establecido, que la hipótesis a que alude el citado dispositivo legal, se refiere al delito de *omisión impropia* o *delito comisivo por omisión*, en el cual, el injusto debe seguir de un deber jurídico determinado que específicamente vincule al sujeto activo con el bien jurídico tutelado, lo que se conoce como *posición garante*, la cual alude precisamente a la calidad de garante que debe tener el agente para que le sea atribuible el resultado típico originado por la omisión impropia de que se trate, misma que puede ser derivada de una ley, de un contrato, de una conducta anterior, de deberes profesionales, etc, como sería el caso por ejemplo, de la madre que no da de comer a su hijo pequeño (siendo ésta su obligación legal) y éste muere de hambre (Homicidio), o el caso del salvavidas que está obligado a vigilar que las personas en una alberca no se ahoguen cuando nadan (en virtud de un contrato) de tal suerte que si por un descuido de éste o por una falta al deber del cuidado indicado, algún nadador se ahogara sin que el agente hubiera hecho lo que estuviera de su parte para impedirlo, éste habrá de responder del resultado homicida de la misma forma que si el hubiera producido con un comportamiento activo la muerte de aquel; de ahí que sólo puedan ser responsabilizados en los delitos impropios de omisión, los omitentes que estén en posición de garantes, es decir, que tengan una estrecha vinculación con el bien jurídico protegido, posición en la que evidentemente no se encontraba el acusado V.H.H.A. en relación con las citadas menores, al presenciar que éstas ingerían bebidas embriagantes, ya que en él no recaía la responsabilidad de velar por la salvaguarda del bien jurídico protegido, como sería en este caso, el sano desarrollo físico y mental de las menores D.L.A.L. y G.C.G., pues en todo caso a quien compete tal posición de garante, es a los padres, tutores o maestros de éstas, en quienes recae la obligación de velar por su educación, inculcándoles los debidos valores y guiándolas por buen camino, a fin de alejarlas entre otros, de prácticas nocivas, como sería en este caso ingerir bebidas alcohólicas o incluso el consumo de drogas, máxime que el inculpado de referencia apenas había entrado a su mayoría de edad, por lo que no se le puede exigir una

obligación que no le compete ni alcanza a discernir, como incorrectamente lo determinó el Juez de la causa, de donde resulta que la probable responsabilidad que se le imputa en la comisión del ilícito de Corrupción de Menores no se encuentra debidamente acreditada en el sumario. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 113/07, relativo al proceso número 89/06, instruido en contra de V.H.H.A., por el delito de Equiparable a la Violación.- Resolución emitida en fecha 10 de julio del año 2007-dos mil siete.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

259. VIOLENCIA MORAL. EXISTENCIA DE LA CALIFICATIVA. Para considerar la existencia de la calificativa de violencia moral, los amagos o amenazas que ejecute el sujeto activo, deben ser suficientes para afectar la capacidad de oposición y resistencia del pasivo, y no como refiere el apelante, quien señala que con el solo hecho de que el acusado estime que con determinados actos, logrará el objetivo de intimidar al afectado, será bastante para acreditar la calificativa en cuestión, lo cual no aconteció en la especie, pues lejos de haber sido intimidado, D.G.R. enfrentó al acusado, pateándolo en una pierna y haciéndolo caer al suelo, para después forcejear con él y entregarlo a los elementos de Policía Municipal, por lo que resulta evidente que el pasivo lejos de intimidarse, golpeó al ladrón, evitando así el robo. Toca en artículo 97/07 relativo al proceso número 35/07, instruido en contra de J.A.G.F. por el delito de Robo en Grado de Tentativa.- Sentencia emitida en fecha 28 de junio de 2007. Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

260. INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE NULIDAD DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. Esta Autoridad estima que si bien el Juez Natural tramitó el Incidente de Nulidad planteado, como un Incidente no especificado y en virtud de ello admitió el recurso de apelación hecho valer por el Defensor del acusado, ello resulta incorrecto, puesto que la Nulidad planteada sí tiene una tramitación propia, prevista en el numeral 123 del Código de Procedimientos Penales en vigor, el cual establece el trámite específico para ese tipo de Incidencias, de tal suerte que el medio de impugnación intentado por el Defensor del acusado no es el idóneo, pues, tal y como lo establece la fracción V del artículo 385 del cuerpo de leyes en consulta, únicamente será apelable el auto que resuelva, entre otros, algún incidente no especificado por la legislación adjetiva de la materia, por lo que al no encontrarse prevista en ella la Nulidad de Actuaciones hecha valer, resulta inconcuso que el Auto dictado por el Juez Natural en fecha 07-siete de septiembre de 2006-dos mil seis, no es de los contemplados por la ley como apelables, en consecuencia, el recurso idóneo para combatir la referida resolución resulta ser el previsto por el artículo 378 del ordenamiento procesal penal en consulta, es decir, el Recurso de Revocación. Toca en artículo 368/06 relativo al proceso número 95/06, instruido en contra de G.R.D.CH. por los delitos de Corrupción de Menores, Equiparable a la Violación y Violencia Familiar. Sentencia emitida en fecha 8 de marzo de

2007. Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

261. EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, NO SE ACREDITA SI NO SE JUSTIFICA LA AUSENCIA DE VOLUNTAD O LA EXISTENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL. De lo declarado por la pasivo no se advierte que para la supuesta ejecución del ilícito en estudio, existiera la ausencia de voluntad, toda vez que de su propio dicho se desprende la aceptación de los actos que supuestamente el ahora acusado ejecutó en ella, pues teniendo ésta conocimiento del protocolo a seguir en una auscultación ginecológica, tal como ella misma lo refiere de que en toda exploración ginecológica debe estar presente la asistente médica, aquella permitió que dicha revisión fuera en forma diferente según su dicho; máxime que la presente causa tampoco se justificó la existencia de la violencia física o moral, pues la citada pasivo en ningún momento refiere que el acusado la haya agredido físicamente, mucho menos que la haya amenazado con causarle un mal grave, presente e inminente, para supuestamente introducirle uno de los dedos de su mano en la vía vaginal, tal como supuestamente así lo refiere la denunciante, pues no es creíble que ante tales actos ésta no hiciera ninguna exclamación al haber salido del lugar en el que sucedieron los hechos de que se duele, sino hasta el momento en que llegó a su domicilio, no sin antes realizar otros trámites sobre su tratamiento; así entonces, no existen evidencias eficaces e idóneas para demostrar que el ahora acusado hubiese sostenido cópula por la vía vaginal con la que se dice ofendida mediante la ausencia de su voluntad o violencia en su persona para consumar en ella el acto ilícito; de ahí que si este proceder se comete en una persona, sin mediar la ausencia de voluntad, no puede satisfacerse ese extremo, como erróneamente lo realizó la A-quo, al considerar acreditado el delito de Equiparable a la Violación. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 430/06, relativo al proceso número 190/04, instruido en contra de R. R. R., por el delito de Equiparable a la Violación.- Sentencia emitida en fecha 29 de Junio del año 2007. – Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

262. REPARACIÓN DEL DAÑO, ES INATENDIBLE LO MANIFESTADO POR LA PARTE OFENDIDA, POR NO CONSTITUIR AGRAVIO. La suscrita Magistrada considera intrascendente lo manifestado por la parte afectada, pues por agravio debe entenderse que es la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por lo tanto cada agravio expresado debe precisar cuál es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto legal que se estima violado y explicar el concepto por el que fue infringido, por lo que, sin estos requisitos el agravio no es apto para ser tomado en consideración, tal como sucede en la especie; por lo tanto, al no constituir agravio lo manifestado por la pasivo del delito, se declara firme y subsistente este apartado. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de

Apelación en Artículo número 107/05, relativo al proceso número 50/05, instruido en contra de M. E. N. C. y E. P. S. L. , por el delito de Lesiones.- Sentencia emitida en fecha 06 de Febrero del año 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

263. NO EXISTE FRAUDE SI NO SE PRUEBA EL ELEMENTO ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO. ADEMÁS ES ILEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE DICTE EN UNA CAUSA PENAL SI LA ACCIÓN PERSECUTORIA QUE LE DIO ORIGEN SE ENCONTRABA PRESCRITA.- Si bien, según se desprende de autos, que en fecha 27 de octubre del 2001, la pasivo encontró un anuncio en el periódico ofreciéndose en venta un bien inmueble, apareciendo el número de teléfono para dar informes de dicha venta, por lo que realizó la llamada telefónica concertando una cita con la señora B.G.L., y en fecha 29-veintinueve de Octubre del mismo año, la acusada G.L., recibió de la querellante N.A.M.C., la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 MN.) en efectivo, por concepto de la compra-venta del inmueble aludido; también lo es, que de ello, no se justifica el elemento principal consistente en el *engaño**,*** puesto que es evidente que la obtención de dicho numerario no fue producto de un engaño ni se obtuvo ilícitamente, dado que el mismo proviene de una operación contractual y fue entregado a la acusada de mutuo propio por la que se dice afectada, según se desprende de un *pagaré*, que según la leyenda que aparece al reverso de dicho documento, únicamente ampara el hecho de que en fecha 29-veintinueve de Octubre del año 2001-dos mil uno, la acusada González Loyola, recibió la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), por parte de la querellante N.A.M.C., como "separación" del mencionado inmueble, sin que de dicho documento, se advierta que en ese preciso momento, la acusada B.G.L., se haya valido de argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, o hubiese producido un falso conocimiento en la que se dice afectada, es decir, que se hubiese ostentado como propietaria del inmueble en cuestión, que provocara en ésta, la determinación de realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio de la acusada; tan es así, que de la propia querella presentada por la que se dice afectada Norma Alicia Méndez Carrillo, se desprende que para cuando se llevó a cabo dicho trato, la querellante ya tenía conocimiento de que el inmueble en cuestión se encontraba habitado por terceras personas, aceptando ésta, la condición de que en un plazo máximo de un mes, la acusada sacaría del referido inmueble, a los parientes de su esposo que estaban viviendo ahí y le entregaría materialmente el mismo; lo cual, también se corrobora con lo declarado por M.G.R.T. y J.L.L.A., quienes manifestaron haber estado presentes en el momento en que la que se dice afectada entregó el numerario de cuenta a la acusada, por concepto de un enganche de una casa y ésta última le extendió un pagare, acordando que hasta después de un mes le entregaría el inmueble.- Además de lo anterior, no pasa desapercibido para quien hoy resuelve, que la que se dice pasivo N.A.M.C., presentó su querella fuera de término, pues en atención a lo señalado por el artículo 129 del Código Penal en vigor, que a la letra dice: "Tratándose de delitos que solo pueden perseguirse por querella, ésta deberá presentarse dentro de un plazo de un año, contando desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del

delincuente, y en tres años, independientemente de esta circunstancia. Presentada en tiempo la querella, se observarán las reglas de la prescripción para los delitos que se persiguen de oficio. Las querellas presentadas fuera de término, no tendrán eficacia alguna, y por tanto el Ministerio Público estará impedido para ejercitar la acción penal"; de la causa a estudio, en especial de la misma querella, se advierte que el día 29-veintinueve de Octubre del año 2001-dos mil uno, la mencionada M.C., acordó con la acusada la compra-venta del inmueble mencionado en el párrafo inmediato anterior, entregándole la cantidad de 40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo como enganche, prometiéndole en ese momento la acusada, que en un plazo máximo de un mes le entregaría materialmente el inmueble, lo cual no sucedió, ya que llegado el término, es decir, el día 29-veintinueve de Noviembre del año 2001 dos mil uno, la acusada le manifestó diversas excusas para no cumplir con el trato pactado, transcurriendo así el tiempo, sucediendo lo mismo en varias ocasiones; de lo cual, se deduce que M.C., tuvo conocimiento de estos hechos, a partir del día 29-veintinueve de Noviembre del año 2001 dos mil uno, y si la querella fue presentada ante el Ministerio Público Investigador, en fecha 04-cuatro de Diciembre del año 2002-dos mil dos, según se desprende del sello de recibido que se aprecia al calce de la misma, es claro que ya había trascurrido el plazo de un año que señala el dispositivo de cuenta, y al tratarse de un delito cuya persecución sólo procede a instancia de parte, es indudable que la querella fue extemporánea y, por consiguiente, la sentencia dictada en la causa penal a estudio, es violatoria de garantías, pues el proceso penal sólo puede tramitarse válidamente cuando la acción persecutoria se ejercitó dentro del término legal establecido. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA PENAL. Toca de Apelación en Definitiva 18/06, relativo al proceso número 488/03, instruido en contra de B.G.L., por el delito de Fraude.- Sentencia emitida en fecha 23-veintitrés de Enero del año 2007.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

264. ROBO EN CASA HABITADA. ES IRRELEVANTE QUE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL DELITO BÁSICO SEA MENOR QUE LA DETERMINADA PARA LAS CALIFICATIVAS. Quien ahora resuelve procede a analizar dicha Calificativa, estimando que como bien lo hizo valer el recurrente en sus agravios, de los hechos motivo de la consignación, consistentes en que el inculpado de referencia, alrededor de las 10:05 horas, del día 28-veintiocho de Diciembre del año 2006-dos mil seis, se introdujo por la cochera al domicilio ubicado en ....., hasta llegar al pasillo del mismo, y se apoderó de 02-dos pedazos de tubo de cobre, tipo de refrigeración, que se encontraban adheridos a dos climas de la marca Twin Tempt, mismos que se encontraban en el suelo de dicho pasillo; se justifica la existencia de la Calificativa tipificada y sancionada por el artículo 374 fracción I**,** en la ejecución del ya acreditado ilícito de ROBO previsto por el artículo 364, y sancionado por el artículo 367 fracción I, todos del Código Penal en vigor; dado que según criterio de Nuestro más Alto Tribunal, la Ley al establecer la Calificativa de Robo en vivienda habitada o destinada para ello, tuvo como finalidad primordial la de resguardar la inviolabilidad del domicilio, es decir, que el sujeto, para lograr el hurto, vulnere un espacio privado y lo invada, sin tener libre acceso al

mismo, como aconteció en los hechos a estudio, ya que de las declaraciones rendidas por los elementos de Seguridad Pública del Estado, M.L.Z. y F.G.H.A. se desprende con claridad, "... que un sujeto se encontraba dentro de los límites de la propiedad, la cual no está bardeada, tomada como área de cochera, y al interrogarlo sobre unos pedazos de cobre que traía en la mano, les dijo que los acababa de robar de unos climas que estaban en un pasillo aledaño al domicilio"; y de la denuncia presentada por J.C.P.G., se advierte "...que en el área de un pasillo que está en el domicilio, estaban dañados ya que les quitó los tubos de gas, los cuales son de cobre, desarmando las rejillas de dos aparatos de clima, los cuales ambos son de cinco toneladas cada uno, que el sujeto detenido traía en su poder los pedazos de cobre que tenían los climas"; y de la diligencia de Fe e Inspección Ministerial, se desprende que "...se aprecia un inmueble en color blanco con teja roja, de dos plantas, la cual vista de frente al lado derecho se aprecia un pasillo, en el cual se encuentran dos climas, desconectados y en el suelo del mismo pasillo"; de lo cual, queda claro que el inculpado S.A. o S.A., se encontraba dentro de los limites de la propiedad de J.C.P.G., ubicado en ....., robando unos pedazos de cobre de unos climas que se encontraban en la cochera de dicho domicilio, es decir, para cometer el hurto a estudio, vulneró e invadió un espacio privado sin tener libre acceso al mismo, puesto que aún y cuando el referido pasillo no esté dentro de los muros exteriores de la finca, al encontrarse dentro de los límites del domicilio, es dependencia del mismo, máxime, que para llegar hasta ahí, el acusado cruzó la cochera, y por ende, atentó contra la seguridad del denunciante y en perjuicio de su patrimonio; sin que cause perjuicio al sentenciado el hecho de que la mencionada Calificativa contemple punición mayor a la establecida para el delito de Robo, puesto que cada penalidad obedece a razones diversas. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA PENAL. Toca de Apelación en Artículo 30/07, relativo al proceso número 266/06, instruido en contra de V.M.S.A. o S.A., por los delitos de Robo y Daño en Propiedad Ajena.- Sentencia emitida en fecha 17-diecisiete de Abril del año 2007.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

265. ATIPICIDAD, POR AUSENCIA DEL DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO. Si el activo, respondió que con la menor, en un principio, quiso llevar una amistad y después el noviazgo e intentar formar una pareja normal, pues actualmente de donde es, el noviazgo comienza desde los 12-doce o 13-trece años, e incluso pueden casarse y tener relaciones sexuales; así pues, debe decirse que para que exista dolo, el autor debe haberse propuesto ocasionar el resultado típico, es decir, debe tener la intención de realizarlo, pues lo punible para el derecho penal, es la realización voluntaria de resultados socialmente negativos, lo que constituye el dolo, de esta forma si falta éste, que resulta ser un elemento subjetivo del tipo penal de los delitos que nos ocupan, la conducta desplegada por el activo resulta ser atípica y por lo tanto, no punible. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 496/05, relativo al proceso penal número 378/03, instruido en contra de E. E. DE LA C. por los delitos de RAPTO y EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. Sentencia emitida el 31 de Enero de 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

266. LA OMISIÓN DEL A QUO DE ADMITIR LA INSPECCIÓN JUDICIAL CON CARÁCTER DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, VIOLA EN PERJUICIO DEL ACUSADO LA GARANTÍA DE DEFENSA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Contrario a lo afirmado por el A-quo, al admitir la Inspección Judicial con carácter de Reconstrucción de Hechos, no se afecta la esfera jurídica de la menor, y por el contrario, al negar su admisión al acusado, se le coarta su garantía de adecuada defensa, más aún, si no se ha oído a la menor y a su Representante Legal o al Ministerio Público, respecto de dicha probanza, pues ésta puede llegar a desahogarse aun y cuando la menor se negare a participar, dado que al negarse, puede ser sustituida en términos de lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y de esta forma, no se transgreden las prerrogativas establecidas a favor del inculpado, ni las consagradas a favor del ofendido, siendo respetadas dentro de los cauces y límites legales, a fin de lograr el desarrollo de un debido proceso, así como tampoco se lesiona el interés superior de la infancia ni la garantía de igualdad que les asiste a ambas partes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 392/06, relativo al proceso penal número 95/06, instruido en contra de GERARDO RAMÓN DÁVILA CHÁVEZ, por los delitos de CORRUPCIÓN DE MENORES, EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR. Sentencia emitida el 20 de junio de 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

267. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEFENSA. LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTA OBLIGADA A ADMITIRLAS MIENTRAS NO SE DECLARE CERRADO EL PERIODO DE INSTRUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERTINENTES, CONDUCENTES Y NO ESTÉN PROHIBIDAS POR LA LEY. Si bien es cierto, del sumario se desprende que al momento en que el Defensor del procesado D.A.G., ofreció como pruebas de su intención, las declaraciones de los C.C. J.C.C. y S.R.A., mediante escrito de fecha 2-dos de Marzo del año 2006-dos mil seis, ya le había precluido a la Defensa el término de quince días para ofrecer las pruebas de su intención, que se le había concedido de acuerdo con el numeral 339 del Código Procesal Penal en Vigor en el Estado; también es cierto, que en la fecha en que el Defensor del encausado, ofreció las probanzas aludidas en líneas anteriores, no se había cerrado en la causa el período de instrucción, siendo que según criterios de nuestros más altos Tribunales, mientras no se haya declarado el cierre de dicho período dentro el proceso, el acusado y/o su Defensor, están en aptitud de ofrecer y desahogar pruebas tendientes a la defensa del primero, estando la Autoridad Judicial obligada a admitirlas, aunque tales probanzas no tengan el carácter de supervenientes, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes y no estén prohibidas por la ley, requisitos que cumplen cabalmente las probanzas ofrecidas por el Defensor Particular del procesado, ya que se encuentran reconocidas como prueba testimonial por la fracción V del artículo 219 del Código Procesal Penal en Vigor en el Estado, además de que según lo refiere la Defensa, tales testigos tuvieron conocimiento de los hechos motivo de la causa; máxime que si bien la fracción VIII del artículo 20 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la garantía de justicia pronta y expedita a favor del reo, es de mayor importancia la garantía de adecuada defensa que consagra en beneficio del reo dicho numeral Constitucional, por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, ya que aquella sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo.- En apoyo a la determinación anterior, sirven los siguientes criterios jurisprudenciales: *"DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO."*, *"GARANTÍA DE DEFENSA. LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBEN INTERPRETARSE EN FORMA RIGORISTA CUANDO EL PROCESADO OFRECE PRUEBAS."* TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA PENAL. Sentencia dictada en fecha a 13-trece de Octubre del año 2006-dos mil seis, Toca en artículo número 142/06, proceso número 411/01, instruido en contra de D.A.G. por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

268. OFENDIDA, DELITOS SEXUALES. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A DARLE VALOR PREPONDERANTE A SU DICHO CUANDO ES INVEROSÍMIL, IMPRECISO Y CONTRADICTORIO. El hecho de que se demostrara en el sumario, que la menor N.V.A.A. se condujo con falsedad en sus declaraciones imputando la paternidad de su hijo, al acusado C.A.A., ya que tanto del Dictamen de Genética Forense, rendido por peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como de la prueba pericial sobre determinación de ADN, sobre las muestras de saliva del lactante masculino A.A. y la comparativa única de C.A.A., así como del control de la menor N. V.A.A., se concluye que se excluye toda posibilidad de que el acusado sea el padre Biológico del menor recién nacido antes mencionado; resulta de gran relevancia para valorar su dicho, al analizar tanto la existencia de los delitos de Equiparable a la Violación, Corrupción de Menores, Atentados al Pudor y Violencia Familiar, como la responsabilidad que el Representante de la Sociedad imputa a C.A.A., dado que no obstante que en los delitos sexuales, el dicho de la ofendida tiene valor preponderante, porque esta clase de delitos comúnmente se cometen en ausencia de testigos, lo anterior no implica que forzosamente tenga que atribuírsele valor probatorio a declaraciones inverosímiles, imprecisas, que contienen contradicciones con las mismas deposiciones de la ofendida, que no son claras y abundan en dudas y reticencias, como en el presente caso, dado que además se tiene, que como bien lo estableció el Juez Natural, N.V.A.A. dijo que el encausado tuvo cópula con ella, contra su voluntad, a principios del mes de Mayo del año 2005-dos mil cinco, lo cual quien ahora juzga estima inverosímil, en virtud de que obra en autos la comparecencia del perito J.F.E.G., de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 30-treinta de Septiembre del año 2005-dos mil cinco, en la que señala, que a esa fecha, la denunciante contaba con 28.6 semanas de gestación, siendo que contando dicha cantidad

de semanas hacia el pasado, partiendo del día 30 de septiembre del año 2005, obtenemos que entonces la menor denunciante resultó embarazada en la semana comprendida del 13 al 19 de Marzo de dicho año, por lo que no es creíble que, como ella lo refiere, haya sostenido relaciones sexuales con el acusado en contra de su voluntad, a principios del mes de Mayo del año 2005, y que de ese ayuntamiento carnal haya resultado embarazada; amen que la propia N.V.A.A. se contradice en sus declaraciones y su dicho se encuentra aislado en el sumario. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA PENAL. Sentencia dictada en fecha 27 de Junio del año 2007, toca en definitiva 377/06, procesos acumulados números 149/05 y 150/05, instruido en contra de C.A.A. por los delitos de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, CORRUPCIÓN DE MENORES, ATENTADOS AL PUDOR, y VIOLENCIA FAMILIAR. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

269. REPARACIÓN DEL DAÑO. SE DEBE IMPONER LA CONDENA, AUNQUE NO SE TENGAN DATOS PRECISOS DEL VALOR O DEL MONTO, PUES ESTOS PUEDEN FIJARSE EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, YA QUE EL QUANTUM NO ES PARTE DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, SINO QUE ES UNA CONSECUENCIA LÓGICA Y JURÍDICA DE ÉSTA, PORQUE LO QUE SE ACREDITA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, ES EL DERECHO DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA PARA OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquellos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delio, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, así mismo la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal, es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; por lo tanto el Juez no puede absolver al sentenciado del Pago de la Reparación del Daño, si durante el procedimiento penal se acreditaron los extremos para que proceda la reparación del daño, y no se cuente con elementos para fijar el monto correspondiente, toda vez que se reitera, su cuantía podrá establecerse en ejecución de sentencia, sin que esto implique que el Juez emita una sentencia en abstracto, ya que establece la forma en que ha de repararse la afectación en el patrimonio del ofendido, siendo esta la pecuniaria, por consiguiente al haberse acreditado el derecho del ofendido para obtener la reparación del daño con motivo del presente ilícito, por ello lo procedente es condenar al imputado M.A.S.B, a cubrir la Reparación del Daño, a favor de la C. A.D.S.M.V, en la inteligencia de que su

cuantificación podrá establecerse en ejecución de sentencia por así permitirlo el precepto constitucional 20, apartado B, fracción IV. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA UNITARIA PENAL. Toca en Definitiva 334/2005, PROCESO NUMERO 262/2004, INSTRUIDO EN CONTRA DE M.A.S.B. POR EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

270. CALIFICATIVA DE "PERFIDIA" CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO REFERIDO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO EN VIGOR. NO SE DA CUANDO SE ADVIERTE QUE ENTRE LOS CONYUGES YA NO EXISTE LA CONFIANZA Y EXISTE PERDIDA DE FE. Es de precisar que el hecho de que un cónyuge prive de la vida a otro, no significa la actualización de la calificativa aludida, pues es indispensable, además de ese vínculo, propiciar que el pasivo del delito se vea impedido en evitar el mal recaído en su persona, es decir, no es suficiente que el delito se perpetre entre sujetos vinculados, sino además, debe ser ineludible que el activo utilice de forma insidiosa la fe o la confianza depositada como consecuencia de ese vínculo, circunstancia no acontecida en el presente caso, pues no pasa desapercibido, que antes del evento antisocial (según lo desprendido de los medios probatorios), el activo y la pasivo se encontraban discutiendo; además, tenían aproximadamente un año de separados; lo cual hace ver que la traición en la fe y seguridad debidas mutuamente entre los cónyuges, no se encontraba presente entre los sujetos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA UNITARIA PENAL. Toca en Artículo 298/2006, PROCESO NUMERO 109/2006, INSTRUIDO EN CONTRA DE J.M.L.M. POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

271. AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN PREPARATORIA OFRECIDA COMO PRUEBA. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO EN APELACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO. El ofrecimiento de pruebas, regulado en el artículo 397 fracción VII del Código Procesal de la materia, correlacionado en la fracción V de la Constitución Federal, establece la garantía de ofrecer pruebas para probar su inocencia, con la correlativa obligación de la autoridad de recibirlas y desahogarlas. Ahora bien, el sistema previsto en dicha garantía es un sistema de prueba libre en el sentido de que el inculpado podrá presentar todas las pruebas que quiera, conducentes a los hechos y a su defensa, así como valerse de los testigos que necesite. Estos últimos, incluso, pueden ser constreñidos a comparecer al lugar del proceso a través de medios de apremio y siempre que de hecho se ubiquen en donde el proceso se lleve a cabo. Así pues, dentro de los autos del proceso penal de origen, se advierte que el 30-treinta de diciembre de 2005-dos mil cinco la defensa del acusado, ofreció ante el Juez de la causa los elementos de prueba de su intención, de entre los cuales destaca: "AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN.- Consistente en la que habrá de rendir mi Defendido, ante esa H.

Presencia Judicial en torno a los hechos sujetos a investigación y que precisa en su declaración que con fecha 05 de diciembre de los corrientes, rindió ante esa H. Autoridad Judicial." En relación a dicha probanza el Juez acordó negar su admisión, señalando: "...Ahora bien, en lo que respecta a las probanzas ofrecidas por la Defensa Particular del procesado, esta Autoridad Judicial estima que no resulta procedente la ofrecida como ampliación de declaración a cargo del mismo, en virtud de que dentro del catálogo de probanzas que señala el artículo 219 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado no incluye como tal, aunado a que el inculpado tuvo su oportunidad de rendir su declaración dentro del término constitucional, sin embargo, se le dejan a salvo sus derechos con relación a esta petición." Como se ve de todo lo antes expuesto, es evidente que se violó en perjuicio del acusado la garantía de defensa adecuada, habida cuenta que se le negó la oportunidad de ofrecer un medio de prueba tendiente a proporcionar al proceso datos o información relacionada con la defensa del ahora quejoso. En efecto, si bien es cierto que, la declaración preparatoria que contempla el artículo 20, fracción III de la carta magna, es el acto a través del cual comparece el procesado ante el órgano jurisdiccional, con el objeto de hacerle conocer el hecho punible por el que el Ministerio Público ejercitó la acción penal en su contra para que pueda llevar a cabo sus actos de defensa, y que el Juez resuelva su situación jurídica dentro del término constitucional, también lo es que la prueba denominada por la defensa del acusado como "ampliación de declaración preparatoria" no puede ser considerada como aquella a que se refiere la fracción III antes aludida, sino como un medio de prueba independiente que se ofrece con la posibilidad de que el reo proporcione datos o información importante para su defensa y que, en un momento determinado, puede originar el desahogo de otras probanzas, que sirvan para demostrar la inocencia del acusado. Además, de acuerdo con lo establecido con la fracción V del artículo 20 Constitucional, la autoridad judicial tiene la obligación de recibir todas las pruebas que ofrezca el inculpado, y si bien la "ampliación de declaración preparatoria" no se encuentra en el catálogo de pruebas que cita el artículo 219 del Código Procesal de la materia, lo cierto es que en su fracción VI, señala que se reconocen como pruebas todas aquellas que se ofrezcan como tales, siempre y cuando, a juicio del funcionario que practique la averiguación o del juez o tribunal, sean pertinentes o conducentes y no estén prohibidas por la ley; esto es, en materia de admisión de pruebas, esas son las únicas limitaciones. Luego, dentro del procedimiento penal estatal, los diferentes tipos de prueba deben estimarse sólo de manera enunciativa, pero no así como una limitación para la recepción de pruebas en el proceso, porque de lo contrario se contravendría lo dispuesto por el artículo 219 del Código Adjetivo de la materia, que previene en el sentido de que lo único que impedirá aceptarlas, es que no sean pertinentes o conducentes, o que estén prohibidas por la ley, lo que no acontece en la especie. En vista de las consideraciones anteriores, de manera oficiosa, procede la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA UNITARIA PENAL. Toca en Definitiva 282/2007, PROCESO NUMERO 306/2005, INSTRUIDO EN CONTRA DE F.N.R. POR EL DELITO DE VIOLACIÓN, EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN Y EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

272. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE POR OMITIR INFORMAR AL ACUSADO SOBRE EL DERECHO DE OPTAR POR EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, CONSIGNADO POR EL ARTÍCULO 330 PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Debe ordenarse la reposición del procedimiento en congruencia con el artículo 397 fracción IX del Código Procesal Penal en vigor, a fin de que el Juez de la causa, proceda conforme a lo dispuesto por el numeral 330 párrafo segundo del citado Cuerpo de Leyes, toda vez que el procesado o su defensor, en una causa penal tienen, entre otros derechos, el de que al notificárseles el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en el que se establezca que el procedimiento se seguirá por la vía sumaria, se les informe que pueden solicitar la vía ordinaria, y al respecto se dice el treinta y uno de julio del dos mil cuatro, el Juez de origen dictó auto de formal prisión al ahora acusado. Sin embargo, en el mismo, no se consignó el derecho establecido en el párrafo segundo del artículo 330 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, consistente en la información relativa al derecho de optar por el trámite del procedimiento ordinario. Asimismo, es de destacar que tal derecho no se hizo del conocimiento del ahora acusado, ni de su defensor de oficio, al momento de notificarlos de la resolución de término constitucional y tampoco posteriormente. Lo que se traduce en haberse afectado al impetrante su defensa, por la omisión de suministrarle los datos necesarios para llevar a cabo de manera adecuada, concretamente, el derecho de solicitar el trámite del procedimiento en la vía ordinaria; consignado en el artículo 330, párrafo segundo del Código Adjetivo Penal Estatal. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DUODÉCIMA SALA UNITARIA PENAL. Toca en Definitiva 541/2005, PROCESO NÚMERO 388/2004, INSTRUIDO EN CONTRA DE P.A.M.P. POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO. Magistrado: Enrique Guzmán Benavides.

273. PRUEBA SUPERVENIENTE, MOMENTO PARA SU OFRECIMIENTO. En estricta armonía con nuestras normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, sólo en un acto de gran trascendencia como lo es la audiencia de vista, es en el que se pueden recibir las pruebas que habiendo sido ofrecidas en la debida oportunidad procesal, no hayan sido desahogadas por cualquier motivo y las que tengan el carácter de supervenientes. De tal manera que, si la defensa particular del acusado, para justificar la circunstancia de que las pruebas que ofrecía estaban fuera de término, pretende que se les reconozca el carácter de supervenientes; entonces, se encuentra fuera de todo contexto procesal que mediante esta Alzada solicite que se desahoguen en el período de instrucción o en un acto anterior a la audiencia de vista; precisamente, porque únicamente en ésta es donde se pueden recibir pruebas ofrecidas fuera del término legal que se consideren supervenientes. Lo cual encuentra corroboración absoluta, al observar que en los subsecuentes artículos 357 y 358 del citado Ordenamiento Procesal Penal, se establece el procedimiento a seguir al rendirse pruebas supervenientes. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en artículo número 190/2006, relativo al proceso número 60/2006-II instruido en contra de D.S.R. por los delitos de HOMICIDIO

CALIFICADO y OTROS. Sentencia emitida el 31 de Octubre de 2007. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

274. INIMPUTABLES. LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE INDIVIDUALIZARSE Y FIJAR SU DURACIÓN DENTRO DEL MÍNIMO Y EL MÁXIMO QUE PREVÉ LA LEY APLICABLE, DETERMINANDO EL TIEMPO DEL TRATAMIENTO CON LA MAYOR PRECISIÓN POSIBLE. Ante la inimputabilidad de J.L.A.T. por su retraso mental, y ser acreedor a una medida de seguridad de internación y curación, cabe acotar que la imposición de ésta debe individualizarse, para determinar el tiempo del tratamiento con la mayor precisión posible, pues la medida de seguridad de tratamiento en internación para un inimputable, al implicar la privación de la libertad personal, aún cuando se establezca que tiene un fin "curativo", conforme a las reglas del derecho penal, debe respetar las garantías legales y constitucionales, con apego al principio de seguridad jurídica para que no se acentúe la medida de seguridad, como de carácter represivo; además, que la medida de seguridad de tratamiento de internación para un inimputable aún cuando en sentido estricto no se trata de una pena, su imposición no debe quedar excluida de las reglas que rigen en materia de individualización de las penas, tomando en cuenta que tal medida finalmente constituye una privación de la libertad personal del inimputable. Así, la Autoridad Judicial que imponga una medida de seguridad en internación está obligada a individualizar la medida de tratamiento, pues no basta con señalar genéricamente un mínimo y un máximo para estimar que con ello se colma la garantía de seguridad jurídica, en lo que tiene que ver con la determinación precisa del tiempo en que el inimputable estará en tratamiento. Consecuentemente, se procede a individualizar la medida de seguridad correspondiente al inimputable J.L.A.T., considerando los datos contenidos en el proceso y dictámenes mentales practicados al mismo. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación en definitiva número 74/2006, relativo al proceso número 192/2002-II instruido en contra de J.L.A.T. por el hecho delictivo previsto por los artículos 268 en relación al 269 del Código Penal del Estado, como EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. Sentencia emitida el 30 de Agosto de 2007. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

275. SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EFICACIA PROBATORIA DE LO DECLARADO POR LOS POLICÍAS INVESTIGADORES. Es inconcuso que las declaraciones de esos servidores públicos, si crean convicción a quien hoy resuelve, sobre los hechos que declararon, pues se puso de manifiesto que son personas que laboran en la actividad policíaca del Estado, quienes percibieron con prontitud la versión del adolescente imputado. En efecto, los dichos de J.L.P.L y J.J.V.R. recabados en el debate, adquieren valor probatorio, sin que ello implique una violación a las garantías del adolescente imputado, pues conforme al principio lógico de derivación probatoria, no se justipreció el dicho del adolescente en función a lo declarado por los

agentes captores, sino la percepción que éstos tuvieron de aquel cuando lo localizaron y conversaron con el mismo, en torno a los señalamientos que existían sobre su estancia en el lugar donde se había privado de la vida a una persona, narrándoles que efectivamente había estado en ese lugar y la forma en que se había desarrollado el evento, lo que determinó a los agentes, al traslado del adolescente ante la Autoridad Ministerial de su adscripción, pues no debe olvidarse, que éstos aludieron pertenecer al Primer Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial y por tanto, debían dar cuenta a sus superiores de los hallazgos que encontraron, lo que así realizaron, y ante la minoría de edad de D.L.P., es que se procedió a su traslado ante la Autoridad Ministerial Especializada, lo cual, de ninguna forma revela la violación a los derechos fundamentales del imputado, o la transgresión a algún plazo legal, máxime que, se insiste, no fue su relato el que se ponderó y justipreció, sino la apreciación de los agentes que tuvieron un primer contacto con el adolescente imputado, y a los que les narró los hechos tal como acontecieron y que el resto de la evidencia apoya, no emergiendo tampoco en la especie, violación alguna a las reglas de la lógica, experiencia o psicología, o contradicciones indefectibles que tornen dudosas o imprecisas tales declaraciones. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación especial número 04/2007-Adolescentes, relativo al proceso número 03/2007 instruido en contra de S.A.D.L.P. por la conducta tipificada como delito de HOMICIDIO CALIFICADO. Sentencia emitida el 04 de Octubre de 2007. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

276. SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO POR LA DEFENSA NO SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. En relación a la prueba ofertada por la Defensa, que la Justiciante determinó desechar puesto había sido ofrecida y admitida a la Fiscalía como prueba de cargo, y con ello consideró inconducente establecerla también como probanza de descargo, al explicar que, el principio de contradicción daría oportunidad al Defensor de contrainterrogar al testigo y por ende, de obtener la información requerida del mismo; lo cual se considera incorrecto. En efecto, el artículo 64 de la Ley de la materia, como se dijo, contiene el principio de libertad probatoria, este implica el derecho de las partes a presentar las pruebas que confirmen o desvirtúen una hipótesis, afirmación, o negación precedentes, en tal sentido, en el caso de la Defensa, esta se pone de manifiesto en el juicio, -entre otros- en la libertad probatoria y el derecho de alegar contradictoriamente, lo que potencia su igualdad procesal, pero la contradicción en todo proceso únicamente puede lograrse mediante la posibilidad conferida a las partes de acceder al proceso para poder hacer valer sus pretensiones y resistencias, y no solo en el contrainterrogatorio, como lo precisó la Resolutora. En tal sentido, aunque el testimonio había sido ya aceptado como probanza de la Fiscalía, no existe impedimento legal, de que se admita también como testigo de la Defensa, porque ambas partes tratan de mostrar con su relato una parte sustancial de su teoría del caso, y el solo admitirlo como de la Fiscalía, en el caso del desistimiento del mismo por parte de aquella, generaría sin duda un menoscabo irreparable para la Representación Legal de las

imputadas, al no tener oportunidad de obligar al Tribunal al desahogo de esa prueba, si no la ofertó oportunamente. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DÉCIMA SALA. Toca de apelación número 05/2007-Adolescentes, relativo al proceso número 12/2007 instruido en contra de I.S.A y O.A.A. por la conducta tipificada como delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO. Sentencia emitida el 31 de Octubre de 2007. Magistrado: Jorge Luis Mancillas Ramírez.

277. VIOLENCIA FAMILIAR, OPERA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA.- Si bien, efectivamente como lo refiere la Institución recurrente, en el presente caso no se acreditó el último de los requisitos previstos por el artículo 287 Bis 1 del Código Punitivo en Vigor, y por ende, no se cumple con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 369 del Código Procesal Penal, para efecto del sobreseimiento de la causa, si embargo, no obstante lo anterior, de autos se desprende que se encuentran cubiertos todos y cada uno de los requisitos previstos por el artículo 111 del Código Penal vigente en el Estado, para efecto de la extinción de la acción penal por perdón del ofendido y, en consecuencia, se satisface lo previsto en la diversa fracción I del citado artículo 369 del Código Procesal Penal en vigor, para efecto de decretar el sobreseimiento de la causa, toda vez que según se advierte del sumario, mediante comparecencia ante el A-quo de fecha 22-veintidós de marzo del año 2005-dos mil cinco, la C. G.E.M.F., en su carácter de parte afectada y además en Representación de su menor hija D.E.Z.M., otorgó su mas amplio perdón que en derecho corresponde en favor del acusado J.A.Z.O. por el delito de Violencia Familiar, perdón que reiteró mediante comparecencia de fecha 5-cinco de abril de 2006-dos mil seis, al manifestar que no desea causar perjuicio alguno al referido acusado, tal y como lo señaló en su comparecencia de fecha 22-veintidós de marzo del año 2005-dos mil cinco; cumpliéndose de igual forma con el resto de los requisitos previstos en el citado artículo 111 del Código Punitivo en Vigor, puesto que el delito de Violencia Familiar no es de los considerados como graves por el artículo 16 bis de Código Penal vigente del Estado y su sanción máxima no excede de los seis años; de ahí que contrario a lo aducido por la Institución recurrente, el de Menor Grado no se encontraba impedido para decretar el Sobreseimiento de la causa en favor del acusado Z.O., pues incluso, dicha Autoridad hizo referencia en el fallo recurrido, que además se encontraban cubiertos los mencionados requisitos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo número 155/06, relativo al proceso número 63/05, instruido en contra de J.A.Z.O. por los delitos de Violencia Familiar y Otros.- Sentencia emitida en fecha 16-dieciséis de noviembre del año 2007-dos mil siete.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

278. EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. CAUSA DE INCULPABILIDAD, CUANDO NO SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE EL SUJETO ACTIVO TENÍA CONOCIMIENTO DEL PADECIMIENTO MENTAL DE LA AFECTADA. Son procedentes los agravios del Defensor Particular del acusado, ya que si bien es cierto,

en el sumario existe la declaración de la menor I. G. F., quien señala que el día de los hechos, a petición del acusado C. L., tuvo cópula con él, pero que, según dictámenes que obran en autos, ella padece un retraso mental que afecta su capacidad de razonamiento, encontrándose imposibilitada física y mentalmente para resistir u oponerse al atentado contra su libertad y su seguridad sexual; sin embargo, contrario a lo sostenido por el Juez Natural, de lo actuado en el proceso no se pone de manifiesto que el ahora acusado tuviere conocimiento de esa situación y, mucho menos, que con motivo de esas circunstancias, haya copulado con la denunciante. Ello es así, puesto que en ningún momento el acusado refiere que supiera que I. G. F. tuviera algún problema mental, sino que por el contrario, la veía en la calle cuidando niños e incluso trabajaba, lo que se corrobora con el dicho de la propia afectada, así como con la documental que hace constar que la referida afectada, laboró para la empresa I. C. de M. S.A. de C.V., realizando actividades de maniobras en producción de refrigerados. Ahora bien, en virtud de que el acusado no tenía conocimiento del padecimiento de la menor incapaz, tal circunstancia lo ubica en una de las causas de inculpabilidad prevista por el artículo 30, específicamente en la fracción VI del Código Penal vigente en el Estado, que textualmente señala: *"No es responsable:..... VI.- El que ejecute un hecho que no es delictuoso sino por circunstancias del ofendido, si el acusado las ignoraba inculpablemente al tiempo de obrar"*. De donde resulta que si el ahora acusado, al sostener cópula con la referida menor, sin tener conocimiento de que la afectada padece un problema mental, es evidente que le asiste la causa de inculpabilidad ya señalada, pues el delito que se imputa, para su existencia, requiere que sea cometido con dolo, es decir, que el sujeto activo tenga conocimiento del estado de incapacidad de la pasivo, para aprovecharse de tal circunstancia y, debido a ello, sostuvo la relación sexual con la misma. Toca en Definitiva 71/07, relativo al proceso número 7/05, instruido en contra de J.H.C.L.. por el delito de Equiparable a la Violación.- Sentencia emitida en fecha 27-veintisiete de Noviembre de 2007-dos mil siete.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

279. INIMPUTABLE. LA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA POR EL JUEZ DEBE SER INDIVIDUALIZADA Y ESTABLECER CON PRECISIÓN SU DURACIÓN. Toda vez que el acusado A. R. L. fue declarado inimputable por el Juez de la Causa, le fue impuesta una medida de seguridad de Internamiento y Curación que corresponda por el tiempo necesario que requiera su rehabilitación, la cual, de conformidad con el artículo 22 del Código Penal vigente en el Estado, no deberá exceder del término máximo de la sanción por el delito cometido, es decir, de 12-doce años; resultando que en el caso a estudio, la sanción que corresponde por la comisión del delito de Violación está contenida en el artículo 266 del Código Penal vigente en el Estado, que señala como pena máxima la de 12-doce años de prisión, pues la persona ofendida es mayor de trece años. Ahora bien, la resolución impugnada carece de certeza jurídica, pues el de Menor Grado estableció en forma genérica la Medida de Seguridad decretada al inimputable A. R. L., siendo el caso que para imponer una medida de seguridad en internamiento, el Juzgador debe individualizarla y fijar su duración, ello a fin de

salvaguardar la garantía de seguridad jurídica del inimputable para estar en posibilidad de determinar el grado de peligrosidad del procesado y, con la mayor precisión posible, el tiempo del tratamiento a seguir.- Toca en Definitiva 404/06, relativo al proceso número 6/06, instruido en contra de A.R.L. por el delito de Violación.- Sentencia emitida en fecha 29-veintinueve de Enero de 2008-dos mil ocho.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

280. HOMICIDIO. CALIFICATIVA IMPROCEDENTE LA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR. El de Menor Grado, estimó que en el sumario se encuentra acreditada la calificativa contenida en la fracción IV del artículo 316 del ordenamiento penal en consulta, consistente en: *"cuando el activo sorprenda intencionalmente a alguien, de improviso o empleando acechanzas u otro medio que no de lugar a defenderse, ni evitar el mal que se le quiera hacer"*, por lo que determinó que el acusado y otro sorprendieron intencionalmente al pasivo de improviso, ya que al momento de agredirlo, G. A., le propinaba diversas patadas al afectado de referencia, quien se encontraba inerme en el suelo y en ese momento la víctima era agredida por I. A. G. H., con un objeto punzo cortante, hiriéndolo en varias ocasiones a la altura del pecho, por lo tanto, la víctima se encontraba indefensa, demostrándose la agravante consistente en que los activos aprovecharon un momento de sorpresa para agredir a su víctima, sin darle lugar a defenderse ni de evitar el mal que se le hizo. al aspecto fue motivo de agravio por la Defensa Particular del acusado, el cual la suscrita Magistrada estima esencialmente procedente, pues como lo refiere la recurrente, en el sumario no se encuentra acreditada fehacientemente la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 316 del Código Penal en vigor, pues tal y como lo señaló el menor N I. G. P., observaron a 200 metros de distancia, que las personas con las que habían hablado, que los habían rodeado y les jalaron las cadenas en el interior del negocio en el que se encontraban, se dirigían hacia ellos, además, en ningún momento se justifica que el acusado hubiese sorprendido de improviso o mediante acechanzas al ahora occiso, de tal manera que A. G. J. no tuviera oportunidad de defenderse, puesto que el acusado, al llegar al lugar en que se encontraban los afectados, les mostró el arma que portaba, además de que G. H. fue desapoderado de la misma y fue lesionado con ella por la víctima del delito, antes de que G. Jr, fuera lesionado de muerte, por lo que se concluye que no existió la sorpresa ni las acechanzas por parte del inculpado I. A. G. H., contenidas en la fracción IV del artículo 316 del Código Penal Estatal, en consecuencia, deberá eliminarse dicha calificativa del apartado en estudio. Toca en Artículo 207/07, relativo al proceso número 76/07, instruido en contra de I.A.G.H. por el delito de Homicidio Calificado.- Sentencia emitida en fecha 24-veinticuatro de Octubre 2007-dos mil siete.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

281. COOPERACIÓN, JUSTIFICA LA PROBABLE RESPONSABILIDAD QUE SEÑALA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 39 DEL C.P. El activo del delito puso culpablemente una condición física del resultado delictuoso, puesto que participó en

el desarrollo de los hechos a estudio, e incluso, allegó al lugar, el instrumento con el que se privó de la vida a O. L. C., y para ello, el activo realizó una serie de acciones consientes y queridas; resultando pertinente precisar, para justificar lo anterior, tal como se desprende de las constancias que integran la presente causa, no existía ningún motivo relevante para que el ahora acusado se viese en la necesidad de sacar el bat con el que a la postre se privó de la vida al ahora occiso, es decir, que de acuerdo al antecedente del hecho delictuoso en estudio, el problema que se llevó a cabo afuera del negocio citado, fue entre el ya fallecido y E. A. L. C., acompañante de G. R.; pero luego éste, de propia voluntad, junto con el prófugo A. H. H., decidieron seguir a L. C. hasta el hotel, en donde, al llegar, aquellos descendieron del vehículo en el que iban, e inmediatamente G. R. se dirigió a la cajuela del mismo y la abrió, sacando un bat en color rojo con mango color negro, de aluminio, dirigiéndose con el mismo en su poder hacia donde se encontraba uno de los acompañantes de O. L. C., con la intención de agredirlo, pero éste huyó; luego G. R. fue hasta donde estaba su amigo peleando con el hoy occiso, levantando incluso dicho bat cuando se había aproximado a este último; de ahí que, aún y cuando G. R. no le proporcionó directamente el bat al autor material del ilícito que nos ocupa, si lo allegó al lugar en donde este último lo tomó y ocasionó el desenlace fatal en estudio; por lo tanto, de la conducta externada de García Rocha se deviene la cooperación que realizó para la comisión del ilícito de Homicidio Calificado, ello al obrar juntamente con el prófugo para un mismo fin, como lo fue, como ya se dijo, el privar de la vida a O. L. C. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Artículo 346/06, relativo al proceso número 180/05, instruido en contra de J. G. G. R., por el delito de Homicidio Calificado.- Sentencia emitida en fecha 02 de Agosto del año 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

282. DESPOJO DE INMUEBLE NO SE ACREDITA, Y LA VÍA PENAL NO ES LA CORRESPONDIENTE, CUANDO AMBAS PARTES REALIZAN ACTOS POSESORIOS SOBRE LOS INMUEBLES DE LA LITIS. – Esta Autoridad estima que, atendiendo a que las partes en contienda han realizado actos posesorios que ahora disputan ambos sobre los lotes en cuestión, lo cual es invocado por ambas partes como causa fundada, razonable o legítima de haber ocupado el inmueble con derecho, resulta claro que en la especie se trata de una controversia sobre el derecho de posesión entre las partes involucradas, lo cual no corresponde dilucidarse en este procedimiento que se instruye al ahora acusado, por la comisión del delito de Despojo de Inmueble, previsto y sancionado respectivamente por el artículo 397 fracción I y 398, ambos del Código Penal vigente en el Estado, que sanciona la ocupación de un inmueble de propia autoridad, sin que el activo invoque, por carecer de ello, derecho alguno, dadas las consecuencias naturales y jurídicas que se producen con los actos posesorios que ejecutaron los antes citados en los bienes inmuebles en comento, sino en el procedimiento que al efecto señalan la legislación aplicable al caso concreto. De ahí que las cuestiones de propiedad y posesión no pueden decidirse en este ámbito, sin que antes hayan sido resueltas por la autoridad competente para ello, quedando a salvo los derechos de quienes alegan esa

propiedad y posesión para que los ejerzan en la vía y forma que corresponda, pues tratándose del delito de Despojo de Inmueble, el bien jurídico tutelado no es el derecho de propiedad, sino la posesión quieta y pacífica del inmueble, independientemente de que el derecho a la propiedad sea objeto de litigio, al igual que en la especie el derecho de la posesión quieta y pacífica; por lo tanto, atendiendo a que de los elementos de prueba que obran en el sumario no queda plenamente demostrado quien ostentaba la posesión de los referidos inmuebles, tampoco se justifica la existencia del delito de Despojo de Inmueble, y por consecuencia, resulta innecesario entrar al estudio de la responsabilidad que en la comisión del mismo se le atribuye al ahora acusado; motivo por el que se decreta sentencia Absolutoria en favor del reo por dicho ilícito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 03/07, relativo al proceso número 143/03, instruido en contra de A. Z. R., por el delito de Despojo de Inmueble.- Sentencia emitida en fecha 30 de Agosto del año 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

283. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. Si bien es cierto, las declaraciones de descargo, no cuentan con valor probatorio pleno, pues los deponentes pueden llegar a ser parciales, debido al parentesco o amistad con el acusado, también cierto resulta, que cuentan mas o menos con el mismo valor que los indicios que perjudican al acusado, por lo tanto, no es posible tener por acreditada la prueba circunstancial. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva número 96/07, relativo al proceso penal número 119/06, instruido en contra de S. R. F., por el delito de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. Sentencia emitida el 24 de Enero de 2008. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

284. DELINCUENCIA ORGANIZADA, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO LA FINALIDAD DEL ILÍCITO ES ABSTRACTA O INDETERMINADA.- Contrario a lo que pretende hacer valer el recurrente en sus agravios y como bien lo consideró el A-quo en la resolución de mérito, el hecho de que del sumario se advierta que el mencionado O.C. o U.C., se reunía frecuentemente con sus coacusados, a planear la ejecución de los hechos a estudio, no implica que precisamente, se trate de una Banda delictiva, ya que el objetivo de dichas reuniones fue la existencia de un acuerdo previo, que forma parte del iter criminis para un delito en particular, es decir, si bien existe un concierto previo del activo y coacusados, para cometer un ilícito y lo llevan a cabo, su finalidad no tiene la intención de pretender de manera permanente y reiterada, ejecutar acciones ilícitas en general, dado que el objetivo de su reunión es la pretensión de consumar un delito en concreto, más aún, que no existe elemento probatorio alguno que indique que la agrupación o banda estaba organizada, es decir, que tuviera un carácter más o menos permanente, con un régimen establecido y el fin de ejecutar diversos hechos delictuosos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 253/06, relativo al proceso número 232/05, instruido en contra de J.M.O.C. o

U.C., por los delitos de Robo ejecutado con Violencia y Delincuencia Organizada.- Sentencia emitida en fecha 13-trece de Septiembre del año 2007.- Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola**.**

285. CORRUPCIÓN DE MENORES. CONCEPTO DE DETERIORO DE HÁBITOS SEXUALES O MORALES, PARA INTEGRAR EL TIPO DE. De igual forma, resulta improcedente lo alegado por el recurrente, en el sentido de que del peritaje emitido por Ana Cristina Ríos Luna, Psicóloga adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con relación al examen psicológico practicado al menor pasivo, se desprende que a éste le fue procurado y facilitado un trastorno sexual; pues contrario a ello, al analizar dicho peritaje, quien ahora resuelve, advierte que dicho argumento es falaz, pues del mismo se desprende que el menor I.R.S., efectivamente sufrió un daño psicológico a consecuencia de la agresión sexual de la que supuestamente fue objeto, sin embargo, en ningún momento se desprende que el mismo hubiese provocado trastorno sexual o depravación en el menor, a tal grado de haberle despertado la libido y por ende, la práctica voluntaria de actos sexuales; tan es así, que la referida Psicóloga establece que el menor manifiesta un estado emocional temeroso y ansiosos hacia el acusado, que le hace desear no estar junto a él, por lo que presentó indicadores clínicos de haber sufrido un tipo de agresión sexual; lo cual, indudablemente, revela que lejos de ver con agrado o normalidad los actos eróticos sexuales presuntamente realizados por el acusado, demuestra rechazo y temor hacia ellos, reacción que resulta obvia en un menor de cinco años de edad, pues por su desarrollo fisiológico, psíquico y cultural, no es susceptible de comprender esos extremos, dado que a esa edad, un acto sexual en lugar de facilitar la iniciación a la vida sexual, produce molestias, repugnancia y animadversión a tales actos; y si bien, pudieron haberse realizado los hechos de los que se duele el menor pasivo, el daño psicológico sufrido por éste, reflejado en una alteración emocional, no es constitutivo del delito de Corrupción de Menores, sino de un delito diverso, por el cual ya se dictó el sobreseimiento en la causa a estudio, a consecuencia del perdón otorgado por el padre de dicho menor, a favor del acusado de referencia; más aún, que según lo determinó la Perito Tercero en Discordia, el referido menor presenta fallas en el desarrollo emocional, pero esto es más de orden familiar, que de carácter sexual. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SEXTA SALA. Toca de Apelación en Definitiva 09/07, relativo al proceso número 251/05, instruido en contra de H.R.M., por el delito de Corrupción de Menores.- Sentencia emitida en fecha 31-treinta y uno de Mayo del año 2007. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

286. PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA. SU DESAHOGO NO AFECTA NI LESIONA DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA MENOR PASIVO EN EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN. Son fundados los argumentos del Defensor particular del inculpado, pues efectivamente, si el Juez de la causa admitió la prueba pericial en psicología ofertada por el inculpado, por estar apegada a Derecho y en su

momento se atendió la edad, condición e interés superior de la menor pasivo y se ordenó que la infante fuera asistida y atendida por la Psicóloga _, en aras de evitar que sufriera afectación, luego entonces deben agotarse las formalidades del procedimiento para lograr la materialización de tal prueba, inclusive la aplicación de medios de apremio, con las prevenciones y apercibimientos de ley, no en la persona de la menor sino de la madre de ésta, para que apersone a la infante en el momento y lugar señalados para el debido desahogo de la prueba referida, pues para evitar afectación en la menor el Juez de primer grado le asignó el apoyo de la psicóloga aludida, cuya encomienda es verificar que durante el desahogo de la prueba no se vea expuesta la menor a daño psicológico o emocional. Sin que los artículos 4 y 20 apartado b de nuestra Constitución Federal, 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 3 de la Convención de los Derechos de los Niños, establezcan prohibición o exclusión para la realización de dicha prueba, sino que debe hacerse notar que del núcleo de tales artículos, lo que se busca proteger es la dignidad y la integridad de los menores, objetivos que se cumple con la designación de la perito en Psicología Licenciada C. M. B., al tener ésta la preparación y capacitación idónea, para que con su asistencia y atención a la menor, evitar que la infante sufra daño o afectación psicológica y/o emocional con motivo del desahogo de la prueba aludida; mayormente si se considera que la finalidad de la prueba es precisamente advertir si la menor padece algún trastorno psicológico y determinar su causa. Toca en artículo número 328/07, relativo al proceso número 95/06, instruido en contra de G. R. D. CHA., por los delitos de EQUIPARABLE A LA VIOLACIÓN, CORRUPCIÓN DE MENORES y VIOLENCIA FAMILIAR. Sentencia emitida en fecha 10 de enero del año 2008. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.

287. EQUIPARABLE A LA VIOLENCIA FAMILIAR. NO SE CONFIGURA SI SE ACREDITA QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRA UNIDO EN MATRIMONIO CON PERSONA DISTINTA A LA DENUNCIANTE, AÚN CON LA ACEPTACIÓN DEL INCULPADO, DE HABER SOSTENIDO UNA RELACIÓN SENTIMENTAL CON LA PASIVO. Son improcedentes los agravios de la Fiscalía recurrente, en virtud de que, independientemente de que el inculpado hubiese reconocido haber sostenido relación de concubinato con la denunciante, es acertado el Juez de origen al determinar que legalmente no es posible reconocer dicho vínculo, pues el Código Civil vigente en el Estado, en su artículo 291 bis, establece las condiciones y características que debe reunir tal unión, como lo es que la pareja sea libre de matrimonio y que tenga mas de cinco años de haber vida marital, que además no estén casados entre sí y que no tengan impedimento legal para contraer matrimonio, de donde resulta que sus argumentaciones son a todas luces carentes de apoyo legal; ya que al haberse acreditado la existencia del contrato matrimonial entre el inculpado y diversa persona de nombre L. G. R. con el acta de matrimonio visible en el expediente original, no es dable tener por actualizado el supuesto delictivo de equiparable a la violencia familiar contemplado en el artículo 287 bis 2 del Código Penal en vigor, pues no obstante que la supuesta pasivo y el ahora inculpado hubieran vivido una relación sentimental por un lapso de nueve años, ello no le confiere el

carácter de sujeto activo del delito en comento al ahora inculpado, pues se encuentra unido en matrimonio con persona diversa a la denunciante. Toca en artículo 213/07, relativo al procedo 109/2007, instruido en contra de A. O. O. por los delitos de Equiparable a la Violencia Familiar y Lesiones. Sentencia emitida en fecha 29 de enero del año 2008. Magistrada: Rosa Elena Grajeda Arreola.